Yascha Mounk

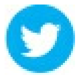
El pueblo contra la democracia

Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla



PAIDÓS Estado y Sociedad

Índice



You
Tube


SINOPSIS

Nuestro mundo parece haber entrado en ebullición. Varios populismos autoritarios han accedido al poder en países como la India, Polonia o Estados Unidos. Y como aquí nos muestra Yascha Mounk, es muy posible que, de resultas de ello, la democracia misma esté corriendo un grave peligro.

El pueblo contra la democracia es el primer libro que va más allá de la mera descripción del fenómeno del ascenso del populismo. Con un lenguaje claro y llano, describe cómo hemos llegado a esta situación, pero también hacia dónde deberíamos encaminarnos a partir de aquí. Tenemos muy poco tiempo que perder: esta podría ser nuestra última oportunidad de salvar a la democracia.

Yascha Mounk

El pueblo contra la democracia

Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla

PAIDÓS Estado y Sociedad

Introducción

LA PÉRDIDA DE NUESTRAS ILUSIONES

Hay décadas interminables en las que la historia parece avanzar a paso de tortuga. Se ganan y se pierden elecciones, se adoptan y se revocan leyes, nacen nuevas estrellas y damos nuestro último adiós a viejas leyendas. Pero pese al paso corriente del tiempo, las constelaciones que guían el curso de la cultura, la sociedad y la política no varían.

Y luego hay años vertiginosos en los que todo cambia de repente. Los advenedizos toman la escena política. Los votantes claman por unas políticas que eran impensables apenas unos días antes. Tensiones sociales que llevaban mucho tiempo bullendo bajo la superficie entran en explosiva y terrorífica erupción. Un sistema de gobierno que daba la impresión de ser inmutable parece de pronto estar a punto de descomponerse.

Precisamente ahora nos encontramos en un momento de esa clase.

Hasta fecha reciente, la democracia liberal reinaba triunfal. Pese a las limitaciones de dicha forma de gobierno, la mayoría de los ciudadanos parecían estar profundamente comprometidos con ella. La economía crecía. Los partidos radicales eran insignificantes. Los politólogos pensaban que la democracia estaba asentada poco menos que como un lecho de roca en lugares como Francia o Estados Unidos, y que poco cambiaría allí en los años venideros. Desde el punto de vista político, parecía que el futuro no iba a diferir gran cosa del pasado.

Entonces llegó el futuro y, contra todo pronóstico, resultó ser muy distinto.

Los ciudadanos llevaban mucho tiempo desilusionados con la política; ahora se sienten además impacientes, enfadados, desdeñosos incluso. Los sistemas de partidos parecían estancados desde hacía tiempo; ahora los populismos autoritarios están en auge en todo el mundo, de América a Europa, y de Asia a Australia. Era normal que los diferentes partidos fueran recibidos con mayor agrado o desagrado por unos votantes u otros; ahora son legión los electores que están hartos de la democracia liberal misma.

La elección de Donald Trump para la Casa Blanca ha sido la manifestación más llamativa de la crisis de la democracia. Todo lo que se diga sobre la trascendente significación de su ascensión es poco. Por vez primera en su historia, la democracia más antigua y poderosa del mundo ha elegido a un presidente que muestra un indisimulado desdén por ciertas normas constitucionales básicas, alguien que dejó a sus seguidores «en suspense» a propósito de si aceptaría o no el resultado de las elecciones, que pidió que encarcelaran a su principal oponente política, y que ha mostrado sistemáticamente su favoritismo por algunos adversarios autoritarios de su país antes que por los aliados democráticos de este.[1] Aun en el caso de que el poder de Trump sea frenado en última instancia por los controles y contrapesos institucionales característicos de aquel sistema político, la voluntad mostrada por el pueblo estadounidense de elegir a un autoritario en potencia para la más alta dignidad política del país es un muy mal presagio.

Y es evidente que la elección de Trump no es un incidente aislado. En Rusia y en Turquía, sendos «hombres fuertes» elegidos por el pueblo han conseguido convertir unas democracias incipientes en unas dictaduras electorales. En Polonia y en Hungría, los líderes populistas están aplicando ese mismo manual de actuación para destruir la libertad de los medios de comunicación, para minar la independencia de las instituciones y para amordazar a la oposición.

Puede que más países sigan pronto parecido camino. En Austria, un candidato de ultraderecha casi ganó la presidencia del país. En Francia, el rápido cambio del paisaje político está abriendo nuevas oportunidades tanto para la extrema izquierda como la extrema derecha. En España y en Grecia, los sistemas de partidos establecidos se están desintegrando a vertiginosa

velocidad. Incluso en democracias tan supuestamente estables y tolerantes como son las de Suecia, Alemania y los Países Bajos, los extremistas están cosechando éxitos sin precedentes.

Ya no cabe duda de que soplan vientos de populismo. La pregunta ahora es si este *momento* populista devendrá en una *era* populista que ponga en entredicho la supervivencia misma de la democracia liberal.

~

Tras la caída de la Unión Soviética, la democracia liberal pasó a ser la forma de régimen dominante en el mundo en general. Parecía inamovible en América del Norte y en la Europa occidental, y estaba arraigando a pasos agigantados en países anteriormente autocráticos en la Europa del Este y en América del Sur, además de avanzar terreno a muy buen ritmo en naciones repartidas por toda Asia y toda África.

Uno de los motivos de aquel triunfo de la democracia liberal era la inexistencia de una opción alternativa que fuera mínimamente coherente. El comunismo había fracasado. La teocracia islámica contaba con escasísimo apoyo fuera de Oriente Próximo y Medio. El singular sistema chino de capitalismo de Estado bajo la bandera del comunismo difícilmente podía ser emulado en países que no compartían la peculiar historia del gigante asiático. Todo parecía indicar que el futuro pertenecía a la democracia liberal.

La idea de que la democracia tenía el triunfo final asegurado se asoció en aquel entonces a la obra de Francis Fukuyama. En un impactante ensayo publicado a finales de la década de 1980, Fukuyama sostenía que la conclusión de la Guerra Fría conduciría al «punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como forma definitiva del gobierno humano». El triunfo de la democracia, proclamó él en una expresión que ha terminado por condensar el embriagador optimismo de 1989, señalaría «el fin de la historia».[2]

No faltaron entonces voces que reprocharon a Fukuyama su presunta ingenuidad. Algunas de ellas argumentaban que la difusión de la democracia liberal no era ni mucho menos inevitable y temían (o esperaban) una fuerte resistencia en un buen número de países a adoptar ese producto importado de

Occidente. Otros sostenían que era demasiado pronto para prever qué nueva mejora sería capaz de ingeniar la humanidad en el transcurso de los siglos siguientes: cabía la posibilidad, aventuraban, de que la democracia liberal fuese solo el preludio de una forma de gobierno más justa y progresista.[3]

Pese a tan sonoras críticas, el supuesto fundamental de Fukuyama tuvo una gran influencia. La mayoría de quienes advertían que la democracia liberal podría no triunfar en todo el mundo estaban igual de convencidos de que se mantendría estable en sus feudos históricos de América del Norte y Europa occidental. De hecho, incluso la mayoría de los politólogos, poco dados a generalizar sobre el fin de la historia, llegaron más o menos a la misma conclusión. Las democracias fracasaban a menudo en los países pobres, venían a decir. Pero, por otra parte, lo normal era que los autócratas cayeran derrocados con el tiempo, aun aquellos que en algún momento habían logrado propiciar un buen nivel de vida para sus súbditos. Y cuando un país sobrepasaba unos niveles mínimos de riqueza y de democracia, demostraba una increíble estabilidad. Argentina había sufrido un golpe militar en 1975, cuando su producto interior bruto per cápita era aproximadamente de catorce mil dólares en valores actuales.[4] Por encima de ese umbral de renta, ninguna democracia establecida había caído jamás.[5]

Admirados de la estabilidad sin igual evidenciada por las democracias ricas, los politólogos comenzaron a concebir la historia de la posguerra de muchos países como un proceso de «consolidación democrática».[6] Para sustentar una democracia duradera, un país tenía que alcanzar un nivel elevado de riqueza y educación. Tenía que construir una sociedad civil dinámica y garantizar la neutralidad de ciertas instituciones estatales claves, como la justicia. Las principales fuerzas políticas tenían que aceptar el principio de que fueran los votantes, y no la fuerza de sus armas ni la buena provisión de sus arcas, quienes determinaran los resultados políticos. Y costaba mucho conseguir que todas esas condiciones se cumplieran en un mismo lugar.

Construir una democracia no era tarea sencilla. Pero el premio que aguardaba al final del recorrido era valioso y perenne: una vez se alcanzaran las cotas democráticas de referencia fundamentales, el sistema político sería estable por siempre jamás. La consolidación democrática, según esa tesis, era

una vía de sentido único. En cuanto la democracia se convertía, por usar la expresión de Juan J. Linz y Alfred Stepan, en «el único sistema posible» en un país dado, ya no había quien la moviera de allí.[7]

Tan seguros estaban los politólogos de ese supuesto que pocos consideraban siquiera las condiciones en las que esa consolidación democrática podría correr el riesgo de iniciar un retroceso. Pero los acontecimientos recientes ponen en cuestión esa confianza en las propias fuerzas de la democracia.

Un cuarto de siglo atrás, la mayoría de los ciudadanos de las democracias liberales estaban muy satisfechos con sus gobiernos y otorgaban elevados índices de aprobación a sus instituciones; ahora están más desilusionados que nunca antes. Un cuarto de siglo atrás, la mayoría de los ciudadanos se sentían orgullosos de vivir en una democracia liberal y mostraban un rechazo rotundo a las alternativas autoritarias a su sistema de gobierno; ahora muchos sienten un desafecto creciente hacia la democracia. Y un cuarto de siglo atrás, a los adversarios políticos los unía su común respeto por las reglas y normas democráticas básicas; ahora son varios los candidatos que han conquistado un gran poder e influencia infringiendo normas elementales de la democracia liberal.[8]

Basten dos ejemplos tomados de mis propias investigaciones. Más de dos terceras partes de los estadounidenses de más edad opinan que vivir en una democracia es algo sumamente importante; sin embargo, entre los *millennials*, esa es una opinión suscrita por menos de un tercio de los encuestados. El declinante apego por la democracia está haciendo también que los estadounidenses estén más abiertos a alternativas autoritarias. En 1995, por ejemplo, solo uno de cada dieciséis creía que los regímenes militares son un buen sistema de gobierno; hoy, es ya uno de cada seis.[9]

Ante tan radical cambio de las circunstancias, sería arriesgado suponer que la estabilidad de la democracia está asegurada. Ahora vemos que, durante todo este tiempo, el primer gran supuesto de la era de la posguerra —la idea de que los países ricos en los que el gobierno había cambiado repetidamente de manos a través de elecciones libres y justas seguirían siendo democráticos para siempre— estaba asentado sobre fundamentos bastante poco consistentes.

Si el primer gran supuesto de nuestro imaginario político ha demostrado estar menos justificado de lo que se creía, no menos perentorios son los motivos para reexaminar el segundo de esos grandes supuestos.

Hace mucho tiempo que pensamos que el liberalismo y la democracia forman un todo cohesionado. No se trata únicamente de que nos importe por igual la voluntad popular y el Estado de derecho, o que el pueblo decida y que se protejan los derechos individuales, sino de que entendamos que cada componente de nuestro sistema político parece necesario para salvaguardar todos los demás.

De hecho, no son pocas las razones que nos inducen a temer que la democracia liberal no sobreviva si se deja alguno de sus elementos por el camino. Un sistema en el que el pueblo decide garantiza que los ricos y los poderosos no puedan pisotear los derechos de los humildes. Al mismo tiempo, un sistema en el que los derechos de las minorías impopulares están protegidos y en el que la prensa puede criticar con libertad al gobierno garantiza que el pueblo pueda cambiar de gobernantes a través de elecciones libres y justas. Los derechos individuales y la voluntad popular, según se deduce de ese relato, van de la mano como buenos hermanos, como Twitter y Donald Trump.

Pero el hecho de que un sistema necesite ambos elementos para funcionar y progresar no significa forzosamente que el sistema que posea ambos elementos tenga que ser estable. Al contrario, la dependencia mutua entre liberalismo y democracia es una muestra de lo rápido que una disfunción en algún aspecto de nuestra política puede dar lugar a otra disfunción en otro aspecto. La democracia sin derechos siempre corre el riesgo de degenerar en aquello que los padres fundadores de Estados Unidos temían más que nada en el mundo: la tiranía de la mayoría. Al mismo tiempo, los derechos sin democracia no resultan necesariamente más estables que con ella: desde el momento en que el sistema político se convierte en una especie de patio de recreo para los multimillonarios y los tecnócratas, la tentación de excluir al pueblo de un número cada vez mayor de decisiones importantes no cesará de aumentar.

Puede que sea exactamente esa lenta divergencia entre liberalismo y democracia lo que estemos viviendo en el momento actual. Y es probable que las consecuencias de ello sean tan graves como cabría prever.

Es mucho lo que separa —tanto en cuestión de estilo como de sustancia— a los populistas que están cosechando éxitos sin precedentes a uno y a otro lado del Atlántico.

Es tentador, por ejemplo, considerar a Donald Trump como un fenómeno singularmente estadounidense. Desde sus impetuosos modales hasta su costumbre de jactarse del mucho dinero que gana, es una caricatura andante de «lo americano»: la clase de figura que un caricaturista comunista a quien hubieran encargado ridiculizar al archienemigo habría dibujado para el Ministerio de Propaganda de la época soviética. Y no cabe duda de que, en muchos sentidos, Trump *es* muy americano. Pone tanto énfasis en sus méritos como hombre de negocios, en parte, por la honda veneración que inspiran los emprendedores en la cultura estadounidense. También los blancos de sus iras están influidos por el contexto norteamericano. Un miedo como el temor a que la élite «liberal» (de centro-izquierda) esté conspirando para quitarles las armas de fuego a los ciudadanos de a pie, por ejemplo, se antojaría harto peculiar en Europa.

Aun así, la verdadera naturaleza de la amenaza que Trump representa solo puede entenderse dentro de un contexto mucho más amplio: el de los populistas de extrema derecha que se han estado fortaleciendo en todas las grandes democracias, desde Atenas hasta Ankara, desde Sídney hasta Estocolmo, y desde Varsovia hasta Wellington. Pese a las diferencias obvias entre los populistas que cotizan al alza en todos esos países, sus elementos comunes son muy profundos y los convierten (a todos ellos) en un peligro para sus respectivos sistemas políticos de un modo sorprendentemente similar en todos los casos.

Donald Trump en Estados Unidos, Nigel Farage en Gran Bretaña, Frauke Petry en Alemania y Marine Le Pen en Francia proclaman por igual que las soluciones a los problemas más apremiantes de nuestro tiempo son mucho más sencillas de lo que la clase política dirigente quiere hacernos

creer, y defienden que la gran masa de la gente corriente sabe instintivamente qué es lo que hay que hacer. En el fondo, ven la política como un asunto muy simple. Si la pura voz del pueblo se impusiera sin más, las razones del descontento popular de desvanecerían al momento. Estados Unidos (o Gran Bretaña, o Alemania, o Francia) sería grande de nuevo.

A partir de ahí, es normal hacerse la pregunta siguiente: si los problemas políticos de nuestra época son tan fáciles de arreglar, ¿por qué continúan estando ahí? Como los populistas no están dispuestos a admitir que el mundo real es complejo y que las soluciones no están tan fácilmente al alcance de nadie (por mucho empeño y buena intención que pongamos en encontrarlas), necesitan echarle la culpa a alguien. Y en eso son verdaderos maestros.

El primer culpable evidente suele estar fuera del país. Así que es lógico que Trump culpe a China de los problemas económicos de Estados Unidos. Tampoco debería sorprendernos que saque provecho de los miedos de la población afirmando que Estados Unidos está siendo invadido por violadores (mexicanos) y terroristas (musulmanes).[10]

Puede que para los populistas europeos los enemigos estén en otra parte, y puede también que la mayoría de ellos expresen su bilis con un tono más circunspecto. Pero su retórica parte de la misma lógica subyacente. Como Trump, Le Pen y Farage, creen que la culpa de que las rentas se estanquen o de que su identidad se vea amenazada por los recién llegados a sus países debe de ser precisamente de los de fuera (ya sea de los musulmanes parásitos, ya sea de los fontaneros polacos). Y como Trump, culpan al *establishment* político —en el que incluyen desde los burócratas de Bruselas hasta los mendaces medios de comunicación— por no haber cumplido sus grandes promesas. Los mandamases de la capital —argumentan los populistas de todos los colores— están allí por afán de lucro personal o en conchabanza con los enemigos de la nación. Los políticos de esa clase dirigente —vienen a decirnos— están obsesionados con la diversidad. O apoyan a los enemigos de su país. O (y esta es la explicación más simple de todas) son ya extranjeros en cierto modo, o musulmanes, o ambas cosas.

De semejante visión del mundo nacen dos deseos políticos que la mayoría de los populistas tienen la habilidad de hacer suyos por igual. En primer lugar, los populistas reivindican la necesidad de que un líder honrado

—alguien que comparta el punto de vista puro del pueblo y que esté dispuesto a luchar en nombre de este— acceda a las más altas magistraturas del país. Y, en segundo lugar, abogan por que, en cuanto ese líder honrado esté en el poder, no tenga reparos en abolir cualquier obstáculo institucional que le impida llevar a cabo la voluntad del pueblo.

Las democracias liberales están llenas de controles y contrapesos pensados para impedir que un partido o facción acumule demasiado poder y para fomentar la conciliación de los intereses de grupos diferentes. Pero, en la imaginación de los populistas, no hay razón alguna para que la voluntad del pueblo esté mediatizada por nada ni por nadie, y, desde esa lógica, todo compromiso con minorías es una forma de corrupción. En ese sentido, los populistas son hondamente democráticos: creen mucho más fervientemente que los políticos tradicionales que el *demos* debe mandar. Pero también son acérrimos *iliberales*: a diferencia de los políticos tradicionales, ellos no tienen reparo en proclamar que ninguna institución independiente y ningún derecho individual debería amortiguar la voz del pueblo.

El miedo a que los insurgentes populistas socaven las instituciones liberales si llegan al poder puede parecer alarmista. Pero está basado en un abultado catálogo de precedentes. A fin de cuentas, los populistas iliberales han sido ya elegidos para altos cargos de gobierno en países como Polonia y Turquía. En cada uno de esos lugares, han emprendido pasos sorprendentemente similares para consolidar su poder: han dado una vuelta de tuerca a las tensiones con aquellos a quienes perciben como enemigos, tanto interiores como exteriores; han llenado de partidarios y compinches suyos los tribunales y las juntas electorales, y se han hecho con el control de los medios de comunicación.[11]

En Hungría, por ejemplo, la democracia liberal era un trasplante mucho más reciente (y frágil) que en Alemania o en Suecia, por poner un par de ejemplos. Aun así, a lo largo de la década de 1990, los politólogos percibían unas perspectivas ciertamente optimistas para el régimen democrático en aquel país. Según sus teorías, Hungría contaba con todos los atributos favorables a una transición democrática: tenía experiencia con el gobierno

democrático en el pasado; su legado totalitario era más moderado que en otros muchos países de la Europa del Este; la vieja élite comunista se había sometido al nuevo régimen a partir de un acuerdo negociado, y el país era limítrofe con varias democracias estables. Hungría, por decirlo con el lenguaje de las ciencias sociales, era un ejemplo de «caso más probable»: si la democracia no triunfaba allí, difícilmente arraigaría en cualquiera de los demás países poscomunistas.[12]

Durante toda la década de los noventa, dio la impresión de que esa predicción iba camino de confirmarse. La economía húngara creció. El gobierno cambió pacíficamente de manos. La vibrante sociedad civil del país producía medios críticos y ONG fuertes, y de ella había surgido también una de las mejores universidades de la Europa central. La democracia húngara parecía estar en claro proceso de consolidación.[13]

Los problemas empezaron a partir de ahí. Muchos húngaros sentían que se les estaba destinando una parte demasiado pequeña del crecimiento económico del país. Y veían su identidad amenazada por la posibilidad (que no la realidad) de una inmigración en masa. Bastó con que el partido de centro-izquierda que estaba entonces en el poder se viera envuelto en un gran escándalo de corrupción para que el descontento virara hacia la más abierta indignación con el gobierno. En las elecciones parlamentarias de 2010, el electorado húngaro dio al partido Fidesz, de Viktor Orbán, una apabullante mayoría.[14]

Desde la jefatura del Gobierno, Orbán se dedicó sistemáticamente a consolidar su poder. Nombró a seguidores leales para dirigir los canales de televisión estatales, la Junta Electoral Central y hasta el Tribunal Constitucional húngaro. Cambió el sistema electoral para beneficiarse a sí mismo, hizo a un lado a grandes compañías extranjeras para canalizar dinero hacia empresarios amigos, instituyó regulaciones muy restrictivas sobre las ONG y trató de cerrar la Universidad Centroeuropea.[15]

No hubo un Rubicón, un paso concreto que marcara nítidamente el momento en que las viejas normas políticas quedaron destruidas para siempre. Cada una de las medidas de Orbán podía defenderse por un motivo u otro. Pero, sumadas, su efecto fue haciéndose paulatinamente inconfundible: hoy Hungría ha dejado de ser una democracia liberal.

¿Qué es, entonces?

En el transcurso de los años, Orbán ha ido respondiendo a esa pregunta con cada vez mayor claridad. Al principio, se presentaba a sí mismo como un demócrata sincero de valores conservadores. Ahora declara abierta y manifiestamente su oposición a la democracia liberal. La democracia, asegura él, debería ser jerárquica en vez de liberal. Bajo su liderazgo, Hungría se convertirá en un «nuevo Estado iliberal basado en fundamentos nacionales».[16]

Esta es una descripción mucho más certera de la naturaleza de su actuación que las que la mayoría de los observadores externos han logrado esbozar hasta el momento. Estos tienden a tachar a Orbán de antidemocrático. Pero si bien tienen razón cuando muestran su preocupación porque las reformas iliberales del mandatario húngaro terminen permitiéndole prescindir de la voluntad del pueblo, es un error pensar que todas las democracias deben ser liberales por naturaleza o deben asemejarse a nuestro sistema de instituciones políticas.

La democracia jerárquica permite que unos líderes elegidos popularmente pongan en práctica la voluntad del pueblo según ellos mismos la interpretan, sin tener que realizar concesiones en cuanto a los derechos o los intereses de ninguna obstinada minoría. Cuando se reivindican como demócratas, no están siendo necesariamente poco sinceros. En la fase emergente del nuevo sistema que esos líderes impulsan, la voluntad popular es la ley suprema del país (al menos, al principio). Lo que lo diferencia de la democracia liberal a la que estamos acostumbrados no es una falta de democracia, sino la falta de respeto por las instituciones independientes y los derechos individuales.

Pero el auge de la democracia iliberal —o democracia sin derechos— solo es uno de los aspectos de la evolución política en estas primeras décadas del siglo XXI. Y es que, al tiempo que entre los ciudadanos de a pie ha ido creciendo el escepticismo ante las prácticas y las instituciones liberales, las élites políticas han tratado de aislarse cada vez más de las iras de aquellos. El mundo es complejo, insisten los políticos, que también aseguran que se han

esforzado mucho por dar con las respuestas adecuadas. Si el pueblo se impacienta hasta el punto de hacer caso omiso de los sabios consejos que sus élites le dan, será necesario educarlo, ignorarlo o incluso intimidarlo hasta la sumisión.

Esta es una actitud que nunca se había hecho evidente con tanta crudeza como en la madrugada del 13 de julio de 2015. La Gran Recesión había lastrado a Grecia con un ingente volumen de deuda. Los economistas sabían que el país jamás lograría pagar todo lo que debía; la mayoría estaba de acuerdo en que una política de austeridad no serviría más que para infligir un daño mayor a una economía que hacía aguas.[17] Pero si la Unión Europea dejaba que Grecia procediera a una suspensión de pagos, entre los inversores cundiría la preocupación ante la posibilidad de que otros países mucho más grandes, como España o Italia, hicieran lo mismo a continuación. Así que los tecnócratas de Bruselas decidieron que, para que el resto del sistema monetario europeo sobreviviese, Grecia tendría que sufrir.

Cerradas prácticamente todas las demás opciones para ellos, los gobiernos griegos que se fueron sucediendo en el poder se plegaron a la voluntad de Bruselas. Pero con una economía que decrecía año tras año y un desempleo juvenil situado en tasas máximas, superiores al 50%, los votantes, desesperados, depositaron finalmente su confianza en Alexis Tsipras, un joven líder populista que les prometió poner fin a la austeridad.[18]

Cuando Tsipras accedió a la jefatura del Gobierno griego, procedió a renegociar la deuda del país con sus principales acreedores, representados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Pero pronto se demostró que la llamada troika no estaba dispuesta a ceder. Grecia tendría que conformarse con aquella situación de penuria, o declararse en bancarrota y abandonar el euro. En el verano de 2015, con un duro paquete de rescate sobre la mesa, a Tsipras solo le quedaban dos opciones: capitular ante las exigencias de los tecnócratas o llevar a Grecia al caos económico.[19]

Ante tan trascendental elección, Tsipras hizo lo que cualquiera consideraría natural en un sistema que se dice gobernado por el poder del pueblo: convocó un referéndum popular. La respuesta fue rauda y contundente. Dirigentes políticos de toda Europa tacharon aquel plebiscito de

irresponsable. La canciller alemana, Angela Merkel, destacó que la troika había presentado una oferta «extraordinariamente generosa». Los medios vilipendiaron aquella decisión de Tsipras.[20]

En un contexto de fuerte connotación emocional, Grecia acudió a las urnas el 5 de julio de 2015. Los resultados representaron una gran reprensión a las élites tecnocráticas del continente. Pese a las agoreras advertencias del desastre que se les venía encima, los electores no estaban dispuestos a tragarse su orgullo. Rechazaron el acuerdo.[21]

Envalentonado por tan clara expresión de la voluntad popular, Tsipras volvió a sentarse a la mesa negociadora. Parecía estar convencido de que la troika y Grecia se encontrarían entonces en algún punto intermedio entre sus respectivas posturas de partida. Pero, en vez de eso, el trato original fue retirado y se sustituyó por una nueva oferta que imponía privaciones aún mayores.[22]

En aquellos instantes en que Grecia caminaba sobre la cuerda floja de la insolvencia, la élite política de Europa se reunió en Bruselas para celebrar un maratón de negociaciones entre bastidores. Cuando Tsipras apareció ante las cámaras a primera hora de la mañana del 13 de julio, con los ojos enrojecidos y el rostro ceniciento, se hizo inmediatamente evidente que la noche había concluido en capitulación. Poco más de una semana después de que hubiera dejado que su pueblo rechazara un acuerdo de rescate impopular, Tsipras firmó otro pacto que era, según cualquier baremo de comparación razonable, peor que el anterior.[23] Había prevalecido la tecnocracia.

La política de la eurozona es un ejemplo extremo de sistema político en el que el pueblo tiene la sensación de disponer cada vez de menor voz y voto en cuanto a lo que realmente sucede.[24] Pero no es ni mucho menos atípica. Inadvertido para la mayoría de los politólogos, un tipo de liberalismo no democrático ha echado raíces en América del Norte y Europa occidental. En esa forma de gobierno, se siguen escrupulosamente los detalles procedimentales (la mayoría de las veces) y, más que menos, se respetan los derechos individuales. Pero los votantes han llegado hace tiempo a la conclusión de que su influencia sobre las decisiones y las políticas públicas es bastante escasa.

Y no les falta razón.

La ascensión de los populistas en Hungría y el poder efectivo de los tecnócratas en Grecia pueden parecer polos diametralmente opuestos. En el primero de esos casos, la voluntad del pueblo dejó de lado a las instituciones independientes que se suponía que debían proteger el Estado de derecho y los derechos de las minorías. En el segundo, la fuerza de los mercados y las ideas de los tecnócratas pasaron por encima de la voluntad del pueblo.

Pero Hungría y Grecia no son más que dos caras de una misma moneda. En democracias de todo el mundo, dos son los fenómenos aparentemente diferenciados que hoy se están desarrollando. Por un lado, las preferencias del pueblo se están haciendo crecientemente iliberales: los votantes se están impacientando con las instituciones independientes y están cada vez menos dispuestos a tolerar los derechos de las minorías étnicas y religiosas. Por otro lado, las élites se están adueñando del sistema político y están haciendo que este sea cada vez menos sensible a la voluntad popular: los poderosos están cada vez menos dispuestos a ceder ante las opiniones del pueblo. Como consecuencia, el liberalismo y la democracia, los dos elementos nucleares de nuestro sistema político, están empezando a entrar en mutuo conflicto.

Los estudiosos del tema siempre han sabido que liberalismo y democracia podían presentarse, en ocasiones, de forma separada y aislada. En la Prusia del siglo XVIII, un monarca absoluto gobernó con un estilo relativamente liberal a juzgar por su respeto por los derechos de (algunos de) sus súbditos y su tolerancia con una mínima libertad de expresión.[25] Por su parte, en la antigua Atenas, la asamblea del pueblo ejercía un gobierno manifiestamente iliberal, pues exiliaba a los estadistas impopulares, ejecutaba a los filósofos críticos y censuraba toda clase de contenidos: desde discursos políticos hasta partituras musicales.[26]

Aun así, la mayoría de los politólogos consideran desde hace tiempo que liberalismo y democracia son complementarios. Aun reconociendo que es posible que los derechos individuales y la voluntad popular no vayan siempre de la mano, están convencidos de que se materializan de forma más plena cuando lo hacen de forma concurrente. Allí donde liberalismo y democracia coinciden, según esa teoría, forman una amalgama especialmente estable, resiliente y coherente.

Sin embargo, a medida que las opiniones de la población tienden hacia lo iliberal y que las preferencias de la élite se vuelven antidemocráticas, el liberalismo y la democracia comienzan a chocar entre sí. La democracia liberal, esa mezcla única de derechos individuales y gobierno popular que caracteriza desde hace tiempo a la mayoría de los sistemas políticos de América del Norte y Europa occidental, se está deshaciendo por muchas de sus costuras. En su lugar, somos testigos del ascenso de la *democracia iliberal* (o democracia sin derechos) y del *liberalismo no democrático* (o derechos sin democracia).

~

Érase una vez un pollo muy feliz. Todos los días, el granjero le daba de comer. Todos los días, el pollo engordaba un poco y se volvía más complaciente.

Otros animales de la granja intentaron ponerle sobre aviso. «Vas a morir —le decían—. El granjero solo está intentando cebarte.»

El pollo no les hacía caso. Toda su vida, el granjero le había dado de comer e incluso le murmuraba amistosas palabras de ánimo mientras lo hacía. ¿Por qué iban a cambiar tanto las cosas un día sin más?

Pero, claro está, un día las cosas cambiaron:«El hombre que daba de comer todos los días al pollo —escribió Bertrand Russell con su característica socarronería— a la postre le torció el cuello».[27] Cuando el pollo era joven y delgado, lo único que quería el granjero era engordarlo; cuando estuvo suficientemente cebado para llevarlo al mercado, llegó la hora de matarlo.

Russell quería advertirnos con ello del error de formar predicciones simplistas: si no entendemos qué ha hecho que las cosas ocurrieran en el pasado —nos recuerda la historia del pollo desprevenido—, no podemos suponer que seguirán ocurriendo en el futuro. Igual que el pollo no previó que su mundo podía venirse abajo un día, también nosotros podríamos estar ciegos a los cambios que estén por venir.

Si queremos aventurar una hipótesis más o menos fundada sobre el futuro de la democracia, debemos hacernos la «pregunta del pollo». ¿Acaso la causa de la estabilidad pasada de la democracia radicaba en unas

condiciones que ya no están presentes?

La respuesta podría muy bien ser que sí.

Hay al menos tres llamativas constantes que caracterizaron la democracia desde que se fundó y que hoy ya no están vigentes. La primera es que, durante el periodo de la estabilidad democrática, la mayoría de los ciudadanos disfrutaron de un rápido incremento de su nivel de vida. De 1935 a 1960, por ejemplo, la renta de un hogar estadounidense típico se duplicó. De 1960 a 1985, volvió a duplicarse de nuevo. Desde entonces, se ha estancado.[28]

Eso ha sido el preludio de un cambio radical en la política estadounidense: a los ciudadanos nunca les han gustado mucho los políticos, pero, como mínimo y en general, confiaban en que los dirigentes elegidos se comprometieran con su parte del trato, que no era otra que hacer que la vida de los electores siguiera mejorando. Actualmente, esa confianza y ese optimismo se han evaporado. A medida que la inquietud de los ciudadanos por el futuro ha crecido, estos han ido concibiendo la política cada vez más como un juego de suma cero en el que cualquier ganancia para los inmigrantes o las minorías étnicas se produce supuestamente a costa de los miembros de la mayoría.[29]

Esto está exacerbando una segunda diferencia entre la relativa estabilidad del pasado y el creciente caos del presente. Durante todo ese periodo de estabilidad democrática previo, un grupo racial o étnico concreto ejercía el dominio en cada país. En Estados Unidos y Canadá, siempre ha existido una clara jerarquía racial, en virtud de la que los blancos han disfrutado de incontables privilegios. En Europa occidental, ese dominio llegó incluso más lejos. Fundados sobre una base monoétnica, países como Alemania o Suecia no reconocían a los inmigrantes como verdaderos miembros de la nación. Cabe la posibilidad de que el funcionamiento fluido de la democracia dependiera de esa homogeneidad hasta un extremo que, por lo general, hemos preferido ignorar.

Ahora, décadas de inmigración masiva y de activismo social han transformado radicalmente esas sociedades. En América del Norte, las minorías raciales reclaman un definitivo trato de verdadera igualdad. En Europa occidental, los descendientes de inmigrantes están empezando a dejar muy claro que una persona de piel negra u oscura puede ser un alemán o un sueco de pura cepa. Pero, si bien una parte de las respectivas poblaciones autóctonas aceptan esas demandas (o incluso las hacen suyas) y el cambio que comportan, otra parte las percibe como una amenaza y una ofensa. De ahí que por todo Occidente esté cobrando fuerza una extendida rebelión contra el pluralismo étnico y cultural.[30]

Un último cambio ha conquistado también el conjunto del orbe en el plazo de unas pocas décadas. Hasta no hace mucho, la comunicación de masas había sido dominio exclusivo de la élite política y económica. Los costes de editar un periódico, mantener una emisora de radio en antena o poner en marcha una cadena de televisión eran prohibitivos para la mayoría de los ciudadanos. Esto permitía que el *establishment* político marginara las opiniones extremas. La política conservaba así un carácter relativamente consensual.

En el último cuarto de siglo, sin embargo, el ascenso de internet y, en especial, de las redes sociales ha desplazado rápidamente el centro de gravedad de la tensión de poder entre fuerzas políticas integradas en el sistema establecido y fuerzas excluidas por este. Hoy cualquier ciudadano puede compartir información viral con millones de personas a gran velocidad. Los costes de la organización política se han desplomado. Y gracias a ese estrechamiento de la distancia entre centro y periferia, los instigadores de inestabilidad han adquirido cierta ventaja sobre las fuerzas favorecedoras del orden.[31]

Apenas si estamos empezando a entender qué ha causado la crisis existencial de la democracia liberal, por no hablar de saber cómo contrarrestarla. Pero si damos crédito a los grandes ejes impulsores de esta época populista nuestra, tres son los frentes en los que deberíamos admitir que es necesario actuar.

En primer lugar, tenemos que reformar la política económica, tanto a escala nacional como internacional, para atenuar la desigualdad y estar a la altura de la vieja aspiración de un rápido aumento de los niveles de vida. Desde ese punto de vista, el reparto equitativo del crecimiento económico no es solo una cuestión de justicia distributiva, sino también de estabilidad política.

Hay economistas que sostienen que no podemos tener democracia, globalización y nación al mismo tiempo. Y algunos filósofos han suscrito la idea de que renunciemos al Estado nación y han imaginado soluciones preeminentemente internacionales a los problemas económicos a los que nos enfrentamos. Pero ese es un modo equivocado de afrontar la cuestión. Para preservar la democracia sin abandonar el potencial emancipador de la globalización, es preciso que averigüemos cómo puede el Estado nación recuperar de nuevo el control de su propio destino.[32]

En segundo lugar, necesitamos replantearnos lo que la ciudadanía y la pertenencia pueden significar en un Estado nación moderno. La aspiración de una democracia multiétnica, en la que ciudadanos y ciudadanas de todo credo o color tengan verdadera consideración de iguales, es irrenunciable. Por difícil que a países con una honda concepción monoétnica de sí mismos les haya resultado aceptar a los recién llegados y a las minorías, esa transformación es la única alternativa realista a la tiranía y al conflicto civil.

Pero el noble experimento de la democracia multiétnica solo puede triunfar si todos sus partidarios comienzan de una vez a destacar lo que los une más que lo que los separa. En los últimos años, una justificada impaciencia con la pervivencia de la injusticia racial como realidad ha impulsado con creciente apremio a ciertas personas a tildar los principios de la democracia liberal de hipócritas o, incluso, a defender los derechos grupales como fundamento esencial de la sociedad. Ese es un error moral, amén de estratégico: la única sociedad que puede tratar a todos sus miembros con respeto es aquella en la que cada individuo goce de derechos individuales basados en su condición de ciudadano, no en su pertenencia a ningún grupo particular.[33]

Por último, tenemos que aprender a resistir el impacto transformador de internet y de las redes sociales. A medida que se han ido propagando los discursos del odio y las noticias falsas, ha habido llamamientos crecientes a que las empresas que gestionan esas redes (o los gobiernos mismos) actúen como censores. Son muchos los pasos de sentido común que Facebook y Twitter pueden dar para dificultar que los colectivos propagadores de discursos de odio aprovechen esas plataformas. Pero si dejáramos que los gobiernos o los consejeros delegados fueran quienes decidieran quién puede decir qué en la red, la libertad de expresión no tardaría en desaparecer. Así pues, para hacer que el de la era digital sea un entorno seguro para la democracia, tenemos que incidir no solo en cuáles son los mensajes que se difunden por las redes sociales, sino también en el modo en que estos tienden a ser recibidos.

Cuando aún percibíamos la democracia como un experimento audaz y frágil, invertíamos ingentes recursos educativos e intelectuales en divulgar las bondades de nuestro sistema político. Las escuelas y las universidades sabían que su tarea más importante era la formación de ciudadanos. Los autores de libros y estudios sobre el tema reconocían el gran papel que les correspondía respecto a explicar y defender las virtudes de la democracia liberal. Esa sensación de misión se ha disipado con los años. Ahora que la democracia liberal se enfrenta a una situación de peligro existencial, va siendo hora de reactivar todo aquello.[34]

~

Hay tiempos «ordinarios» en los que las decisiones políticas influyen en los grandes y los pequeños detalles de la vida de millones de personas, pero en los que no están en juego los rasgos básicos de la vida colectiva de un país. Puede haber profundos desacuerdos, pero todos los contrincantes enfrentados en bandos opuestos en la línea del frente del combate político suscriben las reglas del juego. Aceptan dirimir sus diferencias sobre la base de unas elecciones libres y justas, están comprometidos con las normas básicas del sistema político, y aceptan que una derrota en las urnas legitima a su oponente político para tomar el relevo en el gobierno del país.

Quienes viven esos periodos de normalidad reconocen así que toda victoria es provisional y que el perdedor en una batalla política puede perfectamente seguir ahí para tratar de ganar la guerra. Siguen teniendo en su poder la posibilidad de transformar el progreso hoy derrotado (en las urnas o en el Parlamento) en una victoria para la justicia en otra ocasión futura, y por ello no ven en las derrotas más que razones para redoblar los esfuerzos de persuasión pacífica de sus conciudadanos.

Y luego hay tiempos extraordinarios, en los que se renegocian los contornos básicos de la política y la sociedad. En épocas así, las discrepancias entre partidarios de los bandos enfrentados alcanzan tal hondura y crudeza que unos y otros dejan de estar de acuerdo con cuáles han de ser las reglas del juego. Para obtener ventaja, los políticos están dispuestos incluso a cuestionar las elecciones libres y justas, a saltarse las normas fundamentales del sistema político y a vilipendiar a sus adversarios.

A partir de ahí, es normal que las personas a quienes les toca vivir esos tiempos extraordinarios pasen a tener una concepción más existencial y trascendental de lo que está en juego en la disputa política. Si las reglas del sistema se ponen seriamente en cuestión, es lógico que los ciudadanos teman que cualquier victoria en las urnas pueda terminar siendo definitiva e irreversible, que una derrota en una batalla política los prive de la posibilidad de seguir luchando en esa guerra a más largo plazo, y que el progreso derrotado hoy pueda encarrilar al país por la senda de la injusticia perenne.

La mayoría de nosotros hemos vivido el grueso de nuestras vidas en tiempos ordinarios.

Cuando yo me hice mayor de edad en Alemania, allá por la década de los noventa, por ejemplo, los políticos debatían sobre cuestiones importantes. ¿Debía condicionarse la percepción de prestaciones sociales a una muestra de buena conducta por parte de los perceptores?[35] ¿Iba a permitirse que los inmigrantes y sus hijos adoptaran la ciudadanía alemana sin que renunciaran a otros pasaportes? ¿Podía el Estado reconocer a las parejas del mismo sexo en forma de uniones civiles?

Las respuestas que aquellos dirigentes dieran a esas preguntas tendrían una honda influencia —así lo creía yo— en el país en los años que estaban por venir. El futuro era totalmente abierto. Por un lado, estaba el proyecto de un país abierto, generoso, acogedor. Por el otro, el de una nación cerrada, cicatera, estancada. Como miembro de las juventudes de uno de los grandes partidos políticos, dediqué mucho tiempo a luchar por lo que creía justo.

En aquel entonces, apenas sabía nada de Estados Unidos. Así que no me di cuenta de que en ese país se dirimían cuestiones de mayor calado todavía. ¿Se daría acceso a una sanidad digna a millones de ciudadanos que carecían de seguro médico? ¿Se podría expulsar a soldados del Ejército por manifestar abiertamente su orientación sexual? ¿Debían abolirse partes claves del Estado del bienestar?

También las respuestas a tales preguntas influirían hondamente en el país. Servirían para mejorar o empeorar la vida de millones de personas, para hacerla más auténtica o más simulada, más próspera o más precaria. Importaba —y mucho— cuál de las dos sendas tomaría el país. Y sin embargo, visto todo desde nuestra perspectiva actual, soy consciente de que aquellas eran cuestiones propias de la política normal.

Ahora, sin embargo, cada día se hace más evidente que vivimos en tiempos extraordinarios: unos tiempos en los que las decisiones que tomemos decidirán si se propagará un terrible caos, si se desatará una crueldad indescriptible, y si podrá sobrevivir un sistema político —la democracia liberal— que ha hecho más que ningún otro en la historia de la humanidad por difundir la paz y la prosperidad.

La difícil situación en la que nos encontramos es tan reciente y tan alarmante que nadie ha logrado entenderla realmente bien aún. Cada día se diseccionan piezas concretas del rompecabezas en la prensa, la televisión e incluso, a veces, en el entorno académico. Pero cuanto más nos obsesionamos con esos pedazos concretos, menos percibimos la imagen de conjunto.

En este libro trato de dar sentido a nuestro nuevo paisaje político haciendo cuatro aportaciones diferenciadas: demuestro que la democracia liberal se está descomponiendo actualmente en sus partes constitutivas, y que de ese proceso está surgiendo la democracia iliberal, por un lado, y el liberalismo no democrático, por otro; sostengo que el profundo desencanto de

la gente con nuestro sistema político representa un peligro existencial para la supervivencia misma de la democracia liberal; explico las raíces de esa crisis; y muestro lo que podemos hacer para rescatar aquello que es verdaderamente valioso de nuestro orden social y político actualmente en peligro.

Tenemos la inmensa suerte de vivir en la era más pacífica y próspera de la historia humana. Aunque los acontecimientos de los últimos años parezcan desorientadores e incluso paralizantes, seguimos conservando la capacidad de conquistar un futuro mejor. Aun así, ahora, a diferencia de quince o treinta años atrás, ya no podemos dar ese futuro por garantizado.

En estos momentos, los enemigos de la democracia liberal parecen más decididos a determinar nuestro mundo que sus defensores. Si queremos mantener tanto la paz como la prosperidad, y tanto el gobierno del pueblo como los derechos individuales, debemos admitir que los nuestros no son tiempos normales y que exigen un esfuerzo extraordinario en la defensa de nuestros valores.

Parte I

LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

En 1830, el rey de Francia envió a un joven ingeniero a Inglaterra para que estudiara un invento sensacional: un tren de vapor que acababa de realizar un transporte de pasajeros de Mánchester a Liverpool. En cuanto llegó a su destino, el ingeniero...

> ... se sentó junto a la vía tomando abundantes notas mientras el robusto y pequeño artefacto tiraba del primer ferrocarril del mundo yendo y viniendo entre las dos ciudades. Después de haber calculado concienzudamente lo que había observado, dio cuenta a París de sus conclusiones: «La cosa es imposible —escribió—. No puede funcionar».[1]

Es fácil caer en la tentación de burlarse de aquel ingeniero. De tan absorbido que está por el doctrinarismo científico, ignora las pruebas que ruedan ante sus ojos a cincuenta kilómetros por hora. Pero confieso que a mí me resulta enternecedor. Y es que creo que no fueron las fórmulas matemáticas de su cuaderno de notas las que le llevaron a tan absurda conclusión, sino su humanísima negativa a creer que su manera de entender el mundo pudiese estar tan errada. Así que no puede sorprendernos que, en estos meses de grandes conmociones políticas sucesivas, muchas personas que nos parecían perfectamente racionales y pragmáticas hayan dicho o escrito cosas que nos recuerdan un poco a aquel joven ingeniero francés.

Los gurús y los politólogos nos dijeron, por ejemplo, que los británicos jamás votarían a favor de salir de la Unión Europea. Y ganó el *brexit*. Los gurús y los politólogos nos dijeron que Donald Trump jamás saldría elegido. Y ganó las elecciones. Los gurús y los politólogos nos dijeron que la democracia jamás correría el riesgo de *desconsolidarse*. Y lo cierto es que sí que lo corre.

Vivimos en una era de incertidumbre radical. La gama de resultados posibles es mucho más amplia ahora de lo que parecía ser pocos años atrás. El de pronosticar es un ejercicio más difícil que nunca. Y aun así, la única predicción que nos ha inducido indefectiblemente al engaño —la suposición

de que las cosas seguirán siendo como siempre han sido— continúa siendo la más popular, incluso hoy en día. «Eso es imposible», parece ser la conclusión a la que llegan todos los artículos dedicados al tema. «No puede ser.»

Si queremos evitar que el futuro nos tome tan por sorpresa como nos ha tomado el pasado reciente, va siendo hora de que reexaminemos nuestros supuestos de partida básicos. ¿Es posible que las democracias liberales sean menos estables de lo que suponíamos? ¿Y llevará el auge del populismo a la descomposición de nuestro sistema político?

Para pensar con claridad sobre los peligros a los que se enfrenta la democracia liberal, hemos de entender qué significan realmente sus elementos constitutivos. Pero dos hechos dificultan esa labor.

En primer lugar, la palabra *liberalismo* tiene diferentes acepciones si hablamos del debate político cotidiano o si hablamos de la naturaleza de nuestras instituciones políticas. En países como Estados Unidos, la mayoría de las veces que se usa el adjetivo *liberal* es para calificar el punto de vista político de una persona: en aquel país, por ejemplo, hay *liberales* y conservadores en un sentido parecido a como hay izquierdistas y derechistas, o demócratas y republicanos. Eso *no* es lo que yo quiero decir cuando me refiero a la democracia liberal ni cuando uso el término *liberal*. En este libro, un liberal es alguien que está comprometido con ciertos valores básicos, como son la libertad de expresión, la división de poderes o la protección de los derechos individuales. En la acepción en la que yo empleo la palabra, George W. Bush es tan liberal como Barack Obama, y Ronald Reagan fue tan liberal como Bill Clinton.

En segundo lugar, como la democracia goza de gran prestigio como concepto, hemos adquirido la mala costumbre de expandir su definición para que abarque toda clase de cosas que son de nuestro agrado. De ahí que la práctica totalidad de definiciones de *democracia* hoy existentes no se molesten en distinguir entre tres elementos muy diferentes: el liberalismo, la democracia y el conjunto históricamente contingente de instituciones a las que estamos acostumbrados en América del Norte y Europa occidental.

Donde más evidente resulta la tendencia a introducir en la noción misma de *democracia* toda suerte de cualidades deseables es entre aquellos filósofos que han pretendido reservar ese término para los regímenes más justos concebibles (sociedades imaginarias en las que se conseguiría por fin erradicar injusticias como la pobreza extendida o la desigualdad incontrolada). Pero incluso los politólogos que se han esforzado a conciencia por idear concepciones minimalistas de la democracia omiten las distinciones claves que hay entre liberalismo, democracia e instituciones como los parlamentos o los tribunales de justicia. Los «minimalistas procedimentales», por ejemplo, coinciden con el politólogo Robert Dahl en definir la democracia como aquel sistema que se caracteriza por tener:

- Elecciones libres, justas y competitivas.
- Sufragio adulto universal.
- Amplia protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión, de prensa y de asociación.
- Ausencia de autoridades «tutelares» no elegidas (como ejércitos, monarquías o corporaciones religiosas) que limiten el poder de las autoridades elegidas para gobernar.[2]

El marco conceptual de Dahl inscribe así la protección de los derechos liberales en la definición misma de democracia. Eso imposibilita preguntarse si democracia y liberalismo pueden estar disgregándose en estos momentos. Además, al centrarse en un conjunto concreto de instituciones supeditadas a nuestra particular evolución histórica, dificulta enormemente que nos preguntemos si estas permiten realmente que el pueblo ejerza el poder. Esto hace que dicha definición de la democracia (no tan minimalista como parece) infle la importancia de nuestras instituciones políticas. En vez de reconocerles el carácter de medios para el fin de la democracia y el liberalismo, parece concebirlas como fines en sí mismas.[3]

Por consiguiente, yo empleo aquí un conjunto de definiciones mucho más simples que no precisa de tantos supuestos de base sobre el mundo real y que capta mejor la aspiración original de la democracia, que no es otra que la de dejar que sea el pueblo el que mande. A mi juicio:

- Una *democracia* es un conjunto de instituciones electorales vinculantes que traducen de manera efectiva las opiniones populares en unas políticas públicas concretas.[4]
- Las instituciones *liberales* protegen con eficacia el Estado de derecho y garantizan derechos individuales, como la libertad de expresión, de culto, de prensa y de asociación para todos los ciudadanos (incluidas las minorías étnicas y religiosas).
- Una *democracia liberal* es sencillamente un sistema político que es liberal y democrático a la vez: que protege los derechos individuales y traduce las opiniones populares en unas políticas públicas concretas.

Esto nos permite ver que las democracias liberales pueden pervertirse en dos sentidos. Las democracias pueden ser iliberales. Esto es especialmente probable en lugares en los que la mayoría de la población está a favor de supeditar las instituciones independientes a los antojos del poder ejecutivo, o de restringir los derechos de aquellas minorías que no son de su agrado. Por su parte, los regímenes liberales pueden ser no democráticos incluso aunque se celebren en ellos elecciones regulares y competitivas. Esta es una posibilidad harto probable allí donde el sistema político está tan sesgado a favor de la élite que las elecciones rara vez sirven para traducir las opiniones populares en decisiones efectivas sobre políticas públicas.

Eso, me temo, es precisamente lo que ha sucedido en muchas partes del mundo durante las últimas décadas. Lo que mantenía aglutinados al liberalismo y a la democracia, sostengo aquí, era un conjunto contingente de precondiciones tecnológicas, económicas y culturales. Ese aglutinante se está diluyendo con rapidez. De resultas de ello, la democracia liberal —esa mezcla única de derechos individuales y gobierno popular tan característica durante décadas de la mayoría de los regímenes políticos de América del Norte y de Europa occidental— se está resquebrajando. En su lugar, dos nuevas formas de régimen están emergiendo: la *democracia iliberal* (o democracia sin derechos) y el *liberalismo no democrático* (o derechos sin democracia). Y todo parece indicar que esa descomposición de la democracia liberal en sus dos componentes básicos va a ser protagonista clave de la historia del siglo XXI.

Capítulo 1

DEMOCRACIA SIN DERECHOS

En el otoño de 1989, los ciudadanos del «paraíso obrero» germano oriental acudían en masa todos los lunes por la noche a las concentraciones de protesta contra el régimen comunista en las calles de Leipzig y Dresde. Su eslogan central rezumaba una esperanzada dignidad: *Wir sind das Volk*, clamaba la multitud. «Nosotros —no la policía secreta ni la élite del partido — somos el pueblo.»[1]

Estos tres últimos años, la población de Leipzig y de Dresde ha vuelto a tomar las calles de ambas ciudades. En medio de las enfebrecidas iras generadas por la llegada de cientos de miles de refugiados a Alemania durante 2015, un movimiento autodenominado (de forma harto grandilocuente) Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida) comenzó a manifestarse en protesta contra Angela Merkel y las políticas de su gobierno.[2]

Con sus concentraciones de todos los lunes por la noche en el centro de esas mismas localidades, Pegida estaba apropiándose astutamente de aquel legado de resistencia popular. Quienes se oponen a Merkel hoy, venían a insinuar, son los herederos legítimos de quienes se opusieron al régimen comunista hace un cuarto de siglo. Así que, cuando fui a Dresde en calidad de observador de aquellas protestas de miles de ciudadanos indignados en el centro de la ciudad, la atmósfera característicamente contrarrevolucionaria que allí respiré no debería haberme tomado por sorpresa. Y, aun así, lo hizo.

El odio a la *Lügenpresse*, la «prensa mentirosa», es un elemento central de la ideología del movimiento, por lo que la mayoría de los manifestantes se negaron a hablar conmigo. Cuando intentaba sacar fotos, me apartaban sin

mediar palabra. «Estoy aquí porque no tengo familia —me dijo un productor de un canal de televisión local, que había colocado su cámara lejos de la multitud—. Mis colegas que tienen hijos se niegan a cubrir las manifestaciones. El riesgo de que te den una paliza es demasiado alto.»[3]

Aun así, allí estaban, nítidamente exhibidos, los grandes temas de Pegida: su odio a los refugiados, su desconfianza hacia Estados Unidos y su insistencia en la pureza étnica del pueblo alemán. Pocos eran los manifestantes que ondeaban la bandera negra, roja y dorada de la República Federal, cuyo diseño tricolor invoca los valores universalistas de la Revolución francesa. En lugar de esta, muchos preferían la llamada bandera de Wirmer, con una gran cruz oscura sobre fondo granate, que se ha vuelto popular en círculos de extrema derecha porque se la considera un símbolo de las raíces nórdicas y las tradiciones cristianas del país.

Toda aquella iconografía de resistencia compensaba la falta de sutileza con unas buenas dosis de variedad: entre la multitud, también divisé banderas rusas («Putin pone a su pueblo primero»), confederadas («ellos sí eran verdaderos rebeldes») y una solitaria bandera japonesa.

Esta última me dejó desconcertado. No me sorprendía ver que aquella gente admirase el régimen autocrático de Putin o su duro trato a las minorías en Rusia. Podía entender por qué unos manifestantes que odiaban a Estados Unidos y temían la diversidad étnica se identificaban con los sudistas. Pero ¿qué tenía que ver Japón con todo eso?

Me acerqué al hombre que portaba la enseña, aunque no sin ciertas reservas; pero él no tuvo reparo alguno en explicarse, sino todo lo contrario. Japón, me contó, tiene el mismo problema que Alemania: una población en descenso. Alemania ha dejado que entren muchos inmigrantes con la esperanza de que compensen la caída de la mano de obra disponible y contribuyan a sostener el sistema de la Seguridad Social. Pero todo eso ha sido un gran error. Los japoneses, que se han negado firmemente a abrir las puertas a los recién llegados, son mucho más listos: «Mejor dejar que la población disminuya que permitir que entren un montón de extranjeros».[4]

Las pancartas contaban una historia parecida. En una se proclamaba que Merkel y otros miembros del gobierno son «enemigos del pueblo alemán» que «¡están librando una guerra de aniquilación contra nosotros!». «¡Eh,

yanquis! —se leía en otra—, salid cagando leches de aquí y llevaros a vuestros títeres con vosotros.» Una tercera pancarta se me hizo familiar al principio, porque recordaba a las banderas con el lema *Refugees welcome* («Refugiados, bienvenidos») que tan omnipresentes habían estado unos meses antes, cuando muchos voluntarios alemanes acudieron entusiastas a recibir a los refugiados recién llegados a estaciones de ferrocarril de todo el país. En esta, sin embargo, se mostraba a un cruzado a caballo usando su lanza para repeler a un par de terroristas, un hombre y una mujer, armados con fusiles AK-47: él, ataviado con una túnica tradicional; ella, embozada en un nicab. «Islamistas, no bienvenidos —*Islamists not welcome*, anunciaba con letras bien grandes—. Quedaos donde estáis si no queréis que os echemos a patadas» (en otras pancartas, de temática similar, se leía «*Rapefugees*,[*] no bienvenidos» o, simplemente, «Mahoma, no bienvenido»).

Pero este carnaval de odio no era más que una atracción secundaria. El centro emocional de la protesta —su mensaje central, su insidiosa cantinela— era un eslogan que no había cambiado en un cuarto de siglo. *Wir sind das Volk*, gritaba la multitud, una y otra vez, con creciente agresividad. «Nosotros —no esos extranjeros que están inundando Alemania, ni los políticos que actúan conchabados con ellos— somos el pueblo.»[5]

En los meses siguientes a aquellas protestas, mientras diversos populistas autoritarios se convertían en foco de atención en toda Europa y Estados Unidos elegía a Donald Trump como presidente, no dejé de pensar en mi experiencia de aquella gélida noche. Era tanta la indignada energía que alimentaba a esos movimientos y que yo había presenciado en las calles de Dresde, que no podía evitar interpretar los acontecimientos de 2016 y 2017 a la luz de lo que allí había visto: el odio a los inmigrantes y a las minorías étnicas; la desconfianza hacia la prensa y la difusión de noticias falsas; la convicción de que la mayoría silenciosa por fin había hallado una voz con la que expresarse; y, tal vez por encima de todo, el anhelo de encontrar a alguien dispuesto a hablar en nombre del pueblo.[6]

El raudo ascenso de líderes, «hombres (y mujeres) fuertes», que dicen encarnar en su sola persona la voluntad del pueblo, es algo ciertamente llamativo si se mira desde una perspectiva histórica. Como bien señalaron en su día los politólogos Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, durante gran parte de la era de la posguerra, la estructura de los sistemas de partidos en la mayoría de los países europeos occidentales y norteamericanos parecía haberse «congelado».[7] Durante las décadas finales del siglo XX, apenas cambiaron los principales movimientos políticos representados en los parlamentos de Berna, Copenhague, Helsinki, Ottawa, París, Estocolmo y Washington. Aunque sus fuerzas relativas variaban de una elección a otra, lo que permitía que el centro-izquierda accediera al poder después de que el centro-derecha lo hubiese ejercido durante un tiempo, y viceversa, la forma básica de la estructura de partidos, se mantenía notablemente estable.[8]

Durante estos últimos veinte años, sin embargo, el sistema de partidos se ha descongelado a gran velocidad. En un país tras otro, se han ido dando casos de partidos políticos que, de ser marginales o inexistentes hasta hacía bien poco, han pasado a consolidarse como elementos fijos de la escena política.[9]

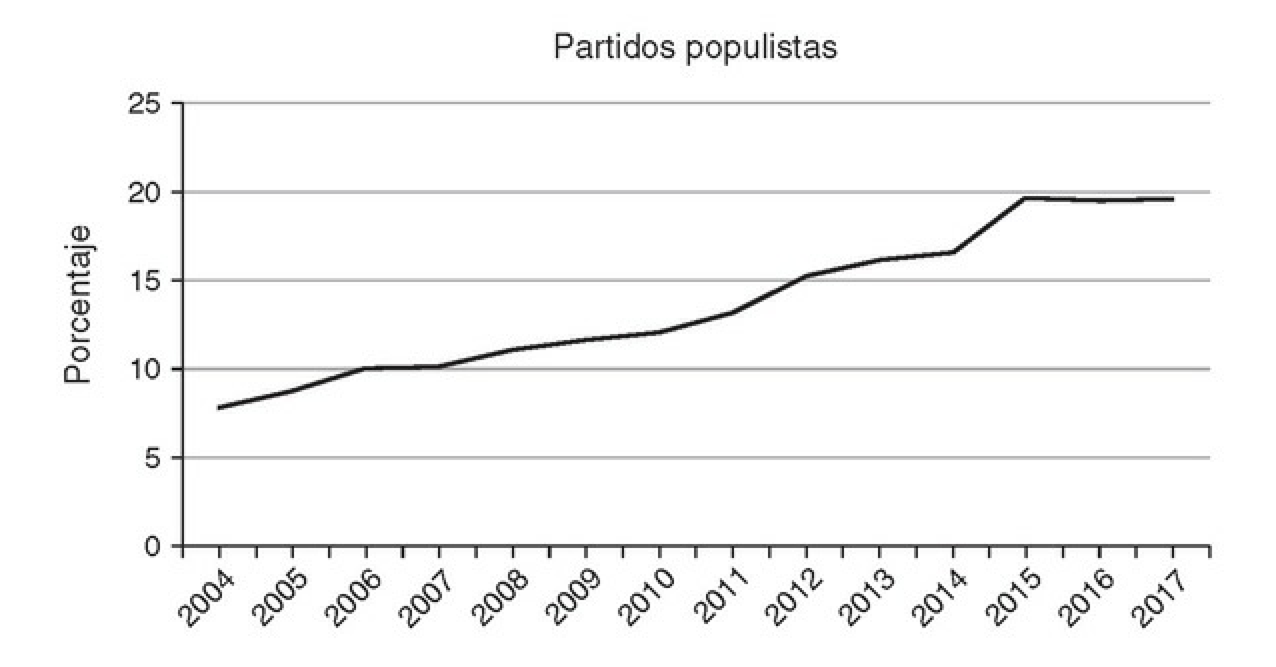
La primera gran democracia en experimentar ese proceso fue Italia. A comienzos de la década de los noventa, un gigantesco escándalo de corrupción pulverizó allí el sistema político. Los partidos que habían dominado la política italiana desde el final de la Segunda Guerra Mundial se disolvieron o se hundieron en un profundo abismo electoral. La primera persona en sacar partido del vacío subsiguiente fue Silvio Berlusconi, un empresario, que cuando se introdujo en política ya había sido acusado de estar implicado en delitos de corrupción, aunque nada de eso pareció importar entonces. Impulsado por la promesa de limpiar el sistema y enriquecer el país, Berlusconi arrasó en las urnas. Durante los años siguientes, gran parte de las energías de su gobierno se consumieron en gestionar las repercusiones de su goteo constante de meteduras de pata políticas..., y en evitar que él mismo fuera a la cárcel. Y, aun así, fue una figura dominante en la política del país durante todo un cuarto de siglo.[10]

En aquel entonces, Italia parecía una anomalía. Durante estos últimos años, sin embargo, a medida que diversos recién llegados a la política han ascendido al poder y a posiciones de influencia en toda Europa, se ha hecho evidente que no lo era.

En Grecia, el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), principal partido del centro-izquierda, y Nueva Democracia, principal partido del centro-derecha, solían cosechar en torno al 80% de los votos entre los dos. Pero en enero de 2015, la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza), liderada por Alexis Tsipras, logró asaltar el poder tras reunir una inesperada mayoría.[11] En España, Pablo Iglesias, un joven profesor de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid que se dedicaba a enseñar asignaturas como «Cine, identidades políticas y hegemonía», fundó un movimiento de protesta a raíz de la situación generada por la crisis financiera de 2008; en las elecciones de 2015, Podemos obtuvo un 21% de los sufragios y se convirtió así en el tercer partido más votado de España.[12] Incluso en la propia Italia sube con fuerza una nueva generación de populistas que está llevando a cabo una transformación a la altura de la que allí tuvo lugar unos años antes: Beppe Grillo, un cómico famoso, puso en marcha el Movimiento 5 Estrellas en 2009, y ahora, en el momento de escribir estas líneas, va por delante de todos los demás partidos en los sondeos.[13]

El ascenso de partidos de extrema derecha ha sido más llamativo aún que el de los de extrema izquierda como Syriza o Podemos. En Suecia, el Partido Socialdemócrata lleva dominando la política nacional desde hace más de un siglo y solo ha cedido ocasionalmente el gobierno a una coalición de centro-derecha liderada por el Partido Moderado; sin embargo, en años recientes, los Demócratas de Suecia, unos advenedizos en la política nacional de ese país, aunque con hondas raíces en el movimiento neonazi, han subido como la espuma y ahora lideran algunos sondeos y figuran como segunda opción en otros.[14] En Francia, el Frente Nacional lleva ya años siendo un elemento habitual del paisaje político. Pero tras décadas en los márgenes del sistema, Jean-Marie Le Pen logró inesperadamente derrotar al candidato del centro-izquierda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2002, lo que le permitió presentarse a la segunda y definitiva vuelta contra el

entonces presidente Jacques Chirac; en 2017, su hija, Marine Le Pen, consiguió parecida hazaña, aunque doblando el porcentaje de votos que su padre había recibido en su día.[15]



Porcentaje de voto de los partidos antisistema en la Unión Europea (UE15)

Historias similares pueden contarse de Austria, los Países Bajos, Finlandia y Alemania: en cada uno de esos países, los populistas de extrema derecha han cosechado éxitos sin precedentes en los últimos años salmodiando su apoyo al pueblo. En realidad, el porcentaje de votos de los partidos populistas europeos, tanto de izquierda como de derecha, ha aumentado en el transcurso de estas pasadas décadas hasta situarse por encima del doble del que era su nivel anterior.[16]

Mi experiencia en Dresde también me reafirmó en la convicción de que los términos convencionales del debate acerca del populismo están mal planteados.

El populismo ha tenido defensores que han jaleado la llegada de esos movimientos por considerarlos un síntoma de una muy buena salud de nuestro sistema político. «El verdadero problema al que se enfrenta la

democracia hoy —escribe Astra Taylor en una elegía titulada «The Anti-Democratic Urge» [«El ansia antidemocrática»]— no [es] el exceso de poder popular, sino la falta del mismo.»[17] «El antipopulismo —añadía Frank Furedi, un sociólogo británico— muchas veces no es más que antidemocracia.»[18]

Taylor y Furedi están en lo cierto cuando dicen que los populistas a menudo son genuinos canalizadores de la voz del pueblo. Pero no tienen en cuenta —u olvidan mencionar— lo profundamente antiliberal que es mucha de la energía de la que se alimenta ese auge del populismo. Cuando los manifestantes de Dresde mostraban pancartas dejando claro que «Mahoma no [es] bienvenido» o exclamaban «somos el pueblo», estaban planteando un cuestionamiento más fundamental de la idea del respeto por los derechos individuales de lo que Taylor y Furedi parecen dispuestos a admitir.

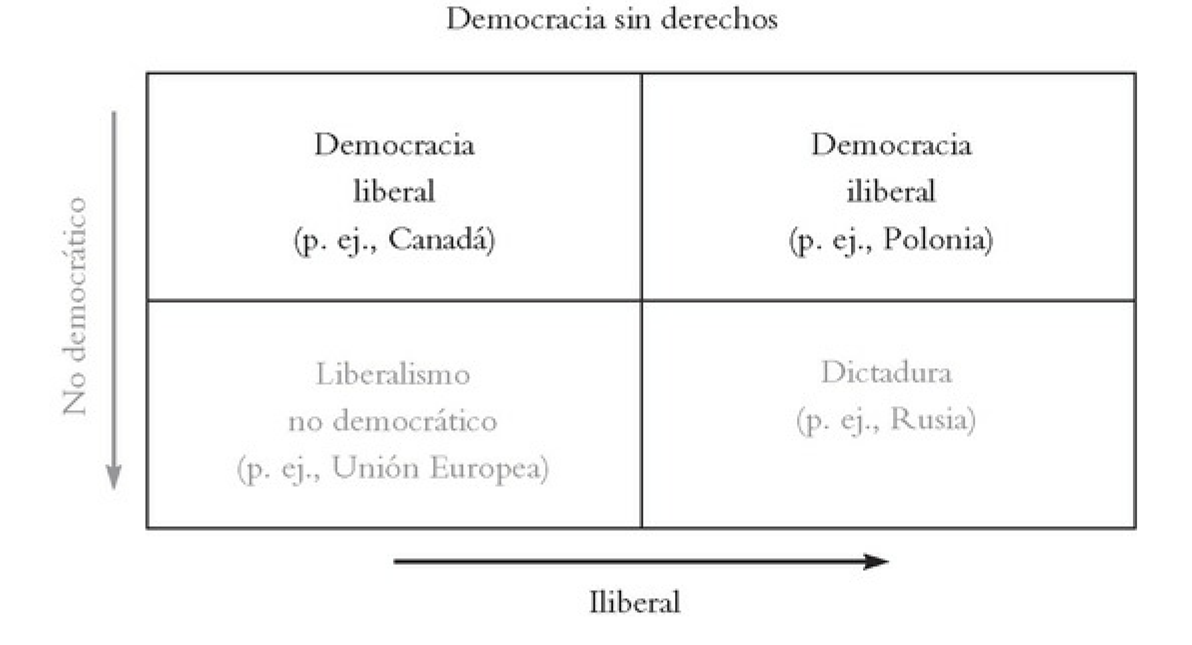
Aunque el populismo tiene un elemento auténticamente democrático, también es, a largo plazo, mucho más adverso al respeto de la voluntad popular de lo que dicen sus partidarios. Como cualquiera que haya estudiado los casos de Turquía, Rusia o Venezuela sabe muy bien, el ascenso de «hombres fuertes» iliberales puede muchas veces ser el preludio de un régimen autocrático: una vez silenciados los medios y abolidas las instituciones independientes, es fácil que los gobernantes iliberales efectúen la transición desde el populismo hasta la dictadura.

Podríamos sentirnos tentados a concluir, entonces, que, en último término, estos nuevos movimientos se oponen diametralmente a la democracia. «El populismo —según ha argumentado Ivan Krastev, haciéndose eco de un consenso creciente entre muchos analistas— no solo es antiliberal, sino que es también antidemocrático: es la sombra que se proyecta permanente sobre la política representativa».[19]

Pero eso también contribuye más a confundir conceptos que a aclararlos. Afirmar que la nueva hornada de populistas es antidemocrática sin más nos impide captar tanto lo que es distintivo en ellos como lo que los ha hecho tan exitosos: los movimientos de ultraderecha a la antigua usanza hacían manifiesta apología del fascismo y defendían la abolición de la democracia; Pegida y Trump, sin embargo, ven en las elecciones una oportunidad para

que la gente corriente haga oír su voz. Lejos de anular la democracia, su verdadera aspiración es conseguir que la voluntad popular remodele el país a su imagen y semejanza.

De ahí que el único modo de entender bien el sentido de estos nuevos movimientos pase por diferenciar su naturaleza de su efecto previsible. Para entender la *naturaleza* del populismo, debemos reconocer que este es tanto democrático como iliberal, que busca tanto expresar las frustraciones del pueblo como socavar las instituciones liberales. Y para comprender su *efecto* previsible, debemos tener en cuenta que estas instituciones liberales son necesarias para la supervivencia a largo plazo de la democracia: en cuanto los líderes populistas se deshacen de todas las barreras liberales que obstruyen la expresión de la voluntad popular, les resulta ya muy fácil desoír la voz del pueblo cuando las preferencias de este entran en conflicto con las suyas propias.



LA POLÍTICA ES SIMPLE (Y QUIEN DIGA QUE NO ES UN MENTIROSO)

Durante las pasadas décadas, el producto interior bruto (PIB) mundial ha crecido a buen ritmo. Mil millones de personas han salido de la pobreza. Las tasas de analfabetismo se han desplomado y también ha caído la mortalidad infantil. Y tomando en consideración el mundo en su conjunto, la desigualdad en la renta ha disminuido.[20]

Pero muchas de esas mejoras se han concentrado en países en rápido desarrollo, como China. En las economías desarrolladas, el PIB ha crecido bastante más lentamente. Y en buena parte de Occidente, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido, el pedazo más suculento de ese crecimiento se ha concentrado en un reducido segmento de la élite de la sociedad. Debido a ello, muchas personas de clase media de los feudos tradicionales de la democracia liberal han tenido que arreglárselas mal que bien. Y si bien la desigualdad global ha caído gracias al crecimiento mucho más rápido de los países pobres que de los países ricos, la desigualdad dentro de prácticamente todas esas sociedades —tanto en las economías (más estancadas) del Occidente rico como en las economías (más dinámicas) del sur global— ha registrado un marcado incremento.[21]

Los motivos de esta evolución de los acontecimientos son múltiples. Está la globalización. Está la automatización. Está la transición desde la industria hacia los servicios. Está el ascenso de una economía digital que permite unas ingentes economías de escala que generan unas cuantiosas fortunas que se concentran en unas pocas grandes empresas y en sus trabajadores más cualificados, dejando muy poco para todos los demás.

Ninguno de esos cambios está fuera del alcance de la política. Aún hoy, con las políticas adecuadas, es posible contribuir a redistribuir la riqueza y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de a pie. Pero las políticas que se necesitan para ello no son ni mucho menos sencillas, como tampoco son de eficacia inmediata ni, en la mayoría de los casos, populares. Así que no debe extrañarnos que a los políticos les haya resultado cada vez más difícil convencer al electorado con el mensaje de que la realidad es compleja.

La campaña de Hillary Clinton, que muchos —a ambos lados del espectro político— consideraron carente de proyecto, es un ejemplo llamativo de ello. Desde la izquierda, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, se quejó de haberse quedado con las ganas de «oírle [a Hillary] algún proyecto de

futuro».[22] Desde la derecha, Kevin Williamson escribió: «Sabemos qué quiere ser, pero no qué quiere hacer».[23] Ambas acusaciones hicieron fortuna porque sonaban a ciertas. Muchos votantes tenían realmente la sensación de que Clinton estaba más interesada en llegar a la Casa Blanca que en poner en práctica una lista concreta de objetivos cuando estuviera en la presidencia. Yo mismo tuve esa impresión muchas veces. Y sin embargo, sé que tiene un largo historial de servicio público sincero y que se presentaba con un intrincado paquete de propuestas políticas que habrían tenido una significativa incidencia en temas muy diversos, que iban desde la educación preescolar hasta la lucha contra el alzhéimer.[24]

Donald Trump, por el contrario, ha pasado mucha de su larga trayectoria vital timando a gente diversa, desde los estudiantes de la «Universidad Trump» hasta los múltiples contratistas a quienes jamás pagó por servicios que le prestaron.[25] La mayoría de las políticas por las que abogaba no podían funcionar. Aprovechó el malestar popular con la inmigración prometiendo levantar un muro en la frontera con México. Y aprovechó la angustia reinante en las localidades industriales en declive prometiendo subir los aranceles a las importaciones procedentes de China. Los expertos no paraban de repetir que ningún muro con México detendría a la inmensa mayoría de los futuros inmigrantes indocumentados (pues estos sencillamente se quedan en el país tras agotar el plazo estipulado en sus visados de entrada) y que una guerra comercial con China no devolvería a Estados Unidos la inmensa mayoría de los empleos industriales, pues estos habían desaparecido por la robotización, más que por el comercio exterior.[26] Y aun así, millones de votantes percibieron en la simplicidad de las propuestas de Trump una señal de autenticidad y determinación, al tiempo que veían en la complejidad de las de Clinton un indicio de insinceridad e indiferencia.

Ahí precisamente radica el motivo por el que las soluciones fáciles y simplistas forman el meollo mismo del atractivo populista. Al electorado no le gusta pensar que el mundo es complicado. Y desde luego no le gusta que le digan que sus problemas no tienen una respuesta inmediata. Ante unos políticos que parecen cada vez menos capaces de gobernar un mundo crecientemente complejo, muchos votantes están cada vez más dispuestos a votar por cualquiera que prometa una solución simple. De ahí que los

populistas, sean de donde sean —desde el indio Narendra Modi hasta el turco Recep Tayyip Erdoğan, desde el húngaro Viktor Orbán hasta el polaco Jarosław Kaczyński, y desde la francesa Marine Le Pen hasta el italiano Beppe Grillo—, suenen tan sorprendentemente similares los unos a los otros, pese a sus considerables diferencias ideológicas.[27]

La disposición de los líderes populistas a ofrecer soluciones tan simples que no pueden funcionar de ningún modo es muy peligrosa. Cuando llegan al poder, sus políticas tienden más bien a exacerbar los problemas mismos que suscitaron las iras populares que los llevaron al gobierno. Podríamos suponer que los votantes, desengañados por el caos consiguiente, tenderán entonces a devolver su confianza a los políticos del viejo orden establecido. Pero esa penuria añadida probablemente fomente mayor resentimiento e inquietud en ellos. Y como la historia de muchos países de América Latina nos muestra, cuando un populista fracasa, tan probable es que los votantes recurran a otro populista —o a un dictador en toda regla— como que devuelvan a las antiguas élites al poder.[28]

Entretanto, la afición de los populistas a la simplicidad propicia también otro peligro más inmediato. Y es que, si las soluciones a los problemas del mundo son tan evidentes como ellos dicen que son, entonces la élite política no las está implementando por alguna de las dos razones siguientes: bien porque es corrupta, bien porque colabora en secreto con intereses externos.

La mayoría de las veces, los populistas lanzan ambas acusaciones.

La acusación de que la verdadera motivación de Clinton era ganar todo el dinero que pudiera fue un tema constante en la campaña de Trump: «Hillary Clinton es una candidata del sistema que solo está luchando por los intereses de sus donantes y sus compinches de dentro del propio sistema. Yo soy alguien de fuera de ese sistema que lucha por vosotros —dijo Trump—. Solo tenéis que seguir el rastro del dinero...», añadió con ese aire tan suyo de quien insinúa siniestras conspiraciones.[29]

Aunque algunas de las acusaciones de Trump eran estrafalarias, no diferían mucho de cómo los populistas de otros países llevan ya tiempo atacando a los políticos de los partidos convencionales. En Polonia, por

ejemplo, Jarosław Kaczyński, con su particular estilo, bastante más refinado, afirmó en su día que los políticos que habían gobernado anteriormente el país habían sido «cooptados en la élite de los socialmente privilegiados» y, por lo tanto, no tenían interés alguno por «cambiar la jerarquía social».[30] Mientras, en Francia, Marine Le Pen ha ido dejando cada vez más claro su apoyo a una rebelión contra una «oligarquía de la Unión Europea» que vela solamente por sus propios intereses.[31]

Los populistas de izquierda copian sus tonadas del mismo cancionero. En Italia, por ejemplo, a Grillo le encanta vapulear a la «casta política», una red de miembros de la élite que solo se ocupan de sus propios intereses particulares.[32] En España, Iglesias empleó parecida retórica después de que Podemos conquistara un porcentaje récord de votos en las elecciones europeas de 2014: «Los partidos de la casta han sufrido un duro golpe, pero por ahora no hemos cumplido nuestros objetivos en las urnas. Mañana seguirá gobernando la casta y seguirá habiendo desahucios».[33]

El dinero que se supone que es la prioridad que los políticos del sistema anteponen a todas las demás tiene que venir de algún lado, claro está, así que la acusación de que solo están ahí por interés pronto se amplía a la de que son títeres del gran capital. En las elecciones estadounidenses, los elevados honorarios que Goldman Sachs abonaba a Hillary Clinton por sus discursos hicieron que ese modo de relatar los hechos hallara un eco especialmente propicio, y Trump lo aprovechó al máximo: Goldman Sachs, afirmó, tiene un «control total, total [...] sobre Hillary Clinton».[34]

La mayoría de los populistas, sin embargo, dan una vuelta de tuerca a esa acusación de que los dirigentes de los viejos partidos son unos traidores. No solo afirman que los miembros de la casta política están ahí por su interés o que están «untados» por las grandes empresas y grupos de interés, sino que les atribuyen un sentimiento de especial lealtad a los enemigos del pueblo que los induce a ser más favorables a promover los intereses de las minorías étnicas o religiosas que a procurar la suerte de la mayoría.

Donald Trump es, una vez más, uno de los casos más puros que podemos encontrar en ese sentido. Su primera incursión real en el mundo de la política fue para denunciar que Barack Obama había falsificado su partida de nacimiento, que no era estadounidense de verdad y que incluso podría ser un musulmán encubierto. Durante la campaña, repitió versiones varias de esa misma acusación una y otra vez: desde llamar a Obama «fundador de Estado Islámico» hasta mencionarlo por su cargo, poniendo lo de «presidente» irónicamente entre esas comillas imaginarias trazadas con los dedos de ambas manos.[35] El hecho de que Clinton no tuviera un nombre tan inusual como el de Obama, o que no procediera de una minoría étnica ni religiosa, no fue óbice para que Trump fabricara acusaciones similares: llamó a Clinton «cofundadora» de Estado Islámico y exigió que la «encerraran» por haber mantenido un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado.[36]

El tipo de deslealtad del que los políticos del sistema se ven acusados varía de un país a otro. Pero aunque los populistas modelan la identidad de la mayoría traicionada y de la minoría despreciada a medida que lo necesitan según su contexto local, la estructura retórica de la que se valen es llamativamente parecida en cualquier parte del mundo.

Así, en la India, Modi afirma que sus oponentes son enemigos de los hindúes y ha contribuido a crear un entorno en el que aquellos analistas y expertos que se perciben como críticos con el hinduismo de línea dura «reciben amenazas de muerte que, luego, se cumplen».[37] En Turquía, Erdoğan utilizó el golpe para tachar a todo opositor a su gobierno de partidario del terrorismo,[38] y ordenó el arresto de centenares de académicos y periodistas.[39] Y en Francia, Alemania e Italia, líderes populistas como Marine Le Pen, Alice Weidel y Matteo Salvini declaran que todos los políticos prosistema odian a la mayoría blanca cristiana. Ya lo dijo Marion Maréchal-Le Pen, sobrina de Marine y antigua parlamentaria francesa: «O matamos al islamismo o él nos matará a nosotros. [...] Quienes prefieren el *statu quo* son cómplices de nuestros enemigos».[40]

SOY VUESTRA VOZ (Y TODOS LOS DEMÁS SON UNOS TRAIDORES)

Los principales problemas políticos del momento, proclaman los populistas, tienen fácil solución. Basta un poco de sentido común. Si el empleo se está deslocalizando, hay que prohibir que otros países vendan sus productos en el nuestro. Si llegan inmigrantes en masa a nuestro país, no hace falta más que erigir un muro. Y si hay unos terroristas que nos atacan en nombre del islam, lo que hay que hacer es prohibir a los musulmanes.

Y si los políticos convencionales no toman medidas tan lógicas como esas, la explicación es similarmente simple: seguro que es por interés particular propio. Están conchabados con grupos de interés indignos o con las minorías étnicas. Son pura corrección política. Decadentes. No sirven.

Es obvio, entonces, qué es lo que hay que hacer. Para solucionar la crisis (para que desaparezcan los problemas, para que la economía progrese, para que el país sea —vuelva a ser— grande), basta con que un fiel portavoz de la voluntad del pueblo conquiste el poder, derrote a los traidores y ponga en práctica soluciones de sentido común.

Ese portavoz es el populista, el que jamás se cansa de arrogarse tal portavocía.

Poco puede extrañarnos, pues, que el discurso de Trump en la Convención Nacional Republicana se concentrara en ese tema una y otra vez. «El gran capital, los medios de la élite y los grandes donantes se están alineando con la campaña de mi oponente porque saben que ella mantendrá intacto su sistema amañado —dijo al principio del discurso—. La están regando de dinero porque ejercen un control absoluto sobre todo lo que ella hace. Ella es su marioneta y ellos manejan sus hilos.»[41]

Pero las cosas no tienen por qué ser así de malas, claro. «Los problemas a los que nos enfrentamos ahora —la pobreza y la violencia en nuestro país, la guerra y la destrucción en el extranjero— durarán mientras sigamos confiando en los mismos políticos que los crearon», advirtió. Para comenzar una nueva era, «se necesita un cambio de liderazgo». El nuevo líder, prometía Trump, priorizaría por fin a los estadounidenses de a pie: «La diferencia más importante entre nuestro plan y el de nuestra oponente es que el nuestro antepondrá a Estados Unidos,“América primero”. El americanismo, y no el globalismo, será nuestro credo».[42]

Fue entonces, tras haber preparado de ese modo a su público, cuando llegó el momento de que Trump lanzara su mensaje central, sobre el que volvería, repitiéndolo como un estribillo, a lo largo de su discurso. Los hombres y las mujeres corrientes llevaban demasiado tiempo olvidados, dijo. «Ya no tienen voz.» Pero, aseguraba Trump, él iba a cambiar todo eso: «Yo soy vuestra voz».[43]

Esa promesa se convertiría en la cantinela central del discurso. Y aunque muchos se burlaron de ella en los días siguientes, funcionó como una síntesis brillante de la promesa fundamental que los populistas de todo el planeta han venido ofreciendo a sus votantes: Marine Le Pen hizo su campaña presidencial de 2017 *au nom du peuple*, «en nombre del pueblo». «Somos el pueblo», dijo una vez Erdoğan a sus adversarios. «¿Quiénes sois vosotros?», decía Norbert Hofer, líder del derechista Partido de la Libertad de Austria, haciéndose eco recientemente de ese mismo sentimiento en una aparición de campaña en su país. «Vosotros tenéis a la alta sociedad de vuestro lado —dijo—. Yo tengo al pueblo conmigo.»[44] La promesa de expresar la voz sin adulterar del pueblo es el elemento central del populismo.

La apelación al pueblo es tan importante por a quién excluye aquella como por a quién incluye. Cuando los populistas invocan al pueblo, están separando un grupo «de los de dentro», unido en torno a una etnia, una religión, una clase social o unas convicciones políticas compartidas, de un grupo «de los de fuera», cuyos intereses pueden ignorarse con total legitimidad. Por así decirlo, están dibujando los límites del *demos* y argumentando implícitamente que unos ciudadanos son dignos de consideración política y otros no. Están reivindicando para sí, por usar las certeras palabras de Jan-Werner Müller, un «monopolio moral de la representación».[45]

La historia del monopolio moral de la representación es tan larga como sangrienta. Durante la Revolución francesa, Maximilien de Robespierre accedió al poder oponiéndose a que el monarca se arrogara la condición de encarnación viva de la nación, pero pronto comenzó a reclamar que solo él era quien verdaderamente manifestaba la voluntad del pueblo. En 1914,

cuando todavía se concebía a sí mismo como un socialista que luchaba contra la opresión de su pueblo por parte de la clase capitalista, Benito Mussolini fundó un periódico llamado *Il Popolo d'Italia [El Pueblo de Italia]*.[46]

A esa misma maniobra retórica se ha recurrido también en fases más recientes de la historia estadounidense. Eso hacía Sarah Palin, por ejemplo, cuando afirmó que «lo mejor de América está en estas localidades pequeñas [...] y en estas maravillosas economías domésticas humildes de la que yo llamo la América real», unas palabras con las que implícitamente contraponía «las áreas proestadounidenses de esta gran nación» y aquellas otras que, por pura implicación lógica, deben de ser «antiestadounidenses».[47] Eso mismo hizo también Glenn Beck cuando escribió un libro titulado *The Real America: Messages from the Heart and Heartland [El Estados Unidos real: mensajes desde mi corazón y desde el corazón del país]*.[48] Y, por supuesto, eso es lo que trataba de expresar Donald Trump con su característico estilo directo cuando dijo que «lo único que importa es la unificación de la gente, porque la otra gente no significa nada».[49]

Cuando los populistas compiten por el poder, dirigen principalmente sus iras contra grupos étnicos o religiosos a los que no reconocen como parte del pueblo «real». Cuando los populistas llegan al poder, pasan a dirigir cada vez más sus iras contra un segundo blanco: el conjunto de las instituciones —formales o informales— que osan disputar sus pretensiones de monopolio moral de la representación.

En las fases iniciales, la guerra contra las instituciones independientes suele adoptar la forma de una incitación a la desconfianza, cuando no al odio abierto, hacia la prensa libre.

Los medios de comunicación críticos dan cobertura informativa a las protestas contra el líder populista de turno. Informan también sobre los fallos de su gobierno y dan voz a sus críticos más destacados. Cuentan noticias compasivas con el sufrimiento de sus víctimas. Con todo ello, cuestionan la presunta sensación de consenso y muestran a un público amplio que el populista miente cuando dice hablar en nombre de *todo* el pueblo.

Eso es lo que hace que la prensa sea tan peligrosa para el gobierno del populista. Y por ese motivo también, la mayoría de los populistas toman duras medidas contra los periodistas independientes y construyen una red de medios leales que jalean todo lo que hacen.

En la primera conferencia de prensa que Trump dio como presidente electo de Estados Unidos, calificó la labor de la CNN de «falsa información», se refirió a BuzzFeed llamándolo «montón de porquería», menospreció a la BBC diciendo irónicamente que era «muy bonita, también», y tildó a la prensa, en conjunto, de «deshonesta».[50] En su primer día completo de ejercicio en el cargo, envió a su secretario de prensa a realizar una serie de declaraciones mendaces sobre la presunta «labor informativa deliberadamente falsa» de los periodistas.[51] Y transcurrido su primer mes en el cargo, había excluido ya a varios periódicos importantes de las sesiones informativas en la Casa Blanca, y había tachado a medios como *The New York Times* o la CNN de «enemigos del pueblo estadounidense».[52]

Mientras tanto, Trump está construyendo también su propia contraprogramación. Mantiene una relación muy estrecha con Fox News. Ha entregado acreditaciones de prensa a sitios web marginales que apoyan acríticamente sus políticas y sus propuestas. E incluso ha puesto en marcha un noticiario regular en su página de Facebook que suministra a sus seguidores apasionantes crónicas de sus presuntos logros.[53]

Los populistas europeos, tanto de izquierda como de derecha, se comportan de forma similar. En Polonia, el gobierno de extrema derecha de Kaczyński se hizo con el control de la radiotelevisión estatal y trató de vetar la entrada de periodistas independientes en el Parlamento.[54] En Grecia, el gobierno de extrema izquierda de Tsipras otorgó al Estado el poder de decidir quiénes podrían hacer oír su voz en las ondas y quiénes no, limitando el número total de licencias de televisión y no cejó hasta conseguir el cierre de una revista que había osado criticar al ministro de Exteriores.[55] Todo apunta a que Beppe Grillo, un hombre que ya ha prometido poner fin a lo que él llama el control político de los medios en Italia, seguiría ese mismo ejemplo si accediera a la jefatura del Gobierno.[56]

Los ataques contra la libertad de prensa no son más que el primer paso. En el siguiente, el de la guerra contra las instituciones independientes, es habitual que se actúe contra fundaciones, sindicatos, laboratorios de ideas, asociaciones religiosas y otras organizaciones no gubernamentales.

Los populistas son conscientes de lo peligrosas que esas instituciones intermedias, que se reclaman legítimamente representativas de las opiniones y los intereses de amplios sectores de la sociedad, son para la supervivencia de esa ficción suya de que ellos, y solo ellos, son quienes hablan por el pueblo. Por eso se esfuerzan tanto por desacreditarlas, caracterizándolas como instrumentos de las viejas élites o de intereses foráneos. Y si con eso no basta, introducen legislación que limita la financiación extranjera para debilitarlas económicamente, o se valen de su control sobre el aparato regulatorio del Estado para obstaculizar el funcionamiento de esas organizaciones.

Pero las mayores iras y los ataques más implacables suelen estar reservados para aquellas instituciones estatales que no están bajo la influencia directa del gobierno populista. Cuando la radio o la televisión públicas se niegan a emitir propaganda gubernamental, cuando los organismos de denuncia de prácticas poco éticas critican al gobierno, cuando las juntas electorales independientes tratan de garantizar comicios libres y limpios, cuando las fuerzas armadas se niegan a acatar órdenes ilegales, cuando los legisladores se atreven a usar el Parlamento como bastión de oposición, o cuando el tribunal supremo de la nación juzga inconstitucionales las actuaciones de los populistas, estas instituciones cruciales son en primer lugar mancilladas atribuyéndoles el deshonor de la traición y, luego, «reformadas» o abolidas.

En Hungría, por ejemplo, Orbán ha llenado los puestos de las instituciones administrativas antaño imparciales con ávidos leales suyos, y ha socavado la independencia del poder judicial del país. En Venezuela, Hugo Chávez reescribió la Constitución nada más acceder al poder y politizó en la práctica las principales instituciones del país.[57]

Idéntica táctica se está poniendo de manifiesto incluso en Europa occidental y América del Norte. En Gran Bretaña, por ejemplo, existe una dilatada tradición de deferencia hacia los tribunales. Pero cuando uno de ellos

falló que la primera ministra Theresa May precisaba de la confirmación del Parlamento para activar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, los ataques contra la justicia adoptaron un tono de una acritud sin precedentes. Disponiendo las fotos de los tres magistrados que habían tomado la decisión con un estilo visual inquietantemente reminiscente del usado en los ataques contra los jueces alemanes durante la década de 1930, *The Daily Telegraph* tronó contra la supuesta subversión de la voluntad del pueblo que significaba aquel fallo. *Daily Mail* fue un paso más allá, pues acompañó una imagen similar con un titular más grande todavía que catalogaba a los jueces de «enemigos del pueblo».[58]

Este ejemplo refleja a la perfección la lógica que se sigue cuando el populismo se vuelve contra las instituciones independientes. Ante la reivindicación de los populistas de ser los representantes exclusivos de la voluntad popular, la política se convierte enseguida en una lucha existencial entre el pueblo real y sus enemigos. De ahí la tendencia de los populistas, tanto de izquierdas como de derechas, a volverse cada vez más iliberales según aumenta su poder. Con el tiempo, llegan a considerar como traidor a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos y concluyen que toda institución que se interponga en su camino representa una perversión ilegítima de la voluntad popular. Para ellos, en el fondo, ambas (institución independiente y voluntad del pueblo) son elementos que hay que suprimir. Así, una vez despejado el camino, el único criterio que rige es el antojo del populista.

EL PUEBLO DECIDE (HACER LO QUE QUIERA)

Ali Erdoğan, presidente de la pequeña comunidad turca residente en Wangen bei Olten, tenía un gran sueño. Un día, esperaba él, un modesto minarete azul y dorado (de unos seis metros de altura) adornaría su centro cultural ubicado en la mencionada localidad de la Suiza septentrional.

Tras años de esfuerzos, consiguió recaudar los fondos necesarios y solicitó el correspondiente permiso de obras. Pero los lugareños se organizaron enseguida en contra de sus planes. Algunos se quejaban de que el minarete les taparía las vistas. Otros temían que la identidad cultural de la localidad se vería amenazada por un símbolo islámico tan ostentoso. Y había

quienes se andaban con menos rodeos aún: los minaretes no tienen cabida en Wangen bei Olten, como tampoco deberían tenerla los inmigrantes que quieren construirlos, decían. La comisión de obras y urbanismo de la localidad votó unánime a favor de rechazar la solicitud.

Erdoğan no se rindió tan pronto y la controversia terminó saltando del ámbito político al de los tribunales de justicia (como tan a menudo sucede con tales decisiones en la actualidad). El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del cantón de Solothurn dio permiso para la construcción del minarete. Cuando los vecinos recurrieron ese permiso, el Tribunal Supremo federal dictó sentencia en firme: el minarete podría construirse después de tanto tiempo.[59]

Sin embargo, esa pequeña victoria para los derechos de la comunidad turca en Wangen bei Olten pronto se convertiría en una gran derrota para los derechos de las minorías religiosas en toda Suiza. Indignada por las sentencias judiciales, una coalición de activistas de extrema derecha comenzó a recoger firmas para la celebración de un referéndum popular que ilegalizara la erección de nuevos minaretes. «El pueblo ha dicho que no queremos esto —declaró Roland Kissling, líder local del Partido Popular Suizo—. Estoy a favor de la integración de los inmigrantes, pero lo que pide esa gente es demasiado.»[60]

Una mayoría de los compatriotas de Kissling coincidieron con su postura. El 29 de noviembre de 2009, millones de votantes suizos acudieron a las urnas para abrogar el derecho de los musulmanes a la libertad de culto. Dirigentes políticos, periódicos de gran tirada y observadores extranjeros diversos hicieron distintos llamamientos a los electores para que votaran a favor de respetar los derechos de la más numerosa minoría religiosa del país. Pero fueron en vano. Al final, la proposición se aprobó con el apoyo del 58% de los votos.[61] Tras ese referéndum, se procedió a la correspondiente reforma de la Constitución suiza, que ahora dice así: «Se garantiza la libertad de religión y conciencia. [...] Se prohíbe la construcción de minaretes».[62]

Ali Erdoğan logró hacer realidad su sueño. El referéndum no llegó a tiempo de frenar su minarete. Pero la modesta torre que ahora adorna un discreto edificio de las afueras de su localidad es el último de su clase que se construirá en Suiza.

En los días siguientes al referéndum, estupefactos, muchos comentaristas de todo el mundo calificaron el resultado de aquel plebiscito de descaradamente antidemocrático.[63] Pero tan incorrecto uso de esa palabra no hace más que evidenciar lo difícil que resulta hablar de la crisis actual con un mínimo de claridad mientras pensemos que democracia significa todo y cualquier cosa. Al fin y al cabo, no se me ocurre un modo más directo de permitir que el pueblo mande que dejándole votar sobre temas que son objeto de conflicto y polémica.

Por eso prefiero decir que la controversia de los minaretes es un caso paradigmático de la desintegración de la democracia en dos nuevas formas de régimen: la democracia iliberal y el liberalismo no democrático.

De un lado, en toda aquella situación, estaban las instituciones administrativas y tecnocráticas que apoyan los derechos individuales: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del cantón de Solothurn y el Tribunal Supremo federal de Suiza están ocupados por jueces no elegidos por el pueblo. Ambos reafirmaron los derechos de una minoría impopular en cuanto a su libertad de culto. Del otro lado, se encontraban las instituciones democráticas que permiten que el pueblo exprese sus opiniones: los miembros democráticamente elegidos de la comisión de obras y urbanismo, y el referéndum al que fueron convocados todos los ciudadanos suizos adultos para dar su dictamen final, sirvieron ambos para traducir la opinión popular en una política pública concreta.

Así pues, el problema del referéndum suizo no era que fuera antidemocrático, sino que la democracia suiza está concentrando cada vez más energías en cargar contra las normas liberales básicas.

Y Suiza no es la única.[64]

Como no acostumbro a asistir a los mítines de los partidos políticos de extrema derecha, me imaginaba que el acto de campaña de Alternativa para Alemania (AfD) sería, en fin, un tanto exótico, supongo. Pero, en vez de eso, me trajo de inmediato recuerdos de juventud. Todo allí parecía inspirado en las poblaciones alemanas de provincias en las que viví durante parte de mi infancia a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

El mitin se celebró en un deprimente polideportivo-espacio multiusos ubicado en un suburbio de clase media de Ofemburgo, una de esas localidades de casas unifamiliares que no son exactamente idénticas entre sí, pero cuyas paredes son siempre del mismo color y cuyos tejados están inclinados con igual ángulo. Salvo por el detalle —previsible— de cierto sesgo de edad por la presencia de muchas personas mayores, el público también parecía normal y corriente. Si un fabricante de productos de ortodoncia hubiera reunido a un grupo de discusión formado por un número inusualmente alto de clientes potenciales, las sensaciones habrían sido muy parecidas. Hasta las pancartas y los carteles del partido parecían sutilmente comerciales. Esos azules un pelín demasiado subidos y esos rojos que también eran un pelín demasiado rojos me recordaban a una plantilla de PowerPoint, o quizá a un mal anuncio del metro.

Famosa por su retórica tóxica contra los inmigrantes, Frauke Petry, que por entonces era la líder de AfD, ha llegado a defender en mensajes de correo electrónico internos de la formación el uso de «provocaciones verbales» como estrategia propagandística.[65] Así, fiel a su palabra, hace poco exhortó a la policía alemana a impedir todo cruce ilegal de las fronteras por cualesquiera medios necesarios, incluido el uso de armas de fuego.[66]

Esa noche, cuando subió al escenario en Ofemburgo, hizo pleno despliegue de sus instintos iliberales.[67] La ira hacia los inmigrantes era un tanto visceral en exceso, y la insistencia en la imposibilidad de que los recién llegados lleguen nunca a ser miembros verdaderos de la nación alemana, incómodamente estridente de más. Acusada a menudo de azuzar temores irracionales, ella recalcó que «el miedo y la envidia son una parte importante de la política». Los alemanes, dijo en medio de un multitudinario aplauso, no deberían seguir retrayéndose de usar con orgullo términos tan históricamente connotados como *das Volk* («el pueblo»).

En el transcurso de la noche, esa temática tan hondamente iliberal fue repitiéndose una y otra vez. Pero lo que sorprendía igualmente —aunque los medios se hicieran luego mucho menos eco de ello— era el especial énfasis que aquel partido puso durante todo el mitin en profundizar en la democracia. Cuando miré a mi alrededor en el pabellón, no me extrañó ver pancartas con lemas como «la inmigración necesita reglas claras», o como que Alemania no

debería ser «la pagadora del mundo». Pero la que me dejó verdaderamente perplejo fue una en la que, junto a una bandera suiza, se podía leer: «Suiza está a favor de los referéndums. Nosotros también».

La defensa de la democracia directa, explicó Petry al principio de su discurso, es una cuestión fundamental para el partido... una cuestión sobre la que ningún periodista quería pedirle nunca su opinión. La Constitución alemana que se aprobó en 1949, dijo, preveía dos leyes: una para la elección de parlamentarios y otra para permitir que los ciudadanos presentaran iniciativas para la convocatoria de referéndums nacionales. Sin embargo, al final, los políticos solo aprobaron la ley que regula las elecciones al Bundestag, y los ciudadanos alemanes todavía no gozan del derecho de decidir las cuestiones de urgencia por sí mismos. «Por culpa de eso —dijo Petry a los trescientos seguidores que la escuchaban, al tiempo que, en su tono de voz, la indignación iba en aumento—, ahora vivimos en una semidemocracia.»

A los políticos del sistema les gustaría mantener las cosas tal como están. «Aunque no lo digan —sostenía Petry—, ellos están encantados de que los ciudadanos se hayan desilusionado tanto con la política. Después de todo, eso significa que nadie les impide hacer lo que les da la gana.»[68] Pero su partido no es como los del sistema establecido: su partido es diferente. Solo él quiere que el pueblo alemán decida su destino por sí mismo.

Y ahí es donde entra el pequeño país vecino de Alemania. Suiza, dijo Petry, tiene un sistema político maravilloso, precisamente porque confía en sus ciudadanos para que estos tomen decisiones importantes. Va siendo hora de que Alemania haga lo mismo.

Allende las fronteras alemanas, los referéndums cuentan con renovados admiradores por similares motivos. El Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), Podemos, el Movimiento 5 Estrellas y otras formaciones políticas de toda Europa han reclamado referéndums. En los Países Bajos, Geert Wilders presentó sus promesas de campaña para las elecciones parlamentarias de 2017 en un programa electoral de notoria dureza. El segundo de sus once puntos era extraordinariamente simple (y absolutamente iliberal): prohibir el Corán. Pero el tercer punto era a todas luces democrático: procurar la introducción de referéndums vinculantes.[69]

~

Es imposible entender el auge del populismo sin abordar su manera de arrogarse el manto de la democracia.

Los movimientos de extrema derecha de la generación anterior ansiaban abiertamente una vuelta al pasado fascista o pugnaban por establecer un sistema jerárquico que dejara atrás la democracia. En Francia, el fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, era un defensor del régimen de Vichy y minimizaba el Holocausto considerándolo un mero «detalle de la historia».[70] En Alemania, el Partido Nacionaldemócrata (NPD) ensalzaba a dirigentes nazis como Rudolf Hess y ponía en duda el orden constitucional de la posguerra.[71]

Sin embargo, los sucesores de esos movimientos no solo se abstienen de simpatizar abiertamente con un sistema más autoritario, sino que, la mayor parte del tiempo, se describen a sí mismos como una alternativa democrática al orden oligárquico establecido.

En Francia, Marine Le Pen expulsó a su padre del partido cuando este reiteró sus calumnias acerca del Holocausto, y ahora la formación se reclama más democrática que los partidos del sistema.[72] En Alemania, AfD ha iniciado (de mala gana, eso sí) los trámites necesarios para expulsar a Björn Höcke después de que este pidiera «un giro de ciento ochenta grados en el modo en que recordamos actualmente el pasado». El partido también está haciendo especial hincapié en que solo él defiende un sistema verdaderamente democrático: «Ellos están contra nosotros —reza uno de sus eslóganes— porque nosotros estamos con vosotros».[73]

El vehemente compromiso de los populistas con la democracia se condensa a la perfección en cómo jalearon los resultados de las elecciones estadounidenses de 2016. En palabras de Viktor Orbán, la victoria de Trump señalaba que Estados Unidos había completado la transición de una «no democracia liberal» a una «democracia real».[74]

Algunos analistas destacados del populismo, como Jan-Werner Müller, se resisten a reconocer esa energía democrática. La expresión *democracia iliberal*, sostiene Müller, juega totalmente a favor de esos regímenes, pues refuerza «la imagen de tales líderes como adversarios del liberalismo, al

tiempo que les permite continuar refiriéndose a sus acciones como democráticas». La realidad, según él, es que los gobiernos iliberales son intrínsecamente antidemocráticos: «Si dificultan la acción de los partidos opositores con vistas a presentar sus propuestas ante el electorado, y si los periodistas no se atreven a informar de los fallos del gobierno, es como si las urnas estuvieran ya cerradas de antemano».[75]

Comparto tanto la indignación de Müller por el daño que los populistas ya han causado, como su preocupación por el peligro que siguen representando. Pero también temo que la negativa a admitir que hay un elemento democrático en la energía que los impulsa de entrada hacia el poder nos impide comprender el carácter mismo de su atractivo y dificulta que reflexionemos concienzuda y creativamente sobre cómo frenarlos.

Lejos de aspirar a establecer un sistema político jerárquico que supere la democracia, como hacían otros movimientos de ultraderecha más antiguos, los populistas de hoy en día afirman que tratan de profundizar en los elementos democráticos de nuestro sistema actual. Y eso es importante.

Pero incluso en aquellos casos en que los compromisos de los populistas con el concepto mismo de *democracia* son auténticos, su ascenso no deja de suponer un peligro para dicha democracia. Como bien señala Müller, todas esas predilecciones iliberales colisionan frontalmente con el mantenimiento de ciertas instituciones —como las elecciones libres y justas— que impiden que esos mismos populistas puedan pisotear la voluntad popular en cuanto se vuelvan impopulares. Y eso también importa.

Los populistas aseguran que son la voz del pueblo real. Creen que toda resistencia a su poder es ilegítima. De ahí que ellos mismos cedan con demasiada frecuencia a la tentación de silenciar a la oposición y de destruir otros centros de poder rivales. Es imposible entender bien su naturaleza sin reconocer la energía democrática que los impulsa, pero también es imposible entender cuánto daño causarán posiblemente sin admitir lo rápido que esa energía puede volverse contra el propio pueblo. Si los defensores de la democracia liberal no consiguen hacer frente a los populistas, la democracia iliberal correrá siempre el riesgo de degenerar en una pura dictadura.

Capítulo 2

DERECHOS SIN DEMOCRACIA

Era un día de trascendental importancia para los campesinos de Januschau, un rincón remoto de la Prusia Oriental. Por primera vez en su vida, y en la de sus padres, y en la de los padres de sus padres, estaban llamados a votar. Durante siglos habían sido súbditos —prácticamente propiedad— de la familia Oldenburg, sin voz y sin apenas derechos. Ese día, sin embargo, iban a participar en el esotéricamente noble ejercicio de gobernarse a sí mismos.

Reunidos en torno a la posada local, que había sido transformada a toda prisa en un colegio electoral para la ocasión, fueron testigos de hasta qué punto el mundo nuevo conservaba no pocos elementos del antiguo. El mayoral de la familia Oldenburg les estaba entregando unos sobres sellados. Contenían papeletas que ya venían marcadas.

La mayoría de los campesinos hicieron lo que se les decía. Emitieron el primer voto de sus vidas sin saber a quién estaban votando.

Un díscolo solitario se atrevió a abrir su sobre. Inmediatamente concitó las iras del mayoral. Mientras lo golpeaba con un bastón, le gritó, con sincera indignación: «¡Eh, cerdo, que el voto es secreto!».[1]

En la mayoría de los lugares, la pretensión democrática de que fuera el pueblo quien mandara se tomó un poco más en serio y el control de la élite sobre el proceso electoral fue un tanto más tenue. Aun así, esta anécdota tomada de los albores de la democracia encarna muy bien el pacto básico que las élites tradicionales ofrecieron a la masa popular en los inicios de nuestro sistema político: «Si nos dejáis mandar, nosotros haremos como que os dejamos mandar a vosotros».

Es un pacto que ha tenido un éxito fenomenal durante doscientos cincuenta años. En la actualidad, sin embargo, se está volviendo cada vez más difícil de mantener.

La democracia liberal significa muchas cosas para mucha gente distinta: para las masas, representa la aspiración de que sea el pueblo quien gobierne; para las minorías, representa la aspiración de que se protejan sus derechos frente a una mayoría opresiva; y para la élite económica, representa la aspiración de que se instaure un régimen de derechos que le permita conservar su riqueza. Ese carácter camaleónico es lo que ha contribuido a la singular estabilidad exhibida por la democracia liberal.

En su nivel más fundamental, dicho carácter depende de una tensión que es crucial en la historia de las democracias liberales. Los sistemas políticos de países como Gran Bretaña y Estados Unidos se fundaron, no para dar expresión a la democracia, sino para oponerse a ella; la aureola democrática de la que están revestidos actualmente les llega *a posteriori*, cuando, ya en época contemporánea, se les ha atribuido la bondad de dejar que el pueblo gobierne. La credibilidad de tal afirmación depende de con qué comparemos tales democracias. Mientras el recuerdo de la monarquía absoluta estuvo más o menos reciente, y no parecía viable ningún otro sistema más directamente democrático, las democracias liberales pudieron atribuirse la cualidad de que dejaban que el pueblo mandase. Esto fue así durante los aproximadamente cien años durante los que la democracia gozó de su particular hegemonía ideológica sin precedentes. Ya no. De ahí que el mito democrático que tanto ha contribuido a hacer que nuestras instituciones parezcan singularmente legítimas esté perdiendo su influencia.

Las raíces antidemocráticas de nuestras instituciones pretendidamente democráticas son claramente visibles en Gran Bretaña. Allí, el Parlamento no se creó para dejar que el pueblo ejerciera el poder; fue más bien el resultado de un sangriento compromiso entre un monarca en apuros y los escalones más privilegiados de la élite del país. Solo a raíz de la ampliación gradual del sufragio a lo largo de los siglos XIX y XX, se pudo empezar a concebir este sistema de gobierno como algo parecido a una democracia. En cualquier

caso, esa expansión del derecho de sufragio no llegó a transformar el sistema en un sentido tan fundamental como tanto los partidarios como los detractores de la reforma democrática habían previsto.[2]

Por el carácter más conscientemente ideológico que tuvo la fundación del Estado allí, esa misma historia se hace más evidente aún en el caso de Estados Unidos. Para los padres fundadores del país, la elección de representantes, algo que hemos acabado considerando como el modo más democrático de traducir las opiniones populares en decisiones políticas efectivas, constituía ante todo un mecanismo eficaz para mantener al pueblo a raya.

El propósito de las elecciones, según James Madison, no era otro que el «refinamiento y ampliación de las opiniones públicas al pasarlas a través de un filtro, como es el cuerpo de ciudadanos electos. La sabiduría de estos individuos hará que disciernan mejor los verdaderos intereses de su país».[3] Que esto restringiera radicalmente el grado de influencia del pueblo en el gobierno no era casualidad: «La voz pública, en boca de los representantes del pueblo, tiene mayor resonancia con el bien común que si la pronunciara el pueblo mismo estando congregado con tal fin».[4]

En definitiva, los padres fundadores no creían que la República representativa fuese una segunda opción con la que conformarse; todo lo contrario: la consideraban muy preferible al horror de la división en facciones propia de la democracia. Alexander Hamilton y James Madison dejaban claro en el artículo número 63 de *El federalista* que la esencia de la República norteamericana consistiría (y el énfasis es suyo) «*en la exclusión total del pueblo en cuanto colectividad* de toda participación» en el gobierno.[5]

No sería hasta el siglo XIX, con el cambio de las condiciones materiales y políticas de la sociedad estadounidense propiciado por la inmigración masiva, la expansión hacia el Oeste, la guerra civil y la veloz industrialización, cuando una serie de pensadores afines al espíritu empresarial de la época comenzarían a vestir una República (ideológicamente autoconsciente de serlo) con el desacostumbrado ropaje de una democracia renacida. Las mismas instituciones que, en su momento, habían sido ideadas

con el fin de excluir al pueblo de toda cuota participativa en el gobierno pasaron a ser ensalzadas por facilitar el gobierno «del pueblo, por el pueblo, para el pueblo».[6]

Estados Unidos era considerado cada vez más una democracia, pero la realidad iba muy a la zaga de esa impresión. Solo a cuentagotas se iban introduciendo en el país verdaderas mejoras en los procedimientos democráticos. A partir de la ratificación de la decimoquinta enmienda en 1870, se prohibió que «la raza, el color o la condición anterior de esclavos» fueran motivos para negar a los ciudadanos el derecho a votar (aun cuando, en la práctica, muchas veces sí continuaron siéndolo).[7] La elección directa de senadores fue instituida por la decimoséptima enmienda en 1912.[8] Por último, la decimonovena enmienda, aprobada en 1920, estipuló por fin que «el derecho de sufragio de los ciudadanos de Estados Unidos no [fuera] ignorado ni limitado por razón de sexo».[9]

Estas reformas democratizaron las instituciones estadounidenses. Pero la transformación de los términos que empleamos para describir las instituciones de la democracia estadounidense es mucho más grandilocuente de lo que la transformación institucional propiamente dicha ha sido. Y la clave de tal transformación se encierra en un determinado relato sobre los límites que se le suponen al gobierno democrático en las condiciones modernas.

En la antigua Atenas, según cuenta la historia, el pueblo —o, cuando menos, aquellos a quienes se consideraba tal pueblo, es decir, los ciudadanos varones adultos— podía gobernar directamente porque era poco numeroso, porque el territorio del Estado era muy reducido y porque muchos de esos ciudadanos poseían esclavos que se ocupaban de cubrir sus otros quehaceres cotidianos.[10] Eso ya no es posible. Según escribió en su día John Adams, «es imposible» que el pueblo «se reúna para actuar, hacer consultas o razonar, porque sus miembros no pueden desplazarse quinientas millas, ni disponer del tiempo, ni hallar un espacio suficientemente grande, para reunirse».[11] Se suponía, pues, que, en las condiciones modernas de vida, la democracia directa es inviable.

Esa idea hizo que los teóricos de la democracia de finales del siglo XIX procedieran a una particular reinvención del sistema político estadounidense. Fue a partir de entonces cuando, pese a haber sido fundadas originalmente sobre una oposición consciente al ideal de la democracia, las instituciones representativas pasaron a ser caracterizadas como la encarnación más próxima a dicho ideal de todas las posibles en nuestras condiciones modernas. Nació así el mito fundacional de la ideología demócrata liberal: la inverosímil ficción de que el gobierno representativo facilitaba el poder efectivo del pueblo.

Advertía el Evangelio de San Lucas que quien quiere aprovechar los viejos odres para guardar en ellos el vino nuevo se arriesga a un gran desconsuelo, pues «el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán».[12] En el caso de la democracia, ha sucedido justo lo contrario. Por lógica, la ola de sentimiento igualitario que fue creciendo durante el siglo XIX debería haber entrado en contradicción con el conjunto de instituciones declaradamente aristocráticas existentes. En vez de ello, ese nuevo envasado y etiquetado dio nueva vida a las instituciones representativas. Complació a la élite —que pudo así seguir saliéndose con la suya en los temas más importantes— tanto como a los igualitaristas, que vieron en ellas una ejemplificación de sus aspiraciones.

Durante un siglo largo, el mito fundacional de la democracia demostró ser una de las más potentes fuerzas ideológicas de la historia de la humanidad. Fue bajo su égida, y en el contexto de la milagrosa transustanciación del control de la élite en atractivo popular que tal hegemonía conceptual hizo posible, cuando la democracia conquistó medio planeta. Y aunque la aplicación práctica que se hizo del término nunca fue del todo fiel al concepto teórico —habría sido posible, por ejemplo, recurrir en mayor medida a los referéndums populares, o restringir más la capacidad de los representantes de desviarse de la voluntad de sus electores—, conservó suficiente base real como para no perder su influencia en la imaginación democrática.

Esa base se desmorona actualmente. Un motivo de ello es que, con la llegada de internet, aquella incapacidad popular para deliberar en común que tanto preocupaba a Adams parece ya un pintoresco recuerdo pasado. Puede que sea cierto que los miembros del pueblo no pueden desplazarse ochocientos kilómetros como si nada, ni encontrar un espacio físico apropiado para reunirse todos y todas. Pero ¿qué necesidad hay ahora de ello? Si el pueblo se propusiera realmente gobernarse a sí mismo, no le sería difícil hacerlo. Tendría la posibilidad de que un ágora virtual hiciese las veces del ágora física de la antigua Atenas y permitiera que todos los ciudadanos debatiesen y votasen propuestas políticas de pequeño o gran calado.

No quiero decir con esto que la mayoría de los ciudadanos de las democracias contemporáneas quieran involucrarse a fondo en el proceso de la elaboración de políticas públicas. No quieren. Tampoco creo que la deliberación en un ágora virtual fuese civilizada y racional. No lo sería. No en vano la idea de la democracia directa tiene muchos más adeptos en la teoría que en la práctica.

Pero aunque los ciudadanos de hoy no se sientan más inclinados a votar y a deliberar hasta las más rebuscadas leyes y regulaciones de lo que lo estaban los ciudadanos de los años sesenta, o los de la década de 1830, ahora tienen una sensación mucho más instintiva de lo mediatizadas que están nuestras instituciones democráticas. A las generaciones previas tal vez les pareciera natural que el pueblo ejerciera el poder a través de las instancias parlamentarias y eligiera a sus representantes acudiendo a las urnas. Pero para una generación criada en los métodos de votación digitales, plebiscitarios e inmediatos de Twitter y de Facebook, o de *Gran Hermano* y *Operación Triunfo*,* todas esas otras instituciones se antojan hoy un innecesario engorro.

Los ciudadanos actuales tal vez no se impliquen tanto en el resultado de los debates sobre las decisiones políticas como lo están en quién sale expulsado de la casa de *Gran Hermano*. Puede que ni siquiera quieran que su influencia en el sistema de gobierno sea tan inmediata como su voto en la final de *Operación Triunfo*. Pero, aun así, se han hecho una idea muy clara de qué significa que sus decisiones tengan una repercusión real, directa. Saben

que, si quisiéramos diseñar un sistema de gobierno que permitiera realmente que el pueblo gobernara, no se parecería mucho a la democracia representativa.

Existe otra razón, más importante aún, por la que el mito fundacional de la democracia no ejerce ya el mismo ascendiente sobre nuestra imaginación: durante las últimas décadas, las élites políticas se han aislado considerablemente de la opinión popular.

Aunque el sistema jamás se pensó para dejar que el pueblo gobernara sin más, sí contaba con importantes elementos de participación popular. La mayoría de las decisiones políticas eran tomadas por un legislativo electo. Y muchos de esos legisladores tenían una vinculación profunda con sus electores: procedían de todos los rincones del país y mantenían una estrecha relación con asociaciones locales diversas, desde iglesias a sindicatos.

Era probable, además, que esos legisladores estuvieran hondamente imbuidos de una ideología que los dotaba de un propósito. Tanto si eran socialdemócratas que, procedentes de familias pobres, se percibían a sí mismos como abogados de la causa de los trabajadores corrientes, como si eran democristianos que, provenientes de familias religiosas, se consideraban defensores de la tradición, los guiaba una misión política clara y, en muchos casos, actuaban también desde la idea de que un día, al abandonar el cargo, regresarían a las comunidades locales de las que procedían.

En la actualidad, eso solo es así en el caso de muy pocos políticos profesionales. El legislativo, otrora el más importante de los órganos políticos, ha perdido buena parte de su poder en beneficio del poder judicial, la Administración pública, los bancos centrales y los tratados y organizaciones internacionales. Mientras tanto, en muchos países, las personas que componen el Parlamento se han ido diferenciando cada vez más del pueblo al que se supone que representan: hoy en día, pocas de ellas tienen vínculos fuertes con sus comunidades locales y todavía menos son las que muestran un compromiso profundo con una ideología estructuradora.

Derechos sin democracia

No democrático ↓	Iliberal →	
	Democracia liberal (p. ej., Canadá)	Democracia iliberal (p. ej., Polonia)
	Liberalismo no democrático (p. ej., Unión Europea)	Dictadura (p. ej., Rusia)

De resultas de ello, el votante medio se siente ahora más alejado de la política que nunca antes. No se reconoce en los políticos, como tampoco ve reflejadas sus preferencias en las decisiones que esos políticos toman.

Jamás ha existido una época de participación popular perfecta. Como el mito fundacional de la democracia bien nos recuerda, el vaso siempre ha estado medio lleno. Pero ahora corre el peligro de vaciarse del todo.

LÍMITES A LAS INSTITUCIONES ELECTORALES

En estas últimas décadas, los representantes elegidos del pueblo han perdido mucho de su poder.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la complejidad de los retos regulatorios a los que se enfrenta el Estado ha aumentado exponencialmente. La tecnología ha ido avanzando y los procesos económicos se han vuelto más intrincados. La política monetaria se convirtió en una herramienta capital para la estabilización de la economía. Más importante aún: algunos de los retos políticos más apremiantes a los que hoy se enfrenta la humanidad, desde el cambio climático al aumento de la

desigualdad, tienen unas hondas raíces globales que, según todo parece indicar, trascienden las facultades de los Estados nación para darles adecuada respuesta.

Cada uno de estos cambios ha ido desplazando poder fuera de los parlamentos nacionales. Para abordar la necesidad de regular ámbitos de elevada complejidad técnica, se crearon organismos administrativos dotados de personal experto en cada materia e investidos de funciones cuasi legislativas. Para aislar la política monetaria de potenciales presiones políticas dirigidas a inducir expansiones artificiales en años de elecciones, aumentó progresivamente el número de bancos centrales independientes. Por último, entraron en juego toda una serie de tratados y organizaciones internacionales dedicados a toda clase de cometidos, desde la imposición de normas comerciales hasta la negociación de acuerdos contra el cambio climático.

Esta pérdida de poder de los representantes del pueblo no obedece a ninguna conspiración de las élites. Se ha producido de manera paulatina y, en muchos casos, imperceptible, respondiendo a problemas reales de actuación política. Pero el resultado acumulativo ha consistido en una progresiva erosión de la democracia: cuantas más áreas de decisión y acción políticas se han sustraído a la disputa y la confrontación populares, más drásticamente se ha restringido la capacidad de influencia del pueblo en la política.

Burócratas legisladores

Cuando se descubre que el Ministerio de Asuntos Administrativos de Gran Bretaña ha estado dilapidando dinero público como si no hubiera un mañana, sir Humphrey, su funcionario de más alto rango, es llamado a comparecer de inmediato ante un comité selecto de la Cámara de los Comunes. Pero en vez de mostrar contrición por el hecho de que su departamento se hubiese gastado el dinero de los contribuyentes a espuertas en el mantenimiento del tejado de un huerto que no se usaba para nada, él dedicó su comparecencia para evadir toda culpa.

—Se preveía que la venta de flores y hortalizas compensara el coste —se permitió observar.

—¿Y lo ha compensado? —le inquirió una parlamentaria.

—No —admitió él.

—¿Está de acuerdo, entonces, en que se derrochó el dinero? —preguntó ella.

—No me corresponde a mí comentar nada sobre la política del gobierno. Eso debe preguntárselo al ministro.

—Mire, sir Humphrey, le preguntemos lo que le preguntemos al ministro, él dice que esa es una pregunta administrativa para usted. Y le preguntemos lo que le preguntemos a usted, usted dice que esa es una pregunta política para el ministro. ¿Cómo sugiere usted que averigüemos lo que ocurre?

—Sí, sí, sí, me hago cargo del verdadero dilema que se plantea, pues aunque es política del gobierno considerar la política responsabilidad de los ministros y la Administración responsabilidad de los funcionarios, las cuestiones sobre política administrativa pueden dar pie a confusiones entre la política de la Administración y la Administración de la política, sobre todo cuando la responsabilidad por la Administración de la política de la Administración choca o se solapa con la responsabilidad por la Administración de la política.

—Bueno, eso que ha dicho no es más que un montón de estupideces sin sentido, ¿verdad? —preguntó la parlamentaria.

—No me corresponde a mí comentar nada sobre la política del gobierno —repuso sir Humphrey—. Eso debe preguntárselo al ministro.

Sir Humphrey y el Ministerio de Asuntos Administrativos son, como ya habrán adivinado, ficciones. Están tomados de *Yes Minister [Sí, ministro]*, una añorada serie televisiva de humor de la BBC de los años ochenta que contaba las tribulaciones de un político débil e ineficaz que se esforzaba por hacer valer sus prioridades de programa frente a una burocracia empeñada en frustrar sus planes y en proteger sus propios intereses.[13]

Pero aunque las hazañas y las acrobacias verbales de sir Humphrey se exageraban para potenciar su comicidad, no dejaban de contener un núcleo bastante sustancial de verdad. «Su perspicaz descripción de lo que se cuece en los pasillos del poder —confesó una vez Margaret Thatcher cuando ya era primera ministra— me ha procurado horas y horas de puro regocijo.»[14] David

Cameron, uno de los sucesores en la vida real de Thatcher como inquilino del número 10 de Downing Street, abundó en esa opinión tres décadas más tarde. Cuando estudiaba política en Oxford, tuvo que redactar un trabajo «sobre cuán fiel a la realidad es *Sí, ministro*. Creo que escribí [...] que no hacía honor a la verdad. Pues ahora que soy primer ministro, puedo asegurarle que es muy fiel a la realidad».[15]

Los políticos que han sido presa de reiteradas frustraciones en ese sentido no son las únicas personas que resaltan el inflado papel que la burocracia desempeña en la política de muchas democracias de todo el mundo. De hecho, tanto la dificultad de los políticos para controlar a esa burocracia como el creciente alcance de las decisiones tomadas por órganos de naturaleza administrativa son cuestiones que han sido analizadas por un extenso campo de estudios académicos.

Según la descripción más simple del modo de funcionamiento del Estado, el pueblo elige a unos legisladores que convierten la voluntad popular en leyes. Los funcionarios son quienes luego aplican esas leyes a los casos particulares. Desempeñan una importante función, sin duda, pero el suyo no deja de ser un papel subordinado. En último término, su labor consiste en servir a la voluntad popular tal como esta se expresa en la legislación.

En la vida real, la cosa nunca ha sido tan simple. Por ejemplo, los libros de texto suelen resumir la teoría weberiana de la democracia poniendo de relieve que Weber decía que los funcionarios no «siguen órdenes específicas para la resolución de cada caso en particular», sino que se atienen a unas «reglas generales».[16] Pero Weber era consciente de que un juez o un funcionario no es un simple «autómata a quien se le entregan las actas y las costas por un lado para que vuelque un juicio por el otro».[17] Nada de eso. El proceso de implementación de la legislación siempre ha dado margen a la discrecionalidad y a la creatividad: hasta la ley más meticulosamente redactada deja detalles por concretar e importantes procedimientos burocráticos por estipular. De ahí que los funcionarios hayan ejercido un

importante papel político desde el nacimiento mismo de la burocracia moderna. Nunca han sido tan subordinados como los modelos más simples de la política nos podrían hacer creer.[18]

Y aun así, el reciente aumento del número de funcionarios y la expansión de sus funciones no deja de resultar llamativo. En el transcurso del siglo XX y de los primeros años del XXI, el número de funcionarios públicos se ha disparado y el radio de acción de su influencia ha crecido inmensamente. Como consecuencia de ello, el grado en el que los representantes elegidos por el pueblo determinan hoy las políticas públicas que se ponen en práctica se ha reducido muy significativamente.

Las cifras son impactantes. En Gran Bretaña, por ejemplo, el número de funcionarios de la Administración central ha pasado de ser unos cien mil en 1930 a cuatrocientos mil en 2015 (durante ese mismo periodo, la población total del país solo aumentó en un tercio, aproximadamente).[19]

Si bien el aumento del volumen de la Administración pública es considerable, puede que dos cambios cualitativos hayan sido más importantes aún: por un lado, los organismos gubernamentales han ido adquiriendo cada vez una mayor influencia en el diseño de las leyes aprobadas por los parlamentos[20] y, por el otro, han ido adoptando en creciente medida el papel de unos cuasi legisladores, dotándose de la autoridad precisa para diseñar e implementar normativas amplias en áreas claves como la regulación financiera o la medioambiental. Sumados, esos dos fenómenos significan que un elevadísimo porcentaje de las normas que rigen para los ciudadanos de a pie son hoy escritas, implementadas y, en ocasiones, incluso previamente impulsadas por autoridades no electivas.

Los organismos administrativos tradicionales tienen encomendado implementar la legislación elaborada por el legislativo y actúan bajo la dirección de un político —que, normalmente, es también un parlamentario (o una parlamentaria)— nombrado por el presidente o el primer ministro. Pero en un número creciente de áreas, la labor de legislar ha sido asumida por «organismos independientes» facultados para formular políticas por su propia cuenta y extraordinariamente ajenos a la supervisión parlamentaria o

gubernamental.[21] En cuanto el poder legislativo las funda, esas juntas y comisiones reciben el encargo de tomar «decisiones difíciles desde el punto de vista jurídico-legal, complejas en lo técnico y, en muchos casos, sensibles en lo político». A muchos de esos órganos se les confiere plena autoridad regulatoria. Por así decirlo, «pueden dictar regulaciones, emprender medidas administrativas para hacer cumplir sus estatutos y normativas, y decidir casos por adjudicación administrativa».[22]

En Estados Unidos, entre tales órganos independientes se incluyen la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), creada en 1934, que regula las cadenas de radio y televisión y dicta normas sobre cuestiones claves de la era digital, como la neutralidad de la red;[23] la Comisión de los Mercados de Valores (SEC), creada también en 1934 y encargada de proteger a los inversores mediante la regulación del funcionamiento de los bancos y de otros proveedores de servicios financieros, el mantenimiento de la imparcialidad de los mercados y la facilitación de la formación de capital;[24] la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), creada en 1970, facultada para aprobar regulaciones con objetivos tan amplios como mantener la limpieza de las aguas y proteger las especies en peligro,[25] y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada en 2010, que regula los servicios financieros personales, como las hipotecas y las tarjetas de crédito.[26]

El abanico de contenciosos sobre los que estas agencias independientes han dictado veredicto en los últimos años da fe de su importancia. La FCC lleva tiempo decidiendo qué palabras son tabúes en los canales de televisión por cable y es particularmente responsable de la peculiar costumbre estadounidense de tapar las palabrotas con pitidos en muchos programas de televisión.[27]Tras haber sido clave para la regulación del medio más importante del tramo final del siglo XX, la FCC está ahora influyendo en el futuro del medio más importante del tramo inicial del siglo XXI: así, en 2015, falló a favor de exigir a los proveedores de internet el cumplimiento de unas reglas de «neutralidad de la red» dirigidas a garantizar la igualdad de acceso a la más amplia diversidad de oferta posible en el ciberespacio.[28] También la EPA ha sido un actor clave en las disputas sobre política medioambiental de los últimos cincuenta años con hitos que han ido desde la prohibición del uso

de DDT hasta las garantías sobre la calidad del agua para consumo humano.[29] Estos últimos años se ha convertido también en una instancia crucial para la respuesta política de Estados Unidos al cambio climático, al catalogar el dióxido de carbono como contaminante y al proponer límites a las emisiones admisibles de las nuevas centrales eléctricas.[30] Por su parte, durante sus cinco primeros años de existencia, la CFPB ha propuesto una normativa para limitar el negocio de los créditos rápidos y para requerir a los asesores financieros que actúen en interés de los inversores, lo que eliminaría algunas de las prácticas de riesgo que desembocaron en la crisis de las hipotecas de 2008.[31]

Los organismos independientes no se limitan actualmente a tomar decisiones sobre unos pocos casos de gran impacto mediático: son también los responsables de la inmensa mayoría de las leyes, normas y regulaciones. En 2007, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos aprobó 138 leyes. Ese mismo año, los organismos federales estadounidenses ultimaron 2.926 normas.[32] Y no está nada claro que los electores dispongan de supervisión efectiva alguna sobre esas regulaciones que los vinculan.[33]

Estados Unidos no es una excepción. Multitud de organismos equivalentes a esas agencias independientes norteamericanas se han desarrollado en otros países. En Gran Bretaña, por ejemplo, llegó a haber más de novecientas «organizaciones no gubernamentales casi autónomas» (Quango, en la jerga política de ese país), órganos con funciones gubernamentales, que se financian con dinero de los contribuyentes, pero sobre los que estos ejercen muy poca (o nula) supervisión democrática.[34] Si bien algunas de esas Quango —como la Agencia del Medioambiente— realizan labores esenciales, el rápido incremento de su número y la amplitud de las funciones encomendadas eran un tema de creciente preocupación ciudadana.[35] En 2010, el Parlamento hizo caso de las críticas y prometió eliminar o fusionar aproximadamente un tercio de las Quango existentes.[36] Pero la mayoría sobrevivieron a esa purga y muchos de esos cambios resultaron ser meramente cosméticos: «Un análisis más detenido nos revela

que, si bien el Estado ha reducido el número de órganos públicos, estos se han desprendido de un número relativamente bajo de funciones y se han conformado más bien con [...] *redistribuírselas*».[37]

Pero quizá el «organismo independiente» más poderoso del mundo sea la Comisión Europea. En la mayoría de los países, el poder de la Administración pública está un poco limitado por la presencia de la figura de un jefe de Gobierno fuerte, por un lado, y por la energía de un poder legislativo que cuenta con el respaldo real de los ciudadanos de a pie, por el otro. En la Unión Europea, sin embargo, se fijan unas prioridades políticas amplias en unas cumbres de los jefes de Gobierno de los Estados miembros que se celebran con una frecuencia de solo unas pocas cada año. El Parlamento, por su parte, es elegido en una contienda electoral que registra paupérrimos índices de participación y en la que muchos votantes ven principalmente una oportunidad para protestar contra sus propios gobiernos nacionales impopulares (algo que se debe, en parte, a que los poderes de ese Parlamento Europeo están muy limitados). Debido a ello, la Comisión Europea, una organización de funcionarios de carrera, ha sido el motor histórico de la mayoría de las actividades de la Unión Europea: es la Comisión la que impulsa, redacta e implementa buena parte de la legislación comunitaria.[38]

No nos equivoquemos: son varios y muy valiosos los logros atribuibles a los organismos independientes. En general, soy de la opinión de que las decisiones de la FCC y la SEC, o de la EPA y la CFPB, han hecho de Estados Unidos un lugar mejor. Lo mismo puede decirse de la Comisión Europea y de varias Quango británicas. Pero eso no evita que semejante capacidad aumentada para solucionar problemas complejos de regulación política se cobre un precio en forma de mengua del respeto por la voluntad popular. Aunque las agencias independientes llevan a cabo tareas cruciales que otras instituciones no pueden realizar con facilidad, es innegable que secuestran decisiones importantes al debate político.

Bancos centrales

En la Alemania en la que yo crecí, en los años ochenta y noventa, seis décadas después de que la hiperinflación hubiera devorado el valor del papel moneda y la estabilidad de la República de Weimar, mis maestros nos contaban historias de aquellos tiempos como si hubieran ocurrido apenas unos meses antes de que yo naciera.

—Mi padre tenía unos ahorros —recuerdo que la señora Limens, mi maestra de tercero, nos explicó una vez—, solo quería tenerlos guardados en el banco. Pero todos le decían que tenía que buscar la manera de gastarse ese dinero. No dejaba de perder valor. Tenía que actuar lo antes posible. Así que, tras pensárselo mucho, decidió comprar algo que la gente siempre iba a querer: azúcar. Así, pensaba él, podría vender el azúcar poco a poco y, con eso, comprarnos pan y ropa hasta que todo aquel caos terminara de una vez.

—¿Y funcionó? —le preguntó uno de mis compañeros de clase—. ¿Pudieron comprar todo lo que necesitaban?

—Bueno —dijo ella, con tono grave—, tomó prestado el carro de bueyes del vecino y fue a comprar el azúcar. Era mucho azúcar y llenó el carro a rebosar. Una enorme montaña blanca. Pero le llevó más tiempo del previsto transportar ese azúcar hasta nuestro granero. Y justo cuando estaba empezando a descargar el azú...

—¡Oh, oh! —exclamó mi compañero.

—Justo cuando estaba empezando a descargar el azúcar, se puso a llover. A cántaros. En apenas unos instantes, todo aquel montón blanco, todos aquellos benditos ahorros, fueron arrastrados por el agua.

—¡Hala! —volvió a exclamar mi compañero.

—Sí, ¡hala! —le confirmó mi maestra.

De un modo u otro, de forma implícita o explícita, esos relatos siempre seguían un curso evidente que iba del peligro a la redención. Los problemas, según la señora Limens explicó a nuestro grupo de confusos niños y niñas de nueve años, habían comenzado porque «los políticos eran los que tomaban todas las decisiones sobre el dinero». Por eso mismo, al acabar la guerra, «hicimos que el Bundesbank fuese independiente. En la actualidad, ya no tendremos ese problema».

La verdadera historia de la inflación y la independencia del banco central es un poco más compleja de lo que *Frau* Limens quería hacernos creer. Con una enorme deuda heredada de la Primera Guerra Mundial y una serie de acreedores totalmente decididos a extraer todo lo que pudieran del país al que acababan de derrotar, el gobierno alemán estaba desesperado por hallar vías de adquisición de moneda extranjera. Y entre el conjunto de malas opciones que tenía ante sí, escogió una especialmente pésima: imprimir montañas de dinero.[39]

Pero las lecciones políticas que el país extrajo de la hiperinflación consiguiente fueron más o menos igual de contundentes que aquella que la señora Limens nos enseñó en tercero. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes culpaban del ascenso de Hitler al poder a la desestabilizadora experiencia que supuso la hiperinflación, y culpaban de la desestabilizadora experiencia de la hiperinflación a la interferencia política en la oferta monetaria. Y su conclusión era que, para evitar un retroceso hacia el caos o, incluso, hacia el fascismo, el nuevo Bundesbank tendría que ser lo más independiente posible. Esa independencia implicaba no solo la prohibición de que los políticos elegidos interfirieran en el día a día de dicha institución financiera o de que fueran ellos quienes tomaran las decisiones en vez de sus gobernadores, sino también que el Bundesbank adquiriera el derecho a determinar los objetivos de su propia política y decidiera por su cuenta si priorizar la reducción de la inflación o la del desempleo, una autonomía que contrastaba por entonces con la situación de otros bancos centrales del resto del mundo.[40]

El éxito económico de la posguerra en Alemania y la gran estabilidad del marco se convirtieron pronto en materia de orgullo nacional. Así que cuando las élites europeas decidieron embarcarse en el proceso de unión monetaria iniciado a lo largo de los años ochenta, una de las características en la que los dirigentes alemanes hicieron especial hincapié fue en que el Banco Central Europeo (BCE) tendría que diseñarse siguiendo el modelo del Bundesbank.

Y eso justamente fue lo que sucedió finalmente: «El BCE —según Daniel Gros— era el Bundesbank 2.0, solo que un poco más fuerte aún en cuanto a su independencia».[41] El objetivo de su diseño institucional, ha

escrito Christopher Alessi al respecto, era garantizar que fuera «gobernado por tecnócratas no electivos y no tuviera que rendir cuentas políticamente».[42]

La influencia del Bundesbank llega más lejos todavía. Por ejemplo, durante las décadas de los setenta y los ochenta, los economistas comenzaron a elaborar teorías y argumentos justificadores de la independencia de los bancos centrales en general tomando como referencia el modelo alemán. Dado que los políticos que se presentan periódicamente a unas elecciones tienen un fuerte incentivo para generar expansiones artificiales del ciclo económico a corto plazo —según teorizaron al respecto Robert Barro y Robert J. Gordon, dos destacados expertos mundiales en la materia—, unos bancos centrales dependientes de ellos tenderán a potenciar la inflación a la corta, sin hacer disminuir con ello el desempleo de forma sostenida a la larga.[43] Haciendo que los bancos centrales sean independientes se deja en manos de personas aisladas de tales incentivos a corto plazo toda decisión sobre los niveles de los tipos de interés, lo que mejora la evolución de la economía a largo plazo. De ahí que países de toda condición, desde Gran Bretaña hasta Japón, y desde Moldavia hasta Kenia, hayan dado desde entonces a las juntas directivas de sus bancos centrales un grado de independencia mucho mayor. En el transcurso de la década de los noventa, según han escrito Simone Polillo y Mauro Guillén, cincuenta y cuatro países en todo el mundo «han aprobado reformas legales conducentes a una mayor independencia [de sus bancos centrales]. Solo veinticuatro países que no contaban con un banco central netamente independiente en 1989 no introdujeron ningún cambio de legislación en ese sentido durante la década de 1990».[44]

Existe otro motivo por el que una mayor independencia de los bancos centrales en todo el mundo debe considerarse de especial importancia. Y es que no solo muchas instituciones que, cincuenta años atrás, estaban sometidas al control efectivo de los parlamentos elegidos están ahora gobernadas por tecnócratas no elegidos y libres de responsabilidad política, sino que también ha crecido durante ese mismo periodo la importancia de las decisiones tomadas por tales instituciones.

Durante la mayor parte de la historia de la democracia liberal, los bancos centrales solo dispusieron de un armamento limitado. El valor de la mayoría de las monedas estuvo ligado a las reservas de oro del país respectivo durante bastantes décadas del siglo XIX y comienzos del XX. En el sistema de Bretton Woods, que pasó a ser el dominante tras la Segunda Guerra Mundial, los tipos de cambio eran eminentemente fijos; en las relativamente raras ocasiones en que habían de ajustarse, la decisión solía ser tomada por políticos elegidos y no por funcionarios que no respondían ante el electorado. Según escriben Polillo y Guillén, durante ese periodo, «los ministros de Economía se convirtieron en los decisores claves, mientras que los bancos centrales [...] desempeñaron un papel relativamente limitado y callado en la elaboración de la política económica y financiera».[45]

Solo tras el colapso de Bretton Woods a comienzos de la década de 1970 empezaron los bancos centrales a disfrutar del margen de maniobra suficiente para fijar los tipos de interés con arreglo a sus propios objetivos en política económica y financiera. Y ahora, tras haber tenido confiada durante mucho tiempo la misión de mantener la estabilidad de un sistema decidido y diseñado por políticos elegidos por el pueblo, son las instituciones claves que deciden, por ejemplo, qué es más importante para un país: ¿minimizar la inflación o el desempleo?[46] Debido a ello, los tecnócratas toman ahora algunas de las decisiones económicas más importantes a las que se enfrentan países de todo el mundo.

Control judicial de constitucionalidad

Dos han sido las mayores innovaciones institucionales acaecidas en los doscientos cincuenta años transcurridos desde que los padres fundadores (de Estados Unidos) instituyeron una República que pretendía excluir al pueblo, como colectividad, de toda participación en el gobierno efectivo. El sufragio universal, que tanto costó conquistar, fue la segunda de ellas. Pero la mayor fue la consistente en confiar a nueve jueces no elegidos por el pueblo el poder de anular la voluntad de este siempre que se contradijera con la preservación de los derechos individuales.

Ese es un poder que se ha utilizado históricamente para no pocos fines extraordinariamente nobles. En tiempos en que una mayoría de estadounidenses se mostraban reacios a hacer extensivos los derechos que reivindicaban para sí a una minoría horriblemente maltratada, fue el Tribunal Supremo quien intervino en defensa de esta. El final de la segregación fue causado no por la voluntad del pueblo estadounidense, sino por una institución que disponía del poder constitucional para anularla. Cuando pensamos en el movimiento por los derechos civiles, tendemos a pensar en los valientes actos de ciudadanos y ciudadanas corrientes, desde Rosa Parks hasta James Hood. Y, sin embargo, la historia de ese movimiento se escribió también (y con igual importancia) en las páginas de las sentencias y decisiones judiciales liberales que se impusieron frente a la resistencia de las mayorías electorales del momento.[47]

Es indudable que muchos de los avances más importantes en los derechos de los ciudadanos de Estados Unidos han sido dictados desde el estrado de un tribunal. Tampoco cabe duda de que nueve jueces no elegidos por el pueblo poseen un amplísimo poder, como tampoco es irrazonable defender la tesis de que, a lo largo del siglo XX, su disposición a ejercer tal poder ha aumentado.[48]

Desde 1954, el Tribunal Supremo ha puesto fin a la segregación en las escuelas y las universidades.[49] Ha abolido y, luego, ha reintroducido la pena de muerte.[50] Ha legalizado el aborto.[51] Ha limitado la censura en televisión y radio.[52] Ha despenalizado la homosexualidad y ha instituido el matrimonio entre personas del mismo sexo.[53] Ha derogado normativas sobre la financiación de las campañas electorales y medidas sobre el control de armas de fuego.[54] Ha decidido si millones de personas tendrían seguro médico obligatorio o no,[55] y si millones de *dreamers* [*] iban a tener que vivir con el temor a ser deportados.[56]

Eso explica por qué la derecha estadounidense arremete desde hace tiempo contra los llamados «jueces activistas», mientras la izquierda de ese país, que fue mayoría en el alto tribunal durante buena parte de la era de la posguerra, ha argumentado históricamente que los magistrados no hacían más que cumplir con su trabajo. Y eso explica también por qué esas actitudes se están invirtiendo paulatinamente ahora que el tribunal está empezando a

bascular hacia la derecha.[57] Pero, si bien la cuestión de si el mandato del Supremo se ha ido expandiendo durante las pasadas décadas puede ser objeto de una fuerte controversia, los mejores estudios sobre el alto tribunal federal estadounidense sí dan a entender que su papel es hoy mucho más amplio del que se le atribuyó cuando se redactó la Constitución, y que es un órgano que continúa aislado de la voluntad del pueblo de manera muy importante.[58]

En la mayoría de los lugares del mundo, el auge de la figura del control judicial de constitucionalidad en el transcurso del pasado siglo ha sido más claro y evidente aún que en Estados Unidos. Según mi propia investigación sobre el tema, por ejemplo, solo ocho de los veintidós países que podían clasificarse como democracias en 1930 tenían prevista esa forma de control. En la actualidad, la prevén veintiuno de ellos.[59]

El ascenso global de la institución del control judicial de constitucionalidad es más llamativo si cabe cuando ampliamos la muestra para incluir en ella tanto a las nuevas democracias como a las autocracias. Según un estudio de Tom Ginsburg y Mila Versteeg, un 38% de países garantizaban el poder de control de constitucionalidad a un Tribunal Constitucional central en 1951; en 2011, esa proporción ascendía ya al 83%.[60]

Incluso en algunos de los países cuya Constitución no otorga explícitamente a los tribunales el poder del control de constitucionalidad, estos han comenzado a ejercer esa función en la práctica. El Reino Unido es la primera prueba palmaria de esa tesis. Gran Bretaña se enorgullece de tener desde hace tiempo un sistema de soberanía parlamentaria que da poderes plenipotenciarios a ambas cámaras. Durante siglos, el país se negó a confiar a sus jueces el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes.[61] Todo eso empezó a cambiar desde el momento en que el Reino Unido ingresó en la Unión Europea en 1973.[62] A partir de entonces, los tribunales británicos pudieron controlar leyes del Parlamento conforme al derecho comunitario.[63] Ese control de constitucionalidad se expandió más aún después de que Gran Bretaña incorporase a su legislación la Convención Europea de Derechos Humanos.[64] La atenuación de la doctrina de la soberanía parlamentaria se

completó, tanto de palabra como en la práctica, en 2005, cuando el más alto tribunal del país pasó a tener una denominación oficial que da fe de su nueva importancia. Los más altos magistrados judiciales del Estado formaban anteriormente parte de la Cámara de los Lores, pero, a partir de ese año, se reconstituyeron en forma de un órgano separado: el Tribunal Supremo del Reino Unido.[65]

Una historia similar puede contarse de otros países que antaño limitaban el poder del control judicial de constitucionalidad. En Canadá, la Carta de los Derechos y las Libertades de 1982 transformó la soberanía parlamentaria en una soberanía constitucional.[66] En Francia, los poderes del Consejo de Estado se han ido ampliando gradualmente y sus magistrados ya emiten actualmente unos diez mil dictámenes al año.[67] Incluso en los Países Bajos, donde el artículo 120 de la Constitución deja bien claro que ningún tribunal puede controlar la constitucionalidad de las leyes del Parlamento, la introducción de tratados internacionales de derechos humanos ha expandido de hecho los poderes de los jueces, pese a no haber sido elegidos por el pueblo.[68] A raíz de ello, la única de las ocho democracias del mundo que no permitían en 1930 que el poder judicial anulara las decisiones de los parlamentos y que seguía sin permitirlo hasta hace bien poco ha terminado introduciendo, a todos los efectos prácticos, una versión «blanda» de control judicial de constitucionalidad.

Algunos teóricos del derecho, como Jeremy Waldron, por ejemplo, han expuesto argumentos convincentes en contra del control judicial de constitucionalidad. Se supone que la influencia de los tribunales sirve de salvaguarda frente a la tiranía de la mayoría. Pero, según Waldron, no es ni mucho menos evidente que aquellos países que han rehuido históricamente la implantación de un sistema de control de ese tipo, como era el caso del Reino Unido, presenten un peor historial en materia de protección de los derechos individuales que otros que siempre han tenido un sistema de control judicial fuerte de la constitucionalidad, como Estados Unidos.[69] También se piensa que los tribunales son más aptos para abordar cuestiones legales o filosóficas complejas, como el aborto, difíciles de tratar para los ciudadanos corrientes y

sus representantes por su insuficiente preparación en ese terreno. Pero Waldron concluye que los debates parlamentarios sobre temas como el aborto se han desarrollado en la práctica a un muy alto nivel en países sin control judicial de constitucionalidad, y que los compromisos políticos resultantes han ayudado a establecer un amplio consenso social sobre cuestiones de fuerte carga moral del que todavía no gozan otros países dotados del sistema de control judicial de la constitucionalidad.[70]

Aunque los argumentos de Waldron son ciertamente poderosos, yo estoy más de acuerdo con toda una larga lista de eminentes teóricos, en la que se incluyen nombres que van desde Hans Kelsen hasta Ronald Dworkin, que han defendido la legitimidad del control judicial de constitucionalidad. En momentos de crisis, es más probable que unos magistrados aislados de la voluntad popular protejan mejor a minorías vulnerables y se resistan más decididamente a maniobras de acaparamiento de poder de líderes con aspiraciones de «hombres fuertes». El control judicial de constitucionalidad es una salvaguarda necesaria.[71]

Aun así, nuestro apoyo al control judicial de constitucionalidad no debería impedirnos ver su verdadera naturaleza: lo cierto es que sustrae de la disputa política muchos temas sobre los que la gente corriente tiene opiniones fuertes y hasta enfrentadas.[72] Es perfectamente razonable pensar que, por ejemplo, la protección de las minorías sexuales y religiosas frente a la discriminación es algo cuya importancia justifica anular la voluntad del pueblo. Pero si eso es así, la honestidad intelectual nos exige también que reconozcamos la naturaleza de esa institución con la que nos declaramos comprometidos: aunque a menudo se contradiga con la voluntad popular —podríamos decir entonces—, el control judicial de constitucionalidad está justificado porque protege los derechos individuales y el Estado de derecho.

Tratados y organizaciones internacionales

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países se han ido interrelacionando cada vez más en dimensiones diversas, que van desde el plano político al cultural, el militar y, por supuesto, el económico.

En 1960, solo una cuarta parte del PIB mundial estaba vinculado al comercio exterior. En el cambio de milenio, más de la mitad era generado por el comercio transfronterizo, y esa proporción no ha dejado de crecer desde entonces. El volumen de las inversiones extranjeras directas se ha incrementado más espectacularmente todavía: durante las dos últimas décadas del siglo XX, la inversión extranjera se triplicó y pasó de uno de cada diez dólares invertidos, a uno de cada tres.[73]

Es natural que este mayor grado de interconexión global haya producido un número mucho mayor de tratados y organizaciones internacionales. ¿Cómo pueden los Estados nación mantener un control pleno de su política económica cuando la mitad de la actividad económica de la humanidad fluye entre fronteras? ¿Y de qué sirve diseñar regulaciones medioambientales sin un procedimiento de coordinación internacional cuando las emisiones de carbono en un país pueden hacer aumentar las temperaturas en todo el planeta?

Estas son cuestiones que los detractores acérrimos del libre comercio, de los tratados entre Estados y de las organizaciones internacionales no se toman suficientemente en serio. Aunque a ellos les gusta describir ese auge de nuevas modalidades de «gobernanza internacional» como una conspiración de la élite de las grandes empresas y los tecnócratas, se trata en realidad de una respuesta muy gradual a unas tendencias subyacentes que no van a desaparecer solo porque no queramos verlas.

Pero, por muy válidas que sean las razones para el auge de los tratados y las organizaciones internacionales, no sería honesto insinuar que carecen de un impacto real sobre el carácter de la política interna de los países. Y es que, a medida que ha ido aumentando el ámbito de las decisiones políticas vedadas por tratados internacionales o delegadas en organismos internacionales, también se ha extendido el alcance de las áreas de decisión política detraídas del debate y la disputa políticas.

La finalidad de un acuerdo internacional es coordinar las acciones de diferentes países para fijar unas expectativas estables y para aumentar su capacidad conjunta de alcanzar un objetivo común. Así que la pérdida de

control nacional que implica el sometimiento a los acuerdos internacionales no es un fallo del sistema de tales acuerdos, sino su componente principal. Y lo es tanto en el caso de tratados que estipulan las emisiones de gases nocivos, como en el de aquellos tratados que instituyen organizaciones internacionales como el Banco Mundial o las Naciones Unidas.

Los tratados de libre comercio son un muy buen ejemplo de ello. Para incorporarse a ellos, un Estado debe renunciar a (parte de) su capacidad de tomar decisiones independientes sobre asuntos como los aranceles que se imponen a las importaciones: si pudiera reintroducir aranceles en cualquier momento, el acuerdo de libre comercio en cuestión ya no estaría cumpliendo con las expectativas de estabilidad que justifican buena parte de sus ventajas económicas.

El libre comercio brinda grandes ventajas a todos los países que lo practican. Pero, aun así, la inhabilitación para gravar con aranceles supone una importante restricción de la libertad de maniobra de los Estados partícipes. En el pasado, muchos países en vías de desarrollo lograban incubar industrias autóctonas de alto nivel protegiéndolas temporalmente de la competencia externa. Estados Unidos hizo eso mismo con el acero en el siglo XIX, igual que Japón y Taiwán lo hicieron con sus industrias automovilística y electrónica en el siglo XX.[74] En la actualidad, los países en desarrollo que se acogen a la normativa de la Organización Mundial del Comercio —o incluso a la de otros acuerdos comerciales regionales más restrictivos— tienen vedado en la práctica el recurso a esa misma estrategia industrial para desarrollar su economía.[75]

Tal pérdida de control se agrava por el hecho de que los tratados comerciales actuales van mucho más allá de una simple reducción o abolición de aranceles. La prohibición de proteger las industrias nacionales frente a adquisiciones o absorciones extranjeras hace mucho más difícil para los gobiernos ralentizar la pérdida de empleos causada por la globalización o amortiguar el efecto social de esas transformaciones. El intento de eliminación de barreras ocultas al comercio (como son aquellas que se imponen en forma de estándares regulatorios y técnicos diferenciados de los de los competidores) dificulta para muchos gobiernos la aprobación de nuevas protecciones medioambientales. Los acuerdos más ambiciosos, como

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA), incluyen también disposiciones relativas a los visados de trabajo de corta duración, lo que reduce el control que un país puede ejercer sobre la entrada de inmigrantes por sus fronteras.[76] Por último, la figura del «arbitraje de diferencias entre inversor y Estado» da a las sociedades empresariales poderes de muy largo alcance para exigir ante los tribunales internacionales compensaciones por aquellas regulaciones locales que puedan comportar una merma de sus ganancias.[77]

Donde más pronunciados son muchos de esos efectos es en la Unión Europea. Para crear un verdadero «mercado único», ha introducido limitaciones trascendentales en la autonomía de sus Estados miembros.[78] Por ejemplo, su capacidad para gravar distintos alcoholes con tasas diferenciadas está limitada por temor a que, por poner un ejemplo, Bélgica, que produce mucha cerveza, decida imponer un impuesto elevado sobre el vino, mientras Italia, que produce mucho vino, opte por gravar onerosamente la cerveza.[79] Es habitual que sea Bruselas quien fije estándares técnicos y medioambientales, en vez de las capitales nacionales, lo que dota a la Comisión Europea de poderes muy significativos.[80] Y, además, el libre movimiento de personas dota a los ciudadanos europeos de muy amplios derechos para acceder al territorio de otros Estados miembros,[81] pero limita la capacidad de los Estados miembros para decidir quién puede vivir en su territorio.[82]

Los tratados de libre comercio representan solo un pequeño subconjunto de los acuerdos y las organizaciones internacionales que actualmente estructuran el sistema internacional. En realidad, Estados Unidos tiene suscritos tantos de esos acuerdos que el Departamento de Estado se ve obligado a elaborar una «lista de tratados y otros acuerdos internacionales de Estados Unidos» como publicación separada que tiene una extensión nada menos que de 568 páginas.[83]

Igual que los convenios de libre comercio tienen unas ventajas económicas reales, hay otros tratados internacionales que ayudan a hacer que el mundo sea más seguro o que suponen una importantísima contribución a la

lucha contra problemas globales como el cambio climático. Aunque ni mucho menos dispongo yo (ni prácticamente ningún ciudadano) de un conocimiento detallado de la mayoría de esos tratados, no dudo de que se redactaron y se sellaron por un buen motivo, ni de que continúan cumpliendo una función importante.

Pero, a efectos del tema que aquí nos ocupa, eso no es lo relevante del caso. Puede que exista una justificación muy lógica para arrebatar tantas decisiones políticas al debate democrático. Pero aunque así sea, eso no varía el hecho de que el electorado ya no tiene voz y voto real en todas esas áreas políticas. Por decirlo de otro modo, el liberalismo no democrático puede tener sus ventajas, pero eso no justifica que no nos percatemos de su verdadera naturaleza.

CAPTACIÓN PARTICULARISTA DE LAS INSTITUCIONES ELEGIDAS POR EL PUEBLO

Uno de los motivos por los que nuestro sistema se ha vuelto menos democrático —es decir, por los que, según mi propia terminología, es hoy menos eficaz traduciendo la opinión popular en políticas públicas— es que muchos temas importantes han sido sustraídos al debate político durante las últimas décadas. Los legislativos, según esa versión de lo acontecido, están ahora maniatados para llevar a la práctica la voluntad del pueblo debido al poder en aumento de los burócratas, al amplio papel que desempeñan los bancos centrales, al auge del control judicial de constitucionalidad, y a la mayor importancia de los tratados y las organizaciones internacionales. Pero queda aún otra gran pieza del puzle «antidemocrático» por presentar: y es que, incluso en ámbitos en los que los parlamentos retienen un poder real, estos no traducen bien las opiniones del pueblo en las políticas públicas preferidas por este. Aun habiendo sido elegidos por el electorado para representar el punto de vista de este, los legisladores se han ido aislando cada vez más de la voluntad popular.

Tal como Martin Gilens y Benjamin Page explican en un artículo reciente, cuatro han sido las grandes teorías que se han postulado a lo largo de los años para dar respuesta a una pregunta tan simple como fundamental:

«¿Quién manda?».[84] Según una de esas teorías, las opiniones de la gente corriente son el factor determinante. Según otra, los verdaderamente decisivos son los puntos de vista de la élite económica. Una tercera teoría atribuye la verdadera capacidad de decisión a los grupos de interés de grandes colectivos sociales, como la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP). Por último, la cuarta de esas teorías prevé que son grupos de intereses mucho más limitados y concentrados, como el Consejo Nacional de la Patata, los que se llevan el gato al agua. Pues bien, Gilens y Page ponen a prueba esas teorías recopilando las preferencias de cada uno de esos grupos en 1.779 temas de decisión política durante un periodo de dos décadas y comparándolas con las medidas que el Congreso terminó aprobando realmente.

Los resultados llaman mucho la atención. Las élites económicas y los grupos de intereses concentrados fueron muy influyentes. Los grupos de intereses más masivos tuvieron escaso efecto en las políticas públicas finalmente aprobadas. Y las opiniones de los ciudadanos de a pie apenas si tuvieron repercusión independiente alguna. «Cuando controlamos factores como las preferencias de las élites económicas y la postura de los grupos de interés organizados, las preferencias del americano medio parecen no tener más que un impacto minúsculo, casi nulo y estadísticamente no significativo, sobre las políticas públicas realmente impulsadas.»[85] La conclusión parece inevitable. «En Estados Unidos —sentencian Gilens y Page— *no* manda la mayoría.»[86]

Para entender mejor por qué la gente corriente parece tener tan escasa influencia en el poder legislativo, incluso en aquellos ámbitos en los que los parlamentos aún deciden de verdad, debemos conocer antes algunas de las fuentes de ese desposeimiento de poder. ¿Qué puede explicar que las opiniones de los ciudadanos de a pie tengan ahora una influencia «casi nula» en cómo actúan los representantes por ellos elegidos?

Dinero

En plena campaña para su reelección, Rupert Allason, un diputado conservador del Parlamento británico, fue a un *pub* de su circunscripción, en Torbay. Aunque Allason tenía fama de vividor desmedido, estar encaprichado con los Porsches y ser poseedor de una fortuna personal que se calculaba en varios millones de libras, se olvidó de dar propina a la camarera. Ella se enfureció hasta tal punto, según las informaciones posteriores de la prensa local, que decidió cambiar su voto y apoyar al Partido Liberal Demócrata en vez de a los conservadores, y convenció a sus compañeros y compañeras de trabajo para que hicieran lo mismo.[87]

Las expectativas de Allason en relación con la jornada electoral eran buenas. Cinco años antes, había derrotado a su oponente por un cómodo margen de 5.787 votos. Pero, cuando empezaron a conocerse los primeros resultados, se vio que aquella iba a ser una contienda muy apretada. Al final, y tras tres recuentos, Adrian Sanders, principal rival de Allason, se impuso por doce votos: una de las victorias más ajustadas de la historia de las elecciones parlamentarias británicas.

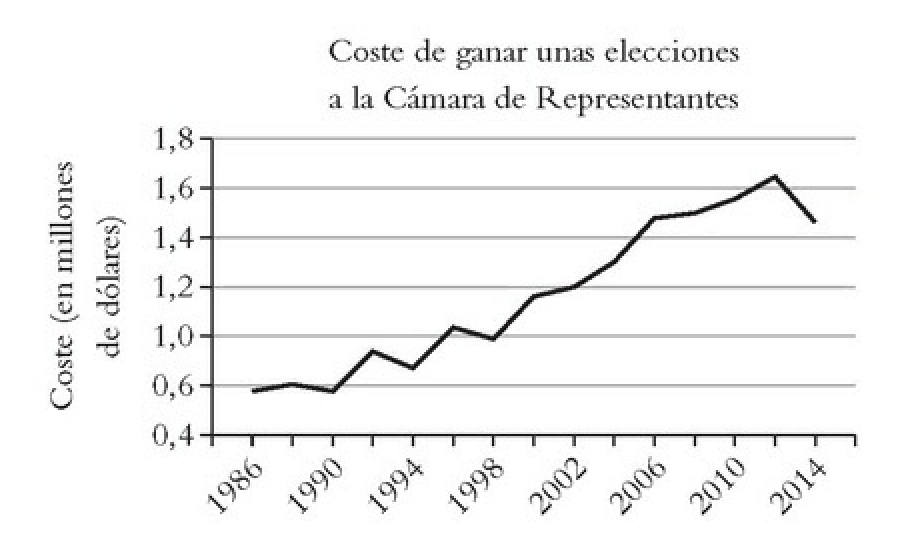
Si hemos de creer las noticias que se publicaron en la prensa local, la anécdota de la propina olvidada fue la que marcó la diferencia. Y si hemos de creer también lo que se dice en un estudio reciente de Andrew C. Eggers y Jens Hainmueller, la tacañería de Allason no solo le costó su escaño en el Parlamento, sino que posiblemente también terminó reduciendo sus perspectivas de ingresos a largo plazo.[88]

Hace cosa de unos diez años, Eggers y Hainmueller comenzaron a estudiar si los políticos salían ganando o no en sus economías personales por el hecho de ser elegidos diputados en el Parlamento. De inicio, chocaron con un problema evidente: toda clase de factores —el encanto personal, las aptitudes, la riqueza previa, etc.— pueden determinar tanto si los candidatos salen ganando con la experiencia como si tienen probabilidades reales de ser designados para puestos lucrativos cuando ya dejan de ser parlamentarios. Para controlar esos factores que podrían inducir a confusión, Eggers y Hainmueller se concentraron en aquellos casos «pseudoaleatorios» en los que las elecciones estuvieron tan reñidas que el hecho de que las ganara un candidato u otro pareció obedecer a un mero factor de suerte. Los datos que obtuvieron a partir de ahí fueron ciertamente sorprendentes: «Los diputados

conservadores —concluyeron— son casi el doble de ricos al morir que otros conservadores similares que se presentaron a las elecciones y no salieron elegidos».[89]

Buena parte del motivo de esa inquietante conclusión parece estribar en que los candidatos que habían ganado las elecciones por escaso margen tenían el triple de probabilidades de incorporarse a consejos de administración de empresas que cotizan en la Bolsa de Londres que aquellos que habían perdido por muy poco los comicios. La conclusión general parecía ser bastante lógica: «Acceder a ese cargo resultaba lucrativo para los políticos conservadores porque les facilitaba unas conexiones y unos conocimientos políticos que luego podían aprovechar para su beneficio económico personal».[90]

Cuando pensamos en el efecto corrosivo del dinero en el sistema político, es fácil que nos centremos en los casos más claros y extremos.



Nos imaginamos a unos hombres con maletines llenos de dinero o, quizá, con algún sobre marrón intercambiado de manera furtiva en alguna plaza pública muy concurrida. En muchas democracias incipientes de todo el mundo, esta clase de sobornos directos son ciertamente un grave problema.

En países como la India o Irak, los pagos en efectivo son requisitos imprescindibles para toda clase de permisos administrativos: desde carnets de conducir hasta permisos de obras.

Incluso en democracias consolidadas como Alemania o Estados Unidos, existen casos de intercambio explícito de sumas de dinero pactadas a cambio de un favor político particular: es lo que los juristas llaman allí corrupción *quid pro quo*. Eso es lo que el gobernador de Illinois Rod Blagojevich tal vez trataba de obtener allá por 2009, cuando la victoria de Barack Obama le permitió decidir quién ocuparía el escaño que el presidente electo dejaba vacante en el Senado federal: algo «valioso de cojones», según lo describió Blagojevich en una conversación telefónica pinchada por la policía. «Tengo una cosa que es una bicoca —añadía en otra llamada—. Y no la voy a regalar a cambio de una mierda.»[91]

Blagojevich acabó entrando en prisión por sus chanchullos. Y no ha sido el único a quien le ha pasado algo así. En la docena de años trascurrida entre 1990 y 2002, unas diez mil autoridades públicas estadounidenses fueron condenadas por prácticas corruptas, desde las más flagrantes hasta las más absurdas.[92]

Aun así, en las democracias consolidadas, la influencia del dinero tiende a ser más sutil.



En vez de extraer rentas del sistema político a través de mordidas explícitas, los particulares y las empresas tratan principalmente de inclinar las decisiones políticas a su favor ofreciendo a los potenciales elegidos donativos de campaña, recurriendo a la presión política del cabildeo *(lobbying)*, o alimentando en ellos expectativas de obtener puestos o cargos lucrativos en el futuro.

Las aportaciones de campaña son un problema especialmente extendido en países que, como Estados Unidos, aplican unos límites sumamente laxos en materia de gastos electorales. De resultas de ello, el gasto total en las elecciones estadounidenses no ha dejado de crecer en estas últimas décadas y se sitúa ahora en niveles sin precedentes. En 2012, por ejemplo, «el gasto declarado en campañas electorales federales [...] alcanzó cerca de los 6.300 millones de dólares» o, lo que es lo mismo, más del doble del PIB anual total de un país africano como Burundi.[93]

Hay políticos que están perfectamente conformes con este sistema: manteniendo relaciones amistosas con los grandes donantes, les resulta fácil obtener una gran ventaja económica sobre los otros aspirantes; si intentaran cambiar las reglas de la financiación de las campañas y fracasaran en el intento, podrían concitar las iras del colectivo de los donantes; y en cualquier caso, si, por lo que fuera, consiguieran cambiar esa normativa, se adentrarían en un mundo nuevo e incierto. Mejor dejar las cosas como están...

Pero son también muchos los políticos que se sienten atrapados en un sistema que les resulta imposible cambiar. Aun así, ha habido algunos (raros) momentos en los que la voluntad política de reformar el sistema ha llegado a fraguar en iniciativas reales. En 2002, por ejemplo, dos pesos pesados del Senado preocupados por la influencia eternamente creciente del dinero en la política colaboraron en una iniciativa bipartidista para cambiar la manera de competir en las contiendas electorales. John McCain y Russ Feingold impulsaron al alimón un proyecto de ley para limitar la influencia perniciosa del «dinero blando», es decir, de aquellos fondos donados a los partidos para apoyar «temas» de campaña, más que candidatos concretos. Y, ante la sorpresa generalizada, salió adelante. Por vez primera en décadas, pareció que la influencia del dinero en la política no iría al alza, como había sido hasta entonces.[94]

Aquella ley, conocida generalmente como McCain-Feingold, se mantuvo en vigor unos siete años. Luego, un grupo de presión conservador llamado Citizens United la impugnó en los tribunales. Había realizado un documental sobre —o, más bien, algo así como un publirreportaje contra— Hillary Clinton. Según la normativa ya vigente por entonces, estaba prohibido pagar la emisión de ese documental durante los treinta días previos a la celebración de unas primarias o durante los sesenta anteriores a unas elecciones generales. Pero eso, se quejaba esa organización, vulneraba su libertad de expresión según la garantizaba la primera enmienda.

Tras considerar que las empresas —igual que otras asociaciones, como los grupos de interés o los sindicatos— gozan de muchos de los mismos derechos que las personas físicas, una mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo coincidió con quienes habían recurrido la normativa. La Ley McCain-Feingold, escribió el juez Kennedy, redactor de la sentencia, vulneraba los derechos de libertad de expresión de Citizens United. A partir de entonces, las empresas y los grupos de acción política volvían a estar autorizados a gastar todo el dinero que quisieran en apoyar a un candidato o en atacar a otro. Así, aun cuando siguen vigentes ciertos límites para las contribuciones directas a la financiación de las campañas de los candidatos, aquella sentencia del alto tribunal básicamente abrió las puertas a la acción de los intereses privados.[95]

Cientos de libros y artículos se han escrito ya sobre el caso de Citizens United y el efecto corrosivo que está teniendo (o no) sobre la democracia estadounidense. Pero uno de los aspectos importantes de aquella sentencia que ha pasado más inadvertido es que las diferentes formas de liberalismo no democrático se están reforzando así unas a otras: gracias a la ampliación del papel otorgado al control judicial de constitucionalidad, que arrebata decisiones importantes al proceso político, un grupo de jueces no elegidos por el pueblo pudo derogar una ley aprobada por los representantes directos de ese pueblo. A su vez, el efecto de esa decisión judicial ha hecho que resulte más difícil que los legisladores reflejen las opiniones del pueblo incluso en aquellas partes del proceso político en las que el legislativo conserva aún un poder real.[96]

En muchos sentidos, la evolución de la presión política de los *lobbies* ha sido más espectacular incluso que el crecimiento de las contribuciones a la financiación de las campañas electorales.

A los padres fundadores, según argumenta Zephyr Teachout en *Corruption in America*, les preocupaba en grado sumo la multitud incontable de formas en que los intereses particulares podrían tratar de influir en las decisiones políticas. En un tiempo en que los países europeos permitían a sus embajadores quedarse los extravagantes regalos que recibían de los monarcas ante los que estaban acreditados, pues se consideraban una señal de respeto, el Congreso estadounidense se vio sacudido por la noticia de que Benjamin Franklin hubiera sido obsequiado con una magnífica cajita de rapé de parte de Luis XVI de Francia. Seguramente, era comprensible que los padres fundadores vieran con cierta suspicacia un regalo que llevaba incrustados cuatrocientos ocho diamantes y en el que se representaba la imagen de un soberano extranjero «con la peluca empolvada, las mejillas sonrosadas, el cuello de encaje blanco, dos cadenas de oro sobre los hombros y una túnica azul con flores de lis de oro bordadas».[97] Pero, como bien señala Teachout, la preocupación de aquellos primeros congresistas se hacía extensiva incluso a formas de actividad política que podrían parecer inofensivas a ojos de un observador actual.

Un ejemplo especialmente llamativo es el de un hombre anciano y enfermo a quien el gobierno federal debía un dinero. Incapaz de recobrarlo por sí mismo, contrató a un abogado para que lo representara. Cuando el hijo del anciano se negó posteriormente a pagar al abogado los honorarios acordados, el tribunal ante quien el abogado llevó su queja se negó a obligar a aquel a pagar lo que debía a este. Aunque cuesta ver naturaleza ilícita alguna en la finalidad original de la contratación, a los magistrados les preocupaba la base legal para la actividad de los *lobbies* que se abriría si obligaban al hijo a pagar al abogado del padre:

> Si cualquiera de las grandes compañías del país contratara a aventureros para abrirse un mercado de ese modo, para procurar la aprobación de una ley general con la intención de favorecer sus intereses privados, el sentido moral de todo hombre de juicio correcto lo induciría a denunciar al contratante y al contratado como culpables de corrupción.[98]

Por extremo que este caso pueda parecer, según explica Teachout, no era nada excepcional. Durante buena parte de la historia de Estados Unidos, el gobierno federal prohibió muchas formas de presión política de los grupos de interés. La Constitución del estado de Georgia se reformó en una ocasión para que constara en ella que «el cabildeo se considera un delito».[99] En California, era un delito grave.[100]

A lo largo del siglo XX, la actividad de los grupos y los profesionales de la presión política fue perdiendo su halo de asunto ilícito. Pero incluso después de que se normalizara, las empresas siguieron siendo más reacias a ejercer influencia —y el terreno de juego de la competición política continuó siendo mucho más igualitario— que ahora.

En fecha tan reciente como la década de 1960, según muestra Lee Drutman en *The Business of America Is Lobbying*, los sindicatos eran aún mucho más poderosos que hoy, y los grupos de interés público disponían de mucha mayor voz con la que reivindicar sus demandas. Las grandes empresas no ejercían una presión política directa en nombre de sí mismas. «Como todo ejecutivo de empresa sabe —escribió el futuro juez del Tribunal Supremo Lewis F. Powell Jr. en aquel entonces—, pocos elementos de la sociedad estadounidense actual tienen tan escasa influencia en el gobierno como el empresario americano, las corporaciones empresariales o incluso los millones de accionistas de estas. Si alguien lo duda, basta con que se encargue un tiempo de intentar ejercer la función de *lobby* de la opinión de las empresas ante las comisiones del Congreso.»[101]

Todo esto comenzó a cambiar muy rápidamente a comienzos de los años setenta. Decididos a combatir los altos costes del aumento de los salarios y de los requisitos de la nueva legislación, un grupo de destacados consejeros delegados de grandes empresas se asociaron para ampliar su influencia en el Capitolio. Al principio, sus actividades eran mayormente defensivas: su objetivo era frenar aquella legislación que pudiera perjudicar sus intereses. Pero a medida que la influencia política de las grandes compañías empresariales se fue expandiendo y que sus beneficios se dispararon, una nueva clase de cabilderos profesionales logró convencer a las empresas de que su actividad «no consistía solamente en mantener al Estado apartado de sus asuntos, sino también en tenerlo bien cerca cuando hiciera falta».[102]

Actualmente, los intentos de influir en la legislación son un elemento central de la actividad de los *lobbies*. Cuando Drutman preguntó a diversos lobistas cuáles eran sus objetivos, descubrió que «la razón principal de su actividad era "proteger a la compañía de posibles cambios en la política del gobierno"». Pero había también otra motivación casi igual de importante: la «necesidad de mejorar la capacidad de competir procurando cambios favorables en la política del gobierno».[103]

No es de extrañar, pues, que los gastos en actividades de presión política en Estados Unidos hayan seguido incrementándose a un gran ritmo. En los primeros quince años del siglo XXI, por ejemplo, se han duplicado, al pasar de poco menos de 1.600 millones de dólares a algo más de 3.200 millones.[104]



Gastos en cabildeo *(lobbying)* en Estados Unidos, 1998-2016

La consecuencia de ello ha sido no solo un aluvión de dinero adicional en el sistema, sino también una distorsión del terreno de juego político. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, las grandes corporaciones disfrutan ahora de una enorme ventaja. «Por cada dólar que los sindicatos y los grupos de interés público gastan en actividades de presión política —escribe Drutman—, las grandes corporaciones empresariales y sus asociaciones

gastan actualmente treinta y cuatro. De las cien organizaciones que más gastan en cabildeo, noventa y cinco representan permanentemente a empresas.»[105]

Y la explosión del sector de los *lobbies* ha sido más considerable aún en Europa. En la década de 1970, por ejemplo, había menos de mil cabilderos registrados en Bruselas. Hoy en día, son más de treinta mil los que tienen encomendadas labores de presión para influir en las políticas de la Unión Europea.[106]

Cuando le preguntaron a Hillary Clinton por qué había asistido a la boda de Donald Trump en 2005, ella dio una respuesta no muy convincente: «Pensé que sería divertido», dijo.[107]

Donald Trump adujo una motivación mucho más contundente para invitar a los Clinton a su enlace: «Como contribuidor de fondos a su campaña que era, yo exigí que estuvieran allí. No tuvieron más opción, y eso es lo que falla en nuestro país. Nuestro país está dirigido por, y para, los donantes, los grupos de intereses especiales y los lobistas, y esa no es una buena receta de éxito para Estados Unidos».[108]

La increíble negativa de Trump a revelar sus finanzas, o a adoptar medidas reales para limitar sus múltiples conflictos de intereses, pone de manifiesto lo que debería haber sido obvio ya desde el primer momento: que sus quejas sobre el cabildeo no eran sinceras. Aun así, su descripción de la realidad de fondo del sistema político estadounidense no está exenta de verdad. Si bien es exagerado decir que el país está dirigido «por, y para, los donantes, los grupos de intereses especiales y los lobistas», no cabe duda de que la dirección del país requiere en buena medida de la complacencia de esos colectivos.

El hecho de que las personas puedan conseguir «influencia sobre, o acceso a, cargos electos» a través de donaciones o de la acción de los grupos de presión, según escribió el juez Kennedy en su sentencia sobre Citizens United, «no significa que estas autoridades sean corruptas».[109] Sí, tiene razón. No se considera soborno que los lobistas redacten directamente partes de la legislación del país en nombre de los representantes popularmente

elegidos, ni que las compañías a las que representan envíen a esos mismos representantes generosos donativos de campaña unas pocas semanas después. Tampoco se considera constitutivo de soborno que unos diputados británicos defiendan los intereses de grandes empresas públicas cuando están en el cargo, y que luego pasen a ocupar un puesto en los consejos de administración de estas cuando se retiran del Parlamento. Si su supervivencia política misma depende de seguir el juego de esas prácticas, puede que ni siquiera tenga sentido culpar a los políticos de hacer aquello que el sistema les exige. Pero, aun así, sumadas, todas esas prácticas aceptadas pueden formar lo que Lawrence Lessig ha llamado una «corrupción por dependencia»:[110] un sistema que «surge como consecuencia de una economía de dádivas basada en la donación y la recepción de favores políticos [y que] funciona en el nivel de la institución misma».[111]

Dicho de otra forma, Kennedy tiene razón al señalar que debe hacerse una importante distinción legal —y puede que hasta moral— entre la corrupción por dependencia y los casos de soborno propiamente dicho. Pero, desde el punto de vista del liberalismo no democrático, ambas prácticas tienen un efecto muy similar. Se trata de un desembolso de dinero privado que beneficia a los poderosos y reorienta las políticas públicas. Así, la labor de los legisladores, presuntamente consistente en traducir las opiniones populares en políticas públicas, queda tristemente secuestrada en muy buena medida por intereses particularistas.

Entorno social

Las personas que nos rodean día tras día contribuyen a conformar nuestros gustos, nuestros valores y lo que damos por supuesto. Así que una de las maneras más insidiosas en las que el ejercicio de la presión política y la financiación de las campañas electorales distorsionan el sistema político es, sencillamente, incidiendo en la visión del mundo de los políticos, que tienen que dedicar buena parte de su tiempo a interactuar con donantes y lobistas. En muchos casos, ya ni siquiera tienen que traicionar sus ideales cuando llega el momento de votar un proyecto de ley que interesa a sus donantes

principales: como pasan una parte tan grande de su vida rodeados de representantes de grupos de intereses particulares, es muy probable que haga tiempo que compartan muchos de sus mismos puntos de vista.[112]

Aunque nadie ha estudiado sistemáticamente aún la magnitud de ese efecto, es razonable suponer que resulta ciertamente considerable. A fin de cuentas, la cantidad de tiempo que los políticos están obligados a pasar hoy en día en actos de recaudación de fondos de campaña es ya de por sí muy elevada. Entre 1986 y 2012, el coste medio de una candidatura a senador federal se incrementó en un 62%; el coste medio de competir por un escaño en la Cámara de Representantes aumentó en nada menos que un 344%. Así que es lógico que, según parece deducirse de la casuística observable, los congresistas dediquen ahora hasta la mitad de sus horas de trabajo a actividades de recaudación de fondos de campaña.[113]

La transformación ha sido igualmente radical en los más altos niveles. Jimmy Carter y Ronald Reagan acudieron a actos de recaudación de fondos una vez cada veinte días, aproximadamente, durante sus primeros mandatos como presidentes. Dicen que Barack Obama, a diferencia de Reagan, detestaba esos actos. Y, sin embargo, cautivo de las exigencias de la época política que le tocó vivir, organizó actos de recaudación de fondos para su reelección como presidente a un ritmo aproximado de una vez cada cinco días.[114]

El imperativo de recaudar dinero es uno de los motivos por los que los políticos pasan mucho de su tiempo en un grupo de iguales que difiere bastante de las personas a quienes se supone que representan. Pero eso solo es la punta del iceberg. La verdad es que la mayoría de los legisladores acceden al cargo habiéndose socializado ya, mucho antes, entre una élite cultural, educativa y económica que los sitúa en un entorno aparte del de los estadounidenses corrientes.

En el conjunto de la población de Estados Unidos, menos de una de cada doscientas personas tiene un título universitario en derecho. En la Cámara de Representantes, esa proporción es de más de una de cada tres. En el Senado, es de más de la mitad. Las estadísticas de los niveles de riqueza son igual de

llamativas. El valor mediano de la distribución de patrimonio neto individual de los adultos estadounidenses se situaba hace poco en casi 45.000 dólares.[115] Sin embargo, el patrimonio neto individual mediano del conjunto de los congresistas multiplica esa cifra por más de diez, y el de los senadores por separado es más elevado aún.[116]

Bien está reconocer que los padres fundadores siempre pensaron que los legisladores debían formar una especie de élite. Y el hecho de que los estadounidenses elijan a miembros altamente preparados de su comunidad —o a personas a quienes les va muy bien en lo económico— para que los representen no tiene por qué ser un problema en sí. Pero lo que sin duda sí es problemático es que, con arreglo a casi todos los indicadores —desde los geográficos hasta los relacionados con la experiencia vital—, esa élite esté ahora totalmente desconectada del resto de la población.

Hace algunas generaciones, la mayoría de los congresistas tenían hondas raíces en algún lugar concreto del país. Podían ser todos personalidades locales, pero eran personalidades muy conscientes de su lugar de origen. Muchos demócratas llegaban a puestos de preeminencia política ascendiendo a través de los sindicatos o los sistemas educativos locales. Los republicanos tenían más posibilidades de ser empresarios o miembros destacados de la comunidad. Habiendo nacido, habiéndose criado y, en no pocos casos, habiendo estudiado en su estado natal, la mayoría de ellos tenía expectativas de regresar a él cuando dejaran el Congreso.

Hoy, por el contrario, esa conexión de los congresistas con su distrito electoral es, por término medio, y conforme a los limitados estudios que se han hecho de esa cuestión, sensiblemente más tenue. Parece que son menos los nacidos y criados en la parte del país que representan en el legislativo federal. E incluso en el caso de quienes sí son originarios de su distrito electoral, este ya no es tan central en sus vidas como lo era en la de sus antecesores de décadas atrás. Habiendo estudiado muchos de ellos en universidades de élite de las regiones costeras del país, suelen iniciar ya su vida laboral y profesional en los grandes centros metropolitanos de la nación. Tras periodos de trabajo en el mundo empresarial, financiero, jurídico-legal o en el mismísimo Capitolio, es a menudo la ambición política la que los lleva de vuelta a sus distritos de origen. Y aunque muchos de ellos conservan

cierto arraigo domiciliario en esas circunscripciones a las que regresar tras retirarse del Congreso, pocos convierten esa residencia en el verdadero centro de su vida: los congresistas que dejan hoy el cargo tienden más que sus predecesores a aprovechar oportunidades de seguir ganando dinero en los grandes centros metropolitanos.[117]

A muchos europeos les gusta pensar que sus países están mejor según todos estos parámetros que Estados Unidos. La democracia estadounidense lleva mucho tiempo atrapada por cierta mentalidad hipercapitalista y por las grandes corporaciones empresariales que tal mentalidad refuerza, pero la situación es mucho más positiva en el Viejo Continente, se dicen a sí mismos.

Algo de verdad hay en esa idea. En la mayoría de los países europeos, rigen límites más estrictos para las contribuciones económicas a las campañas electorales.[118] La acción de los *lobbies* se ha disparado, pero los gastos políticos se mantienen dentro de unos niveles mucho más bajos.[119] Y, lo que es más importante, las sociedades europeas siguen siendo bastante más igualitarias, lo que explica en parte que la brecha económica entre legisladores y ciudadanos de a pie sea menos abismal.

Pese a ello, el distanciamiento entre electores y parlamentarios es un fenómeno muy real también en Europa. Las restricciones sobre la financiación de las campañas son muy ciertas, pero, por ejemplo, la ventaja que tales límites otorgan a los aspirantes que están dispuestos a ser amables con ciertos intereses particulares puede ser igual de grande, y hasta más difícil de rastrear.

Para empezar, la dificultad de recaudar dinero por vía legal también convierte la recaudación ilegal de fondos para las campañas en una opción mucho más tentadora para los políticos. Helmut Kohl, quien fuera muchos años canciller de Alemania, es quizá el ejemplo más famoso: cuando era el líder de los democristianos, el partido desarrolló un sistema muy extenso de donaciones secretas de campaña que muy posiblemente decantó el signo de varias políticas del gobierno en temas tan importantes como la exportación de

armamento.[120] Las donaciones ilegales de campaña son un problema mayor aún en Francia, donde a decenas de políticos de primera fila se les han imputado prácticas de corrupción en las últimas décadas.[121*]

Por otro lado, la relativa dificultad a la hora de recaudar fondos complica sobremanera que los políticos controlen el mensaje que hacen llegar de sí mismos a la población. De hecho, hace que aumente la importancia relativa de la cobertura y el trato que se les dispensa en los grandes medios de comunicación. En países en los que, como es el caso en Italia o Gran Bretaña, hay un dueño que controla una amplia franja del paisaje mediático, esta situación convierte a esos empresarios en verdaderos poderes de primer orden en la sombra. No es casualidad, por ejemplo, que el candidato apoyado por *The Sun*, el diario más leído de Gran Bretaña, haya salido vencedor en diez de las últimas diez elecciones generales allí celebradas.[122] Como tampoco es de extrañar que Silvio Berlusconi, propietario de la mayor cadena privada de televisión en Italia, pudiera dominar la política de su país durante dos décadas a pesar de la pésima actuación de sus gobiernos.

Los europeos tienen también buenos motivos para preocuparse por el grado en que su élite política se ha convertido en una clase aparte. Ese es un fenómeno más fácil de señalar en países como Francia, donde es noticia que un político llegue a la cima *sin* haber estudiado en la muy selecta École National d’Administration. Pero lo cierto es que también ha ido aumentando la desconexión entre los parlamentarios de la mayoría de los demás países europeos y el grueso de sus respectivos electorados.

Apenas una generación atrás, la mayoría de los dirigentes de la izquierda en toda Europa tenían sólidas raíces en el movimiento sindical. Aunque no fueran obreros de origen, sí lo habían sido sus padres, y se habían criado en un entorno de clase obrera. Sus lazos eran así culturales y biográficos, amén de políticos.[123]

También la mayoría de los líderes de la derecha tenían fuertes vínculos con algún movimiento religioso o alguna comunidad agrícola. Aunque la vida parlamentaria los hubiera llevado a vivir en la gran ciudad, lo más probable era que se movieran en círculos sociales diferentes de los de sus adversarios y que se enorgullecieran de llevar un estilo de vida conservador.

A pesar de que, en aquella época, la política tenía un carácter marcadamente consensual y las políticas aplicadas por los socialdemócratas y por los democristianos se parecían en aspectos importantes, esa otra dimensión cultural ayudaba a estructurar la política en toda Europa: la brecha entre la masa del electorado y sus representantes nacionales era comparativamente pequeña. Al mismo tiempo, la separación entre los representantes nacionales de partidos políticos rivales era comparativamente grande. De ahí que hubiera muchos dirigentes que se sintieran más a gusto cenando con sus electores que con sus principales contrincantes políticos. Pero eso ya no es así en la actualidad.

Todo esto tiene una repercusión política real. Es normal que demos más peso a aquellos intereses legítimos que son más destacados para nosotros que a aquellos otros que a duras penas podemos imaginar. Y es muy fácil que estemos a favor de leyes con las que todos nuestros amigos están de acuerdo, antes que con otras, apoyadas por personas a quienes jamás hemos conocido. Si los legisladores son cada vez unos traductores menos eficaces de las opiniones de sus electores en políticas públicas concretas, buena parte del motivo radica en la gran división social y cultural existente entre las élites políticas y el grueso de ese electorado.

NO HAY VÍAS DE SALIDA FÁCILES

Hay casi tantas definiciones de democracia como pensadores políticos. Es, por decirlo en los términos empleados por un conocido filósofo, un concepto esencialmente controvertido que no admitirá una definición de consenso mientras sigamos discrepando en cuanto a qué es lo que tiene verdaderamente de valioso.[124] Pero para poner en tela de juicio que los Estados Unidos actuales sean plenamente democráticos no hace falta recurrir a un truco tan viejo como el de invocar la autoridad del diccionario.

Desde mi punto de vista, una democracia debe tener instituidos, como mínimo, una serie de mecanismos institucionales que traduzcan eficazmente la opinión popular en políticas públicas concretas. En Estados Unidos, esos

mecanismos están ahora seriamente socavados. El compromiso del país con los derechos liberales sigue teniendo un arraigo muy profundo. Pero la forma concreta que adopta ese liberalismo de fondo es cada vez menos democrática.

Estados Unidos no es el único país embarcado en esa tendencia hacia el liberalismo no democrático. Casi todas las democracias desarrolladas evidencian actualmente unos fuertes mecanismos tutelares. Muchos temas importantes han sido sustraídos al debate político en virtud de las disposiciones de los tratados comerciales y de la acción de los organismos administrativos independientes. Cuando la voluntad popular se aparta de los límites de lo aceptable, entran en juego toda una serie de instituciones tecnocráticas —desde el Tribunal Supremo estadounidense hasta el Banco Central Europeo— para restringirla. Incluso en ámbitos en los que el pueblo continúa siendo formalmente amo de su destino, los mecanismos de traducción de la opinión popular en políticas públicas sintonizan hasta tal punto con los intereses de las élites sociales o económicas que la influencia del pueblo sobre su propio gobierno queda notablemente restringida.

En todo Occidente, estas tres últimas décadas han estado marcadas por el creciente papel de los tribunales, los organismos administrativos, los bancos centrales y las instituciones supranacionales. Al mismo tiempo, se ha registrado un rápido crecimiento de la influencia de los grupos de presión, del dinero gastado en las campañas electorales, y de la brecha que separa a las élites políticas del pueblo al que supuestamente representan. En la práctica, y tomados en su conjunto, estos fenómenos han aislado el sistema político de la voluntad popular.

Steven Levitsky y Lucan Way sostienen que la «competencia desleal» es lo que define a los regímenes «autoritarios competitivos» en los que, como sucede por ejemplo en Hungría, las elecciones siguen teniendo una importancia real, pero el gobierno se ha asegurado competir en ellas con un terreno de juego inclinado a su favor.[125] Muchas presuntas democracias se parecen hoy más bien a oligarquías competitivas: en ellas, aunque los debates sobre las propuestas legislativas parecen conservar cierta relevancia, el sesgado procedimiento de decisión y elaboración de políticas confiere a las élites dirigentes una inmensa ventaja a la hora de promover sus propios intereses.

Los pocos estudiosos que han escrito sobre este fenómeno tienden a argumentar que sus raíces son tan simples como obvios son sus potenciales remedios.

Los orígenes del desempoderamiento del pueblo, afirman, radican en una apropiación indebida de poder por parte de las élites políticas y económicas. Las grandes empresas y los superricos abogaron por la instauración de unos bancos centrales independientes y de unos tratados comerciales favorables al gran capital para procurarse cuantiosas ganancias. Los políticos, los académicos y los periodistas son generalmente partidarios de un modo de gobierno tecnocrático porque este tiende a aislarlos mejor (a ellos y a sus decisiones) de la voluntad popular. Y todo ese egoísmo se recubre eficazmente con una capa de ideología neoliberal que muchos laboratorios de ideas y departamentos universitarios —financiados en buena medida por donantes ricos— se encargan de difundir.

A la vista de lo sencillamente siniestras que son las raíces de la situación actual, es fácil suponer una solución de similar sencillez: el pueblo tiene que recuperar su poder.

Los expertos aseguran que la independencia de los bancos centrales es buena para el crecimiento económico y que los tratados comerciales impulsan a la baja los precios del consumo. Recalcan lo necesarias que son las grandes agencias administrativas y las organizaciones internacionales dotadas de mucho poder, porque abordan temas supuestamente demasiado complejos como para que el ciudadano de a pie pueda comprenderlos. Pero en cuanto se hace público y notorio que esas instituciones son cómplices de una conspiración dirigida a desheredar al pueblo, es obvio que todos esos presuntos beneficios no pueden ser ciertos. Así que la solución a los males del liberalismo no democrático consistiría en abolir las instituciones tutelares, echar a las élites del poder y volver a poner al pueblo al mando.[126]

He ahí un kit básico de intuiciones intelectuales que se manifiestan en debates sobre una amplia lista de temas e influyen muy significativamente tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. De él se alimentan muchos argumentos contrarios a los tratados comerciales y a los bancos centrales. E inspira el vocabulario tanto de un Donald Trump como de una Jill Stein, de un Stephen Bannon[*] o de una Naomi Klein.

El problema es que esa manera de caracterizar el problema y la solución caricaturiza el origen, el funcionamiento y la finalidad de esas instituciones.

Es cierto que la élite política está manifiestamente cómoda con las instituciones tecnocráticas, que, de paso, le confieren mucho poder. Es evidente que la élite económica dedica mucho dinero y esfuerzo a moldear esas instituciones en su propio beneficio. Y no cabe duda de que los flujos de financiación favorecen unas ideas y relegan otras, lo que contribuye a fijar unos límites demasiado estrechos al territorio de la opinión «seria».[127]

Pero la historia de la mayoría de las instituciones que constriñen la opinión popular es mucho más compleja de lo que sus detractores parecen dispuestos a admitir. La Unión Europea, por ejemplo, no tiene su origen en una conspiración de las grandes empresas, sino en un intento razonablemente idealista de reconstruir el continente tras la Segunda Guerra Mundial. Toda una serie de instituciones, que van desde la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense hasta el Organismo Internacional de la Energía Atómica, se idearon como respuesta a problemas muy reales —como la contaminación o como la proliferación nuclear— que, hasta entonces, habían sido muy difíciles de abordar.

También el funcionamiento diario de esas instituciones es algo más complejo de lo que a algunos les podría parecer. Las negociaciones entre Grecia y la troika, por ejemplo, se han retratado a menudo como un choque entre el electorado griego y los tecnócratas internacionales. Y, en cierto (e importante) sentido, lo fueron (de ahí que yo mismo las pusiera como ejemplo de liberalismo no democrático en la «Introducción»). Pero buena parte de la razón por la que dirigentes como Angela Merkel no estaban dispuestos a ofrecer un mejor trato a Grecia es que ellos mismos tenían que responder ante la opinión de sus propios electores; vista desde esa perspectiva, la voluntad del pueblo griego fue ignorada en parte porque significaba ignorar la voluntad de otros pueblos europeos.[128]

Del mismo modo que la historia y el funcionamiento de las instituciones tecnocráticas son más complejos de lo que afirman quienes las critican, también la solución al problema del liberalismo no democrático es bastante menos evidente que la que ellos propugnan. Pues por fácil que sea tildar

injustamente a unas instituciones imperfectas de inútiles o de no servir a otro fin más que a su propio interés y supervivencia, lo cierto es que cumplen tres importantes funciones.

El mundo en el que hoy vivimos es muy complejo. Para mantener la economía en funcionamiento y evitar grandes desastres, necesitamos regular la banca y hacer cumplir importantes normas de protección del consumidor, vigilar la formación y la trayectoria de los huracanes, o inspeccionar las centrales eléctricas, por ejemplo. Existen muchas formas distintas de organizar la realización de esas tareas. Es lógico que se promuevan reformas que den a los legislativos más poder para establecer las normas necesarias y para hacer que los organismos administrativos que vigilan el cumplimiento de esas normas rindan cuentas de su funcionamiento.

Pero, al final, tanto el diseño como la implementación de esas regulaciones requieren de un considerable conocimiento técnico. Cuesta mucho imaginarse a una mayoría de la ciudadanía interesándose activamente por ellas (o a una mayoría de los políticos elegidos popularmente dominando todos sus intrincados detalles). Así que no está muy claro cómo podríamos cubrir tan necesarias tareas si aboliéramos las instituciones tecnocráticas sin más.

El reto es aún mayor cuando nos referimos a ámbitos de política que precisan de una elevada cooperación internacional. Para frenar el cambio climático o contener la propagación del armamento nuclear, es necesario que casi todas las naciones del mundo alcancen un acuerdo sobre cómo actuar al respecto. De momento, las decisiones de esa clase suelen ser tomadas por los jefes de Gobierno, o por ministros nombrados por ellos. En los países democráticos, estos son cargos decididos por elección popular, claro está. Pero la cadena de delegación es larguísima y la capacidad de los ciudadanos de a pie para influir en los tratados internacionales termina siendo muy, muy restringida. Acuerdos como el Tratado de París sobre el Cambio Climático están aquejados de un serio déficit democrático.

Pero, nuevamente, es muy difícil imaginar cuál podría ser una alternativa realista. No se vislumbra en perspectiva atisbo alguno de un verdadero Parlamento mundial y, aun si tal foro existiera, la mayoría de los ciudadanos lo sentirían muy lejano a su día a día. Pero, por otra parte, dejar

que cada país vaya a la suya imposibilita afrontar una amplia serie de problemas globales, empezando por el cambio climático. Al final, es como si estuviéramos obligados a elegir entre conseguir la cooperación internacional sobre temas claves siguiendo una vía preocupantemente poco democrática, o no conseguirla en absoluto.

Por último, hay que tener en cuenta que la relación entre liberalismo y democracia es mucho más intrincada de lo que quienes se oponen a las instituciones tecnocráticas quieren reconocer. Pese a sus muchas deficiencias, ciertas instituciones contramayoritarias, como los tribunales constitucionales, por ejemplo, presumen de un largo historial de protección de los derechos individuales. Así que sus detractores deberían, cuando menos, tomarse en serio el peligro de que los miembros de las minorías étnicas y religiosas estuvieran en una situación de mayor vulnerabilidad si tales instancias se abolieran. En general, las instituciones independientes han demostrado a lo largo de la historia su importancia con vistas a mantener la democracia dentro de unos parámetros de equidad aceptable. Como las experiencias recientes en países como Hungría o Turquía ponen de manifiesto, en el corto plazo, puede que un sistema en el que la voluntad del pueblo es capaz de invalidar la acción de jueces y funcionarios parezca más democrático, pero, a largo plazo, facilita mucho que un autócrata suprima la democracia misma.

La doble crisis de la democracia liberal hace que nos sintamos tentados a buscar soluciones fáciles.

Los observadores más preocupados por las actitudes iliberales de los populistas no quieren admitir que hay un elemento netamente democrático en las energías que mueven a estos últimos a pensar así; algunos incluso han propuesto aislar cada vez más decisiones políticas del alcance de la voluntad popular.[129] Por su parte, los observadores a quienes más preocupan las actitudes tecnocráticas de las élites existentes no parecen dispuestos a reconocer que puede haber muy buenas razones para la actuación de esa clase de instituciones y están convencidos, más bien, de que muchas de ellas simplemente deberían abolirse.[130]

Pero ninguna de esas salidas fáciles puede solucionar la crisis de la democracia. Si queremos preservar los elementos liberales del sistema, no bastará con limitar la influencia de los populistas depositando la responsabilidad de todas las decisiones importantes en manos de expertos, sino que tendremos que convencer a los votantes para que el populismo caiga derrotado en las urnas. Y si queremos conservar los elementos democráticos del sistema, no bastará con abolir las instituciones que ayudan a estabilizar la economía y a tratar algunos de los problemas más urgentes que el mundo tiene ante sí, sino que tendremos que encontrar maneras de reformar esas instituciones para que se equilibre mejor la balanza entre su pericia técnica y su grado de responsabilidad ante la voluntad popular.

~

Así pues, el primer gran supuesto heredado de la era de la posguerra parece erróneo: el liberalismo y la democracia no van, ni mucho menos, tan naturalmente de la mano como la mayoría de los ciudadanos —y de estudiosos del tema— han asumido hasta ahora. En la actualidad, la voluntad popular choca cada vez más con los derechos individuales y, como resultado, la democracia liberal se está escindiendo en sus partes componentes.

He ahí un hecho muy preocupante. Para empezar, liberalismo y democracia son valores innegociables. Si nos obligan a renunciar a los derechos individuales o a la voluntad popular, se nos estará pidiendo que hagamos una elección imposible. Por otra parte, cada vez resulta más dudoso que la democracia iliberal o el liberalismo no democrático vayan a ser combinaciones especialmente estables. Un sistema que prescinde de los derechos individuales para elevar la voluntad popular a los altares puede terminar volviéndose contra el pueblo mismo. Y un sistema que prescinde de la voluntad popular en aras de la protección de los derechos individuales puede acabar recurriendo a una represión cada vez más descarada para acallar la disensión.

Esto arroja dudas sobre el segundo, y más fundamental aún, supuesto heredado de la era de la posguerra. La teoría nos decía que la democracia es difícil de conseguir. Pero que, en cuanto un país logra ser rico y democrático,

la solidez de su sistema político pasa a ser poco menos que pétrea a partir de entonces. Se supone, pues, que en países como Francia o Estados Unidos la democracia está «consolidada». Pero si el liberalismo y la democracia no forman una amalgama tan estable como los expertos creían desde hace tiempo, y si cada uno de esos valores se vuelve más vulnerable aún en ausencia del otro, entonces nuestro sistema político parece enfrentarse a una amenaza mucho mayor de lo que habíamos admitido hasta ahora. ¿Son nuestras democracias liberales imperfectas actuales realmente tan seguras como hemos creído todo este tiempo?

Capítulo 3

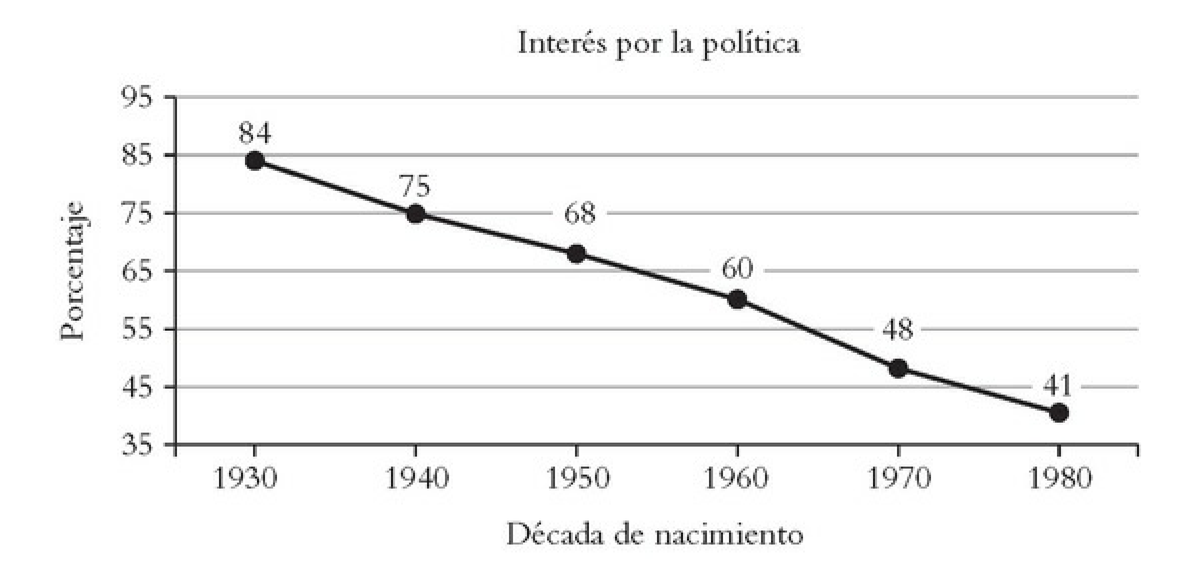
LA DEMOCRACIA SE ESTÁ DESCONSOLIDANDO

Los años sesenta y primeros setenta del siglo XX hicieron añicos la confianza de muchos estadounidenses en la clase política. La turbulencia generada por el movimiento estudiantil, la guerra de Vietnam y el *Watergate* comenzó a poner en entredicho lo que hacía tiempo parecía ser una fe inquebrantable. Cuando se hizo progresivamente evidente que Richard Nixon tendría que dimitir avergonzado, los críticos culturales comenzaron a proclamar la existencia de una grave crisis de confianza en la democracia estadounidense. «Las revelaciones sobre la doblez y la paranoia presidenciales —ha escrito recientemente David Runciman sobre aquel periodo— parecían estar desnudando a la democracia y dejando al descubierto la podredumbre oculta hasta entonces.»[1]

No puede ser casualidad que fuera ese mismo año el primero en que Gallup se ocupó de formular en sus sondeos una pregunta cuya respuesta habría parecido obvia apenas unos años antes: ¿confiaban los estadounidenses en «los hombres y las mujeres de la vida política [...] que ejercen o aspiran a ejercer cargos públicos»? Aun así, la imagen que el sondeo de aquel año revelaba seguía siendo de un optimismo notable. En 1974, y aun en medio de todo aquel escándalo, una clara mayoría de estadounidenses conservaba la confianza en las personas que ejercían cargos políticos o eran candidatas a ejercerlos.[2]

En las décadas transcurridas desde entonces, sin embargo, el número de estadounidenses que confían en sus políticos ha caído en picado. En la actualidad, una clara mayoría de ellos dicen desconfiar.[3]

La confianza en las instituciones es igual de baja. En junio de 2014, por ejemplo, solo un 30% de los estadounidenses decían confiar en el Tribunal Supremo. Un 29% expresaba confianza en la presidencia. Los índices de aprobación del poder legislativo eran más desalentadores si cabe: a comienzos de los años setenta, más del 40 % de los estadounidenses declaraban tener confianza en el Congreso; en 2014, esa cifra se había desplomado hasta el 7 %.[4]



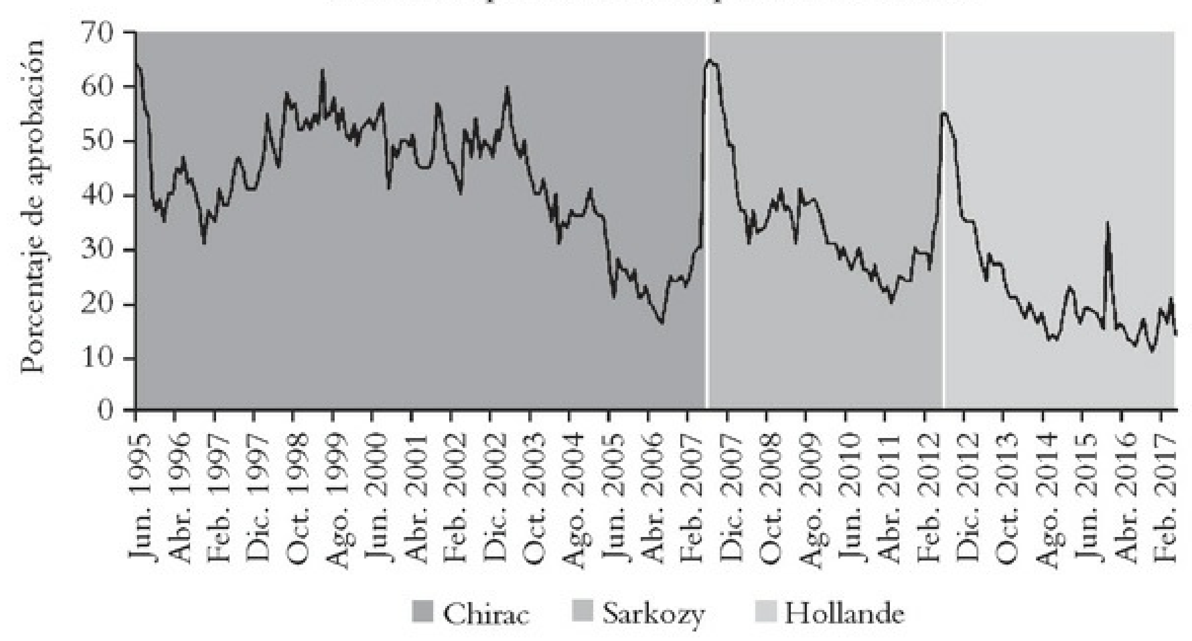
Encuestados estadounidenses que afirman tener interés por la política, por década de nacimiento

A la vista de tan estratosféricos niveles de insatisfacción con el sistema político, seguramente poco puede extrañarnos que muchos estadounidenses jóvenes no quieran saber nada de la política. Aun así, es sorprendente lo rápido que ha disminuido el interés por ella. Entre los estadounidenses nacidos en las décadas de 1930 y 1940, la inmensa mayoría dice estar activamente interesada por la política, pero menos de la mitad de sus compatriotas jóvenes opinan lo mismo en ese sentido.[5]

Y parecidas tendencias pueden observarse en muchas de las democracias duraderas de todo el mundo. En buena parte de Europa, por ejemplo, los ciudadanos son menos proclives hoy que hace unas décadas a creer que sus representantes elegidos priorizan los intereses de la población general.[6]

También participan menos que antes en instituciones políticas formales.[7] Y, al igual que sus coetáneos estadounidenses, los jóvenes europeos están mucho menos interesados en la política que sus mayores.[8]

Este descontento se expresa también en la implacable valoración que hacen de gobiernos concretos. En junio de 2005, el índice de aprobación de Jacques Chirac cayó hasta un mínimo histórico. Solo uno de cada cuatro electores franceses opinaba que estaba haciendo una buena labor, el nivel más bajo registrado por los sondeos de TNS-Sofres desde que esta empresa había empezado a medir los índices de aprobación de los presidentes franceses en 1979.[9] Un lustro más tarde, Chirac pudo consolarse un poco viendo cómo su sucesor corría aún peor suerte. Nicolas Sarkozy había accedido a la presidencia prometiendo a los franceses un estilo de liderazgo distinto y un futuro más luminoso. Pero estos no le perdonaron el incumplimiento de tales promesas. En abril de 2011, la proporción de electores que aprobaban el desempeño de Sarkozy en el cargo no superaban el quinto del total.[10] Otro lustro después, sería a Sarkozy a quien le llegaría el turno de consolarse con las cifras de su sucesor. François Hollande ascendió al poder aupado por una ola de descontento. Pero luego llegó a alcanzar tales niveles de desaprobación que ya ni siquiera se presentó a la reelección. En noviembre de 2016, solo uno de cada veinte electores aprobaban su labor.[11] Cuando Emmanuel Macron fue elegido presidente en mayo de 2017, pulverizando con su ascensión el sistema político existente y apoyándose en una enorme popularidad, parecía que todo iba a cambiar.



Pero, antes incluso del final de ese mismo verano, su popularidad se situó ya en apenas un 37%, el descenso más brusco jamás registrado.[12]

En resumidas cuentas, en América del Norte y Europa occidental los ciudadanos se fían menos de los políticos que antes. Están perdiendo la confianza en las instituciones democráticas. Y tienen una visión cada vez más negativa de sus gobiernos. Todo esto es preocupante. Pero quizá lo más alarmante de nuestro momento actual sea algo bastante menos tangible. Y es que los políticos siempre han tenido que soportar cierto rechazo popular, pero la intensidad de la desconfianza, el odio y la intimidación a la que ahora se enfrentan a diario no tiene precedentes. Hasta los políticos más veteranos están desconcertados por la actual virulencia de las críticas.

Hace unos meses, di una charla en un encuentro de parlamentarios de varias asambleas legislativas estatales estadounidenses y, a su término, un veterano republicano —un conservador acérrimo que ha contribuido a impulsar reformas muy controvertidas en el estado del que es legislador— vino a hablar conmigo. Con los años, me dijo, ha visto un paulatino aumento del enfado y la suspicacia de sus electores. Ya se ha acostumbrado a la acritud. E incluso ha empezado a aceptar lo inevitable que resulta que,

cuando un rival sugiere una solución de una sola frase a un problema político complejo y él replica con tres frases para rebatirlo, la mayoría de los votantes den por supuesto que es él quien está intentando tomarles el pelo con tanto «marear la perdiz».

Pero aunque a este legislador no le quedaba ya ni un ápice de ingenuidad de novato, hacía poco que había tenido una conversación con una electora en particular que lo había alterado bastante. Me comentó que él había entrado en política animado por su maestra de sexto curso, que fue su mentora desde los doce años y que, a esas alturas de la vida, lo conocía mejor que cualquier otra persona de fuera de su familia. «¿Por qué nos estás mintiendo?», le inquirió esta mujer en una llamada telefónica unos días antes de que nosotros habláramos.

—¿A qué te refieres? —le preguntó él.

—Lo han dicho en la radio. Dicen que nos estás mintiendo con este nuevo proyecto de ley.

Él intentó explicarle que no se había desviado de los principios conservadores que ambos compartían, sino que simplemente había retrasado una votación por motivos tácticos.

—Tú me conoces —le dijo a ella—. ¿Me dejas que te explique lo que está pasando?

Su exmaestra, sin embargo, no quería que le contara nada más.

—Yo lo que sé —dijo ella— es que dicen por la radio que nos estás mintiendo. Estoy muy decepcionada contigo.[13]

Hace tiempo que los politólogos son conscientes de que la confianza en las instituciones democráticas ha disminuido, de que las valoraciones de los políticos se han vuelto negativas, y de que los índices de aprobación de las autoridades y las instituciones políticas van a la baja. Pero, hasta fecha reciente, estos eran datos a los que no daban importancia.

Durante muchos años, destacados estudiosos del tema como Ronald Inglehart, Pippa Norris y Russell J. Dalton se esforzaron por ver la luz entre tanta tiniebla. Quizá, sugerían ellos, los ciudadanos de generaciones anteriores simplemente eran demasiado dóciles y crédulos. ¿Acaso no podría

interpretarse la desilusión de los votantes actuales como una señal de madurez, más que como un augurio de inestabilidad? Incluso hace bien poco, en el verano de 2015, Lynn Vavreck aún argumentaba que «parte del reciente descenso [de la confianza] puede que no tenga que ver tanto con cómo el gobierno ha decepcionado a la gente, como con un mayor y mejor conocimiento del funcionamiento del gobierno en general». Y aunque la propia Vavreck admitía que «es un tanto preocupante que la confianza en el gobierno sea objetivamente baja», en último término atribuía esta tendencia a «una progresión constante en la oposición a la opacidad gubernamental: una larga tradición estadounidense que se remonta a la abierta exposición de agravios esbozada en la Declaración de Independencia».[14]

Una manera habitual de abonarse al optimismo en esta cuestión era diferenciando entre la «legitimidad del gobierno» y la «legitimidad del régimen».[15] La legitimidad de los gobiernos, tal como admitían estos expertos, había decaído: los ciudadanos estaban ahora mucho más dispuestos a cuestionar a sus gobernantes actuales. Pero la legitimidad del régimen, insistían, se había mantenido estable: los ciudadanos, sostenían ellos, no son más críticos con el sistema político de base ahora de lo que lo eran en el pasado.

He ahí un relato atractivo que, sin embargo, en estos últimos años, se está volviendo cada vez menos verosímil. Para empezar, cuesta imaginar que la gente corriente se ponga tan radicalmente en contra de gobiernos concretos (y se forme una opinión tan mala del día a día de sus instituciones) sin aumentar su grado de crítica contra el sistema en sí. Además, las pruebas de que la democracia está siendo objeto de ataque no dejan de acumularse.

En Europa occidental siguen creciendo en las urnas una serie de partidos que sistemáticamente bombardean preceptos democráticos fundamentales. En todo el mundo, de Egipto a Tailandia, son varios los experimentos incipientes con la democracia que han sido aplastados, o las democracias ya existentes que han degenerado en dictaduras. Por vez primera en décadas, Freedom House —que mide la extensión de los sistemas de gobierno democrático en todo el mundo— ha registrado un mayor número de países que dan pasos que los alejan de la democracia que de países que se acercan a ella. Como ha escrito Larry Diamond, estamos en plena «recesión democrática».[16]

Ya va siendo hora, pues, de desarrollar un método empírico que nos permita contrastar (y, si cabe, refutar) los supuestos en los que se basan los optimistas desde hace tiempo. ¿Está la legitimidad del régimen en un punto tan elevado todavía en América del Norte y Europa occidental como lo estaba tiempo atrás? ¿Qué síntomas observaríamos ahora si las democracias supuestamente consolidadas estuvieran empezando a *desconsolidarse*? ¿Y a partir de qué punto tendríamos motivos para concluir que la democracia ha dejado de ser la única alternativa?

Al menos, tres cosas —diría yo— tendrían que cumplirse para que consideráramos que la democracia continúa siendo la única alternativa y, por ende, que sigue estando tan asegurada como la mayoría de los politólogos dan por supuesto que está:

- La mayoría de los ciudadanos deberían estar muy comprometidos con la democracia liberal.
- La mayoría de los ciudadanos tendrían que rechazar las alternativas autoritarias a la democracia.
- Los partidos y los movimientos políticos con poder real han de estar de acuerdo con la importancia de las reglas y las normas democráticas básicas.

¿Sigue siendo ese el caso?

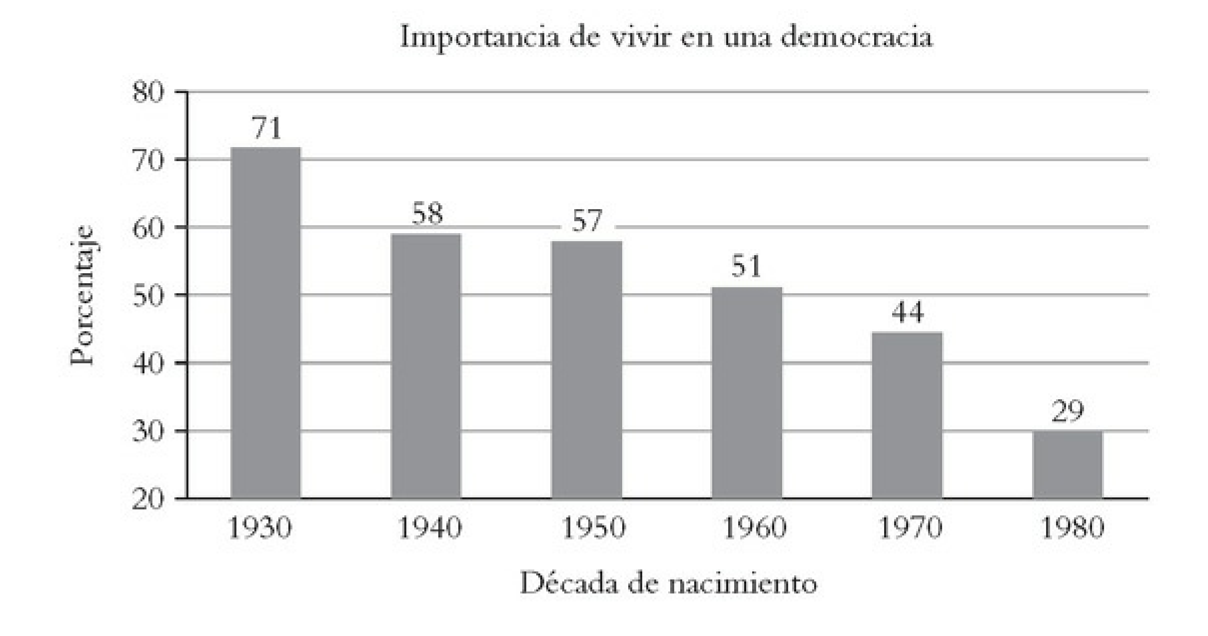
Hay muchos modos distintos de buscar una respuesta para esa pregunta. Fijarse en los sondeos de opinión no es más que uno de ellos. Pero, en cualquier caso, el estudio de las encuestas supone una herramienta muy útil para deducir una primera respuesta. Si los mejores datos disponibles mostraran que muchos ciudadanos son críticos, no ya con los gobiernos concretos, sino con la democracia en sí, dotarían de credibilidad real al temor de que la democracia no sea ya la única alternativa concebible.

Así que, en colaboración con mi colega Roberto Stefan Foa, me propuse examinar el nivel de apoyo a las instituciones democráticas tomando como referencia la *Encuesta mundial de valores*, la mayor muestra transnacional de actitudes públicas ante toda clase de temas políticos y sociales. Y, para

nuestra sorpresa, descubrimos que, en América del Norte y en Europa occidental, la ciudadanía realmente se está alejando de la democracia a un ritmo considerable, según las cifras.

LOS CIUDADANOS SE ESTÁN DESENAMORANDO DE LA DEMOCRACIA

Un modo directo de hacerse una idea de lo apegados que están los ciudadanos a su sistema político es preguntándoles cuánta importancia tiene para ellos vivir en una democracia. Si los ciudadanos están muy comprometidos con la democracia, lo normal será que consideren inaceptable vivir en una dictadura. Pero si no atribuyen importancia real alguna al hecho de vivir en democracia, las defensas mismas del sistema estarán en tela de juicio.[17]

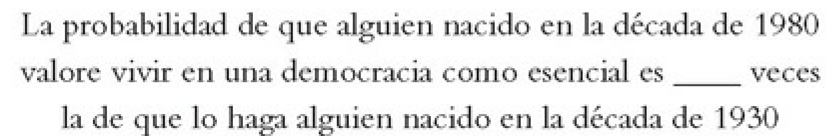


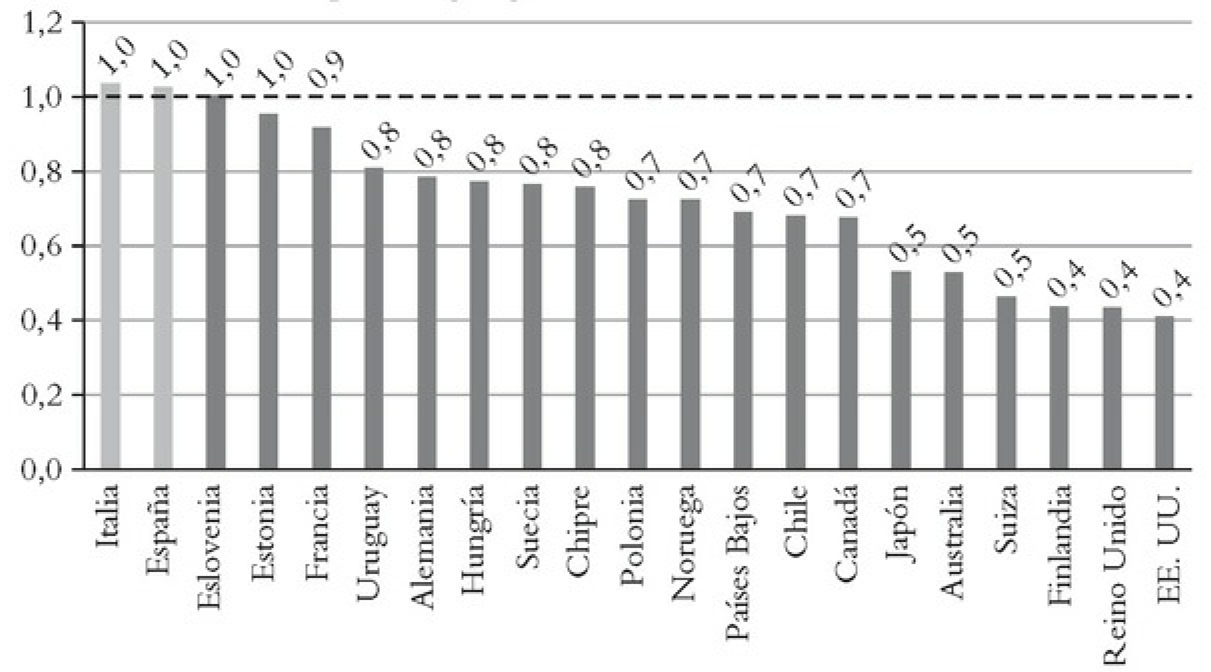
Porcentaje de encuestados estadounidenses que opinan que vivir en una democracia es «esencial», por década de nacimiento

La mayoría de las personas de más edad sí parecen mostrar un ferviente apego a la democracia. Cuando se les pide que puntúen en una escala del uno al diez lo importante que es para ellos vivir en una democracia, unos dos tercios de estadounidenses nacidos en las décadas de 1930 y 1940 otorgan la mayor valoración posible: consideran que es algo esencial. Pero la mayoría

de las personas más jóvenes valoran mucho menos su sistema político. De los *millennials* estadounidenses, aquellos nacidos después de 1980, menos de la tercera parte juzga esencial vivir en democracia.[18]

Fuera de Estados Unidos, el panorama es algo más complejo. En algunos países que tienen una historia más o menos reciente de gobiernos autoritarios, los jóvenes no están significativamente menos interesados en vivir en una democracia que sus mayores.[19] Pero en la mayoría de las democracias duraderas, sobre todo en las del mundo anglófono, los *millennials* muestran parecido desencanto con el sistema. Del mismo modo que los jóvenes valoran menos la forma de su régimen en Estados Unidos, los jóvenes de países como Suecia, Australia, Gran Bretaña o los Países Bajos atribuyen también una menor importancia al hecho de vivir en democracia.





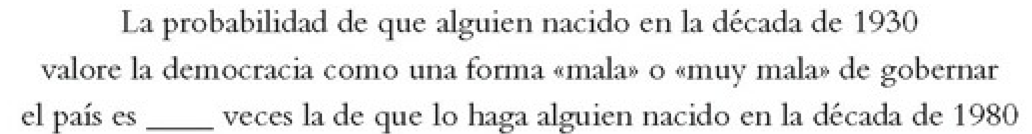
Algunos críticos han puntualizado que una cosa es que los ciudadanos sientan indiferencia ante el hecho de vivir en una democracia y otra, muy distinta, es que rechacen la democracia como sistema político.[20] Pues, bien,

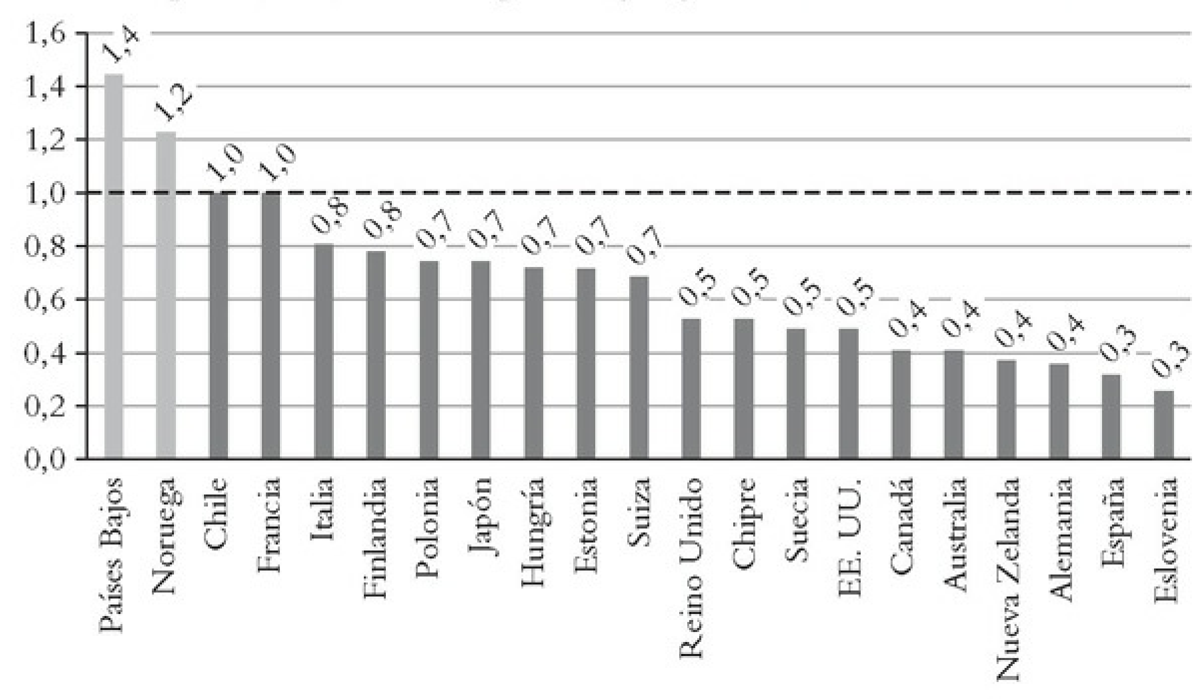
¿son muchos ciudadanos actuales que llegan al punto de afirmar que la democracia es una forma «mala» o «muy mala» de gobernar su país?

Por desgracia, la respuesta es que sí.

En Estados Unidos, por ejemplo, cerca de uno de cada cuatro *millennials* opina actualmente que la democracia es un mal modo de gobierno, lo que representa un incremento del cien por cien cuando se compara con las cohortes de más edad de la muestra.

El panorama mundial también es similar: la desilusión con la democracia ha aumentado también en Gran Bretaña y en los Países Bajos, o en Suecia y en Nueva Zelanda. De hecho, incluso los jóvenes de países que suelen situarse entre los más especialmente resistentes a la presente crisis de la democracia liberal —como serían Canadá, Alemania o Suecia— son mucho más críticos con la democracia que sus padres o sus abuelos.[21]





LOS CIUDADANOS ESTÁN CADA VEZ MÁS ABIERTOS A ALTERNATIVAS AUTORITARIAS

En suma, es bastante evidente que la ciudadanía tiene un juicio más crítico de la democracia que el que tenía tiempo atrás y que los jóvenes son especialmente proclives a atribuir una menor importancia al hecho de vivir en una democracia. Este es un dato preocupante por razones obvias. Pero también puede reflejar una falta de alternativas. A lo mejor, los ciudadanos están menos contentos con su sistema de gobierno, pero no por ello se muestran más abiertos a otras opciones alternativas... ¿O sí?

Para contrastar esta hipótesis, tratamos de examinar el apoyo explícito a otros modos de gobierno más autoritarios. Al principio no estábamos muy seguros de que fuéramos a obtener resultado alguno por esa vía. En una democracia, mostrarse a favor de abolir las elecciones o de que los militares tomen el poder es una especie de tema tabú. Podría darse el caso de que muchas personas desearan secretamente la imposición de un régimen alternativo al democrático, pero que, aun así, un número elevado de ellas no estuvieran dispuestas a admitir, ante las preguntas de un extraño, tales sentimientos antidemocráticos.

Sin embargo, no tardamos en descubrir que sí, que no tenían reparos en admitirlos.

Un modo de evaluar el grado de aceptación de las alternativas autoritarias es preguntando a los encuestados si opinan que tener un líder fuerte, que no deba lidiar con el Congreso ni con las elecciones, constituiría un buen sistema de gobierno. De ese modo, no se les pregunta directamente si querrían abolir la democracia de golpe, pero su respuesta capta claramente lo abiertos (o no) que estarían a un sistema que, en ciertos aspectos cruciales, sería profundamente antidemocrático: un líder fuerte al que no afectasen las elecciones y que no necesitase el apoyo del legislativo sería, a todos los efectos, un dictador, lo llamaran como lo llamaran. Pues bien, ¿están hoy los estadounidenses más abiertos a la idea de un líder fuerte de ese tipo?

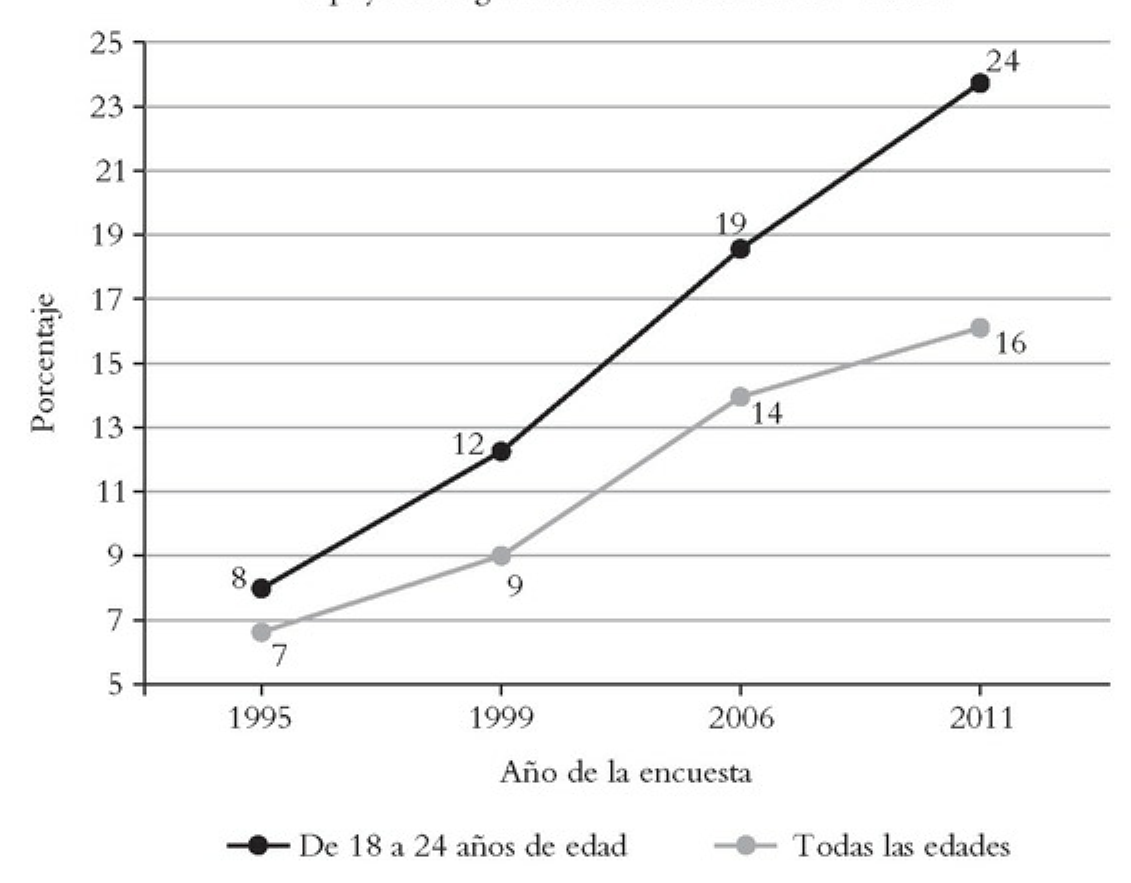
Sí. De hecho, no solo los estadounidenses jóvenes son ahora mucho más favorables a un líder fuerte que sus compatriotas de generaciones anteriores, sino que los estadounidenses de *todas* las edades son más favorables a un líder fuerte ahora de lo que lo eran veinte años atrás.

En 1995, un 34% de estadounidenses jóvenes (de edades comprendidas entre los dieciocho y los catorce años) consideraban que un sistema político con un líder fuerte que no tuviera que preocuparse por el Congreso ni por las elecciones sería bueno o muy bueno. En 2011, eran ya un 44% los estadounidenses jóvenes que pensaban así. La progresión entre sus compatriotas de todos los grupos de edad es parecida: mientras que un 24% de todos los estadounidenses apoyaban la idea de un líder fuerte en 1995, un 32% lo hacen hoy en día.

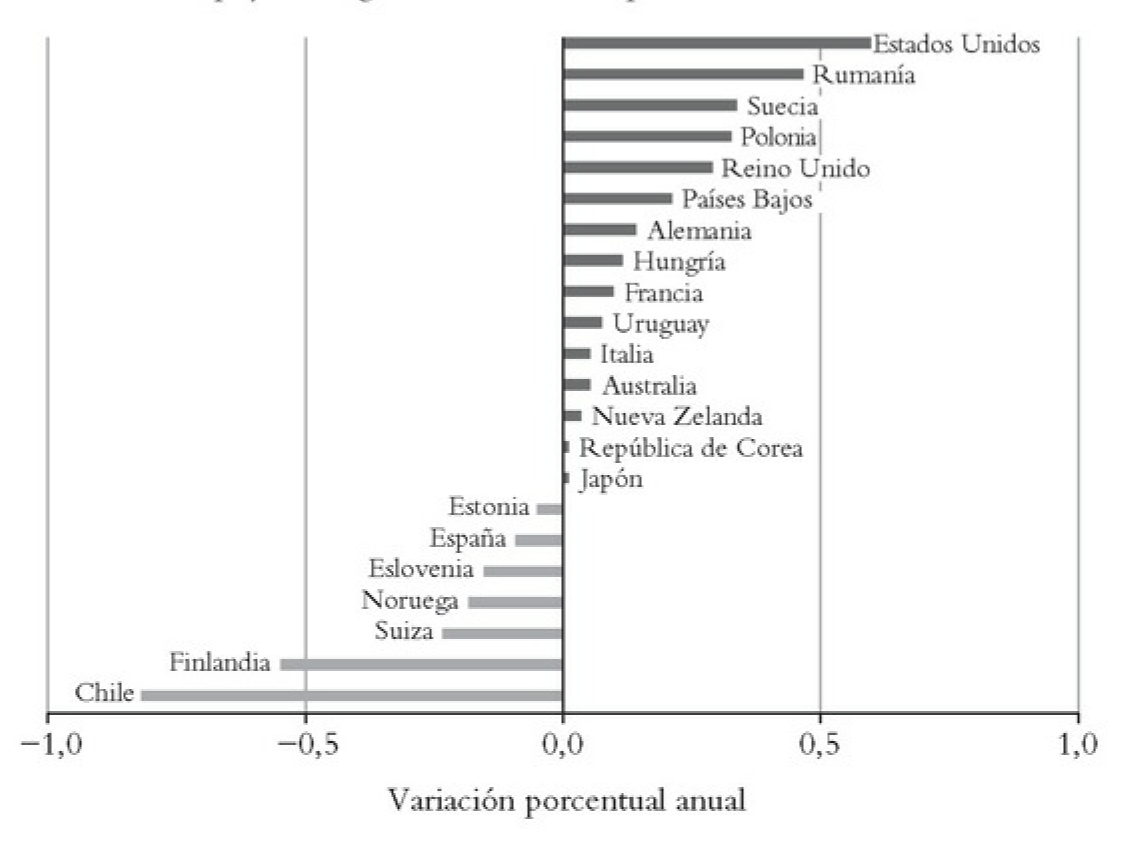
Sorprendidos por el número de personas favorables a la idea de un hombre fuerte liderando el país, quisimos averiguar cuántos electores estaban dispuestos a apoyar una alternativa más radical aún a la democracia liberal. ¿Habría un porcentaje significativo de estadounidenses dispuestos a declarar su apoyo a la posibilidad de una dictadura militar propiamente dicha?

La buena noticia es que el número de personas que opinan que el gobierno militar es una buena forma de dirigir el país es claramente menor que el número de personas que anhelan la figura de un hombre fuerte que no tenga que responder ante el Congreso ni ante las urnas. La mala noticia es que ese número crece con rapidez.

En 1995, solo uno de cada dieciséis estadounidenses afirmaba estar a favor de un gobierno militar, una proporción significativamente inferior a la que se registraba en países donde realmente se habían vivido golpes de Estado militares. Pero en estas dos últimas décadas, esa cifra ha ido en aumento constante. En 2011, año en que esa pregunta se formuló por última vez en la encuesta, eran ya más del doble —uno de cada seis— quienes decían estar a favor de un gobierno militar. Eso significa que el número de personas favorables a un régimen militar es ahora más o menos igual de elevado en Estados Unidos que en países con historiales de relaciones entre civiles y militares tan turbulentas como Argelia (donde un 17% de los encuestados se mostraban favorables a un gobierno militar en 2013) o el Yemen (donde ese porcentaje era del 20%).



Porcentaje de encuestados estadounidenses que opinan que un gobierno militar es un sistema político «bueno» o «muy bueno», por grupos de edad, 1995-2011



Variación porcentual anual en el número de encuestados que, en diversos países, opinan que un gobierno militar es un sistema político «bueno» o «muy bueno»

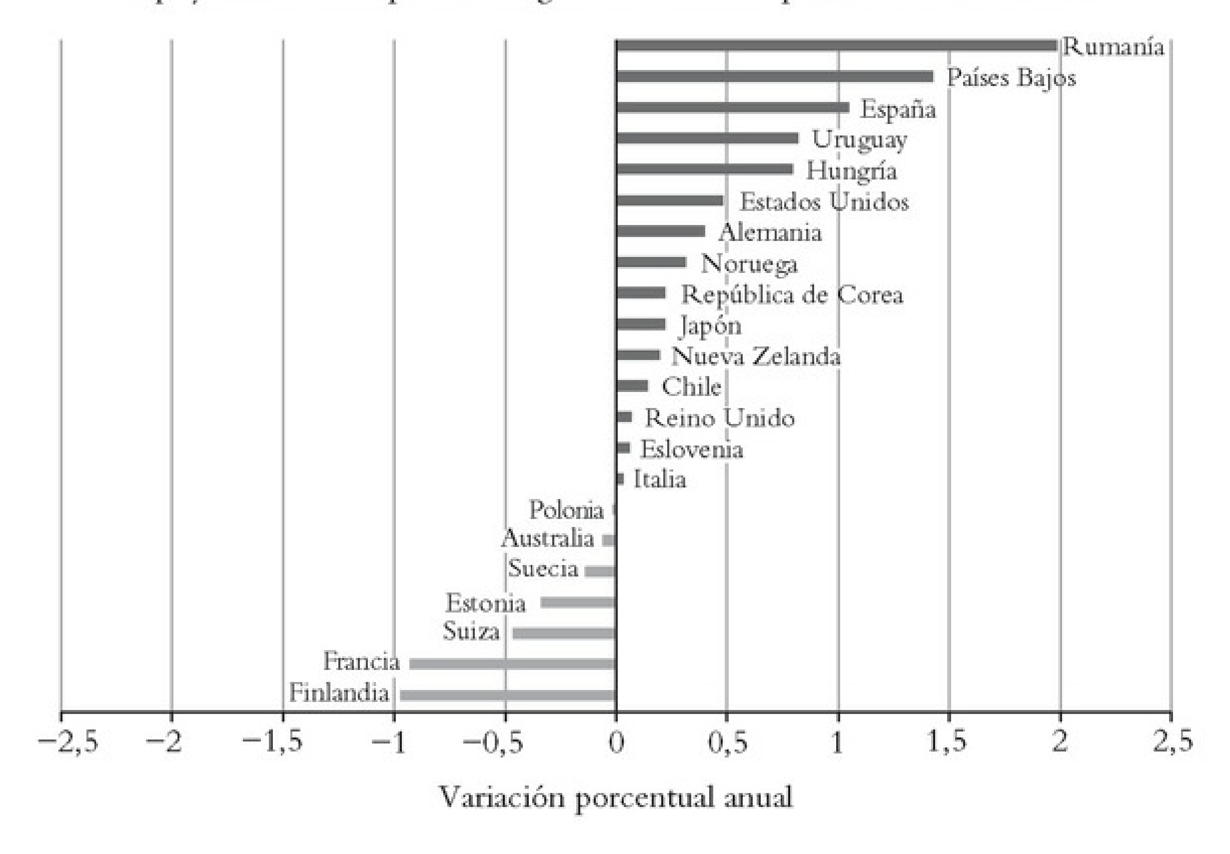
Llama la atención que el apoyo a un régimen militar haya crecido incluso en sectores de población que antaño lo rechazaban al unísono. En 1995, los estadounidenses ricos eran notablemente menos propensos que los estadounidenses pobres a ser partidarios de un gobierno militar. Ahora son casi igual de proclives. La velocidad de esta transformación se hace evidente cuando examinamos el apoyo a una forma militar de gobierno entre los estadounidenses jóvenes y ricos.

Veinte años atrás, solo un 6% de ese grupo estaba a favor de un gobierno militar. Desde entonces, su apoyo a ese tipo de gobierno casi se ha sextuplicado: ha pasado del 6% al 35%.

Tampoco esta evolución de la opinión es privativa de Estados Unidos. Si miramos más allá del contexto estadounidense, veremos que hay algunos países en los que el apoyo a los regímenes militares incluso ha caído en las

pasadas décadas. Pero, en su mayoría, se trata de naciones que, como Chile, han tenido experiencias muy recientes de dictadura militar. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los países para los que disponemos de datos —incluidas democracias duraderas como Alemania, Gran Bretaña, Suecia y, sobre todo, la India—, el número de ciudadanos que opinan que estaría bien que los militares gobernaran ha experimentado un acusado aumento.

Observamos una tendencia similar en el porcentaje de ciudadanos que están a favor de un líder fuerte que no tenga que lidiar con parlamentos ni elecciones. También en este caso, hay países, como Suecia y Suiza, en los que esa proporción ha descendido. Pero son muchos más, Alemania y Estados Unidos incluidos, aquellos en los que ha aumentado significativamente. Lo más alarmante es que los datos más recientes (y aún no publicados) indican que la tendencia no hace más que acelerarse. En un sondeo de 2017, por ejemplo, el número de electores alemanes que apoyaban la idea de un líder fuerte se había duplicado (del 16% previo había pasado a un 33%); entre los electores franceses, había crecido desde el 35% hasta el 48%. En Gran Bretaña, el dato era más impactante aún: mientras que, en 1999, solo un 25% apoyaban la idea de un sistema liderado por un «hombre fuerte», ahora ese porcentaje asciende ya al 50%.



Variación porcentual anual en el número de encuestados que, en diversos países, opinan que «tener un líder político fuerte que no tenga que responder ante el Parlamento ni en unas elecciones» es algo «bueno» o «muy bueno»

EROSIÓN DEL RESPETO POR LAS NORMAS DEMOCRÁTICAS

Los datos de esta encuesta son evidentemente preocupantes. Pero para comprobar si la democracia continúa siendo la única alternativa o no, tenemos que mirar más allá de los números. Cuando la democracia es estable, lo es en buena medida porque todos los actores políticos principales se muestran dispuestos a adherirse a las reglas básicas del juego democrático la mayor parte del tiempo.

Algunas de esas reglas son de carácter formal: un presidente o un primer ministro permite que el poder judicial investigue las posibles ilegalidades cometidas por miembros de su gobierno en vez de destituir al fiscal o al juez instructor del caso. También tolera un trato desfavorable en la prensa en vez

de ordenar el cierre de periódicos o la persecución de periodistas. Y cuando pierde unas elecciones, abandona pacíficamente el cargo en vez de aferrarse al poder.

Pero muchas de estas reglas son informales, lo que hace que su transgresión no resulte tan evidente. Entre otras cosas, se supone, por ejemplo, que el gobierno no reformula las reglas electorales unos meses antes de unas elecciones para maximizar sus oportunidades de victoria; que los insurgentes políticos no hacen pública exaltación de gobernantes autoritarios del pasado, ni amenazan con encerrar a sus rivales, ni proponen violar los derechos de las minorías étnicas y religiosas; que quienes no salen reelegidos para un cargo se abstienen de vaciarlo de competencias en los días previos a la fecha del relevo; que la oposición ratifica a un candidato competente a un puesto de magistrado en un alto tribunal, aunque no le guste su ideología, antes que dejar vacante ese cargo; y que llega a acuerdos aunque no sean perfectos para cerrar los presupuestos generales antes que permitir la parálisis administrativa que se derivaría del hecho de no cerrarlos.

En definitiva, los políticos que se toman el sistema realmente en serio pueden concebir la política como una especie de deporte de contacto en el que todos los participantes pugnan por sacar ventaja sobre sus adversarios. Pero son también muy conscientes de la necesidad de imponer unos límites a las actuaciones guiadas por el puro interés partidista, de que vencer en unas elecciones importantes o aprobar una ley urgente es menos importante que preservar el sistema, y de que la política democrática nunca debe degenerar en una guerra sin cuartel.

«Para que las democracias funcionen —escribió hace unos años Michael Ignatieff, teórico político y antiguo líder del Partido Liberal de Canadá—, los políticos tienen que respetar la diferencia entre un enemigo y un adversario. Un adversario es alguien a quien quieres derrotar. Un enemigo es alguien a quien tienes que destruir.»[22]

En Estados Unidos, y en otros muchos países de todo el mundo, la política democrática ya no funciona así. Como bien señaló el propio Ignatieff, estamos siendo crecientemente testigos de «lo que sucede cuando una política

de enemigos ocupa el lugar de una política de adversarios».[23] Y a la nueva cosecha de populistas que han tomado el escenario político al asalto en estas últimas décadas le corresponde buena parte de la culpa de todo ello.

El aumento de recién llegados a la política puede ser tanto una señal de salud y vitalidad de la democracia como de su inminente desmejoramiento. Los sistemas políticos se benefician de la competencia total entre ideas y de la sustitución regular de una élite dirigente por otra. La llegada de nuevos partidos puede ayudar en ambos sentidos: al introducir en la agenda política temas largo tiempo ignorados, incrementan la representatividad del sistema político; y al catapultar a una nueva cosecha de políticos hacia cargos de responsabilidad, inyectan savia joven en ese mismo sistema.

Aun así, hay razones sobradas para pensar que el reciente deshielo del sistema de partidos no ha sido ni mucho menos benigno. Muchos de los nuevos partidos no se han limitado a proporcionar alternativas ideológicas dentro del sistema democrático, sino que han cuestionado reglas y normas claves del sistema mismo.

Uno de los populistas que más tempranamente destacó fue el austriaco Jörg Haider, un hábil y carismático político de Carintia. Tras hacerse con el liderazgo del Partido de la Libertad de Austria en 1986, Haider dio enseguida un golpe de timón en la formación hacia la extrema derecha. Su estridente postura antiinmigración podría considerarse un ejemplo de introducción en la agenda política (para más que evidente deleite de sus votantes) de un tema esencialmente ignorado por los partidos mayoritarios convencionales. Pero el grado hasta el que se mostraba dispuesto a socavar normas fundamentales de la democracia liberal se hizo bastante evidente cuando se embarcó en una taimada campaña de reevaluación del pasado nazi de Austria.

En un acto que contaba con la presencia de muchos antiguos oficiales de las SS entre el público, Haider afirmó: «Nuestros soldados no fueron criminales; si acaso, fueron víctimas». Rizando el rizo de su flirteo con el Tercer Reich, dedicó un particular guiño a unos veteranos de las asesinas

Waffen SS de Adolf Hitler diciendo: «Todavía hay personas decentes de buen carácter que, además, permanecen fieles a sus convicciones aun ante la más dura oposición».[24]

Romper con las normas políticas es también la especialidad de Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad holandés (PVV). El islam, ha dicho, es «una peligrosa ideología totalitaria».[25] Y si otros populistas han pedido ilegalizar los minaretes o los *burkinis*, Wilders, empeñado en no quedarse atrás, ha llegado incluso a exigir la prohibición del Corán.

Comparada con Haider o Wilders, una figura como Beppe Grillo puede parecer de entrada mucho más benigna. Grillo apareció por vez primera en la escena política arremetiendo contra la —muy real— corrupción de Silvio Berlusconi con hilarantes diatribas repletas de improperios y palabrotas. Cuando fundó el Movimiento 5 Estrellas (M5S), prometió arrebatar el poder a una «casta política» de vejestorios preocupados nada más que por sus propios intereses, y luchar por una Italia más moderna y tolerante.[26]

Pero en cuanto el movimiento adquirió popularidad, no tardó en adoptar un tono antisistema. Sus ataques contra la corrupción de políticos concretos fueron derivando en un rechazo radical de aspectos claves del sistema político, incluido el Parlamento mismo. La ira contra la clase política dirigente se sostuvo en una disposición creciente a fomentar teorías de la conspiración o directamente a difundir mentiras sobre los adversarios políticos.[27]

La razón por la que estos populistas y neófitos políticos están tan dispuestos a poner en cuestión normas democráticas básicas es, en parte, táctica: cuando rompen con tales normas, los populistas concitan la condena unánime de los miembros del orden político establecido. Y eso, como es evidente, demuestra que, tal como ellos mismos anunciaban, los populistas de verdad representan una ruptura radical con el *statu quo*. Hay, pues, algo de teatral en la tendencia de los populistas a quebrantar las normas democráticas: por mucho que sus declaraciones más provocadoras sean consideradas a menudo deslices o torpezas por los observadores políticos, el hecho mismo de que estén dispuestos a cometer tales deslices es lo que les confiere gran parte de su atractivo. Pero su osadía no es menos peligrosa por ello: en cuanto algunos miembros del sistema político hacen patente su

disposición a quebrantar las reglas, los demás pasan a tener muchos incentivos para hacer lo mismo. Y, de hecho, así se están comportando cada vez en mayor medida.

Algunos de los ataques más espectaculares contra normas democráticas básicas han venido de esos neófitos políticos. Pero, en estos últimos años, algunos representantes de viejos partidos establecidos también han evidenciado una voluntad creciente de minar las reglas básicas del juego.

A veces, se ha tratado de una simple reacción a la nueva competencia planteada por los populistas. Por ejemplo, en su etapa como presidente de Francia, Nicolas Sarkozy reconocía públicamente la existencia del cambio climático debido al impacto humano. Pero cuando se presentó como precandidato a las elecciones presidenciales de 2016, en una campaña en la que le tocó competir por el apoyo de muchos votantes de extrema derecha, optó por cambiar radicalmente de enfoque: pasó entonces a afirmar que el «clima ha estado cambiando continuamente a lo largo de 4.000 millones de años [...]. Solo la arrogancia humana puede llevarnos a creer que nosotros hemos cambiado el clima».[28]

Los partidos establecidos de izquierda también son culpables de haber vulnerado las normas democráticas en algunas ocasiones. En Estados Unidos, los demócratas llevan tiempo practicando inaceptables manipulaciones partidistas de la configuración de las circunscripciones electorales *(gerrymandering)*.[29] Y durante la presidencia de Obama, el ejecutivo continuó expandiendo alarmantemente sus poderes, llevando a juicio a un número récord de periodistas por presunto uso indebido de información clasificada, recurriendo a los decretos presidenciales para sortear al Congreso en áreas políticas diversas, desde medioambiente hasta inmigración.[30]

Pese a todo, la mayoría de los politólogos coinciden en señalar que los republicanos son actualmente (y con diferencia) el mejor ejemplo de ataque concertado contra las normas democráticas perpetrado por un partido de los nominalmente considerados como convencionales o «establecidos».[31]

En 2008, John McCain demostró entender bien la importante distinción entre tratar a un competidor por el acceso a un alto cargo como un adversario y tratarlo como un enemigo. Cuando un elector dijo en una reunión vecinal de un ayuntamiento estadounidense que le asustaba lo que pasaría si Barack Obama ganaba las elecciones, McCain salió al quite en defensa de su adversario: «Déjeme que le diga que él es una persona respetable, y una persona de quien no tiene usted que temer nada como presidente de Estados Unidos». En un momento posterior de esa misma reunión, a raíz de que una señora mayor expresara en voz alta su desconfianza hacia Obama por el hecho de que era un «árabe», McCain se mostró igual de contundente: «No, señora. Él es un respetable padre de familia y ciudadano con quien da la casualidad que mantengo discrepancias a propósito de temas fundamentales, y eso es lo único que tratamos de dirimir en esta campaña».[32]

La claridad moral que indujo a McCain a relegar la búsqueda de una ventaja partidista en aras de afirmar la legitimidad de la oposición política es algo que, precisamente, en estos últimos años ha brillado por su generalizada ausencia. Cuando Obama pronunció su primer discurso sobre el estado de la Unión, un legislador republicano rompió con una larguísima tradición de decoro parlamentario cuando, a gritos y en plena alocución, interrumpió al presidente espetándole un «¡miente usted!».[33] Cuando, doce meses más tarde, el Tea Party —liderado por Sarah Palin, a quien McCain había elegido en su día como compañera de candidatura y aspirante a vicepresidenta— estaba adquiriendo creciente influencia, algunos políticos republicanos no dudaron en hacerse eco de una teoría de la conspiración que negaba al presidente Obama la condición (imprescindible para poder ejercer la presidencia de Estados Unidos) de ciudadano nacido en el propio país.[34]

En líneas más generales, por su oposición frontal a Obama, los republicanos hicieron evidente su disposición a abusar de reglas parlamentarias reservadas, en principio, para circunstancias excepcionales o, incluso, a incurrir en casos de flagrante negligencia de su deber. En ninguna otra instancia fue más evidente esa transformación que en el Senado federal. Las reglas y procedimientos de esta cámara se habían diseñado desde la suposición de que, cuando fuera necesario, los senadores renunciarían a cualquier ventajismo partidista en aras del buen funcionamiento del sistema.

Pero en la actualidad, los senadores emplean tácticas agresivas a diario. Aunque respetan los límites legales de su autoridad, insisten descaradamente en exprimir al máximo todas las normas y los procedimientos, incluso cuando con ello subvierten muy a las claras la intención con la que fueron creadas. La consecuencia de ello ha sido una especie de caos institucional a cámara lenta.

Por ejemplo, el uso de tácticas dilatorias conocido como *filibusterismo* se reservaba históricamente para circunstancias muy inusuales. Cuando Lyndon Baines Johnson era presidente, el partido que tenía la minoría en el Senado practicó el filibusterismo en dieciséis ocasiones. Durante la presidencia de Obama, sin embargo, el partido de la minoría en el Senado recurrió a esas tácticas nada menos que quinientas seis veces.[35]

Un abuso más flagrante aún de las normas constitucionales fue el que se produjo a la muerte del juez Antonin Scalia, magistrado del Supremo. El 16 de marzo de 2016, Barack Obama nominó a Merrick Garland para el puesto que había quedado vacante. Garland es un jurista moderado que había tenido un fuerte apoyo de ambos partidos a lo largo de toda su distinguida carrera.[36] Pero, si bien la Constitución encomienda al Senado la función de asesorar a propósito de los candidatos nominados por el presidente, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, se negó incluso a dejar que la Comisión de Justicia celebrara las correspondientes sesiones de ratificación de Garland. Contra todo precedente conocido, el Tribunal Supremo tuvo vacante uno de sus puestos durante la mayor parte de 2016. Y la negativa del Senado a estudiar la nominación de Garland fue solamente un ejemplo muy visible de una pauta mucho más generalizada de obstruccionismo frente a los nominados de Obama para cargos judiciales y ejecutivos.[37]

Pero es en los estados, lejos del foco de atención nacional, donde las violaciones de normas democráticas básicas han sido más patentes. Hace ya décadas que diversas comisiones dominadas por el Partido Republicano se han dedicado a dibujar los mapas electorales con el fin evidente de otorgar a sus candidatos una ventaja con vistas a las elecciones siguientes.[38] Y también hace muchas décadas que los legisladores republicanos intentan restringir el derecho al voto de electores de las minorías aprobando innecesarias leyes de identificación personal o cerrando colegios electorales en barrios o

vecindarios de voto netamente demócrata. En estados como Carolina del Norte, ese empeño en ganar ha superado con mucho el deseo de celebrar unas elecciones justas.[39]

Pero ni siquiera en un contexto caracterizado por comportamientos tan poco edificantes como el que acabo de describir, puede dejar de asombrarnos lo acaecido en las elecciones a gobernador de Carolina del Norte en 2016. Roy Cooper, el candidato demócrata, se impuso por un estrechísimo margen en unas elecciones muy disputadas. Pero, en vez de admitir que esto lo legitimaba para ejercer su mandato durante los cuatro años siguientes, los republicanos decidieron reescribir las competencias asociadas hasta entonces a dicho cargo. Al gobernador de Carolina del Norte le correspondía hasta entonces nombrar a mil quinientos trabajadores de su oficina, pero, conforme a una ley aprobada por el legislativo saliente (de mayoría republicana), a partir de entonces solo tendría autorización para nombrar a cuatrocientos veinticinco. El gobernador tenía potestad para designar a una mayoría de los presidentes de las juntas electorales del estado, pero, a partir de entonces, tendría que compartir esa competencia con el legislativo, bajo control republicano. Por último, al gobernador se le reconocía previamente el poder de nombrar hasta sesenta y seis miembros del consejo de administración de la Universidad de Carolina del Norte, pero, con la nueva legislación, se le permitió nombrar nada más y nada menos que a cero.[40]

La cruda tendenciosidad partidista de esas medidas es innegable. También lo es su importancia: en Carolina del Norte, los republicanos han rechazado en la práctica nuestro deber de someternos al dictamen de unas elecciones libres y justas para resolver nuestras diferencias políticas, así como la norma de respetar que gobiernen nuestros rivales políticos cuando perdemos.

Donald Trump está importando actualmente a las salas y los despachos de la Casa Blanca una versión aumentada (elevada al plano constitucional) de esas prácticas agresivas que se han venido aplicando con creciente frecuencia en las salas y los despachos del Congreso y en los legislativos de varios estados.

A lo largo de su campaña, Donald Trump quebrantó prácticamente todas las reglas básicas de la política democrática. Prometió encarcelar a sus oponentes políticos. Se negó a decir explícitamente que aceptaría el resultado de las elecciones. Intimidó a la prensa y amenazó con ampliar las leyes antidifamación. Invitó a una potencia extranjera a sabotear a su principal competidora. Incitó al odio contra minorías étnicas y religiosas, y prometió emprender medidas inconstitucionales contra ellas.[41]

Después de salir elegido, Trump continuó haciendo gala de una falta de respeto por las normas democráticas elementales. Cuando aún era presidente electo, Trump formuló acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado. Puso en duda la neutralidad de diversas instituciones del Estado independientes, como tribunales de justicia y agencias de inteligencia. Preguntó por la situación de los permisos de obra de proyectos de construcción de su compañía aprovechando llamadas telefónicas oficiales con jefes de Estado extranjeros. Se negó a crear un fideicomiso ciego (un *blind trust*) para agrupar en él sus negocios privados. Y dedicó reiterados elogios al líder dictatorial de una potencia rival.[42]

Y desde la investidura, Trump no ha hecho más que ahondar en esa forma de actuar. Se ha negado a solucionar sus sustanciales conflictos de intereses. Ha utilizado el aparato del gobierno para difundir mentiras descaradas. Ha intentado prohibir a residentes permanentes en Estados Unidos la reentrada en el país. Ha arremetido contra «esos a quienes llaman jueces». Ha tildado a los periodistas de «enemigos del pueblo americano». Ha amenazado a los dueños de medios de comunicación críticos con aumentarles los impuestos. Ha saboteado los intentos de investigar sus lazos con Rusia confabulándose con legisladores leales, destituyendo al director del FBI y amenazándolo públicamente con sacar a la luz unas grabaciones secretas.[43]

En definitiva, es evidente que el hombre que actualmente ocupa el más alto cargo de la democracia más poderosa del mundo muestra una temeraria desconsideración —cuando no incluso un orgulloso desprecio— por las reglas más básicas de la política democrática. Y apenas estamos empezando a comprender lo que eso podría significar para la estabilidad del sistema.

LOS JÓVENES NO VAN A SALVARNOS

Los ciudadanos están menos comprometidos con la democracia y más abiertos a la posibilidad de alternativas autoritarias de lo que estaban hace unas décadas. El respeto por las normas y las reglas democráticas ha caído en picado. Al no ser ya el único sistema concebible, la democracia está en pleno proceso de desconsolidación.

Sé que esta es una conclusión difícil de asumir. Queremos pensar que el mundo va haciéndose mejor con el tiempo y que las raíces de la democracia liberal son más hondas cada año que pasa. Tal vez sea por eso por lo que, de todas mis afirmaciones, la que ha suscitado mayores reacciones de incredulidad haya sido la idea de que son los jóvenes los que se están mostrando más especialmente críticos con la democracia.

Es lógico que a los estadounidenses y a los británicos les resulte particularmente difícil creer que los jóvenes son los más desafectos. Después de todo, se inclinaron fuertemente por Hillary Clinton, la candidata de la continuidad, en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses: entre los votantes de menos de treinta años, un 55% apoyó a Clinton y solo un 37% a Trump. Con el *brexit* ocurrió algo muy parecido. Mientras que dos tercios de los británicos en el grupo de edad de los pensionistas votaron a favor de salir de la Unión Europea, dos tercios de los *millennials* votaron por el mantenimiento del *statu quo*.[44]

Pecaríamos de simplismo, sin embargo, si concluyéramos que la disposición al cambio radical (o, no digamos ya, a la aplicación de alternativas directas a la democracia) es patrimonio exclusivo de las personas mayores, o que la crisis de la democracia liberal se resolverá por sí sola a medida que cohortes de edad más jóvenes y más liberales vayan sustituyendo a las más ancianas.

Nada más lejos de la realidad. Los jóvenes en una amplia serie de países muestran en realidad una mayor propensión que las personas mayores a identificarse como radicales. Y su atracción por los extremos políticos ha ido creciendo con el tiempo. En países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, el número de personas jóvenes que se ubican a sí mismas en la izquierda o la derecha radicales se ha duplicado (aproximadamente) en el transcurso de las dos últimas décadas; en Suecia, se ha multiplicado por más de tres.

Los datos electorales de los partidos populistas confirman esa versión de los hechos recientes. Las personas jóvenes se mostraron menos proclives a votar a Trump o a favor del *brexit*, pero son mucho más propensas a votar a partidos antisistema en muchos países de todo el mundo.

Donde más obvio resulta esto es en los países del sur de Europa y América Latina, donde la amenaza populista proviene principalmente de la izquierda. El Movimiento 5 Estrellas italiano, el español Podemos, el griego Syriza y la Francia Insumisa liderada por Jean-Luc Mélenchon son muy populares entre los jóvenes. En Italia, por ejemplo, un 40% de los votantes menores de cuarenta años apoyaron al Movimiento 5 Estrellas en febrero de 2016, por solo un 15% de los votantes de más de 65.[45]



Variación porcentual anual en el número de *millennials* que se ubican a sí mismos en la extrema izquierda o en la extrema derecha del espectro político

Pero no solo los partidos de la extrema izquierda se benefician del desencanto de los jóvenes con la democracia. En muchos países, los jóvenes también tienden más que los mayores a apoyar a populistas de ultraderecha. Marine Le Pen, por ejemplo, puede presumir de tener entre ellos a uno de sus más fervientes grupos de partidarios. En la segunda ronda de las elecciones presidenciales de 2017, algunos sondeos a pie de urna indicaron que solo uno de cada cinco votantes mayores votó a favor de Marine Le Pen, mientras que, entre los votantes jóvenes, casi uno de cada dos lo hizo (también hubo otros datos contradictorios con los anteriores, pues sugerían que Le Pen apenas si había tenido resultados marginalmente menores entre los jóvenes que entre el resto de los grupos de edad).[46] Y esto es algo en lo que Francia no constituye ninguna excepción. Todo lo contrario. Los sondeos han arrojado resultados similares en países tan diversos como Austria, Suecia, Grecia, Finlandia y Hungría.[47]

Incluso en Gran Bretaña y Estados Unidos, el panorama presenta una imagen menos nítida que la que normalmente dibujan sus protagonistas. Jeremy Corbyn, a quien se le consideraba desde hacía tiempo como una figura alternativa, ascendió al liderazgo del Partido Laborista y superó las expectativas en las elecciones generales de 2017, en parte por el ferviente apoyo que obtuvo de los votantes jóvenes.[48] También en Estados Unidos, los jóvenes están más abiertos de lo que muchos creían a escuchar los cantos de sirena populistas. Entre los votantes blancos de menos de treinta años de edad, por ejemplo, Donald Trump derrotó en realidad a Hillary Clinton por una proporción de cuarenta y ocho a cuarenta y tres.[49]

Una posible explicación de por qué tantos jóvenes se han desencantado con la democracia es que tienen muy escasa noción de lo que significaría vivir en un sistema político diferente. Las personas nacidas en las décadas de 1930 y 1940 vivieron de primera mano, en su infancia, la amenaza del fascismo, o fueron criadas por personas que habían luchado activamente contra este. Se formaron durante los años de la Guerra Fría, cuando el temor al

expansionismo soviético grabó a fuego en sus mentes la amenaza del comunismo. Cuando se les pregunta si para ellas es importante vivir en una democracia, tienen cierta idea de lo que las alternativas implicarían.

Los *millennials* de países como Gran Bretaña o Estados Unidos, sin embargo, apenas vivieron la Guerra Fría y puede que ni siquiera conozcan a nadie que luchara contra el fascismo. Para ellos, la pregunta sobre si es importante o no vivir en democracia es mucho más abstracta. Pero ¿no implica eso que, si tuvieran que enfrentarse realmente a una amenaza a su sistema político, acudirían sin falta a defenderlo?

Yo no estoy tan seguro. El hecho mismo de que los jóvenes no se hagan apenas una idea de lo que supondría vivir en un sistema distinto al suyo puede hacer que sean más proclives a la experimentación política. Acostumbrados a ver y a criticar las injusticias e hipocresías (muy reales) del sistema en el que han crecido, muchos de ellos han comenzado a dar erróneamente por descontados los aspectos positivos de este.

Es tentador imaginar que la relativa impopularidad de Trump entre los jóvenes indica que los *millennials* que se muestran abiertamente críticos con la democracia liberal acudirán a defenderla en un momento de peligro, y que, por lo tanto, la crisis remitirá en cuanto los electores más jóvenes que se incorporen al censo vayan sustituyendo a los electores de más edad que dejen de figurar en él. Pero yo me temo que, de todo lo anterior, cabe deducir una conclusión más pesimista: queda todavía una enorme reserva de energía antisistema por extraer. Si bien puede que los votantes jóvenes acudan al rescate del sistema en las elecciones siguientes, igual de probable resulta que su oposición al *statu quo* sea activada en beneficio de algún movimiento populista que, a estas alturas, todavía sea poco conocido, insignificante o, incluso, inexistente.

LAS PELIGROSAS CONSECUENCIAS DE LA DESCONSOLIDACIÓN

Las pruebas de las que disponemos son ciertamente alarmantes. En muchos países de todo el mundo, de Estados Unidos a Gran Bretaña, y de Suecia a Australia, la democracia ya no parece ser la única alternativa concebible. Una

proporción creciente de ciudadanos tienen una opinión negativa de la democracia o no consideran que sea especialmente importante. Otros —un porcentaje más reducido, aunque en rápida expansión— están abiertos a alternativas directamente autoritarias, como el gobierno de un «hombre fuerte» o una dictadura militar. Mientras tanto, populistas que sienten escaso o nulo apego por las normas democráticas básicas están adquiriendo inmensas cuotas de poder, hasta el punto de que uno de ellos ha conquistado hace poco el cargo político más poderoso del mundo.

Pero aunque se hace ya evidente que la democracia se está desconsolidando, todavía resulta difícil advertir cuáles van a ser las consecuencias de ese proceso. ¿Es el de la desconsolidación democrática un fenómeno temporal que pronto activará una fuerte defensa inmunitaria (es decir, que se circunscribirá a una década turbulenta y poco más)? ¿O es el síntoma de un peligro real para la supervivencia de unas instituciones políticas que otrora parecían excepcionalmente estables: es decir, un indicio de la posibilidad de que el largo periodo de estabilidad democrática por la que se han caracterizado los últimos tres cuartos de siglo esté tocando a su fin?

En teoría, el mejor modo de resolver tan apremiantes interrogantes es consultando ejemplos pasados de democracias ricas y consolidadas que comenzaron a fracturarse. El problema es que no existen tales casos. Hasta fecha reciente, el proceso de consolidación democrático ha sido realmente unidireccional. Existen muy pocos ejemplos en el registro histórico que puedan darnos una idea del caos que se desataría si ese tráfico comenzara de pronto a fluir en el sentido opuesto.

Pero, si bien no hay ningún precedente claro para la situación en la que nos hallamos ahora mismo, sí podemos considerar que algunos casos se acercan más que otros. Muchos consideraban que países como Polonia y Venezuela, por ejemplo, estaban en pleno proceso de consolidación democrática hasta que la elección de unos candidatos populistas causó graves daños en sus sistemas políticos. Si queremos saber si debería preocuparnos la posibilidad de que la democracia iliberal degenere en dictadura, debemos investigar si ese mismo proceso estaba teniendo lugar en tales países antes de que sus democracias se deteriorasen.

Hace tiempo que los politólogos en general venían refiriéndose a Polonia como un ejemplo prototípico de éxito en la transición poscomunista hacia la democracia. Y no les faltaban motivos para tanto optimismo. Entre 1990 y 2005, el gobierno de Polonia cambió de manos como resultado de elecciones libres y justas en cinco ocasiones. El PIB del país se multiplicó por seis y sobrepasó con creces el umbral de los catorce mil dólares per cápita a partir del que se supone que las democracias se estabilizan como sistema. El país desarrolló un conjunto inusualmente activo de instituciones de la sociedad civil. Muchos polacos estaban muy implicados en la vida asociativa: desde clubes deportivos hasta la Iglesia católica. Surgieron ONG defensoras de una amplia diversidad de causas sociales y políticas. Los periódicos adquirieron un elevado grado de excelencia en la labor de control de las responsabilidades de los gobiernos gracias al ejercicio libre de la crítica de los errores políticos y a la investigación de los escándalos de corrupción. Se vivía un verdadero florecimiento educativo y universitario.[50]

En 2004, ese progreso le valió a Polonia su codiciado ingreso en la Unión Europea. Para ser admitido en esta, un país tiene que demostrar que ha desarrollado «una estabilidad institucional que garantice la democracia, el Estado de derecho [y] los derechos humanos».[51] Polonia cumplía sobradamente con esos requisitos.

No es de extrañar, pues, que muchos politólogos llegaran a la conclusión de que Polonia ya se había convertido en «una democracia consolidada».[52] Aunque nadie se habría atrevido a afirmar que las instituciones democráticas estaban tan firmemente arraigadas (o seguras) en Polonia como en naciones como Canadá o Estados Unidos, la democracia liberal parecía haber germinado y prendido en el país.

Y, sin embargo, ese optimismo fundado pronto se demostraría prematuro.

Las elecciones de 2015 se celebraron en un momento extraño. El gobierno de Plataforma Cívica, liderado por el primer ministro Donald Tusk, podía presumir de haber desempeñado una actuación positiva en líneas generales: había dirigido competentemente al país a través de la recesión global de

2008; había mejorado las relaciones de Polonia con sus vecinos; había convertido en un éxito la primera presidencia polaca de la Unión Europea; en resumen, a Polonia le estaba yendo notablemente bien.

Pero tras casi siete años en el poder, el gobierno estaba empezando a perder fuelle. Los electores estaban listos para un cambio. Así que bastó con que se hicieran públicas unas grabaciones secretas de conversaciones privadas entre altos cargos en las que se les oía empleando un lenguaje grosero y negociando tratos económicos muy sospechosos para que la popularidad del ejecutivo se desplomara.[53]

Aquello dio una oportunidad al partido de extrema derecha Ley y Justicia, que ya había gobernado el país entre 2005 y 2007 bajo el mando de Jarosław Kaczyński. Durante aquella primera legislatura en el poder, Ley y Justicia se había vuelto rápidamente impopular a causa de una serie de escándalos de gran nivel y de las constantes disputas entre miembros del propio gabinete. Muchos polacos rechazaban el conservadurismo a ultranza de aquel partido y su divisiva retórica. Pero ocho años después, la formación parecía haberse moderado. Sus principales promesas eran revocar el retraso previsto en la edad de jubilación, rebajar impuestos e incrementar las subvenciones para guarderías y cuidado infantil. Kaczyński, quien había renunciado formalmente al liderazgo del partido, pero continúa dominándolo entre bastidores, apenas apareció en público durante la campaña y prometió no asumir ninguna función de mando en el futuro gobierno.[54]

Al final, Ley y Justicia se impuso tanto en las elecciones presidenciales como en las parlamentarias, lo que otorgó extensos poderes al partido. Y, ya en el gobierno, comenzó a subvertir las reglas básicas de la democracia polaca.

Como primera medida, Ley y Justicia atacó la neutralidad de las instituciones estatales independientes. Así, para conseguir el control del Tribunal Constitucional, la más alta instancia judicial del país, el gobierno incrementó el número de sus magistrados, y aceleró en el Parlamento la designación de fieles al partido para dichos puestos, al tiempo que desposeía de su voto a tres magistrados propuestos por parlamentos de anteriores legislaturas. Cuando el propio Constitucional sentenció que los tres

candidatos designados por la oposición sí tenían derecho a votar, el Parlamento despojó al tribunal de buena parte de sus competencias y desestimó la sentencia.[55]

Como segunda medida, Ley y Justicia utilizó fondos públicos para difundir propaganda y silenciar a periodistas críticos. Aunque otros gobiernos polacos anteriores ya habían intentado influir en el sesgo político de Telewizja Polska (TVP), la radiotelevisión pública y líder de audiencia en el país, el relevo del nuevo equipo directivo fue cualitativamente diferente. Muchos comentaristas que eran asiduos participantes en programas de la TVP desde hacía décadas desaparecieron de las pantallas de la noche a la mañana. Los mismos programas informativos que se habían inclinado de manera puntual a favor del gobierno de turno se transformaron al instante en infatigables proveedores de la más indisimulada propaganda.[56]

No contento con hacer suyos los medios de comunicación estatales, el gobierno empezó también a invadir el terreno de las cadenas y las publicaciones privadas. En estos últimos años, ha frustrado contratos de publicidad de esas empresas y, valiéndose de tácticas intimidatorias, ha obligado a propietarios extranjeros de medios a venderlos a aliados nacionales del propio partido. De ello alardeaba un dirigente de Ley y Justicia cuando dijo que su formación pretendía «repolonizar» los medios de comunicación del país, los públicos y los privados.[57]

Ley y Justicia se ha alejado un paso más de la democracia liberal poniendo en marcha una campaña de ataque al derecho a expresar opiniones impopulares, a quejarse de la política del gobierno o simplemente a informar de tales protestas. Desde la absoluta negativa a tolerar críticas a la nación polaca, el gobierno intentó retirar la medalla que un ejecutivo anterior había concedido a Jan Gross, historiador de Princeton que ha demostrado el grado de complicidad de Polonia en los crímenes del Holocausto, y aprobó una ley que penalizaba el uso de la expresión *campos de extermino polacos*.[58] Cuando en verano de 2016 se produjeron varias manifestaciones populares de protesta contra el gobierno, Ley y Justicia propuso restringir el derecho de reunión. Y cuando millares de ciudadanos recurrieron al Parlamento nacional para expresar su protesta, el primer ministro expulsó a las radiotelevisiones privadas de la sede parlamentaria.[59]

Convocada para investigar si la democracia liberal estaba en peligro en Polonia, la Comisión de Venecia —un órgano asesor del Consejo de Europa compuesto por personalidades académicas y expertos en derecho constitucional— llegó a una conclusión inusualmente poco diplomática: «No solo está en peligro el Estado de derecho, sino que también lo están la democracia y los derechos humanos».[60] Guy Verhofstadt, una de las personas directamente implicadas en la negociación del ingreso de Polonia en la Unión Europea, se mostró igual de contundente: «Las medidas que Varsovia está tomando son [...] antidemocráticas y contrarias a los principios del Estado de derecho que Polonia suscribió en el acto mismo de su entrada en la Unión Europea. Es evidente que ahora no podría cerrarse un acuerdo de ingreso como entonces».[61] Jan-Werner Müller ha sido más claro todavía al respecto: «Uno no puede dejar de tener la impresión de que Europa central está viviendo un 1989 a la inversa. En aquel año, las revoluciones pacíficas en nombre de la democracia liberal se propagaron de un país comunista a otro. En la actualidad, sin embargo, somos testigos de la aparición de una nueva Internacional Autoritaria».[62]

La mayoría de los politólogos están desconcertados con lo rápidamente que Polonia se está alejando de la democracia liberal. El país pareció ir bien durante mucho tiempo. Y, sin embargo, su sistema político se ha deteriorado enseguida. ¿Qué puede explicar tan súbito cambio de signo? ¿O acaso se trata de un simple accidente, uno de esos giros extraños e inesperados de la historia que la ciencia política jamás podría prever?

Sería tentador pensar esto último. Pero, desde la perspectiva de mi trabajo reciente, el caso polaco sorprende por su claridad. Mucho antes de que la democracia empezase a fallar allí, los polacos se estaban haciendo una opinión señaladamente negativa de esta y evidenciaban una llamativa actitud receptiva a alternativas autoritarias, por no hablar del elevado porcentaje de voto que cosechaban ya los partidos que rompían con las normas democráticas fundamentales.

- Comparados con sus vecinos o, incluso, con el promedio mundial, los polacos llevan mucho tiempo siendo muy críticos con la democracia. Mientras que en el conjunto mundial solo uno de cada diez encuestados dice que la democracia es un modo malo o muy malo de gobernar su país, hace ya tiempo que uno de cada seis polacos era de esa opinión (recordemos, por cierto, que, entre los *millennials* estadounidenses, la proporción de encuestados que comparten esa mala impresión es de casi uno de cada cuatro).
- Mucho antes de que el gobierno actual accediera al poder, los polacos habían mostrado ya una inusual receptividad a las alternativas autoritarias. Si bien uno de cada diez ciudadanos de la Unión Europea creía a comienzos de la década de 2010 que el militar era un buen sistema de gobierno, más de uno de cada cinco polacos pensaban así (entre los *millennials* estadounidenses, el nivel es similarmente elevado).[63]
- Por último, hace ya tiempo también que allí hay partidos populistas poderosos que se dedican a socavar normas democráticas fundamentales. Ley y Justicia consiguió el elevado número de seguidores que tiene a pesar de su tendencia a difundir teorías de la conspiración (o tal vez gracias a ella), a fomentar el temor a la acción de gobiernos extranjeros y a tachar a los partidos en el poder de traidores a la nación polaca. Y no era el único. Andrzej Lepper, el ya fallecido líder de Samoobrona, un partido agrario, aspiraba a convertirse en «un dictador positivo», empleaba continuamente retórica antisemítica y lanzaba misteriosas advertencias sobre complots clandestinos dirigidos a derrocar al gobierno polaco. Al mismo tiempo, la Liga de las Familias Polacas, un partido ultraconservador, se dedicaba a advertir a sus seguidores de que la Unión Europea era un agente del comunismo empeñado en subvertir el catolicismo del país.[64]

En definitiva, todas las grandes señales de advertencia que hoy se están disparando en amplias zonas de América del Norte y Europa occidental estaban ya presentes en Polonia mucho antes de que el gobierno de Ley y Justicia pusiera en marcha su ataque coordinado contra las instituciones

democráticas. Si los politólogos hubieran prestado una mayor atención a los síntomas de desconsolidación democrática —síntomas que, como digo, ahora mismo son igual de evidentes en América del Norte y Europa occidental—, la preocupante evolución de los acontecimientos en Polonia no tendría que habernos tomado tan por sorpresa.

Los indicadores del declive democrático estaban ahí, a la vista de todos. Pero los politólogos no se molestaron en mirarlos.

~

Los más idealistas defensores de la democracia liberal consideran que el sistema político con el que están comprometidos tiene algo que lo hace excepcionalmente legítimo.

Su elemento democrático, dicen, garantiza la igualdad de los ciudadanos. En una monarquía, el rey ocupa una posición elevada por encima de sus súbditos en virtud de la casualidad de su noble cuna. En una democracia, sin embargo, todos los ciudadanos tienen un voto, da igual cuál sea el color de su piel o el estatus de sus antepasados.

Por otra parte, su elemento liberal garantiza la libertad de los ciudadanos. En un régimen totalitario, el gobierno puede regular la vida de sus súbditos hasta el más mínimo detalle y castigarlos caprichosamente. En un sistema político liberal, por el contrario, el alcance de la ley es limitado y los ciudadanos están protegidos contra las injerencias arbitrarias en sus vidas.

Lo genial de la democracia liberal, pues, es su capacidad para respetar esos dos valores al mismo tiempo.

Esta descripción de la legitimidad democrática peca de cierto exceso de ingenuidad. Mientras el dinero pueda comprar poder con facilidad, es comprensible que muchos ciudadanos sientan que la igualdad política no deja de ser una promesa hueca. Y mientras la necesidad económica restrinja seriamente las opciones entre las que esos ciudadanos pueden elegir, muchos de ellos tendrán la (igualmente comprensible) sensación de que la libertad que se les prometía no se ha llegado a materializar. Para estar a la altura de las más exaltadas pretensiones de sus adeptos, la democracia liberal debe inscribirse en un contexto más amplio de justicia social y económica, y

conseguir que los ciudadanos sientan que verdaderamente tienen el poder. Aun así, mi sensación es que esa muy aproximada explicación de lo que hace que nuestro sistema político sea especial es más acertada que errónea: para cualquier persona que se sienta hondamente comprometida tanto con la libertad como con la igualdad, la democracia liberal tiene un atractivo sin rival conocido.

Pero aunque estoy convencido de que la democracia liberal es más legítima que otras formas de gobierno, soy escéptico en cuanto a que eso también explique por qué ha gozado históricamente de tan generalizado apoyo.

Quienes creen en la legitimidad sin parangón de la democracia liberal tienden a suponer que esa misma legitimidad ha sido también la razón principal de su éxito: al conseguir que cada ciudadano pueda tener voz y voto en la esfera pública y, al mismo tiempo, continuar siendo libre para disfrutar su vida privada —viene a decirnos esa versión de la historia—, solo la democracia liberal puede hacer realidad algunas de las aspiraciones humanas más profundas y universales. De ahí que haya ido conquistando poco a poco el mundo en que vivimos y que vaya a dominar también su futuro (o, al menos, esa esperanza tienen ellos).

Los datos más fiables de los que disponemos, sin embargo, parecen indicar que los ciudadanos desarrollaron cierta lealtad hacia su sistema político porque este mantenía la paz y les garantizaba unas buenas fuentes de ingresos, no porque sintieran un compromiso profundo con los principios más fundamentales en los que se sustentaba. La democracia liberal, vendría a decirnos esta tesis, solo ha sido dominante como lo ha sido porque ha logrado proporcionar esos buenos resultados.

Pero, de ser eso cierto, la adhesión popular a la democracia liberal podría ser mucho más superficial y frágil de lo que sus partidarios más idealistas suelen imaginar. Y eso explicaría muchas de sus actuales tribulaciones. A medida que las democracias liberales han ido perdiendo capacidad de procurar esos bienes para sus ciudadanos, han ido entrando en una profunda «crisis de rendimiento». Los movimientos populistas que prosperan por todo el mundo están aprovechando ahora esa crisis para desmantelar elementos claves del sistema.

Pocos precedentes históricos existen que puedan indicarnos qué tal les va a las instituciones en las democracias presuntamente consolidadas cuando dejan de procurar esos bienes para sus ciudadanos. Tal vez se mantengan estables aun cuando sus economías se estanquen y su poder decaiga. Pero, para evitar sorpresas desagradables, debemos afrontar la posibilidad de que no lo hagan, e investigar por qué, de entrada, los ciudadanos se han desilusionado tanto con el rendimiento de la democracia liberal.

Parte II

ORÍGENES

Si mido la temperatura a la que el agua hierve en Nueva York, en mi cuaderno anotaré cien grados centígrados. Si hago parecidas mediciones en Boston, Miami, Seattle o San Diego, seguiré registrando el mismo resultado. Podría seguir con ello todo lo que quisiera y no haría más que confirmar lo que todos los manuales ya me habrían enseñado: que el agua hierve a cien grados.

Pero las cosas no son tan sencillas como parecen. Si quisiera repetir mi experimento en la cima del Mont Blanc, el agua herviría a unos ochenta y cinco grados. Y si arrastrara mi tetera conmigo hasta la cumbre misma del Everest, al ponerla a hervir, el agua alcanzaría su punto de ebullición antes, a unos setenta grados.[1]

En resumen, la asociación fija entre temperatura y punto de ebullición del agua se cumple siempre y cuando la altitud a la que realizo el experimento —y, con ella, la presión del aire a mi alrededor— se mantenga constante. Si solo llevo a cabo el experimento en ciudades costeras, no me daré cuenta de que el resultado que obtengo depende de condiciones de las que ni siquiera era consciente. En cuanto el contexto cambie, también lo hará la relación entre causa y efecto.

Todo esto viene muy al caso si queremos reflexionar seriamente sobre cuál puede ser el destino que le aguarda a la democracia. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, las democracias han demostrado una estabilidad increíble en muchas zonas del mundo. Hemos caído así en la trampa de suponer que van a quedarse para siempre. Pero actualmente hay sobrados motivos para temer que el mundo que conocemos sea tan contingente como lo es el punto de ebullición del agua (o el interés del granjero por seguir dando de comer al pollo de Bertrand Russell).[2]

Si queremos aventurar una hipótesis bien fundada acerca del futuro de la democracia, tendremos que determinar cuáles son sus «condiciones de validez», como las llaman los politólogos.[3] Es decir, esa estabilidad pasada de la democracia ¿vino causada por condiciones que ya no están presentes?

Y, si es así, ¿cómo explica la erosión de esas condiciones lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas, y cómo podría esto ayudarnos a averiguar cómo escapar al sangriento destino que parece aguardarnos?

Desde mi punto de vista, tres son, al menos, esas condiciones de validez:

- En primer lugar, el papel dominante de los medios de comunicación de masas limitaba la distribución de ideas extremas, creaba un conjunto de hechos y valores compartidos, y ralentizaba la difusión de noticias falsas. Pero el posterior auge de internet y de las redes sociales ha debilitado a los tradicionales guardianes de la información *(gatekeepers)* y ha dado poder a movimientos y políticos otrora marginales.
- En segundo lugar, durante toda esta pasada historia de estabilidad democrática, la mayoría de los ciudadanos disfrutaron de un rápido aumento de su nivel de vida y mantuvieron unas elevadas esperanzas de mejora de su porvenir. Hoy, en muchos lugares, los ciudadanos no aspiran más que a mantenerse a flote y temen penalidades incluso mayores en el futuro.
- Y, en tercer lugar, casi todas las democracias estables se fundaron como naciones monoétnicas o bajo el dominio de un único grupo étnico. Actualmente, ese dominio está cada vez más en entredicho.

Los capítulos siguientes están dedicados a explicar cada una de esas tres causas con detalle. Pero aunque es importante buscar y detectar los grandes cambios que posiblemente estén relacionados con la estabilidad de la democracia, también tenemos que evitar cuatro errores comunes que están muy extendidos en el reciente debate periodístico —y académico— sobre el auge del populismo.

Muchos analistas han explicado historias de sus respectivos contextos locales y se han centrado en factores que solo se cumplen en esos países en concreto. Pero el ascenso del populismo es un fenómeno global y, como tal, nos exige buscar causas que sean comunes a la mayoría de los países donde el populismo se ha extendido en estos últimos años.

Muchos analistas han dado por supuesto que la explicación de las revueltas populistas debe buscarse en hechos y fenómenos recientes, e invocan la Gran Recesión como origen de nuestros males. Pero el populismo inició su ascenso mucho antes de 2008, por lo que nuestras explicaciones deberían centrarse en tendencias a más largo plazo.

Muchos analistas han supuesto que las diferentes causas del fenómeno son incompatibles entre sí y han mantenido debates especialmente intensos en torno a si la crisis política a la que ahora nos enfrentamos se explica por factores económicos *o* por motivos culturales. Pero lo cierto es que las ansiedades económicas y las culturales se refuerzan mutuamente, por lo que deberíamos dejar de buscar explicaciones «monocausales».

Por último, muchos analistas han supuesto también que los factores que impulsan el éxito del populismo se manifestarían de una manera directa y obvia: es decir, que el apoyo de los populistas entre los pobres sería mayor si las explicaciones económicas son las verdaderamente relevantes, y que ese apoyo sería mayor en zonas de elevada inmigración si los que importaran de verdad fueran los factores culturales. Pero como lo que motiva a las personas no solo es su destino particular, sino también el de otras personas, y como dedican tanto tiempo a reflexionar sobre lo que temen del futuro como a valorar sus circunstancias presentes, también necesitamos tener en cuenta otras vías más sutiles e indirectas por las que la ansiedad económica y la animadversión racial pueden canalizarse hacia nuestra escena política.

Capítulo 4

LAS REDES SOCIALES

Hasta la Baja Edad Media, difundir información a un gran número de personas no solo era engorroso, sino que tenía un coste prohibitivo. Para generar una copia de un texto largo, un escriba profesional o un monje tenía que transcribir palabra por palabra el manuscrito original. Para hacer otra copia, tenía que empezarlo todo de nuevo.

Debido a ello, la información escrita solo estaba al alcance de una élite selecta. Compartir un escrito con cincuenta o cien personas era una tarea de envergadura. Compartirlo con miles era una posibilidad reservada exclusivamente a la realeza o al alto clero. Los límites tecnológicos a la difusión de la palabra escrita ayudaban así a preservar la ortodoxia política y religiosa: estando la propagación de ideas tan firmemente bajo el control de prelados y soberanos, era comparativamente fácil acallar la disensión política y la herejía religiosa.

Se explica así por qué la invención de la imprenta moderna fue un hecho tan trascendental. Cuando Johannes Gutenberg creó un sistema de planchas maestras para páginas enteras que podían ser copiadas muchas veces a un coste infinitamente inferior y a una velocidad muy superior, cambió radicalmente las condiciones estructurales de la comunicación. En muy poco tiempo, la comunicación «de uno a muchos» pasó a estar al alcance de un número significativo de personas por vez primera en la historia: cualquiera que tuviera acceso a la tecnología pertinente y al capital necesario podía por fin divulgar sus ideas a miles de personas al mismo tiempo.[1]

Los contemporáneos de Gutenberg captaron enseguida las implicaciones revolucionarias de la imprenta y no eran pocos los que albergaban enormes esperanzas sobre las maravillas que traería consigo. La incrementada facilidad de la comunicación difundiría las ideas, aumentaría el aprendizaje y potenciaría el crecimiento económico.

Algunas de esas esperanzas llegaron a materializarse. Las tesis de Martín Lutero, por ejemplo, se imprimieron unas doscientas cincuenta mil veces en el periodo de unos pocos años; se hace difícil imaginar que Lutero hubiera ejercido tan transformador efecto en el mundo si sus seguidores no hubieran tenido acceso a la tecnología de la impresión masiva. No cabe duda de que la imprenta desempeñó un papel fundamental en el renacer de las ideas —y en el rápido proceso de alfabetización— acaecido en los siglos XVI y XVII.[2]

Pero aunque a la imprenta se le reconoce con justicia el honor de haber sido uno de los inventos más transformadores de la historia de la humanidad, muchas (centenares de miles) fueron y han seguido siendo sus víctimas. Con la difusión de las nuevas ideas religiosas por el continente, se propagó también el conflicto interconfesional. Y cuando las voces discrepantes adquirieron la capacidad de comunicarse con otros seguidores potenciales, también quedaron facultadas para instigar revueltas políticas violentas. En resumidas cuentas, la imprenta propagó muerte, y no solo alfabetización; esparció inestabilidad y caos, además de emancipación.

En los últimos años, unos cuantos autores han comparado la invención de la tecnología digital —y, en especial, de las redes sociales— con la de la imprenta. Según Clay Shirky, «antes había que tener una antena de radio o de televisión, o una imprenta. Ahora no se necesita más que acceso a un cibercafé o a la biblioteca del barrio para hacer públicas tus ideas».[3] Heather Brooke viene a decir lo mismo con mayor concisión si cabe: «Nuestra imprenta —escribió— es internet. Nuestros cafés son las redes sociales».[4]

Es fácil desestimar de entrada unas afirmaciones de tan gran alcance como estas —dicen quienes las critican— teniendo en cuenta que, en todas las generaciones, ha habido pensadores de primera fila que han sido

prisioneros del *cronocentrismo*, que es la tendencia a creer erróneamente que la época y el momento propios del observador tienen algún tipo de trascendencia central en la historia de la humanidad.[5] ¿No podría ser que la idea generalizada de que inventos tan recientes como Twitter o Facebook representen un cambio fundamental en la historia humana pecase de ese mismo sesgo cognitivo?

Es importante no bajar la guardia ante el riesgo de caer en el cronocentrismo. Pero también cuesta mucho negar la existencia de paralelismos reales entre la invención de la tecnología digital y la invención de la imprenta moderna: como ya hiciera en su día la imprenta, la llegada de internet y de las redes sociales transformó en un nivel fundamental las condiciones estructurales de la comunicación.

En los quinientos años transcurridos desde la invención de la imprenta, el coste y la velocidad de la comunicación de uno a muchos cayeron significativamente, aun a pesar de la radical expansión de su contenido y de su alcance geográfico. En 1992, por ejemplo, era ya posible proyectar el sonido y la imagen de cualquier acontecimiento al instante a miles de millones de telespectadores de todo el mundo.

Pero hay dos aspectos importantes en los que aquel mundo de la CNN se parecía mucho todavía al mundo de Martín Lutero. Uno era la existencia de un número limitado de comunicadores centralizados (de cadenas de televisión y de radio, periódicos y editoriales) y un gran número de receptores. El otro era que los costes de emisión eran suficientemente considerables como para que la mayoría de los ciudadanos no tuviesen la capacidad de convertirse ellos mismos en emisores a una escala más o menos significativa; para transformarse en un formador de opinión, un individuo tenía que gastar mucho dinero o convencer a los dueños de los medios de distribución de la información para que lo dejaran aparecer en sus plataformas.

En el cuarto de siglo transcurrido desde 1992, esas dos limitaciones han desaparecido.

Para empezar, la red informática mundial conocida como World Wide Web fue la primera que hizo posible que la mayoría de los habitantes de los países desarrollados pudieran difundir sus opiniones de un extremo a otro del planeta: una vez publicado en un sitio web a muy bajo coste, el contenido así

creado por un usuario estaba ya disponible para cualquier otro que manejara un dispositivo con conexión a internet. Se había democratizado por fin —y más de quinientos años después— aquel potencial inherente a la comunicación de uno a muchos.

Esta diferencia de grado pronto derivó también en una diferencia cualitativa. Aunque los sitios web eran accesibles para cualquiera que pudiera conectarse a internet, al principio seguían compartiendo una serie de importantes propiedades con las viejas plataformas de distribución de contenidos. En teoría, tan fácil era entrar en <pepitoperez.com> como en <nytimes.com>; en la práctica, sin embargo, a Pepito Pérez le resultaba muy difícil conseguir que sus lectores potenciales de todo el mundo tuvieran siquiera conocimiento de la existencia de su sitio web.

Las redes sociales redujeron esa última limitación. En Facebook y en Twitter, el contenido creado por cualquier usuario puede ser rápidamente publicado de nuevo por cualquier otro con quien aquel esté conectado. Si dicho contenido es suficientemente novedoso o interesante, incluso alguien con pocos contactos puede llegar a un público muy amplio en cuestión de minutos.

Mediante la creación de una red difusa de usuarios que estén intercomunicados todos entre sí, los también llamados *medios sociales* modificaron la dinámica misma de la distribución de contenidos. Existe un motivo por el que términos como *meme* o *viralidad* son nuevas incorporaciones a nuestro vocabulario cotidiano: solo pudieron adquirir la importancia que ahora tienen en un mundo en el que cualquiera pueda atraer la atención de un puñado de iguales que luego compartan ese trabajo con un público global.

Una manera de exponer ese argumento es diciendo que, gracias al auge de las redes sociales, la comunicación de uno a muchos se ha transformado ahora en una «comunicación de muchos a muchos».[6] Y tal vez la característica más significativa de la comunicación de muchos a muchos sea que los actores más grandes de esa escena han perdido ya mucha de su anterior capacidad para controlar la propagación de ideas o mensajes que sintonizan con la gente corriente.

Veinticinco años atrás, los emisores tradicionales podían frenar la difusión de vídeos que podían ser de interés para millones de personas —ya fueran imágenes de las divertidas travesuras de un gato doméstico, ya fueran grabaciones de unas brutales decapitaciones perpetradas por una organización terrorista— simplemente negándose a emitirlos. Hoy en día, los emisores (las cadenas de televisión) tradicionales pueden negarse (y a veces se niegan) también a emitir contenidos así. Pero su función como *gatekeepers* prácticamente ha desaparecido: cualquier contenido suficientemente viral se difundirá probablemente a través de las redes sociales tanto si los emisores tradicionales deciden mostrarlo en sus medios como si no.[7]

Todo esto nos indica que la invención de la tecnología de la comunicación digital va a tener realmente un gran efecto político. Pero ¿servirá esa pérdida de influencia de los antiguos guardianes de la información para empoderar a los ciudadanos de a pie y potenciar la democracia, o ha servido ya para dañar a la propia democracia al dar a los populistas la plataforma que necesitan para envenenar nuestra escena política?

EL AUGE DE LOS TECNOOPTIMISTAS

Hasta hace pocos años, la mayoría de los observadores se mostraban muy optimistas al respecto. Por ejemplo, en uno de los más sutiles análisis tempranos de lo que él mismo (muy reveladoramente) llamó la «tecnología de la liberación», Larry Diamond sostuvo que las nuevas herramientas digitales otorgan a los ciudadanos la facultad de «publicar informaciones, denunciar actos delictivos, expresar opiniones, movilizar protestas, supervisar elecciones, escudriñar la labor del gobierno, profundizar en la participación y expandir los horizontes de la libertad».[8] En Malasia, según él mismo mostró, las herramientas digitales habían permitido a los activistas prodemocráticos publicar noticias críticas con el régimen autoritario. En países como Uzbekistán o Filipinas, o como Venezuela o Nigeria, habían hecho posible que ciudadanos corrientes exigieran responsabilidades a sus gobiernos relatando crónicas de sus abusos. Incluso en China, donde el Partido Comunista había instituido un «gran cortafuegos», los usuarios estaban

eludiendo con grandes dosis de creatividad la dura censura del régimen: «La comunicación y la conexión en red son demasiado voluminosas —señalaba Diamond— como para que el Estado pueda vigilarlas y censurarlas exhaustivamente».[9]

El artículo de Diamond se publicó en el verano de 2010. Ese mismo año, llegó un momento en que sus previsiones más optimistas parecieron materializarse. Multitudinarias manifestaciones de protesta tomaron las calles en Túnez, en Egipto, en Libia y, finalmente, también en Siria. Diversos autócratas que llevaban tiempo en el poder fueron así derrocados en esos países. Y en todos y cada uno de ellos, los manifestantes habían usado las redes sociales para criticar al gobierno, para informar de las duras medidas represivas tomadas por este y para coordinar el momento y el lugar de sus protestas. Twitter, según escribió Andrew Sullivan en *The Atlantic*, había demostrado ser una «crucial herramienta de organización».[10] En los conflictos del siglo XXI, abundaba en el tema Nicholas Kristof en *The New York Times*, «los esbirros del gobierno que disparan balas» se enfrentarían cada vez más a la resistencia de «unos jóvenes manifestantes que disparan tuits».[11]

Los efectos positivos de la tecnología digital se dejaban sentir con creciente intensidad en ámbitos más cercanos también. Así lo defendía Clay Shirky en su libro *Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations [Aquí llega todo el mundo: el poder de organizarse sin organizaciones]*, donde argumentaba que, incluso en países como Estados Unidos, el poder de la comunicación de muchos a muchos facilitaba enormemente la coordinación de los activistas.[12] Tras el estallido de la crisis financiera, esa mayor facilidad de organización parecía estar demostrándose de múltiples maneras distintas. Así, en la derecha, el Tea Party nació inspirado por una diatriba viral contra la CNBC y recurría en abundancia a herramientas en línea que iban desde <meetup.org> hasta listas diversas de correo electrónico. En la izquierda, Occupy Wall Street y Black Lives Matter se apoyaron mucho en las redes sociales para reunir y coordinar a una red flexible de activistas en todo el país. A ambos lados del espectro político, una ciudadanía revitalizada parecía ser la demostración palpable del potencial democratizador de las redes sociales.[13]

El mencionado potencial de tales medios sociales para profundizar y extender la democracia parecía estar fuera de toda duda, y los divulgadores de tal tesis comenzaron entonces a formular afirmaciones más ambiciosas aún sobre este. Thomas Friedman, haciéndose eco de la opinión más extendida en su momento, y con su expresivo estilo característico, escribió en mayo de 2014 que aquella «gente de las plazas» tendría una influencia positiva en la política mundial:

> A medida que la revolución de la informática y la globalización se democratizan y se difunden —a medida que hemos ido pasando de los ordenadores portátiles para una élite a los teléfonos inteligentes para todos, o de redes limitadas a los pocos afortunados de Davos a un Facebook para todos, o de que los ricos sean los únicos cuya voz se oiga en los salones del poder a que todo el mundo pueda ahora replicar a sus líderes en Twitter—, va naciendo una nueva fuerza política global.
>
> La forman una mayoría de jóvenes que aspiran a un mayor nivel de vida y de libertad, que buscan reforma o revolución (dependiendo del gobierno que les haya tocado), que están interconectados a través de sus concentraciones masivas en las plazas físicas o a través de unas plazas virtuales o a través de ambas cosas, y a quienes no une tanto un programa común como un rumbo compartido hacia el que quieren que sus sociedades avancen.[14]

LA VENGANZA DE LOS TECNOPESIMISTAS

Todavía en 2014 o 2015, la opinión general sobre las redes sociales era mayoritariamente muy positiva. Desde entonces, ha dado un vuelco absoluto.

Ni que decir tiene que hubo advertencias desde un primer momento. En su artículo «Liberation Technology», el propio Larry Diamond se había preocupado ya de dejar claro que de las nuevas herramientas digitales tanto podían hacerse malos usos como buenos, pues, a fin de cuentas, también «la radio y la televisión podían ser vehículos para el pluralismo informativo y el debate racional, como podían ser requisadas por regímenes totalitarios para sus fines de movilización fanática y control estatal total», recordaba él.[15]

En años siguientes, diversos escépticos, desde Evgeny Morozov hasta Cass Sunstein, ahondaron en aquella vertiente crítica insinuada por Diamond. Los mayores defensores de Twitter y Facebook, argumentó Morozov, creían que estas nuevas tecnologías reformarían el contexto local, conectarían a antiguos enemigos y permitirían superar odios del pasado. Pero, en realidad, la posibilidad inversa parecía aproximarse más a la verdad: los diferentes

contextos locales serían los que condicionarían y darían una nueva forma a herramientas como Facebook, que podrían ser emancipadoras en ciertos contextos, pero reforzarían el poder autocrático —o incitarían al odio racial— en otros.[16]

También Sunstein tenía en mente las fuerzas centrífugas desatadas por internet: puesto que las redes sociales permiten que cada persona se encargue de procurarse sus propias fuentes de información, decía él, lo normal sería que dieran pie a la aparición de «cámaras de resonancia» en las que los usuarios se rodearían en la práctica de otros usuarios que tuvieran su misma opinión política. Se produciría así la paradoja de que la mayor facilidad de comunicación con cualquier persona del mundo terminaría traduciéndose en una comunicación muy reducida entre los bandos enfrentados a propósito de las más destacadas fracturas sociales y políticas.[17]

Cuando empecé a impartir una asignatura titulada «La democracia en la era digital» en la Universidad de Harvard allá por la primavera de 2013, la mayoría de los alumnos consideraban interesantes aquellas advertencias, pero también un tanto incomprensibles. A fin de cuentas, todavía suscribían una visión favorable de las redes sociales en la que el potencial liberador de estas era lo primordial.

Entonces se inició la ascensión de Donald Trump.

A lo largo de la nada convencional campaña electoral de Trump, se hizo evidente el importante papel que las redes sociales estaban teniendo para que el candidato pudiera saltarse los circuitos marcados por los tradicionales guardianes de los flujos de información en la política estadounidense. En épocas previas, las cadenas de televisión probablemente se habrían negado a emitir sus mentiras flagrantes o sus invectivas contra los inmigrantes, las minorías religiosas y los rivales políticos. Pero gracias a Twitter, Donald Trump no necesitó la infraestructura de los medios de comunicación tradicionales y pudo tuitear mensajes directamente a sus millones de seguidores. Y cuando lo hizo, las grandes cadenas y emisoras establecidas se vieron ante una cruda disyuntiva: ignorar el tema de conversación dominante en el país y arriesgarse a la irrelevancia, por un lado, o comentar todos los

tuits a fondo y, con ello, actuar como amplificadores del mensaje de Trump por mucho que hicieran de él un examen ostensiblemente crítico, por el otro. Y como seguramente cabía esperar, optaron por lo segundo.[18]

El canal de Twitter de Trump le proveyó de un arma poderosa. Pero su efecto se vio aumentado por una difusa red de lugartenientes, algunos de los cuales actuaban por razones ideológicas, mientras que otros lo hacían por motivos eminentemente económicos. El más destacado de ellos fue Breitbart, un medio informativo cuyo rápido auge mostró hasta qué punto se había democratizado la comunicación de masas en la era digital. Con apenas unos pocos años de vida, ese sitio podía rivalizar en magnitud e influencia con empresas mediáticas de mucha más larga tradición. Y como no se sentía limitado por las restricciones de estas últimas, se dedicó a publicar reiteradamente noticias que destacaban más por su carácter incendiario que por su veracidad.[19]

Breitbart, a su vez, no era más que el sitio que ocupaba la cúspide de toda una numerosa constelación de webs más pequeñas que difundían mentiras y rumores con mayor desenfreno si cabe. Muchas de las noticias fabricadas y divulgadas en portales como Vdare, InfoWars y American Renaissance eran tan inverosímiles o sensacionales que costaba entender que alguien pudiera creérselas. «Revuelo mundial: el papa Francisco apoya a Donald Trump como candidato a presidente», exclamaba uno de aquellos titulares.[20] «Bomba informativa: descubierta la red satánica de Hillary Clinton», se proclamaba desde otro.[21]

Pero lo cierto es que una parte significativa de la población se las creyó. Según un sondeo de agosto de 2016, un 42% de los electores registrados habían llegado a creer que Hillary Clinton era «maligna».[22] Más sorprende aún un dato registrado en Carolina del Norte, unos días después de que Trump se refiriera a Clinton llamándola «el demonio», pues allí un 41 % de sus partidarios decían creer que aquello era literalmente cierto.[23]

Si tan increíbles ideas resultaron tan fáciles de creer por muchos, es debido a que las nuevas posibilidades abiertas por la comunicación de muchos a muchos se entrecruzaban con el surgimiento y ascenso de cámaras de resonancia cada vez más estrechas. En algunos rincones de internet —que es lo mismo que decir en los canales de Facebook y en las cronologías de

Twitter de una parte significativa de la población estadounidense—, ninguna palabra negativa referida a Hillary Clinton parecía suficientemente descabellada como para que no fuera verdad.

Gracias, en muy buena medida, al vilipendio constante dedicado a su oponente, Donald Trump venció por un estrecho margen. En los meses que siguieron a esa victoria electoral, la opinión mayoritaria sobre el papel de las redes sociales dio un vuelco. Si, hasta pocos años antes, los medios sociales habían sido caracterizados como los nuevos salvadores, de pronto pasaron a ser considerados poco menos que ángeles exterminadores. Convertidos los incansables elogios del potencial liberador de la tecnología digital en no menos infatigables augurios acerca del desastre al que nos abocaban, las redes sociales pasaron a ser declaradas el enemigo más peligroso de la democracia liberal.

> Ya va siendo hora —escribió Farhad Manjoo en *The New York Times* a los pocos días de las elecciones— de que vayamos admitiendo que las redes sociales se están convirtiendo en realidad en las fuerzas trascendentales que sus valedores prometían hace tiempo que serían, y también de que nos vayamos alarmando, más que emocionando, ante los enormes cambios sociales que podrían desatar [...]. En cierto sentido, ahora estamos viviendo una especie de versión estrambótica de la utopía que algunos *techies* imaginaron que las redes sociales propiciarían algún día.[24]

CERRAR LA BRECHA

A Manjoo no le falta razón: las redes sociales tienen un potencial negativo nada desdeñable. Pese a todo, peca de simplismo cuando afirma que los medios sociales son una «fuerza trascendental» que nos aboca sin remedio a una horrible distopía.

La realidad que quiero que se entienda acerca de las redes sociales es que estas no son necesariamente buenas ni malas para la democracia liberal. Tampoco son inherentemente fortalecedoras ni debilitadoras de la tolerancia. Nada de eso. Lo que hacen las redes sociales es cerrar la brecha tecnológica entre quienes están «dentro» del sistema y quienes están «fuera» de él.

Hasta hace pocas décadas, los gobiernos y las grandes empresas mediáticas ejercían un oligopolio sobre los medios de comunicación de masas. La consecuencia de ello era que podían fijar los criterios del discurso

político aceptable. En una democracia que funciona, esto podía significar un rechazo a la publicación de contenidos racistas, de teorías de la conspiración o de mentiras puras y duras, y, con ello, una estabilización de la democracia liberal. En una autocracia, eso mismo podía implicar la censura de toda crítica al dictador y, con ello, un freno a todo posible avance de la democracia liberal.

Con el auge de las redes sociales, esa ventaja tecnológica se ha disipado prácticamente por completo. Debido a ello, en los países autoritarios, la oposición democrática cuenta ahora con muchas más herramientas para derrocar a un dictador largo tiempo instalado en el poder. Pero, por la misma razón, los vendedores de odio y los mercaderes de mendacidad lo tienen mucho más fácil para socavar los cimientos de las democracias liberales.

Los mecanismos que impulsan esa transformación han sido desvelados en uno de los estudios más memorables que se han hecho sobre el auge de la tecnología digital. Unos años atrás, Jan Pierskalla y Florian Hollenbach examinaron qué efecto había tenido la introducción de la tecnología de los teléfonos móviles en regiones africanas remotas en las que había sido extraordinariamente difícil instalar otros sistemas de comunicaciones hasta entonces.

Los economistas esperaban que los resultados fueran positivos. Con la difusión de información, la población podría obtener mejor información médica, por ejemplo. También sería más sencillo transportar bienes hasta regiones distantes donde estos eran desesperadamente necesarios. La mejora de la conexión con el centro metropolitano podría incluso facilitar el acceso a la educación y reducir las tasas de analfabetismo. Y lo cierto es que algunos de esos efectos positivos sí se materializaron. Pero, como Pierskalla y Hollenbach mostraron, también se pudo apreciar una consecuencia negativa: en las áreas donde se introdujo la cobertura de telefonía móvil, los niveles de violencia política aumentaron.[25]

Pierskalla y Hollenbach señalaban que, con anterioridad a la introducción de los teléfonos móviles, las fuerzas gubernamentales disponían de una enorme ventaja tecnológica sobre los grupos rebeldes. Gracias a su acceso a herramientas como las líneas de telefonía fija o las radios militares, podían superar dos dificultades prácticamente prohibitivas para los

insurgentes. La primera era el problema de la acción colectiva: por muy soldados del gobierno que sean, estos militares también tienen incentivos para eludir sus obligaciones cuando están destacados en destinos alejados de los cuarteles. Pero sus superiores disponían de los medios necesarios para supervisar sus actividades diarias y les transmitían órdenes de forma regular, lo que reducía los casos de dejadez o abandono del deber. La segunda era el problema de la coordinación: cuando entran en combate, para los soldados es crucial saber en tiempo real qué están haciendo los demás componentes de sus tropas y cuál es la ubicación de las fuerzas enemigas. Y eso era algo que las fuerzas gubernamentales podían conseguir gracias al uso de las radios militares, lo que potenciaba su agilidad táctica.

Los grupos rebeldes, sin embargo, carecían de acceso a herramientas comparables y chocaban una y otra vez con inconvenientes de gran envergadura. Los soldados rasos, prestos a cobrar de los líderes rebeldes, pero poco dispuestos a arriesgar la vida, solían rehuir sus obligaciones. Para empeorar el panorama, cuando sí entraban en combate, solían sufrir más bajas porque no tenían capacidad suficiente para coordinarse con sus compañeros de armas. De ahí que la mayoría de los enfrentamientos entre los gobiernos y las guerrillas rebeldes se saldasen con victorias aplastantes de los primeros, lo que contribuía a contener las rebeliones y a reducir la incidencia total de conflictos armados.

La introducción de la telefonía móvil cambió todo eso. Los líderes rebeldes emplearon la nueva tecnología para transmitir órdenes continuas a sus subordinados y para coordinar sus acciones durante las batallas. De pronto, los grupos rebeldes pasaron a rivalizar con las tropas gubernamentales en espíritu de combate y agilidad táctica. Debido a esa igualación de fuerzas, muchos conflictos han tendido a extenderse en el tiempo y han sido considerablemente más mortales y sangrientos que otros precedentes.[26]

El motivo real por el que los teléfonos móviles incrementaron la incidencia de la violencia en regiones africanas remotas, pues, no es que la tecnología digital favorezca más a los extremistas que a los moderados, o al mal más que al bien. Es otro más prosaico: al cerrar la brecha que distanciaba

a los que estaban en el poder de los que estaban fuera de este, favoreció a los rebeldes frente al *statu quo*, y favoreció a las fuerzas de la inestabilidad frente a las fuerzas del orden.

Y aquellos primeros teléfonos móviles que solo eran capaces de establecer llamadas y enviar mensajes SMS no se pueden comparar con los teléfonos inteligentes con los que hoy se pueden difundir mensajes a millones de personas a través de Twitter o de Facebook. Tampoco las regiones africanas remotas donde la capacidad de acción de los Estados es baja se pueden comparar con las democracias desarrolladas, donde las autoridades conservan un control más firme. Aun así, el estudio de Pierskalla y Hollenbach puede ayudarnos a entender mejor los mecanismos que han hecho posible que la tecnología digital remodelara la política en democracias como Estados Unidos o Francia: hubo un tiempo, nada lejano por cierto, en que los aspirantes a políticos precisaban de acceso a grandes recursos y a organizaciones ya asentadas para superar ciertos problemas claves de coordinación y acción colectiva; ahora cuentan con los instrumentos necesarios para llegar hasta sus colaboradores potenciales, motivarlos para la actividad política y coordinar sus acciones. La ventaja tecnológica de la élite política ha quedado así drásticamente acortada tanto en Míchigan y Dakota del Sur como en Kenia y Nigeria.

Desde esa perspectiva, podemos comprender mejor fenómenos como la Revolución Verde en Irán, el uso de las redes sociales por parte de Estado Islámico, la Primavera Árabe y la elección de Donald Trump. Lo que muchos observadores consideraron una paradoja —que las redes sociales pudieran tener efectos tan positivos en ciertos contextos y tan negativos en otros— es el resultado de una misma dinámica de fondo: al empoderar a quienes están marginados del poder, la tecnología digital desestabiliza a las élites de los gobiernos de todo el mundo y acelera el ritmo del cambio. Además, es probable que esos efectos sean algo con lo que tengamos que convivir mucho tiempo.

Una docena de años después de la invención de la imprenta moderna, esa nueva tecnología no había salido aún de la ciudad de Maguncia. Solo una minúscula proporción de la población humana mundial había tenido alguna vez un libro impreso en sus manos. La revolución de la comunicación y la política que estaba por venir aún no había afectado a una inmensa mayoría de las cosas.[27]

Sin embargo, una docena de años después de la invención de Facebook, esta nueva tecnología se ha extendido a todos los rincones del planeta. Unos 2.000 millones de personas usan activamente dicha plataforma. La revolución consiguiente en las comunicaciones es ya un rasgo fundamental de nuestra realidad política.[28]

Es demasiado pronto aún para predecir si, con la perspectiva que nos dará el tiempo dentro de docenas o centenares de años, consideraremos que todo esto ha cambiado el mundo para bien o para mal. Pero poca duda cabe de que, a corto plazo —que es como decir para el resto de nuestra vida—, hará que el mundo sea más caótico.

En estos últimos años, han sido los populistas quienes han sacado más eficaz partido a la nueva tecnología para minar los elementos básicos de la democracia liberal. Sacudidas las cadenas del antiguo sistema mediático que limitaban su acción, han querido (y han podido) decir lo que hiciera falta para salir elegidos, por lo que no han reparado en mentir, confundir e incitar al odio contra conciudadanos suyos.

Tal vez su retórica resulte imparable. Como me dijo aquel parlamentario estatal estadounidense a quien me referí antes, es difícil que un político racional venza en un debate dando respuestas de tres oraciones completas cuando su rival ofrece respuestas de una sola frase, sobre todo, si además puede luego propagar la onda expansiva de su simplista enfoque por todo Twitter y todo Facebook.

Pero igual que los activistas prodemocracia que usaron las redes sociales para derrocar a dictadores subestimaron lo difícil que la tarea de consolidar su victoria iba a resultar, también los populistas hoy en alza podrían tener que enfrentarse todavía a un futuro tecnológico más complicado de lo que esperan. «Quien esté ganando en este momento —escribió George Orwell en una ocasión— siempre nos parecerá invencible.»[29] Pero en cuanto los

populistas conquisten el gobierno y comiencen a incumplir muchas de sus promesas, puede que tengan que probar de su propia medicina cuando se enfrenten al potencial que esas mismas redes sociales encierran para empoderar a quienes estén entonces marginados por su poder y se enfrenten a él desde fuera.

Capítulo 5

EL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO

Desde el punto de vista económico, los últimos trescientos años han sido una aberración.

Durante la mayor parte de la historia, apenas si ha habido crecimiento económico. En los miles de años transcurridos entre la fundación de Atenas y la invención de la máquina de vapor, el crecimiento anual medio no superó un modestísimo 0,1%. Y buena parte de ese crecimiento se debió a un incremento de la población total, más que a un aumento del nivel de vida del hogar medio.[1]

Dado que el crecimiento era tan lento, rara vez se materializaba progreso económico alguno en el periodo de la duración de la vida de un individuo. Siempre ha habido momentos de abundancia y momentos de escasez; de hecho, la mayoría de nuestros antepasados sintieron el efecto de las inundaciones o de las sequías en sus dietas en un momento u otro de sus vidas. Y, por supuesto, siempre ha habido individuos que, aun teniendo todos los pronósticos en contra, lograron trascender su estatus social de origen y accedieron a una riqueza que, de niños, ni imaginaban. Pero para la mayoría de los seres humanos, durante la inmensa mayoría de las épocas históricas, la economía ha sido un factor esencialmente estacionario: aunque la suerte de una persona podía cambiar de una temporada a otra, su expectativa era morirse igual de rica o (mucho más probablemente) igual de pobre que era el día en que nació.

El crecimiento económico no comenzó a ser una realidad simultánea para muchas personas hasta el siglo XVIII.

Si una economía crece a un ritmo del 0,1% anual durante cincuenta años, acumulará aproximadamente (aplicando la fórmula del interés compuesto) un crecimiento total del 5,1 %. Si crece a un 1 % cada doce meses, terminará creciendo un 64% en medio siglo. Si crece a un 2,5%, totalizará un 344%. De ahí que, cuando la economía comenzó a crecer (en países como Inglaterra) a un 1% anual aproximado en el siglo XVIII, y aceleró ese crecimiento hasta un 2,5% al año (más o menos) durante buena parte del siglo XIX, el efecto acumulado fuesen unas tasas exponencialmente superiores a cualesquiera otras previamente registradas en la historia humana.[2] Por vez primera, millones de personas fueron testigos de una transformación fundamental de la capacidad de la economía —de la facultad básica de su civilización para proveerlas de comida y vivienda, y para producir ropa o incluso bienes de lujo— en el transcurso de sus propias vidas.

Solo había un problema: el grueso de esas ganancias iban a parar a los miembros más ricos de la sociedad, y los momentos de más rápido crecimiento coincidían con los momentos de mayor desigualdad. Entre 1827 y 1851, por ejemplo, la economía inglesa creció aproximadamente un 80%. Pero, durante ese mismo periodo de tiempo, el coeficiente de Gini, que es el indicador convencional de la desigualdad de renta, se incrementó con similar rapidez. En la práctica, Inglaterra pasó, en el plazo de un cuarto de siglo, del nivel de desigualdad de renta registrado en la Islandia de hoy en día al nivel de desigualdad económica propio de la India actual.[3]

Pero, entonces, llegó otra gran aberración desde el punto de vista del conjunto de la historia humana: un periodo de igualdad económica sin precedentes.

En 1928, según datos de Thomas Piketty, en países europeos como Francia o el Reino Unido, el 1% más rico de la población se quedaba con un 15-20% de la renta nacional total (ese porcentaje ascendía al 25% en Estados Unidos). En 1960, la distribución de la riqueza se había «aplanado» considerablemente: en Francia y el Reino Unido, el 1% de habitantes más ricos captaban para entonces menos del 10% de la renta; en Estados Unidos,

tampoco acaparaban más del 12%. De resultas de ello, la mayoría de aquellos ciudadanos experimentaron en el transcurso de su propia existencia un enorme incremento del nivel de vida.[4]

Hablamos de unas mejoras que no eran meras abstracciones. Hoy en día, todavía viven muchas personas que crecieron sin tener una nevera, un coche o una televisión en casa. Ahora tienen nevera, dos coches y un sistema gigante de cine y entretenimiento en casa. El asombroso crecimiento de la economía de las democracias desarrolladas, unido a un periodo de igualdad relativa sin precedentes, transformó la vida cotidiana de esas personas y se materializó físicamente en sus hogares.

Eso era entonces.

En décadas recientes, sin embargo, el progreso económico se ha ralentizado radicalmente en las economías avanzadas.

La economía estadounidense creció a un ritmo medio de un 4% anual durante las dos primeras décadas de la posguerra, pero solo ha crecido un 2% al año en estas dos últimas.[5] La diferencia es aún mayor en Europa occidental: la economía francesa, por ejemplo, creció un promedio del 5% en la era de la posguerra. En estos últimos veinte años, ha registrado un crecimiento anual de solo un 1,5% (la historia muestra una trayectoria igualmente desilusionante en Alemania y otra mucho peor aún en Italia).[6]

Al tiempo que el crecimiento económico total se ha frenado, ha aumentado la desigualdad, que ya venía creciendo con rapidez a ambos lados del Atlántico desde la década de 1980. Así que la mayoría de las economías de América del Norte y Europa occidental no son más igualitarias hoy que en la década de 1930.[7]

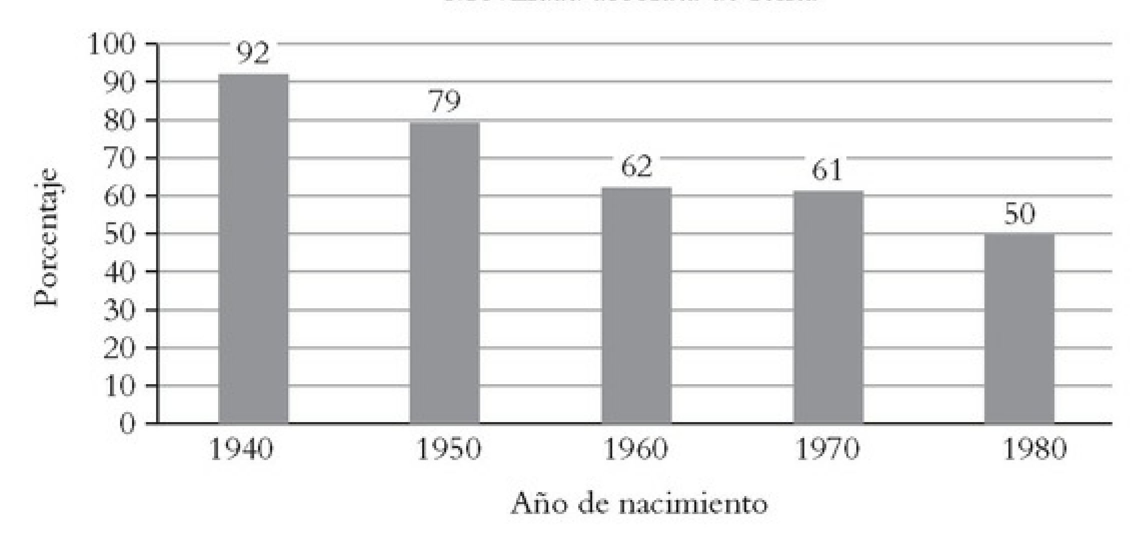
El efecto combinado de una desaceleración del crecimiento y una aceleración de la desigualdad ha sido un estancamiento del nivel de vida de grandes partes de la población. La tasa de crecimiento puede seguir pareciendo aceptable si se compara con la media del total de la historia humana. Pero si se compara con las décadas que marcaron el pico de la estabilidad democrática, representa una caída desastrosa.

La evolución ha sido especialmente cruda en Estados Unidos. De 1935 a 1960, el nivel de vida del hogar estadounidense medio se duplicó. De 1960 a 1985, volvió a duplicarse de nuevo. Desde 1985, se ha mantenido básicamente plano: el hogar estadounidense medio no es más rico ahora que treinta años atrás.[8]

Esta transformación ha resultado especialmente dolorosa para personas de cierta edad, que han visto su progreso económico paralizado al llegar a la madurez. Pero es más alarmante aún para muchas personas jóvenes a quienes se educó en el principio de que su esfuerzo y su trabajo se traducirían en una mejora de su futuro económico, y que, en vez de ello, han visto cómo van quedándose sistemáticamente por debajo de los niveles alcanzados por sus padres y madres a su misma edad.

De hecho, el número de personas que no han experimentado personalmente mejora alguna de su situación económica se ha multiplicado en años recientes, según un brillante estudio de Raj Chetty y su equipo de colaboradores. Cuando a las personas se les pregunta qué tal les va, comentan los autores de este estudio, «muchas veces comparan su propio nivel de vida con el de sus padres».[9] Hasta hace poco, esa comparación —que ellos llaman «movilidad absoluta de renta»— era esperanzadora. Cuando cumplieron los treinta años, más de nueve de cada diez estadounidenses nacidos en 1940 ganaban más que sus padres en aquella misma fase de sus vidas. Sin embargo, solo uno de cada dos estadounidenses nacidos en 1980 gana más que sus padres a esa misma edad.

Una manera de expresar este impactante dato es diciendo que, para un porcentaje en rápido aumento de la población estadounidense, la aspiración a una mejora progresiva de su situación —que es parte integral del sueño americano— se ha convertido en una quimera: hubo un tiempo en el que muy pocos estadounidenses jóvenes se quedaban estancados sin que su nivel de vida mejorara a lo largo de sus vidas; actualmente, son la mitad de ellos quienes permanecen así.[10]



Porcentaje de hijos cuya renta familiar a los treinta años es superior que la renta familiar de sus padres cuando tenían la misma edad, por década de nacimiento, en Estados Unidos

Según un extenso estudio llevado a cabo por *The Guardian*, la misma tendencia de base se observa en amplias zonas de Europa occidental y de América del Norte. «Los *millennials* —se explica en ese reportaje— han sufrido pérdidas en sus salarios reales en Estados Unidos, Italia, Francia, España, Alemania y Canadá.» Y aunque la Gran Recesión agravó esa tendencia, «esta se había iniciado ya en algunos países antes incluso de la crisis financiera de 2008».[11] Está aumentando rápidamente el número de personas jóvenes que, al no poder contar tampoco con que sus padres les abran un fondo fiduciario o les entreguen generosas sumas de dinero a cuenta o a fondo perdido, se enfrentan a la perspectiva de sufrir dificultades económicas mucho mayores todavía.

Más o menos el mismo panorama se nos dibuja cuando nos fijamos en indicadores no económicos claves de la calidad de vida. Tomemos, por ejemplo, la esperanza de vida. En la época de la posguerra, aumentó con rapidez el número de años que una persona podía vivir de media. Si alguien nacido en Estados Unidos en 1900 podía esperar vivir hasta los cuarenta y nueve años (como promedio), alguien nacido en 1950 esperaba alcanzar los sesenta y ocho, un avance de casi dos decenios. Pero, a medida que los avances médicos se fueron estancando, también lo hicieron esas cifras.

Alguien nacido en 2003 puede esperar vivir setenta y siete años de media, solo nueve más que la generación de sus abuelos. Y, como bien han mostrado Anne Case y Angus Deaton, la esperanza de vida de los estadounidenses blancos está cayendo actualmente por vez primera desde que se tienen registros para este dato: «De 1978 a 1998, el índice de mortalidad de los blancos estadounidenses de edades comprendidas entre los cuarenta y cinco y los cincuenta y cuatro años cayó una media de un 2% anual». Desde 1998, sin embargo, «la mortalidad creció medio punto porcentual por año».[12]

El mensaje general sigue siendo, pues, más o menos el mismo, aunque abramos nuestro foco para incluir otros datos más allá de los estrictamente económicos. Si desde el comienzo de la Revolución Industrial y los albores de la democracia moderna, los ciudadanos experimentaron enormes mejoras en sus condiciones de vida con el paso de las generaciones, durante el último cuarto de siglo no han conseguido más que unos avances modestos, en el mejor de los casos.

¿Qué efecto tendrá la frustración consiguiente?

MIEDO AL FUTURO

El veloz progreso económico característico de la era de la posguerra bastó para que la democracia liberal adquiriera muchísima legitimidad. No es que los estadounidenses llegaran nunca a amar a sus políticos ni a considerar Washington D. C. un singular paraíso de la virtud moral. Pero sí es cierto que, mientras el sistema funcionó contribuyendo a la prosperidad personal y colectiva de los ciudadanos, la mayoría de estos se mostraron inclinados a creer que, pese a sus defectos, los políticos remaban a favor de la ciudadanía en general. «No estoy seguro de que me fíe mucho de los políticos —podían decir—. Pero soy el doble de rico de lo que lo era mi padre, y mis hijos probablemente serán el doble de ricos que yo a mi edad. Así que démosles el beneficio de la duda.»

En la actualidad, sin embargo, esa razón residual para dar a los políticos el beneficio de la duda se ha evaporado. Así que no es de extrañar que muchos electores no estén ya dispuestos a creer que la clase política

establecida está de su parte. «He trabajado duro toda mi vida —dirán ahora— y nadie lo diría a juzgar por lo que tengo. Mis hijos probablemente lo van a tener más difícil que yo. Así que, ¿por qué no probar otras alternativas?»

Eso no implica necesariamente que haya una correlación directa entre la dificultad de la situación económica de una persona y su propensión a votar por candidatos populistas. Después de todo, quienes crecieron en un hogar de clase media-baja soñando con ascender algún día hasta la clase media-alta podrían estar igual de frustrados con su ausencia de progreso económico que quienes nacieron pobres y siguen siendo pobres. Además, otros ciudadanos relativamente ricos que tienen la impresión de que su estatus económico es muy precario —porque temen por el futuro de sus hijos, o porque ven cómo ha degenerado la situación en algún vecindario muy próximo al suyo— podrían ser igualmente proclives a votar a los populistas que quienes ya están teniendo serios problemas para llegar a fin de mes. Lo importante, por así decirlo, podría no ser tanto la realidad económica como la ansiedad económica.

Tras analizar datos de las encuestas Gallup realizadas con un total de ciento veinticinco mil estadounidenses adultos sobre las elecciones de 2016, Jonathan Rothwell y Pablo Diego-Rosell llegaron a una conclusión similar. Los marcadores más directos del bienestar económico no son buenos «predictores» de por cuál de los candidatos (Trump o Clinton) votó el encuestado o la encuestada. De hecho, mientras que la media de ingresos familiares de los estadounidenses que dijeron tener una percepción favorable de Trump estaba cerca de los 82.000 dólares anuales, por ejemplo, el promedio de la renta familiar de quienes tenían de él una percepción desfavorable era de poco más de 77.000 dólares al año. Asimismo, los partidarios de Trump tenían «menos probabilidades de estar desempleados o de estar empleados a tiempo parcial» que otras personas de la muestra.[13] En definitiva, la popular cantinela (muy repetida en la mayoría de los medios de comunicación) de que Trump atrajo principalmente a los pobres y humildes no se sostiene por ningún lado.

Muchos hábiles analistas han extraído una conclusión muy simple de tan complejos resultados: la economía, dicen ellos, no sirve para explicar el auge del populismo. «No, la “ansiedad económica” no explica Donald Trump»,

tituló *New Republic*.[14] «Las "ansiedades económicas" no explican la victoria de Donald Trump», tituló a su vez MSNBC.[15] «Por qué no creo que tenga sentido atribuir el apoyo a Trump a la ansiedad económica», insistieron en *Vox*.[16]

Pero cuando nos fijamos menos en los atributos de los votantes concretos y prestamos más atención a los lugares donde viven y los futuros que muy probablemente les toquen en suerte, se hace evidente que los factores económicos sí importan. Para empezar, entre los electores que dicen estar a favor de Trump es menor la probabilidad de encontrar titulados universitarios o profesionales, de lo que se deduce que tienen muchos más motivos para temer algún giro adverso de la fortuna en su situación económica por culpa de la globalización y la automatización.[17] Por otra parte, esos electores tienden a vivir en «comunidades locales con peores datos de salud, menor movilidad social, menor capital social [y] mayor dependencia de los ingresos por prestaciones de la Seguridad Social», lo que implica que tienen muchos más motivos para considerar que a su localidad o a su región le ha estado yendo mal en los últimos años.[18] En resumen:

> Aunque los partidarios de Trump pueden ser relativamente pudientes, proceden de zonas cuyos vecinos soportan otras formas de adversidad. Los habitantes blancos de sus barrios y localidades se mueren antes, y los jóvenes que se crían en familias pobres tienen mayores dificultades para prosperar [...]. Puede que los partidarios de Trump no estén experimentando una angustia económica de primera mano, pero viven en lugares en los que escasean las oportunidades económicas para las generaciones que vienen detrás.[19]

Varios estudios más corroboran esa conclusión básica. Jed Kolko ha demostrado, por ejemplo, que las personas que se dedican a trabajos muy rutinarios y repetitivos —y, por lo tanto, más fácilmente reemplazables por robots o más fáciles de deslocalizar hacia otros países— eran mucho más proclives a votar a Trump.[20] Un indicador más sutil, como es el grado en que los diferentes condados bascularon hacia Trump en 2016 en comparación con el apoyo que habían dado a Mitt Romney (el candidato republicano en las elecciones de 2012), nos cuenta una historia muy parecida. La basculación hacia Trump, según muestra Kolko, fue mucho más fuerte «allí donde el paro era mayor, donde el crecimiento del empleo era más lento, y donde los salarios y los ingresos eran más bajos».

«La ansiedad económica —concluye— está causada por el futuro, no solo por el presente.»[21]

Ben Delsman llega más o menos a la misma conclusión al estudiar si aquellas regiones en las que un elevado porcentaje de empleos están sujetos a la automatización industrial son más susceptibles de votar a los populistas. Sus resultados son contundentes: veintiuno de los veintidós estados más propensos a la automatización votaron mayoritariamente a Donald Trump, mientras que quince de los estados menos propensos a ese proceso votaron a favor de Hillary Clinton. De media, un aumento de un punto porcentual en la vulnerabilidad del estado a la automatización se correspondía con un incremento de tres puntos en el porcentaje de los votos cosechados por Trump.[22]

Todo esto da a entender que el vínculo entre la situación económica y la estabilidad política es mucho más complejo de lo que suele pensarse. No son necesariamente los miembros más pobres de la sociedad quienes se vuelven en contra del sistema político; en parte, no lo son porque son quienes más dependen de las prestaciones que este les proporciona. Tampoco son necesariamente las personas que han vivido personalmente una calamidad económica las más opuestas al sistema, sino más bien las que pertenecen a los colectivos que más tienen que temer: personas que todavía viven en una situación de confort material, pero en cuyos grupos de referencia ha cundido el miedo a que el futuro no les sea propicio.[23]

Puede que a la empresa en la que trabajan le siga yendo bien, pero que hayan sido testigos de cómo otras compañías similares han ido a la quiebra o han sustituido a buena parte de sus plantillas. Puede que sigan estando al día en el pago de sus hipotecas, pero que hayan visto muy de cerca a vecinos desahuciados de sus hogares cuando dejaron de pagarlas. Y puede que su vecindario siga siendo un lugar agradable en el que vivir, pero que sean muy conscientes de que, apenas a un par de kilómetros, otros barrios solo un poco más pobres que el suyo se han deteriorado a marchas forzadas.

Como he dedicado bastante tiempo a hablar con diversos seguidores y partidarios de partidos populistas para mis reportajes, esa es una conclusión que no me sorprende. «La economía está fatal —me decían estas personas—.

Esos malditos políticos se preocupan más por los de fuera que por nosotros, los del país —añadían—. Este país se está yendo al garete.»

Tras prestarles cordial atención, yo, con toda la cautela posible, les preguntaba por su situación personal. «¿Cuál, la mía? —preguntaban entonces, con una sonrisa—. Hombre, no me puedo quejar. Las cosas me van bastante bien.»

Países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Italia continúan siendo increíblemente ricos. Jamás, en la historia de la humanidad, las sociedades habían podido permitirse tanta abundancia para tantos de sus miembros como ahora. En cierto sentido, las personas que hemos tenido la suerte de vivir este privilegio deberíamos estar agradecidas.

Pero esa no es más que una cara de la moneda. La otra es que esos mismos países ya no pueden ofrecer a sus ciudadanos una sensación real de impulso hacia delante. Aunque sus habitantes siguen siendo ricos, sus expectativas de mejora material se han quebrado y ahora tienen bastantes motivos para temer que el futuro les depare noticias aún peores.

Esto plantea grandes interrogantes pendientes de respuesta sobre esta era política que nos ha tocado en suerte. ¿Qué necesitan las democracias liberales para prolongar su admirable historial de estabilidad pasada? ¿Bastará con que procuren una vida digna a sus ciudadanos? ¿O hará falta que hagan efectiva para ellos la vieja aspiración —formulada implícitamente en aquellas muchas décadas de abundancia y rápido crecimiento— de que a cada generación nueva le vaya mucho mejor que a la inmediatamente anterior?

Por enojoso que nos resulte, esas son preguntas que no se prestan a respuestas sencillas.

La historia de la extraordinaria estabilidad democrática vivida hasta nuestros días continúa influyendo en nuestra imaginación política, convenciéndonos de que la democracia liberal no va a desaparecer. Pero durante toda la era dorada de la estabilidad democrática, se cumplieron dos importantes condiciones: las democracias estables eran muy ricas y la mayoría de sus ciudadanos experimentaban una movilidad absoluta de renta en mayor o menor grado. Del mismo modo que el pollo de Russell carece de

la experiencia necesaria para comprender las consecuencias de pesar dos kilos en vez de uno y medio, tampoco nosotros contamos con precedentes históricos que nos ayuden a predecir el efecto que la actual riqueza sin crecimiento podría tener en la dinámica política de la democracia liberal.

Capítulo 6

LA IDENTIDAD

La democracia promete dejar que sea el pueblo quien ejerza el poder. Pero esto nos lleva de inmediato a plantearnos una pregunta engañosamente simple: ¿quiénes forman exactamente ese pueblo?

Durante la mayor parte de la historia de la democracia, la respuesta ha sido muy restrictiva. Muchos nos recuerdan, por ejemplo, que ni las mujeres ni los esclavos fueron jamás contados como ciudadanos de pleno derecho en la antigua Atenas. Pero existía también entonces otra forma de exclusión —de la que se habla mucho menos— posiblemente igual de reveladora: ni los inmigrantes ni sus descendientes podían aspirar tampoco a la ciudadanía ateniense.

En las primeras décadas de existencia de Atenas, ser ciudadano de pleno derecho de la polis era algo reservado únicamente a quienes «habían brotado de la tierra», es decir, a aquellos que tuvieran un padre cuyo linaje pudiera remontarse al reducido número de personas que vivían en la ciudad en el momento en que se fundó. Con el tiempo, a medida que la ciudad se fue haciendo más rica, que florecieron en ella las artes y que un número cada vez mayor de inmigrantes fueron afluyendo a su ágora, la concepción ateniense del *pueblo* se fue volviendo más restrictiva si cabe. Terminaría siendo Pericles, uno de los más célebres oradores de la historia de la democracia, quien propondría una nueva ley de ciudadanía: desde aquel momento, solo los que tuvieran un padre y una madre atenienses podrían acceder a los derechos y los deberes propios de los ciudadanos. Algunas de las figuras más famosas de la historia ateniense incumplían tan estrictos criterios de

ciudadanía, por lo que tuvieron que conformarse con ser *metecos*, extranjeros con residencia legal en la polis. Ni a Aristóteles ni a Diógenes, por ejemplo, les estuvo nunca permitido participar del gobierno de la ciudad.[1]

La República romana fue algo más generosa que Atenas en ese sentido. Los esclavos libertados podían convertirse en romanos. Los hijos de matrimonios mixtos disfrutaban de amplios derechos. Con el tiempo, hasta a los habitantes de algunos Estados aliados se les concedió cierta forma de ciudadanía. Pero dentro incluso de la relativa permisividad de Roma, las leyes de ciudadanía continuaban sirviendo para crear una jerarquía estricta, con compañeros de etnia en la cima y otras personas (consideradas extranjeras) en la base. Por ejemplo, cuando los habitantes de territorios étnicamente similares de toda la región latina fueron ascendidos nominalmente a la categoría de ciudadanos, tuvieron vedado el derecho al sufragio activo y pasivo durante buena parte de la historia de la República, mientras que los habitantes de los territorios situados más allá del Lacio quedaron totalmente excluidos de la ciudadanía.[2]

Solo a partir del momento en que la República romana se convirtió en el Imperio romano —momento a partir del cual la ciudadanía dejó de llevar aparejados los derechos y las responsabilidades del autogobierno colectivo— se volvieron más inclusivas las normas de ciudadanía. En el 212 d. C., el Edicto de Caracalla dio a todos los hombres libres del Imperio (con independencia de su lugar de residencia) los mismos derechos que a los romanos.[3] Pero, para entonces, esos derechos habían perdido ya mucho de su sentido original.

De todo ello parece inferirse una verdad que no nos deja en muy buen lugar: resulta relativamente fácil para un rey o para un emperador ser generoso a la hora de conceder a sus súbditos una igualdad de estatus como ciudadanos, pues, a fin de cuentas, en una monarquía, la ciudadanía no otorga un poder real; pero resulta mucho más difícil para una democracia o para una República con autogobierno ser generosa a la hora de fijar sus normas de pertenencia. Después de todo, en un sistema que permite que el pueblo ejerza el poder, todo aquel que adquiere el estatus de ciudadano tiene voz y voto para decidir el futuro de todos sus compatriotas. Así pues, el hecho de que el Imperio romano adoptase unas reglas más generosas de pertenencia que las

de la República, ¿podría indicar la existencia de cierta conexión entre la democracia y una noción excluyente de la ciudadanía? O, por plantear esa misma pregunta en términos más crudos aún, el ideal del autogobierno, ¿dificulta la posibilidad de que un conjunto diverso de ciudadanos convivan como iguales?

Dos mil años de historia europea aportan considerables indicios en los que apoyar esta última suposición.

Los periodos más célebres por el grado de coexistencia pacífica de grupos étnicos y religiosos diferentes se dieron normalmente bajo la vigilante mirada de algún monarca poderoso. Tanto el Imperio de los Habsburgo como el Imperio otomano, por ejemplo, prosperaron, en parte, porque aprovecharon la diligencia y la creatividad de unos súbditos que profesaban muy variados credos y hablaban lenguas más variadas aún si cabe.[4] Sin embargo, el fervor nacionalista que se inició en los siglos XVIII y XIX casi siempre adoptó la forma de un anhelo no solo democrático, sino también de pureza étnica.

Donde más evidente se hizo esa mezcla fue en aquellas naciones que adquirieron una identidad política a través de rebeliones contra los imperios multiétnicos en los que estaban contenidas. Los checos, los eslovacos y los húngaros, por ejemplo, se sentían agraviados por el hecho de estar bajo el gobierno de emperadores austrohúngaros que hablaban una lengua distinta a las suyas y que no prestaban suficiente atención a sus costumbres e intereses locales. El deseo de autogobierno y el anhelo de una vida colectiva que hiciera posible el florecimiento de sus respectivas culturas fueron, pues, siempre de la mano.[5]

Aunque admirable en muchos sentidos, ese nacionalismo cultural incluyó un elemento excluyente desde el principio. En las concisas palabras de Leon Wieseltier, la mayoría de las naciones europeas aspiraban a «una unidad perfecta de etnia, territorio y Estado».[6] Para que los húngaros pudieran gobernarse a sí mismos, solo los húngaros de verdad podían tener permitida la participación en la vida política de la nación. La materialización de la democracia húngara pasaba, pues, por excluir de ella a austriacos, checos, eslovacos y rumanos.[7]

El mismo instinto inspiró a los nacionalistas liberales de Italia y Alemania. Los principios a los que se adherían eran nobles en no pocos sentidos: aspiraban a fundar naciones autogobernadas que reconocieran la libertad de expresión y de religión a sus ciudadanos. Pero también formaba parte integral de su empresa la distinción entre aquellos a quienes consideraban «verdaderos» alemanes o italianos (que eran precisamente las personas a quienes pretendían incluir en los Estados que estaban creando) y aquellos otros a quienes consideraban miembros de otras naciones (y que eran personas a las que trataban de excluir).[8]

Estos instintos excluyentes no hicieron más que intensificarse a medida que el fervor nacionalista fue creciendo. A finales del siglo XIX, las nuevas naciones (Alemania e Italia, por ejemplo) aplicaban ya políticas férreas dirigidas a crear una cultura más homogénea y a reprimir a las minorías lingüísticas.[9] En las décadas de 1920 y 1930, cuando la democracia trataba de afianzarse con mucha dificultad en países como Polonia, Alemania y España, sus enemigos internos explotaban la animosidad contra las minorías étnicas y religiosas a la más mínima oportunidad.[10] Al final, los fascistas que tomaron el poder en buena parte de Europa usaron la excusa fácil de la situación de sus compañeros de etnia allende las fronteras oficiales de sus Estados para justificar la guerra: la anexión de los Sudetes por parte del Tercer Reich, por ejemplo, se justificó como remedio contra el maltrato del que supuestamente eran objeto los habitantes de etnia germana que vivían en Checoslovaquia.[11]

Tras desatarse y, finalmente, extinguirse los horrores de la Segunda Guerra Mundial, buena parte del continente había sido objeto de la llamada limpieza étnica. Por vez primera en la historia de Europa, la mayoría de sus Estados podían presumir de encarnar la sacrosanta «unidad de etnia, territorio y Estado» a la que tanto tiempo habían aspirado. Y, curiosamente, solo a partir de ese momento triunfó la democracia en gran parte del continente.

Son muchas las razones por las que la democracia fracasó en países como Italia o Alemania en las décadas de 1920 y 1930, y no comenzó a afianzarse hasta los años cincuenta y sesenta de ese mismo siglo. Pero difícilmente puede ser casualidad que fueran países bastante heterogéneos cuando los fascistas arrasaron con las instituciones parlamentarias en nombre

del pueblo, y que fueran países bastante homogéneos cuando un amplio sector de la población estuvo preparado para aceptar las normas y las prácticas de la democracia liberal.

La homogeneidad étnica no solo contribuyó al éxito de esas nuevas democracias, sino que, de manera igualmente importante, condicionó cómo estas terminaron definiéndose a sí mismas. En marcado contraste con los imperios multinacionales que habían dominado la política europea en los siglos anteriores, estas democracias eran totalmente monoétnicas. Ser alemán o italiano —como ser sueco u holandés— significaba ser descendiente de un origen étnico particular.

Había, pues, abundantes motivos desde el primer momento para pensar que cualquier inmigración masiva podría despertar fuertes tensiones: a lo largo de la historia de las sociedades democráticas, los ciudadanos siempre han sido muy recelosos de dejar que las personas «de fuera» diluyeran su voz. Pero en la Europa contemporánea, que tanto tiempo llevaba autodefiniéndose por su homogeneidad y que está experimentando actualmente unos niveles de ansiedad económica que crecen aceleradamente, hay motivos muy especiales para pensar que la transformación demográfica no será nada fácil. La pregunta es hasta qué punto son fundamentales esas tensiones y si se pueden superar.

LA REBELIÓN CONTRA EL PLURALISMO

Desde una perspectiva histórica, la velocidad a la que unas naciones tan homogéneas como las europeas al término de la Segunda Guerra Mundial se han ido volviendo heterogéneas es ciertamente considerable. En Gran Bretaña, por ejemplo, «el número de ciudadanos de minorías étnicas [no pasaba de] unas pocas decenas de miles en la década de 1950».[12] En la actualidad, son más de ocho millones.[13] La tónica es muy parecida en buena parte de Europa occidental. En Alemania, el gobierno intentó potenciar su milagro económico de posguerra promocionando el país como destino de la mano de obra de baja cualificación de Grecia, Italia y Turquía, y dando la bienvenida al millonésimo «trabajador invitado» llegado a suelo germano en 1964.[14] En 1968, el número de ciudadanos extranjeros en el país se acercaba

ya a los dos millones. En la actualidad, unos 17 millones de inmigrantes y sus descendientes viven en Alemania.[15] En Italia, el salto es más reciente, pero no ha sido menos vertiginoso: en 2002, el país contaba con poco más de un millón de residentes extranjeros; en 2011, eran ya algo más de cuatro millones.[16]

Desde el momento en que comenzó esa llegada masiva de inmigrantes a sociedades que se definían a sí mismas por una cultura y un origen étnico compartidos, la tensión entre teoría y práctica se fue volviendo cada vez más explosiva. De ahí que seguramente no deba sorprendernos que, en las últimas décadas, haya aumentado tan rápido el apoyo a una serie de fuerzas políticas radicalmente opuestas a la inmigración.

Los temores que despierta la inmigración son ahora uno de los temas que más inquietan a los votantes de toda Europa. En 2016, por ejemplo, un 71% de los daneses, un 67% de los húngaros y un 57% de los alemanes eligieron la inmigración como problema político más preocupante; en solo uno de veintisiete Estados miembros de la Unión Europea los encuestados no mencionaron la inmigración como una de sus dos principales preocupaciones.[17] En Estados Unidos, por su parte, un 70% del electorado señaló la inmigración como un factor muy importante para su voto en las elecciones de 2016, frente al 41% que la había destacado en 2012.[18]

Tampoco cabe duda alguna de hasta qué punto los partidos populistas han hecho del temor a la inmigración su principal tarjeta de visita. En Austria, el líder del Partido de la Libertad advirtió: «Viena no debe convertirse en Estambul».[19] En Alemania, AfD jugó con esa clase de medios al prometer «más hijos para las familias alemanas».[20] También el sentimiento antiinmigrante expresado por el Partido Popular danés llegó a tal punto de manifiesta obviedad que su lema de campaña se redujo a un escueto *Du ved, hvad vi står for* («Usted ya sabe qué defendemos»).[21]

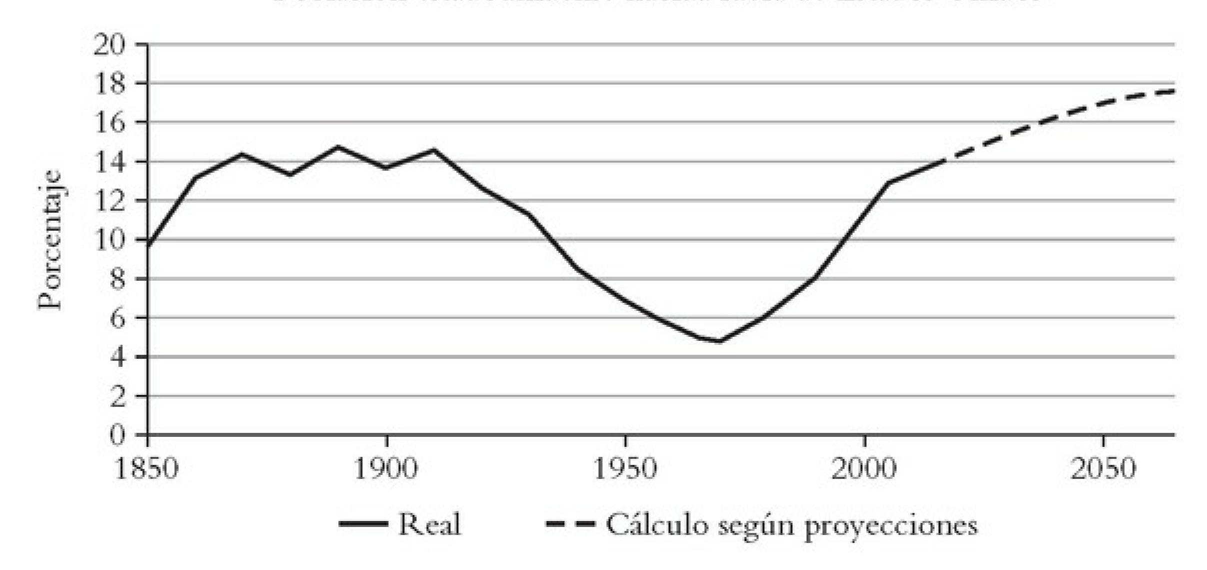
Además, existe un vínculo electoral muy estrecho entre los temores a la inmigración y el éxito populista.[22] Según varios estudios, es evidente que las actitudes ante la inmigración son uno de los mejores predictores de las intenciones de voto de un individuo: la opinión negativa sobre los

inmigrantes y las minorías étnicas muestra una alta correlación con el apoyo a toda una familia de posturas políticas que abarca desde el *brexit* hasta Marine Le Pen.[23]

A simple vista, Estados Unidos no parece encajar en el molde europeo de democracias fundadas sobre una base monoétnica. Como excolonia que es, siempre se concibió como un país de inmigrantes, desde su fundación. De ahí que la idea de que la ciudadanía se define por la voluntad de jurar lealtad a «la bandera y la República que esa bandera representa» estuviera allí hondamente arraigada desde un principio. La mayoría de los estadounidenses parecen dar por cierto (o por obvio, incluso), mucho más que en Europa, que cualquier persona que nace en Estados Unidos es sencillamente un estadounidense más.[24]

Su historia como país de inmigrantes ha preparado mejor a Estados Unidos para la posibilidad de una democracia multiétnica. Pero aunque los norteamericanos han estado siempre acostumbrados a la inmigración —y, de hecho, conservan una opinión mucho más positiva acerca de los inmigrantes que los habitantes de las naciones europeas—, los niveles de llegada de nuevos habitantes procedentes del extranjero que están experimentando en estos momentos son inusualmente elevados, incluso para lo que ha sido costumbre allí a lo largo de su propia historia.[25]

A finales de la década de 1960, solo una de cada veinte personas (más o menos) que vivían en Estados Unidos había nacido en el extranjero; hoy es una de cada siete. La última vez que la proporción fue tan alta —a comienzos del siglo XX— se vivió una rápida expansión del llamado sentimiento *nativista* que impulsó la adopción de leyes muy restrictivas contra la inmigración.[26]



El aumento de las poblaciones latina y musulmana —principales blancos de las iras de Donald Trump— ha sido especialmente acelerado. El número de habitantes latinos estadounidenses nacidos fuera de Estados Unidos, por ejemplo, se cuadruplicó entre 1980 y 2008.[27] Y aunque diversos expertos han llegado a conclusiones no coincidentes en cuanto al número total de musulmanes residentes en el país, casi todos están de acuerdo en que esa cifra ha crecido también con mucha rapidez en las últimas décadas y prevén que volverá a duplicarse de aquí al año 2050.[28]

Como en Europa, allí también los populistas de extrema derecha no tardaron en sacar partido del aumento de población nacida en el extranjero. En la década de 1990, la candidatura de Pat Buchanan a la presidencia del país se impulsó sobre el argumento de que Estados Unidos se convertiría «en un país del Tercer Mundo [...] si no levantamos un dique contra las oleadas de inmigración que baten contra nuestras costas y entran tierra adentro».[29] Y en 2016, Donald Trump fue aupado por los votantes hasta la Casa Blanca dando un par de vueltas de tuerca a esa misma retórica: por ejemplo, cuando declaró que México tendía a «enviar» a Estados Unidos «violadores y criminales».[30]

Como en Europa, allí también el ascenso de los colectivos inmigrantes —y, posiblemente de manera muy especial, su creciente visibilidad cultural y política— ha polarizado el sistema político en torno a las diferentes actitudes

ante la inmigración.[31] Quienes creían que a los inmigrantes se les debía dar la oportunidad de regularizar su situación, por ejemplo, votaron mayoritariamente por Hillary Clinton (un 60%) antes que por Trump (un 34%). Sin embargo, quienes opinaban que debían ser deportados votaron a favor de Donald Trump en un 84% (frente a un 14% que votaron a Clinton).[32] Igualmente nítida es la pauta que se aprecia a propósito de los niveles generales de resentimiento racial. Según toda una serie de sondeos, las respuestas negativas a preguntas como si Barack Obama había nacido en Estados Unidos eran muy buenos predictores de la intención de voto favorable a Donald Trump. Según una encuesta, realizada en diciembre de 2016, un 82% de los partidarios de Clinton no creían que Obama hubiera nacido en Kenia; solo un 53% de los de Trump tampoco lo creían.[33]

Desde luego, existe una gran diferencia entre Europa y Estados Unidos: a diferencia de sus primos hermanos del otro lado del Atlántico, los estadounidenses jamás se entregaron a la fantasía histórica de que todos sus antepasados habían habitado antiguamente los mismos valles y montes. Aun así, durante la mayor parte de su historia, el grueso de los ciudadanos estadounidenses que gozaban de plenos derechos sí compartían lazos étnicos entendidos en un sentido más amplio: descendían de europeos y eran casi todos cristianos.

También es cierto que siempre ha habido habitantes no blancos del continente americano, comenzando por la población indígena nativa y siguiendo por los esclavos africanos, los latinoamericanos que vivían en la zona fronteriza con México y, con el tiempo, un número significativo de asiaticoamericanos. Pero aunque la diversidad étnica siempre ha sido una característica de la experiencia de la vida en Estados Unidos, no se puede decir lo mismo de la igualdad étnica: durante buena parte de la historia del país, muchos grupos étnicos minoritarios fueron abiertamente reprimidos, cuando no esclavizados.

Por decirlo de otro modo, la historia de Europa —y de la mayoría de las demás democracias desarrolladas fuera de América del Norte— parecía predisponer a democracias como Alemania o Suecia a una rebelión contra la democracia multiétnica. La historia de Estados Unidos, por el contrario,

parecía predestinar al país para algo sutilmente distinto: una rebelión contra una democracia multiétnica que reconozca una igualdad verdadera de todos los individuos.

LA GEOGRAFÍA DEL RESENTIMIENTO

Hasta aquí el panorama general. Pero igual que ese relato global parece volverse más turbio y confuso cuanto más nos fijamos en los detalles de las pautas electorales para el caso de la economía, también esa imagen de conjunto parece complicarse cuanto más de cerca examinamos la cuestión de la inmigración.

He aquí el (aparente) problema: si la reacción adversa a la inmigración —y puede que a la idea misma de una sociedad multiétnica— es tan fundamental para entender el atractivo de los populistas, estos deberían cosechar sus mayores éxitos entre el electorado no inmigrante de zonas que registran una elevada proporción de población inmigrante. Es decir, que el apoyo a Donald Trump debería dispararse entre los votantes blancos de Chicago, Los Ángeles y Nueva York, por ejemplo. También a la francesa Marine Le Pen debería irle especialmente bien en los barrios menos diversos de París y Marsella. Y Alternativa para Alemania debería tener sus mayores bastiones electorales en ciertas partes de Berlín o de Renania del Norte-Westfalia.

Pero nada de eso está ocurriendo. Ni mucho menos.

Todo lo contrario: Donald Trump recibió solo un 13% de los votos totales en Chicago, un 17% en la ciudad de Nueva York y un 22 % en Los Ángeles. Le fue muy bien, sin embargo, en condados rurales con pocos habitantes nacidos fuera de Estados Unidos: en el condado de Trinity (California), cuya población extranjera es el 3,4% del total, Trump recibió un 48,6% de los votos; en el condado de Lewis (Nueva York), con un 1,7% de población extranjera, obtuvo un 65%, y en el condado de Gallatin (Illinois), con un 0,3% de residentes extranjeros, se llevó un 72% de los votos.[34]

Lo mismo puede decirse de la mayor parte de Europa occidental. En Alemania, por ejemplo, AfD cosechó su mayor éxito hasta la fecha cuando, en las elecciones federales de septiembre de 2017, se impuso a todos los

demás partidos en Sajonia, pese a que ese *land* tiene uno de los contingentes de población nacida fuera de Alemania más bajos de todo el país (menos del 4%).[35] Asimismo, en la región francesa de Norte-Paso de Calais, Marine Le Pen recibió un 42% de votos en la segunda vuelta de unas elecciones en diciembre de 2015, aun cuando solo un 5 % de la población que vive allí no es natural de Francia.[36]

El panorama se complica más aún si tenemos en cuenta otros países que no son de Norteamérica ni de Europa occidental. No podemos olvidar el hecho de que los populistas han evidenciado una especial fuerza en Estados centroeuropeos como Polonia o Hungría. Y sin embargo, son países que han registrado muy bajos niveles de inmigración en las últimas décadas y que, aún hoy, mantienen una homogeneidad mucho mayor que la de sus vecinos de más al oeste.

Dos tendencias igualmente bien definidas parecen cruzarse aquí. Por un lado, los niveles totales de inmigración han aumentado a un ritmo muy rápido y, como los mensajes contra los inmigrantes forman el núcleo mismo de la retórica populista, las personas que evidencian mayores niveles de resentimiento racial tienden a votar a partidos populistas en mucha mayor proporción. Pero, por otro lado, los partidos populistas obtienen mejores resultados en regiones con bajos porcentajes de población inmigrada y han tenido éxito incluso en países como Polonia o Hungría, cuyos niveles totales de entradas migratorias son muy reducidos. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Si la inmigración masiva es uno de los principales factores impulsores del éxito de los populistas, ¿por qué tienen mucho más éxito en áreas con niveles relativamente bajos de inmigración que en áreas donde la inmigración ha sido relativamente elevada?

La situación nos parece contradictoria porque partimos de un supuesto engañosamente simple: si los altos niveles de inmigración explican el ascenso del populismo, nos decimos, entonces el apoyo al populismo debería ser especialmente acusado entre los electores no inmigrantes de las zonas con elevados porcentajes de población inmigrante. Pero lo cierto es que no hay

razón sólida alguna en la que basar semejante suposición. Después de todo, son muchas las razones por las que los votantes no inmigrantes que viven en áreas de inmigración elevada podrían ser especialmente tolerantes.

De entrada, las zonas de inmigración elevada tienden a agruparse en grandes ciudades que atraen a muchos habitantes jóvenes y de alto nivel formativo, para quienes la diversidad es atractiva: dado que es mucho más probable que las personas que tienen una visión más liberal y abierta sobre la inmigración vayan a vivir a la ciudad de Nueva York (o se queden en ella) que al Iowa rural, no es de extrañar que los urbanitas neoyorquinos tengan en conjunto una visión más progresista sobre la inmigración que los de las áreas rurales del estado de Iowa.[37]

Más aún. Muchos estudios indican que el contacto habitual con minorías puede reducir el prejuicio hacia estas. Una larga lista de estudiosos del tema, desde Gordon Allport hasta Thomas Pettigrew, han mostrado que el contacto frecuente entre grupos étnicos diferentes puede —siempre que se den las condiciones adecuadas— generar confianza y atenuar la hostilidad mutua. Sin embargo, cuando las sociedades muy homogéneas tienen su primer encuentro con habitantes extranjeros, el contacto también puede exacerbar el conflicto, sobre todo si los políticos intentan intensificar las tensiones en beneficio propio.[38]

De esto se deduce que la transición fundamental en la vida de la mayoría de los ciudadanos podría tener lugar en el momento en que empiezan a tener que tratar con inmigrantes de forma cotidiana, y no cuando se incrementa el número de inmigrantes con quienes interactúan de esa manera regular. Las personas que viven en áreas con elevados niveles de inmigración ya están acostumbradas a que su barrio o localidad no sean «puros» y ya han adquirido una cierta facilidad de trato con personas con quienes no comparten lengua, cultura o etnia. Aunque siempre habrá quienes sientan consternación por el hecho de que aumente la proporción de población extranjera, o quienes incluso se sientan menos dispuestos a apoyar la existencia de un Estado redistributivo del bienestar debido a ello, ese incremento de la presencia de extranjeros ya no altera en lo esencial su mundo, su día a día: que interactúen con dos o con cuatro inmigrantes a diario solo es una diferencia de grado, pero no un salto cualitativo.[39]

Pero aunque los niveles migratorios aumentaron a escala nacional a lo largo de la posguerra, eso no se notó en la experiencia vital de muchas áreas más rurales y remotas. En un gran número de localidades de Europa occidental e, incluso, de América del Norte, el nivel de inmigración se mantenía en niveles tan bajos treinta o cuarenta años atrás que la mayoría de sus habitantes rara vez se encontraban con alguien llegado de fuera del país. De ahí que no hubieran adquirido esa misma facilidad de trato con los inmigrantes y que apostaran mucho más por una concepción monoétnica de su nación.

En la actualidad, esas mismas zonas posiblemente continúan registrando niveles de inmigración más bajos que otras partes del país. Pero, en comparación con su propio pasado, han cambiado radicalmente y han cruzado un umbral crucial. Su carácter anterior se ha visto desafiado desde el momento en que un número apreciable de inmigrantes comenzó a asentarse en ellas. Allí, la necesidad de tratar con personas de origen diferente se está convirtiendo en una característica de la vida cotidiana. En definitiva, el mundo social de sus habitantes ha quedado notablemente transformado aun cuando los niveles totales de inmigración se mantengan comparativamente bajos.

En los últimos años, una serie de nuevos estudios ha otorgado considerable crédito a esta explicación de por qué el voto populista se agrupa en áreas como el Míchigan no urbano más que en Queens o en el centro de Los Ángeles.

Aunque los investigadores estadounidenses han considerado siempre que los puntos calientes de la inmigración estaban en las grandes ciudades costeras, lo cierto es que es en condados más remotos y con menor densidad de población donde se ha producido la más llamativa revolución demográfica en estas pasadas décadas. En 1980, por ejemplo, unas dos terceras partes de las localidades estadounidenses eran muy homogéneas, con un porcentaje de habitantes blancos superior al 90% del total. Con la aceleración de la

inmigración durante las tres décadas siguientes, muchos de esos lugares se han vuelto más heterogéneos en muy poco tiempo. En 2010, solo un tercio de las localidades de Estados Unidos eran «blancas» al 90% o más.[40]

Son muchos los casos estudiados u observados que ponen de manifiesto que esa transformación indujo mucho malestar y resentimiento. «Nos impactó como un *tsunami*», declaró a un periodista un director de una escuela de primaria en Arcadia, un condado de Wisconsin que experimentó una transformación demográfica especialmente rápida. «Si hubiera visto cómo han cambiado las cosas en este pueblo —confirmó otro habitante local—, usted también diría:"Hay que hacer algo al respecto".»[41]

Para muchos, ese «algo» resultó ser Donald Trump.

Numerosos análisis electorales sugieren que la razón principal de la victoria de Trump fue que un gran porcentaje de electores blancos de clase trabajadora que tradicionalmente votaban a candidatos demócratas lo apoyaron esta vez a él.[42] Así que resulta especialmente significativo que muchos de esos votantes fuesen de regiones del Medio Oeste que habían pasado de ser muy homogéneas a bastante heterogéneas en estas últimas décadas. Según un análisis que publicó *The Wall Street Journal*, «un grupo diferenciado de estados del Medio Oeste —Iowa, Indiana, Wisconsin, Illinois y Minnesota— experimentaron una de las más rápidas afluencias de habitantes no blancos registradas en Estados Unidos entre 2000 y 2015. Centenares de ciudades donde los residentes blancos eran la presencia dominante recibieron un alud de nuevos habitantes latinos inmigrados desde América Central o llegados desde California y Texas». El impacto que ese cambio demográfico tuvo en el comportamiento electoral fue inequívoco. En las primarias, por ejemplo, Trump venció en un 71% de todos los condados de Estados Unidos. Pero se impuso en un 73% de aquellos condados cuyo «índice de diversidad» se había duplicado entre 2000 y 2015, y en un 80% de aquellos otros en los que dicho índice se había incrementado al menos en un 150%.[43]

ANSIEDAD DEMOGRÁFICA

Hay otro aspecto que tener en cuenta en todo esto: muchas de las iras dirigidas hacia la inmigración están motivadas por el temor a un futuro imaginado, más que por un desagrado con la realidad vivida. Cuando los niveles de inmigración aumentan, no solo cambia la experiencia del día a día: igual de importante es la transformación del imaginario social acerca de lo que el futuro depara al país. En ese sentido, la creencia de que los miembros del grupo mayoritario terminarán estando en minoría ha tenido una influencia cada vez mayor en la imaginación política de la ultraderecha, tanto de la europea occidental como de la norteamericana.[44]

En Estados Unidos, por ejemplo, Steve King, un congresista republicano por Iowa, tuiteó hace poco que «la demografía significa nuestro destino. No podemos restablecer nuestra civilización con los bebés de otros»[45] (no es casualidad que King represente a un distrito que ha experimentado un cambio demográfico como el que acabo de describir: de hecho, en apenas seis años, entre 2009 y 2015, registró un aumento del 24% en el número de residentes nacidos fuera del país).[46] Michael Anton, actualmente un alto asesor de política exterior en la Casa Blanca, defendió la causa de Donald Trump en términos más duros, si cabe, en un artículo que publicó bajo seudónimo en las semanas previas a las elecciones de 2016. Preocupado por la «incesante importación de extranjeros del Tercer Mundo», invocó el ejemplo de uno de los aviones secuestrados por terroristas de Al Qaeda el 11-S para argumentar:

> Las de 2016 son las elecciones del vuelo 93: asaltemos la cabina de mando o moriremos. Sí, podríamos morir igualmente. Usted —o el líder de su grupo— podría acceder a la cabina del piloto y no saber manejarse con los mandos para pilotar la nave o para hacerla aterrizar. No hay nada garantizado. Salvo una cosa: si no lo intentamos, la muerte está asegurada.[47]

Estos miedos no son solo cosa del discurso de una élite; también determinan cómo votan los ciudadanos de a pie. Por ejemplo, según un sondeo realizado por el Pew Research Center en abril de 2016, mediada la batalla de las primarias de ese año, aproximadamente un tercio de los republicanos opinaban que sería «malo para el país» que Estados Unidos pasase a tener una mayoría de población no blanca. Entre quienes compartían semejantes temores demográficos, Donald Trump arrasaba a sus competidores: un 63% confesaba tenerle simpatía, frente un 26% que decía

no sentirla. Sin embargo, entre quienes no compartían ese mismo miedo demográfico, la percepción de Trump era mucho menos positiva: un 46% decía que le caía bien, pero un 40% confesaba que le caía mal.[48]

En Europa occidental, los políticos están igual de preocupados por la incipiente transición demográfica y muestran parecida habilidad para explotar los temores que esta suscita. Por ejemplo, el libro *Deutschland schafft sich ab [Alemania se deshace]*, que se publicó en 2010 y se convirtió en uno de los mayores éxitos editoriales en ventas desde el final de la guerra en el país germano, está inspirado por el miedo a que los habitantes étnicamente alemanes dejen de ser un día la mayoría en su propio país (el problema es especialmente grave, según Thilo Sarrazin, autor del libro, porque los alemanes están genéticamente predispuestos a ser más inteligentes que los turcos).[49] Pero sería unos años después, cuando la guerra civil siria empujó a millones de refugiados hacia Europa occidental, cuando los temores por la demografía pasarían a ocupar un lugar central en el discurso político germano.

Curiosamente, el temor de que las poblaciones autóctonas puedan dejar de ser mayoría es igual de intenso en países que, a primera vista, no parecen dar ningún motivo para pensar que algo así pueda ocurrir en ellos en un futuro más o menos inmediato. En buena parte de Europa central y del Este, por ejemplo, el porcentaje de población nacida fuera del Viejo Continente es muy pequeño. Y sin embargo, el temor a una «invasión» inminente de las minorías étnicas y religiosas forma parte destacada del paisaje político. En Polonia, Jarosław Kaczyński ha advertido en reiteradas ocasiones que los inmigrantes podrían traer «parásitos [...] y enfermedades» al país, y ha declarado que los refugiados musulmanes serían «una amenaza para la seguridad de Polonia».[50] El gobierno polaco ha ido más allá de la mera retórica y ha legalizado la detención de ciudadanos extranjeros sin orden judicial y ha clausurado el Consejo contra la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia.[51] En Hungría, entretanto, Viktor Orbán ha construido una inmensa valla fronteriza y ha contratado a tres mil «cazadores de frontera».[52]

La prominencia alcanzada por el miedo a la inmigración en Estonia es aún más asombrosa. Según señala Turkuler Isiksel:

> Los inmigrantes no europeos en Estonia representan el 1,1% de la población total del país. Según una fuente, el número total de africanos contados en el censo estonio de 2011 (y entre los que, por alguna extraña razón, se contabilizó también a los afroamericanos) era de treinta y uno. Hace ya bastantes años que el crecimiento demográfico de Estonia es negativo: la tasa de natalidad es más baja que la tasa de sustitución requerida, y la emigración supera en volumen a la inmigración. Y sin embargo, en la encuesta del Eurobarómetro de mayo de 2016, un 73% de los estonios mencionaron la inmigración como uno de los dos problemas más importantes a los que se enfrenta la Unión Europea. El segundo, según un 46% de los estonios encuestados, era el terrorismo.[53]

Parte de lo que explica esa desconexión entre percepción y realidad es, simplemente, la sobreestimación sistémica de la proporción representada por la población de las minorías, en especial, de la musulmana. Esto es así en casi todas las democracias liberales de hoy en día. En Estados Unidos, los encuestados piensan que un 17% de la población del país es musulmana, cuando, según las mejores estimaciones disponibles, representa aproximadamente un 1% del total. En Francia, la gente cree que un 31% de los habitantes del país son musulmanes; la proporción real es el 8%.[54]

Pero aunque esos miedos demográficos son muy exagerados, tal vez no sean —como Ivan Krastev bien ha argumentado— tan absurdos como de entrada podrían parecer. Tras recordar que «naciones y Estados han tenido la mala costumbre de desaparecer en la historia reciente de Europa central y oriental», Krastev señala que los habitantes de los países de esa región europea —y, en realidad, de todas las áreas rurales de Europa occidental, también— son muy conscientes de que están perdiendo población a pasos agigantados, de que la inmigración masiva es lo que a menudo se defiende como única solución posible a ese problema, y de que la inmigración ya ha transformado otras partes de su continente. Y añade:

> En los últimos veinticinco años, aproximadamente un 10% de los búlgaros se han ido del país para vivir y trabajar en el extranjero. Según proyecciones de Naciones Unidas, se prevé que, para el año 2050, la población de Bulgaria habrá disminuido en un 27%. La alarma ante una «desaparición étnica» es algo que se deja sentir en muchas de las pequeñas naciones de Europa oriental. Para ellas, la llegada de inmigrantes anuncia su salida de la historia, y el popular argumento de que la envejecida Europa necesita inmigrantes no hace más que reforzar esa sensación creciente de melancolía existencial.[55]

Existe una forma negativa de interpretar esos datos: puede que muchas de las regiones que son monoétnicas desde hace mucho tiempo carezcan de las condiciones locales propicias para dar cabida a la inmigración. A causa de

su nimia experiencia histórica de acogida de personas llegadas de otros países, y a causa de su consiguientemente escasa habilidad para afrontar la alteridad dentro de sus propias fronteras, reaccionan mucho más negativamente a los aumentos del nivel total de inmigración de lo que lo hacen quienes viven en áreas que tienen ya una larga historia acumulada de flujos inmigratorios. En ese caso, tal vez podría observarse una conexión relativamente directa entre el aumento del número de residentes locales nacidos en el extranjero y el porcentaje de votos obtenido por los partidos populistas. Los autores de un artículo sobre el tema (escrito con esa particular seguridad en sí mismos con la que se expresan quienes se pasan horas y horas analizando hojas de cálculo) sugieren que, «cuando el porcentaje de inmigrantes en una población se acerca aproximadamente a un 22%, el porcentaje de votos populistas [de derecha] supera el 50%».[56]

Pero también existe una interpretación más esperanzadora de ese dato. Quizá los efectos de las primeras oleadas de inmigración que llegan a un área concreta sean mucho más negativos que los efectos de oleadas posteriores. En cuanto un área se acostumbra a la realidad de ser una sociedad multiétnica, tal vez descubre de primera mano que sus miedos no se hacen realidad y se calma un poco su ansiedad ante la continuidad de ese proceso de cambio.

La experiencia de California parece avalar esta interpretación más optimista en algunos lugares. De 1980 a 1990, el porcentaje total de población nacida en el extranjero aumentó allí del 15 al 22%. Una gran oleada de ansiedad recorrió todo el estado. Muchos californianos autóctonos se sentían desorientados ante el veloz ritmo de los cambios y se indignaron con la disposición de los políticos a dar cabida a las culturas y las lenguas de los inmigrantes. Esa reacción adversa no tardó en tomar forma política. Los californianos otorgaron una gran victoria a un gobernador que había basado su campaña de reelección en una estridente retórica antiinmigratoria. Aprovechándose de la muy democrática Constitución que rige en aquel estado y que permite convocar referendos populares sobre una larga lista de temas potenciales, los californianos excluyeron a los inmigrantes

indocumentados del derecho a percibir prestaciones sociales, prohibieron que las universidades públicas aplicaran políticas de discriminación positiva y abolieron la educación bilingüe en los centros de educación no superior.[57]

En aquel momento, muchos observadores mostraron su comprensible preocupación ante el futuro de las relaciones raciales en California. Pero en las décadas de 2000 y 2010, mal que bien, la fiebre ha remitido. La mayoría de los californianos se han acostumbrado a que los elevados niveles de inmigración sean un elemento más de su experiencia local y a que el estado sea hoy «mayoritariamente minoritario». De ahí que California tenga fama de ser uno de los estados más tolerantes del país. En estos últimos años, los californianos han derogado muchas de las draconianas leyes que habían aprobado en referéndum dos décadas antes con el apoyo del electorado blanco. Y gracias al posicionamiento abiertamente crítico de sus líderes con la política inmigratoria del presidente Trump, el estado ha acelerado la tramitación de una serie de proyectos de ley proinmigrantes.[58]

DESCENDIENDO POR LA JERARQUÍA

Según Abraham Maslow, los seres humanos nos guiamos en nuestro proceder por una jerarquía de necesidades. Las más básicas y urgentes son aquellas que nos hacen desear bienes claves para nuestra supervivencia, como la comida, un techo bajo el que cobijarnos y la seguridad de conservar nuestra integridad física. Cuando esas necesidades elementales están satisfechas, prestamos mayor atención a otros deseos más «exquisitos», por así llamarlos. Buscamos entonces amor y pertenencia. Aspiramos a que se nos tenga estima. Y buscamos vías por las que alcanzar lo que Maslow llamó la «autorrealización».[59]

Influyentes científicos sociales como Ronald Inglehart han derivado de ese marco conceptual básico una teoría muy optimista. En los años setenta del siglo XX, Inglehart escribió que, cuando la mayoría de las sociedades padecían situaciones de escasez aguda y corrían constantemente el peligro del estallido de conflictos violentos, los principales ejes *(cleavages)* del enfrentamiento político venían determinados por los escalones más bajos de la jerarquía de Maslow. La necesidad de procurarse alimento y cobijo

implicaba que el conflicto político estuviera organizado principalmente en torno a las líneas de división por clase social, de manera que los votantes más pobres tendían a apoyar a partidos que defendían el Estado del bienestar y abogaban por la redistribución, mientras que los votantes más acomodados eran más propensos a votar a partidos que propusieran proteger la riqueza de sus propios sectores sociales. Al mismo tiempo, la relevancia de los temores relacionados con la seguridad conllevaba que se hicieran cumplir muy estrictamente los límites morales, étnicos y nacionales: la mayoría de los electores eran rabiosamente leales a su grupo propio y adoptaban actitudes duras hacia quienes se «desviaban», hacia las minorías étnicas y religiosas, y hacia los miembros de otras naciones.

Pero a medida que las sociedades democráticas se fueron haciendo más ricas y pacíficas, una proporción mucho mayor de seres humanos pudieron comenzar a dar por descontada la satisfacción de sus necesidades fisiológicas y de seguridad básicas, y pudieron empezar a prestar una atención creciente a otros niveles más elevados de la jerarquía de Maslow. Esto, según predecía por entonces Inglehart, tendría una gran repercusión en las actitudes sociales y políticas de los ciudadanos. Garantizada ya su subsistencia física, podrían centrarse en cuestiones sociales como el medioambiente, la libertad de expresión o la suerte de las personas pobres en todo el mundo. Y superadas ya las amenazas más elementales a su seguridad, adoptarían actitudes mucho más tolerantes hacia las minorías étnicas, religiosas y sexuales.[60]

Las tesis de Inglehart ayudaron a predecir importantes transformaciones políticas, prefiguraron el ascenso de los partidos socioliberales y contribuyeron a explicar el ascenso general de la tolerancia cultural. Pero del mismo modo que la mayoría de los estudiosos de la democracia liberal se precipitaron al suponer que la de la consolidación democrática era una vía unidireccional, sin retorno, también Inglehart se apresuró en exceso al asumir que la progresión hacia los valores posmaterialistas tendría una duración indefinida. Eso le impidió prever que el aumento de la inmigración, unido a un profundo y sostenido estancamiento del nivel de vida, podría bastar para invertir la tendencia del «giro posmaterialista» previo.

Cuando el crecimiento económico es rápido, todos pueden salir ganando. En ese contexto, ricos y pobres pueden tener intereses enfrentados, pero la disputa distributiva gira en torno a cómo repartirse un abundante excedente económico. La cuestión que se dirime no es la de quién saldrá perdiendo, sino la de cuánto ganarán unos y otros.

Ahora bien, cuando el crecimiento económico es lento, la competencia por los recursos se vuelve mucho más implacable. Los ricos no pueden continuar aumentando su riqueza sin restar algo de los pobres. «Es una dinámica de suma cero —explicó Angus Deaton, Nobel de Economía, en una entrevista reciente—. Si solo se tiene un 2 o un 3 % de crecimiento anual, no hay mucho que repartir sin sacrificar los intereses de alguien.»[61]

La transformación resultante es psicológica, además de económica. El estancamiento del crecimiento se ha acompañado de un aumento de la desigualdad y de la ansiedad, y un amplio sector de la población ha dejado de concentrarse en el valor de la autorrealización. En vez de ello, los votantes están volviendo a centrar su atención en los escalones más bajos de la jerarquía de necesidades de Maslow. Preocupados por la base de su sustento, los blancos están ahora más molestos con los inmigrantes y las minorías étnicas, quienes inevitablemente reclaman una parte de los recursos colectivos. Y amenazados por las fuerzas aparentemente incontrolables de la globalización y el terrorismo, están retrocediendo hacia posturas menos tolerantes con dichos grupos minoritarios.

Hace unas décadas, Inglehart predijo que el auge de los valores posmaterialistas prefiguraría una nueva política: según él mismo teorizó, los electores, en busca de su realización personal, votarían posiblemente a partidos verdes que se preocupasen por el medioambiente y la ayuda al desarrollo, más que a partidos socialdemócratas que solo les prometiesen aumentos salariales. Pero actualmente, y siguiendo ese mismo hilo argumental, tenemos sobradas razones para pensar que el retorno de los valores materialistas tendrá un impacto igual de importante en nuestra política: los electores, preocupados por su seguridad y su sustento, tal vez estén ahora mucho más atentos a la llamada de populistas que ofrezcan soluciones económicas fáciles y que culpen a «los de fuera» de todos nuestros problemas. Buena parte de que el populismo haya cosechado tantos

éxitos en los últimos años parece deberse a la combinación de una serie de tendencias sociales y económicas de largo recorrido que ha traído consigo la ascensión del votante *pos-posmaterialista*.[62]

~

Tres son los sentidos —tal como he argumentado aquí— en los que el mundo políticamente inestable de hoy en día es fundamentalmente distinto del mundo políticamente estable de antaño. Hubo un tiempo en que las democracias liberales podían garantizar a sus ciudadanos un rápido incremento de su nivel de vida. Hoy ya no pueden. Hubo un tiempo en que la élite política controlaba los medios de comunicación más importantes y realmente podía excluir las opiniones radicales del ámbito público. Hoy cualquier voz política marginal puede difundir mentiras y odio sin control. Y hubo un tiempo en que la homogeneidad —o, cuando menos, una cierta jerarquía racial pronunciada— de su ciudadanía era un elemento aglutinador esencial de las democracias liberales. Hoy los ciudadanos tienen que aprender a vivir en unas democracias más iguales y diversas.

Cada uno de esos problemas nos señala la existencia de alguna dificultad tan formidable como apremiante para nosotros. Enfrentarse a cada una de esas dificultades va a ser una tarea sumamente complicada. Afrontarlas todas a la vez podría incluso demostrarse imposible. Y aun así, tenemos que intentarlo, pues el destino de la democracia liberal misma bien puede depender de ello.

Parte III

REMEDIOS

Cuando la Reina de las Elecciones ascendió al más alto cargo del país, muchos de sus compatriotas estaban preocupados por la posibilidad de que representara una amenaza para la democracia en Corea del Sur.

Park Geun-hye siempre había sido una figura controvertida. Hija de un general que había gobernado el país durante una docena de años como jefe de una junta militar, era muy aficionada a la retórica populista y propugnaba una línea dura en materia policial y de orden público. Durante mucho tiempo, sus compatriotas —que habían tenido que luchar muy duro por sacudirse el poder militar y establecer una de las democracias más estables de Asia— no se habían fiado de sus intenciones. Pero Park se manejaba muy bien en campaña y sabía motivar y estimular con su oratoria. Su promesa de debilitar el poder de los grandes conglomerados empresariales del país —los *chaebol*— aumentó extraordinariamente su popularidad. Tras años de marginalidad política, hizo toda una demostración de fuerza con una serie de sorpresivas victorias y fue tomando paulatinamente las riendas del mayor partido derechista del país.

En 2012, había conseguido su objetivo: una victoria aplastante la llevó a la Casa Azul, el palacio presidencial. Sus aliados conquistaron también una cómoda mayoría en el Parlamento. Por fin estaba en disposición de transformar el país.

Sin embargo, al final, no fueron los temidos instintos autoritarios de Park los que suscitaron una gran reacción adversa contra su presidencia, sino su estrecha relación —tan estrecha como la de sus predecesores— con la élite empresarial. A los dos años de su «reinado», la presidenta comenzó a ser acusada de haber usado el poder de su cargo para hacer favores a Choi Soon-sil, la amiga, la más estrecha asesora y la consejera espiritual de la presidenta. Parece ser que Choi, sirviéndose de su fácil acceso a Park, había extraído de los *chaebol* millones de dólares en donaciones para organizaciones benéficas que ella misma controlaba. Choi había conseguido que Samsung regalara a su hija, que trataba de prepararse para ser amazona profesional, un caballo muy

caro. Pero también —y este, en un país con un sistema educativo tan competitivo, fue considerado el peor pecado de todos— Choi había tirado de sus contactos para que su hija ingresara en una universidad de élite.

Cuando estalló el escándalo, se hizo evidente que la Reina de las Elecciones pretendía refugiarse en la Casa Azul y aguardar a que escampara sin hacer nada especial al respecto. Sus aliados en el Parlamento se comprometieron a mantener el apoyo político que ya le dispensaban. Como les había ocurrido a tantos y tantos presidentes corruptos antes que a ella, Park parecía bien preparada para capear el temporal.

Pero entonces comenzaron las manifestaciones multitudinarias. En los primeros días de noviembre de 2016, unas cien mil personas salieron a la calle en Seúl para pedir su dimisión. A mediados de mes, eran ya aproximadamente un millón las que exigían que abandonara el cargo. A finales de ese mismo noviembre, la multitud había crecido hasta formar la mayor manifestación de la historia de Corea del Sur: cerca de dos millones de personas se concentraron en la plaza Seúl para clamar por la destitución de la jefa de Estado.

Envalentonada como nunca, Park se negaba a dejar la presidencia. Pero, ante la caída en picado de sus índices de aprobación y tras meses de protestas masivas en las calles, sus aliados comenzaron a tomar distancia de ella. Con el apoyo de sesenta y dos diputados de su propio partido, el Parlamento aprobó finalmente una moción de destitución. Cuando el Tribunal Constitucional confirmó la validez de la medida, Park fue finalmente desposeída de su cargo y, de paso, acusada formalmente de delitos que iban desde el soborno hasta el abuso de poder.[1]

El éxito de la campaña popular dirigida a apartar a Park del cargo puede servir de inspiración a los defensores de la democracia liberal en todo el mundo: para impedir que los gobiernos corruptos o populistas se afiancen en el poder, los ciudadanos tienen la obligación de destapar las vulneraciones de las reglas y las normas democráticas que aquellos cometen. Tienen que salir a la calle a mostrar que los populistas no hablan en nombre de todo el pueblo. Y, por muy justificado que esté el desprecio que sienten hacia los aliados y

los lacayos de los líderes autoritarios, tienen que esforzarse por debilitar al régimen en el poder haciendo que algunos de los miembros de este se alejen de él.

Pero para impedir que los populistas vuelvan a recuperar el poder y para salvar el sistema a largo plazo, los defensores de este también tienen que hacer algo más ambicioso: deben asegurarse de que la democracia liberal vuelva a estar a la altura de las expectativas de sus ciudadanos.

En los últimos años, el gobierno turco ha arrestado a tantos periodistas, ha despedido a tantos funcionarios y ha abolido tantas salvaguardas institucionales, que el país se está convirtiendo rápidamente en una dictadura en toda regla. Asimismo, desde que subió al poder en 2015, también el actual gobierno polaco ha minado la independencia judicial, se ha asegurado el control férreo de los medios de comunicación estatales y ha colonizado la Administración pública hasta tal punto que las reglas del juego electoral son cada vez menos neutrales y más adversas para la oposición. Incluso en Estados Unidos, donde la existencia de múltiples puntos de veto —tanto en el ámbito de los estados como en el federal— ha logrado ralentizar la erosión de las instituciones liberales, el poder ejecutivo ha dado pasos muy significativos hacia la subversión del Estado de derecho.[2]

En países como los mencionados, donde «hombres fuertes» autoritarios ya han conquistado el poder y están comenzando a cambiar sistemáticamente las reglas del juego más básicas, la democracia liberal se enfrenta a una amenaza inminente a su propia supervivencia. ¿Qué pueden hacer sus defensores potenciales para evitar que los populistas se apropien de más parcelas de poder?

Nunca es fácil para la oposición limitar la acción de un gobierno dado. Pero cuando el gobierno está formado por populistas autoritarios que desprecian los tradicionales límites a su poder y están desesperados por subyugar el sistema a su voluntad, esa resistencia es mucho más difícil. Como en el mencionado caso de Corea del Sur, implica salir a las calles a protestar contra leyes y decretos peligrosos. Implica llamar a los legisladores poco afectos al gobierno a que hagan pública su oposición a las causas

populistas. Implica muchas reuniones, una logística compleja, una incesante recaudación de fondos y un número indefinido de aburridas tareas que, en el día a día, pueden parecer muy desconectadas y alejadas del noble fin con el que supuestamente se realizan.

«La libertad —como bien nos recuerda el título de un libro de Francesca Polletta— es una reunión sin fin.» Y es que bien podría decirse que, en momentos de grave riesgo político, la preservación de la libertad requiere de una inacabable sucesión de igualmente interminables reuniones y encuentros.[3]

Pero, aunque los trabajos de la resistencia son sin duda engorrosos, la mayoría de los politólogos están convencidos de que dificultan mucho las cosas a los gobiernos populistas. Una esmerada labor de oposición puede poner el foco en ciertas políticas impopulares, entorpecer el avance de unos proyectos de ley pendientes de aprobación, animar a los jueces a anular leyes inconstitucionales, brindar apoyo a medios de comunicación acosados, cambiar el cálculo de costes y beneficios de los moderados del régimen, y forzar a los gobiernos y organizaciones internacionales a presionar al aspirante a dictador de turno.[4]

Hay bastantes casos recientes que son ejemplos de tales éxitos. En Polonia, las manifestaciones multitudinarias de protesta contribuyeron seguramente a que el presidente del país vetara una propuesta de reforma legislativa que habría dado al partido de Kaczyński un control más férreo todavía sobre el poder judicial.[5] En Hungría, otras manifestaciones posiblemente ayudaron a convencer a Orbán para que autorizara la continuidad de la Universidad Centroeuropea (CEU) después de haber impulsado una ley para clausurarla.[6] Y en Estados Unidos, las protestas multitudinarias posiblemente animaron a los jueces a oponerse a la prohibición de entrada en el país de personas procedentes de siete naciones de mayoría musulmana (la *travel ban*) decretada por el ejecutivo federal.[7]

Así pues, la primera parte de la solución a la amenaza del populista es tan simple como engorrosa. Por mucho que se enfrenten a adversarios poderosos, y por mucho que el esfuerzo dedicado a la labor parezca muchas veces una pérdida de tiempo, los defensores de la democracia liberal deben luchar por la conservación de las reglas y las normas básicas del sistema

político existente. Deben salir en masa a manifestarse siempre que un gobernante populista sobrepase los límites de su autoridad legítima, y no deben hacer solo bulto, sino también mucho ruido.

Es muy importante que los defensores de la democracia liberal opongan una resistencia valiente y decidida a los líderes de signo autoritario, incluso cuando las razones para protestar se multipliquen por momentos y se tenga la impresión de que los actos de oposición son desalentadoramente ineficaces. Pero, puesto que todos aquellos que traten de limitar a los populistas tienen mucho más cuesta arriba su lucha contra esos «hombres fuertes» desde el momento en que estos asumen el poder, más importante, aún si cabe, es derrotarlos en las urnas.

Esta es una verdad especialmente obvia en países donde los populistas no han triunfado todavía. En Suecia o en Francia, en Austria o en España, los ciudadanos conservan el poder de procurar que los candidatos que desprecian a las claras las reglas del juego democrático no tengan la ocasión de poner sus predilecciones en práctica. Y es fundamental que hagan valer tal poder. Pero incluso en aquellos países en los que los populistas ya están en el gobierno, las elecciones continúan resultando cruciales. Dado que lo normal es que esos líderes autoritarios tarden todavía unos años en consolidar su poder, es mucho lo que también allí continúa dependiendo de la destreza electoral de la oposición.

Tras cinco años de gobierno de Recep Erdoğan, Vladimir Putin y Hugo Chávez, todavía había muchos observadores externos que creían que estos líderes estaban fortaleciendo las instituciones democráticas en sus países. No en vano los tres lanzaban proclamas esperanzadoras acerca del valor de la apertura política y de la importancia de romper con un pasado autoritario. Y aunque todos ellos habían inclinado ya el terreno de juego político a su favor cuando se presentaron a sus respectivas primeras reelecciones, la oposición conservaba aún entonces una oportunidad real de ganar. No fue hasta después de que esos «hombres fuertes» hubieron obtenido su segunda victoria en las urnas (o incluso hasta después de la tercera), cuando completaron la caída de sus países en el abismo de una dictadura en toda regla.[8]

Esto nos demuestra lo mucho que habrá en juego cuando populistas autoritarios como Jarosław Kaczyński, Narendra Modi y Donald Trump se presenten a su primera reelección en estos próximos años. Si sufren una derrota sin paliativos, la democracia liberal probablemente se recuperará —al menos a corto plazo— en Polonia, la India y Estados Unidos. Si consiguen apoyo para iniciar un segundo mandato, todo puede suceder; con el tiempo y el poder suficientes, cada uno de esos líderes lograría dañar la democracia de manera grave y perdurable.

La única protección democrática frente al ataque de estos adalides autoritarios, pues, es convencer al electorado para que vote contra ellos. Pero sorprende bastante que los miembros más activos de la resistencia a tales líderes suelan estar muy poco interesados en ayudar a la victoria de los partidos de la oposición. En Polonia, por ejemplo, el influyente Comité para Proteger la Democracia rehúye explícitamente toda implicación en la política electoral. También en Estados Unidos, muchos miembros de #TheResistance son tan hostiles al Partido Demócrata que para ellos no es prioritario ayudar a que la oposición recupere la mayoría en el Congreso en 2018 o conquiste la Casa Blanca en 2020.

Ese es un enfoque equivocado de la situación, incluso cuando las circunstancias indican graves defectos en la actuación de los partidos opositores. Al final, el único baluarte de defensa asegurada contra los populistas consiste en mantenerlos alejados de las sedes y los despachos del poder. Por anticuado que a muchos activistas les parezca hacer campaña a favor de uno de los grandes partidos, lo cierto es que unir fuerzas con un movimiento político que cuente con esperanzas reales de éxito en las urnas sigue siendo uno de los mejores modos de defender la democracia.

Los partidos de la oposición necesitan desesperadamente la inyección de energía y entusiasmo que los activistas pueden darles. Pero también necesitan una estrategia que mire hacia delante y que los ayude a ganar las siguientes elecciones, y que los coloque en situación de poner en práctica mejoras significativas en cuanto formen gobierno. Así pues, ¿qué hace falta exactamente para derrotar a un populista en las urnas?

Los sistemas electorales y los ejes de enfrentamiento entre partidos, los estilos políticos y los valores personales difieren entre países e, incluso, entre regiones. Sería absurdo tratar de buscar una sola receta única de éxito. Y, aun así, llevamos ya suficientes casos acumulados en los que los defensores de las normas democráticas se han enfrentado a populistas autoritarios como para que podamos extraer unas cuantas conclusiones directas.

La primera lección es la extrema importancia de la unidad. En casi todos los casos en que los populistas han accedido al poder o han sido reelegidos, uno de los factores importantes que lo hizo posible fue la división en las filas de sus oponentes.

En Polonia, por ejemplo, el sistema electoral impone que las coaliciones tengan que obtener al menos el 8% (y los partidos, el 5%) de los votos nacionales totales para entrar en el Parlamento. Debido a ello, era de suma importancia que diversas formaciones izquierdistas alcanzaran un acuerdo previo a las elecciones de 2015. Pero no lo alcanzaron y, al final, la coalición Izquierda Unida recibió un 7,5% de los votos y, el partido Juntos, solo el 3,6%, mientras que, por su parte, KORWiN, un partido liberal-libertario, obtuvo un 4,8%. Los votos de las tres formaciones fueron descontados del recuento final. Así que, pese a cosechar solo el 38% de los sufragios, el partido Ley y Justicia de Kaczyński se hizo con más de la mitad de los escaños del Parlamento.[9]

Polonia no es el único caso en el que la oposición ha sido la mayor enemiga de sí misma. En los últimos años, una oposición dividida ha ayudado también a los populistas a conseguir el poder (o a mantenerlo) en Hungría, Turquía, la India y Estados Unidos.[10]

La segunda lección es la no menor trascendencia de emplear el lenguaje de la gente corriente y conectar con los intereses y las preocupaciones de los votantes. Durante la campaña electoral de 2016, una amiga mía me comentó eufórica que Donald Trump se había delatado a sí mismo al reconocer que amaba «a quienes no tienen estudios». «Al final —me dijo ella—, acabaremos teniendo dos partidos políticos en Estados Unidos: el de las personas con estudios universitarios y el de todas las demás.»[11] Dejando a un lado el distópico panorama que una división así representaría, y sin querer aguarle demasiado la fiesta, traté de recordarle que solo un tercio

(aproximadamente) de los estadounidenses tienen un título universitario de grado (una carrera de cuatro años) o superior; si, como ella me decía, «el bando del bien» agrupa únicamente a las personas con estudios, estará condenado a perder una y otra vez.

En Venezuela, la oposición lleva tiempo cometiendo el mismo error. «No parábamos de pontificar sobre lo estúpido que es el chavismo —advertía recientemente el economista Andrés Miguel Rondón—. “¿Ese tipo?, ¿en serio? ¿Os habéis vuelto locos? Seguro que os habéis vuelto locos”, decíamos. La idea subyacente era clara:“Mirad, idiotas, va a destruir el país”.» Según Rondón, la oposición tardó toda una década en cambiar de enfoque. Su suerte no comenzó a remontar hasta que no fueron «a los barrios marginales y al campo. No para dar un discurso o un mitin, sino para jugar al dominó o bailar salsa con aquella gente: para mostrarles que ellos, los opositores, también eran venezolanos, que no eran unos meros gruñones amargados, que bateaban la bola como el que más, que sabían contar un chiste con el que se rieran todos».[12]

Los inconvenientes de este enfoque son evidentes: sería fácil ampararse en esa necesidad de emplear el lenguaje de la gente corriente —o de contar un chiste con el que se rieran realmente todos— para emular la divisiva retórica de los populistas. Pero existe una gran diferencia entre apartarse un poco de los vocablos y las locuciones preferidas de la élite culta, y renunciar a los valores centrales de la democracia liberal. Como bien señala Rondón, la disposición a revestir un mensaje fundamentado en unos principios sólidos de un lenguaje con el que sea fácil identificarse «no es practicar el populismo por otras vías, sino que es la única manera de hacer que arraigue nuestra postura. Es decidir no vivir en una mera caja de resonancia».[13]

La tercera lección es la igualmente trascendental importancia de que nos centremos en un mensaje positivo en vez de obsesionarnos por señalar los defectos de los populistas. Como el economista italiano Luigi Zingales advertía a sus lectores estadounidenses unos días antes de las elecciones en Estados Unidos, Silvio Berlusconi tuvo el éxito que tuvo en Italia, en parte, porque la oposición «tenía tan furibunda fijación con la personalidad del

primer ministro que no dejaba margen para ningún debate político sustantivo; todo se reducía a los ataques personales, algo que no tuvo otro efecto que incrementar la popularidad del señor Berlusconi».[14]

Es comprensible que a muchos candidatos les resulte difícil seguir el consejo de Zingales. Ante los estragos que los populistas causan (o amenazan causar), cualquier político honorable se siente tentado a dar rienda suelta a cierta indignación justiciera. Cuando esto se hace con moderación, puede tener cierto efecto positivo: una desautorización apasionada de la actuación de los populistas puede percibirse como un gesto de autenticidad que movilice y aúne a quienes por principios son los más convencidos enemigos de los populistas, y que comience a reconstruir el necesario apoyo a las normas democráticas. Pero también es importante recordar que, probablemente, muchos votantes se sentirán seducidos por las promesas de los populistas e, incluso, se creerán las fanfarronadas de estos. Para rivalizar con ese relato de los populistas según el cual solo ellos pueden arreglar los problemas de la nación, los defensores de la democracia liberal tendrán que proponer unas promesas propias y realistas.

Esto último guarda relación con la última y, quizá, más importante lección: los defensores de la democracia liberal no se impondrán a los populistas mientras parezcan estar ligados al *statu quo*. Cuando Donald Trump se enfrentó a Hillary Clinton en 2016, los frentes políticos estaban todo lo claros que podían estar. Por un lado, había un candidato radical que quería traer el cambio: Trump lamentaba la «masacre estadounidense» que veía en «las fábricas abandonadas y oxidadas dispersas como tumbas por todo el paisaje de nuestra nación» y «la delincuencia y las bandas y las drogas que tantas vidas han arrebatado y que tanto potencial no materializado han robado a nuestro país».[15] La solución, como Trump dejaba bien claro, era un cambio radical. «Yo os pregunto lo siguiente —clamó en un mitin de campaña en Akron (Ohio) ante un público básicamente blanco— a los afroamericanos, [...] a los hispanos, gente fantástica: ¿qué diantres tenéis que perder? Dadme una oportunidad. Yo lo enderezaré. Yo lo enderezaré. ¿Qué podéis perder?»[16]

Por el otro lado, había una candidata moderada que daba la impresión de querer preservar el *statu quo*. Clinton respondía a Trump, con su poco estimulante estilo característico, que «juntos somos más fuertes».[17] «Estados Unidos —insistían tanto ella como Barack Obama una y otra vez— ya es grande.»[18]

Lo que quiero decir no es que Clinton debería haberse dado al muy populista hábito de propugnar posturas extremas o soluciones simplistas: aunque tanto la extrema izquierda como la extrema derecha se sienten especialmente envalentonadas en este momento, la mayoría de los electores tanto de América del Norte como de Europa occidental siguen manteniendo puntos de vista moderados sobre la mayoría de los temas. Lo que vengo a decir, pues, es que Clinton tenía que convencer a los votantes de que estaba muy implicada en el propósito de cambiar el *statu quo*: es una realidad generalizada que los electores están muy insatisfechos con la marcha de la situación en general. Según un sondeo reciente, por ejemplo, aproximadamente la mitad del electorado en Francia, Alemania y Gran Bretaña querría que sus gobiernos se desplazaran hacia el centro político. Pero muchas más personas —aproximadamente dos de cada tres en Alemania y el Reino Unido, y nueve de cada diez en Francia— dicen preferir una política de cambio a una política de continuidad.[19]

La conclusión es clara. Para evitar el error que Clinton cometió en 2016, los defensores de la democracia liberal deben demostrar que se toman muy en serio los problemas a los que se enfrenta su electorado y deben esforzarse por impulsar un cambio real. Aunque no tienen por qué emular las soluciones simplistas ni apelar a los valores (peores que los suyos) de los populistas, necesitan urgentemente desarrollar un audaz plan para un futuro mejor.

~

Hay motivos muy de fondo para que, en estas últimas décadas, los populistas hayan cosechado tan colosales éxitos en América del Norte, Europa occidental y otros países. Los gurúes muestran en ocasiones cierta afición a centrarse en los factores locales, pero lo cierto es que esos triunfos electorales no se explican principalmente por las peculiaridades de los países concretos,

ni tan solo por la (insuficiente) agudeza de los candidatos en cuestión. Sus razones hay que buscarlas, más bien, en una serie de transformaciones estructurales que han debilitado el compromiso de los ciudadanos con las normas políticas a largo plazo que regían en sus sociedades. En muchos países, los niveles de vida de los ciudadanos corrientes llevan ya bastante tiempo estancados. La transición de la democracia monoétnica a la multiétnica ha resultado más difícil de lo esperado. El auge de las redes sociales ha conferido un mayor poder a los advenedizos políticos.

Estos cambios no han transformado aún nuestras sociedades hasta tal punto que un político sensato no pueda, en casos concretos, ganarse la confianza de sus conciudadanos. De momento, a corto plazo, los candidatos carismáticos que tengan bien aprendidas las lecciones electorales básicas de estos últimos años pueden todavía alzarse con rotundas victorias.[20]

Pero, pese a ello, resulta ya evidente que, en una serie llamativamente larga de países, los cambios de las décadas recientes han situado a los populistas a una distancia extraordinariamente corta de las sedes del poder político. A largo plazo, se necesitará, pues, algo más que una campaña electoral bien gestionada para anclar la democracia liberal a una base segura. Si no queremos que cada recesión en el ciclo económico o cada pifia de un candidato de los grandes partidos represente una amenaza existencial para la democracia liberal, debemos abordar los factores estructurales que impulsan el apoyo al populismo.

Para salvar la democracia, por así decirlo, necesitamos unir a los ciudadanos en torno a una concepción común de su nación; darles una esperanza real sobre su futuro económico, y hacerlos más resistentes a las mentiras y al odio con los que se encuentran en las redes sociales todos los días. Son esos inmensos desafíos los que, en las décadas venideras, definirán nuestra lucha contra el populismo y por una sociedad mejor.[21]

Capítulo 7

DOMESTICAR EL NACIONALISMO

La idea de nación no tiene nada de natural. Durante la mayor parte de la historia de la que se tiene constancia, los seres humanos nos hemos organizado en familias, tribus, ciudades, principados o comunidades religiosas. Incluso tras las revoluciones estadounidense y francesa, momento en el que la nación se convirtió en un potente motor de la historia, continuó siendo fundamentalmente un proyecto de las élites. En pleno cenit del fervor nacionalista que culminó en la unificación del país transalpino, el escritor Maxime du Camp estaba contemplando las multitudes que gritaban «¡viva Italia!» por las calles de Nápoles cuando unas cuantas de aquellas personas, atraídas por su aspecto de atildado erudito, se acercaron a él para «preguntarle qué era Italia y qué significaba».[1]

Mi familia conoce bastante de primera mano lo que es la arbitrariedad de las naciones y la fuerza destructiva del nacionalismo. Cuando mi abuelo Leon nació en un *shtetl*[*] cercano a Leópolis (Lviv) en 1913, ese territorio pertenecía al Imperio de los Habsburgo. En el siglo transcurrido desde entonces, ha pertenecido a Polonia, a la Unión Soviética y a Ucrania.

No menos complejo fue el trayecto recorrido por mi abuelo a lo largo del siglo XX. Sobrevivió al Holocausto en Siberia, vivió las décadas de la flor de la vida en Polonia y, al final, halló refugio (quién lo diría) en Alemania. Actualmente, está enterrado en una pequeña ciudad del sur de Suecia.[2]

No es de extrañar, pues, que yo haya tenido desde siempre el deseo y la esperanza de que las fuerzas del nacionalismo fueran ya historia y hubieran quedado enterradas allí, en el siglo sobre el que tan cruel influencia ejercieron. Cuando salí de mi Alemania natal para ir a la universidad en

Inglaterra, en el amanecer del nuevo milenio, pensaba que la manera de avanzar y dejar atrás la guerra y la destrucción, el odio étnico y la intolerancia religiosa, era unir a las personas en torno a otras formas de identidad, o puede que incluso prescindir de la necesidad de forma colectiva alguna de pertenencia.

Las personas pueden definirse a sí mismas como artistas, como futbolistas, como más dadas a la reflexión que a la acción o como justo lo contrario. Pueden identificarse como habitantes de sus ciudades, como ciudadanas de Europa o como herederas de la tierra. En su forma más escueta y simple de identificarse, pueden ser simplemente ellas mismas. Dado que las diferencias culturales entre Alemania e Inglaterra, o entre Italia y Francia, eran bastante pequeñas —circunscritas a detalles como el idioma o los platos típicos de sus respectivas cocinas—, esa fusión identitaria era una transformación que no se me antojaba tan inconcebible.

No cabe duda de que mi propia historia vital me predisponía a tan utópicas esperanzas. Pero mis aspiraciones se inscribían también en una tendencia política e intelectual mucho más amplia.

Hoy es fácil olvidar cómo la Unión Europea era exaltada, hasta hace bien poco, como modelo de una nueva forma de organización política. En un mundo que se globalizaba a marchas forzadas y que se enfrentaba a dificultades de actuación política cada vez más complejas, las relativamente pequeñas naciones de Europa occidental tenían muchos y buenos motivos para poner en común sus recursos. Y dado que los líderes que dominaban el discurso político en el continente estaban básicamente unidos en cuanto a la aspiración de lograr una Europa más integrada, era fácil creer que sus votantes terminarían siguiéndolos en esa iniciativa.[3]

Los países de la periferia de la Unión Europea, que tan fervientemente nacionalistas habían sido en su día, parecían tener muchas ganas de ingresar en el club. Paralelamente, otros países en África, América Latina y otras áreas del mundo iban creando sus propios bloques regionales.[4] Una larga lista de influyentes pensadores comenzaron a defender la posibilidad de que la Unión Europea representara el futuro de la política mundial.[5]

También la justificada preocupación por el pasado hipernacionalista de Europa encajaba a la perfección con el idealista deseo de un futuro supranacional. Muchos politólogos creían que el nacionalismo estaba «destinado, a medida que avance el desarrollo, a perder su sentido de utilidad y a volverse marginal, cuando no [...] a desaparecer del todo».[6] Como bien señala el analista georgiano Ghia Nodia, esa era una suposición muy reconfortante: la predicción de que el nacionalismo estaba condenado a pasar a mejor vida posibilitaba «una afortunada congruencia entre las perspectivas normativas y las teóricas».[7]

Tras unos meses viviendo en Inglaterra, tuve que empezar a admitir que las diferencias entre la cultura británica y la alemana eran mucho más profundas de lo que me imaginaba. Eran también más extensas. Lejos de limitarse a la comida o a la lengua, se notaban también en el humor y en el temperamento, en la actitud personal y en los valores colectivos.

Después de la universidad, pasé un tiempo en Italia, y luego en Francia, y llegué a la misma conclusión en ambos sitios. Los habitantes de esos diferentes países europeos estaban mucho más apegados a sus culturas nacionales, y eran mucho más reacios a concebirse a sí mismos principalmente como europeos de lo que había deseado creer.

Si mis propias experiencias fueron haciéndome paulatinamente más escéptico acerca de la viabilidad de un futuro posnacional, no menos lo han hecho las vertiginosas transformaciones políticas de estas pasadas décadas: en todo el planeta, el nacionalismo resurge. Los ideales supranacionales parecen batirse en retirada.

Durante toda la era de la posguerra, los Estados miembros de la Unión Europea habían ido cediendo cada vez más poder a Bruselas, sin que la mayoría de sus gobiernos llegara nunca (o casi nunca) a consultar tales decisiones con su propio pueblo.[8] Así que, cuando los ciudadanos de unos pocos países europeos tuvieron la oportunidad de votar sobre la integración que se pretendía alcanzar en Europa a principios de la década de 2000, el

grado de oposición a tal idea que demostraron tener asombró a la clase política. Los franceses, los holandeses y los irlandeses votaron en sucesión en contra de las medidas propuestas para una mayor integración.[9]

Poco después, una profunda crisis de las instituciones europeas contribuiría a exacerbar esa crisis de opinión pública. La crisis financiera de 2008 llevó a los países del sur de Europa al borde de la quiebra. Pero, como eran miembros de la eurozona, no podían devaluar su moneda ni declarar una suspensión de pagos de su deuda. La economía decreció durante la mayor parte de la década siguiente. Las tasas de paro registraron acusados aumentos.[10] Se fue haciendo cada vez más evidente que algunas de las instituciones más importantes de la Unión Europea no eran sostenibles en su forma actual. Para evitar una repetición de aquella crisis del euro cuando llegue la próxima recesión, el continente debe deshacerse de la moneda única o tomar una gran (e impopular) medida que lo encamine hacia una mayor integración política de los Estados que lo componen.[11] Pero ninguna de esas dos opciones parece contar con la aceptación suficiente. Antes incluso de que el electorado británico votase por abandonar unilateralmente la nave europea, la Unión Europea estaba ya enfrentada a la crisis más profunda que le había tocado vivir desde su fundación.

Si la Unión Europea prueba a efectuar reformas ambiciosas, es muy posible que resuelva algunos de sus problemas. Los pronósticos que hablan de una muerte segura del proyecto comunitario son probablemente una exageración. Pero la ya tradicional esperanza de que los bloques regionales como la Unión Europea llegarán algún día a eclipsar la primacía política, cultural o emocional de la nación se nos antoja ahora extrañamente anacrónica. Incluso en el continente que más abierto parecía a los sueños de un futuro posnacional, la primacía del Estado nación ha regresado con fuerza.

El resurgimiento del nacionalismo ha sido más pronunciado aún fuera de la Unión Europea. En la Europa central y oriental, varios gobiernos populistas han logrado captar la fuerza de un nacionalismo celoso, suspicaz y xenófobo como arma contra la democracia liberal. Turquía está degenerando a marchas forzadas en una dictadura en toda regla bajo el liderazgo de un «hombre fuerte» que ha fusionado nacionalismo e islamismo. Incluso países como la India y China —que serán decisivos para determinar el futuro del

orden mundial y de los que bien habría cabido esperar algún que otro experimento de orden posnacional dado su inmenso tamaño— están hoy inmersos en un renacimiento nacionalista.[12]

En 2000, bastaba con un poco de imaginación para soñar con un futuro posnacional. Parecía igual de lógico desear que el nacionalismo abandonara definitivamente el escenario de la historia que creer que él solito nos haría el favor de irse. En vista de lo acaecido en estas últimas décadas, suponer tan «afortunada congruencia», como Nodia la llama, parece cada vez menos defendible.[13] Quizá las esperanzas de la llegada de un futuro posnacional estén de regreso para 2036 o para 2054. Pero, en el momento de escribir estas líneas, ese es un futuro que se antoja sumamente improbable.

Para bien o (muy posiblemente) para mal, el nacionalismo parece destinado a seguir siendo en el siglo XXI lo que fue en los siglos XIX y XX: la fuerza política más definitoria de su tiempo.[14] Mucho es lo que depende, pues, de la forma que finalmente adopte. ¿Se dedicarán los nuevos emprendedores políticos a reprimir las minorías étnicas y religiosas, a alentar el patrioterismo para aplastar las instituciones libres, y a enfrentar a personas de diferentes países entre sí? ¿O podrá el nacionalismo del siglo XXI dar acomodo a la diversidad étnica y religiosa, y sustentar unas democracias vivas y dinámicas?

EL RESURGIMIENTO DEL NACIONALISMO EXCLUYENTE

A diferencia de la mayoría de las naciones europeas, Estados Unidos no contaba con una historia, una etnicidad o una confesión religiosa común sobre la que erigirse en el momento de su fundación. El concepto de base de esa nación norteamericana siempre ha sido político. Como se deduce de la muy definitoria invocación del «nosotros, el pueblo» que allí se hace, los objetivos originales de la República estadounidense consistían en «formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posterioridad».[15] Toda persona que obtiene la ciudadanía estadounidense y está dispuesta a comprometer su apoyo a esas metas comunes está supuestamente facultada

para ser admitida en ese «nosotros» colectivo. Es esa concepción abierta de la pertenencia a la nación —y no el simple hecho de que tantos y tantos recién llegados hayan acudido a Estados Unidos a lo largo de las décadas— lo que ha hecho que ese sea un país de inmigrantes.

Bien está reconocer que la observancia de esos principios ha brillado tanto por su presencia como por su ausencia. Los esclavos y sus descendientes quedaron excluidos de la promesa estadounidense de libertad durante siglos. Católicos y judíos, asiáticos y latinos, incluso italianos e irlandeses, fueron objeto de una burda discriminación. En la práctica, el idealismo universalista de la Constitución era siempre traicionado por una perenne adhesión a la idea de nación protestante de origen británico.

Pero del mismo modo que la amarga realidad de la discriminación ha formado siempre parte de la experiencia estadounidense, también ha sido característica de esta la errática progresión hacia una unión «más perfecta». Tras décadas y siglos de conflicto, la esclavitud y la segregación fueron abolidas. Disminuyó el prejuicio hacia los católicos y los judíos. Los italianos y los irlandeses terminaron siendo considerados unos estadounidenses más. Los latinos y los asiáticos parecían estar siguiendo esos mismos pasos con bastante rapidez. Decenas de millones de estadounidenses llevaron libremente con sus votos a un hombre negro hasta la Casa Blanca. Aunque el racismo no ha dejado de ser una fuerza social muy extendida, y los políticos derechistas suelen emplear ciertas expresiones con doble sentido para avivar odios contra las minorías étnicas y religiosas, la realidad cotidiana de la nación americana parecía moverse paso a paso hacia la materialización de esa idealista concepción que tiene de sí misma: el día en que ni la raza ni el credo supusieran obstáculo alguno con vistas a que alguien pudiera reivindicarse como un (o una) estadounidense de verdad parecía considerablemente más cercano que nunca.

Entonces llegó Donald Trump.

Durante su campaña, Trump propugnó una moratoria a la inmigración musulmana, con lo que daba a entender que los miembros de una de las grandes religiones del mundo debían ser excluidos de la pertenencia a la nación. Y lanzó repetidos ataques contra los inmigrantes mexicanos y cuestionó la imparcialidad de un juez con orígenes familiares de ese país, con

lo que daba a entender que algunas etnias son menos estadounidenses que otras. Tomadas en su conjunto, esas propuestas implicaban una visión étnica y religiosa del nacionalismo estadounidense, una noción que nos retrotraía a la época en que, en la práctica, la pertenencia de un individuo a ese «nosotros, el pueblo» dependía decisivamente de su raza y su credo.

Si Trump es una buena muestra de lo rápido que una definición inclusiva de la nación puede invertirse y transformarse en una noción excluyente, no lo es menos de lo poderosa que esa noción es en manos de cualquier autoritario potencial empeñado en atacar las normas democráticas básicas. Dado que el núcleo central del atractivo populista es su pretendido «monopolio moral de la representación»,[16] todos aquellos que se oponen a los líderes populistas son, por definición, antipatriotas. Ahí radica la significación profunda de llamar a los miembros de la prensa «enemigos del pueblo americano», o de afirmar que el presidente Obama había nacido en Kenia. Y es también, por supuesto, el significado de fondo del lema «América primero».[17]

A los observadores europeos de la política estadounidense, el nacionalismo excluyente de Trump les resulta extrañamente familiar. Muchos europeos definen desde hace tiempo su pertenencia a la nación en función de una comunidad de ascendencia y de ancestros. De ahí que hayan tratado a los extranjeros que se instalan en sus países como invitados bien recibidos, en el mejor de los casos, y como intrusos molestos, en el peor.

En las décadas de la posguerra, esas actitudes limitaban las oportunidades de los inmigrantes, y sustentaban unas formas difusas de discriminación y condicionaban las leyes de ciudadanía de muchos países. En época de elecciones, los partidos conservadores cargaban a veces las tintas contra la inmigración para encender los ánimos de sus bases. Pero aunque aquel nacionalismo excluyente impedía a muchos residentes legales participar plenamente del sistema de derechos y libertades de la democracia liberal, rara vez se usaba como arma contra el sistema mismo.

Esto ha ido cambiando paulatinamente a lo largo de las últimas décadas: una nueva familia de populismos ha fusionado la adhesión fuerte al nacionalismo excluyente con un ataque iliberal contra las instituciones existentes. Al igual que Trump, políticos como Wilders o Le Pen blanden el

nacionalismo como un arma que esperan que les permita minar la democracia liberal. A ambas orillas del Atlántico, el nacionalismo y la democracia parecen colisionar sin remedio. Si los defensores de un nacionalismo agresivo y excluyente imponen su criterio, el ideal de una democracia liberal multiétnica perecerá poco a poco. Y esto es igual de cierto en España, Alemania o Hungría, que en Estados Unidos.[18]

LA TENTACIÓN DE RENUNCIAR AL NACIONALISMO

En lo tocante a la raza, los nobles principios y promesas de la Constitución de Estados Unidos se han infringido en reiteradas ocasiones. Durante el primer siglo de existencia de la República, los afroamericanos estuvieron esclavizados o (en el mejor de los casos) fueron tratados como ciudadanos de segunda. Durante el siglo siguiente, se los excluyó de buena parte de la vida pública y fueron objeto de discriminación manifiesta. Incluso ahora, bien entrados como estamos ya en el tercer siglo de la República, se sigue negando su igualdad efectiva ante la ley con una tristemente excesiva frecuencia.

En la actualidad, esa es una realidad más empírica que legal. Si los afroamericanos sufren discriminación en el mercado de trabajo, si se les condena a sentencias de prisión más abultadas por los mismos delitos, o incluso si corren un mayor riesgo de recibir disparos de la policía, no es porque existan diferencias con respecto a los demás ciudadanos en el estatus legal oficial del que unos y otros gozan. Es, más bien, porque los principios teóricamente neutrales de la ley son administrados de forma discriminatoria en la práctica.[19]

Ese es el motivo por el que la respuesta conservadora convencional al problema de la injusticia racial en Estados Unidos resulta tan poco satisfactoria. Muchas voces (desde la de John Roberts —presidente del Supremo— hasta la de Tomi Lahren —comentarista política conservadora—) tienden a recalcar lo nobles y neutrales que son los principios rectores del país, pero usan también ese hecho para negar que existan graves injusticias raciales pendientes de solución. Como el propio juez Roberts escribió en la

sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso *Parents Involved*, relacionado con la desegregación escolar, «no hay otra vía para dejar de discriminar por razón de raza que dejar de discriminar por razón de raza».[20]

Quienes así piensan se engañan a sí mismos. Si los actores privados —desde los agentes inmobiliarios hasta los directores de recursos humanos— continúan discriminando en función de la raza, entonces un Estado que actúe como si la raza no existiera jamás podrá poner remedio efectivo a las injusticias resultantes.[21] Para colmo de males, la «indiferencia al color de la piel» es un ideal legal que las personas de color tienen vedado en su propia práctica cotidiana. Según explica la socióloga Adia Harvey Wingfield, «en la mayoría de las interacciones sociales, los blancos consiguen ser vistos y considerados por separado, como individuos. Sin embargo, las personas que pertenecen a minorías raciales aprenden desde muy temprana edad que la gente las juzga a menudo como miembros de su grupo y las trata con arreglo a los estereotipos (por lo general, negativos) adscritos a dicho grupo».[22]

La insistencia en que los nobles principios de la indiferencia legal al color de la piel lo arreglarán todo por sí solos es ingenua o hipócrita. Ha sido tomando precisamente ese diagnóstico como punto de partida como ciertos sectores de la izquierda han comenzado a defender la existencia de una única vía para hacer frente a la injusticia racial, y que esa vía pasa por rechazar de plano algunos de los principios más básicos sobre los que se fundamenta la República estadounidense.

Si gran parte de la cultura popular ignora o menosprecia a las minorías étnicas y religiosas, dicen esas voces, lo que hay que hacer es afear agresivamente todas las caracterizaciones insensibles de las que son objeto las personas de color, o todos los casos de lo que se ha dado en llamar «apropiación cultural». Si se invoca la libertad de expresión como motivo para defender un discurso público que está repleto de manifestaciones abiertas de racismo y de microagresiones, entonces no quedará más remedio que sacrificar tan sagrada libertad en aras de la justicia racial.[23] Si unas leyes que se dicen neutras ante el color de la piel de los ciudadanos pueden discriminar a las personas de color de forma tan sistemática, entonces habrá que situar la raza y la identidad en el corazón mismo del sistema jurídico-legal. Y si las invocaciones de una ciudadanía común y de unos principios

universales que se hacen en la Constitución tienden a ser tan hipócritas, entonces deberíamos renegar de los adornos y la parafernalia de la identidad estadounidense.

Existe cierta justificación legítima para la indignación de la que nacen esas ideas. Estas se generan a partir de una valoración realista de la medida en que persiste la injusticia y a partir de una comprensible impaciencia ante la defensa conservadora del *statu quo*. Pero, en último término, se trata de una actitud que no contribuye más que a que acabemos descartando el grano con la paja. Y es que, más que ir demasiado lejos o ser imprudente desde el punto de vista estratégico (como algunos críticos que simpatizan con el fondo de esta idea suelen reprocharle), se trata de una actitud que lleva a sus proponentes a aceptar principios que, en última instancia, destruirían la posibilidad misma de consolidar una democracia verdaderamente abierta y multiétnica.

El debate a propósito de la apropiación cultural es un ejemplo muy esclarecedor. Según se aplica hoy en día, la crítica de la apropiación cultural sostiene que es inaceptable que los miembros del grupo de la mayoría adopten las prácticas culturales de las minorías étnicas y religiosas. En Estados Unidos, por ejemplo, se supone que no está bien que los blancos lleven rastas o, incluso, que cocinen y coman *sushi*.[24]

Los miembros de grupos que han sufrido una injusticia histórica y que, aún hoy, continúan siendo objeto de discriminación pueden sentirse a veces incómodos cuando otras personas de fuera de su grupo emulan aspectos de su cultura, y esto es perfectamente comprensible. Además, hay casos concretos de apropiación cultural que son ciertamente reprobables desde el punto de vista moral, no por el hecho en sí de que los miembros de un grupo mayoritario se hayan inspirado en la cultura de una minoría, sino porque están utilizando selectivamente los símbolos o las tradiciones de esta para parodiarla y denigrarla. Un poquito de sensibilidad cultural no haría ningún daño, sino todo lo contrario.

Sin embargo, los principios implícitos en el rechazo total de la apropiación cultural entran en conflicto directo, en último término, con los ideales de una democracia realmente liberal y diversa.

La crítica más obvia que se puede hacer a los detractores de la apropiación cultural es que tienden a incidir en aspectos que son absurdos desde el punto de vista histórico. Las rastas, por ejemplo, aparecían ya en representaciones de la Grecia o el Egipto antiguos, por lo que también podría aducirse que los afroamericanos mismos son culpables de cierta forma de apropiación cultural cuando se peinan así.[25]

Esa necesidad de recurrir a absurdos históricos viene a revelarnos un problema más de fondo. Como cualquier historiador sabe, las culturas siempre han sido muy maleables. De hecho, los defensores de las sociedades multiétnicas han apuntado tradicionalmente a la entremezcla de culturas en ciudades diversas —desde el Bagdad del siglo XII hasta la Nueva York del siglo XXI, pasando por la Viena del XIX— como una de las características que las hace tan dinámicas y prósperas.[26] Pero, en vez de celebrar el hecho de que las diferentes culturas se inspiren las unas en las otras, los detractores de la apropiación cultural parten del supuesto de que las culturas son puras, que son propiedad perenne de grupos particulares, y que deberían estipularse límites estrictos en la medida en que se influyen entre sí. Dicho de otro modo, ellos conciben la cultura de los grupos identitarios particulares de un modo muy similar a como lo hacen los xenófobos de derecha, que mantienen continuamente alta la guardia frente a las influencias foráneas en sus culturas nacionales.[27]

Esto explica por qué una aceptación ilimitada de los temores suscitados por la apropiación cultural sería tan nociva desde el punto de vista de la aspiración a una sociedad en la que los ciudadanos compartan experiencias comunes por encima de las líneas de separación raciales y culturales: o bien aceptamos la influencia mutua entre diferentes culturas como un elemento indispensable (e incluso deseable) de cualquier sociedad diversa, o bien nos protegemos de ella erigiendo ámbitos separados para cada grupo étnico y cultural.

El creciente rechazo contra el principio de la libertad de expresión es indicativo de una confusión similar.

También en este caso, el impulso básico es bastante comprensible. Ante el aparente auge de la xenofobia en América del Norte y Europa occidental, y la cada vez más destacada presencia en internet del llamado discurso del odio, es normal que muchas personas bienintencionadas compartan —en mayor o menor medida— cierto deseo de acallar las voces más incendiarias. No nos debe sorprender que ese instinto sea especialmente acusado en países que, como es el caso de Alemania, tienen muy dolorosamente reciente la experiencia histórica del fascismo. Aun así, como en el caso de la apropiación cultural, rechazar la libertad de expresión comportaría en último término el socavamiento de los cimientos mismos de la democracia liberal.

Hay expresiones que, en realidad, carecen de valor alguno.[28] El mundo sería un lugar mejor si nunca se hubieran dicho o escrito, y puede que incluso lo sería si pudieran prohibirse sin mayores consecuencias. Pero como los defensores de la libertad de expresión argumentan desde hace siglos, el problema es que no podemos fiar a autoridad alguna el poder de prohibir todas las afirmaciones perniciosas: ya fuera por error, ya fuera por interés propio, cualquier institución dotada de la facultad de censurar comenzaría, tarde o temprano, a prohibir enunciados que sí tienen un valor real.

Donde más evidente se hace hasta qué punto muchos partidarios de restringir la libertad de expresión demuestran una importante cortedad de miras estratégica es en el contexto estadounidense. Mucha de la agitación a favor de la idea de que la libertad de expresión debería estar supeditada a la justicia social tiene su origen en los campus de las universidades de élite o en los barrios más progresistas de las ciudades más progresistas del país. Así que es fácil que esos activistas ignoren lo que ocurriría si el decano de la Universidad Bautista del Sur, el alcalde de Hereford (Texas) o, por qué no, el actual presidente de Estados Unidos (y azote de la prensa) tuvieran en su mano la potestad de censurar todas aquellas expresiones que no fueran de su agrado.[29]

Pero la objeción de fondo a los ataques contra la libertad de expresión seguiría siendo válida, en su nivel más fundamental, aun si no hubiera factores estratégicos de los que preocuparse. Las sociedades libres están

asentadas sobre el principio de que ninguna autoridad pública tiene poder para determinar qué visiones del mundo son correctas y cuáles son erróneas. Si concedemos a determinadas figuras de autoridad el derecho de decidir qué expresiones están tan desprovistas de valor que pueden ser prohibidas sin más, los ciudadanos estarían poniendo en peligro un principio clave de la democracia liberal.[30]

Los debates en torno a la libertad de expresión y la apropiación cultural suelen venir propiciados por polémicas bastante localizadas en el mundo académico y editorial, y tienden a importar más a autores y editores inmersos en esas comunidades que al grueso de sus lectores. Conviene, pues, ponerlos en perspectiva. Pero aunque la importancia de ciertas controversias concretas puede exagerarse en no pocas ocasiones, lo cierto es que las cuestiones subyacentes relacionadas con el tipo de sociedad que los defensores de las democracias diversas deberían aspirar a construir siguen estando insuficientemente exploradas.

Pretender que creamos que la realidad actual es indiferente al color de la piel de las personas es un ejercicio de cobardía política y de deshonestidad intelectual. Como bien explica Wingfield, los miembros individuales de las minorías raciales no gozan actualmente del privilegio de que se los vea —o se los trate— precisamente como a eso, como a individuos.[31] Pero extraer de ello la conclusión precipitada de que una sociedad más justa sería aquella que se estructurase en torno a los derechos y los deberes *grupales* significa renunciar definitivamente a corregir esa profunda injusticia, pues, en una sociedad así, el grupo al que el individuo perteneciera definiría muchas cosas más: desde las canciones que se le permitiría cantar hasta las comidas que se le dejaría cocinar. Lejos de garantizar que, de ese modo, los negros, los latinos y los asiaticoamericanos en Estados Unidos —o, para el caso, los descendientes de turcos, sirios y marroquíes en Europa— pudiesen ser vistos por fin como individuos, no haría más que asegurar que todos los miembros de la sociedad quedasen para siempre definidos por el color de su piel o por la procedencia de sus antepasados.

El problema, en resumidas cuentas, no es que los principios de la democracia liberal —o, lo que es lo mismo, los de la Constitución estadounidense o la Ley Fundamental alemana— sean inherentemente defectuosos o hipócritas. Es, más bien, que no se han llevado realmente a la práctica todavía. Y, por consiguiente, la solución no consiste en tirar por la borda las aspiraciones universales de la democracia liberal y sustituirlas por unos derechos y unos deberes fundados en comunidades étnicas o religiosas particulares, sino en luchar por que aquellas se materialicen por fin.

No ha habido personas más conscientes de esa necesidad básica que los líderes del movimiento por los derechos civiles. Lejos de abjurar de los dogmas básicos de la democracia liberal, se valieron de la veneración que los estadounidenses sentían por esos principios para apelar a la conciencia de sus contemporáneos. Como dijo John Lewis, citando a otro líder en la defensa de los derechos civiles, A. Philip Randolph, poco después de la elección de Donald Trump, «tal vez nuestros antepasados y antepasadas llegaran a este gran país a bordo de embarcaciones diferentes, pero ahora todos vamos en el mismo barco». Lewis, en definitiva, reconoce que la mejor opción para enderezar el rumbo de la historia por la senda de la justicia pasa por utilizar de forma inteligente el simbolismo de la República estadounidense, y no por rechazar de plano el patriotismo.

En la izquierda actual, sin embargo, las energías están cada vez más enfocadas en un rechazo radical de la nación y de todas sus manifestaciones y aderezos. Hablamos de una izquierda que aplaude artículos de opinión que se publican en pleno 4 de julio con títulos como «The Making of a Non-patriot» [«La creación de un no patriota»].[32] Hablamos de una izquierda que entona eslóganes como «¡Ni Trump, ni muro, ni Estados Unidos!».[33] Y hablamos también de una izquierda que, no satisfecha con señalar las abundantes limitaciones y defectos de los padres fundadores, se niega también a admitir que se les pueda recordar por otra cosa que no sean sus fallas morales. Shaun King así lo recordaba refiriéndose a Thomas Jefferson en un artículo de opinión que no tardó en hacerse viral. Según él, Jefferson «era un monstruo

[...]. Acepto que desempeñó un papel vital en la fundación moderna de lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América, pero no debería rendírsele homenaje alguno».[34]

En ese sentido, la izquierda estadounidense está siguiendo paso a paso un camino marcado antes por la izquierda europea. Las anteriores generaciones de izquierdistas en Estados Unidos reconocían que las tradiciones universalistas de su país permitían abogar por un patriotismo que se sintiera más cómodo con el ideal de una sociedad liberal y multiétnica. En Europa, por el contrario, la izquierda constató hace tiempo que la concepción de la nación que allí ha imperado históricamente era étnica y religiosa. Por ello, lleva mucho tiempo siguiendo la misma estrategia que, ahora, ciertas partes de la izquierda estadounidense están adoptando, que no es otra que la de abandonar el patriotismo democrático y hacer suya una crítica radical de las instituciones heredadas.[35]

Pero el resultado no ha sido el deseado. Convencida de que no iba a poder reorientar el patriotismo hacia sus propios fines, la izquierda ha dejado vacante todo el espacio nacionalista y, con ello, ha permitido que la derecha lo ocupe conforme a sus propios términos.

PATRIOTISMO INCLUSIVO

Frente a aquellos sectores de la derecha que quieren excluir a las minorías de la pertenencia a la nación y frente a aquellos otros sectores de la izquierda que ponen el énfasis en las diferencias entre ciudadanos de distintas razas y religiones, hasta tal punto que parecen disolver los vínculos entre unos y otros, necesitamos forjar un nuevo lenguaje basado en el patriotismo inclusivo.

Este patriotismo inclusivo no debe ser ciego a las injusticias persistentes. Tampoco puede priorizar la nación hasta tal punto que esta oprima a minorías del propio país o fomente el conflicto con otros países. Lo que sí debe hacer es inspirarse en la tradición de la democracia multiétnica para mostrar que los lazos que nos unen van mucho más allá de la etnia y la religión.

Se trata, en parte, de una cuestión de retórica, lo que hace que sea especialmente esperanzador el hecho de que muchos líderes hayan abogado efectivamente por esta clase de patriotismo en estos últimos años. Por ejemplo, en un discurso pronunciado con motivo de la celebración del quincuagésimo aniversario de una famosa campaña de protesta del movimiento por los derechos civiles, Barack Obama recalcó lo mucho que estadounidenses de todo origen y condición sumaron sus respectivas fuerzas para derrotar la segregación: «Cuando el sonido de los clarines llamó —dijo—, mucha gente vino para unirse a la causa: negros y blancos, jóvenes y viejos, cristianos y judíos, todos ellos ondeando la bandera de los Estados Unidos y cantando los mismos himnos llenos de fe y esperanza».[36]

De paso, Obama también hizo hincapié en lo mucho que la lucha por los derechos civiles apeló a los valores básicos consagrados en la Constitución estadounidense. «Qué fe más enorme tenían aquellos hombres y mujeres», comentó maravillado allí, de pie, en el mismo punto de origen del que los participantes habían partido en su marcha de protesta de Selma a Montgomery (Alabama) en marzo de 1965.

> La fe en Dios, pero también la fe en América [...]. ¿Qué mayor expresión de fe en el experimento estadounidense —qué mayor forma de patriotismo— puede haber que el convencimiento de que Estados Unidos no está aún terminado, de que somos suficientemente fuertes como para ser autocríticos, de que cada nueva generación sucesiva puede examinar nuestras imperfecciones y decidir que está en nuestras manos rehacer esta nación para que esté más perfectamente alineada con nuestros más elevados ideales?
>
> Por eso, Selma no es un caso aparte en la experiencia estadounidense. Por eso, no se puede considerar un museo o un monumento estático que admirar desde la distancia. Se trata, más bien, de la manifestación de un credo escrito en nuestros documentos fundacionales: «Nosotros, el pueblo [...] a fin de formar una unión más perfecta [...] sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales».[37]

Unos meses antes de las elecciones presidenciales de 2017, Emmanuel Macron reivindicó el patriotismo de un modo más explícito aún. En un momento de rápido crecimiento del apoyo popular al Frente Nacional y a su concepción orgullosamente excluyente de la ciudadanía, él se desplazó hasta la muy diversa ciudad de Marsella.[38] Allí, hablando ante un público de simpatizantes, expuso otra manera de concebir con orgullo la nación francesa, situando la diferencia como su elemento esencial:

> Cuando miro Marsella, veo una ciudad francesa, influida por dos mil años de historia, de inmigración, de Europa [...]. Veo a armenios, italianos, argelinos, marroquíes, tunecinos. Veo a personas de Mali, de Senegal, de Costa de Marfil. Veo también a muchas otras que no he mencionado.
>
> Pero ¿qué es lo que veo en ellas en realidad? ¡Veo al pueblo de Marsella! ¿Qué veo en ellas? ¡Veo al pueblo de Francia!
>
> El pueblo de Francia. Miradlas. Están aquí. Son personas que se sienten orgullosas. Orgullosas de ser franceses. Fijaos bien en ellas. Señoras y señores del Frente Nacional: esto es lo que quiere decir sentirse orgullosos de ser franceses.[39]

La retórica importa. Puesto que la nación es —por usar la famosa fórmula que Benedict Anderson usara para describirla— una «comunidad imaginada», la manera en que hablamos de ella tiene la capacidad de afectar a su naturaleza misma.[40] Los líderes políticos que reinterpretan la concepción de una nación para que, de ser tradicionalmente excluyente, pase a ser entendida en términos inclusivos pueden contribuir muy decisivamente a domesticar el nacionalismo.

Pero la retórica por sí sola no basta. Si cada vez más naciones se están reorientando hacia una forma más agresiva de nacionalismo es porque hay unas razones políticas e históricas complejas para ello. El número de nacidos en otros países alcanza niveles récord en muchos de los Estados de América del Norte y Europa occidental. En naciones que han sido históricamente monoétnicas, un elevado porcentaje de la población es reticente a aceptar que los inmigrantes o sus descendientes puedan llegar nunca a ser verdaderos compatriotas suyos. Por otra parte, una proporción significativa de los inmigrantes tiene problemas para adaptarse a la cultura local y sus estadísticas en cuanto a desenvolvimiento lingüístico y a éxito escolar y educativo van a la zaga de las de la población autóctona, incluso entre los miembros de la tercera generación.[41]

Todo esto exige una respuesta que no renuncie a los principios, pero que no caiga tampoco en la ingenuidad, y que sea capaz de concitar el apoyo popular sin pecar de populismo. Para triunfar en la lucha por una forma inclusiva de patriotismo, los países tendrán que hacer mucho más de lo que hacen por facilitar una sensación real de comunidad entre todos sus ciudadanos y por calmar los temores que aún persisten a propósito de la inmigración futura.

La primera parte de esa lucha consiste en garantizar que los principios liberales se apliquen con igual vigor a todos y a todas.

Aunque las democracias liberales proclaman que en ellas se trata igual a todos los ciudadanos, lo cierto es que es tristemente habitual que su realidad no esté a la altura de esa aspiración. En todos los países, ya hablemos de Suecia o de Canadá, pervive alguna forma significativa de discriminación. Tanto si esa discriminación emana del Estado como de la empresa o de las asociaciones privadas, o de los ciudadanos particulares, la realidad es que reduce significativamente la medida en que las minorías gozan de iguales derechos de ciudadanía.

Por suerte, hay medidas de puro sentido común que pueden ayudar a que disminuyan los casos de discriminación. Muchos gobiernos regionales y nacionales no han aprobado aún leyes integrales que prohíban a empresarios y propietarios inmobiliarios discriminar a candidatos de las minorías, por ejemplo. Ciertos cambios en algunas convenciones establecidas desde hace tiempo también podrían contribuir a modificar trascendentalmente las cosas: los países europeos harían bien, por ejemplo, en prohibir a los aspirantes a un empleo la sorprendentemente extendida costumbre de adjuntar foto en su currículum. Las empresas, por su parte, podrían aminorar sesgos inconscientes con una práctica tan sencilla como la de eliminar el nombre y la raza de los candidatos de los materiales examinados en las primeras fases de los procesos de contratación.

Las barreras estructurales continúan siendo un obstáculo mayor todavía para el éxito de las minorías raciales y étnicas.[42] La educación es un ejemplo especialmente cruel. En países como Alemania, un sistema educativo de múltiples niveles determina por sí solo en la práctica quiénes van a la universidad y quiénes no nada más terminar el cuarto curso, pues da a los hijos e hijas de padres que saben cómo manejarse en el sistema (y que suelen tener, además, un buen nivel educativo) una enorme ventaja.[43] En países como Francia, el sistema educativo es igualitario en apariencia, pero destina ingentes recursos a unas pocas escuelas de élite, al tiempo que ignora el desastroso rendimiento del alumnado en los barrios con mayor presencia de inmigrantes.[44]

En Estados Unidos, por su parte, las escuelas públicas siguen estando extraordinariamente segregadas. Sesenta años después de la trascendental sentencia del caso *Brown v. Board of Education* que declaró inconstitucional la doctrina de las escuelas «separadas aunque iguales» para las diferentes razas, el Congreso solicitó a la Oficina Contable del gobierno federal un estudio de cuánto había avanzado la integración racial. Los resultados fueron descorazonadores: una proporción tristemente elevada de niños y niñas continúan yendo a colegios e institutos cuyo alumnado está formado mayoritariamente por estudiantes de su misma raza. De hecho, el número de centros educativos en los que se registran concentraciones muy altas de alumnos y alumnas de minorías se había duplicado entre 2000 y 2013.[45]

Todo compromiso real con el objetivo de dar a los estudiantes de las minorías las mismas oportunidades de tener una buena vida que a los demás tiene que implicar una inversión total de estas desalentadoras tendencias. El primer paso para lograr una nación en la que personas de diferentes orígenes se vean a sí mismas como verdaderos compatriotas es educarlas juntas. El avance real hacia tal meta comportaría en casi todos los países una reforma radical que prácticamente ninguno de ellos tiene en consideración en su agenda política. En Alemania, por ejemplo, implicaría replantearse ese sistema educativo de tres niveles a fin de favorecer una mayor mezcla que supere las líneas de separación étnica y de facilitar que los hijos e hijas de inmigrantes lleguen a la universidad. En Estados Unidos, significaría dar un impulso renovado a la desegregación de las escuelas.

Una política integradora verdaderamente liberal trataría de garantizar con renovada decisión que los miembros de los grupos minoritarios no sufrieran discriminación ni vieran sus perspectivas de futuro mermadas por culpa de obstáculos estructurales. Al mismo tiempo, también se alinearía contra quienes —por miedo a ser falsamente acusados de discriminación o por su compromiso explícito con el relativismo cultural— exceptúan a los grupos minoritarios de los derechos y los deberes básicos de una sociedad liberal.

De esto último, hay hoy ejemplos sorprendentemente generalizados. De Suecia a Estados Unidos, son muchos los países en los que un número impactantemente elevado de niñas y adolescentes son casadas a la fuerza por sus familias o son sometidas a la práctica de la mutilación genital femenina.[46] En Bélgica y en el Reino Unido se han puesto trabas muy serias a la labor de la policía en la investigación de delitos graves cometidos por miembros de minorías culturales por la preocupación de que con ello se estuviera pecando de cierta falta de sensibilidad cultural.[47] Y crece el número de casos en los que las autoridades del Estado excusan ciertos actos perniciosos solo porque supuestamente están justificados por la cultura de origen de los afectados: en Alemania, por ejemplo, un juez se negó a conceder a una mujer que había sido maltratada por su marido, de origen marroquí, la posibilidad de un divorcio exprés alegando que, «en su cultura, no es atípico que un marido inflija algún castigo corporal a su esposa». La mujer, sentenció el juez, debería haber «previsto ya conductas de esa clase» cuando se casó con él.[48]

Aunque ese es un enfoque de la situación que pretende ser tolerante, lo cierto es que subestima a los grupos minoritarios. Excusar la violencia doméstica porque se presupone una parte normal de la cultura de un inmigrante perpetúa el racismo de las bajas expectativas. Mirar hacia otro lado mientras las niñas sufren mutilaciones genitales equivale a imponer los costes de la presunta tolerancia del Estado a los miembros más vulnerables de los grupos minoritarios. Lejos de constituir un ejercicio de discriminación, la determinación del Estado a la hora de exigir a todos sus habitantes el mismo criterio, con independencia de su religión o del color de su piel, es el único modo de garantizar que no renuncia a cumplir con las más esenciales obligaciones que tiene para con todos ellos.[49]

El ideal del nacionalismo inclusivo obliga a que el Estado proteja los derechos de todos los individuos, aunque sea contra las propias familias o los vecinos de estos. Si deseamos preservar la democracia liberal, no podemos eximir a las minorías de lo que ese sistema exige de todos. Ahora bien, ese mismo ideal proporciona directrices menos claras en cuanto a una cuestión de mayor carga emocional aún: la naturaleza y el volumen de la inmigración.

Una cosa está clara: los defensores de la democracia liberal no deben mostrar condescendencia alguna con los sentimientos populistas. Para defender realmente sus principios, deben proteger a los inmigrantes de cualquier trato indebido. Y puesto que los miedos demográficos están estrechamente interrelacionados con la ansiedad económica, también deberían reconocer lo contraproducente que resultaría, en último término, ceder ante muchas de las medidas antiinmigratorias propuestas por los candidatos populistas a ambas orillas del Atlántico: unas restricciones radicales como las que ellos proponen dañarían seriamente la economía, y eso, a largo plazo, difícilmente ayudaría a debilitar el apoyo del que ya gozan los propios populistas.

Por otra parte, los defensores de la democracia liberal no estarán haciendo más que avivar las llamas del populismo si desprecian los temores que muchos ciudadanos sienten a propósito de la presunta ineficacia de los controles fronterizos, o si ignoran el gran descontento popular con los niveles actuales de inmigración. Para abordar los factores más profundos que alimentan el desencanto con el sistema político que defienden, puede que sea necesario que se desvíen un poco de aquellas políticas que serían su primera preferencia.

No hay soluciones fáciles. Aun así, es posible llegar a un compromiso sin renunciar a los principios: los defensores del nacionalismo inclusivo deberían abogar también por los derechos de aquellas personas que están ya en el país y por mantener abiertas las puertas a la llegada de parientes cercanos de los ya residentes y de nuevos inmigrantes cualificados; pero, al mismo tiempo, deberían tomarse en serio la inquietud que despierta el rápido ritmo de la inmigración y reconocer que la nación es una comunidad circunscrita geográficamente que solo puede pervivir como tal cuando conserva el control sobre sus fronteras.[50]

En la práctica, eso significa que debemos insistir en que todas las personas que residen legalmente en un país sean tratadas igual con independencia de su color o de su credo. Deberíamos oponernos, pues, a aquellos intentos —como la propuesta de Trump de prohibición de entrada en el país de viajeros procedentes de países musulmanes— de exclusión de las personas por razón de su fe (o de cualesquiera otras características

adscribibles, como la raza). Y deberíamos también denunciar el sufrimiento que producen las deportaciones de inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran aún niños o que llevan mucho tiempo en él.

Pero, del mismo modo, deberíamos admitir que no supone vulneración alguna de los principios de la democracia liberal el que las naciones perfeccionen su capacidad de seguimiento y control de quiénes acceden a su territorio. De hecho, es justamente lo contrario: unas fronteras seguras pueden ayudar a que aumente el apoyo a unas políticas inmigratorias más generosas. Asimismo, unos procedimientos mejorados de identificación y expulsión de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad ayudarían sin duda a calmar las tensiones étnicas, y no a aumentarlas.

Parecido compromiso puede alcanzarse en cuanto al volumen total de la inmigración. Existen muy buenos motivos para seguir aceptando a muchos nuevos recién llegados y recién llegadas a nuestros países. Pero, al mismo tiempo, está en perfecta consonancia con los principios de la democracia liberal que los Estados nación respeten las preferencias populares rebajando el número total de inmigrantes. Lo que quiero decir es que las normas que regulan cuántas personas se permite entrar en el país deberían estar sujetas a la dinámica de la confrontación democrática de posturas.

Las opciones entre las que podemos elegir en materia de inmigración son mucho más diversas y matizadas de lo que la encendida retórica en torno a este tema suele dar a entender. Existen muchas formas de calmar los temores populares respecto a la inmigración respetando al mismo tiempo los principios de la democracia liberal. Canadá, por ejemplo, es buena muestra de hasta qué punto es posible ser acogedores y razonablemente firmes a la vez: su gobierno abre las puertas del país a un elevado número de inmigrantes, pero se asegura de que la mayoría de ellos sean personas con elevados niveles de cualificación, y, gracias a ello, el país se ha convertido rápidamente en un modelo de tolerancia.[51]

~

El nacionalismo es como un animal medio salvaje, medio domesticado. Mientras lo tengamos bajo control, puede ser tremendamente útil y puede favorecer un auténtico enriquecimiento de nuestras vidas. Pero siempre amenaza con liberarse de las restricciones que le imponemos. Y si logra zafarse de ellas, puede ser letal.

Sigue habiendo suficiente idealismo en mí como para que me sienta atraído aún por la idea de un mundo que trascienda el nacionalismo, un mundo en el que las personas no tengan por qué insistir en sus diferencias étnicas o culturales, y puedan definirse más bien por su pertenencia común a la raza humana. Pero soy también suficientemente pesimista como para reconocer que la bestia nacionalista continúa bien viva.

Podemos, por supuesto, ignorarla o actuar como si ya no existiera. Pero si la abandonamos, vendrán quienes la acogerán, la azuzarán y la cebarán para sacar de ella su lado más feroz. Tenemos tantos y tan bien argumentados reparos respecto al nacionalismo que no nos queda otra opción que domesticarlo lo mejor que podamos.

Capítulo 8

ARREGLAR LA ECONOMÍA

Bajo mucha de la retórica populista, late un pulso nostálgico. En Estados Unidos, es bien sabido que Donald Trump prometió hacer que «América» fuera «grande de nuevo».[1] En el Reino Unido, el eslogan que definió la campaña a favor de abandonar la Unión Europea fue la promesa de «recuperar el control».[2]

Uno de los motivos por los que estos eslóganes tan simples resultan tan poderosos es que cualquier votante puede proyectar su particular forma de nostalgia personal en ellos. Hay votantes que anhelan recuperar aquellos tiempos en los que su país estaba dominado por una única etnia, mientras que hay otros que evocan una época en la que las normas sociales conservadoras imperaban sin rival. Hay quienes identifican la grandeza pasada de su país con las aventuras imperiales del siglo XIX, mientras que otros recuerdan con cariño las victorias militares del siglo XX. Pero pese a los múltiples tonos evocadores de tan simples eslóganes, es evidente que la nostalgia por una edad económica dorada en la que la gente era rica y los puestos de trabajo estaban asegurados es un elemento central de su atractivo.

Buena parte de la ansiedad que los electores están viviendo es pecuniaria. En muchos países, tanto en América del Norte como en Europa occidental, el nivel de vida de la familia media no ha mejorado en décadas. A los jóvenes no les está yendo igual de bien que les fue a sus mayores. La desigualdad va en aumento. En vista de las decepciones que han sufrido en estos últimos años, la mayoría de las familias sienten un temor nada irracional a que el futuro pueda depararles auténticas penurias materiales.

Pero la nostalgia por el pasado económico no tiene que ver solamente con el dinero: está relacionada también con la disminución de la esperanza.

La mayoría de las personas en Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia o Italia son mucho más ricas de lo que lo eran sus abuelos a su misma edad. Pero sus abuelos tenían muchos motivos para el optimismo. Aunque se habían criado en la pobreza, llevaban una vida relativamente acomodada y esperaban que sus propios hijos llevaran otra todavía mejor. En la actualidad, sin embargo, la experiencia del estancamiento económico ha inducido en la mayoría de los ciudadanos una elevada inquietud ante el futuro. Miran hacia él con gran preocupación, pues ven que las fuerzas de la globalización dificultan cada vez más que los Estados controlen las fronteras o fijen sus propias políticas económicas. Y de igual modo que sus naciones ya no parecen capaces de tomar sus propias decisiones, también ellos se sienten como juguetes en manos de unas transformaciones económicas que están fuera de su control. En este momento en que muchos empleos que parecían fijos se deslocalizan hacia otros países o desaparecen por el avance de la tecnología —en este momento en el que fábricas históricas cierran sus puertas y en el que los sindicatos pierden su antiguo poder de negociación—, su puesto de trabajo ha dejado de proporcionarles un asiento estable en la sociedad.

Así pues, cuando la gente clama por hacer que Estados Unidos sea «grande de nuevo» o por «recuperar el control», está pidiendo algo más que un aumento de salario. Lejos de actuar motivadas por el puro consumismo, lo que estas personas ansían es una sensación de optimismo que les asegure un puesto en un mundo que cambia a velocidad de vértigo.[3]

Para frenar el auge del populismo, tenemos que ser capaces de calmar esos complejos temores y visualizar un mañana mejor. Los ciudadanos piden garantías de que sus trabajos seguirán valiéndoles el debido respeto social dentro de veinte o treinta años. Quieren saber si son suficientemente dueños de su propio destino como para poder vivir sus vidas con un mínimo de confort material. Quieren estar seguros de que sus hijos tendrán la oportunidad de estar mejor que ellos. Quieren que su nación sea capaz de tomar sus propias decisiones y de cuidar de sus conciudadanos más vulnerables, aun a pesar de los cambios provocados por la globalización. A

menos que seamos capaces de hacer progresos en todos esos frentes, la nostalgia por aquel pasado más sencillo se traducirá indefectiblemente en votos para los populistas que prometan recrearlo.

En medio de la sensación general de pesadumbre económica reinante, es fácil olvidar que el tamaño total de las economías occidentales no ha dejado de crecer durante las pasadas décadas. Desde 1986, el PIB per cápita de Estados Unidos ha aumentado un 59%. El valor neto del país ha crecido en un 90%. Y los beneficios empresariales se han disparado en un 283%.[4]

Pero esas cifras agregadas ocultan cuál ha sido el reparto real de tales ganancias. Solo un 1% del crecimiento total de la riqueza registrado entre 1986 y 2012 fue a parar a las familias que componen el 90% menos rico del total, mientras que un 42% de ese crecimiento se concentró en un 0,1 de las familias, las más ricas del país.[5]

Lo más llamativo de este relato económico es hasta qué punto los políticos estadounidenses conspiraron para acelerar —en vez de ralentizar— la divergencia entre la suerte de los superricos y la de los ciudadanos corrientes. Ronald Reagan recortó el tipo fiscal máximo, el de las mayores rentas, rebajándolo del 70% al 50% en 1981, y de nuevo al 38,5% en 1986. George W. Bush redujo aún más ese tipo hasta el 35% y el aplicable a los rendimientos del capital —que pagan casi exclusivamente las personas más ricas— del 20% al 15% en 2003.[6]

Y al tiempo que cambiaban las normas para permitir que los ricos retuvieran una parte más grande de su renta, esos mismos políticos adelgazaron o eliminaron muchos de los servicios y prestaciones de los que los miembros más vulnerables de la sociedad dependían desde hacía tiempo para mantenerse a flote.

Reagan redujo a la mitad los fondos dedicados a las subvenciones al alquiler y a la vivienda pública, y sacó a un millón de personas del programa de cupones de alimentos. Bill Clinton reemplazó la ayuda a las familias con hijos a su cargo (un derecho federal sin límites temporales) con la llamada asistencia temporal a familias necesitadas (un programa que administran los estados y que prohíbe a sus beneficiarios recibir ayudas durante más de dos

años consecutivos, o durante más de cinco en toda su vida). Los estados han recortado incluso más ese sistema de protecciones sociales reorientando las subvenciones que por él reciben del Gobierno federal: en vez de destinarlas a ayudas monetarias o a atención a la infancia para las personas pobres, muchos de los gobiernos estatales las están usando actualmente para tapar agujeros en sus propios presupuestos.[7]

El impacto agregado de esos cambios ha sido descomunal. Dos décadas atrás, un 68% de las familias con niños en situación de pobreza recibían asistencia económica en forma de prestaciones monetarias; actualmente, esa cifra es solo del 26%.[8]

La evolución fuera de Estados Unidos no ha sido tan dura. En muchas zonas de Europa, por ejemplo, los tipos fiscales para los contribuyentes superricos no han bajado en semejante medida. Pero también allí una década de austeridad ha tenido una honda repercusión en la medida en que la población está protegida frente a los grandes riesgos vitales, y ha erosionado los servicios públicos que los ciudadanos tienen a su disposición. Especialmente en el sur del continente, se han subido los impuestos a los contribuyentes corrientes, al tiempo que se reducían sus percepciones por desempleo, o se congelaban sus pensiones, o se degradaban los servicios que les dispensa el Estado (desde la educación pública hasta las líneas de autobús en las zonas rurales).[9]

Aunque la Gran Recesión fue propiciada por fallos cometidos en la cima del sector financiero, al final ha desembocado en un rápido ahondamiento de la brecha económica entre ricos y pobres, tanto en Europa como en Norteamérica.

A menudo, se describe la melancolía económica de estas pasadas décadas como si hubiera sido causada por unas fuerzas naturales sobre las que los políticos no tenían control alguno. El progreso tecnológico y la automatización, según ese relato de los hechos, han sustituido millones de empleos.[10] El ascenso de fuertes competidores, desde China hasta Bangladés, ha contribuido a reducir los salarios y los niveles de empleo de los

trabajadores poco cualificados.[11] Es posible que los ciudadanos de las democracias norteamericanas y de Europa occidental tengan que afrontar el hecho de que la era de su riqueza sin rival ha tocado a su fin.[12]

Hay mucho de cierto en esa versión de la historia. A un gobierno nacional le resultaría extraordinariamente difícil detener el progreso tecnológico o parar el comercio internacional. Y aun si le resultara posible, no sería deseable que lo hiciera. Después de todo, esas transformaciones han sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo y, llegado el día, podrían incluso liberar como nunca antes a los ciudadanos de los países ricos de las penalidades del trabajo duro y la escasez.[13]

Pero, si bien las tendencias subyacentes están ciertamente fuera del control de los gobiernos nacionales, los efectos corrosivos que aquellas han tenido tanto sobre los bolsillos como sobre las actitudes de los ciudadanos de a pie son la consecuencia de un fracaso político. Sí, la tecnología está dando al traste con muchas profesiones consolidadas hasta hace bien poco, pero el Estado podría hacer mucho más por asegurarse de que quienes han sido más directamente golpeados por esos cambios puedan seguir viviendo sin prescindir de la dignidad material. Y, sí, la primacía económica de las democracias occidentales se desvanece por momentos, pero las decepciones materiales sufridas por sus ciudadanos están igual de causadas por el injusto reparto de las ganancias obtenidas con la globalización que por el estancamiento económico.

Algunos países occidentales han reaccionado mucho mejor que otros a esos mismos (o parecidos) retos externos; la diferencia ha estribado en las políticas públicas implementadas. Así que la pregunta que nos corresponde hacernos no es si podemos detener las megatendencias económicas de las últimas décadas, sino cómo aprovecharlas de forma más justa.[14]

POLÍTICA FISCAL

Una vía que evidentemente nos permitiría invertir el signo de las preocupantes tendencias de estas pasadas décadas sería la consistente en dar marcha atrás a las políticas que han exacerbado tales tendencias. Eso pasaría por aumentar los tipos fiscales efectivos a las rentas personales máximas y a

las empresas con mayores beneficios.[15] Significaría también restablecer ciertos elementos básicos del Estado del bienestar.[16] Significaría invertir en áreas —como las infraestructuras, la investigación y la educación— en las que el gasto público tiende a saldarse con un retorno positivo a largo plazo, en vez de recortar gastos en todas las partidas de los presupuestos.[17] Y, desde luego, significaría facilitar a todos los ciudadanos una atención sanitaria digna.[18]

Pero si hemos de tomarnos en serio el objetivo de que todos los ciudadanos compartan los beneficios que produce la globalización, tenemos que promover y hacer efectiva una agenda económica que vaya más allá de la mera restauración de las viejas políticas de antaño. Tanto el sistema impositivo como el Estado del bienestar existentes se formaron en una época en la que, a diferencia de lo que sucede hoy en día, la mayor parte de la actividad económica se circunscribía dentro de los límites territoriales del Estado nación; la mayoría de la población trabajaba durante la mayor parte de su vida, y la mayoría de los trabajos eran sumamente estables. Pero, aunque los objetivos de aquel orden económico de la posguerra —en el que se pretendía compaginar la importancia de la igualdad económica con la generación de riqueza en el libre mercado— continúan siendo igual de nobles y relevantes que siempre, las herramientas que mejor pueden ayudarnos a alcanzarlos han cambiado.

La necesidad de hallar nuevas vías de realización de esos viejos objetivos se hace especialmente obvia en el caso de la política fiscal.

El 39,1% era el tipo máximo del impuesto de sociedades en Estados Unidos en 2012, casi un récord mundial. Sin embargo, ese mismo año, el tipo fiscal efectivo pagado por las empresas en Estados Unidos fue el más bajo en cuatro décadas: apenas el 12,1%.[19]

Uno de los motivos principales de tan enorme margen diferencial radica en la maraña de resquicios legales absurdos creados por el Congreso con la intención plenamente consciente de canalizar más dinero aún hacia los superricos. Baste poner un significativo ejemplo: el favorable tratamiento fiscal de los *jets* privados hace que su adquisición resulte baratísima para las grandes empresas.[20] Otro de los grandes motivos es que las grandes corporaciones empresariales han eludido el espíritu original de muchas leyes

fiscales trasladando sus sedes centrales al extranjero, o creando un entramado bizantino de entidades legales que desvían las ganancias hacia territorios donde estas apenas devengan impuestos. Según Oxfam, por ejemplo, las cincuenta mayores empresas estadounidenses han desplazado —por medios estrictamente legales— más de un billón de dólares a paraísos fiscales internacionales, lo que le cuesta al gobierno del país unos 111.000 millones de dólares en ingresos fiscales que deja de cobrar.[21]

También las personas físicas ricas están sometidas a un régimen fiscal de similar laxitud. Una de las razones por las que algunos multimillonarios pagan un tipo fiscal efectivo medio más bajo que su personal de secretaría —como lamentó en su día Warren Buffett— es que los políticos continúan entregándoles inmensos regalos en ese terreno: la deducción por participación en beneficios, por ejemplo, permite que los gestores de fondos de inversión paguen solo la mitad de lo que normalmente pagarían por el total de sus ingresos.[22] Pero otra gran razón para ello es que los particulares ricos han mostrado la misma habilidad que las grandes empresas para eludir a los recaudadores de impuestos: como la filtración de los llamados papeles de Panamá ha dejado claro, cada año se canalizan enormes fortunas hacia paraísos fiscales internacionales. Pero aunque muchas de esas actividades son ilegales, rara vez se persiguen con los encausamientos judiciales pertinentes.[23]

Así pues, para procurar que tanto las personas físicas como las jurídicas paguen la cuota de impuestos que por justicia les corresponde, deberíamos estar dispuestos a valorar cómo sería el sistema fiscal si tuviéramos que inventarlo de cero. ¿Cómo podrían los Estados nación recuperar su capacidad para gravar ingresos y beneficios aun a pesar de la espectacular movilidad del capital en un mundo globalizado?

La respuesta es, en ciertos aspectos, más simple y evidente de lo que puede parecer. Históricamente, el mayor activo del Estado nación ha sido su territorio. De hecho, la definición misma del Estado moderno ha dependido tradicionalmente de su capacidad para hacer cumplir una serie particular de normas en un área geográfica determinada.[24] El problema al que nos

enfrentamos actualmente nace del hecho de que la relevancia económica de ese activo ha disminuido en el transcurso de las últimas décadas. Cuando la agricultura representaba el grueso de la economía de los países, la mayoría del capital era fijo y no podía moverse entre fronteras nacionales. A medida que la actividad económica fue desplazándose hacia la industria, hacia los servicios en general y hacia el sector financiero en particular, más fácil lo tuvo el capital para levantar vuelo. No es de extrañar, pues, que un régimen fiscal diseñado en la era del capital cautivo resulte tan inadecuado para afrontar esta nueva realidad actual.[25]

Pero la impotencia del Estado nación ha sido (si se me permite la corrupción de una famosa corrupción lingüística previa) muy *malexagerada*.[26*] Así puede apreciarse muy especialmente en el caso de los impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas físicas. La mayoría de los particulares —incluso aquellos que son superricos— conservan un profundo vínculo con su país. Puede que estén dispuestos a pasar 183 días de cada año viviendo en las Bahamas a cambio de reducir sensiblemente su factura fiscal personal, pero muy pocos estarían dispuestos a sacrificar la libertad de volver a entrar en su país cuando quieran. Eso confiere a los Estados nación un obvio instrumento de presión sobre sus ciudadanos: si quieren conservar la posibilidad de acceder libremente a su territorio, tendrán que pagar sus impuestos en el propio país.

Estados Unidos es la única nación desarrollada del mundo que ya aplica una política de este tipo. Todo ciudadano estadounidense o residente permanente en el país debe pagar sus impuestos allí.[27] Otros países harían bien en seguir ese ejemplo y poner fin al trato preferencial que dispensan a los ciudadanos que se trasladan a vivir a paraísos fiscales durante parte del año para eludir la obligación de pagar la cuota de impuestos que por justicia les corresponde.[28] Incluso en Estados Unidos, ese mismo principio podría aplicarse con mayor firmeza haciéndolo extensivo a factores que vayan más allá de la ciudadanía: por ejemplo, sería lógico exigir a cualquiera que sea propietario de un inmueble residencial en un país que pague sus impuestos allí.[29]

Aunque esta norma ayudaría mucho a resolver el pernicioso efecto de los paraísos fiscales legales, poco serviría para solucionar el problema del uso ilegal de tales paraísos fiscales. Pero también ahí el Estado nación posee más bazas de las que los fatalistas suelen suponer.

En aquellas raras ocasiones en que los grandes países han colaborado para presionar sobre los paraísos fiscales, se han anotado éxitos tan sorprendentes como rotundos, como la reciente serie de acuerdos entre Suiza y varios países (Reino Unido y Estados Unidos, entre ellos) bien demuestra.[30] Además, los Estados nación pueden lograr avances reales aun en ausencia de un acuerdo de cooperación internacional. Los gobiernos nacionales podrían cambiar la conducta de los superricos, por ejemplo, endureciendo los castigos penales para los grandes evasores fiscales, o invirtiendo más dinero en investigar el fraude, o mostrando una mayor disposición a comprar información financiera filtrada que pudiera llevar al encausamiento y la condena de los infractores. Si el gusto por la aventura financiera de los particulares ricos comportara para ellos un peligro verdadero de ir a la cárcel, serían mucho menos dados a lanzarse a tales andanzas.[31]

El caso del impuesto de sociedades es algo más complicado, pues el principio de territorialidad tiene más difícil aplicación sobre las compañías multinacionales provistas de cadenas de producción y distribución sumamente complejas. Pero, aun así, también en ese apartado hay mucho potencial de reforma. Y es que, del mismo modo que a los particulares no les gustaría perder la libertad de acceder al territorio de su Estado, tampoco a las corporaciones empresariales les gustaría perder la oportunidad de acceder a ese territorio para vender en él sus productos y ofrecer sus servicios.

Actualmente, la cantidad de impuestos que Apple y Starbucks están obligadas a pagar depende en gran parte de si sus sedes sociales y fiscales nominales están en Dublín, en Düsseldorf, en Luxemburgo, en Londres, en Wilmington o en Washington.[32] Para corregir el corrosivo efecto que unos pocos territorios pequeños con tipos inusualmente bajos en su impuesto de sociedades pueden tener sobre la recaudación total, otros estados (en Estados Unidos) y países deberían exigir que las empresas paguen a sus respectivas haciendas públicas los impuestos correspondientes a la cuota proporcional del volumen de negocio que registran en cada uno de ellos.[33] Apple puede estar

dispuesta a situar su sede central europea en Irlanda para reducir su factura fiscal, pero seguirá teniendo que vender sus iPhones en Gran Bretaña (por ejemplo). Por lo tanto, se le debería obligar a pagar allí el volumen impositivo proporcional correspondiente a los beneficios que obtiene con esas ventas. En ese sentido, los firmes pasos dados recientemente por los gobiernos alemán y francés para asegurarse de que los gigantes tecnológicos pagan sus «impuestos reales» en ambos países podrían estar augurándonos un futuro mucho más justo.[34]

VIVIENDA

Ningún político que se presente a unas elecciones en Noruega, Estados Unidos, Grecia o Canadá podría vencerlas prometiendo que aumentará el precio del pan y de la mantequilla. Sin embargo, hay otro bien que los ciudadanos necesitan para vivir con dignidad y sobre el que no parece particularmente extraño oír a los candidatos prometer el mantenimiento de sus exorbitantes niveles de precios actuales. Me refiero a la vivienda. Y es que, si bien se observan variaciones significativas de un país a otro, en general, en todas las democracias del mundo, los gobiernos se han esforzado explícitamente por impulsar al alza el precio de la vivienda. Por desgracia, además, ese es uno de los pocos ámbitos en los que, en líneas generales, han logrado lo que se proponían.

En especial, en las grandes ciudades de todo el mundo, la explosión de los precios de la vivienda ha sido asombrosa. En Nueva York, por ejemplo, el alquiler medio de un apartamento en la década de 1960 era de doscientos dólares al mes, y el precio de compraventa de un metro cuadrado de propiedad inmobiliaria residencial se situaba en torno a los doscientos setenta dólares. En la década de 2010, sin embargo, el alquiler medio ha subido hasta los tres mil quinientos dólares mensuales, y el metro cuadrado de compraventa, hasta los once mil quinientos dólares. En Londres, el precio de compraventa de una vivienda media también ha subido desde las 55.000 libras que costaba en 1986 hasta las 492.000 en 2014.[35]

Este incremento en los precios de las casas y los apartamentos ha tenido una enorme repercusión en los niveles de vida de los habitantes de esas ciudades, especialmente de los jóvenes. Los inquilinos de viviendas londinenses, por ejemplo, dedican hoy nada menos que un 72% de su renta a pagar el alquiler, lo que hace del *boom* de los precios de la vivienda la razón más importante (y con mucha diferencia) de que su nivel de vida no haya mejorado en décadas.[36]

El sensacional coste que ha alcanzado la vivienda en los centros metropolitanos también tiene un efecto pernicioso en quienes ya no se pueden permitir esos exorbitantes alquileres. A medida que avanza el proceso de gentrificación de los barrios céntricos, muchas personas que se criaron en esas zonas urbanas se ven expulsadas de ellas y privadas así de sus antiguas redes sociales de apoyo y de las oportunidades económicas que las grandes ciudades tienden a brindar.[37] Al mismo tiempo, a muchas personas que se criaron en áreas rurales menos ricas se las condena a quedarse permanentemente fuera de las regiones más productivas del país, lo que dificulta aún más que mejoren su situación económica previa.

En definitiva, el exorbitante coste de la vivienda hoy en día es uno de los motivos más importantes del estancamiento de los niveles de vida en América del Norte y Europa occidental. Si derrotar al populismo depende en buena medida de potenciar entre los ciudadanos un mayor optimismo con vistas al futuro, un elemento esencial (y urgente) para lograr tal fin será una reorientación radical en la política de vivienda.[38]

Una solución importante a la crisis de la vivienda consistiría, simplemente, en incrementar el *stock* de pisos y casas disponibles.

Deberían simplificarse los procedimientos para la obtención de permisos de obras, así como para la resolución de los conflictos a los que estos puedan dar lugar.[39] Los ayuntamientos deberían tener menos poder para vetar esas promociones en sus municipios.[40] Los Estados han de implicarse más en la ayuda a la construcción de nuevos edificios de viviendas, ya sea directamente, mediante nuevas promociones de vivienda pública, ya sea indirectamente, facilitando ayuda financiera a los promotores municipales.[41]

Por último, la introducción de impuestos sobre el valor de los terrenos que gravaran por igual los solares de idéntica superficie, tanto si su propietario decidiera dejarlo vacío como si optara por construir en él, serviría de potente incentivo favorable a la construcción de nuevas viviendas.[42]

Otro factor que también podría ayudar a mejorar el reparto de la vivienda sería un cambio en la fiscalidad en este ámbito. Si se aplicaran tipos impositivos más altos a las segundas viviendas y a las propiedades desocupadas, podrían impulsarse al alza las tasas de ocupación.[43] Asimismo, podrían eliminarse los incentivos que ya existen a disposición de las personas ricas que se compran residencias más grandes o adquieren propiedades adicionales, como es el caso de la deducción fiscal por los intereses hipotecarios (en Estados Unidos) o la facilidad de contratación de hipotecas para adquirir inmuebles destinados al alquiler (en el Reino Unido).[44]

Ninguna de esas políticas será fácil de aprobar. El capital que poseen en forma de vivienda (o viviendas) es una fuente de riqueza principal de muchas personas de clase media, por lo que estas suelen tener un incentivo para votar a favor de una subida de los precios inmobiliarios.[45] Y dado que cualquier caída brusca de los precios de la vivienda puede traducirse en una conmoción financiera y económica muy fuerte a corto plazo (como el mundo bien pudo comprobar, de manera especialmente dolorosa, en 2008), a los políticos les preocupa lo que pudiera ocurrir si una política de ese tipo pinchara una burbuja especulativa.[46]

Pero si nos tomamos la cuestión de la vivienda en serio, como un factor que limita artificialmente nuestra riqueza —y, por lo tanto, como un peligro para nuestras democracias—, hallaremos modos de compensar a quienes salgan perdiendo con la caída de los precios de los pisos y las casas, y de hacer que las ganancias potenciales que se deriven de ello resulten más visibles para quienes salgan ganando (los Estados podrían, por ejemplo, subastar los derechos de promoción inmobiliaria y asignar a todos los ciudadanos una cuota participativa de los ingresos así obtenidos).[47]

De las múltiples dificultades económicas que se nos presentan con vistas a las décadas venideras, la del exorbitante precio de la vivienda es la más fácil de superar, siempre y cuando estemos dispuestos a actuar haciendo lo

correcto. Renunciar a impulsar esas políticas solo porque sería difícil sacarlas adelante es apuntar demasiado bajo en nuestros objetivos.

PRODUCTIVIDAD

En los últimos años, el grueso del debate público sobre la economía ha girado en torno a la desigualdad.[48] Es ciertamente de agradecer, y lo es por muchos motivos: la desigualdad descontrolada corrompe el proceso político, permite que la clase media-alta acapare las mejores oportunidades educativas y profesionales, y debilita los lazos sociales que unen a los ciudadanos.[49] Pero, aunque contener la desigualdad de renta es importante en sí mismo, a veces se ha exagerado el papel que ese aumento de la desigualdad tiene en el estancamiento de los niveles de vida.

Según el informe económico del presidente de Estados Unidos de 2015, por ejemplo, la renta de una familia mediana sería significativamente más alta actualmente si la desigualdad no hubiese aumentado tan espectacularmente: en concreto, si el porcentaje de la renta que va a parar al grueso de la población no hubiera menguado como lo ha hecho desde la década de los setenta, la familia estadounidense media dispondría hoy de nueve mil dólares más en sus ingresos anuales. Estaríamos ante una diferencia ciertamente significativa. Ahora bien, el mismo estudio muestra también que existe un factor mucho más importante de estancamiento del nivel de vida: la significativa desaceleración de la productividad. De hecho, si la productividad hubiera crecido al mismo ritmo en estas últimas décadas como lo hizo en la era de la posguerra, la familia estadounidense media podría llegar ahora a gastar treinta mil dólares más al año.[50]

El incremento de los niveles de productividad laboral (la cantidad de producto que los trabajadores pueden generar en un intervalo temporal dado) debería ser, pues, una prioridad clave para cualquiera que se preocupe por buscar solución al estancamiento del nivel de vida. De ahí que sea una desgracia que resulte mucho menos claro hallar el modo de aumentar la productividad del trabajo que el de construir grandes cantidades de vivienda barata. Pero aunque los economistas coinciden en que no existe ninguna

fórmula mágica infalible para ello, la mayoría cree que todavía existen muchas vías infrautilizadas, la práctica totalidad de las cuales se halla en los ámbitos de la investigación y la educación.

Aun tratándose de uno de los mayores factores impulsores a largo plazo de la productividad, el dinero que las administraciones públicas de todos los niveles gastan en investigación, medido en porcentaje respecto al PIB total, ha registrado un descenso sistemático en muchos países. En el contexto estadounidense, hay estados donde ese proceso ha sido especialmente llamativo: tristemente conocido ya es el detalle de que California, por ejemplo, dedica ahora muchos más fondos públicos a sus prisiones que a sus mundialmente reconocidas universidades.[51]

La situación es aún peor allende Norteamérica. Alemania, por ejemplo, suele alardear de su sistema educativo y cuenta con un elogiadísimo sistema de financiación de la excelencia en investigación. Sin embargo, el volumen total de los fondos dedicados a la *Exzellenzinitiative* de ese país es menor que el presupuesto anual de la Universidad de Harvard.[52]

A la falta de inversiones de diversas administraciones públicas se suma la caída de los niveles de recursos dedicados por la empresa privada a investigación y desarrollo. Aunque a los economistas les resulta difícil medir la cantidad exacta que las compañías destinan a tales actividades, un trabajo reciente llega a la conclusión de que «la gran empresa se alejó significativamente de la investigación científica entre 1980 y 2007».[53]

Así pues, mucho podría conseguirse si los gobiernos recuperaran el compromiso con la financiación de la investigación a largo plazo y ofrecieran incentivos mucho más potentes para que las empresas privadas hicieran lo mismo. Pero, para seguir aumentando los niveles de productividad de sus ciudadanos, también tendrían que proceder a un replanteamiento radical de su sistema educativo. En la era de la posguerra, la alfabetización universal, la gran expansión de la educación secundaria y el rápido crecimiento del porcentaje de alumnos que cursaban estudios universitarios sirvieron para preparar a los trabajadores de las economías avanzadas para la transición de una economía industrial a otra de servicios. En la actualidad, se necesita un conjunto igualmente ambicioso de reformas educativas para preparar a los ciudadanos para el mundo laboral que se encontrarán en la era digital.

Entre esos cambios, debería contemplarse una reconsideración radical de la forma en que la educación está organizada desde preescolar hasta la universidad. La invención de herramientas digitales que pueden adaptar la docencia a las necesidades, las aptitudes y los estilos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas individuales debería ayudar a transformar radicalmente las formas de instrucción todavía preponderantes. En vez de dar clase a sus estudiantes delante de todos ellos en el aula, por ejemplo, los profesores deberían pasar mucho más tiempo manteniendo sesiones de apoyo o de tutoría individualizadas, dirigiendo debates en grupos reducidos, y facilitando el trabajo colaborativo.[54]

Por último, es evidente que, en una economía en rápida transformación, los trabajadores deben seguir poniendo al día sus habilidades durante mucho tiempo después de terminada su educación secundaria o, incluso, sus estudios universitarios de posgrado. De momento, los gobiernos continúan concibiendo generalmente el aprendizaje a lo largo de toda la vida como algo pensado para aquellas personas que han perdido su empleo. Pero lo cierto es que deberían facilitar que todas las personas adultas en edad de trabajar puedan tomarse periodos sabáticos para actualizar sus habilidades y cualificaciones. Y para que tal medida resultara económicamente viable, habría que replantearse desde cero todo el enfoque de la financiación de la educación postsecundaria.[55]

En gran parte del debate económico reciente, la necesidad de potenciar la productividad y la de reducir la desigualdad han sido implícitamente tratadas como si ambas metas estuvieran en mutua contradicción. Pero lo cierto es que sería más útil concebirlas como complementarias. Después de todo, la baja productividad y la alta desigualdad tienden a reforzarse entre sí: los trabajadores con baja cualificación no tienen mucho poder negociador; eso, a su vez, impulsa sus salarios a la baja, lo que incrementa las probabilidades de que sus hijos e hijas no consigan tampoco adquirir las habilidades suficientes para prosperar.

Por ese mismo motivo, muchas de las políticas diseñadas para abordar la desigualdad deberían contribuir también a mejorar la productividad. Todo avance por la vía de la reducción de las enormes disparidades económicas y raciales en la calidad de las escuelas públicas, por ejemplo, reduciría tanto la desigualdad de renta como la cantidad de talento que, de ese otro modo, se echa a perder. Asimismo, una mejora en el poder de negociación de los trabajadores corrientes mejoraría los salarios de los menos favorecidos y haría que fuera más fácil para ellos mejorar sus habilidades y su cualificación.[56]

A largo plazo, tanto la política educativa como la laboral deberían aspirar, pues, a sacarnos de una dinámica de círculo vicioso para situarnos en otra de círculo virtuoso: el objetivo consiste en lograr un mundo en el que la mano de obra esté más cualificada y tenga también el poder de negociar unos mejores salarios.[57]

UN ESTADO DEL BIENESTAR MODERNO

Un sistema fiscal modernizado puede recaudar el dinero que los Estados necesitan para cumplir con sus obligaciones y para conservar el control sobre sus prioridades de gasto. Una buena reforma del sistema de vivienda puede reducir el coste de la vida y contribuir a preservar el acceso de todos los ciudadanos a las debidas oportunidades. Un renovado esfuerzo inversor en productividad puede contribuir a aumentar los salarios y a hacer competitivos a los trabajadores y trabajadoras del futuro. Pero para ser inclusivas, además de dinámicas, las economías desarrolladas necesitan también conservar uno de los mayores logros históricos: su capacidad de protección de los ciudadanos más vulnerables frente a los grandes riesgos de la vida, desde la enfermedad hasta la indigencia.

Esa labor se ve complicada por el hecho de que los Estados del bienestar han fracasado en buena medida a la hora de adaptarse a los grandes cambios estructurales experimentados por las economías desarrolladas en las pasadas décadas. Diseñados en la era de la posguerra, fueron construidos sobre el supuesto de que la mayoría de los ciudadanos eran personas relativamente jóvenes que estaban empleadas en trabajos a tiempo completo. De ahí que

organizaran tanto las cotizaciones como las prestaciones en torno al empleo. Esto hace que sean sistemas bastante generosos con aquellos trabajadores que se jubilan tras décadas de dedicación laboral a tiempo completo, e incluso también con aquellos otros que pasan por algún breve periodo de enfermedad o desempleo antes de reincorporarse a un puesto de trabajo tradicional. Sin embargo, suelen proporcionar inadecuadas coberturas para el creciente volumen de personas situadas en los «márgenes» del mercado de trabajo tradicional, como son los trabajadores autónomos, los empleados con contratos temporales y/o a tiempo parcial, y los desempleados de larga duración.[58]

El vínculo entre el trabajo y el Estado del bienestar también ha dado lugar a malos incentivos, tanto políticos como económicos. El hecho de que las cotizaciones sociales estén ligadas al empleo a tiempo completo infla artificialmente el coste de la mano de obra, lo que desincentiva la contratación de nuevos trabajadores. Y como las prestaciones claves están muy estrechamente conectadas con el empleo a tiempo completo, quienes ya están establecidos en el mercado de trabajo tratan de proteger sus empleos actuales a toda costa y son firmes partidarios de la rigidez de ese mercado, incluso en países como Italia o Grecia, donde la regulación vigente ha demostrado ser un gran obstáculo para el crecimiento económico.[59]

Los costes son otro gran problema. Ante el rápido envejecimiento de la población, los Estados del bienestar tradicionales se están encontrando con problemas cada vez mayores para cumplir con sus obligaciones en cuanto al pago de las pensiones, la financiación de sus sistemas sanitarios y la provisión de atención adecuada para las personas mayores. La manera más habitual de tratar esas dificultades financieras ha sido recortando la generosidad del Estado del bienestar. Aunque pocas son las políticas de las que han prescindido por completo, los gobiernos han reducido las prestaciones por jubilación, han introducido nuevas (y más restrictivas) condiciones para la percepción de las prestaciones por desempleo, y se han desentendido de proporcionar protección frente a nuevas formas de riesgo social. Como consecuencia de ello, el nivel general de protección ha caído sensiblemente a ambos lados del Atlántico. Si el Estado del bienestar facilitaba en su momento una red de Seguridad Social que frenaba la caída de

todas las personas que pasaran situaciones de necesidad y las recogía sin importar el motivo, hoy deja cada vez más que quienes son juzgados poco previsores o demasiado irresponsables se estrellen sin remedio contra el suelo.[60]

En resumidas cuentas, en su forma actual, los Estados del bienestar obstaculizan el crecimiento económico y, al mismo tiempo, ofrecen un nivel de prestaciones en franca decadencia. Para arreglar tan profundos problemas, los Estados tienen que reunir el valor necesario para llevar a cabo un rediseño radical de los Estados del bienestar.

El objetivo más importante de tal Estado del bienestar rediseñado debería ser desagregar las prestaciones sociales de las formas de empleo tradicionales.

Esta es una medida más que lógica con vistas a recaudar el dinero que se necesita para sostener el Estado del bienestar. Y es que, aunque es fundamental que las empresas continúen contribuyendo a soportar la carga de las prestaciones sociales claves, poco sentido tiene pedirles que creen muchos puestos de trabajo y que, precisamente por ello, tengan que realizar una aportación al sistema proporcionalmente mayor que la de aquellas otras empresas que crean muy pocos empleos. Lo mismo puede decirse de las personas físicas. En un momento en el que el número de ciudadanos que viven de la riqueza acumulada crece a un ritmo elevado, cada vez resulta menos lógico situar la carga principal de la financiación del Estado del bienestar sobre los hombros de los perceptores de salarios.

Al mismo tiempo, desagregar el Estado del bienestar del empleo tradicional también es el camino que hay que seguir si de lo que se trata es de proteger a los ciudadanos de posibles infortunios o, incluso, empoderarlos para que asuman riesgos. Por ejemplo, facilitando la portabilidad total de las prestaciones sanitarias y de las pensiones, un Estado del bienestar moderno podría reducir significativamente las barreras a la movilidad laboral, lo que repercutiría en un incremento de la productividad tanto de las empresas como de los individuos. De hecho, algunos estudios recientes han aportado datos bastante definitivos sobre hasta qué punto un Estado del bienestar generoso que combinase unos mercados laborales flexibles con unas prestaciones

portátiles podría incluso cultivar el espíritu emprendedor. Por ejemplo, ahora que los jóvenes suecos ya no tienen que preocuparse por una potencial caída en la indigencia ni por la pérdida de sus prestaciones sanitarias si abandonan su trabajo, se han vuelto más proclives incluso que sus coetáneos estadounidenses a fundar negocios.[61]

Muchos debates acerca del Estado del bienestar se mantienen estancados en planteamientos dicotómicos que no reflejan bien el reto real al que nos enfrentamos. La cuestión clave no es si debemos hacer que los Estados del bienestar sean más o menos generosos, o ni siquiera si deben ser más o menos permisivos con las conductas supuestamente irresponsables. La cuestión es cómo crear un Estado del bienestar que proteja tanto a quienes se mueven en los márgenes del mercado de trabajo como a quienes ocupan posiciones más consolidadas en él; un Estado del bienestar que anime a las empresas a contratar más que a despedir, y que proporcione a los ciudadanos la red protectora que necesitan para asumir riesgos que sean beneficiosos económicamente para todos.

UN TRABAJO QUE TENGA Y DÉ SENTIDO

«Si hace unas décadas hubieras preguntado a alguno de mis electores quién era, él habría dicho:“Soy encargado en la fábrica” —me comentaba hace poco un político importante—. Pero, entonces, muchos empleos industriales desaparecieron. La gente se llevó un palo económico tremendo. Y con él también sufrieron una fuerte pérdida de identidad. Si ahora les pregunto quiénes son, me dirán:“Soy blanco y no me gusta que estén llegando tantos inmigrantes aquí”.»[62]

Lo que aquel político quería decirme es tan alarmante como sencillo. Mientras nosotros seguimos hablando constantemente de los efectos económicos de las transformaciones que estamos observando a ambos lados del Atlántico, esos cambios están teniendo unas implicaciones culturales de las que apenas si estamos empezando a ser conscientes. Cuando las personas pierden unos trabajos que estaban bien pagados y que contaban con una buena protección sindical, no solo pierden el peldaño que les permitía poner el pie en la clase media, sino que se arriesgan también a perder todo un

conjunto de conexiones sociales que estructuran sus vidas y les dan sentido. Si la identidad «ganada» con el trabajo deja de estar a su alcance, es probable que recurran por defecto a una identidad «por adscripción», que haga de su etnia, su religión o su nacionalidad un elemento más central para su visión del mundo.[63]

Esta transformación cultural explica en parte la desconexión cada vez mayor entre las personas que se hallan inmersas en una dinámica de movilidad social descendente (o son ya pobres), por un lado, y las que experimentan una movilidad social ascendente (o son ya ricas), por el otro. Quienes tienen (o aspiran a tener) trabajos que les permitan alimentar una identidad ganada se sienten tentados a considerar inmateriales aquellas otras identidades suyas que lo son por adscripción. Eso les permite superar más fácilmente las divisiones culturales y étnicas, y hallar elementos comunes con otras personas que comparten su estatus profesional o sus gustos personales. Y también se sienten más tentadas a mirar por encima del hombro a quienes «se aferran», como dirían ellas, a la importancia de marcadores sociales tales como la raza o la religión.[64]

Por su parte, las personas que ya no derivan de sus trabajos una conciencia de identidad «ganada» suelen albergar un creciente grado de resentimiento. Seguramente no debería sorprendernos que se sientan insultadas por las personas que llevan vidas mucho más acomodadas que las suyas y que, encima, tienen el descaro de juzgarlas. Pero sienten también un resentimiento creciente hacia otras personas que, aun estando en similar posición económica a la suya, no provienen de su mismo grupo racial o religioso.

Los populistas tienen una gran habilidad para convertir esas formas de resentimiento en armas: su retórica trata simultáneamente de volver la indignación creciente con las personas ricas en contra de la élite dirigente, y volver la atención creciente a la identidad por adscripción en contra de los inmigrantes y de las minorías étnicas y religiosas.

Para combatir los factores económicos impulsores del populismo, no basta, pues, con asegurarse de que el pastel total que repartir continúa creciendo, o siquiera de que el grueso de la ciudadanía obtiene un reparto justo de ese pastel. También deberíamos preocuparnos por cómo estructurar el mundo del trabajo, de tal modo que este permita que las personas deriven de sus empleos y ocupaciones una sensación de identidad y pertenencia, y que quienes salen muy beneficiados con la globalización tengan muy presentes los vínculos que los unen a sus compatriotas que no han tenido esa misma fortuna.

Muy poco se ha reflexionado todavía sobre este tema, especialmente en lo relacionado con los millones de nuevos empleos que ya se están creando en la economía colaborativa. Tomemos el caso de Uber. Parece relativamente claro que los gobiernos no deberían prohibir ese servicio como algunos países europeos han llegado a proponer, pero que tampoco deberían tolerar que sortease ciertas protecciones claves para sus trabajadores, como ha conseguido hacer en la mayoría de las áreas de Estados Unidos. Deberían, más bien, seguir un rumbo intermedio de amplias miras que supiese reconocer el enorme aumento en comodidad y eficiencia que el uso compartido de vehículos ofrece, sin renunciar a aprobar nuevas regulaciones que garanticen a los conductores un salario digno para vivir.[65]

Pero aunque los decisores políticos acierten con la combinación, no parece nada probable que los conductores de Uber vayan a derivar nunca de su trabajo la identidad y el sentido que los obreros fabriles llegaron a construir a partir del suyo en su día. Y la razón no estriba ni en que sus trabajos vayan a estar necesariamente peor pagados, ni en que el servicio que proporcionan sea menos importante en ningún sentido. Reside, más bien, en que este jamás estará inscrito en la cultura compartida que caracterizaba a esas otras formas anteriores de trabajo.

Los empleos industriales hacían que miles de obreros convergieran a las puertas de las fábricas a la misma hora, todos los días, para comenzar sus turnos. Las oficinas tradicionales permitían una interacción social repetida en equipos, en reuniones, en la sala de descanso o junto a los dispensadores de

agua fría. Incluso los taxistas coincidían con sus colegas cuando recogían sus coches del garaje colectivo y pasaban toda la jornada interactuando con el mismo despachador o despachadora.

El trabajo de los chóferes de Uber, sin embargo, no lleva adscrita para ellos ninguna comunidad incorporada: si bien el sistema de puntuaciones de la *app* favorece que se produzca toda una serie de agradables interacciones puntuales, no da pie a ninguna conexión duradera con otros seres humanos. En vista del rápido desgaste que están experimentando las viejas prácticas que inscribían a los trabajadores en una comunidad y que, gracias a ello, proveían sus trabajos de un sentido, se hace muy urgente y necesario generar una nueva sensación de orgullo por el desempeño laboral en esta nueva y muy diferente forma de empleo masivo.

~

Y si la nueva economía digital amenaza con disolver el sentido mismo del trabajo, la globalización amenaza con disolver también el sentido mismo de la nación.

La nostalgia de los populistas promete a la gente una era en la que su país volverá a ser grande. En el corazón mismo de esa nostalgia late un doble deseo de control: los ciudadanos quieren que su nación sea capaz de tomar sus propias decisiones, sin las trabas que hoy impone la economía global, y quieren también que esa nación poderosa los ayude a tener control sobre sus vidas y les facilite los recursos y las oportunidades que les permitan mejorar su situación frente al riesgo de una creciente inseguridad.

Pero dar marcha atrás al reloj no es una opción realista: los populistas se engañan a sí mismos si piensan que pueden devolvernos al mundo que ellos imaginan que existía hace treinta, cincuenta o cien años. Aun así, aunque sería ingenuo que aspirásemos a restablecer un pasado idealizado, es desde luego posible hallar vías reales que nos permitan responder a la creciente sensación de frustración económica y cumplir con la vieja promesa del ya mencionado doble control.

La ciudadanía norteamericana y de Europa occidental tiene muy buenos motivos para querer sentir tanto que sus naciones retienen cierto margen de maniobra económica en la escena internacional, como que sus gobiernos ayudarán a sus ciudadanos a conservar cierto control sobre su propio futuro. Y aunque los Estados nación no pueden satisfacer esas expectativas con las mismas herramientas que usaban en la era de la posguerra, sí pueden conseguir mucho en ese sentido utilizando sus recursos a través de mecanismos nuevos e imaginativos. Los gobiernos nacionales pueden asegurarse de que los ricos continúen pagando la parte de la contribución impositiva que justamente les corresponde aprovechando que tanto los individuos como las empresas van a querer seguir accediendo al territorio del Estado por ellos gobernado. Y los mismos gobiernos pueden estimular la productividad de sus ciudadanos y garantizar una mejor distribución de las ganancias derivadas del crecimiento económico porque aún conservan mucho control sobre ámbitos como la vivienda, las infraestructuras, la educación y el Estado del bienestar.

Los grandes cambios acaecidos en la economía mundial están forzando al límite el pacto social que proveyó de estabilidad a las democracias liberales en la era de la posguerra. No es de extrañar que tantos ciudadanos se sientan hoy indignados y desorientados, ni que la nostalgia consiguiente esté sirviendo de fértil caldo de cultivo para los populistas autoritarios. Pero si las democracias liberales se atreven a enfocar con audacia los mayores desafíos económicos de nuestro tiempo, seguirán siendo capaces de proporcionar a sus ciudadanos mejoras reales de sus niveles de vida. Aplicando sus recursos con mucha mayor proactividad de la que han empleado hasta el momento, conservarán la capacidad de influir en un futuro en el que la apertura al mundo no tiene por qué ser sinónimo de una pérdida de control.

Capítulo 9

RENOVAR LA FE CÍVICA

El auge de la tecnología digital ha estimulado el crecimiento económico y ha hecho más fácil que las personas se conecten traspasando fronteras. También ha favorecido la propagación de las expresiones de odio y de las teorías de la conspiración.

Esto es debido a que el ascenso de internet y de las redes sociales ha transformado en un nivel fundamental las condiciones estructurales mismas de la comunicación. Se ha democratizado por fin la vieja aspiración de la comunicación «de uno a muchos» en forma de una comunicación «de muchos a muchos» que ha facilitado espectacularmente la circulación vertiginosa de información viral por todo el mundo. De ahí que los guardianes tradicionales de los flujos informativos hayan perdido gran parte de su poder. Cualquier persona corriente que tenga buena mano para crear y/o publicar contenidos pegadizos puede llegar hoy en día con regularidad a millones de individuos conectados. Los políticos que tienen un gran seguimiento en redes sociales pueden fijar temas en la agenda política general, aun cuando sus afirmaciones no sobrevivirían a ninguna comprobación de veracidad básica. Resulta imposible entender la política de hoy sin comprender la naturaleza transformadora de internet.

Dado que la ascensión del populismo se explica en buena medida por razones tecnológicas, es tentador pensar que la solución también debería venir del lado de la tecnología. Por eso, no es de extrañar que las compañías tecnológicas hayan sido objeto de una presión social y política creciente en estos últimos años. Tras las grandes esperanzas iniciales en torno a los potenciales efectos beneficiosos de Facebook y Twitter, vino una fuerte

preocupación por su corrosiva influencia, y una amplia coalición de activistas ha exigido desde entonces que esas empresas tecnológicas cambien o que los gobiernos adopten un enfoque más proactivo que las haga cambiar.

En Estados Unidos, dichos activistas se han centrado principalmente en conseguir que las redes sociales realicen reformas voluntarias en sus plataformas. En Europa, los políticos han debatido (y, cada vez más, aprobado) leyes que imponen multas cuantiosas a aquellas compañías que no se ajusten a lo que aquellas estipulan. Pero la esencia de la solución buscada es sorprendentemente similar en ambos casos: se trata de que las redes sociales —según han argumentado los activistas a ambas orillas del Atlántico — apliquen una prohibición completa de las expresiones de odio y de las noticias falsas.[1]

Las enérgicas demandas en ese sentido de los defensores de una regulación se enfrentan a las refutaciones igualmente contundentes de sus oponentes. Los ejecutivos de las empresas tecnológicas sostienen que detectar de manera eficaz las noticias falsas, o delimitar los confines de las expresiones propias de un discurso del odio, está más allá de la capacidad de sus algoritmos. Para detener la difusión de ideas perniciosas, tendrían que contratar a un pequeño ejército de moderadores, algo que no solo sería caro de mantener, sino que guardaría un incómodo parecido con los censores de la vieja escuela.[2] Esa crítica va especialmente dirigida contra la posibilidad de una intervención gubernamental en ese terreno. Al principio, los gobiernos podrían pretender para sí (por razones realmente desinteresadas) el poder de censurar las expresiones políticas que sean auténticamente corrosivas. Pero los defensores de la libertad de expresión se preguntan, y con razón, si los ciudadanos pueden fiarse de que los políticos no vayan finalmente a abusar de esos poderes aumentados usándolos para condicionar el discurso público y restringir las críticas.[3]

Dada la amplia distancia que separa a los dos bandos de este debate, podríamos sentirnos tentados a pensar que nos enfrentamos a dos opciones mutuamente excluyentes y poco apetecibles por igual: la regulación intrusiva

(o la censura propiamente dicha), de una parte, y la inacción y el fatalismo, de la otra. Pero, en verdad, existen algunas alternativas a esos dos extremos.

La primera es emular el modelo de autorregulación que históricamente ha permitido evitar otras formas más duras de intromisión gubernamental en las industrias cinematográfica y televisiva. Si las compañías gestoras de las redes sociales comenzaran a tomarse el problema en serio, los gobiernos deberían estar preparados para otorgarles un elevado margen propio de maniobra.[4]

La segunda consiste en reconocer que plataformas como Facebook o Twitter pueden hacer mucho por frenar la difusión de noticias falsas o de formas diversas de discurso de odio sin necesidad de llegar a la censura. De hecho, tales plataformas han comenzado a cuidar ya, por motivos comerciales, qué ven los usuarios en sus publicaciones. Facebook, por ejemplo, da ahora prioridad en sus canales web a las emisiones de vídeo en directo para animar a sus usuarios a adoptar esta nueva posibilidad tecnológica que ofrece su plataforma.[5] Twitter ha introducido recientemente una sección de tuits destacados (administrada por moderadores) etiquetada «Por si te lo perdiste».[6] Las plataformas de redes sociales podrían obrar de forma parecida promoviendo publicaciones civilizadas que contengan información fiable y marcando aquellas otras rebosantes de odio que difundan falsedades, y, en último término, negándose a aceptar publicidad de grupos propagadores de odio.[7]

La tercera pasa por distinguir entre el discurso dañino publicado por seres humanos y el publicado por robots. Diversos estudios han mostrado que un porcentaje significativo de la desinformación y el odio difundidos en plataformas como Twitter procede de los llamados *bots*. Esto permite en la práctica que unos pocos usuarios con intenciones maliciosas usen tales *bots* como un *alter ego* que ahoga otras voces más moderadas y distorsiona la naturaleza misma de la conversación.[8] Los inconvenientes morales que podrían derivarse de la prohibición de tales *bots* son, pues, mucho menos graves que los que implicaría la prohibición de expresiones de personas reales. Como me dijo quien fuera subsecretario de Estado de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo en la Administración Obama, Tom Malinowski, «cuando estaba en el cargo, yo luché apasionadamente por

defender la libertad de expresión de las personas en internet. Pero no creo que los *bots* que propagan mensajes de odio deban disfrutar de esas mismas libertades».[9]

RECONSTRUIR LA CONFIANZA EN LA POLÍTICA

Hay una serie de medidas racionales que pueden dificultar un poco a los enemigos de la democracia usar las plataformas de las redes sociales como herramientas de propaganda. Pero no deberíamos pecar de ingenuos en cuanto a lo que tales acciones pueden conseguir. Por el hecho mismo de tener vedadas formas de censura que toda sociedad liberal tiene sobrados motivos para rechazar, ni Facebook ni Twitter podrán nunca llegar a ser una utopía de civilidad y moderación. ¿Hay, entonces, algo más que podamos hacer para enfrentarnos a la facilidad con la que las ideas antidemocráticas arraigan en la era digital?

Para responder a esa pregunta, merece la pena recordar que ni las noticias falsas ni el discurso del odio son fenómenos nuevos. Antes de que Twitter y Facebook hubieran nacido siquiera, una importante minoría de estadounidenses creían que el 11-S había sido un engaño. Antes de que existiera internet, muchas personas de todo el mundo estaban convencidas de que Stanley Kubrick había organizado y rodado en unos estudios de cine la puesta en escena de la llegada del hombre a la luna. Antes de que hubiera televisión o radio, *Los protocolos de los sabios de Sión* propagaron el antisemitismo desde las frías estepas de Siberia hasta las ardientes arenas del desierto del Sinaí.[10]

Las teorías de la conspiración, en definitiva, son desde hace tiempo una pertinaz realidad de la política. Sin embargo, su incidencia en la mayoría de las democracias liberales solía ser muy marginal debido también a factores que iban más allá de aquellos que más directamente han venido a modificar las redes sociales. Concretamente, me refiero a que la propagación de teorías de la conspiración estaba contenida, en parte, porque el gobierno era mucho más transparente y la mayoría de los ciudadanos tenían una confianza mucho mayor en los políticos.[11]

En una democracia liberal que funciona, existen abundantes salvaguardas que impiden que los políticos conspiren entre ellos y que confieren poder a los ciudadanos para que controlen lo que está sucediendo. Las autoridades tienen el encargo, no ya de no incurrir en prácticas de corrupción, sino incluso de evitar la apariencia de estar incurriendo en tales prácticas.[12] Los diferentes poderes del Estado ejercen un celoso control mutuo. Los políticos de la oposición tienen incentivos para descubrir conductas groseramente contrarias a la ética. En consecuencia, los ciudadanos pueden hallar explicaciones racionales a la mayoría de los acontecimientos. Las teorías de la conspiración no pasan de ser dominio privativo de excéntricos y cascarrabias. Aunque nunca desaparecen del todo, los medios de comunicación les prestan escasa atención y la mayoría de los ciudadanos simplemente hacen caso omiso de ellas.

El grado en que las teorías de la conspiración han llegado a situarse en el centro de la política de muchos países, tanto en América del Norte como en Europa occidental, durante estos últimos años es, pues, una muestra de la medida en que la democracia liberal se ha erosionado en esos Estados. Y ningún país refleja mejor esa tendencia que Estados Unidos.

En sus primeras incursiones en política, Donald Trump se montó en la ola de las teorías de la conspiración con propuestas como la de «investigar» si Barack Obama había falsificado su partida de nacimiento. Y cuando estaba ya en plena campaña de las presidenciales, fueron varias las estrafalarias teorías de la conspiración sobre Hillary Clinton que adquirieron una prominencia sin precedentes en Twitter, Facebook y las tertulias radiofónicas. Desde la presidencia, Trump ha continuado sirviéndose de su privilegiado púlpito para difundir una serie de falsedades deliberadas: desde su reiterada acusación de que tres millones de estadounidenses habían votado ilegalmente hasta sus infundadas declaraciones sobre presuntas escuchas secretas a las que funcionarios de la Administración Obama lo habrían sometido.[13]

Pero mientras Trump divulgaba teorías de la conspiración desde la Casa Blanca, sus oponentes no se quedaban atrás y recurrían en grado creciente a formular sus propias acusaciones infundadas. Algunos de los artículos más virales difundidos por #TheResistance supeditaban alegremente la verdad de los hechos al (presunto) bien superior de la (igualmente presunta) verdad

política: sitios web como Addicting Info y Occupy-Democrats, y destacadas cuentas de Twitter como la de la exparlamentaria británica Louise Mensch publicaron noticias inventadas sobre la inminente salida a la luz de una supuesta cinta sexual de Donald Trump, o sobre la revelación de que cientos de periodistas estadounidenses de los grandes medios convencionales eran agentes que trabajaban secretamente al servicio de Rusia.[14]

Estas acusaciones descabelladas fueron de una tremenda irresponsabilidad. Pero es cierto que algún grado de especulación era inevitable: en los primeros meses de su mandato presidencial, Trump se oponía a separarse de su imperio empresarial y cada vez eran más los detalles de sus enredos con Rusia que salían a la luz, por lo que hasta los más escrupulosos observadores no podían menos que manejar hipótesis más o menos fundadas sobre lo que podría estar sucediendo en realidad.[15]

Un método eficaz contra la difusión de las teorías de la conspiración, pues, es el restablecimiento de las formas tradicionales de buen gobierno. Para recuperar la confianza de la población cuando Trump deje definitivamente el cargo, los políticos tendrán que ceñirse a la verdad en sus campañas, evitar la percepción de que están afectados por algún conflicto de intereses, y ser todo lo transparentes que puedan en cuanto a sus tratos con lobistas y grupos de presión en el propio país, y con autoridades gubernamentales de otros Estados. En países donde las normas del buen gobierno no se han erosionado todavía en la misma medida que en Estados Unidos, políticos y periodistas deberían redoblar con renovado celo sus esfuerzos por preservarlas: como el caso norteamericano nos muestra, esas normas pueden desgastarse con alarmante rapidez y con terribles consecuencias.

Después de que Trump venciera en las elecciones de 2016, Barack y Michelle Obama fueron objeto de las burlas de ciertos sectores por haber dicho que «cuando ellos caen bajo, nosotros vamos hacia arriba».[16] Es fácil, desde luego, mofarse de un equipo que juega respetando las reglas cuando el equipo contrincante se presenta en el partido acompañado de unos matones armados con palos. Pero para todos aquellos que desean seguir jugando al

deporte en cuestión, no está nada claro qué otra alternativa queda más que la de cumplir con las reglas: si ambos bandos toman las armas, la naturaleza misma del juego cambia irreversiblemente.

Por improbable que pueda parecer en este momento, la única solución realista a la crisis de rendición de cuentas de los gobiernos (y, posiblemente, a la crisis general de las normas democráticas) pasa, pues, por un acuerdo negociado en el que ambos bandos accedan a desarmarse. Como el mantra preferido de los Obama, esa idea puede sonar muy ingenua, pero como los politólogos han señalado una y otra vez, la supervivencia de las democracias estables siempre ha dependido de la disposición de las grandes figuras políticas a jugar conforme a las reglas del juego básicas.

A la vista de la profundidad de las degradaciones éticas causadas por Trump y por su equipo, un simple regreso a las reglas que la mayoría de los políticos han seguido durante las pasadas décadas sería ya una gran mejora. Pero para recuperar la confianza de la población —que, tanto en Norteamérica como en Europa occidental, había empezado a erosionarse mucho antes de que Trump accediera a la presidencia de Estados Unidos— se necesitan aún muchas más cosas.

Los ciudadanos de a pie llevan tiempo sintiendo que los políticos no les hacen caso cuando toman decisiones. Son escépticos en ese terreno y lo son por un motivo: hace ya tiempo que los ricos y los poderosos ejercen un preocupante grado de influencia sobre qué políticas públicas salen adelante y cómo se implementan. La puerta giratoria entre lobistas y legisladores, el agrandado papel desempeñado por el dinero privado en la financiación de las campañas, los cuantiosos honorarios que cobran los antiguos altos cargos cuando ejercen como oradores o conferenciantes, y los estrechos lazos entre la política y la empresa privada han mermado seriamente el grado en que la voluntad popular timonea el sentido de las políticas públicas que se aprueban y se aplican.[17]

Hay elementos del liberalismo no democrático que son difíciles de evitar. Si queremos abordar el cambio climático, necesitamos la cooperación internacional. Y si queremos asegurarnos de que no hay sustancias químicas

peligrosas en nuestros alimentos, tenemos que ceder un considerable poder a los funcionarios científicos y técnicos. De poco nos serviría lanzarnos indiscriminadamente a devolver el poder al pueblo eliminando organismos independientes y aboliendo organizaciones internacionales.

Pero, por otra parte, son muchas las maneras en que se está subvirtiendo la voluntad popular sin que haya un motivo de peso para ello. En concreto, los Estados nación podrían adoptar medidas mucho más contundentes para reformar el sistema político y restringir la influencia del dinero en la política.

Para expulsar las teorías de la conspiración hacia los rincones marginales en los que moraban décadas atrás, los políticos tendrán que sacudirse de encima las acomodadas costumbres que imperan desde hace tiempo en Washington, Bruselas, Berlín o Atenas. Si se dificulta mucho más la incidencia del dinero privado en las políticas públicas —y la posibilidad de que los legisladores saquen un beneficio privado de los contactos que establecen como tales cuando dejen de serlo—, los sistemas políticos de todo el mundo podrán comenzar a reconstruir la confianza que han perdido en las pasadas décadas.[18]

En muchos países europeos, hay ya un fuerte apoyo a algunas de esas reformas. Los electores estarían encantados de imponer límites más estrictos a las donaciones de campaña o, incluso, de instituir unas restricciones mucho más extensas a las sinecuras que los políticos pueden aceptar cuando dejan sus cargos. Existe también un apoyo significativo a una reforma de la Unión Europea: la mayor parte de los europeos están claramente a favor de conservar la Unión, pero una gran mayoría de ellos quieren también que sea más democrática.[19]

De todos modos, para arreglar el sistema, los gobiernos europeos tienen igualmente que estar dispuestos a efectuar ciertos cambios menos populares. Una de las maneras más eficaces de limitar la influencia privada en la política sería, por ejemplo, incrementar la capacidad de los parlamentos: si se los dotara de personal suficiente para hacer sus propios estudios y para redactar la legislación por su propia cuenta, no necesitarían recurrir a los cabilderos y a los *lobbies* para que les suministraran la información.[20] Otra solución eficaz sería aumentar los salarios de los políticos para que no fueran tan receptivos a los incentivos externos.[21]

Cierto es que el sistema va a tener más difícil arreglo en Estados Unidos ahora que una serie de recientes sentencias del Tribunal Supremo han estipulado que toda restricción estricta a las contribuciones a las campañas electorales vulnera la primera enmienda de la Constitución. Los magistrados del alto tribunal tienen que reconocer pronto que el sistema actual es una amenaza para el funcionamiento mismo de la democracia estadounidense, y tienen que replantearse el alcance que han otorgado a la protección del derecho de expresión política de las grandes empresas. Pero hasta que esa pieza del rompecabezas encaje, hay otras reformas pendientes posibles que no chocan contra tan formidables obstáculos. Allí, al igual que en Europa, los legisladores deberían facilitarse a sí mismos el objetivo de retener al personal cualificado y de más talento mejorando la terriblemente inadecuada dotación presupuestaria del Congreso. Deberían aprobar un conjunto más sólido de leyes antisoborno para garantizar que ciertas prácticas perniciosas —que rayan en la corrupción pura y dura del «favor por favor se paga»— puedan por fin ser perseguidas judicialmente. Y, por último, deberían desistir de incurrir en prácticas abiertamente antidemocráticas, como la reconfiguración partidista de los distritos electorales o la supresión interesada de electores en el censo.

En las décadas de la posguerra, ya circulaban muchas de las mismas mentiras y calumnias que ahora proliferan en las redes sociales. A numerosos ciudadanos les preocupaba ya por entonces que sus autoridades públicas fueran corruptas. Pero, en aquella época, la amenaza del fascismo estaba aún muy viva en la memoria. Y la del comunismo seguía plenamente vigente. La formación cívica formaba parte integral del currículo y del sistema educativos, desde las guarderías de todo el país hasta las salas de profesores de las principales universidades. Por eso, la mayoría de los ciudadanos comprendían mejor los principios de la democracia liberal (y estaban más comprometidos con ellos), lo que los hacía menos proclives a dar crédito a teorías conspirativas basadas en las mentiras o en la desinformación.

Todo esto apunta hacia otra importante medida que podemos tomar. Tenemos las manos atadas para restringir por medio de la censura propiamente dicha el volumen de ataques que sufren los principios básicos de la democracia liberal, pero eso nos da mayor motivo para tratar de aminorar la demanda de tales ataques. Y aunque no podemos recrear en vivo la amenaza del comunismo o del fascismo, sí podemos recordar que la formación cívica es un baluarte esencial frente a las tentaciones autoritarias. Así que el mejor modo de defender la democracia liberal continúa siendo el mismo de siempre: tomarse en serio la tarea de convertir a los niños y niñas en ciudadanos y ciudadanas.

CRIAR A CIUDADANOS

Desde el momento en que comenzaron a reflexionar sobre el concepto de *autogobierno*, los filósofos pusieron particular énfasis en la relevancia de la educación para la ciudadanía. Desde Platón hasta Cicerón, y desde Maquiavelo hasta Rousseau, todos ellos estaban obsesionados con la cuestión de cómo inculcar la virtud política en los jóvenes.

No puede sorprendernos, pues, que aquel puñado de patriotas que se atrevieron a fundar una nueva República en un momento en que el autogobierno colectivo había desaparecido prácticamente por completo de la faz de la tierra se preocuparan (y mucho) por cómo transmitir sus valores a las generaciones que vendrían tras ellos. ¿Qué podría ser más importante —se preguntaba George Washington en su octavo discurso anual ante el Congreso— que legar debidamente los valores cívicos a «los futuros guardianes de las libertades del país»? Él mismo se daba la respuesta ortodoxa a esa pregunta al argumentar que «la educación de nuestros jóvenes en la ciencia del gobierno» debería ser «objeto primordial» de las guarderías, las escuelas y las universidades de aquellos nuevos Estados Unidos.[22]

«Todo pueblo que pretende ser gobernante de sí mismo —insistía James Madison unos años después— debe armarse con el poder que da el conocimiento.» Sus temores sobre lo que le ocurriría a Estados Unidos si desatendía esa tarea crucial suenan extrañamente oportunos en nuestro día:

«Un gobierno popular, sin una información popular (o sin los medios con los que adquirirla), no es más que el prólogo de una farsa o de una tragedia, o tal vez de ambas cosas».[23]

Durante los primeros siglos de existencia de la República, ese énfasis en la formación cívica influyó hondamente en el país. Los padres se proponían formar a los ciudadanos del futuro y competían entre sí por ver cuál de sus pequeños de cuatro años era capaz de recordar el nombre de más presidentes. Las escuelas de todo el país dedicaban mucho tiempo a enseñar a los estudiantes cosas como «cómo un proyecto legislativo se convierte en ley».[24] Los llamados «programas de grandes libros» trataban de dar a los estudiantes de humanidades una valoración más profunda de la tradición intelectual sobre la que está fundada la República estadounidense.[25] Una marcada conciencia del deber cívico inspiró la creación de organizaciones tan diversas como la Young Men's Christian Association (YMCA) —«la democracia debe ser aprendida de nuevo por cada generación»—[26] y la escuela modelo fundada por Horace Mann («una forma republicana de gobierno, si no hay inteligencia en el pueblo, debe de parecerse mucho, aunque a mucha mayor escala, a lo que un manicomio sin director ni cuidadores sería en una escala mucho menor»).[27] El Tribunal Supremo prácticamente elevó la importancia de la formación cívica a la categoría de principio constitucional: «La educación cívica —sentenciaron los magistrados en el caso *Bethel School District n.º 403 v. Fraser*— debe preparar a los alumnos para la ciudadanía de la República».[28]

La educación cívica en todas sus formas ocupaba una posición central en el corazón mismo del proyecto estadounidense. Con el tiempo, y ya en medio de una era de paz y prosperidad sin precedentes, la idea de que el apoyo al autogobierno colectivo tiene que ganarse de nuevo con cada nueva generación comenzó a perder fuerza. Hoy está ya prácticamente extinta.

Cuando llegué a la Universidad de Harvard para estudiar un doctorado en ciencia política, estaba preparado para sumergirme en historia y en teoría: en toda una serie de muy intrincadas cuestiones relativas a cómo es el mundo y a cómo debería ser. Para lo que no estaba preparado era para hasta qué punto la

educación universitaria de posgrado tendería a disuadirme de usar mi formación en esas cuestiones abstractas para fines públicos o pedagógicos más concretos. Tanto yo como la mayoría de mis compañeros de estudios comprendimos a las pocas semanas de instalarnos en el campus que las universidades punteras de Estados Unidos miden ahora el rendimiento de sus estudiantes de posgrado en función de su capacidad para publicar en las revistas académicas más destacadas y excluyen casi cualquier otro factor de valoración.

Desde ese estrecho punto de vista, escribir sobre política para un público más amplio se considera, en el mejor de los casos, una distracción. Impartir clase a los estudiantes de grado es una tarea que debe realizarse con escrupulosa corrección, sí, pero también con la mayor celeridad. El único objetivo en la vida del que los estudiantes de posgrado pueden hablar sin poner en riesgo su reputación es la consecución de un buen puesto de trabajo académico en una universidad puntera.

La estrechez de miras de la formación del profesorado universitario norteamericano y los incentivos perversos a los que los candidatos a ingresar en esos cuerpos docentes se enfrentan desde el instante en que inician sus estudios de doctorado hasta el muy ulterior día de su jubilación, contribuyen a explicar el carácter cada vez más mecánico y somero de la formación universitaria de grado. En muchas de las mejores universidades del país, alumnado y profesorado han establecido una especie de pacto tácito de no agresión: mientras los estudiantes no les absorban demasiada parte de su tiempo, los profesores se lo pondrán fácil y dejarán que lo que pagan por sus matrículas les permitan sacarse un título sin tener que pensar demasiado. Y son muchos los alumnos que tienen parecida actitud ante sus clases que la de los docentes a la hora de impartirlas: aceptan el deber de escribir trabajos o de resolver ejercicios de problemas como parte inevitable de lo que se necesita para avanzar en este mundo, y tratan de sacárselo de encima lo más rápida e indoloramente posible.[29]

Todas esas deficiencias pedagógicas de las universidades de élite no importarían gran cosa si no representaran la cúspide de todo un conjunto de defectos similares con los que el alumnado tiene que lidiar desde el momento de su más tierna infancia, cuando entra en la escuela pública. Y es que, de

igual modo que la educación universitaria se ha vuelto cada vez más utilitaria, también la finalidad de la educación pública en general se concibe ahora según unos criterios peligrosamente más estrechos: durante las pasadas décadas, el número de horas que un instituto de secundaria medio dedica a formación cívica ha caído en picado.[30]

¿Resultado? Generaciones enteras de estadounidenses están ahora peligrosamente desinformadas acerca de la política. En una encuesta de 2009 en la que se preguntaba a los participantes por datos sencillos, como el siglo en el que se produjo la independencia de Estados Unidos, un 89 % de las personas encuestadas dijeron estar seguras de haber superado el test; pero solo un 17 % lo superó en realidad. En otro estudio más reciente, se formularon preguntas básicas sobre cuestiones de ciudadanía a estudiantes de cincuenta y cinco de las universidades mejor clasificadas en los *rankings* de centros de educación superior. Solo un 50 % supo responder a preguntas acerca de la duración de las legislaturas de los senadores y de los miembros de la Cámara de Representantes; un 80 % de ellos habrían obtenido un suspenso en un examen de la asignatura de formación cívica de secundaria.[31]

Hubo un tiempo en que muchos padres estadounidenses hacían que sus hijos se aprendieran de memoria las capitales de los cincuenta estados de la Unión. «¿Capital de Vermont?», le preguntaban a su hija (o hijo) de cuatro años. «Montpelier», respondía ella orgullosa. Soy consciente de que existen muchos motivos para dudar del valor de semejantes rituales. Hoy en día, cualquiera que sepa leer y escribir puede buscar rápidamente esos datos en Google. El éxito profesional en la economía del mañana dependerá de la adquisición de aquellas habilidades que las máquinas no hayan sido capaces aún de adquirir, y no de la regurgitación de fechas y nombres previamente memorizados. Y puesto que el aprendizaje memorístico no es ni mucho menos la mejor manera de impartir valores políticos, nunca dejó de ser una ingenuidad pensar que tan encantadora exhibición de cultura en materia de geografía política pudiera convertir a los pequeñines de hoy en valerosos defensores de la democracia de mañana.

Aun así, resulta muy revelador que tales rituales hayan sido abandonados de ese modo en estas pasadas décadas. Igual que las escuelas han empezado a desatender la labor de inculcar un espíritu público en su

alumnado, también muchos padres parecen haberse desinteresado por impartir una conciencia de deber cívico en sus hijos.[32]

Sería injusto afirmar que el sistema educativo estadounidense está falto de fervor político. A fin de cuentas, casi todos los campus universitarios siguen conservando unos cuantos feudos heroicos de profesionales lanzados en pos de una misión intensamente ideológica. Especialmente en el ámbito de las humanidades y en las áreas más politizadas de las ciencias sociales, son muchos los profesores y profesoras que aspiran a conseguir un verdadero cambio de actitud en sus estudiantes. Lo que pasa es que, normalmente, quienes así actúan no lo hacen porque persigan con ello preservar los aspectos más valiosos de nuestro sistema político, sino por todo lo contrario: tratan de concienciar a su alumnado para que sepa reconocer las múltiples injusticias e hipocresías asociadas a ese sistema.

Se trata de una reacción refleja básica que adopta diferentes formas según las disciplinas. En muchos departamentos de filología inglesa, por ejemplo, se procede a una deconstrucción de los valores de la Ilustración, en especial para desenmascarar su racismo, o su colonialismo, o su heteronormatividad subyacentes. En muchos departamentos de historia se trata de refutar los relatos que describen la evolución de los sistemas políticos como un progreso, y se pone de manifiesto hasta qué punto las democracias liberales siempre han dado pie a inmensas injusticias. En muchos departamentos de sociología, esa reacción consiste en destacar las más deprimidas bolsas de pobreza y las condiciones de vida más desfavorables del país, como muestra de las múltiples formas en que los Estados Unidos actuales continúan siendo discriminatorios.

Cada uno de esos enfoques señala ciertas vías de análisis importantes. Pero su efecto de conjunto es el de dejar en muchos estudiantes la sensación de que el desprecio por nuestras instituciones políticas heredadas es el sello distintivo de una buena sofisticación intelectual. Como me comentó una excepcionalmente brillante y curiosa estudiante de filología inglesa, ella sentía una honda contradicción en su interior: por un lado, sabía que la democracia había sido una creación de la Ilustración y solo podía funcionar si

estaba respaldada por una aceptación generalizada de los valores ilustrados; pero, por otro lado, sabía que la Ilustración había sido muy cruel y que sus valores habían ido muy descaminados. ¿Significaba eso que debía sentir más aprecio por la Ilustración del que le habían enseñado a sentir, o que debía abandonar el irreflexivo compromiso con la democracia que le habían inculcado desde pequeña?

Yo convine de inmediato con ella en que el conflicto que sentía es real: tenía toda la razón al decir que tenemos que elegir entre creer tanto en la democracia como en la Ilustración, por un lado, o no creer ni en la democracia ni en la Ilustración, por el otro. Pero también le dije que yo esperaba que ella llegara a reconocer en último término lo mucho de valioso que tiene la tradición intelectual que dio origen a la democracia liberal. Sin embargo, a medida que avanzaba el semestre, me dio la impresión de que ella había optado por tragarse el otro sapo y había decidido replantearse su fe en la democracia, antes que su hostilidad hacia la Ilustración.

La clase de actitud de la que aquella estudiante mía se ha impregnado en Harvard tiene ahora un nivel de influencia pedagógica muy desproporcionado con respecto a su prominencia real en los cuerpos docentes universitarios del país, en parte porque ha influido hondamente en la misión educativa de las facultades de pedagogía y formación de profesorado de todo Estados Unidos. Sucede, sin embargo, que estos centros formativos han adquirido un papel mucho más preponderante a la hora de modelar a los educadores de toda la nación desde el momento en que los títulos de posgrado en pedagogía se han convertido en cualificación casi imprescindible para acceder a puestos de trabajo fijos y estables en ese terreno. De ahí que las facultades de pedagogía desempeñen cada vez más una función clave en la conformación de los valores políticos que se enseñan al alumnado de todas las edades en los colegios e institutos de Estados Unidos.[33]

En muchos lugares, el resultado de ese proceso ha sido convertir la educación para la ciudadanía en una especie de empresa anticívica. Tras haberse imbuido de teorías sociológicas sobre las generalizadas injusticias que caracterizan a la sociedad moderna, y tras haber aprendido a deconstruir los valores «problemáticos» de la Ilustración, el profesorado y los directores

y directoras de centros se han vuelto mucho menos propensos a enseñar formación cívica de un modo que anime a sus estudiantes a defender la democracia liberal y a enorgullecerse de ello.[34]

Muchos pensadores conservadores han sugerido un remedio simple a tan complejos males. Según lo explicó David Brooks en una columna publicada hace poco, debería enseñarse la historia de la civilización occidental, y debería hacerse presentándola como un relato de «progreso sin complejos»: «Hubo ciertas grandes figuras, como Sócrates, Erasmo, Montesquieu y Rousseau, que realizaron sus propias contribuciones individuales al impulso que hizo que las naciones alcanzaran niveles superiores del ideal humanista».[35]

Brooks destaca con razón la importancia de la educación para la ciudadanía. Pero se equivoca al sugerir que el futuro de la formación cívica debería consistir en un relato hagiográfico del pasado. Pese a sus muchos defectos, no deja de existir un importante elemento de verdad en las críticas que ciertas partes de la izquierda académica han formulado contra la democracia liberal. Pese a su aspiración a la universalidad, muchos pensadores ilustrados excluyeron a grandes grupos humanos de toda consideración moral. Pese a los enormes logros que bien les podemos atribuir, muchos de los «grandes hombres» de la historia fueron también culpables de horribles vilezas. Y pese a que el ideal de la democracia liberal es más que un digno merecedor de defensa, la práctica actual y real del sistema continúa tolerando ciertas injusticias vergonzosas.

Tanto la historia de la Ilustración como la realidad de la democracia liberal son complejas. Todo intento de presentarlas en términos acríticos está condenado a chocar con un valor ilustrado tan básico como es el de la veracidad, y a socavar el elemental principio democrático de la aspiración a la igualdad política. Es la admisión misma de esos hechos —así como la comprensible indignación que provoca la despreocupada negativa de amplios sectores de la derecha a reconocerlos— lo que hace que para buena parte de los periodistas y los académicos de hoy resulte tentador instalarse en una actitud de pura y persistente crítica.

Pero concentrarse exclusivamente en las injusticias actuales no es más honesto como ejercicio intelectual que exhortar irreflexivamente a admirar la grandeza de la civilización occidental. Para ser fiel a sus propios ideales, pues, la formación cívica tiene que recoger tanto las injusticias reales como los grandes logros atribuibles a la democracia liberal, y aspirar a que el alumnado acabe igual de decidido a corregir las primeras que a defender los segundos.

Una parte integral de esa educación debería consistir en explicar las razones por las que los principios de la democracia liberal conservan un atractivo especial. El profesorado debería dedicar mucho más tiempo a señalar que las alternativas ideológicas a la democracia liberal —desde el fascismo hasta el comunismo, y desde la autocracia hasta la teocracia— continúan siendo tan repulsivas hoy como lo eran en el pasado. Y deberían también mostrarse mucho más claros en señalar que la respuesta correcta a la hipocresía no es renegar de aquellos principios positivos y recomendables que se invocan a menudo de forma insincera, sino esforzarse más por que sean puestos en práctica de una vez.

Nuestros hábitos de pensamiento fueron moldeados a lo largo de estas pasadas décadas por las circunstancias favorables en las que nos tocó vivir.

El movimiento de avance perpetuo de la historia parecía asegurado. Las oportunidades eran tan abundantes como escasos eran los enemigos. De ahí que la ancestral idea de que la libertad política tiene que ser defendida de nuevo por cada generación que llega pasara a ser vista como algo cada vez más esotérico. Aunque nunca hayamos abjurado de dicha idea, lo cierto es que hoy ya no es para nosotros la significativa guía que era antaño.

¡Qué rápido han virado los vientos del cambio! Donald Trump está instalado ahora en la Casa Blanca. Los populistas autoritarios están en auge en buena parte de Europa occidental. La veloz erosión de la libertad política en Polonia y Hungría nos muestra que, incluso en pleno siglo XXI, el proceso de consolidación democrática sigue siendo una vía de doble sentido. El curso de la historia, según parece, no tiene por qué apuntar indefectiblemente hacia la democracia, después de todo.

Si el futuro no está preestablecido, la misión que los padres fundadores de la patria estadounidense dieron a toda persona que desempeñe la muy relevante función de ciudadano es más oportuna hoy que nunca: todos tenemos el solemne deber de sostener y promover las instituciones democráticas. Y una parte esencial de esa obligación consiste en convencer a quienes nos rodean —y en preparar a quienes vengan detrás de nosotros— para que hagan eso mismo.

Los seres humanos somos asombrosamente versátiles. A nuestros abuelos les habría parecido inconcebible que la formación cívica se atrofiara hasta los niveles actuales, tan inconcebible como hoy nos resulta la posibilidad de reconstruir el país para que sus pensadores y periodistas escriban libros y artículos que aspiren a difundir los valores de la democracia liberal, para que la formación cívica ocupe un lugar central en el currículo educativo, para que los docentes de todos los niveles no ahorren esfuerzos en impartir una concienzuda enseñanza de la Constitución y de sus anclajes intelectuales, y para que la mayoría de los ciudadanos admitan que, si quieren que su sistema político sobreviva, tendrán que librar todas las batallas ideológicas que sean necesarias.

Pero una cosa está clara: las redes sociales han tenido el efecto corrosivo que han alcanzado sobre la democracia liberal porque los cimientos morales de nuestro sistema político son mucho más frágiles de lo que nos imaginábamos. Así que quienquiera que pretenda contribuir a revitalizar la democracia liberal deberá ayudar a edificarla de nuevo sobre unas bases ideológicas más estables.

Conclusión

LUCHAR POR NUESTRAS CONVICCIONES

Cuando un sistema político perdura por décadas o siglos, es fácil que quienes nunca hayan conocido otra realidad den por supuesto que es inmutable, que les parezca que la historia ha llegado a su parada final, que la estabilidad reinará para siempre.

Pero aunque las crónicas de la humanidad contienen abundantes ejemplos de regímenes que gozaron de una considerable longevidad, todos ellos tienen algo en común: al final, cayeron. La democracia ateniense duró unos dos siglos. Los romanos se autogobernaron durante casi quinientos años. La República de Venecia fue la Serenísima durante más de un milenio. Cualquiera que hubiera predicho la desaparición de esos sistemas políticos en sus últimos años habría sido tachado de loco. ¿Por qué —bien le podrían haber preguntado sus contemporáneos— iba un sistema que ha sobrevivido cientos de años a venirse abajo en el medio siglo siguiente? Y, sin embargo, llegó un momento en que la democracia ateniense, el autogobierno colectivo en Roma e incluso la Serenísima República de Venecia hicieron mutis por el foro de la historia.[1]

Haríamos bien en tomarnos muy en serio esa lección.

Las siete décadas transcurridas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial han traído a los pueblos de América del Norte y de Europa occidental una paz y una prosperidad sin precedentes. A diferencia de la mayoría de nuestros antepasados, muchos de nosotros jamás hemos tenido que afrontar una guerra, una revolución, una hambruna o un conflicto civil. La idea de que la democracia pudiera desmoronarse de la noche a la mañana

—que el amanecer de una nueva era nos trajera muerte o hambre, en vez de tolerancia y prosperidad— contradice todas las horas y todos los días de nuestra experiencia personal de vida.

Pero la historia está llena de personas que nunca habrían imaginado que la paz y la estabilidad a las que se habían acostumbrado en el transcurso de sus breves vidas podían acabarse de un modo u otro. Está repleta de sacerdotes paganos y de aristócratas franceses, de campesinos rusos y de judíos alemanes. Si no queremos terminar como ellos, tenemos que estar más vigilantes, y tenemos que comenzar a luchar por estos valores nuestros que tan hondamente apreciamos.

La democracia liberal lleva ya más de medio siglo siendo el sistema político dominante en buena parte del mundo. Pero esa era podría estar tocando ahora a su fin.

Durante las últimas décadas, varios países de toda la región norteamericana y europea occidental se han ido volviendo menos democráticos. Nuestro sistema político aspira a hacer efectivo el gobierno del pueblo. Pero, en la práctica, ignora la voluntad popular con descorazonadora frecuencia. De hecho, lo que ha venido arraigando con creciente fuerza en los últimos tiempos es un sistema de derechos sin democracia, por mucho que este todavía pase inadvertido para una mayoría de los politólogos.

Más recientemente, varios advenedizos en política han cosechado un gran éxito prometiendo devolver poder al pueblo. Pero allí donde han conseguido formar gobierno, han hecho que sus sociedades sean mucho menos liberales y han comenzado enseguida a ignorar las verdaderas preferencias de ese pueblo. En Hungría y en Filipinas, en Polonia y en Estados Unidos, los derechos individuales y el Estado de derecho están actualmente sometidos al ataque concertado de varios «hombres fuertes» populistas. El competidor más serio que le ha salido al mencionado sistema de derechos sin democracia, pues, ha resultado ser un sistema de democracia sin derechos.

¿Desembocará la crisis actual en un giro espectacular desde el liberalismo no democrático hacia la democracia iliberal, seguido de un descenso paulatino hacia la dictadura propiamente dicha? ¿O podrán los defensores de la democracia liberal arreglárselas para capear el temporal populista y para renovar un sistema político que, pese a sus limitaciones, ha propiciado unas cotas de paz y prosperidad sin precedentes?

Existe la tentación de suponer que los populistas que tan en auge están ahora en tantas partes del mundo incumplirán sus promesas y caerán enseguida en desgracia.

Sin duda, ha habido casos en los que ciertos líderes fuertes de ese tipo han sido apartados del poder tras unos mandatos breves y desastrosos. El primer gobierno de Ley y Justicia en Polonia, por ejemplo, perdió su mayoría parlamentaria cuando un aliado clave se desentendió de él en 2007 y, en las elecciones subsiguientes, fue duramente derrotado. En Corea del Sur, por su parte, millones de ciudadanos se manifestaron por las calles en otoño de 2016 contra una presidenta corrupta y con tendencias autoritarias; Park Geun-hye fue finalmente destituida por el Parlamento del país y está ahora recluida en el Centro Penitenciario de Seúl.[2]

La victoria puntual de un «hombre fuerte» populista no tiene por qué significar que las campanas toquen ya irreversiblemente a difunto por la democracia liberal. Cuando sus defensores hacen causa común contra los populistas, movilizan protestas multitudinarias para resistirse a las apropiaciones de poder de estos y los echan del poder a la primera oportunidad que tienen para ello, las probabilidades de que salven el sistema son muy buenas.

Pero por cada historia de caída de los populistas, hay dos o tres de triunfo. En muchos países de todo el mundo, los líderes de tendencias autoritarias que muchos esperaban que cayeran o se tambalearan se han consolidado en el poder y han imposibilitado que la oposición los expulse por medio de unas elecciones libres y justas.

En Turquía y en Venezuela, por ejemplo, sendos gobiernos populistas produjeron mejoras económicas reales durante su primera legislatura y salieron reelegidos por holgados márgenes. Pero la poca visión de futuro de las políticas aplicadas inicialmente no tardó en provocar efectos adversos y, entonces, esos gobiernos optaron por emplearse con creciente dureza contra la oposición. Para cuando el descenso de su popularidad se hizo finalmente realidad, esos populistas habían logrado desmantelar efectivamente muchos controles institucionales independientes a su poder. Así que los defensores de la democracia liberal se vieron incapacitados para impedir, pese a sus esfuerzos, que sus países derivaran hacia la dictadura.[3]

Tenemos ahí, pues, un alarmante precedente para los países que acaban de elegir a «hombres fuertes» de ese tipo para ocupar los más altos cargos de sus gobiernos. En la India, en Polonia y en Filipinas, los populistas autoritarios han conquistado el poder en el transcurso de la pasada década. Todavía es difícil predecir hasta dónde llegará su asalto contra la democracia liberal, ni cuán eficaz demostrará ser la creciente resistencia con la que se están encontrando. Pero de lo que no hay duda alguna es de que se han instalado en la misma senda que sus camaradas ideológicos de países que ahora ya no pueden ser considerados democráticos.[4]

Las primeras tres medidas tomadas por Narendra Modi en la India o por Jarosław Kaczyński en Polonia guardan una llamativa semejanza con las tres primeras medidas tomadas en su día, por ejemplo, por Recep Erdoğan en Turquía. ¿Significa eso que terminarán tomando también las medidas números cinco, ocho o diez?

No lo sabremos hasta dentro de unos años. Es muy posible que esos países logren invertir el rumbo. Pero la senda de la menor resistencia parece ahora llevarlos hacia el mismo abismo.

~

La India es la democracia más poblada del mundo. Polonia había sido elogiada durante años por estar teniendo la más exitosa de todas las transiciones poscomunistas. Si un líder autoritario consigue consolidar su poder en cualquiera de esos dos países, supondrá un gran golpe para la

esperanza de que la libertad y el autogobierno colectivo terminen arraigando en todo el mundo. Pero lo que ya no está tan claro es lo que una deriva hacia la dictadura en uno de esos Estados representará para el destino que aguarda a la democracia liberal en las naciones que han sido sus feudos tradicionales.

La democracia ha estado presente en la mayor parte de América del Norte y de Europa occidental durante mucho más tiempo que en países como Hungría, Turquía, Polonia o la India. Allí, la cultura política democrática ha alcanzado mayor arraigo y las instituciones democráticas están más asentadas. Los ciudadanos de esos países son más ricos y tienen un mayor nivel de estudios. Entonces, ¿qué nos induce a pensar que el auge de los populistas autoritarios tendrá efectos igual de desastrosos en Occidente que en los países ya mencionados?

No hay ningún precedente claro que nos ayude a dar respuesta a esa pregunta. Nunca antes se habían mostrado los ciudadanos de unas democracias presuntamente tan consolidadas como esas tan críticos con su sistema político. Nunca antes habían estado tan abiertos a alternativas autoritarias. Y nunca antes habían votado en tan elevado número por «hombres fuertes» populistas que hacen gala de su desprecio por las reglas y las normas básicas de la democracia liberal. Pero aunque aún es demasiado temprano para aventurar proyecciones mínimamente fiables (y, menos aún, conclusiones bien definidas), estos últimos meses nos han aportado una prueba crucial: la elección de Donald J. Trump.

Preocupados por la posibilidad de que un demagogo se hiciera algún día con la presidencia, los padres fundadores confiaron al legislativo y al judicial las herramientas necesarias para hacer frente a un ejecutivo descarriado. Así, el Tribunal Supremo puede dictaminar que un decreto emitido por el presidente vulnera la Constitución. Y si quebranta la ley o ignora a los tribunales, el Congreso puede iniciar y ejecutar el proceso que lleve a la destitución del jefe del Estado.

Pero, al fin y al cabo, esas instituciones están compuestas por políticos y funcionarios de carne y hueso. Si, por complicidad o por cobardía, no hacen uso de las herramientas que los padres fundadores pusieron en sus manos,

poco importará lo que diga la letra de la ley. Entonces, ¿qué haría falta en la práctica para que el Congreso y la justicia hicieran verdaderamente frente al presidente?

No hace tanto que la mayoría de los politólogos predecían que un hombre de las opiniones y el carácter de Donald Trump jamás podría ser elegido presidente en Estados Unidos. E incluso después de ser elegido, siguieron insistiendo en que había líneas rojas que ningún presidente podría cruzar jamás sin ser inmediatamente culpable de rebelión. Si un presidente exigía una promesa de lealtad personal al director del FBI, o si sus más estrechos asesores colaboraban con una potencia extranjera hostil, o si se negaba reiteradamente a condenar los actos y las opiniones de los supremacistas blancos, o si llamaba a encarcelar a su rival político, la reacción adversa a la que se enfrentaría sería instantánea y contundente, se decía.

La realidad ha demostrado ser bastante más ambigua.

Durante sus primeros meses en el cargo, Trump traspasó cada una de esas presuntas líneas rojas.[5] Pero desde el momento mismo en que pasamos a verlas ya por el espejo retrovisor, comenzaron a parecernos naranjas, o amarillas, o incluso verdes.

Mientras escribo esta conclusión, la mayoría de los republicanos en el Congreso siguen sin haber reprochado a Trump sus repetidos ataques a la democracia estadounidense. Él conserva el apoyo ferviente de una sustancial minoría del electorado, en la que se incluye una gran mayoría de aquellos electores que se identifican como republicanos. Y como él mismo ha alardeado ya alguna vez de ello, no está claro qué barbaridad tendría que llegar a cometer para que eso cambiase.[6]

La situación podría fácilmente empeorar. En los meses y años venideros, Trump podría desobedecer un mandato judicial directo, o destituir a más autoridades que decidieran investigar sus presuntas irregularidades o ilegalidades. Podría clausurar un periódico o negarse a aceptar el resultado de unas elecciones.

Si el Congreso y la justicia actúan con valentía y determinación en tales circunstancias, tienen muchas posibilidades de poner freno a los instintos autoritarios del presidente. Pero la Constitución no se defiende sola. Hasta

que los aliados y los cómplices de Trump demuestren su disposición a anteponer el país al partido, no se habrá conjurado el peligro inminente que corre ahora la República estadounidense.

Esto, por lo que respecta al panorama pesimista. No cabe duda de que abundan las señales que indican que las democracias liberales podrían ser más susceptibles de una absorción populista de lo que los estudiosos creían desde hace tiempo. Pero también hay algunos buenos motivos para el optimismo en cuanto a la capacidad de Estados Unidos para renovar su democracia en cuanto Trump deje el cargo.

Desde su investidura, millones de estadounidenses han expresado abiertamente su oposición a sus acciones y políticas más indignantes. Varias organizaciones opositoras de base han logrado demostrar que el presidente no habla en nombre de todos los estadounidenses. Si quienes se oponen al jefe de Estado son capaces de mantener muchas de esas energías en estos próximos años, serán un obstáculo formidable frente a cualquier intento de apropiación importante de poder.

Las instituciones independientes no se han opuesto a Trump de manera tan inmediata ni tan contundente como los politólogos predecían pocos años atrás que lo harían. Aun así, también ellas están comenzando a dar pasos trascendentales en la dirección correcta. El nombramiento de Robert Mueller como fiscal especial ha ayudado a preservar la independencia de las agencias y los cuerpos de seguridad del país. Incluso los congresistas republicanos están mostrándose paulatinamente más dispuestos a hacer frente al presidente.[7]

También la opinión pública está empezando a cambiar. Los sondeos no son ni mucho menos tan desastrosos para Trump como a sus adversarios les gustaría creer, ni como las encuestas tendenciosas que difunden en las redes sociales podrían dar a entender. Pero la popularidad de Trump ciertamente descendió durante sus primeros nueve meses en el cargo, tras los que su apoyo se ha situado en el nivel más bajo de todos los presidentes a esas mismas alturas de su mandato.[8]

No está en absoluto claro lo que el resto de la presidencia de Trump puede depararnos. Pero, en este momento, parece probable que los próximos años van a ser un verdadero campo de minas para su Administración. Así que, para cuando ustedes lean esto, bien puede ser que su popularidad haya caído hasta mínimos más bajos aún. Puede que los republicanos del Congreso hayan hallado por fin el valor de obrar conforme a sus propias convicciones. Puede que algunos de sus asesores más próximos estén siendo ya encausados. Tampoco escapa al ámbito de lo posible que el propio presidente llegue a enfrentarse a un procedimiento de destitución promovido por el Congreso, o incluso que ya haya dimitido. Pero incluso aunque no haya ocurrido nada tan drástico como eso, es probable que esté más cerca de perder que de ganar en su futura cita con la reelección.[9]

A partir de ahí, es fácil que nos sintamos tentados a llevar ese panorama de optimismo un paso más allá: si Trump termina por fracasar antes de tiempo, la brevedad de su presidencia podría servir para vacunar a Estados Unidos contra la democracia iliberal. Tras años de crecientes recelos de los ciudadanos ante su sistema político, la posibilidad de una caída inminente del país en el abismo del autoritarismo ha rejuvenecido ya la adhesión de algunos ciudadanos a la Constitución. Si Trump dejase el cargo con deshonor, su caída podría despertar un nuevo espíritu de unidad. Decididos a no repetir nunca más el mal trago de una presidencia como la suya, los estadounidenses posiblemente volverían a hacer frente común y se embarcarían en una fase de renovación cívica. Y combatiendo la infección actual como la están combatiendo, podrían estar desarrollando los anticuerpos necesarios para mantenerse inmunes durante décadas a nuevos brotes de la enfermedad del populismo.

Pero lo cierto es que tanto el panorama puramente pesimista como el puramente optimista parecen igualmente inverosímiles.

A Trump probablemente le resultará difícil recuperarse de las turbulencias que ha generado durante su primer año en el cargo. Dada la continua caída de sus índices de aprobación y dado el estancamiento de su agenda de proyectos legislativos en el Congreso, y dada la importante

investigación oficial en curso sobre su campaña, que coincide con la disposición paulatinamente en aumento de los legisladores republicanos a distanciarse del presidente, es probable que carezca del apoyo que le permitiría concentrar el poder en sus manos.

Pero a los optimistas deberíamos recordarles que Trump podría seguir infligiendo un daño inmenso a las instituciones estadounidenses (o incluso provocar una guerra innecesaria) aunque continúe manteniéndose en una situación de relativo aislamiento e impopularidad. En algún momento en estos próximos años, bien podría suscitar una crisis constitucional. Y aunque el presidente fuese obligado finalmente a dar marcha atrás de cualquier apropiación indebida de poder por su parte, el daño a las normas constitucionales estadounidenses sería probablemente enorme. El grave peligro que representa para las reglas del juego democrático está aún muy lejos de haberse terminado.

Desde luego, entra dentro de lo imaginable que un fracaso de la presidencia de Trump pudiese unir de algún modo a los estadounidenses en torno a un renovado compromiso con la democracia liberal. Pero seguramente sería más probable aún que contribuyera a hacer más profunda la brecha partidista que envenena al país. La significativa minoría de estadounidenses que ven ahora a Trump como un héroe lo verían entonces como un mártir, y sus iras hacia el sistema político establecido no harían más que crecer. Y puede que incluso algunos de sus anteriores partidarios que se hubieran vuelto contra él llegaran luego a la conclusión de que deberían dar su confianza a un tribuno más radical e intransigente para hacer limpieza de todo lo que hay que «limpiar» en Washington.

Como ocurre con los insurgentes populistas en el resto del mundo, Trump tiene tanto de síntoma como de causa de la crisis actual. Si pudo conquistar la Casa Blanca ya de entrada, fue porque muchos ciudadanos estaban tremendamente desencantados con la democracia. Y si tantos ciudadanos se desencantaron con la democracia, fue por la persistencia de unas duraderas tendencias sociales y económicas.

Así que, cuando Donald Trump deje el cargo, es posible que sea sucedido por una figura sorprendentemente convencional. Y que, durante unos cuantos ciclos electorales, las riendas del gobierno parezcan estar de

nuevo en manos de un político o una política capaz que respete las normas básicas de la democracia liberal. Pero, a menos que los políticos de ambos bandos del frente político sumen fuerzas para abordar las tendencias que están alimentando ese desencanto de los ciudadanos con el *statu quo*, es muy probable que esas corrientes de fondo den pie en su momento a una nueva hornada de populistas. Y yo me temo mucho que, si nada cambia, cuando el próximo (o la próxima) aspirante a líder autoritario entre en la Casa Blanca dentro de quince o treinta años, Estados Unidos se habrá vuelto más vulnerable aún a su atractivo. Si la actual erosión de las normas democráticas prosigue con esta rapidez, y si la herida del enfrentamiento partidista continúa enconándose, el sistema inmunitario estadounidense se habrá debilitado más todavía para entonces. En esa situación, el virus del autoritarismo podría hacer estragos en el cuerpo político sin encontrar demasiada resistencia.

Lo más probable es que la presidencia de Trump no sea más que la salva de bienvenida a una lucha mucho más prolongada, que durará hasta mucho después de que el actual jefe del ejecutivo haya abandonado el cargo y que se extenderá mucho más allá de los confines de Estados Unidos. De hecho, el ejemplo histórico que más me ronda la cabeza cuando pienso en el futuro de Francia, de España, de Suecia o de Estados Unidos, no son ni Hungría ni Turquía: es la República romana.

En el siglo II a. C., un rápido cambio social y unos conflictos económicos largo tiempo enconados se habían fusionado hasta formar una mezcla tóxica de indignación y resentimiento. Con la promesa de poner remedio a los males de los romanos pobres mediante una redistribución de las tierras, Tiberio Graco fue elegido tribuno de la plebe en el 133 a. C. La vieja élite patricia estaba horrorizada y trató de poner freno a las reformas más radicales impulsadas por Tiberio. Después de que este tratase de vencer aquel veto, y cuando la crisis constitucional consiguiente dio señales de no amainar, el conflicto se volvió violento. En un episodio caótico avivado por la aprensión mutua, Tiberio y trescientos de sus seguidores fueron muertos a palos. Aquel fue el primer estallido de un conflicto civil a gran escala en la historia de la República romana.

Tras el asesinato de Tiberio, Roma volvió a un periodo de calma relativa. Pero, una década más tarde, su hermano, Cayo Graco, lo sucedió como tribuno. Cayo trató de instaurar unas reformas más radicales todavía y provocó con ello una crisis constitucional más profunda si cabe, de resultas de la cual fue también asesinado por sus rivales políticos. Esta vez, tres mil seguidores suyos fueron ajusticiados.[10]

Durante las décadas siguientes, ese mismo patrón de acontecimientos volvió a reproducirse en repetidas ocasiones. El tumultuoso gobierno de un arrogante tribuno de la plebe desencadenaba choques violentos con unos obstinados patricios. Los regresos a la normalidad duraban poco. Eran breves intermedios durante los que las pasiones se sosegaban y la paz volvía a reinar. Pero, como los problemas de fondo de la República no se habían solucionado, las iras por ellos suscitadas simplemente aguardaban entre bastidores a hacer su siguiente aparición estelar en escena.

La forma de hacer política difundida en su momento por los Graco y perpetuada por sus oponentes siguió influyendo en la República romana mucho después de que aquellos protagonistas iniciales hubieran abandonado la escena. Cada docena de años, más o menos, un nuevo seguidor del ejemplo de aquellos tribunos pioneros lograba hacerse con el poder. Cada vez que eso sucedía, las normas y las reglas de la República de Roma eran un poco menos capaces que antes de contener el ataque.

No hubo ningún punto de inflexión, ningún instante claro en el que aquellas gentes se dieran cuenta de pronto de que sus instituciones políticas se habían vuelto obsoletas. Pero, en el transcurso de un tumultuoso siglo, la República romana fue lentamente marchitándose. A medida que las viejas normas de moderación y contención se fueron desmoronando, la violencia fue entrando en una espiral de descontrol. Cuando los romanos corrientes tomaron por fin conciencia de que habían perdido la libertad de autogobernarse, hacía ya mucho tiempo que la República estaba perdida.[11]

~

En el momento álgido de su cruel Imperio, Nerón comenzó a humillar a sus rivales y a matar a sus propios parientes. Asesinó a su madre y a su hermanastro. Ordenó la ejecución de una larga sucesión de altas autoridades del Estado. Luego, centró su atención en Floro, un influyente senador de una legendaria familia romana, y dispuso que bailara en los juegos que el propio emperador organizaba y que, de ese modo, se pusiera en ridículo ante un numeroso público que lo insultaría y lo abuchearía.

Floro no sabía qué hacer. Si obedecía aquella orden, legitimaría el poder de Nerón y avergonzaría a su familia. Si se negaba, Nerón probablemente haría que lo mataran. Desesperadamente necesitado de consejo, recurrió a Agripino, un famoso filósofo estoico.

Los estoicos eran conocidos defensores de la idea de que las personas dotadas de la adecuada formación filosófica siempre podían vencer sobre sus circunstancias. Según su lógica, nadie podría entonces influir en su pensamiento. Desde el momento en que el individuo aprendía a ser indiferente a todo lo que estuviera más allá de eso —abandonando su apego por las cosas materiales e incluso por otras personas—, tenía su bienestar bajo su propio control. Un verdadero filósofo, concluían, puede ser feliz incluso aunque lo tengan sentado en un potro de tortura.

Así que cuando Floro consultó la cuestión con Agripino no fue por casualidad. Dado que conocía seguramente la filosofía estoica, ya debía de esperar que el consejo que el filósofo le diera no le dejara lugar a dudas: «Enfréntate al tirano. No te preocupes de lo que suceda si haces lo correcto», seguramente pensó que le diría.

Pero eso no fue lo que Agripino le aconsejó a Floro. Le explicó, más bien, que elegir una opción o la otra ya no tenía importancia: «¡Asiste!».

Floro estaba desconcertado.

—¿Por qué no asistes tú? —le preguntó.

—Yo ni siquiera me planteo la cuestión —aclaró Agripino—. Porque el que se ha preguntado por estos asuntos una sola vez y ha comparado el valor de lo externo y ha hecho recuento de ello está cerca de los que olvidan su propia dignidad. ¿Por qué me preguntas «es preferible la muerte o la vida»?

Te digo: la vida. «¿El dolor o el placer?» Te digo: el placer. «¡Pero si no participo en la representación, me cortarán el cuello!» Entonces ve y participa, pero yo no participaré.[12]

He pensado mucho en los estoicos en estos últimos meses. Hay algo deprimentemente austero en su visión del mundo. Como ellos mismos reconocían, el único modo de hacerte con el completo control de tu destino es volviéndote indiferente a todo lo que te rodea. Si amas a otra persona, es imposible que seas feliz cuando algo terrible le ocurre a él o a ella. Si te gustan tus conciudadanos, no puedes sentirse satisfecho si sufren dificultades económicas o discriminación racial. Y si te importan valores como la libertad o la igualdad, no puedes estar tranquilo como si nada cuando la suerte misma de la democracia liberal pende de un hilo.

Por todos esos motivos, yo no me considero un estoico. Lejos de sentirme indiferente a cosas que están fuera de mi control, hay algunas que valoro hasta tal punto que voluntariamente —apasionadamente, incluso— entrelazo su bienestar con el mío propio. Sentirme satisfecho mientras todo a mi alrededor se desmorona no me parece la vida de un filósofo esclarecido, sino la de un cínico o un sociópata.

Aun así, la doctrina de los estoicos contenía un fondo de sabiduría, pues admitían (con razón) que nadie va a hacer nunca lo correcto si se pasa la vida calculando el resultado probable de sus actos a cada paso que dé. Cuando me enfrento a un peligro real, mis incentivos siempre van a orientarme hacia la dirección de la inacción o la aquiescencia.

«Probablemente debería decir algo, pero ¿qué puede importar lo que yo diga?»

«Probablemente debería enfrentarme a ellos por esto. Pero ¿cómo voy a dar de comer a mi familia si pierdo el trabajo?»

«Probablemente debería hacer frente al gobierno. Pero ¿qué haré yo si sus fieles vienen luego por mí?»

Agripino, pues, tenía toda la razón en un importante sentido: si espero a estar ante un peligro inminente para calcular entonces qué riesgos estoy dispuesto a asumir, lo más probable es que me pierda a mí mismo en el

momento más importante. Como espero hacer lo correcto cuando más necesite tener el valor de hacerlo —y más difícil resulte reunirlo—, yo voy a intentar seguir el consejo del filósofo. Así que, mucho antes de que esté realmente ante una decisión peligrosa, yo ya estoy haciendo acopio de toda la determinación posible para eso, para hacer lo correcto.

Uno de los grandes privilegios de vivir en una democracia estable es que normalmente no tenemos que hacer frente a esa clase de cuestiones.

Hasta hace bien poco, la mayoría de nosotros vivíamos tiempos corrientes. Lo que está en juego en la política siempre ha sido mucho. Pero rara vez se necesitaba de un coraje demasiado especial para defender o reivindicar aquello que valorábamos. Hacer lo correcto no requería de enormes sacrificios. Si perdíamos una batalla importante, sabíamos que más adelante vendría una nueva oportunidad de vencer la guerra.

Ahora, sin embargo, nos adentramos en unos tiempos extraordinarios. Lo que está en juego en la política actual no solo es mucho, sino que tiene una trascendencia existencial. En los años venideros, puede que cada vez se necesite más valor para defender aquello que tenemos en especial aprecio o estima. Si queremos hacer lo correcto cuando llegue el momento decisivo, tenemos que estar dispuestos a hacer un sacrificio real. Porque si perdemos las batallas próximas e inmediatas con los populistas, es posible que la guerra esté ya decidida y terminada demasiado pronto.

Por fortuna, es mucho lo que podemos hacer quienes queremos que la democracia liberal sobreviva a esta era del albor del populismo. Podemos manifestarnos por las calles para hacer frente a los populistas. Podemos recordar a nuestros conciudadanos las virtudes tanto de la libertad como del autogobierno. Podemos presionar a los partidos establecidos para que adopten un programa ambicioso capaz de renovar aquella aspiración original de la democracia liberal de un futuro mejor para todos. Y si vencemos —y yo ciertamente espero que venzamos—, podemos hacer gala de la elegancia y la determinación precisas para atraer a nuestros adversarios de vuelta al redil democrático.

Todavía es imposible predecir cuál será la suerte última que correrá nuestro sistema político. Quizá el ascenso de los populistas no pase de ser una fase efímera que, dentro de cien años, recordemos con una mezcla de desconcierto y curiosidad. O tal vez demuestre ser un cambio histórico que anuncie un orden mundial en el que los derechos individuales sean vulnerados constantemente y el verdadero autogobierno desaparezca de la faz de la tierra. Nadie puede prometernos un final feliz a todo esto. Pero aquellos de nosotros a quienes de verdad nos importan nuestros valores y nuestras instituciones estamos resueltos a luchar por nuestras convicciones sin que nos importen las consecuencias para nosotros mismos. Y puede que los frutos de nuestro trabajo sean aún inciertos, pero haremos lo que podamos para salvar la democracia liberal.

AGRADECIMIENTOS

En el último párrafo de su artículo «¿El fin de la historia?», Francis Fukuyama admitía que tenía alguna que otra duda sobre si la historia realmente llegaría algún día a su fin:

> El fin de la historia será un momento muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por una meta puramente abstracta, la lucha ideológica a escala mundial que exigía audacia, coraje, imaginación e idealismo, serán reemplazadas por el cálculo económico, la incesante gestión de problemas técnicos, la preocupación por el medioambiente y la satisfacción de sofisticadas demandas de los consumidores. En el periodo posthistórico, no habrá arte ni filosofía, solo la perpetua conservación del museo de la historia humana. Siento —y percibo en otra gente a mi alrededor— una fuerte nostalgia de la época en que existía la historia. Y lo cierto es que, aun en el mundo posthistórico, dicha nostalgia va a seguir alentando la competencia y el conflicto por algún tiempo. Aunque reconozco su inevitabilidad, tengo sentimientos de lo más ambivalentes por la civilización creada en Europa a partir de 1945, con sus correspondientes vástagos noratlánticos y asiáticos. Quizá esa posibilidad misma de siglos de aburrimiento que se abre al término de la historia sea la que propicie que la historia vuelva a comenzar de nuevo.

¿Nos ayuda este pasaje a entender mejor nuestro lance actual?

Los paralelismos son evidentes. Muchos de los más fervientes (y eficaces) adversarios de la democracia liberal son personas que no se pueden quejar de no haber tenido unas vidas muy cómodas y que ahora hacen pleno uso de las libertades que nuestro sistema político les reconoce. A veces, es como si su hostilidad hacia un sistema que los ha tratado excepcionalmente bien estuviera impulsada, entre otras cosas, por las ganas de atenuar su aburrimiento.

Pero las diferencias entre nuestra realidad y la predicción de Fukuyama también son considerables. Y es que, aunque algunos populistas no aspiren más que a hacer alarde de su osadía, han evidenciado una capacidad para atraerse apoyos que solo puede explicarse por factores bastante más estructurales. Mucho del descontento que alimenta la oposición a la

democracia liberal está fundamentado en agravios reales. A menos que nos comprometamos con la búsqueda de soluciones, las décadas venideras serán un tiempo de emociones fuertes, demasiado fuertes para nuestro propio bien.

Quienes se dedican a la escritura viven de un modo muy peculiar esa tensión entre el aburrimiento y la emoción. Son personas que llevan décadas gozando de la libertad de escribir lo que quieran. Pero muchas de ellas, en vez de disfrutar con ese privilegio, albergan desde hace tiempo el secreto deseo de que llegue una época en la que su libertad esté más asediada y en que puedan así tener más fácil ocasión de demostrar su valentía y su heroísmo.

Pues bien, ese momento ha llegado. Nos criamos en tiempos normales, pero hemos entrado ya en unos tiempos extraordinarios. De pronto, lo que los escritores escriban importa. Y hacer lo correcto puede requerir de mucho más valor de lo que imaginábamos unos pocos años atrás. Ahora bien, en vez de caer en la trampa de idealizar esta situación, debemos hacer lo que podamos para regresar al aburrimiento de aquellos tiempos en los que el nivel de lo que estaba en juego en la política no pasaba nunca de ser medio-alto.

Eso no significa que no podamos disfrutar de los pocos consuelos que este momento trae consigo. En mi caso, uno de los más destacados ha sido una nueva sensación de comunidad y de sentido en lo que hago. Hay personas con quienes antes compartía un alineamiento político muy general, pero con las que no me unía un sentimiento de afinidad real y que ahora me parecen verdaderos camaradas. Y hay también personas a quienes consideré adversarias políticas hasta la madrugada del 9 de noviembre de 2016, y con quienes ahora reconozco que me une mucho más nuestro común compromiso con la democracia liberal de lo que nos separan nuestros desacuerdos a propósito de políticas concretas.

Así que es a esta variopinta comunidad de camaradas y aliados a la que querría expresar mi gratitud antes de nada. Tengo la esperanza sincera de que, en un futuro no demasiado lejano, la meta que ahora nos ha unido deje de ser tan imperiosa, nuestra sensación de camaradería pueda ir disminuyendo y, con algo de suerte, podamos incluso vivir lo suficiente como para experimentar una vez más tiempos políticos tan normales que nos permitan vernos de nuevo como adversarios.

Esta amplia comunidad, que incluye tanto a personas a las que conozco bien como a personas a las que solo conozco por sus escritos, ha sido un gran apoyo para mí en estos últimos meses. Pero, al mismo tiempo, una comunidad mucho más específica de amigos, colegas y colaboradores me ha ayudado a hacer realidad este libro por innumerables vías más concretas.

Molly Atlas creyó en este proyecto cuando todavía parecía muy disparatada mi preocupación por la estabilidad de la democracia. Desde entonces, ha sido la mejor asesora, la más feroz defensora y la más incisiva crítica que se pueda desear, incluso en momentos en los que supuestamente no debía tener el teléfono tan a mano. Sinceramente, espero que sigamos haciendo planes literarios juntos incluso cuando Donald Trump haya pasado a no ser más que un recuerdo lejano y la idea de que la democracia liberal pueda estar en peligro haya vuelto a parecer tan descabellada como tiempo atrás.

El populismo es un fenómeno global. Así que, desde un principio, he estado muy interesado en que este libro contribuyera (por poco que fuera) a poner en marcha una conversación verdaderamente mundial sobre cómo resistir al avance del fenómeno. De ahí que esté especialmente agradecido a Roxane Edouard y a Sophie Baker, quienes han dedicado incansables (y admirablemente fructíferos) esfuerzos por lograr que este libro vea la luz en muchos países e idiomas.

John Kulka me ha ayudado a dar forma a este proyecto desde el primerísimo momento. Siempre que tuve algún problema para conseguir que este trabajo compaginara seriedad y accesibilidad, análisis y pasión, él estuvo ahí, a mano, con algún consejo perfectamente calibrado. Por eso sentí tanto que cambiara de trabajo y tuviera que dejar a otros las riendas de este proyecto. Aunque, eso sí, como regalo de despedida, se aseguró de que el libro siguiera contando con la sabia guía de otro extraordinario editor.

Ian Malcolm me ayudó a concebir la tercera parte de *El pueblo contra la democracia* y ha mejorado significativamente todas las demás páginas de la obra. El esfuerzo que invirtió en asegurarse de que este libro se convirtiese en la mejor versión de sí mismo fue, francamente, asombroso. Los académicos solemos agradecer a varias personas por su asesoramiento y decimos luego que cualquier defecto que pueda quedar todavía en el trabajo que

presentamos es atribuible únicamente a nosotros mismos. Pues bien, más indiscutiblemente cierto si cabe es eso cuando se trabaja con Ian, como la larga lista de distinguidos pensadores que han colaborado con él no tendrán inconveniente alguno en atestiguar.

En estos últimos meses, Harvard University Press me ha puesto en una posición bastante incómoda. Todos los autores y autoras que conozco disfrutan quejándose de las editoriales que publican sus libros. Pero siempre que amigos míos comenzaban a recitar su inevitable retahíla de quejas en ese sentido, yo los dejaba perplejos porque no podía menos que poner por las nubes a la mía. Susan Donnelly, Richard Howells, Gregory Kornbluh y Rebekah White han hecho un fenomenal trabajo difundiendo información sobre el libro y posicionándolo en las librerías. Jill Breitbarth le diseñó una impactante cubierta. Kate Brick se ha empleado a fondo en editar el libro y en lograr que saliera de imprenta a tiempo, pese al apretado calendario con el que contó para ello. Anne McGuire ha obrado milagros haciendo limpieza en el apartado bibliográfico y dando formato a las notas.

La más inspirada de las decisiones de la editorial fue incorporar a Angela Bagetta al equipo. Cuando me enteré de qué libros había ayudado a publicitar en el pasado, ya me imaginé que no tendríamos problemas para ponernos de acuerdo. Ahora que llevamos meses colaborando, me he dado cuenta de que yo mismo jamás habría sabido nada de todos aquellos libros si ella no hubiera estado capitaneando su promoción.

La mayor deuda intelectual que he contraído en esta obra es sin duda con Roberto Foa. Cuando nos pusimos a examinar algunos de los preocupantes datos de la *Encuesta mundial de valores* durante una hermosa semana estival en Montelaterone y comenzamos a hablar del artículo que se convertiría en nuestro trabajo conjunto sobre la «desconsolidación» democrática, no podíamos imaginar lo relevantes que nuestros resultados terminarían siendo, ni lo mucho que se comentarían. El capítulo 3 de este libro es poco más que un intento de reformulación definitiva de los artículos de los que hemos sido coautores. No tengo la más mínima duda de que nuestro trabajo conjunto hasta la fecha no es más que el inicio de una larga colaboración.

Tres reseñadores anónimos proporcionaron comentarios muy detallados (y diría yo que benévolos en exceso) sobre el manuscrito. Y, con ello, han contribuido considerablemente a hacer que el argumento sea más conciso y, a la vez, más completo. Si el proceso de revisión por pares fuera siempre tan útil y constructivo como ha sido en este caso, nuestras universidades serían lugares mucho más interesantes.

Monica Hersher ha sido de inconmensurable ayuda. Elaboró la mayoría de las gráficas de este libro y, en estos momentos, probablemente conozca los datos de opinión pública sobre actitudes ante la democracia mejor que nadie. También ha sido una gran interlocutora a propósito de otras partes del libro; yo sabía que si lograba que alguno de mis argumentos convenciera a una escéptica por naturaleza como ella, estaba pisando terreno firme.

A sus veintiún años de edad, Sam Koppelman es, sin lugar a dudas, el mayor talento joven para la escritura que conozco. Tuve la increíble fortuna de contar con su ayuda para toda clase de labores, desde la edición de desarrollo de los contenidos del libro hasta la búsqueda de citas literales de apoyo a diversos argumentos. Cuando escriba su primer gran libro, como inevitablemente sucederá, espero que me permita devolverle el favor.

El análisis de soluciones políticas que se expone en la tercera parte de la presente obra se benefició inmensamente de mis «debates en el sótano» con David Adler, Eleni Arzoglou, Sheri Berman, Ben Delsman, Limor Gultchin, Monica Hersher, Shashank Joshi, Sam Koppelman, Hans Kundnani, Harvey Redgrave y Chris Yiu. A ellos, y a las maravillosas personas que hicieron posibles nuestras conversaciones, les debo un profundo agradecimiento por sus aportaciones intelectuales a este proyecto, pero también por muchas otras cosas.

Dan Kenny y Jesse Shelburne me proporcionaron una ayuda investigadora muy útil para ciertas cuestiones específicas, desde la historia del control judicial de constitucionalidad en la década de 1920 hasta los detalles en materia de normativa sobre comercio internacional. Leo Kim, Teoman Kucuk, Ted Reinert, Susannah Rodrigue, Dylan Shaffer y Elena Souris aportaron también una paciente asistencia bibliográfica e investigadora.

Hace años, Jan-Werner Müller organizó un congreso sobre populismo en el Centro sobre Valores Humanos de la Universidad de Princeton y tuvo la particular ocurrencia de invitar como ponente a un estudiante de posgrado sin nombre ni reputación alguna. Gideon Rose tuvo la todavía más extraña idea de pedir a ese estudiante que convirtiera la ponencia que expuso en su taller en un artículo para la revista *Foreign Affairs*. Ambos deberían ser considerados responsables de las consecuencias no intencionadas de la generosidad que tuvieron conmigo en aquel momento.

Ni que decir tiene que Larry Diamond y Marc Plattner me han ayudado a mejorar mi reflexión sobre la desconsolidación democrática. Pero mis conversaciones con ellos, tanto en persona como por correo electrónico, han sido casi igual de importantes a la hora de dar forma a todas las demás partes del libro. Les estoy muy agradecido, tanto por su compañerismo intelectual como por haber concedido al debate sobre la desconsolidación democrática tanto espacio en *Journal of Democracy*.

Una de las cosas más valiosas que han hecho Larry y Marc ha sido abrir nuestro argumento al debate crítico con otros académicos. Aunque sigo estando en desacuerdo con Amy Alexander, Pippa Norris, Erik Voeten y Christian Welzel sobre aspectos importantes, es mucho lo que he aprendido de sus reacciones y respuestas a nuestro trabajo.

En estos últimos años, he tenido la fortuna de escribir columnas y artículos sobre democracia y populismo para un buen número de extraordinarios directores y editores en publicaciones diversas. Sewell Chan merece un agradecimiento especial por mi parte por haber defendido mis escritos desde un buen principio y por haberme enseñado tanto sobre cómo lograr que un artículo de opinión sea verdaderamente efectivo. Desde entonces, he tenido ocasión de trabajar con Carla Blumenkranz, Jane Carr, Manuel Hartung, Giles Harvey, Laura Marsh, John Palattella, Max Strasser y Elbert Ventura, entre otros muchos. Sus ideas y explicaciones están incorporadas en muchas partes de este libro, y su orientación estilística se deja ver en todas ellas. Ciertos pasajes breves de algunos de los artículos que escribí para ellos han sido reproducidos en estas páginas sin modificación alguna.

Escribí buena parte del libro cuando estaba disfrutando de una beca en la Transatlantic Academy del German Marshall Fund. Desde el punto de vista de la actualidad política, el año que pasé junto a Frédéric Bozo, Stefan Fröhlich, Wade Jacoby, Harold James, Michael Kimmage, Hans Kundnani, Ted Reinert, Mary Ellise Sarotte y Heidi Tworek no podría haber sido más deprimente; desde el punto de vista personal, sin embargo, no podría haber sido más fructífero y agradable. Una cosa (solo una) me atrevería a decir en nombre de todo ese grupo de personas: nuestro año de beca no podría haber sido tan placentero ni tan productivo sin la amabilidad y el liderazgo demostrados por Steve Szabo.

Una de las ventajas de pasar más tiempo en Washington fue que, tras muchos años de afiliación con el *think tank* New America, por fin pude tomar parte más activa en su maravillosa comunidad de miembros. El programa sobre reforma política, en particular, realiza una labor extraordinaria; mi enfoque sobre cómo reformar las instituciones políticas en Estados Unidos está ahora muy influido por Mark Schmitt y Lee Drutman; también aprendí mucho de Hollie Gilman, Heather Hurlburt y Chayenne Polimédio. Fuzz Hogan ha sido increíblemente generoso conmigo con todo el tiempo, el asesoramiento y los recursos que me ha dedicado a lo largo de los años. Peter Bergen y Anne-Marie Slaughter asumieron el riesgo de ayudarme desde muy al principio y han seguido procurándome un derroche sistemático de generosidad desde entonces.

La revista *Slate* ha sido este último año mi particular casa editorial y estoy enormemente agradecido a Jacob Weisberg y a Julia Turner por haberme cedido tan fantástica plataforma para la expresión de mis ideas. John Swansburg ha sido un maravilloso aliado y coconspirador en la concepción de mi columna semanal, en la que he podido experimentar con muchas de las ideas que llenan ahora las páginas de este libro; espero seguir colaborando con él durante muchos años. En los últimos meses, Josh Keating ha sido un editor incisivo, imaginativo y asombrosamente paciente (como lo fue Allison Benedikt durante el permiso por paternidad de Josh).

En noviembre de 2016, planteé informalmente a Fuzz Hogan la posibilidad de iniciar un *podcast* dedicado a «las ideas, las políticas y las estrategias que pueden derrotar a los populistas autoritarios como Donald

Trump». Él supo convertir aquella idea incipiente en realidad mucho mejor y mucho antes de lo que jamás habría imaginado. Desde entonces, Steve Lickteig y June Thomas han llevado a cabo una gran labor trasladando regularmente *The Good Fight* (que así se llama el *podcast*) a la plataforma de *Slate*. Pero el hecho mismo de que el *podcast* haya encontrado rápidamente una audiencia fiel —y haya constituido una vía divertida y productiva de poner a prueba y cuestionar las ideas que figuran en este libro— es atribuible en gran medida a la extraordinaria aptitud, y más extraordinarios ánimos si cabe, de John Williams.

Este libro no existiría si yo no hubiera contado con el asesoramiento de Eric Beerbohm, Sheri Berman, Grzegorz Ekiert, Tom Meaney, K. Sabeel Rahman, Nancy Rosenblum, Michael Sandel, Richard Tuck y Dan Ziblatt. Pero han sido muchas más las personas con las que he discutido los temas de este libro a lo largo de los años, personas que han añadido ideas valiosas o que han aportado incisivos comentarios sobre ciertas partes de la obra. Entre ellas, están Liaquat Ahmad, Jonathan Bruno, Aleksandra Dier, Martin Eiermann, Johann Frick, Art Goldhammer, Sam Goldman, Antara Haldar, Peter Hall, Alia Hassan, Michael Ignatieff, Dan Kehleman, Madhav Khosla, Alex Lee, Steve Levitsky, Michael Lind, Pratap Mehta, Guillermo del Pinal, Rachel Pritzker, Jed Purdy, Emma Saunders-Hastings, William Seward, Dan Shore, Ganesh Sitaraman, Dan Shore, Justin E. H. Smith, Dan Stid y Don Tontiplaphol. Es inevitable que algunas no aparezcan mencionadas en esta lista, y a ellas les pido mis más sinceras disculpas.

Agradezco de todo corazón a Thierry Artzner, Eleni Arzoglou, Alex Drukier, Helena Hessel, Sam Holmes, Carly Knight, Tom Meaney, Nat Schmookler, Carl Schoonover, Shira Telushkin y William Seward por haberme mantenido por la senda de la cordura y por haberse asegurado de que no me faltara diversión, un agradecimiento que también tengo, por supuesto, para mi madre, Ala, quien también me ha proporcionado una inmensa ayuda con la edición en alemán.

Tal como comento en la «Conclusión», tengo un sentimiento ambivalente hacia el estoicismo. Puede ayudarnos a conseguir la determinación necesaria para hacer lo correcto en este peligroso momento político en el que estamos. Pero su exhortación a la indiferencia ante las cosas

y las personas no haría más que garantizarnos una vida empobrecida. Nadie me ha enseñado mejor esa lección que Hanqing Ye. No podría haber escrito este libro sin la fuerza que ella me da. De no haberla conocido, no habría empezado siquiera a entender lo rica que puede llegar a ser la vida cuando decides entrelazar tu felicidad con la de la persona a la que amas.

CRÉDITOS DE LAS FIGURAS

Porcentaje de voto de los partidos antisistema en la Unión Europea (UE15).*Fuente*: índice Timbro de populismo autoritario, 2017; <https://timbro.se/ideologi/timbro-authoritarian-populism-index-2017-2>. Andreas Johansson Heinö, Giovanni Caccavello y Cecilia Sandell, Timbro Authoritarian Populism Index 2017, Timbro, Estocolmo, y Epicenter (Centro de Información Política Europea), Bruselas.

Coste de ganar unas elecciones a la Cámara de Representantes; coste de ganar unas elecciones al Senado.*Fuente*: datos sobre las campañas electorales federales procesados por Campaign Finance Institute, <www.cfinst.org/data/historicalstats.aspx>. Análisis de los datos de la Comisión Electoral Federal (FEC) a cargo del Campaign Finance Institute (CFI).

Gastos en cabildeo *(lobbying)* en Estados Unidos, 1998-2016. *Fuente*: análisis de datos de la Oficina de Documentación Pública (OPR) del Senado federal a cargo del Center for Responsive Politics (CRP) (CC BY-NC-SA 3.0), <www.opensecrets.org/lobby>.

Encuestados estadounidenses que afirman tener interés por la política, por década de nacimiento.*Fuente*: *Encuesta mundial de valores (EMV)*, sexta oleada (2010-2014), World Values Survey Association, <www.worldvaluessurvey.org>.

Índices de aprobación de los presidentes franceses. Porcentaje de electores franceses que tienen «plena» o «bastante» fe en que el presidente «resolverá los problemas a los que Francia se enfrenta actualmente», 1995-2017.

Fuente: barómetro Kantar TNS (antes TNS SoFres) y *Magazine* de *Le Figaro*, <www.tns-sofres.com/cotesde-popularites>.

Porcentaje de encuestados estadounidenses que opinan que vivir en una democracia es «esencial», por década de nacimiento. Se considera que se ha respondido que vivir en democracia es «esencial» cuando el encuestado o la encuestada puntúa la importancia de la democracia con un diez en una escala del uno (ninguna importancia) al diez (importancia total). *Fuente*: *Encuesta mundial de valores (EMV)*, sexta oleada (2010-2014), World Values Survey Association, <www.worldvaluessurvey.org>.

Esta figura se ha elaborado con datos de encuesta de países clasificados como «libres» por Freedom House y como de «renta alta» por el Banco Mundial. Incluye todos los países de más de un millón de habitantes para los que existen datos sobre esta cuestión. A los encuestados se les preguntó: «¿Cuánta importancia tiene para usted vivir en un país que está gobernado democráticamente?». Se considera que se ha respondido que vivir en democracia es «esencial» cuando el encuestado o la encuestada puntúa la importancia de la democracia con un diez en una escala del uno (ninguna importancia) al diez (importancia total). *Fuente*: *Encuesta mundial de valores (EMV)*, quinta oleada (2005-2009) y sexta oleada (2010-2014), World Values Survey Association, <www.worldvaluessurvey.org>.

Esta figura se ha elaborado con datos de encuestas de países de más de un millón de habitantes (y para los que existían tales datos sobre esta cuestión) clasificados como «libres» por Freedom House y como de «renta alta» por el Banco Mundial. Muestra el porcentaje de encuestados por país que consideran que «tener un sistema político democrático» es una forma «mala» o «muy mala» de «gobernar este país». Se ha omitido a Uruguay de esta gráfica porque ningún encuestado nacido en la década de 1930 opinó allí que la democracia era una forma «mala» o «muy mala» de gobernar el país. *Fuentes*: *Encuesta mundial de valores (EMV)*, quinta oleada (2005-2009) y sexta oleada (2010-2014), World Values Survey Association, <www.worldvaluessurvey.org>; y *European Values Study (EVS)*, <www.europeanvaluesstudy.eu/page/surveys.html>.

Apoyo a un gobierno militar en Estados Unidos. Variación porcentual, por año, en la cantidad de encuestados a escala mundial que opinan que «que gobiernen los militares» es un sistema político «bueno» o «muy bueno». *Fuente*: *Encuesta mundial de valores (EMV)*, tercera oleada (1995-1998), cuarta oleada (1999-2004), quinta oleada (2005-2009) y sexta oleada (2010-2014), World Values Survey Association, <www.worldvaluessurvey.org>.

Apoyo a un gobierno militar en países de todo el mundo. Esta figura se ha elaborado con datos de encuesta de países de más de un millón de habitantes clasificados como «libres» por Freedom House y de «renta alta» por el Banco Mundial para los que disponemos de datos de series temporales de la *EMV* o del *EVS* sobre esta cuestión. La tasa de variación está calculada por año para todo el periodo transcurrido entre la primera encuesta y la última disponible. Para algunos países, la primera encuesta en la que se formuló esa pregunta fue la tercera oleada de la *EMV* (1995-1998), mientras que para otros fue la tercera oleada del *EVS* (1999). Asimismo, para algunos países, la última encuesta en la que se incluyó esa pregunta fue la sexta oleada de la *EMV* (2010-2014), mientras que para otros ha sido la cuarta oleada del *EVS* (2008-2010). *Fuentes*: *Encuesta mundial de valores (EMV)*, tercera oleada (1995-1998), cuarta oleada (1999-2004), quinta oleada (2005-2009) y sexta oleada (2010-2014), World Values Survey Association; y *European Values Study (EVS)*, tercera oleada (1999) ZA3811 y cuarta oleada (2008) ZA4800, GESIS Data Archive, Colonia (Alemania).

Apoyo en diversos países a un gobierno liderado por un «hombre fuerte». Esta figura se ha elaborado con datos de encuesta de países de más de un millón de habitantes clasificados como «libres» por Freedom House y de «renta alta» por el Banco Mundial para los que disponemos de datos de series temporales de la *EMV* o del *EVS* sobre esta cuestión. La tasa de variación está calculada por año para todo el periodo transcurrido entre la primera encuesta y la última disponible. Para algunos países, la primera encuesta en la que se formuló esa pregunta fue la tercera oleada de la *EMV* (1995-1998), mientras que para otros fue la tercera oleada del *EVS* (1999). Asimismo, para algunos países la última encuesta en la que se incluyó esa pregunta fue la sexta oleada

de la *EMV* (2010-2014), mientras que para otros ha sido la cuarta oleada del *EVS* (2008-2010). *Fuentes*: *Encuesta mundial de valores (EMV)*, tercera oleada (1995-1998), cuarta oleada (1999-2004), quinta oleada (2005-2009) y sexta oleada (2010-2014), World Values Survey Association; y *European Values Study (EVS)*, tercera oleada (1999) ZA3811 y cuarta oleada (2008) ZA4800, GESIS Data Archive, Colonia (Alemania). Algunos datos de encuestas más recientes, pero aún no publicadas, realizadas en el Reino Unido, Francia y Alemania sobre la cuestión de los líderes «hombres fuertes» han sido facilitados a petición del autor.

Radicalismo político entre los jóvenes. Esta figura se ha elaborado con datos de encuesta de países de más de un millón de habitantes clasificados como «libres» por Freedom House y de «renta alta» por el Banco Mundial para los que disponemos de datos de series temporales sobre esta cuestión. La variación porcentual para cada país es la diferencia entre el número de participantes que en cada uno de ellos se ubicaron a sí mismos en la posición 1 (de extrema izquierda) o 10 (de extrema derecha) del espectro político en la segunda oleada de la *EMV* o del *EVS*, y los que hicieron lo propio en la encuesta más reciente. Dado que los países participantes en la *EMV* y el *EVS* varían a lo largo del tiempo, los datos de la encuesta inicial se corresponden con fechas que pueden ir desde 1989 hasta 1996, mientras que los de la última encuesta están tomados de encuestas realizadas en algún momento del periodo 2006-2012. *Fuentes*: *Encuesta mundial de valores (EMV)*, segunda oleada (1990-1994), quinta oleada (2005-2009) y sexta oleada (2010-2014), World Values Survey Association, <www.worldvaluessurvey.org>; y *European Values Study (EVS)*, segunda oleada (1990) ZA4460, tercera oleada (1999) ZA3811 y cuarta oleada (2008) ZA4800, GESIS Data Archive, Colonia (Alemania).

Porcentaje de hijos cuya renta familiar a los treinta años es superior que la renta familiar de sus padres cuando tenían la misma edad, por década de nacimiento, en Estados Unidos. *Fuente*: Raj Chetty, David Grusky, Maximilian Hell, Nathaniel Hendren, Robert Manduca y Jimmy Narang, «The Fading American Dream: Trends in Absolute Income Mobility since

1940», en *The Equality of Opportunity Project*, diciembre de 2016, <www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/abs_mobility_summary.pdf>.

Población estadounidense nacida fuera de Estados Unidos. *Fuente*: US Census Bureau, «Historical Census Statistics on the Foreign-Born Population of the United States: 1850-2000», <www.census.gov/population/www/documentation/twps0081/twps0081.html> así como las tablas elaboradas por el Pew Research Center a partir de la *American Community Survey (IPUMS)* de US Census Bureau e incluidas en Gustavo López y Kristen Bialik, «Key Findings about U.S. Immigrants», Pew Research Center, Washington D. C., 3 de mayo de 2017, <www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/03/key-findings-about-u-s-immigrants>.

Notas

Introducción. La pérdida de nuestras ilusiones

1. Margaret Talev y Sahil Kapur, «Trump Vows Election-Day Suspense without Seeking Voters He Needs to Win», en *Bloomberg*, 20 de octubre de 2016, <www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-20/trump-vows-election-day-suspense-without-seeking-voters-he-needs-to-win>; Associated Press, «Trump to Clinton:"You'd Be in Jail"», vídeo en la página web de *The New York Times*, 10 de octubre de 2016, <www.nytimes.com/video/us/politics/100000004701741/trump-to-clinton-youd-be-in-jail.html>; Yochi Dreazen, «Trump's Love for Brutal Leaders Like the Philippines' Rodrigo Duterte, Explained», en *Vox*, 1 de mayo de 2017, <www.vox.com/world/2017/5/1/15502610/trump-philippines-rodrigo-duterte-obama-putin-erdogan-dictators>.

2. Francis Fukuyama, «The End of History?», en *National Interest*, 16, verano de 1989, págs. 3-18, cita tomada de la pág. 4; Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, Nueva York, Free Press, 1992 (trad. cast.: *El fin de la historia y el último hombre*, Barcelona, Planeta, 1992).

3. Entre las diversas respuestas iniciales a Fukuyama, véanse, por ejemplo, las de Harvey Mansfield, E. O. Wilson, Gertrude Himmelfarb, Robin Fox, Robert J. Samuelson y Joseph S. Nye, «Responses to Fukuyama», en *National Interest*, 56, verano de 1989, págs. 34-44.

4. Adam Przeworski, Limongi Neto y Fernando Papaterra, «Modernization: Theories and Facts», en *World Politics*, 49, 2, 1997, págs. 155-183, pág. 165. La cifra que dan Przeworski, Neto y Papaterra es de 6.055 dólares estadounidenses —en paridad de poder adquisitivo— en 1985. Ajustados a una tasa de inflación media del 2, 62%, equivalen a unos 13.503 dólares estadounidenses en 2016.

5. *Ibid*, págs. 170-171.

6. Véase Andreas Schedler, «What Is Democratic Consolidation?», en *Journal of Democracy*, 9, 2, 1989, págs. 91-107; Larry Jay Diamond, «Toward Democratic Consolidation», en *Journal of Democracy*, 5, 3, 1994, págs. 4-17; y Scott Mainwaring, «Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative Issues», documento de trabajo 130, Instituto Helen Kellogg de Estudios Internacionales, Universidad de Notre Dame, noviembre de 1989.

7. Juan Linz y Alfred Stepan, «Toward Consolidated Democracies», en *Journal of Democracy*, 7, 2, 1996, págs. 14-33.

8. Roberto Stefan Foa y Yascha Mounk, «The Democratic Disconnect», en *Journal of Democracy*, 27, 3, 2016, págs. 5-17; Foa y Mounk, «The Signs of Deconsolidation», en *Journal of Democracy*, 28, 1, 2017, págs. 5-15.

9. Foa y Mounk, «Democratic Disconnect», art. cit.

10. Véanse, por ejemplo, «Trump Attacks China in Twitter Outburst», en *BBC News*, 5 de diciembre de 2016, <www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-38167022>;Katie Reilly, «Here Are All the Times Donald Trump Insulted Mexico», en *Time*, 31 de agosto de 2016, <http://time.com/4473972/donald-trump-mexico-meeting-insult>; Adam Liptak y Peter Baker, «Trump Promotes Original "Travel Ban", Eroding His Legal Case», en *The New York Times*, 5 de junio de 2017, <www.nytimes.com/2017/06/05/us/politics/trump-travel-ban.html>.

11. A propósito de Polonia, véanse Joanna Fomina y Jacek Kucharczyk, «Populism and Protest in Poland», en *Journal of Democracy*, 27, 4, 2016, págs. 58-68; Jacques Rupnik, «Surging Illiberalism in the East», en *Journal of Democracy*, 27, 4, 2016, págs.77-87;y Bojan Bugaric y Tom Ginsburg, «The Assault on Postcommunist Courts», en *Journal of Democracy*, 27, 3, 2016, págs. 69-82. Sobre Turquía, véanse Berk Esen y Sebnem Gumuscu, «Turkey: How the Coup Failed», en *Journal of Democracy*, 28, 1, 2017, págs. 59-73; Dexter Filkins, «Erdogan's March to Dictatorship in Turkey», en *New Yorker*, 31 de marzo de 2016; y Soner Cagaptay, *The New Sultan: Erdogan and the Crisis of Modern Turkey*, Londres, I. B. Tauris, 2017.

12. Andrew Bennett, «Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages», en Detlef F. Sprinz y Yael Wolinsky-Nahmias (comps.), *Models*, *Numbers*, *and Cases: Methods for Studying International Relations*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2004, pág. 29.

13. Como ya argumentaron György Lengyel y Gabriella Ilonszki en 2010, «la mayoría de los observadores políticos locales y extranjeros llevaban muchos años considerando a Hungría como el más destacado ejemplo de transición fluida desde el socialismo de Estado hacia la democracia, la democracia más consolidada de la Europa central y del Este». György Lengyel y Gabriella Ilonszki, «Hungary: Between Consolidated and Simulated Democracy», en Heinrich Best y John Higley (comps.), *Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives*, Leiden, Brill, 2010, pág. 150. Véanse también Attila Ágh, «Early Democratic Consolidation in Hungary and the Europeanisation of the Hungarian Polity», en Geoffrey Pridham y Attila Ágh (comps.), *Prospects for Democratic Consolidation in East-Central Europe*, Mánchester, Manchester University Press, 2001, pág. 167; y Miklós Sükösd, «Democratic Transformation and the Mass Media in Hungary: From Stalinism to Democratic Consolidation», en Richard Gunther y Anthony Mughan (comps.), *Democracy and the Media: A Comparative Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, págs. 122-164.

14. Marton Dunai y Krisztina Than, «Hungary’s Fidesz Wins Historic Two-Thirds Mandate», Reuters, 25 de abril de 2010. Véase también Attila Ágh, «Early Consolidation and Performance Crisis: The Majoritarian-Consensus Democracy Debate in Hungary», en *West European Politics*, 24, 3, 2001, págs. 89-112.

15. Véanse János Kornai, «Hungary's U-turn: Retreating from Democracy», en *Journal of Democracy*, 26, 3, 2015, págs. 34-48; y Miklós Bánkuti, Gábor Halmai y Kim Lane Scheppele, «Disabling the Constitution», en *Journal of Democracy*, 23, 3, 2012, págs. 138-146. Veánse también Jan Puhl, «A Whiff of Corruption in Orbán's Hungary», en *Spiegel Online*, 17 de enero de 2017; Keno Verseck, «Amendment Alarms Opposition: Orbán Cements His Power with New Voting Law», en *Spiegel Online*, 30 de octubre de 2012; Lili Bayer, «Hungarian Law Targets Soros, Foreign-Backed NGOs», en *Politico*, 9 de marzo de 2017; Andrew MacDowall, «US-Linked Top University Fears New Rules Will Force It Out of Hungary», en *The Guardian*, 29 de marzo de 2017.

16. Csaba Toth, «Full Text of Viktor Orbán’s Speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 July 2014», en *Budapest Beacon*, 29 de julio de 2014, <http://budapestbeacon.com/public-policy/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnadtusnadfurdo-of-26-july-2014/10592>.

17. Carta al director firmada por Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Massimo D'Alema, *et al*., «In the Final Hour, a Plea for Economic Sanity and Humanity», en *Financial Times*, 4 de junio de 2015; carta al director firmada por Joseph Stiglitz, *et al*., «Europe Will Benefit from Greece Being Given a Fresh Start», en *Financial Times*, 22 de enero de 2015. Véase también J. Gordon, *et al*., *Greece: Ex-Post Evaluation of Exceptional Acces under the 2010 Stand-By Arrangement*, FMI, informe del país 13/156, Fondo Monetario Internacional, Washington (D. C.), junio de 2013, <www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf>.

18. Lucy Rodgers y Nassos Stylianou, «How Bad Are Things for the People of Greece?», en *BBC News*, 16 de julio de 2015.

19. Liz Alderman, «Tsipras Declares Creditors' Debt Proposal for Greece "Absurd"», en *The New York Times*, 5 de junio de 2015. Véanse también Stiglitz *et al*., «In the Final Hours», art. cit., y Gordon, *et al*., *Greece*, *op. cit*.

20. Helen Nianias, «Alexis Tsipras of Syriza Is Far from Greek Orthodox: The Communist “Harry Potter”Who Could Implode the Eurozone», en *The Independent*, 21 de enero de 2015; C. J. Polychroniou, «Syriza’s Lies and Empty Promises», Al Jazeera, 6 de julio de 2015; Andreas Rinke, «Tsipras Has Caused a Disaster, Says German Conservative Lawmaker», Reuters, 5 de julio de 2015; «Bumbling toward Disaster: Greece’s Leaders Look a Poor Match to the Challenges Facing the Country», en *The Economist*, 19 de marzo de 2015.

21. Renee Maltezou y Lefteris Papadimas, «Greeks Defy Europe with Overwhelming Referendum “No”», Reuters, 5 de julio de 2015.

22. Peter Spiegel, «A Comparison of Greece's Reform List and Creditors' Proposals», en *Financial Times*, 10 de julio de 2015.

23. Suzanne Daley y Liz Alderman, «Premier of Greece, Alexis Tsipras, Accepts Creditors' Austerity Deal», en *The New York Times*, 13 de julio de 2015.

24. Sin embargo, como se explica al final del capítulo 2, la realidad fue algo más compleja de lo que este breve resumen puede dar a entender. Gran parte del motivo por el que otros dirigentes europeos eran reacios a ofrecer un mejor trato a Grecia estribaba en que eran muy conscientes de la fuerte oposición de sus respectivos electorados a la concesión de un paquete de rescate más generoso. Con aquella imposición de su voluntad sobre la del pueblo griego, estaban en buena medida siguiendo la voluntad de sus propias ciudadanías, por así decirlo.

25. Véanse T. C. W. Blanning, «Frederick the Great and Enlightened Absolutism», en H. M. Scott (comp.), *Enlightened Absolutism: Reform and Reformers in Late Eighteenth Century Europe*, Londres, Macmillan, 1990; Jonathan I. Israel, «Libertas Philosophandi in the Eighteenth Century: Radical Enlightenment versus Moderate Enlightenment (1750-1776)», en Elizabeth Powers (comp.), *Freedom of Speech*, Lewisburg, Bucknell University Press, 2011.

26. El ensayo clásico sobre los estrictos límites de la libertad individual en el mundo antiguo sigue siendo el de Benjamin Constant, «The Liberty of the Ancients Compared with That of the Moderns», en Biancamaria Fontana (comp.), *Political Writings*, Nueva York, Cambridge University Press, 1988, págs. 309-328 (existe una traducción castellana del ensayo de Constant: «Sobre la libertad en los antiguos y en los modernos», en *Sobre el espíritu de conquista: sobre la libertad en los antiguos y en los modernos*, Madrid, Tecnos, 2002).

27. Bertrand Russell, *The Problems of Philosoph*y, Oxford, Oxford University Press, 1912, pág. 63 (trad. cast.: *Los problemas de la filosofía*, Barcelona, Labor, 1978).

28. US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, *100 Years of U.S. Consumer Spending: Data for the Nation, New York City, and Boston*, informe 991, mayo de 2006, Washington (D. C.), BLS (Bureau of Labor Statistics), 2006, <www.bls.gov/opub/uscs/report991.pdf>; US Census Bureau, «Income and Poverty in the United States: 2015», Table A-1: Households by Total Money Income, Race, and Hispanic Origin of Householder: 1967 to 2015 (Tabla A-1: Hogares por ingresos monetarios totales, raza y origen hispano del propietario, 1967-2015), <www.census.gov/data/tables/2016/demo/income-poverty/p60-256.html> (consultado el 12 de julio de 2017).

29. Para un relato detallado de las causas económicas del populismo, véase el capítulo 5.

30. Para un relato detallado de las causas culturales del populismo, véase el capítulo 6.

31. Para un relato detallado de las causas tecnológicas del populismo, véase el capítulo 4.

32. Para un relato detallado de cómo combatir las causas económicas del populismo, véase el capítulo 8.

33. Para un relato detallado de cómo construir un patriotismo inclusivo, véase el capítulo 7.

34. Para un relato detallado de cómo responder al auge de las redes sociales y revitalizar la educación cívica, véase el capítulo 9.

35. Yascha Mounk, *The Age of Responsibility: Luck, Choice, and the Welfare State*, Cambridge, Harvard University Press, 2017.

Parte I. La crisis de la democracia liberal

1. Tony Judt, *The Memory Chalet*, Londres, Penguin, 2010 (trad. cast.: *El refugio de la memoria*, Madrid, Taurus, 2011).

2. Esta manera concreta de formular dicha definición está tomada de Steven Levitsky y Lucan Way, *Competitive Authoritarianism*, Nueva York, Cambridge University Press, 2010, págs. 5-6.

3. Este problema, que nace de un excesivo énfasis en el *mecanismo* de las elecciones, en detrimento del *resultado* en forma de gobierno del pueblo que ese mecanismo supuestamente debe garantizar, también afecta a definiciones que son más minimalistas aún. Joseph Schumpeter, por ejemplo, definía la democracia como todo sistema político en el que los cargos políticos más poderosos son decididos «por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo». Joseph Alois Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Londres, Routledge, 2004 [1942], pág. 269 (trad. cast.: *Capitalismo, socialismo y democracia*, 2 vols., Barcelona, Folio, 1996).

4. Contemplada desde este punto de vista (y desde cualquier punto de vista sensato, en realidad), la democracia es una escala. Un conjunto de instituciones vinculantes es democrático *en la medida* en que realmente sirva para traducir las opiniones populares en decisiones de política pública. Nótese también que, aunque no menciono explícitamente en esta definición el requisito de unas elecciones «libres y justas», este está implícito en ella: siendo realistas, todo sistema que traduzca de manera significativamente eficaz las opiniones populares en unas políticas públicas concretas debe tomar en consideración la celebración regular de elecciones razonablemente libres y justas.

1. Democracia sin derechos

1. Anthony Oberschall, «Opportunities and Framing in the Eastern European Revolts of 1989», en Doug McAdam, John D. McCarthy, y Mayer N. Zald (comps.), *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, Nueva York, Cambridge University Press, 1996, pág. 93 (trad. cast.: «Oportunidades y creación de marcos en las revueltas de 1989 en el este de Europa», en *Movimientos sociales: Perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*, Madrid, Istmo, 1999, págs. 143-181); Andreas Hadjar, «Non-violent Political Protest in East Germany in the 1980s: Protestant Church, Opposition Groups and the People», en *German Politics*, 12, 3, 2003, págs. 107-128; Andrew Curry, «“We Are the People”: A Peaceful Revolution in Leipzig», en *Spiegel Online*, 9 de octubre de 2009.

2. H. Vorländer, M. Herold, y S. Schäller, *Pegida: Entwicklung, Zusammensetzung und Deutung einer Empörungsbewegung*, Wiesbaden, Springer-Verlag, 2015; J. M. Dostal, «The Pegida Movement and German Political Culture: Is Right-Wing Populism Here to Stay?», en *Political Quarterly*, 86, 4, 2015, págs. 523-531; Naomi Conrad, «Leipzig, a City Divided by Anti-Islamist Group Pegida», en *Deutsche Welle*, 11 de enero de 2016.

3. Comunicación personal.

4. Comunicación personal.

5. Para un ejemplo más detallado sobre cuál fue mi labor informativa sobre la crisis de los refugiados, véase Yascha Mounk, «Echt Deutsch: How the Refugee Crisis Is Changing a Nation's Identity», en *Harper's*, abril de 2017.

6. Sobre la definición de *populismo* y la importancia que tiene la pretensión de los populistas de ser quienes hablan verdaderamente en nombre del pueblo, véanse Cas Mudde, «The Populist Zeitgeist», en *Government and Opposition*, 39, 4, 2004, págs. 541-563; Cas Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; Jan-Werner Müller, *What Is Populism?*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2016 (trad. cast.: ¿Qué es el populismo?, Ciudad de México, Grano de Sal, 2017); John B. Judis, *The Populist Explosion: How the Great Recession Transformed American and European Politics*, Nueva York, Columbia Global Reports, 2016; además de Yascha Mounk, «Pitchfork Politics: The Populist Threat to Liberal Democracy», en *Foreign Affairs*, 93, 2014, págs. 27-36; y Yascha Mounk, «European Disunion: What the Rise of Populist Movements Means for Democracy», en *New Republic*, 248, 8-9, 2017, págs. 58-63.

7. Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, «Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction», en *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*, Nueva York, Free Press, 1967, págs. 1-64 (trad. cast.: «Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales», en Albert Batlle [comp.], *Diez textos básicos de ciencia política*, Barcelona, Ariel, 2.ª ed., 2001, págs. 231-273).

8. Peter Mair, *Party System Change: Approaches and Interpretations,* Oxford, Oxford University Press, 1997.

9. J. E. Lane y P. Pennings (comps.), *Comparing Party System Change*, Londres, Routledge, 2003; y R. J. Dalton y M. P. Wattenberg (comps.), *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*, Oxford, Oxford University Press, 2002.

10. Sobre el ascenso y el ejercicio de gobierno de Silvio Berlusconi, véase Alexander Stille, *The Sack of Rome: Media + Money + Celebrity = Power = Silvio Berlusconi*, Nueva York, Penguin, 2006 (trad. cast.: *El saqueo de Roma: de cómo un bonito país con un pasado glorioso y una cultura deslumbrante fue sometido por un individuo llamado Silvio Berlusconi*, Barcelona, Papel de Liar, 2010). Sobre el derrumbe del sistema de partidos de posguerra, véanse L. Morlino, «Crisis of Parties and Change of Party System in Italy», en *Party Politics*, 2, 1, 1996, págs. 5-30; y L. Bardi, «Anti-party Sentiment and Party System Change in Italy», en *European Journal of Political Research*, 29, 3, 1996, págs. 345-363.

11. La Syriza de Tsipras obtuvo el 26, 3% de los sufragios y pudo formar gobierno con la ayuda de un partido derechista populista, Griegos Independientes (ANEL). Véase Yascha Mounk, «The Trouble with Europe’s Grand Coalitions», en *New Yorker*, 27 de diciembre de 2014, <www.newyorker.com/news/news-desk/trouble-europes-grand-coalitions>. Véanse también Yannis Stavrakakis y Giorgos Katsambekis, «Left-wing Populism in the European Periphery: The Case of Syriza», en *Journal of Political Ideologies*, 19, 2, 2014, págs. 119-142; y Paris Aslanidis y Cristóbal Rovira Kaltwasser, «Dealing with Populists in Government: The Syriza-ANEL Coalition in Greece», en *Democratization*, 23, 6, 2016, págs. 1077-1091.

12. Sam Jones, «Spanish Election: Conservatives Win but Fall Short of Majority — As It Happened», en *The Guardian*, 20 de diciembre de 2015; Giles Tremlett, «The Podemos Revolution: How a Small Group of Radical Academics Changed European Politics», en *The Guardian*, 31 de marzo de 2015.

13. Jacopo Barigazzi, «Beppe Grillo's 5Star Movement Hits Record High: Poll», en *Politico*, 21 de marzo de 2017. Véanse datos de los sondeos más recientes en Italia en <https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_next_Italian_general_election> (consultado el 1 de octubre de 2017). Sobre la naturaleza del Movimiento 5 Estrellas, véase Gianluca Passarelli y Dario Tuorto, «The Five Star Movement: Purely a Matter of Protest? The Rise of a New Party between Political Discontent and Reasoned Voting», en *Party Politics*, 2016.

14. Jon Sharman, «Anti-immigrant Party Takes First Place in Sweden, Poll Shows: Its Support Is at Nearly Double the Level during 2014 General Election», en *The Independent*, 25 de marzo de 2017. Sobre la naturaleza de los Demócratas de Suecia y los motivos de su auge, véase Jens Rydgren y Sara van der Meiden, «Sweden, Now a Country like All the Others? The Radical Right and the End of Swedish Exceptionalism», documento de trabajo 25, Departamento de Sociología, Universidad de Estocolmo, junio de 2016.

15. Gregor Aisch, Matthew Bloch, K. K. Rebecca Lai y Benoît Morenne, «How France Voted», en *The New York Times*, 7 de mayo de 2017. Sobre la naturaleza cambiante del Frente Nacional bajo el liderazgo de Marine Le Pen, véanse Daniel Stockemer y Mauro Barisione, «The “New” Discourse of the Front National under Marine Le Pen: A Slight Change with a Big Impact», en *European Journal of Communication*, 32, 2, 2017, págs. 100-115; y Francesca Scrinzi, «A “New” National Front? Gender, Religion, Secularism and the French Populist Radical Right», en M. Köttig, R. Bitzan y A. Petö (comps.), *Gender and Far Right Politics in Europe*, Cham, Springer International Publishing, 2017, págs. 127-140.

16. Véase un índice diferente, que muestra un crecimiento más significativo aún del voto antisistema durante los últimos cincuenta años que el indicado por la cifra aquí citada, en Pippa Norris y Ronald Inglehart, «Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash», documento de trabajo RWP16-026, Harvard Kennedy School, 29 de julio de 2016, figura 4 (puede consultarse en <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2818659>).

17. Astra Taylor, «The Anti-democratic Urge», en *The New Republic*, 18 de agosto de 2016, <https://newrepublic.com/article/135757/anti-democratic-urge>.

18. Frank Furedi, «Populism: A Defence», en *Spiked Review*, noviembre de 2016, <www.spiked-online.com/spiked-review/article/populism-a-defence/19042#.WN8JlaOZP-Y>.

19. Ivan Krastev, comentario de elogio en la contracubierta de Müller, *What Is Populism?, op. cit*.

20. El economista Max Roser ha llevado a cabo una excelente labor de demostración de las mejoras significativas según estas se pueden observar en una amplia serie de indicadores globales. Véase Max Roser, «The Short History of Global Living Conditions and Why It Matters that We Know It», en Our World in Data (sitio web), <https://ourworldindataorg/a-history-of-global-livingconditions-in-5-charts>. Véase también Christopher Fariss, «Respect for Human Rights Has Improved over Time: Modeling the Changing Standard of Accountablity», en *American Political Science Review*, 108, 2, 2013, págs. 297-318.

21. Véanse Thomas Piketty y Gabriel Zucman, «Capital Is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries 1700-2010», en *Quarterly Journal of Economics*, 129, 3, 2014, págs. 1255-1310; Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, «Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data», en *Quarterly Journal of Economics*, 131, 2, 2016, págs. 519-578; Branko Milanovic, *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*, Cambridge, Harvard University Press, 2016; y Lawrence H. Summers, «US Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound», en *Business Economics*, 49, 2, 2014, págs. 65-73.

22. Eliana Dockterman, «NYC Mayor to Skip Hillary Clinton Launch Event», en *Time*, 10 de junio de 2015, <http://time.com/3916983/bill-de-blasio-hillaryclinton-campaign-launch-nyc>.

23. Kevin Williamson, «What Does Hillary Want?», en *National Review*, 21 de julio de 2016, <www.nationalreview.com/article/438170/hillary-clinton-what-does-she-want>.

24. Véase Hillary Clinton, «Hillary’s Vision for America», The Office of Hillary Rodham Clinton (sitio web), <www.hillaryclinton.com/issues>.

25. Sobre el asunto de la Universidad Trump, véase Steve Eder, «Donald Trump Agrees to Pay $25 Million in Trump University Settlement», en *The New York Times*, 18 de noviembre de 2016; sobre el impago a sus empleados, véase Harper Neidig, «Report: Trump Has Refused to Pay Hundreds of Workers», en *Hill*, 9 de junio de 2016; también Alexandra Berzon, «Donald Trump's Business Plan Left a Trail of Unpaid Bills», en *The Wall Street Journal*, 9 de junio de 2016.

26. Sobre el muro en la frontera, véase Donald Kerwin y Robert Warren, «The 2, 000 Mile Wall in Search of a Purpose: Since 2007 Visa Overstays Have Outnumbered Undocumented Border Crossers by a Half Million», Center for Migration Studies, 2017, <http://cmsny.org/publications/jmhs-visa-overstays-border-wall>; sobre la pérdida de empleos, véase Federica Cocco, «Most US Manufacturing Jobs Lost to Technology, Not Trade», en *Financial Times*, 2 de diciembre de 2016.

27. Mounk, «Pitchfork Politics», art. cit.

28. Carlos de la Torre, *Populist Seduction in Latin America*, Athens, Ohio University Press, 2.ª ed., 2010.

29. Tim Hains, «Trump: Hillary Clinton Can Be Understood with One Simple Phrase — “Follow the Money”», en *Real Clear Politics*, 28 de septiembre de 2016, <www.realclearpolitics.com/video/2016/09/28/trump_hillary_clinton_can_be_understood_with_one_si
-_follow_the_money.html>.

30. James Traub, «The Party That Wants to Make Poland Great Again», en *The New York Times*, 2 de noviembre de 2016, <www.nytimes.com/2016/11/06/magazine/the-party-that-wants-to-make-poland-great-again.html>.

31. «French Far-Right’s Marine Le Pen Lauds Greek Vote as Win over “EU Oligarchy”», Reuters, 5 de julio de 2015, <www.reuters.com/article/eurozone-greece-france-lepen-idUSL8N0ZL0TX20150705>.

32. Alastair Smart, «Beppe Grillo Interview», *The Telegraph*, 4 de marzo de 2011, <www.telegraph.co.uk/culture/comedy/8362260/Beppe-Grillo-interview.html>.

33. Luis Giménez San Miguel y Pablo Iglesias, «Mañana seguirá gobernando la casta», en *Público*, 26 de mayo de 2015, <www.publico.es/actualidad/pablo-iglesias-manana-seguira-gobernando.html>. Parecido argumento ha expresado también Carolina Bescansa, antigua secretaria de análisis político de la formación: «No fundamos Podemos para ser como el PSOE o el PP, un partido histórico más en el que nuestros hijos y nietos terminaran ingresando para tomarnos el relevo como fundadores», James Badcock, «Spain’s Anti-Corruption Parties Shake Up Old Politics», BBC, 14 de marzo de 2015, <www.bbc.com/news/world-europe-31852713>.

34. Avi Asher-Schapiro, «Donald Trump Said Goldman Sachs Had “Total Control”over Hillary Clinton — Then Stacked His Team with Goldman Insiders», en *International Business Times*, 16 de noviembre de 2016, <www.ibtimes.com/political-capital/donald-trump-said-goldman-sachs-had-total-control-over-hillary-clinton-then>.

35. Sam Koppelman, «A Timeline of Donald Trump's Birther Conspiracy Theory about President Obama», en Hillaryclinton.com, 25 de octubre de 2016, <>.

36. Nick Corasaniti, «Donald Trump Calls Obama “Founder of ISIS” and Says It Honors Him», en *The New York Times*, 10 de agosto de 2016, <www.nytimes.com/2016/08/11/us/politics/trump-rally.html>; Del Quentin Wilber, «Call to “Lock Her Up” Puts Trump in a Bind over His Threat to Prosecute Hillary Clinton», en *Los Angeles Times*, 11 de noviembre de 2016.

37. Aditya Chakrabortty, «For Years Britain Shunned Narendra Modi. So Why Roll Out the Red Carpet Now?», en *The Guardian*, 10 de noviembre de 2015, <www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/10/britain-shunned-narendra-modi-india-hindu-extremist-lynch-mobs>.

38. Ercan Gurses y Orhan Coskun, «Erdogan Risks Losing Turkish Swing Voterswith Harsh Referendum Rhetoric», en *Star*, 17 de febrero de 2017, <www.thestar.com.my/news/world/2017/02/17/erdogan-risks-losing-turkish-swing-voters-with-harsh-referendum-rhetoric>; y Roy Gutman, «As a Constitutional Referendum Looms, Some in Turkey Say Erdogan Is Steering the Country toward Autocracy», en *Los Angeles Times*, 12 de febrero de 2017, <www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-turkey-referendum-20170212-story.html>.

39. Véanse Jared Malsin, «Turkey Rounds Up Erdogan's Political Opponents as Crackdown Widens», en *Time*, 4 de noviembre de 2016; Rod Nordland, «Turkey's Free Press Withers as Erdogan Jails 120 Journalists», en *The New York Times*, 17 de noviembre de 2016; Jordan Bhatt, «Erdogan Accused of Genocide against Kurds by Swedish MPs», en *International Business Times*, 11 de julio de 2017; Alon Ben-Meir, «The Kurds under Erdogan's Tyrannical Governance», en *Huffington Post*, 5 de julio de 2017; Aykan Erdemir y Merve Tahiroglu, «Erdogan's Further Consolidation of Power Would Cement Turkey's Demise», en *Huffington Post*, 26 de enero de 2017; Kara Fox, con Dilay Yalcin, «"They Turn Their Backs": In Turkey, Violent Homophobia Festers in Erdogan's Shadow», CNN, 23 de junio de 2017.

40. Mary Riddell, «Exclusive Interview with France’s Youngest and Most Controversial MP: Marion Maréchal-Le Pen on Brexit, the Nice Attack, Gay Marriage and Her Aunt Marine», en *The Telegraph*, 23 de julio de 2016, <www.telegraph.co.uk/women/politicsexclusive-interview-with-frances-youngest-and-most-controversial>.

41. David Smith, «Trump's Republican Convention Speech: What He Said and What He Meant», en *The Guardian*, 22 de julio de 2016, <www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2016/jul/22/donald-trump-republican-convention-speech-transcript-annotated>.

42. *Ibidem*.

43. *Ibid*.

44. Hofer y Erdoğan aparecen citados en Jan-Werner Müller, «Trump, Erdoğan, Farage: The Attractions of Populism for Politicians, the Dangers for Democracy», en *The Guardian*, 2 de septiembre de 2016, <www.theguardian.com/books/2016/sep/02/trump-erdogan-farage-the-attractions-of-populism-for-politicians-the-dangers-for-democracy>. Véase también Marine Le Pen, «Remettre la France en ordre», Marine Presidente (sitio web), <www.marine2017.fr/au-nom-du-peuple>.

45. Jan-Werner Müller, «Capitalism in One Family», en *London Review of Books*, 38, 23, 2016, págs. 10-14.

46. Lucy Maulsby, *Fascism, Architecture, and the Claiming of Modern Milan, 1922-1943*, Toronto, University of Toronto Press, 2014, pág. 136. Sobre Mussolini, véase Richard Collier, *Duce! A Biography of Benito Mussolini*, Nueva York: Viking, 1971 (trad. cast.: *Duce!, Duce!: ascenso y caída de Benito Mussolini*, Barcelona, Acervo, 1987). Sobre Robespierre, véase Patrice L. R. Higonnet, *Goodness beyond Virtue: Jacobins during the French Revolution*, Cambridge, Harvard University Press, 1998.

47. Mark Leibovich, «Palin Visits a “Pro-America” Kind of Town», en *The New York Times*, 17 de octubre de 2008, <https://thecaucus.blogs.nytimes.com/2008/10/17/palin-visits-a-pro-america-kind-of-town>.

48. Glenn Beck, *The Real America: Messages from the Heart and Heartland*, Nueva York, Pocket Books, 2003.

49. Jan-Werner Müller, «Donald Trump’s Use of the Term “the People” Is a Warning Sign», en *The Guardian*, 24 de enero de 2017, <www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/24/donald-trumps-warning-sign-populismauthoritarianism-inauguration>.

50. Robert Reich, «Donald Trump’s Plan to Neuter the White House Press Corps Could Neuter Our Democracy», en *Salon*, 16 de enero de 2017, <www.salon.com/2017/01/16/robert-reich-donald-trumps-plan-to-neuter-the-whitehouse-press-corps-could-neuter-our-democracy_partner>.

51. John Cassidy, «Trump's Attack on the Press Shows Why Protests Are Necessary», en *The New Yorker*, 22 de enero de 2017, <www.newyorker.com/news/john-cassidy/trumps-attack-on-the-press-shows-why-protests-are-necessary>.

52. Michael Grynbaum, «Trump Calls the News Media the “Enemy of the American People”», en *The New York Times*, 17 de febrero de 2017, <www.nytimes.com/2017/02/17/business/trump-calls-the-news-media-the-enemy-of-the-people.html>.

53. Sonam Sheth, «One of Trump's Most Vocal Supporters Left CNN to Make a Pro-Trump News Video That's Been Compared to State TV», en *Business Insider*, 6 de agosto de 2017, <www.businessinsider.com/kayleigh-mcenany-left-cnn-to-host-pro-trump-news-videos-2017-8>.

54. Véanse Anne Applebaum, «It's Now Clear: The Most Dangerous Threats to the West Are Not External», en *The Washington Post*, 16 de julio de 2017; y «Poland: Draft Law Threatens Supreme Court», Human Rights Watch (sitio web), 20 de julio de 2017, <www.hrw.org/news/2017/07/20/poland-draft-law-threatens-supreme-court>.

55. Niki Kitsantonis, «In Greece, a Fierce Battle over TV Licenses», en *The New York Times*, 29 de agosto de 2016, <www.nytimes.com/2016/08/30/world/europe/greece-cracks-down-on-triangle-of-corruption-in-tv.html>; Kerin Hope, «Minister's Court Win Intensifies Fears for Rule of Law in Greece», en *Financial Times*, 8 de agosto de 2017, <www.ft.com/content/b1e23838-779a-11e7-90c0-90a9d1bc9691>. Cabe aclarar que la *Athens Review of Books [Revista Ateniense de Libros]* no fue clausurada por una orden directa del gobierno, sino que se declaró en quiebra por culpa de una sentencia judicial que la condenaba a pagar una indemnización sin precedentes a raíz de una demanda interpuesta por el gobierno.

56. Tom Mueller, «What Beppe Grillo Wants», en *The New Yorker*, 6 de marzo de 2013, <www.newyorker.com/news/news-desk/what-beppe-grillo-wants>.

57. En países donde no está arraigada una honda cultura democrática, los partidos políticos establecidos también tratan de ocupar cargos clave con sus afiliados a fin de recompensar a sus leales o de procurarse un tratamiento informativo más favorable en la televisión estatal. Pero solo los populistas «emprenden semejante colonización de forma abierta y apoyados en su pretensión central de ejercer la representación moral del pueblo» (Müller, *What Is Populism?, op. cit*., pág. 45).

58. Simon Kennedy, «Pro-Brexit Press Rages at "Enemies of the People" on Court», en *Bloomberg*, 4 de noviembre de 2016, <www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-04/pro-brexit-press-rages-at-enemies-of-the-people-on-court>.

59. Peter Exinger, «Streit ums Minarett», en *Blick*, 11 de febrero de 2006; Thomi De Rocchi, «Minarette stören den Blick auf die Alpen», en *Blick*, 18 de julio de 2008; René Steege Ter, «Zwitsers Ruziën over verbod op Minaretten», en *Het Parool*, 26 de noviembre de 2009; Janine Gloor, «Turm des Schweigens: "An den Anblick des Minaretts hat man sich gewöhnt"», en *Solothurnerzeitung*, 8 de enero de 2017; Simone Bretscher, «(K)eins aufs Dach?», tesis de maestría, Seminario de Historia, Universidad de Basilea, 5 de noviembre de 2008, págs. 76-91, <www.bmk-online.ch/files/Eins-aufs-Dach.pdf>; Lorenz Langer, «Panacea or Pathetic Fallacy? The Swiss Ban on Minarets», en *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 43, 4, 2010, págs. 865-870; David Miller, «Majorities and Minarets: Religious Freedom and Public Space», serie de documentos de trabajo sobre política, Nuffield College, Universidad de Oxford, págs. 8-10, <www.nuffield.ox.ac.uk/Politics/Papers/2013/WP-2013-03.pdf>; Tribunal Supremo Federal Suizo, sentencia 1P.26/2007, 4 de julio de 2007, <www.polyreg.ch/bgeunpub/Jahr_2007/Entscheide_1P_2007/1P.26__2007.html>.

60. Exinger, «Streit ums Minarett», art. cit.

61. Nick Cumming-Bruce y Steven Erlanger, «Swiss Ban Building of Minarets on Mosques», en *The New York Times*, 29 de noviembre de 2009, <www.nytimes.com/2009/11/30/world/europe/30swiss.html>.

62. «Federal Constitution of the Swiss Confederation», web oficial del gobierno suizo, 2016, artículos 15 y 72, <www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/201601010000/101.pdf>.

63. Véanse «The Swiss Ban Minarets, Ctd.», en *Atlantic*, 30 de noviembre de 2009, <www.theatlantic.com/daily-dish/archive/2009/11/the-swiss-ban-minarets-ctd/193550>; Ian Traynor, «Swiss Ban on Minarets Draws Widespread Condemnation», en *The Guardian*, 30 de noviembre de 2009, <www.theguardian.com/world/2009/nov/30/switzerland-ban-minarets-reaction-islam>; y Charlemagne, «The Swiss Minaret Ban», en *The Economist*, 30 de noviembre de 2009, <www.economist.com/blogs/charlemagne/2009/11/_normal_0_false_false_6>.

64. Véase Benjamin Shingler, «Ban on New Places of Worship Upheld in Montreal's Outremont Borough», en *CBC News*, 20 de noviembre de 2016, <www.cbc.ca/news/canada/montreal/outremont-places-of-worship-ban-hasidic-1.3859620>.

65. «Alternative for Germany Slams Church over Refugees», en *The Local*, 18 de febrero de 2016, <www.thelocal.de/20160218/alternative-for-germany-slams-dishonest-church-over-refugees>.

66. Charlotte Beale, «German Police Should Shoot Refugees, Says Leader of AfD Party Frauke Petry», en *The Independent*, 31 de enero de 2016.

67. De algunos aspectos de mi descripción del mitin de Petry y de la manifestación de Pegida, descrita al principio del capítulo, yo mismo había informado ya en Mounk, «Echt Deutsch», art. cit.

68. Según testimonio presencial del autor.

69. Geert Wilders, «Preliminary Election Program PVV 2017-2021», blog, 26 de agosto de 2016, <www.geertwilders.nl/94-english/2007-preliminary-election-program-pvv-2017-2021>.

70. Angelique Chrisafis, «Jean-Marie Le Pen Fined Again for Dismissing Holocaust as “Detail”», en *The Guardian*, 6 de abril de 2016, <www.theguardian.com/world/2016/apr/06/jean-marie-le-pen-fined-again-dismissing-holocaust-detail>.

71. «NPD Leader Charged with Inciting Race Hate», en *Der Spiegel*, 24 de agosto de 2007, <www.spiegel.de/international/germany/after-nominating-rudolf-hess-for-nobel-peace-prize-npd-leader-charged-with-inciting-race-hate-a-501910.html>.

72. «French National Front Expels Founder Jean-Marie Le Pen», en BBC, 20 de agosto de 2015, <www.bbc.com/news/world-europe-34009901>.

73. Björn Höcke, «Gemutszustand eines total besiegten Volkes», en *Der Tagesspiegel*, 1 de enero de 2015, <www.tagesspiegel.de/politik/hoecke-rede-im-wortlaut-gemuetszustand-eines-total-besiegten-volkes/19273518.html>(traducido por el autor); AfD Berlin, «Weil wir für #EUCH sind, sind sie gegen uns», tuit del 21 de agosto de 2016, <twitter.com/afdberlin/status/767225661920542720?lang=en>; «Bundesvorstand beantragt Parteiausschluss von Höcke», en *Zeit Online*, 31 de marzo de 2017, <www.zeit.de/politik/deutschland/2017-03/afd-bundesvorstand-bjoern-hoecke-parteiausschlussverfahren>.

74. Gergely Szakacs, «U.S. Vote Marks End of “Liberal Non-democracy”: Hungary PM», Reuters, 10 de noviembre de 2016, <www.reuters.com/article/us-usa-election-hungary-orban-idUSKBN13510D>.

75. Jan-Werner Müller, «The Problem with “Illiberal Democracy”», en *Social Europe*, 27 de enero de 2016, <www.socialeurope.eu/2016/01/the-problem-with-illiberal-democracy>.

2. Derechos sin democracia

1. Christian Graf von Krockow, *Warnung vor Preußen*, Berlín, Severin und Siedler, 1982, pág. 99.

2. Barrington Moore, *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Boston, Beacon Press, 1993 (trad. cast.: *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia: el señor y el campesino en la formación del mundo moderno*, Barcelona, Península, 1972); Robert Alan Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven, Yale University Press, 1973 (trad. cast.: *Poliarquía: participación y oposición*, Madrid, Tecnos, 1989); Charles Tilly, *Popular Contention in Great Britain*, *1758-1834*, Nueva York, Routledge, 2015 [1995]; Daniel Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, págs. 24-171.

3. James Madison, «The Federalist No. 10», en Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, *The Federalist Papers*, New Haven, Yale University Press, 2009 [1787], pág. 51 (trad. cast.: *El federalista*, Madrid, Akal, 2015).

4. *Ibidem*.

5. *Ibid*., pág. 322.

6. Garry Wills, *Lincoln at Gettysburg: The Words that Remade America*, Nueva York, Simon & Schuster, 1992, pág. 145; Abraham Lincoln, *The Gettysburg Address*, Londres, Penguin, Great Ideas, 2009 (trad. cast.: *El discurso de Gettysburg y otros discursos sobre la Unión*, Madrid, Tecnos, 2005); George P. Fletcher, *Our Secret Constitution: How Lincoln Redefined American Democracy*, Nueva York, Oxford University Press, 2003, pág. 53.

7. La Constitución de Estados Unidos de América, enmiendas XI-XXVII, Archives.gov (consultado el 1 de abril de 2017), enmienda XV, <www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27#toc-amendment-xv> (trad. cast.: <www.archives.gov/espanol/constitucion.html>); Michael Perman, *Struggle for Mastery: Disfranchisement in the South, 1888-1908*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001; Jerrold M. Packard, *American Nightmare: The History of Jim Crow*, Nueva York, St. Martin's Press, 2002.

8. Constitución de Estados Unidos, enmienda XVII.

9. *Ibidem*, enmienda XIX.

10. Benjamin Constant, «The Liberty of the Ancients Compared with That of the Moderns», en Biancamaria Fontana (comp.), *Political Writings*, *op. cit*., págs. 309-328.

11. John Adams, «A Defence of the Constitution», en George Carey (comp.), *The Political Writings of John Adams*, Washington D. C., Regnery Publishing, 2000, pág. 27.

12. *The Bible: Authorized King James Version*, ed. de Robert Carroll y Stephen Pricket, Nueva York, Oxford University Press, 2008, Lucas 5:37 (puede consultarse un edición en castellano de la Biblia, versión de Reina Valera, 1960, en <www.amen-amen.net/RV1960, Lucas 5:37>).

13. Este es un diálogo que puede verse en toda su televisada gloria aquí: *Yes, Minister*, episodio «A Question of Loyalty», creado por Anthony Jay y Jonathan Lynn, BBC, 1981, <www.youtube.com/watch?v=dIto5mwDLxo>.

14. «Speech (and Sketch) for BBC1 Yes, Prime Minister», Fundación Margaret Thatcher, 20 de enero de 1984, <www.margaretthatcher.org/document/105519>.

15. Shaun Ley, «Yes, Prime Minister: Still True to Life after 30 Years?», BBC, 9 de enero de 2016, <www.bbc.com/news/uk-politics-35264042>.

16. Véase «Max Weber on Bureaucracy», New Learning (sitio web), suplemento de Mary Kalantzis y Bill Cope, *New Learning*, Cambridge, Cambridge University Press, 2.ª ed., 2012, <http://newlearningonline.com/new-learning/chapter-9/max-weber-on-bureaucracy>.

17. Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, 3 vols., Nueva York, Bedminster Press, 1968, vol. 3, pág. 979 (trad. cast.: *Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva*, México, Fondo de Cultura Económica, 1964).

18. El análisis más penetrante y amplio de las múltiples funciones desempeñadas por los burócratas y de la creatividad normativa que ello requiere es el de Bernardo Zacka, *When the State Meets the Street: Public Service and Moral Agency*, Cambridge, Harvard University Press, 2017.

19. Workforce», Institute for Government, Londres, 2017, <www.instituteforgovernment.org.uk/publication/whitehall-monitor-2017/workforce>. El porcentaje de funcionarios públicos sobre el total de trabajadores es todavía más alto en otros países europeos, cuya lista encabezan Dinamarca (32%), Francia (24%), Finlandia (23%), Polonia (22%), Países Bajos (21%) y Grecia (21%). Statista, «Anteil der Staatsbediensteten an der Gesamtzahl der Beschäftigten in ausgewählten Ländern weltweit», <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/218347/umfrage/anteil-der-staatsbediensteten-in-ausgewaehltenlaendern>. La cosa se complica un poco en el caso de Estados Unidos, donde ha imperado un fuerte compromiso político por limitar el número de empleados federales, lo que se ha traducido en una caída de la proporción de funcionarios públicos sobre el total de la población. No obstante, esas cifras de la Administración federal ocultan el rápido incremento de los funcionarios empleados en los niveles de gobierno estatal y local, así como el número de personas que trabajan para organizaciones sin ánimo de lucro o privadas que desarrollan funciones cuasi gubernamentales. Véase John J. DiIulio, *Bring Back the Bureaucrats: Why More Federal Workers Will Lead to Better (and Smaller!) Government*, West Conshohocken, Templeton Foundation Press, 2014. Puede apreciarse también un fenómeno similar en Francia: Philippe Bezes y Gilles Jeannot, «The Development and Current Features of the French Civil Service System», en Frits van der Meer (comp.), *Civil Service Systems in Western Europe*, Cheltenham, Edward Elgar, 2011, págs. 185-215, pág. 272, <https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01257027/document>.

20. En el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, Edward Page ha demostrado que los políticos tienden a dar forma a los contornos generales de las grandes reformas. Edward Page, «The Civil Servant as Legislator: Law Making in British Administration», en *Public Administration*, 81, 4, 2003, págs. 651-679. Pero el carácter definitivo de las leyes del Parlamento está muy condicionado por los funcionarios que disponen de un enorme margen de maniobra para redactar la legislación. Gracias a ello, en ámbitos tan diversos como el derecho penal o el laboral, lograron imprimir un cierto impulso político genérico en la dirección que ellos preferían. Edward Page, *Policy without Politicians: Bureaucratic Influence in Comparative Perspective*, Oxford, Oxford University Press, 2012. En especial, en la «elaboración cotidiana de políticas», la influencia del funcionariado es mucho más dominante de lo que muchos ciudadanos piensan. Edward Page, *Governing by Numbers: Delegated Legislation and Everyday Policy Making*, Oxford, Hart Publishing, 2001. Pero puede ir incluso más allá: en un número sorprendentemente elevado de casos, el verdadero impulso motor de la aprobación de nueva legislación vino de funcionarios no electos, antes que de los políticos o de la población en general. Page, «The Civil Servant as Legislator», art. cit.

21. Cornelius M. Kerwin y Scott R. Furlong, *Rulemaking: How Government Agencies Write Law and Make Policy*, Washington D. C., CQ Press, 1994.

22. Marshall J. Breger y Gary J. Edles, «Established by Practice: The Theory and Operation of Independent Federal Agencies», en *Administrative Law Review*, 52, 4, 2000, págs. 1111-1294, pág. 1112.

23. Ley de Comunicaciones de 1934 (EE. UU.), Pub. L. 73-416, 48 Stat. 1064, 19 de junio de 1934, Government Publishing Office, <www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2009-title47/html/USCODE-2009-title47-chap5.htm>.

24. Ley de Mercados de Valores de 1934 (EE. UU.), Pub. L. 73-291, 48 Stat. 881, 6 de junio de 1934, Government Publishing Office, <www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE-2011-title15/USCODE-2011-title15-chap2B-sec78a>.

25. Planes de Reorganización, números 3 y 4 de 1970, mensaje del presidente de Estados Unidos a la Cámara de Representantes, Environmental Protection Agency, <https://archive.epa.gov/ocir/leglibrary/pdf/created.pdf> (consultado el 2 de abril de 2017).

26. Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor (EE. UU.), Pub. L. 111-203, 124 Stat. 1376, 21 de julio de 2010, Government Publishing Office, <www.gpo.gov/fdsys/granule/STATUTE-124/STATUTE-124-Pg1376/content-detail.html>.

27. «Obscene, Indecent, and Profane Broadcasts», Federal Communications Commission, (EE. UU.), 2016, <www.fcc.gov/consumers/guides/obscene-indecent-and-profane-broadcasts>.

28. «Open Internet», Federal Communications Commission (EE. UU.), 2016, <www.fcc.gov/general/open-internet>.

29. «DDT — A Brief History and Status», Environmental Protection Agency (EE. UU.), <www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/ddt-brief-history-and-status>; «EPA History: Clean Water Act», Environmental Protection Agency (EE. UU.), <www.epa.gov/history/epa-history-clean-water-act> (consultados ambos el 2 de abril de 2017).

30. «Carbon Pollution Standards for New, Modified and Reconstructed Power Plants», Environmental Protection Agency (EE. UU.), <www.epa.gov/cleanpowerplan/carbon-pollution-standards-new-modified-andreconstructed-power-plants> (consultado el 2 de abril de 2017).

31. Yuka Hayashi y Anna Prior, «US Unveils Retirement-Savings Revamp, with a Few Concessions to Industry», en *The Wall Street Journal*, 6 de abril de 2016, <www.wsj.com/articles/u-s-unveils-retirement-savings-revamp-but-with-a-few-concessions-to-industry-1459936802>. Sobre la normativa sobre préstamos y créditos rápidos, que todavía no ha sido adoptada, véase Yuka Hayashi, Rachel Witkowski y Gabriel T. Rubin, «Dueling Payday-Lending Campaigns Deluge CFPB with Comments», en *The Wall Street Journal*, 10 de octubre de 2016, <www.wsj.com/articles/dueling-payday-lending-campaigns-deluge-cfpb-with-comments-1476131725>. Para una valoración general de la CFPB, véase Ian Salisbury, «The CFPB Turns 5 Today. Here's What It's Done (and What It Hasn't)», en *Time*, 21 de julio de 2016, <http://time.com/money/4412754/cfpb-5-year-anniversary-accomplishments>.

32. Jonathan Turley, «The Rise of the Fourth Branch of Government», en *The Washington Post*, 24 de mayo de 2013.

33. El propio Tribunal Supremo ya sentenció allá por 1935, cuando los primeros organismos independientes apenas acababan de nacer, que estos gozarían de «independencia con respecto a la autoridad del ejecutivo, excepto en la selección de sus miembros, y libertad para obrar según su criterio sin necesidad de permiso ni de impedimento alguno de ninguna otra autoridad o departamento del gobierno». *Humphrey's Executor v. United States*, 295 US 602, 1935. Con los años, el Tribunal Supremo no ha hecho más que aumentar las prerrogativas de las agencias independientes. En *Chevron USA v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 467 US 837, 1984, sentenció que tienen derecho a que se considere especialmente su criterio a la hora de interpretar las leyes. En *Arlington v. FCC*, 2013, reconoció a cada agencia la prioridad para determinar sus propios ámbitos de jurisdicción. *City of Arlington, TX v. FCC*, 569 US, 2013.

34. Polly Curtis, «Government Scraps 192 Quangos», en *The Guardian*, 14 de octubre de 2010, <www.theguardian.com/politics/2010/oct/14/government-to-reveal-which-quangos-will-be-scrapped>.

35. Una de las primeras investigaciones sobre las Quango fue la de Brian W. Hogwood, «The Growth of Quangos: Evidence and Explanations», en *Parliamentary Affairs*, 48, 2, 1995, págs. 207-225.

36. Curtis, «Government Scraps 192 Quangos»; «Quango List Shows 192 to Be Axed», BBC News, 14 de octubre de 2010, <www.bbc.com/news/uk-politics-11538534>.

37. Kate Dommett, «Finally Recognising the Value of Quangos? The Coalition Government and a Move beyond the “Bonfire of the Quangos”», en *Democratic Audit UK*, 14 de enero de 2015, <www.democraticaudit.com/2015/01/14/finally-recognising-the-value-of-quangos-the-coalition-government-and-a-move-beyond-the-bonfire-of-the-quangos>.

38. Sobre el papel de la Comisión Europea, véase Miriam Hartlapp, Julia Metz y Christian Rauh, *Which Policy for Europe? Power and Conflict inside the European Commission*, Oxford, Oxford University Press, 2014. Nótese también que la Unión Europea ha ido desarrollando cada vez más una red de agencias independientes que se asemejan a las Quango británicas y a instituciones estadounidenses como la EPA, y entre las que se cuentan organismos tan variados como la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y la Autoridad Bancaria Europea. Véase Arndt Wonka y Berthold Rittberger, «Credibility, Complexity and Uncertainty: Explaining the Institutional Independence of 29 EU Agencies», en *West European Politics*, 33, 4, 2010, págs. 730-752.

39. Véase Theo Balderston, *Economics and Politics in the Weimar Republic*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

40. «The Road to Central Bank Independence», Deutsche Bank, 29 de octubre de 2013, <www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Topics/2013/2013_10_29_bank_independence.html>.

41. Citado en Christopher Alessi, «Germany’s Central Bank and the Eurozone», en *Council on Foreign Relations*, 7 de febrero de 2013, <www.cfr.org/world/germanys-central-bank-eurozone/p29934>. A propósito del papel de la hiperinflación en la memoria histórica alemana, véanse Toni Pierenkemper, «Die Angst der Deutschen vor der Inflation oder: Kann man aus der Geschichte lernen?», en *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook*, 39, 1, 1998, págs. 59-84; y Alexander Ebner, «The Intellectual Foundations of the Social Market Economy: Theory, Policy, and Implications for European Integration», en *Journal of Economic Studies*, 33, 3, 2006, págs. 206-223.

42. Alessi, «Germany’s Central Bank». De todos modos, como bien señala Wade Jacoby, si bien el Bundesbank fue fundado con el objetivo de centrarse primordialmente en la estabilidad de los precios, el tratado que instituyó el BCE también toma en consideración que este pueda tener en cuenta otros muchos objetivos, como el de la «paz social» (comunicación personal).

43. La razón técnica para ello es bastante más compleja y tiene que ver con cuál es la inflación futura probable prevista por el mercado. Véase R. J. Barro y D. B. Gordon, «Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy», en *Journal of Monetary Economics*, 12, 1, 1983, págs. 101-121.

44. Simone Polillo y Mauro Guillén, «Globalization Pressures and the State: The Worldwide Spread of Central Bank Independence», en *American Journal of Sociology*, 110, 6, 2005, págs. 1764-1802, pág. 1770.

45. *Ibidem*, pág. 1767.

46. En los años que han seguido a la crisis financiera de 2008, los bancos centrales han comenzado a asumir un papel político más importante aún. En la década de 1990 y principios de la de 2000, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el BCE se habían limitado a seguir la corriente al ciclo económico de inflación baja y sorprendentemente elevado crecimiento. Su nula previsión de la desestabilización que las desregulaciones generalizadas provocarían en el sector financiero fue una de las causas de una de las más catastróficas contracciones económicas de la historia moderna. Pero, lejos de perder su poder a raíz de esa crisis financiera, muchos bancos centrales se han vuelto ahora más poderosos y menos responsables ante las autoridades democráticas. Mientras el gobierno estadounidense quedaba paralizado por culpa de la extrema radicalización de posturas de los dos grandes partidos en el Congreso, y el gobierno comunitario europeo se las veía y se las tenía para conciliar los divergentes intereses de los países del norte y del sur de Europa, los bancos centrales se gastaban billones en compras de activos para relanzar las economías en todo el planeta y se apresuraban a reactivar regulaciones del sector bancario y de los mercados a los que con tanta libertad habían dejado actuar en los años previos. De ahí que los bancos centrales hayan ejercido un papel más activo y controvertido desde 2008 que con anterioridad a esa fecha.

47. Véanse Jack Greenberg, *Crusaders in the Courts: How a Dedicated Band of Lawyers Fought for the Civil Rights Revolution*, Nueva York, Basic Books, 1995; Michael J. Klarman, *From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality*, Oxford, Oxford University Press, 2004; y Risa L. Goluboff, «The Thirteenth Amendment and the Lost Origins of Civil Rights», en *Duke Law Journal*, 50, 6, 2000, págs. 1609-1685.

48. Véanse Thomas M. Keck, *The Most Activist Supreme Court in History: The Road to Modern Judicial Conservatism*, Chicago, University of Chicago Press, 2010; Richard A. Posner, «The Rise and Fall of Judicial Self-restraint», en *California Law Review*, 100, 3, 2012, págs. 519-556; Jack M. Balkin y Sanford Levinson, «Understanding the Constitutional Revolution», en *Virginia Law Review*, 87, 6, 2001, págs. 1045-1109. Una de las características más llamativas del momento actual es que destacados expertos de cada uno de los bandos enfrentados acusa al otro de practicar un activismo judicial sin precedentes. Véase Cass Sunstein, «Tilting the Scales Rightward», en *The New York Times*, 26 de abril de 2001. Respecto a la crítica que del concepto mismo de *activismo judicial*, véase Kermit Roosevelt, *The Myth of Judicial Activism: Making Sense of Supreme Court Decisions*, New Haven, Yale University Press, 2006.

49. *Brown v. Board of Education of Topeka*, 349 US 294, 1955.

50. En *Furman v. Georgia*, 408 US 238, 1972, se sentenció que la pena de muerte era inconstitucional. En *Gregg v. Georgia*, 428 US 153, 1976, se revocó aquella sentencia anterior.

51. *Roe v. Wade*, 410 US 113, 1973.

52. *FCC v. Pacifica Foundation*, 438 US 726, 1978.

53. *Lawrence v. Texas*, 539 US 558, 2003, legalizó el sexo homosexual. *Obergefell v. Hodges*, 576 US, 2015, legalizó el matrimonio gay.

54. Por ejemplo, *Buckley v. Valeo*, 424 US 1, 1976, y *Citizens United v. FEC*, 558 US, 2010.

55. En *King v. Burwell*, 576 US, 2015, el Tribunal Supremo ratificó disposiciones clave de la Ley de la Sanidad Asequible.

56. En *United States v. Texas*, 579 US, 2016, el Tribunal Supremo consideró válido el fallo de un tribunal de apelación que bloqueaba la aplicación del programa de Acción Aplazada para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA), que habría impedido la deportación de millones de inmigrantes indocumentados. *United States v. Texas*, 507 US 529, 1993.

57. Véanse Jonathan Chait, «Conservative Judicial Activists Run Amok», en *The New York Magazine*, 28 de marzo de 2012; Adam Cohen, «Psst... Justice Scalia, You Know, You’re an Activist Judge, Too», en *The New York Times*, 19 de abril de 2005, <www.nytimes.com/2005/04/19/opinion/psst-justice-scalia-you-know-youre-an-activist-judge-too.html>; Seth Rosenthal, «The Jury Snub», en *Slate*, 18 de diciembre de 2006, <www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2006/12/the_jury_snub.html>; William P. Marshall, «Conservatism and the Seven Sins of Judicial Activism», en *University of Colorado Law Review*, 73, 2002, págs. 1217-1401; y Geoffrey R. Stone, «*Citizens United* and Conservative Judicial Activism», en *University of Illinois Law Review*, 2, 2012, págs. 485-500.

58. Medir si todo esto equivale a una expansión del papel del alto tribunal en la vida estadounidense es difícil. No basta con contar el número de veces que el Supremo ha derogado leyes del Congreso, o de los estados, o normas elaboradas por agencias regulatorias, por ejemplo. A fin de cuentas, un factor crucial es la importancia de la ley o la norma en sí, y esa es una cuestión que necesariamente implica juicios de valor sobre los que las personas razonables bien pueden discrepar. Véase más sobre esta sutil cuestión en A. E. Dick Howard, «The Supreme Court Then and Now», en *History Now*, The Gilder Lehrman Institute of American History, 2017, <www.gilderlehrman.org/history-by-era/government-and-civics/essays/supreme-court-then-and-now>; Larry D. Kramer, «Judicial Supremacy and the End of Judicial Restraint», en *California Law Review*, 100, 3, 2012, págs. 621-634; y Christopher Wolfe, *The Rise of Modern Judicial Review: From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law*, Lanham, Rowman and Littlefield, 1994 (trad. cast.: *La transformación de la interpretación constitucional*, Madrid, Civitas, 1991).

59. Veintidós eran los países que, según la base de datos Polity IV de 2014, arrojaban puntuaciones suficientemente altas en el indicador DEMOC en 1930 como para ser considerados democracias a los efectos actuales: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. De ellos, solo Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza y Estados Unidos tenían instituidos mecanismos judiciales de control de constitucionalidad por aquel entonces. En la actualidad, todos esos países, con la única excepción de Países Bajos, disponen formalmente de control judicial de constitucionalidad. Y hasta Países Bajos, aun cuando su sistema se considere desprovisto de tal control para este recuento, contempla en la práctica una especie de control judicial «blando» de constitucionalidad. Quiero dar especialmente las gracias a Daniel Kenny por su ayuda en la investigación de este punto.

60. Tom Ginsburg y Mila Versteeg, «Why Do Countries Adopt Constitutional Review?», en *Journal of Law, Economics, and Organization*, 30, 3, 2014, págs.587-622, pág. 587. Según un estudio anterior, 158 de un total de 191 sistemas constitucionales en todo el mundo «facultaron explícitamente a uno o más órganos judiciales para [...] proteger sus normas y principios constitucionales frente a vulneraciones, especialmente frente a las de los parlamentos». Maartje De Visser, *Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis*, Oxford, Hart Publishing, 2014, pág. 53.

61. La Cámara de los Lores funcionaba como tribunal de último recurso en ciertos casos particulares y, en ocasiones, clarificaba la interpretación debida de determinadas leyes. Pero lo que no podía hacer era declarar inconstitucional ninguna ley del Parlamento. A propósito de la posición británica general en cuanto al control judicial de constitucionalidad, véase Jeremy Waldron, «The Core of the Case against Judicial Review», en *Yale Law Journal*, 115, 6, 2006, págs. 1346-1406.

62. Cuando Gran Bretaña ingresó en ella, la Unión Europea todavía se llamaba Comunidad Europea.

63. Véanse Karen J. Alter, *Establishing the Supremacy of European Law: The Making of an International Rule of Law in Europe*, Oxford, Oxford University Press, 2001; y Mark Elliott, *The Constitutional Foundations of Judicial Review*, Oxford, Hart Publishing, 2001.

64. Los tribunales británicos pasaron así a tener la potestad de controlar el cumplimiento de la normativa europea sobre derechos humanos dentro de la legislación del Reino Unido, y de derogarla en caso necesario. Véanse A. Kavanagh, *Constitutional Review under the UK Human Rights Act*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009; A. Z. Drzemczewski, *European Human Rights Convention in Domestic Law: A Comparative Study*, Nueva York, Oxford University Press, 1985; y B. A. Simmons, *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009; «Human Rights Act 1998», Legislation.gov.uk, <www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/crossheading/introduction> (consultado el 2 de abril de 2017).

65. «Constitutional Reform Act 2005», Legislation.gov.uk, <www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents> (consultado el 2 de abril de 2017).

66. «Canadian Charter of Rights and Freedoms», Parlamento de Canadá, <> (consultado el 2 de abril de 2017). Véanse también J. B. Kelly, *Governing with the Charter: Legislative and Judicial Activism and Framers' Intent*, Vancouver, University of British Columbia Pres, 2014; D. R. Songer y S. W. Johnson, «Judicial Decision Making in the Supreme Court of Canada: Updating the Personal Attribute Model», en *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique*, 40, 4, 2007, págs. 911-934.

67. «Judging», Conseil d’État, <http://english.conseil-etat.fr/Judging> (consultado el 2 de abril de 2017). Véase también F. Fabbrini, «Kelsen in Paris: France’s Constitutional Reform and the Introduction of A Posteriori Constitutional Review of Legislation», en *German Law Journal*, 9, 10, 2008, págs. 1297-1312.

68. «The Constitution of the Kingdom of the Netherlands», Rechtspraak.nl, 2002, <www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Constitution-NL.pdf>; M. Adams y G. van der Schyff, «Constitutional Review by the Judiciary in the Netherlands», en *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 66, 2006, págs. 399-413.

69. Waldron, «Core of the Case», art. cit. Véase también J. Waldron, «Judicial Review and the Conditions of Democracy», en *Journal of Political Philosophy*, 6, 4, 1998, págs. 335-355.

70. Waldron, «Judicial Review», art. cit., pág. 339.

71. Véanse Hans Kelsen, «La garantie juridictionelle de la constitution (La justice constitutionelle)», en *Revue de Droit Publique et de la Science Politique en France et a L'Étranger*, 35, 1928, págs. 197-259; Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge, Harvard University Press, 1945 (trad. cast.: *Teoría general del derecho y del Estado*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1969); Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge, Harvard University Press, 1988 (trad. cast.: *El imperio de la justicia*, Barcelona, Gedisa, 2012); Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Harvard University Press, 1978 (trad. cast.: *Los derechos en serio*, Barcelona, Ariel, 1984). Véanse también Daniel F. Kelemen, «Judicialisation, Democracy and European Integration», en *Representation*, 49, 3, 2013, págs. 295-308; y Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, Princeton, Princeton University Press, 2006.

72. Para ser justos, afirmar que el control judicial de constitucionalidad sustrae ciertas decisiones al debate y la disputa políticas no significa que los juristas estén desprovistos de opiniones políticas. De hecho, el carácter altamente politizado de las sentencias judiciales, especialmente en Estados Unidos, es uno de los argumentos más contundentes en contra de dicho control. Ezra Klein ha argumentado al respecto que «las personas que ejercen como magistrados en el Tribunal Supremo han sido propuestas y aprobadas por los partidos políticos, en muchos casos han colaborado con los partidos políticos, suelen ser leales a personas de esos partidos políticos que las han ayudado a progresar en su carrera, y pasan mucho tiempo en Washington, donde tienden a relacionarse con grupos sociales con los que congenian. Están, por así decirlo, más politizadas (no menos) que la mayoría de los estadounidenses». Ezra Klein, «Of Course the Supreme Court Is Political», en *The Washington Post*, 21 de junio de 2012. Véase también la extensa literatura académica dedicada a este tema, como, por ejemplo, Jeffrey A. Segal y Albert D. Cover, «Ideological Values and the Votes of U.S. Supreme Court Justices», en *American Political Science Review*, 83, 2, 2014, págs.557-565; y William Mishler y Reginald S. Sheehan, «The Supreme Court as a Countermajoritarian Institution? The Impact of Public Opinion on Supreme Court Decisions», en *American Political Science Review*, 87, 1, 2013, págs. 87-101.

73. Tanto la cifra de comercio transfronterizo como la de inversión extranjera directa están tomadas de Shujiro Urata, «Globalization and the Growth in Free Trade Agreements», en *Asia-Pacific Review*, 9, 1, 2002, págs. 20-32.

74. Sobre el acero estadounidense, véase Douglas Irwin, «Historical Aspects of U.S. Trade Policy», en *NBER Reporter: Research Summary*, National Bureau of Economic Research (NBER), verano de 2006, <www.nber.org/reporter/summer06/irwin.html>. Sobre la automoción y la electrónica, véanse Robert Feenstra, «How Costly Is Protectionism?», en *Journal of Economic Perspectives*, 6, 3, 1992, págs. 159-178; y Ashoka Moda, «Institutions and Dynamic Comparative Advantage: The Electronics Industry in South Korea and Taiwan», en *Cambridge Journal of Economics*, 14, 1990, págs. 291-314, pág. 296.

75. Sobre esta tensión, véanse Dani Rodrik, «Can Integration into the World Economy Substitute for a Development Strategy?», en *World Bank ABCDE-Europe Conference Proceedings*, 2000; Kenneth C. Shadlen, «Exchanging Development for Market Access? Deep Integration and Industrial Policy under Multilateral and Regional-Bilateral Trade Agreements», en *Review of International Political Economy*, 12, 5, 2005, págs. 750-775; y Bijit Bora, Peter J. Lloyd y Mari Pangestu, «Industrial Policy and the WTO», en *World Economy*, 23, 4, 2000, págs. 543-559.

76. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, 2014, <www.nafta-sec-alena.org/Home/Texts-of-the-Agreement/North-American-Free-Trade-Agreement?mvid=2> (trad. cast.: <www.nafta-sec-alena.org/Inicio/Textos-del-Acuerdo/Tratado-de-Libre-Comercio-de-América-del-Norte?mvid=2>).

77. Véase Cory Adkins y David Singh Grewal, «Democracy and Legitimacy in Investor-State Relations», en *Yale Law Journal Forum*, 65, 2016, así como James Surowiecki, «Trade-Agreement Troubles», en *The New Yorker*, 22 de junio de 2015, <www.newyorker.com/magazine/2015/06/22/trade-agreement-troubles>.

78. Véanse Kenneth A. Armstrong y Simon Bulmer, *The Governance of the Single European Market*, Mánchester, Manchester University Press, 1998; Gerda Falkner, *Complying with Europe: EU Harmonisation and Soft Law in the Member States*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005; y Frans Vaninstendael, «The ECJ at the Crossroads: Balancing Tax Sovereignty against the Imperatives of the Single Market», en *European Taxation*, 46, 9, 2006, págs. 413-420.

79. Dermot Cahill, Vincent Power y Niamh Connery, *European Law*, Nueva York, Oxford University Press, 2011, págs. 65-66.

80. Véanse Burkard Eberlein y Edgar Grande, «Beyond Delegation: Transnational Regulatory Regimes and the EU Regulatory State», en *Journal of European Public Policy*, 12, 1, 2005, págs. 89-112; y Oliver Borraz, «Governing Standards: The Rise of Standardization Processes in France and in the EU», en *Governance*, 20, 1, 2007, págs. 57-84.

81. Esta no es una característica tan privativa de la Unión Europea como podría parecer. De hecho, las nuevas regulaciones sobre adquisiciones, inversiones y servicios públicos estatales, que son hoy un elemento habitual de la mayoría de los acuerdos de libre comercio, suelen limitar la soberanía de los gobiernos subnacionales, como es el caso de los estados estadounidenses. En muchos casos, los gobiernos subnacionales se ven así forzados a reformar medidas ya existentes en materia de política de desarrollo económico, incluidas diversas leyes que impedían la deslocalización de puestos de trabajo, políticas que promovían la compra prioritaria de productos locales, y regulaciones medioambientales relacionadas con el reciclaje y las energías renovables.

82. El auge de los tratados y las organizaciones internacionales no solo ha desviado poder del Estado nación, sino que, dentro de este, ha desviado poder del legislativo hacia órganos sujetos a una rendición de cuentas menos democrática, como es el caso de los tribunales de justicia y la Administración pública.

Esta transformación comienza con los propios órganos que de entrada negocian los tratados comerciales y los acuerdos internacionales. Dada la creciente complejidad de tales tratados y el incremento del número de países signatarios, cada vez es más difícil llegar a un acuerdo si se da a los parlamentos voz y voto real en el proceso. De ahí que la autoridad de las negociaciones se haya desplazado paulatinamente del poder legislativo al ejecutivo, y que el papel de los legisladores haya quedado circunscrito a que den su consentimiento a regañadientes a unos tratados que han quedado ya básicamente fijados para cuando les llega el turno de votarlos.

En muchos países, esa transformación ha ocurrido en la práctica sin que haya sido reconocida explícitamente. En Estados Unidos, ha llegado incluso a consagrarse en forma de ley. Según la Constitución, el presidente puede negociar acuerdos internacionales, pero tiene que obtener el consentimiento de dos tercios de los senadores para que esos acuerdos entren en vigor, un oneroso requisito que ha frustrado las aspiraciones de no pocos presidentes a lo largo de la historia (al término de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Woodrow Wilson no logró reunir los votos que necesitaba para que Estados Unidos ingresara en la organización que él mismo había ideado, la Sociedad de Naciones, antecesora de las Naciones Unidas). Para facilitar la aprobación de acuerdos de libre comercio, la Ley de Comercio de 1974 instauró la posibilidad de una «autoridad de vía rápida» que permite que la Cámara de Representantes y el Senado aprueben solo por mayoría simple acuerdos de libre comercio previamente negociados por el presidente.

Aunque, técnicamente hablando, tales disposiciones aumentan el poder de un presidente (o de un primer ministro) elegido democráticamente, lo que hacen en realidad es trasladar gran parte del poder a los organismos administrativos encargados de negociar los acuerdos comerciales. Esto es especialmente así allí donde —como ocurre en Estados Unidos— tales organismos cumplen un único fin. Por ejemplo, dado que negociar acuerdos de libre comercio es la tarea principal de la Oficina del Representante Federal de Comercio, no es de extrañar que los funcionarios de esta se esfuercen por impulsar un número cada vez mayor de tales tratados y convenios.

Sobre la autoridad de vía rápida, véanse la Ley de Comercio de 1974, Pub. L. 93-618. 88 Stat. 1978-2, 3 de enero de 1975; la Ley de Comunicaciones de 1934, Pub. L. 73-416. 48 Stat. 1064, 19 de junio de 1934, Government Publishing Office (EE.UU.), <www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2009-title47/html/USCODE-2009-title47-chap5.htm>. Fijémonos, además, en que la autoridad de vía rápida rescindió la facultad del Congreso para enmendar o retrasar los acuerdos de libre comercio. La autoridad de vía rápida estuvo en vigor de 1975 a 1994, volvió a ser renovada de 2002 a 2007 y ha vuelto a ser renovada en 2015. Carolyn Smith, «Fast-Track Negotiating Authority for Trade Agreements and Trade Promotion Authority: Chronology of Major Votes», Congressional Research Services (EE. UU.), 18 de diciembre de 2001, <https://digital·library.unt.edu/ark:/67531/metacrs2031/m1/1/high_res_d/RS21004_2001Dec18.pdf>; «“Fast Track” Trade Legislation», en *The Wall Street Journal*, 28 de abril de 2015, <http://blogs.wsj.com/briefly/2015/04/28/fast-track-trade-legislation-at-a-glance>; Paul Lewis, «Barack Obama Given “Fast-Track” Authority over Trade Deal Negotiations», en *The Guardian*, 24 de junio de 2015, <www.theguardian.com/us-news/2015/jun/24/barack-obama-fast-track-trade-deal-tpp-senate>.

Sobre el caso de la Sociedad de Naciones, véanse Stephen Wertheim, «The League That Wasn’t: American Designs for a Legalist-Sanctionist League of Nations and the Intellectual Origins of International Organization, 1914-1920», en *Journal of the Society for Historians of American Foreign Relations: Diplomatic History*, 35, 5, 2011, págs. 797-836, págs. 802 y 832; Martyn Housden, *The League of Nations and the Organization of Peace*, Nueva York, Routledge, 2014, pág. xvii.

83. *Treaties in Force (Tratados en vigor)*, US Department of State, <www.state.gov/documents/organization/267489.pdf> (consultado el 2 de abril de 2017).

84. Martin Gilens y Benjamin Page, «Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens», en *Perspectives on Politics*, 12, 3, 2014, págs. 564-581.

85. *Ibidem*, pág. 575. Para un estudio anterior con resultados similares, véase Frank R. Baumgartner, Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David C. Kimball y Beth L. Leech, *Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why*, Chicago, University of Chicago Press, 2009.

86. Gilens y Page, «Testing Theories», art. cit., pág. 576. La verdad es que, en lo esencial, el temor de que las apariencias nos engañen y sea una pequeña élite la que de verdad determina las decisiones más importantes en una democracia tiene ya una tradición bastante larga a sus espaldas. Véase, por ejemplo, C. Wright Mills, *The Power Elite*, Nueva York, Oxford University Press, 1956 (trad. cast.: *La élite del poder*, México, Fondo de Cultura Económica, 1957).

87. Kevin Dixon, «Torquay's Past MPs: Rupert Allason — Always Tip the Waiter!», en *We Are South Devon*, 6 de mayo de 2015, <http://wearesouthdevon.com/torquays-past-mps-rupert-allason-always-tip-waiter>. Como resulta inevitable con este tipo de anécdotas, es obvio que no existe prueba concluyente alguna de que la camarera tuviera realmente toda esa influencia en sus compañeros y compañeras de trabajo, ni de que esos votos fuesen realmente suficientes para inclinar la balanza de las elecciones en esa circunscripción.

88. Andrew Eggers y Jens Hainmueller, «MPs for Sale? Returns to Office in Postwar British Politics», en *American Political Science Review*, 103, 4, 2009, págs. 513-533.

89. *Ibidem*, pág. 514. Debo añadir que Eggers y Hainmueller no estudiaron en concreto los efectos en las finanzas personales de ganar o perder la *reelección* como diputado del Parlamento. Así que es posible que la derrota de Allason sirviera en realidad para incrementar el número de años durante los que, libre ya de las restricciones sobre actividades lucrativas que pesan para quienes están todavía en el cargo, pudo sacar partido personal de las conexiones adquiridas durante su ejercicio político.

90. *Ibidem*, pág. 514. En cuanto a la cifra de exdiputados que son miembros de juntas de administración de esas compañías, véase pág. 528.

91. Suzanne Goldenberg, «Want to Be Senator? Governor Tried to Auction Obama's Old Seat, Says FBI», en *The Guardian*, 9 de diciembre de 2008, <www.theguardian.com/world/2008/dec/10/illinois-governor-rod-blagojevich-bribes>.

92. Peter Leeson y Russell Sobel, «Weathering Corruption», en *Journal of Law and Economics*, 51, 4, 2008, págs. 667-681.

93. Sobre el caso de Estados Unidos, véase Daniel Tokaji y Renata Strause, *The New Soft Money*, Columbus, Ohio State University Michael E. Moritz College of Law, 2014, pág. 32. Sobre el caso de Burundi, véase «The World Bank in Burundi», Banco Mundial, <www.worldbank.org/en/country/burundi>(consultado en 2016).

94. Ley Bipartidista de Reforma de las Campañas (EE. UU.), Pub. L. 107-155. 116 Stat. 81-Stat. 116, 6 de noviembre de 2002, Government Publishing Office, <www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ155/html/PLAW-107publ155.htm>. Nótese, no obstante, que hubo voces críticas que argumentaron que el efecto de la reforma McCain-Feingold sería muy limitado: los grandes donantes, predecían esos críticos, simplemente canalizarían ese dinero a través de otras entidades legales diferentes.

95. *Citizens United v. FEC*, 558 US, 2010. En sentido estricto, *Citizens United* solo instituyó ese principio para las corporaciones sin ánimo de lucro, pero pronto pasó a aplicarse a organizaciones con ánimo de lucro, así como a entidades como los sindicatos, en posteriores sentencias como *Speechnow.org v. FEC*, 599 F.3d 686, D.C. Cir. 2010. Véase Lyle Denniston, «Widening Impact of Citizens United», SCOTUSblog, 26 de marzo de 2010, <www.scotusblog.com/2010/03/widening-impact-of-citizens-united>.

96. Dos posicionamientos contundentes en cuanto a la corrosiva influencia de las contribuciones de campaña en la política estadounidense son los de Heather K. Gerken, «The Real Problem with Citizens United: Campaign Finance, Dark Money, and Shadow Parties», en *Marquette Law Review*, 97, 4, 2014, págs. 903-923; y Jane Mayer, *Dark Money: The Hidden History of the Billionaires behind the Rise of the Radical Right*, Nueva York, Doubleday, 2016. En general, hay muy buenos motivos para temer que todo incremento del número de puntos de veto existentes en un sistema político facilite la influencia de los grupos de presión. Sobre esto, véase Ian Shapiro, *Politics against Domination*, Cambridge, Harvard University Press, 2016.

97. Zephyr Teachout, *Corruption in America: From Benjamin Franklin’s Snuff Box to Citizens United*, Cambridge, Harvard University Press, 2014, pág. 1.

98. Zephyr Teachout, «The Forgotten Law of Lobbying», en *Election Law Journal*, 1, 2014, págs. 4-26, pág. 22. De todos modos, hay quienes critican a Teachout que tal vez exagere hasta qué punto el cabildeo *(lobbying)* estaba mal visto en el siglo XIX, y que el de la corrupción no es el prisma más útil a través del que enfocar una reforma significativa. Véase el intercambio entre Lee Drutman y Zephyr Teachout en Lee Drutman, «Bring Back Corruption!», reseña de Corruption in America, en Democracy, 35, 2015, <http://democracyjournal.org/magazine/35/bring-backcorruption/?page=all>; y también Zephyr Teachout, «Quid Pro Con», réplica a Drutman, en Democracy, 36, 2015, <http://democracyjournal.org/magazine/36/quid-pro-con>.

99. William Luneburg y Thomas Susman, *The Lobbying Manual: A Complete Guide to Federal Law Governing Lawyers and Lobbyists*, Chicago, ABA Section of Administrative Law and Regulatory Practice, 2005.

100. «Lobbying as a Felony», en *Sacramento Daily Union*, 6 de noviembre de 1879, <https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=SDU18791106.2.8>.

101. Lee Drutman, *The Business of America Is Lobbying*, Nueva York, Oxford University Press, 2015, pág. 57. Véanse también los reveladores pasajes de las págs. 49-56, 71, 79 y 218.

102. Lee Drutman, «How Corporate Lobbyists Conquered American Democracy», en *Atlantic*, 20 de abril de 2015, <www.theatlantic.com/business/archive/2015/04/how-corporate-lobbyists-conquered-american-democracy/390822>.

103. *Ibidem*.

104. Base de datos sobre *lobbying*, Center for Responsive Politics, <www.opensecrets.org/lobby> (consultado el 31 de marzo de 2017).

105. Drutman, «How Corporate Lobbyists Conquered American Democracy». De Figueiredo llega también a la conclusión de que las organizaciones empresariales son responsables del grueso del gasto en presión política: más del 84% del gasto total en presión política de los grupos de interés en el nivel federal, y un 86% en el nivel estatal. Véase J. M. de Figueiredo, *The Timing, Intensity, and Composition of Interest Group Lobbying: An Analysis of Structural Policy Windows in the States*, documento de trabajo 10588 de National Bureau of Economic Research (NBER), junio de 2004.

106. Ian Traynor, «30, 000 Lobbyists and Counting: Is Brussels under Corporate Sway?», en *The Guardian*, 8 de mayo de 2014.

107. Jesse Byrnes, «Hillary “Thought It’d Be Fun” to Attend Trump’s Wedding», en *Hill*, 10 de agosto de 2015, <http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/250773-hillary-thought-itd-be-fun-to-attend-trumps-wedding>.

108. Michael Kruse, «Hillary and Donald’s Wild Palm Beach Weekend», en *Politico*, 28 de julio de 2015, <www.politico.com/magazine/story/2015/07/hillary-and-donald-trump-were-once-friends-wedding-120610>.

109. *Citizens United v. FEC*, 558 US 310, 2010.

110. Lawrence Lessig, *Republic, Lost*, Nueva York, Hachette Book Group, 2011, págs. 107-124.

111. Este acertado resumen de lo que piensa Lessig es de Yasmin Dawood. Véase Yasmin Dawood, «Campaign Finance and American Democracy», en *Annual Review of Political Science*, 18, 2015, págs. 329-348, pág. 336.

112. La enorme influencia de los grupos de iguales en el comportamiento individual ha sido constatada en una amplia diversidad de contextos en campos como la medicina, la psicología y la política. Véanse, por ejemplo, Solomon E. Asch, «Opinions and Social Pressure», en *Scientific American*, 193, 5, 1955, pág. 31; Solomon E. Asch, «Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgments», en H. Guetzkow (comp.), *Leadership, and Men*: *Research in Human Relations*, Pittsburgh, Carnegie Press, 1951, págs. 177-190; Susan T. Ennett y Karl E. Bauman, «The Contribution of Influence and Selection to Adolescent Peer Group Homogeneity: The Case of Adolescent Cigarette Smoking», *Journal of Personality and Social Psichology*, 67, 4, 1994, págs. 653-663; y Cass R. Sunstein, David Schkade, Lisa M. Ellman y Andres Sawicki, *Are Judges Political? An Empirical Analysis of the Federal Judiciary*, Washington D. C., Brookings Institution Press, 2007; Herbert Hyman, *Political Socialization*, Nueva York, Free Press, 1959.

113. Ezra Klein, «The Most Depressing Graphic for Members of Congress», en *The Washington Post*, 14 de enero de 2013, <www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/01/14/the-most-depressing-graphic-for-members-of-congress/?utm_term=.420bbfa0a5f6>; y Tim Roemer, «Why Do Congressmen Spend Only Half Their Time Serving Us?», en *Newsweek*, 29 de julio de 2015, <www.newsweek.com/why-do-congressmen-spend-only-half-their-time-serving-us-357995>.

114. Brendan Doherty, *The Rise of the President's Permanent Campaign*, Lawrence, University Press of Kansas, 2012, págs. 16-17.

115. Credit Suisse, «Global Wealth Databook», 2013, pág. 101, <https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=1949208D-E59AF2D9-6D0361266E44A2F8>.

116. Russ Choma, «Millionaires’ Club: For First Time, Most Lawmakers Are Worth $1 Million-Plus», Opensecrets.org, 9 de enero de 2014.

117. Sus historiales formativos son ya, por sí solos, ciertamente impresionantes: al menos, treinta y seis miembros de la Cámara de Representantes de la centésimo undécima legislatura del Congreso de Estados Unidos cursaron sus estudios de grado en las universidades de Stanford, Harvard o Yale (y muchos más recibieron alguna titulación de posgrado por una de esas tres instituciones). Véase Michael Morella, «The Top Ten Colleges for Members of Congress», en *US News and World Report*, 10 de agosto de 2010, <www.usnews.com/news/slideshows/the-top-10-colleges-for-members-of-congress>. Nada menos que una quinta parte de los senadores del centésimo décimo cuarta legislatura del Congreso cursaron sus estudios de grado en alguna de las cuatro universidades siguientes: Harvard, Yale, Stanford o Dartmouth. Véase Aaron Blake, «Where the Senate Went to College — In One Map», en *The Washington Post*, 30 de enero de 2015, <www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/01/30/where-the-senate-went-to-college-in-one-map/?utm_term=.c88fa8c67482>. La información biográfica completa sobre los senadores (y congresistas en general) actuales y anteriores figura en el *Directorio biográfico del Congreso de Estados Unidos*, <http://bioguide.congress.gov/biosearch/biosearch.asp>. La literatura académica sobre este tema es sorprendentemente escasa. Pero un estudio anterior es el de N. Polsby, «The Social Composition of Congress», en Uwe Thayson, Roger H. Davidson y Robert Gerald Livingston (comps.), *The US Congress and the German Bundestag: Comparisons of Democratic Processes*, Boulder, Westview Press, 1990.

118. Arthur B. Gunlicks (comp.), *Campaign and Party Finance in North America and Western Europe*, Boulder, Westview Press, 1993. Para una comparación con Canadá, véase Daniel P. Tokaji, «The Obliteration of Equality in American Campaign Finance Law: A Trans-Border Comparison», documento de trabajo, Ohio State Public Law Working Paper n.º 140, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1746868>.

119. Nick Thompson, «International Campaign Finance: How Do Countries Compare?», CNN, 5 de marzo de 2012, <www.cnn.com/2012/01/24/world/global-campaign-finance>.

120. Clay Clemens, «A Legacy Reassessed: Helmut Kohl and the German Party Finance Affair», en *German Politics*, 9, 2, 2000, págs. 25-50; Erwin K. Scheuch y Ute Scheuch, *Die Spendenkrise-Parteien außer Kontrolle*, Rowohlt Verlag GmbH, 2017.

121. John R. Heilbrunn, «Oil and Water? Elite Politicians and Corruption in France», en *Comparative Politics*, 37, 3, 2005, págs. 277-296; Jocelyn A. J. Evans, «Political Corruption in France», en Martin J. Bull y James L. Newell (comps.), *Corruption in Contemporary Politics*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003, págs. 79-92. Véanse también Aurelien Breeden, «François Fillon, French Presidential Candidate, Is Charged with Embezzlement», en *The New York Times*, 14 de marzo de 2017; Rory Mulholland, «Nicolas Sarkozy Charged with Corruption», en *The Daily Telegraph*, 2 de julio de 2014; Jennifer Thompson, «Chirac Found Guilty of Corruption», en *Financial Times*, 15 de diciembre de 2011; y Ullrich Fichtner: «A Crisis of Democracy Rocks the Fifth Republic», en *Spiegel Online*, 8 de abril de 2013.

122. La última vez que *The Sun* apoyó a un candidato perdedor fue en febrero de 1974, cuando Harold Wilson consiguió catorce escaños más que Edward Heath, pese a perder en votos por un estrecho margen. James Thomas, *Popular Newspapers, the Labour Party and British Politics*, Londres, Routledge, 2005, pág. 73. Aunque Theresa May, la candidata respaldada por *The Sun* en 2017, no conquistó una mayoría suficiente para que su partido gobernara en solitario, sí logró que este se mantuviera en el poder gracias a una coalición con el Partido Unionista Democrático.

123. Esta es, probablemente, una explicación muy general —y, a menudo, pasada por alto— de por qué la frágil coalición sobre la que los socialdemocrátas han cimentado todas sus mayorías (entre obreros industriales, maestros de escuela, mineros del carbón y artistas) pudo perdurar tanto tiempo.

124. W. B. Gallie, «Essentially Contested Concepts», en *Proceedings of the Aristotelian Society*, 56, 1955-1956, págs. 167-198.

125. Steven Levitsky y Lucan Way, *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*, Nueva York, Cambridge University Press, 2010, pág. 12.

126. Entre las mejores descripciones (tanto empíricas como normativas) de lo que yo llamaría liberalismo no democrático, están Colin Crouch, *Post-democracy*, Cambridge, Polity, 2004 (trad. cast.: *Posdemocracia*, Madrid, Taurus, 2004), y Colin Crouch, *Coping with Post-democracy*, Fabian Pamphlets, Londres, Fabian Society, 2000; Christopher Bickerton y Carlo Ivernizzi Accetti, «Populism and Technocracy, Opposites or Complements?», en *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 20, 2, 2017, págs. 186-206; Christopher Bickerton, «Europe's Neo-Madisonians: Rethinking the Legitimacy of Limited Power in a Multi-level Polity», en *Political Studies*, 59, 3, 2011, págs. 659-673.

127. Véase Daniel W. Drezner, *The Ideas Industry: How Pessimists, Partisans, and Plutocrats Are Transforming the Marketplace of Ideas*, Nueva York, Oxford University Press, 2017.

128. Véase «Mehrheit der Deutschen gegen neue Griechen-Milliarden», en *Spiegel Online*, 2 de febrero de 2012.

129. Véanse Fareed Zakaria, *The Future of Freedom*, Nueva York, Norton, 2007 (trad. cast.: *El futuro de la libertad: las democracias «iliberales» en el mundo*, Madrid, Taurus, 2003); y Parag Khanna, *Technocracy in America*, Parag Khanna (autopublicado), 2017.

130. Véanse Richard Tuck, «The Left Case for Brexit», en *Dissent*, 6 de junio de 2016, <www.dissentmagazine.org/online_articles/left-case-brexit>; y Tuck, «Brexit: A Prize in Reach for the Left», en *Policy Exchange*, 17 de julio de 2017, <https://policyexchange.org.uk/pxevents/brexit-a-prize-in-reach-for-the-left>.

3. La democracia se está desconsolidando

1. David Runciman, *The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present*, Princeton, Princeton University Press, 2015, pág. 210.

2. Jeffrey M. Jones, «Americans'Trust in Political Leaders, Public, at New Low», encuesta Gallup, 21 de septiembre de 2016, <www.gallup.com/poll/195716/americans-trust-political-leaders-public-new-lows.aspx>.

3. *Ibidem*.

4. «Confidence in Institutions», encuesta Gallup, 2017, <www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.aspx>. Nótese que se ha incrementado moderadamente desde entonces, hasta el 12% en 2017. No obstante, esto último podría ser reflejo de un repunte coincidente con el comienzo de una nueva presidencia y podría volver a decrecer rápidamente en los próximos años.

5. Véase Roberto Foa y Yascha Mounk, «Are Americans Losing Faith in Democracy?», en *Vox*, 18 de diciembre de 2015, <www.vox.com/polyarchy/2015/12/18/9360663/is-democracy-in-trouble>.

6. En 1972, por ejemplo, era muy superior el número de alemanes que opinaban que los parlamentarios defendían principalmente los intereses de la población que los que creían que priorizaban otros. En 2014, esa proporción se había invertido, y el número de personas que atribuían buenas motivaciones a los políticos se había reducido significativamente. Los alemanes no solo confían menos en sus políticos que antes, sino que también tienen una percepción mucho más negativa de sus aptitudes. En 1972, más de dos tercios de los encuestados en Alemania Occidental creían que se necesitaba mucha preparación para ser parlamentario, y menos de una cuarta parte opinaban que no. En 2014, esas percepciones se habían invertido: más de la mitad de los encuestados creen ahora que no se necesitan aptitudes especiales para ser político, y menos de la cuarta parte opina que los políticos poseen algún talento especial. Véase Thomas Petersen, «Anfag vom Ende der Politikverdrossenheit?», en *Frankfurter Allgemeinen Zeitung*, 66, 19, 5 de marzo de 2014.

7. En todas las democracias de larga tradición de Europa occidental ha disminuido sensiblemente la participación electoral en las últimas décadas. Y el número de afiliados a los partidos políticos se ha desplomado con mayor rapidez si cabe. En Francia, por ejemplo, en 1978 había 1, 7 millones de afiliados a partidos políticos; en 2009, ya no llegaban siquiera al millón. Ingrid Van Biezen, Peter Mair y Thomas Poguntke, «Going, Going... Gone? The Decline of Party Membership in Contemporary Europe», en *European Journal of Political Research*, 51, 1, 2012, págs. 24-56, pág. 44.

8. Roberto Stefan Foa y Yascha Mounk, «The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect», en *Journal of Democracy*, 27, 3, 2016, págs. 10-12.

9. Jon Henley, «Chirac's Popularity Hits New Low as Public Loses Faith in Politicians», en *The Guardian*, 7 de junio de 2005, <www.theguardian.com/world/2005/jun/08/france.jonhenley>.

10. «Support for Sarkozy Hits Record Low», en *France 24*, 19 de abril de 2011.

11. «Into the Abyss», en *The Economist*, 5 de noviembre de 2016.

12. Jeremy Berke, «Emmanuel Macron’s Approval Rating Is Taking a Massive Nosedive», en *Business Insider*, 22 de agosto de 2017, <www.businessinsider.com/emmanuel-macron-poll-approval-rating-trump-2017-8>.

13. Comunicación personal.

14. Lynn Vavreck, «The Long Decline of Trust in Government, and Why That Can Be Patriotic», en *The New York Times*, 3 de julio de 2015, <www.nytimes.com/2015/07/04/upshot/the-long-decline-of-trust-in-government-and-why-that-can-be-patriotic.html>.

15. David Easton, «A Re-assessment of the Concept of Political Support», en *British Journal of Political Science*, 5, 4, 1975, págs. 435-457.

16. Larry Diamond, «Facing Up to the Democratic Recession», en *Journal of Democracy*, 26, 1, 2015, págs. 141-155. Véanse también Freedom House, *Freedom in the World 2016: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties*, Rowman & Littlefield, 2016; y Freedom House, *Freedom in the World 2017: Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy*, Rowman & Littlefield, 2017.

17. Puede que baste entonces con que un demagogo prometa algo que *sea* importante para esos ciudadanos —una victoria simbólica contra un enemigo exterior, tal vez, o simplemente una ligera subida de salarios— para que estos renuncien a aspectos claves de la democracia.

18. Esto no significa que la mayoría de los *millennials* se opongan activamente a la democracia. En algunas críticas a esta tesis se ha señalado que la puntuación media de la valoración que los jóvenes dan al sistema democrático no ha cambiado apreciablemente. Erik Voeten, «That Viral Graph about Millennials' Declining Support for Democracy? It's Very Misleading», en *The Washington Post*, 5 de diciembre de 2016. Una sustancial minoría de ellos todavía considera crucial vivir en una democracia. Y la mayoría del resto opina que está bien, que es algo deseable, aunque no les parezca especialmente importante. Pero el contraste con las generaciones de más edad no deja de ser impactante. Si incluimos en el grupo a las personas que consideran razonablemente importante el hecho de vivir en una democracia (es decir, todas aquellas que lo valoran con puntuaciones que van del ocho al diez), aproximadamente nueve de cada diez estadounidenses de más edad juzgan importante vivir en una democracia, mientras que menos de seis de cada diez de los más jóvenes piensan lo mismo. El rápido aumento del número de personas con una actitud neutra ante la democracia (las que la puntúan entre cuatro y siete) es más llamativo aún. Así, mientras solo uno de cada diez estadounidenses de más edad se sitúa en ese grupo, casi cuatro de cada diez jóvenes dicen tener un sentimiento neutro. Véase Yascha Mounk y Roberto Foa, «Yes, People Really Are Turning Away from Democracy», en *The Washington Post*, 8 de diciembre de 2016.

19. Buen ejemplo de ello es Nigeria, donde un 22% de los *millennials* catalogó la democracia como muy importante (diez), frente a un 15% de las personas de más de sesenta y cinco años. Sin embargo, aproximadamente el mismo porcentaje de *millennials* que de personas de más de sesenta y cinco años asignaron una importancia relativamente baja (de uno a cinco) al sistema democrático.

20. Amanda Taub, «How Stable Are Democracies? “Warning Signs Are Flashing Red”», en *The New York Times*, 29 de noviembre de 2016.

21. Estos datos son tan desconcertantes que resulta tentador hallar un modo de descontarlos.

Por ejemplo, ¿no son siempre los jóvenes más críticos con su sistema político que las personas mayores? No, siempre no. Aunque no disponemos aún de series temporales de datos que nos permitan contrastar la hipótesis de que los jóvenes de hoy son menos proclives a declarar que vivir en democracia es importante para ellos de lo que lo eran sus padres o sus abuelos cuando tenían su misma edad, sí contamos con datos de ese tipo para las opiniones negativas sobre la democracia. Y lo que muestran no se presta a ambigüedad alguna: tanto en Europa como en Estados Unidos, los encuestados de dieciséis a veinticuatro años de edad son mucho más críticos con la democracia hoy de lo que lo eran las personas de su misma edad dos décadas atrás.

¿Y no debería tranquilizarnos el hecho de que una clara mayoría de los jóvenes siga pensando que la democracia es un buen sistema de gobierno? Para nada. Es cierto que el 23% de los *millennials* estadounidenses que afirman abiertamente que la democracia es una forma mala o muy mala de gobernar su país representan todavía una minoría. Pero desde una perspectiva internacional, esa es ya una cifra muy alta. La media más elevada registrada en un país apenas es un poco superior: se trata de Rusia, donde cerca de un 26% de los encuestados dicen tener una percepción mala similar de la democracia. Sin embargo, en el conjunto del planeta, solo uno de cada diez encuestados (aproximadamente) comparten esa visión negativa de la democracia, y ahí se incluyen encuestados de muchos países que son hoy dictaduras estables o que han sufrido frecuentes golpes militares en el pasado.

22. Michael Ignatieff, «Enemies vs. Adversaries», en *The New York Times*, 16 de octubre de 2013, <www.nytimes.com/2013/10/17/opinion/enemies-vs-adversaries.html?mcubz=3>. Véase la elegante y reveladora reflexión sobre el fracaso político, también de Ignatieff, *Fire and Ashes*, Cambridge, Harvard University Press, 2013 (trad. cast.: *Fuego y cenizas: éxito y fracaso en política*, Madrid, Taurus, 2014).

23. Ignatieff, «Enemies vs. Adversaries», art. cit.

24. «Jörg Haider: Key Quotes», en *BBC News*, 2 de febrero de 2000, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/628282.stm>.

25. «Wilders Warns Australia of “Dangerous” Islam», Al Jazeera, 20 de febrero de 2013, <www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/02/2013220145950228630.html>.

26. Gavin Jones, «Insight: Beppe Grillo—Italian Clown or Political Mastermind?», Reuters, 7 de marzo de 2013, <www.reuters.com/article/us-italy-vote-grillo-insight-idUSBRE92608G20130307>.

27. El partido depende ahora de fondos procedentes de la difusión de noticias falsas inspiradas por la desinformación rusa, por lo que no es de extrañar que, por mencionar un ejemplo, en un vídeo reciente de una fuente informativa controlada por el M5S se afirmara que Turquía y Estados Unidos están conspirando en secreto para impedir que Rusia luche contra Estado Islámico. Véase Alberto Nardelli y Craig Silverman, «Italy’s Most Popular Political Party Is Leading Europe in Fake News and Kremlin Propaganda», BuzzFeed, 29 de noviembre de 2016, <www.buzzfeed.com/albertonardelli/italys-most-popular-political-party-is-leading-europe-in-fak?utm_term=.is5qZZWjgy#.ekqA77x1jD>. El partido se ha ido alejando también de sus iniciales raíces izquierdistas y algunos de sus políticos claves han venido haciendo públicos en estos últimos meses eslóganes con un sesgo antiinmigración cada vez más vehemente. Véase Stefano Pitrelli y Michael Birnbaum, «Anti-immigrant, AntiEuro Populists Gain Ground in Italy as Prime Minister Resigns», en *The Washington Post*, 5 de diciembre de 2016, <www.washingtonpost.com/world/as-italysleader-exits-a-door-opens-for-anti-elite-populists/2016/12/05/9eb4a5d6-ba83-11e6-ae79-bec72d34f8c9_story.html>.

28. Hortense Goulard, «Nicolas Sarkozy Says Climate Change Not Caused by Man», en *Politico*, 14 de septiembre de 2016, <www.politico.eu/article/nicolas-sarkozy-says-climate-change-not-caused-by-man-cop-21>.

29. Véase David Lublin, *The Paradox of Representation: Racial Gerrymandering and Minority Interests in Congress*, Princeton, Princeton University Press, 1999. Atención también a los interesantes pasajes dedicados a cómo Barack Obama intentó manipular su propia circunscripción electoral de la Cámara de Representantes de Illinois en Ryan Lizza, «The Obama Memos», en *The New Yorker*, 30 de enero de 2012.

30. Richard Moberly, «Whistleblowers and the Obama Presidency: The National Security Dilemma», en *Employee Rights and Employment Policy Journal*, 16, 1, 2012, págs. 51-141; Binyamin Appelbaum y Michael D. Shear, «Once Skeptical of Executive Power, Obama Has Come to Embrace It», en *The New York Times*, 13 de agosto de 2016, <www.nytimes.com/2016/08/14/us/politics/obama-era-legacy-regulation.html?_r=0>.

31. Thomas E. Mann y Norman J. Ornstein, *It's Even Worse than It Looks: How the American Constitutional System Collided with the New Politics of Extremism*, Nueva York, Basic Books, 2016.

32. Associated Press, «McCain Counters Obama “Arab” Question», YouTube, 11 de octubre de 2008, <www.youtube.com/watch?v=jrnRU3ocIH4>.

33. Carl Hulse, «In Lawmaker's Outburst, a Rare Breach of Protocol», en *The New York Times*, 9 de septiembre de 2009.

34. Sarah Palin, Newt Gingrich, David Vitter y Mike Huckabee son algunos de los políticos republicanos que difundieron la teoría de la conspiración sobre la partida de nacimiento de Obama de manera explícita, o bien la respaldaron implícitamente. Glenn Kessler, «More "Birther" Nonsense from Donald Trump and Sarah Palin», en *The Washington Post*, 12 de abril de 2011; Brian Montopoli, «New Gingrich Pandering to Birthers, White House Suggests», en *CBS News*, 13 de septiembre de 2010; Nia-Malika Henderson, «Gingrich Says Birther Claims Not Racist, Are Caused by Obama's "Radical" Views», en *The Washington Post*, 29 de mayo de 2012; Andy Barr, «Vitter Backs Birther Suits», en *Politico*, 13 de julio de 2010; Michael D. Shear, «Huckabee Questions Obama Birth Certificate», en *The New York Times* (sitio web), 1 de marzo de 2011. Véase una sólida crítica de Jeff Flake contra la disposición de su propio partido a seguir el juego a los «conspiranoicos» en el tema de la partida de nacimiento del presidente en Jeff Flake, *Conscience of a Conservative: A Rejection of Destructive Politics and a Return to Principle*, Nueva York, Random House, 2017, págs. 31-33.

35. Ante la dificultad de precisar una definición de lo que constituye una táctica de *filibusterismo*, uso aquí el número de mociones de solicitud de clausura del debate registradas en cada una de las legislaturas del Congreso federal. Los Senados de la LXXXVIII a la XC Legislatura, cuando el presidente del país era Lyndon B. Johnson, celebraron dieciséis votaciones sobre solicitudes de clausura del debate, mientras que los Senados de la CXI a la CXIV Legislatura (bajo la presidencia de Obama) celebraron quinientas seis votaciones sobre ese mismo tipo de moción. Véase Molly Reynolds, Curtlyn Kramer, Nick Zeppos, Emma Taem, Tanner Lockhead, Michael Malbin, Brendan Glavin, Thomas E. Mann, Norman J. Ornstein, Raffaela Wakeman, Andrew Rugg y el Campaign Finance Institute, *Vital Statistics on Congress*, informe, Institución Brookings, 7 de septiembre de 2017, <www.brookings.edu/multi-chapter-report/vital-statistics-on-congress>.

36. Garland fue ratificado como juez federal por el «circuito» judicial de Washington D. C. por un Senado de mayoría republicana en 1996, con setenta y seis votos a favor y veintitrés en contra. El Colegio de Abogados de Estados Unidos lo consideró «altamente cualificado por unanimidad». Melanie Garunay, «The American Bar Association Gives Its Highest Rating to Chief Judge Garland», Casa Blanca, 21 de junio de 2016.

37. Patrick Caldwell, «Senate Republicans Are Breaking Records for Judicial Obstruction», en *Mother Jones*, 6 de mayo de 2016.

38. Richard L. Hasen, «Race or Party? How Courts Should Think about Republican Efforts to Make It Harder to Vote in North Carolina and Elsewhere», en *Harvard Law Review Forum*, 127, 2014; Anthony J. McGann, Charles Anthony Smith, Michael Latner y Alex Keena, *Gerrymandering in America: The House of Representatives, the Supreme Court, and the Future of Popular Sovereignty*, Nueva York, Cambridge University Press, 2016; Tim Dickinson, «How Republicans Rig the Game», en *Rolling Stone*, 11 de noviembre de 2013, <www.rollingstone.com/politics/news/how-republicans-rig-the-game-20131111>. Aunque los demócratas llevan tiempo jugando también a ese juego, no han sido tan culpables de ese mismo pecado en estos últimos años, en parte porque su debilidad en los legislativos estatales de todo el país no les ha servido en bandeja las mismas oportunidades de practicar similares correrías.

39. William Wan, «How Republicans in North Carolina Created a “Monster” Voter ID Law», en *Chicago Tribune*, 2 de septiembre de 2016, <www.chicagotribune.com/news/nationworld/politics/ct-north-carolina-voter-id-law-20160902-story.html>.

40. Alison Thoet, «What North Carolina’s Power-Stripping Laws Mean for New Gov. Roy Cooper», en *PBS Newshour*, 3 de enero de 2017, <www.pbs.org/newshour/updates/north-carolinas-power-stripping-laws-mean-new-govroy-cooper>. Desde entonces, ha habido complejas idas y venidas a propósito de la legalidad de esa maniobra. Véanse Mitch Smith, «North Carolina Judges Suspend Limit on Governor’s Powers», en *The New York Times*, 8 de febrero de 2017, <www.nytimes.com/2017/02/08/us/politics/north-carolina-judges-suspend-limit-on-governors-powers.html?_r=0>; Jason Zengerle, «Is North Carolina the Future of American Politics?», en *The New York Times*, 20 de junio de 2017, <www.nytimes.com/2017/06/20/magazine/is-north-carolina-the-future-of-american-politics.html>; Mark Joseph Stern, «North Carolina Republicans Are Trying to Strip the Governor of His Power to Challenge Laws», en *Slate*, 21 de junio de 2017, <www.slate.com/blogs/the_slatest/2017/06/21/north_carolina_republicans_budget_prevents_governor_
Colin Campbell, «Cooper Vetoes Budget — And Hints at Another Lawsuit, as Senate Overrides», en *News & Observer*, 27 de junio de 2017, <www.newsobserver.com/news/politics-government/state-politics/article158409209.html>.

41. Dan Roberts, Ben Jacobs y Sabrina Siddiqi, «Donald Trump Threatens to Jail Hillary Clinton in Second Presidential Debate», en *The Guardian*, 10 de octubre de 2016; Demetri Sevastoplou y Barney Jopson, «Trump Refuses to Say If He Will Accept Election Result in Final Debate», en *Financial Times*, 20 de octubre de 2016; Sydney Ember, «Can Libel Laws Be Changed Under Trump?», en *The New York Times*, 13 de noviembre de 2016; y Madeline Conway, «In Twitter Attack on New York Times, Trump Floats Changing Libel Laws», en *Politico*, 30 de marzo de 2017; Simon Saradzhyan, Natasha Yefimova-Trilling y Ted Siefer, «How Trump Invited Putin to Hack the Election. Every Last Utterance», en *Newsweek*, 16 de julio de 2017; Anthony D. Romero, «Donald Trump: A One-Man Constitutional Crisis», en *Medium*, 13 de julio de 2016, <https://medium.com/acluelection2016/donald-trump-a-one-man-constitutional-crisis-9f7345e9d376>.

42. Justin Levitt, «A Comprehensive Investigation of Voter Impersonations Finds 31 Credible Incidents Out of One Billion Ballets Cast», en *The Washington Post*, Wonkblog, 6 de agosto de 2014, <www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/08/06/a-comprehensive-investigation-of-voter-impersonation-finds-31-credible-incidents-out-of-one-billion-ballots-cast/?utm_term=.9935eee8566d>; y Maggie Koerth-Baker, «The Tangled Story behind Trump's False Claims of Voter Fraud», FiveThirtyEight (sitio web), 11 de mayo de 2017, <https://fivethirtyeight.com/features/trump-noncitizen-voters>; Fred Barbash, «Appeals Court Judges Rebuke Trump for "Personal Attacks" on Judiciary, "Intimidation"», en *The Washington Post*, 16 de marzo de 2017; Michael C. Bender, «After Setback on Sanctuary Cities Order, Trump Attacks "Messy" Federal Court System», en *The Wall Street Journal*, 26 de abril de 2017; Louis Nelson, «Trump Likens Intel Community to Russia in Renewed Barrage Against Agencies», en *Politico*, 15 de febrero de 2017; Peter Schroeder, «Report: Trump Pressed Argentina's President about Stalled Building Project», en *Hill*, 21 de noviembre de 2016; Susanne Craig y Eric Lipton, «Trust Records Show Trump Is Still Closely Tied to His Empire», en *The New York Times*, 3 de febrero de 2017; y Jeremy Nevook, «Trump's Interests vs. America's, Dubai Edition», en *Atlantic*, 9 de agosto de 2017, <www.theatlantic.com/business/archive/2017/08/donald-trump-conflicts-of-interests/508382>; Domenico Montanaro, «6 Strongmen Trump Has Praised — and the Conflicts It Presents», NPR (sitio web), 2 de mayo de 2017, <www.npr.org/2017/05/02/526520042/6-strongmen-trumps-praised-and-the-conflicts-it-presents>.

43. «Trump Wiretapping Claim: Did Obama Bug His Successor?», en *BBC News*, 20 de marzo de 2017, <www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-39172635>; Amy B. Wang, «Trump Lashes Out at “So-Called Judge” Who Temporarily Blocks Travel Ban», en *The Washington Post*, 4 de febrero de 2017; CNN Staff, «Timeline of Donald Trump Jr.’s Meeting Revelations», CNN, 4 de agosto de 2017, <http://edition.cnn.com/2017/08/01/politics/timeline-donald-trump-jr-/index.html>; Donald J. Trump, tuit del 17 de febrero de 2017, 5:48 PM, <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/832708293516632065?lang=env>; Donald J. Trump, tuit del 28 de junio de 2017, 9:06 a. m., <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/880049704620494848>; Matthew Rosenberg, Maggie Haberman y Adam Goldman, «2 White House Officials Helped Give Nunes Intelligence Reports», en *The New York Times*, 30 de marzo de 2017, <www.nytimes.com/2017/03/30/us/politics/devin-nunes-intelligence-reports.html?_r=0>; Michael D. Shear y Matt Apuzzo, «FBI Director James Comey Is Fired by Trump», en *The New York Times*, 9 de mayo de 2017, <www.nytimes.com/2017/05/09/us/politics/james-comey-fired-fbi.html>; Donald J. Trump, tuit del 12 de mayo de 2017, 8:26 a. m., <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/863007411132649473>.

44. Alec Tyson y Shiva Maniam, «Behind Trump’s Victory: Divisions by Race, Gender, Education», Pew Research Center, 9 de noviembre de 2016, <www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/behind-trumps-victory-divisions-by-race-gender-education>; «EU Referendum: The Result in Maps and Charts», en *BBC News*, junio de 2016, <www.bbc.com/news/uk-politics-36616028>.

45. «M5S secondo partito nei sondaggi: ma tra i giovani e la prima scelta», en *L'Espresso*, 3 de febrero de 2016, <http://espresso.repubblica.it/palazzo/2016/02/03/news/m5s-secondo-partito-nei-sondaggi-ma-tra-i-giovani-e-la-prima-scelta-1.248910>. Véanse también Tristan Quinault-Maupoli, «Les jeunes plébiscitent Le Pen et Mélenchon, les cadres votent Macron», en *Le Figaro*, 24 de abril de 2017; Víctor Ruiz de Almirón López, «Podemos se impone entre los jóvenes y ya muestra más fidelidad que el PSOE», en *ABC*, 5 de mayo de 2016; y Emilia Landaluce, «¿A quién votan los jóvenes?», en *El Mundo*, 25 de abril de 2016.

46. Véase Ben Kentish, «Nearly Half of Young French Voters Backed Marine Le Pen, Projections Suggest», en *The Independent*, 7 de mayo de 2017; Emily Schultheis, «Marine Le Pen's Real Victory», en *Atlantic*, 7 de mayo de 2017, <www.theatlantic.com/international/archive/2017/05/le-pen-national-front-macron-france-election/525759>; y Anne Muxel, «Les jeunes qui votent pour la première fois préferent Marine Le Pen», en *Slate.fr*, 24 de marzo de 2017, <www.slate.fr/story/141710/jeunes-presidentielle>. Véase también el elevado apoyo recibido por Le Pen en elecciones regionales previas: Claire Sergent y Katy Lee, «Marine Le Pen's Youth Brigade», en *Foreign Policy*, 7 de octubre de 2016; y Joseph Bamat, «Mélenchon and Le Pen Win Over Youth in French Vote», en *France 24*, 24 de abril de 2017, <www.france24.com/en/20170424-france-presidential-election-youth-vote-melenchon-le-pen>; y Schultheis, «Marine Le Pen's Real Victory». Compárese con Jonathan Bouchet-Petersen y Laurent Troude, «Qui sont les 21, 4% d'électeurs de Marine Le Pen», en *Libération*, 24 de abril de 2017, <https://oeilsurlefront.liberation.fr/les-idees/2017/04/24/qui-sont-les-214-d-electeurs-de-marine-le-pen_1565123>.

47. Véase Carla Bleiker, «Young People Vote Far-Right in Europe», en *Deutsche Welle*, 14 de diciembre de 2015, <www.dw.com/en/young-people-vote-far-right-in-europe/a-18917193>; Benjamin Reuter, «“Right-Wing Hipsters” Increasingly Powerful in Austria», en *Huffington Post*, 20 de mayo de 2016, <www.huffingtonpost.com/entry/right-wing-hipsters-increasingly-powerful-in-austria_us_573e0e07e4b0646cbeec7a07>; «Populism in Europe: Sweden», en *Demos*, 23 de febrero de 2012, <www.demos.co.uk/project/populism-in-europe-sweden>; Alexandros Sakellariou, *Golden Dawn and Its Appeal to Greek Youth*, Friedrich Ebert Stiftung, julio de 2015, <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/athen/11501.pdf>; Veronika Czina, *The Rise of Extremism among the Youth of Europe: The Case of Hungary’s Jobbik Party*, Project for Democratic Union, 29 de noviembre de 2013, <www.democraticunion.eu/2013/11/popularity-extremism-among-youth-europe-case-hungarys-jobbik-party>; y Hillary Pilkington, «Are Young People Receptive to Populist and Radical Right Political Agendas?», en *MYPLACE Policy Forum*, 20 de noviembre de 2014, <www.fp7-myplace.eu/documents/policy-forum/Policy%20Forum,%20Session%202%20presentation%20v.8.pdf>.

48. Matthew Smith, «Theresa May Is Britain's Most Popular Politician», YouGov, 15 de agosto de 2016, <www.theguardian.com/politics/2017/jun/10/jeremy-corbyn-youth-surge-votes-digital-activists>. Nótese, sin embargo, que hay datos posteriores que indican que la subida de participación de los jóvenes en las elecciones de 2017 tal vez estuviera significativamente exagerada en los sondeos iniciales a pie de urna.

49. Emma Fidel, «White People Voted to Elect Donald Trump», en *Vice News*, 9 de noviembre de 2016, <https://news.vice.com/story/white-people-voted-to-elect-donald-trump>. También vale la pena señalar que, aunque Clinton ganó entre la franja de los votantes jóvenes, sobre todo gracias a la enorme ventaja que tuvo sobre su contrincante entre los electores negros y latinos de esa edad, su margen total de victoria fue menor que el obtenido por Barack Obama en 2012. Véase Emily Richmond, Mikhail Zinshteyn y Natalie Gross, «Dissecting the Youth Vote», en *Atlantic*, 11 de noviembre de 2016, <www.theatlantic.com/education/archive/2016/11/dissecting-the-youth-vote/507416>.

50. Sobre las elecciones en Polonia, véase Frances Millard, *Democratic Elections in Poland, 1991-2007*, Londres, Routledge, 2010; sobre el PIB de Polonia, véase «Poland GDP», en *Trading Economics*, 2017, <www.tradingeconomics.com/poland/gdp>; sobre la activa sociedad civil de Polonia, véanse Grzegorz Ekiert y Jan Kubik, «Civil Society in Poland», ponencia presentada en el congreso internacional The Logic of Civil Society in New Democracies: East Asia and East Europe, Taipéi (Taiwán), 5-7 de junio de 2009; Grzegorz Ekiert y Roberto Foa, «Civil Society Weakness in Post-Communist Europe: A Preliminary Assessment», en *Carlo Alberto Notebooks*, 198, 2011; y Grzegorz Ekiert y Jan Kubik, *Rebellious Civil Society: Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland, 1989-1993*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2001. Por último, sobre la prensa y la educación superior en Polonia, véanse Frances Millard, «Democratization and the Media in Poland 1989-97», en *Democratization*, 5, 2, 1998, págs. 85-105; J. Reichel y A. Rudnicka, «Collaboration of NGOs and Business in Poland», en *Social Enterprise Journal*, 5, 2, 2009, págs. 126-140; y Marek Kwiek, «From System Expansion to System Contraction: Access to Higher Education in Poland», en *Comparative Education Review*, 57, 3, 2013, págs. 553-576.

51. *Briefing No 20: Democracy and Respect for Human Rights in the Enlargement Process of the European Union*, Parlamento Europeo, 1 de abril de 1998, <www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/20a2_en.htm> (trad. cast.: *Ficha temática n.° 20: la democracia y la defensa de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la Unión Europea*, <www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/20a2_es.htm>).

52. Por ejemplo, Daniel Treisman, destacado estudioso en este campo, seguía considerando, a las puertas del verano de 2014, que Polonia era una «democracia consolidada». Daniel Treisman, «Lessons from 25 Years of Post-Communism: The Importance of Reform, Democracy, and Geography», en *The Washington Post*, Monkey Cage, 10 de junio de 2014, <www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/06/10/lessons-from-25-years-of-post-communism-the-importance-of-reform-democracy-and-geography/?utm_term=.b4026c436666>. Véase también Radosław Markowski, «Party System Institutionalization in New Democracies: Poland — A Trend-Setter with No Followers», en Paul G. Lewis (comp.), *Party Development and Democratic Change in Post-communist Europe*, Portland, Frank Cass, 2001, págs. 55-77.

53. Rick Lyman, «Secret Tapes of Politicians Cause a Stir in Poland», en *The New York Times*, 16 de junio de 2014, <www.nytimes.com/2014/06/17/world/europe/secret-tapes-of-politicians-cause-a-stir-in-poland.html>.

54. «Polish PM Sacks Coalition Partner Ahead of Early Elections», en *Deutsche Welle*, 13 de agosto de 2007; «Program Prawa i Sprawidliwosci 2014», <http://pis.org.pl/document/archive/download/128>. Véanse también David Ost, «Regime Change in Poland, Carried Out from Within», en *The Nation*, 8 de enero de 2016, <www.thenation.com/article/regime-change-in-poland-carried-out-from-within>; y Gerhard Gnauck, «The Most Powerful Man in Poland», en *Deutsche Welle*, 25 de octubre de 2016.

55. Véanse Guy Verhofstadt, «Is Poland a Failing Democracy?», en *Politico*, 13 de enero de 2016, <www.politico.eu/article/poland-democracy-failing-pis-lawand-justice-media-rule-of-law>; Neil Ascherson, «The Assault on Democracy in Poland Is Dangerous for the Poles and All Europe», en *The Guardian*, 17 de enero de 2016, <www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/17/poland-rightwing-government-eu-russia-democracy-under-threat>; y The Editorial Board, «Poland's Constitutional Crisis», en *The New York Times*, 18 de marzo de 2016, <www.nytimes.com/2016/03/18/opinion/polands-constitutional-crisis.html?_r=0>.

56. Annabelle Chapman, *Pluralism under Attack: The Assault on Press Freedom in Poland,* informe de Freedom House, junio de 2017, <https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_Poland_Report_Final_2017.pdf>. Véase también Alison Smale y Joanna Brendt, «Poland's Conservative Government Puts Curbs on State TV News», en *The New York Times*, 3 de julio de 2016, <www.nytimes.com/2016/07/04/world/europe/polands-conservative-government-puts-curbs-on-state-tv-news.html>.

57. Henry Foy y Zosia Wasik, «Poland: An Inconvenient Truth», en *Financial Times*, 1 de mayo de 2016, <www.ft.com/content/4344ca44-0b94-11e6-9cd4-2be898308be3>. Véase también Chapman, «Pluralism under Attack», art. cit.

58. Sobre Jan Gross, véase Alex Duval Smith, «Polish Move to Strip Holocaust Expert of Award Sparks Protests», en *The Guardian*, 13 de febrero de 2016, <www.theguardian.com/world/2016/feb/14/academics-defend-historian-over-polish-jew-killings-claims>; sobre la ley que ilegaliza ciertas expresiones en el lenguaje público, véase «Poland Approves Bill Outlawing Phrase "Polish Death Camps"», en *The Guardian*, 16 de agosto de 2016, <www.theguardian.com/world/2016/aug/16/poland-approves-bill-outlawing-phrase-polish-death-camps>.

59. «Si esta ley entra finalmente en vigor —declaró la Fundación Helsinki de Derechos Humanos en un comunicado—, limitará sensiblemente la posibilidad de organizar manifestaciones de protesta y concentraciones espontáneas», Marcin Goettig, «Polish Ombudsman, Rights Activists Rap Freedom of Assembly Bill», Reuters, 30 de noviembre de 2016. Debido, en parte, a esas quejas internacionales, el presidente polaco terminó rechazando ese proyecto de ley. Véase también Chapman, «Pluralism under Attack», art. cit.

60. Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), *Draft Opinion on Amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland*, 26 de febrero de 2016, <http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/kraj/komisjawenecka.pdf>. Véase también Jan Cienski y Maia De La Baume, «Poland's "Rule of Law in Danger"», en *Politico*, 1 de marzo de 2016, <www.politico.eu/article/poland-kaczynski-szydlo-tribunal-constitution-crisis>.

61. Verhofstadt, «Is Poland a Failing Democracy?», art. cit.

62. Jan-Werner Müller, «The Problem with Poland», en *New York Review of Books*, 11 de febrero de 2016, <www.nybooks.com/daily/2016/02/11/kaczynski-eu-problem-with-poland>.

63. Estrictamente hablando, con el 23, 7%, el apoyo entre los *millennials* estadounidenses era un poco superior al registrado entre el conjunto de la población en Polonia. Todas las cifras previas están tomadas de la *Encuesta mundial de valores*.

64. Sobre Andrzej Lepper, véanse Natalja Reiter, «Ich, Der Diktator», en *Zeit*, 17 de junio de 2004, <www.zeit.de/2004/26/Polen/komplettansicht>; Vanessa Gerra, «Andrzej Lepper, at 57; Populist Polish Politician»», en *The Boston Globe*, 6 de agosto de 2011, <http://archive.boston.com/bostonglobe/obituaries/articles/2011/08/06/andrzej_lepper_at_57_populist_p Clare McManus-Czubińska, William L. Miller, Radosław Markowski y Jacek Wasilewski, «The New Polish "Right"?», en *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, 19, 2, 2003, págs. 1-23. Sobre la Liga de las Familias Polacas, véase «Poland's Right-wingers: On the Rise», en *The Economist*, 12 de diciembre de 2002, <www.economist.com/node/1494297>.

Parte II. Orígenes

1. Una herramienta útil que nos permite calcular el punto de ebullición del agua a diferentes altitudes es <www.csgnetwork.com/h2oboilcalc.html>.

2. Bertrand Russell, *The Problems of Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, 1912, pág. 63 (trad. cast.: *Los problemas de la filosofía*, Barcelona, Labor, 1978). Véase también la «Introducción» del presente libro.

3. Sobre las condiciones de validez, véanse Jeffrey W. Lucas, «Theory-testing, Generalization, and the Problem of External Validity», en *Sociological Theory*, 21, 3, 2003, págs. 236-253; y Martha Foschi, «On Scope Conditions», en *Small Group Research*, 28, 4, 1997, págs. 535-555.

4. Las redes sociales

1. El estudio definitivo del ascenso de la imprenta y de sus efectos sigue siendo el de Elizabeth L. Eisenstein, *The Printing Press as an Agent of Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 1980 (trad. cast.: *La imprenta como agente de cambio*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010). Sobre la «comunicación de uno a muchos», véanse también Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, *The Coming of the Book: The Impact of Printing 1450-1800*, Nueva York, Verso, 1976 (trad. cast.: *La aparición del libro*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005), y Clay Shirky, *Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations*, Nueva York, Penguin, 2008.

2. Para un comentario más a fondo sobre las tesis de Eisenstein y también sobre las de Febvre y Martin, véase Jeremiah E. Dittmar, «Information Technology and Economic Change: The Impact of the Printing Press», en *Quarterly Journal of Economics*, 126, 3, 2011, págs. 1133-1172.

3. Andrew Keen, «Can the Internet Save the Book?», en *Salon*, 9 de julio de 2010, <www.salon.com/2010/07/09/clay_shirky>.

4. Helen Waters, «Entering the Second Age of Enlightenment: Heather Brooke at TEDGlobal 2012», TEDblog, 28 de junio de 2012, <http://blog.ted.com/entering-the-second-age-of-enlightenment-heather-brooke-at-tedglobal-2012>.

5. Véase Jib Fowles, «On Chronocentrism», en *Futures*, 6, 1, 1974, págs. 65-68.

6. Shirky, *Here Comes Everybody*, *op. cit*., pág. 87. Para una descripción increíblemente clarividente de la comunicación de muchos a muchos, véase también Chandler Harrison Stevens, *Many-to-Many Communication*, documento de trabajo, Sloan WP 1225-81, Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, MIT, 1981, <https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/48404/manytomanycommun00stev.pdf>.

7. Véanse Bruce A. Williams y Michael X. Delli Carpini, «Unchained Reaction: The Collapse of Media Gatekeeping and the Clinton-Lewinsky Scandal», en *Journalism*, 1, 1, 2000, págs. 61-85; Philip Seib y Dana M. Janbek, *Global Terrorism and New Media: The Post-Al Qaeda Generation*, Nueva York, Routledge, 2011; Manuela Caiani y Linda Parenti, *European and American Extreme Right Groups and the Internet*, Surrey, Ashgate, 2013 (Routledge, 2016).

8. Larry Diamond, «Liberation Technology», en *Journal of Democracy*, 21, 3, 2010, reimpreso en Larry Diamond y Marc F. Plattner (comps.), *Liberation Technology*: *Social Media and the Struggle for Democracy*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2012, pág. 70.

9. *Ibidem*, pág. 74.

10. Citado en Evgeny Morozov, *Net Delusion*, Nueva York, PublicAffairs, 2011, pág. 1. Sullivan fue, en realidad, un adelantado en ese sentido, pues tomó ya como base la fallida Revolución Verde en Irán. Véase Andrew Sullivan, «The Revolution Will Be Twittered», en *Atlantic*, 13 junio de 2009, <www.theatlantic.com/daily-dish/archive/2009/06/the-revolution-will-be-twittered/200478>.

11. Citado en Morozov, *Net Delusion, op. cit*., pág. 2.

12. Shirky, *Here Comes Everybody, op. cit*.

13. Sobre el Tea Party, véase Vanessa Williamson, Theda Skocpol y John Coggin, «The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism», en *Perspectives on Politics*, 9, 1, 2011, págs. 25-43, pág. 28. Sobre Occupy Wall Street y Black Lives Matter, véanse Monica Anderson y Paul Hitlin, «Social Media Conversations about Race», Pew Research Center, 15 de agosto de 2016, <http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2016/08/PI_2016.08.15_Race-and-Social-Media_FINAL.pdf>; Bijan Stephen, «Social Media Helps Black Lives Matter Fight the Power», en *Wired*, noviembre de 2015, <www.wired.com/2015/10/how-black-lives-matter-uses-social-media-tofight-the-power>; Michael D. Conover, Emilio Ferrara, Filippo Menczer y Alessandro Flammini, «The Digital Evolution of Occupy Wall Street», en *PLoS ONE*, 8, 5, 2013; y Munmun De Choudhury, Shagun Jhaver, Benjamin Sugar e Ingmar Weber, «Social Media Participation in an Activist Movement for Racial Equality», ponencia presentada en el X Congreso Internacional de la AAAI sobre Web and Social Media, Colonia, mayo de 2016.

14. Thomas L. Friedman, «The Square People, Part 1», en *The New York Times*, 13 de mayo de 2014, <www.nytimes.com/2014/05/14/opinion/friedman-the-square-people-part-1.html>.

15. Diamond, «Liberation Technology», art. cit., pág. 71.

16. Véanse, por ejemplo, Morozov, *Net Delusion, op. cit*.; y Evgeny Morozov, «Whither Internet Control?», en Diamond y Plattner (comps.), *Liberation Technology*, *op. cit*.

17. Véanse Cass R. Sunstein, *Republic.com 2.0.*, Princeton, Princeton University Press, 2009; Elanor Colleoni, Alessandro Rozza y Adam Arvidsson, «Echo Chamber or Public Sphere? Predicting Political Orientation and Measuring Political Homophily in Twitter Using Big Data», en *Journal of Communication*, 64, 2, 2014, págs. 317-332; y Walter Quattrociocchi, Antonio Scala y Cass R. Sunstein, «Echo Chambers on Facebook», en *SSRN*, 13 de junio de 2016, <https://ssrn.com/abstract=2795110>.

18. Véase Hunt Allcott y Matthew Gentzkow, «Social Media and Fake News in the 2016 Election», en *Journal of Economic Perspectives*, 31, 2, 2017, págs. 211-236. Compárese con Jonathan Mahler, «CNN Had a Problem. Donald Trump Solved It», en *The New York Times*, 4 de abril de 2017, <www.nytimes.com/2017/04/04/magazine/cnn-had-a-problem-donald-trump-solved-it.html?_r=0>.

19. Véanse Wil S. Hylton, «Down the Breitbart Hole», en *The New York Times Magazine*, 16 de agosto de 2017, <www.nytimes.com/2017/08/16/magazine/breitbart-alt-right-steve-bannon.html>; Michael M. Grynbaum y John Herrman, «Breitbart Rises from Outlier to Potent Voice in Campaign», en *The New York Times*, 26 de agosto de 2016, <www.nytimes.com/2016/08/27/business/media/breitbart-news-presidential-race.html>; David van Drehle, «Is Steve Bannon the Second Most Powerful Man in the World?», en *Time Magazine*, 2 de febrero de 2017.

20. «Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for President, Releases Statement», Newsbreakshere, 27 de septiembre de 2016, <https://newsbreakshere.com/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-president-releases-statement>.

21. «Bombshell: Hillary Clinton's Satanic Network Exposed», InfoWars, 4 de noviembre de 2016, <www.infowars.com/bombshell-hillary-clintons-satanic-network-exposed>.

22. James Barrett, «Poll: Who’s More “Evil”, Hillary or Trump?», Daily Wire, 29 de agosto de 2016, <www.dailywire.com/news/8720/poll-whos-more-evil-hillary-or-trump-james-barrett>.

23. Rafi Schwartz, «41% of Trump Supporters in North Carolina Think that Hillary Clinton Is Literally the Devil», Fusion, 9 de agosto de 2016, <http://fusion.net/story/334920/hillary-clinton-devil-poll>.

24. Farhad Manjoo, «Social Media's Globe-Shaking Power», en *The New York Times*, 16 de noviembre de 2016, <www.nytimes.com/2016/11/17/technology/social-medias-globe-shaking-power.html>.

25. Jan H. Pierskalla y Florian M. Hollenbach, «Technology and Collective Action: The Effect of Cell Phone Coverage on Political Violence in Africa», en *American Political Science Review*, 107, 2, 2013, págs. 207-224. Sobre las expectativas de efectos positivos de las que hablan algunos economistas, véanse Jenny C. Aker y Isaac M. Mbiti, «Mobile Phones and Economic Development in Africa», en *Journal of Economic Perspectives*, 24, 3, 2010, págs. 207-232; Jenny C. Aker, «Information from Markets Near and Far: Mobile Phones and Agricultural Markets in Niger», en *American Economic Journal: Applied Economics*, 2, 3, 2010, págs. 46-59; Jenny C. Aker, Christopher Ksoll y Travis J. Lybbert, «Can Mobile Phones Improve Learning? Evidence from a Field Experiment in Niger», en *American Economic Journal: Applied Economics*, 4, 4, 2012, págs. 94-120; Reuben Abraham, «Mobile Phones and Economic Development: Evidence from the Fishing Industry in India», en *Information Technologies and International Development*, 4, 1, 2007, págs. 5-17.

26. Pierskalla y Hollenbach, «Technology and Collective Action», art. cit., págs. 220-221. Véase también Jacob N. Shapiro y Nils B. Weidmann, «Is the Phone Mightier than the Sword? Cellphones and Insurgent Violence in Iraq», en *International Organization*, 69, 2, 2015, págs. 247-274.

27. Sobre la lentitud de la difusión inicial de la imprenta, véase Dittmar, «Information Technology and Economic Change», art. cit.

28. Josh Constine, «Facebook Now Has 2 Billion Monthly Users... and Responsibility», Techcrunch, 27 de junio de 2017, <https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users>.

29. George Orwell, «Second Thoughts on James Burnham», en *Polemic*, 3, mayo de 1946.

5. El estancamiento económico

1. Véase Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 2014, págs. 72-112 (trad. cast.: *El capital en el siglo* XXI, México, Fondo de Cultura Económica, 2014).

2. S. N. Broadberry y Bas van Leeuwen, *British Economic Growth and the Business Cycle, 1700-1870: Annual Estimates*, documento de trabajo, Departamento de Economía, Universidad de Warwick, Coventry, febrero de 2011, CAGE Online Working Paper Series, 2010 (20), <www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/events/seminars-schedule/conferences/venice3/programme/british_economic_growth_and_the_business_cycle_1700-1850.pdf>.

3. Según Jeffrey Williamson, el coeficiente de Gini para los asalariados varones aumentó de 0, 293 a 0, 358 entre 1827 y 1851. En comparación, el coeficiente de Gini en la Islandia actual es de 0, 280, mientras que el de la India es 0, 352. Véase Jeffrey G. Williamson, «Earnings Inequality in Nineteenth-Century Britain», en *Journal of Economic History*, 40, 3, 1980, págs. 457-475, pag. 467. Véase también Agencia Central de Inteligencia (CIA), «World Factbook, 2017: Distribution of Family Income — Gini Index», CIA, <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html>.

4. Facundo Alvaredo, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty y Emmanuel Saez, «The Top 1 Percent in International and Historical Perspective», en *Journal of Economic Perspectives*, 27, 3, 2013, págs. 3-20, <https://eml.berkeley.edu/~-saez/alvaredo-atkinson-piketty-saezJEP13top1percent.pdf>.

5. Kimberly Amadeo, «U.S. GDP by Year Compared to Recessions and Events», en *The Balance*, 4 de abril de 2017, <https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543>. Véanse también Juan Antolín-Díaz, Thomas Drechsel e Ivan Petrella, «Tracking the Slowdown in Long-run GDP Growth», en *Review of Economics and Statistics*, 99, 2, 2017, págs. 343-356; y Robert J. Gordon, *The Demise of U.S. Economic Growth: Restatement, Rebuttal, and Reflections*, documento de trabajo 19895, National Bureau of Economic Research (NBER), febrero de 2014, <www.nber.org/papers/w19895>.

6. Para el caso de Francia, véanse Pierre Sicsic y Charles Wyplosz, «France: 194592», en Nicholas Crafts y Gianni Toniolo (comps.), *Economic Growth in Europe since 1945*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, págs. 210-239; y «France GDP Growth Rate by Year», en *Multpl*, <www.multpl.com/france-gdp-growth-rate/table/by-year> (consultado el 5 de abril de 2017). Para el caso de Alemania, véanse Jürgen Weber, *Germany, 1945-1990: A Parallel History*, Budapest, Central European University Press, 2004, págs. 37-60; y «Germany GDP Growth Rate by Year», en *Multpl*, <www.multpl.com/germany-gdp-growth-rate/table/by-year> (consultado el 5 de abril de 2017). Para el caso de Italia, véanse Vera Zamagni, *The Economic History of Italy 1860-1990*, Oxford, Oxford University Press, 1993; e «Italy GDP Growth Rate by Year», en *Multpl*, <www.multpl.com/italy-gdp-growth-rate/table/by-year> (consultado el 5 de abril de 2017).

7. Otros indicadores de la igualdad dibujan un panorama ligeramente distinto a propósito de lo fuerte que ha sido realmente ese incremento de la desigualdad. Aquí he tomado como referencia el coeficiente de Gini calculado a partir de las rentas obtenidas como rendimientos del trabajo o de actividades económicas. Véase, por ejemplo, Anthony B. Atkinson, J. Hasell, Salvatore Morelli y M. Roser, *Chartbook of Economic Inequality*, 2017, <www.chartbookofeconomicinequality.com/inequality-by-country/usa>. Pero la evolución de las cifras concuerda con esta misma descripción de la situación cuando se emplean otras formas de medir la desigualdad de renta, o incluso la desigualdad de riqueza y patrimonio. Véase, por ejemplo, Piketty, *El capital en el siglo* XXI, *op. cit*.

8. Véase la nota 28 de la «Introducción» del presente libro.

9. Raj Chetty, David Grusky, Maximilian Hell, Nathaniel Hendren, Robert Manduca y Jimmy Narang, «The Fading American Dream: Trends in Absolute Income Mobility since 1940», en *Science*, 356, 6336, 2017, págs. 398-406. Véanse también John H. Goldthorpe, *Social Mobility and Class Structure in Modern Britain*, Oxford, Oxford University Press, 1987; y compárese con el estudio, de carácter más cualitativo, de Arlie Hochschild, *Strangers in Their Own Land*: *Anger and Mourning on the American Right*, Nueva York, New Press, 2016.

10. David Leonhardt, «The American Dream, Quantified at Last», en *The New York Times*, 8 de diciembre de 2016, <www.nytimes.com/2016/12/08/opinion/the-american-dream-quantified-at-last.html?_r=0>. Sobre la importancia política de las expectativas económicas, véase también Justin Gest, *The New Minority: White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality*, Oxford, Oxford University Press, 2016.

11. Según se explica en el reportaje, probablemente «es la primera vez en la historia de la industrialización (a excepción de algunos periodos de guerra o desastre natural) en que los ingresos de los adultos jóvenes han caído en comparación con los del resto de la sociedad a su edad». Caelainn Barr y Shiv Malik, «Revealed: The 30-Year Economic Betrayal Dragging Down Generation Y's Income», en *The Guardian*, 7 de marzo de 2016, <www.theguardian.com/world/2016/mar/07/revealed-30-year-economic-betrayal-dragging-down-generation-y-income>.

Algunos economistas creen que la realidad no es tan negativa como estas estadísticas podrían dar a entender. Los datos agregados sobre renta, afirman, no pueden dar adecuada cuenta de los avances tecnológicos. Tomemos el caso de los ordenadores y los teléfonos inteligentes: hace una generación, hasta los más ávidos melómanos o cinéfilos disponían de una colección limitada de discos y no podían volver a ver sus películas favoritas hasta que las emitieran por televisión. Hoy, tienen casi toda la música del mundo y muchas de las películas disponibles para ser vistas o escuchadas de manera continua (por *streaming*) con solo tocar una tecla. El progreso experimentado en estos últimos años, ¿está infravalorado por los datos económicos cuando estos no pueden incorporar la inmensa diferencia en la calidad de experiencia del consumidor que ese progreso ha comportado? Seguro que sí. Pero, por maravillosos que sean Spotify y Netflix, dudo mucho que puedan compensar el estancamiento económico registrado en ámbitos como la alimentación o la vivienda. Y (como menciono brevemente justo a continuación) los datos no económicos sobre esperanza de vida, felicidad y otra serie de indicadores no nos muestran un panorama mucho más positivo. Véanse Chad Syverson, *Challenges to Mismeasurement Explanations for the U.S. Productivity Slowdown*, documento de trabajo 21974, National Bureau of Economic Research (NBER), febrero de 2016, <www.nber.org/papers/w21974>; y David M. Byrne, John G. Fernald y Marshall B. Reinsdorf, «Does the United States Have a Productivity Slowdown or a Measurement Problem?», en *Brookings Papers on Economic Activity*, 1, 2016, págs. 109-182.

12. Anne Case y Angus Deaton, «Rising Morbidity and Mortality in Midlife among White Non-Hispanic Americans in the 21st Century», en *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 112, 49, 2015, págs. 15078-15083. Sobre la esperanza de vida, véase Elizabeth Arias, «United States Life Tables, 2003», en *National Vital Statistics Reports*, 54, 14, 2006, págs. 1-40, <www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr54/nvsr54_14.pdf>.

13. Jonathan T. Rothwell y Pablo Diego-Rosell, *Explaining Nationalist Political Views: The Case of Donald Trump*, borrador de documento de trabajo, 2 de noviembre de 2016, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2822059>. En general, el voto de clase ha experimentado un acusado descenso en las últimas décadas, tanto en América del Norte como en Europa occidental. Posiblemente como consecuencia de esos fenómenos, la prominencia de los temas económicos también ha disminuido sensiblemente. Los programas electorales de los grandes partidos europeos solían dar prioridad a las cuestiones económicas, pero la mayoría de ellos reservan actualmente mucho más espacio a temas no económicos. Y aunque muchas veces se piensa que los populistas triunfan gracias a las frustraciones económicas del electorado, lo cierto es que su retórica se centra mayormente en temas sociales y culturales. Puede que, entonces, no sorprenda a nadie que incluso ciertos marcadores culturales no tan conocidos predigan mejor el apoyo electoral recibido por los candidatos y las posiciones populistas que los marcadores económicos más típicos. En el caso británico, como bien ha señalado Eric Kaufmann, el apoyo a la pena de muerte —que en ningún momento formó parte del debate político previo al referéndum— es mejor «predictor» del apoyo al *brexit* que el nivel de renta o la clase social. Véase Eric Kaufmann, «It's NOT the Economy, Stupid: Brexit as a Story of Personal Values», en *London School of Economics, British Politics and Policy* (blog), 7 de julio de 2016, <http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/personal-values-brexit-vote>.

En un sentido más general, Ronald Inglehart y Pippa Norris han mostrado que los indicadores directos de carencias o privaciones sociales no predicen el apoyo a partidos populistas, pues este tiende a ser mayor en un sector relativamente pudiente, como es el de la pequeña burguesía, que entre la clase obrera. Por el contrario, todos los factores culturales que ellos comprobaron —entre los que se incluían «las actitudes antiinmigración, la desconfianza ante la gobernanza global y nacional, el apoyo a los valores autoritarios y la autoubicación ideológica en el eje izquierda-derecha»— demostraron ser fuertes predictores del apoyo a partidos populistas. Ronald Inglehart y Pippa Norris, «Trump, Brexit, and the Rise of Populism», art. cit., pág. 4.

14. Bryce Covert, «No, "Economic Anxiety" Doesn't Explain Donald Trump», en *New Republic*, 18 de noviembre de 2016, <https://newrepublic.com/article/138849/no-economic-anxiety-doesnt-explain-donald-trump>.

15. Steve Benen, «"Economic Anxieties" Don't Explain Donald Trump's Victory», MSNBC, 28 de diciembre de 2016, <www.msnbc.com/rachel-maddow-show/economic-anxieties-dont-explain-donald-trumps-victory>.

16. Matthew Yglesias, «Why I Don't Think It Makes Sense to Attribute Trump's Support to Economic Anxiety», en *Vox*, 15 de agosto de 2016, <www.vox.com/2016/8/15/12462760/trump-resentment-economic-anxiety>.

17. Rothwell y Diego-Rosell, *Explaining Nationalist Political Views*, *op. cit*., pág. 11.

18. *Ibidem*, pág. 1.

19. Max Ehrenfreund y Jeff Guo, «A Massive New Study Debunks a Widespread Theory for Donald Trump's Success», en *The Washington Post*, 12 de agosto de 2016, <www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/12/a-massive-new-study-debunks-a-widespread-theory-for-donald-trumps-success/?utm_term=.0dde2f2e2004>.

20. Según los datos de Jed Kolko, en condados que registraban una proporción menor de empleos de carácter rutinario, Clinton aventajaba a su rival por más de un 30%. Sin embargo, en condados con un elevado porcentaje de empleos rutinarios, era Trump quien la aventajaba por más o menos la misma distancia. Jed Kolko, «Trump Was Stronger Where the Economy Is Weaker», en *FiveThirtyEight*, 10 de noviembre de 2016, <https://fivethirtyeight.com/features/trump-was-stronger-where-the-economy-is-weaker>.

21. *Ibidem*.

22. Ben Delsman, «Automation and Populist Vote Share», en publicación. Sobre las causas económicas del populismo, véanse también Martin Eiermann, «The Geography of German Populism: Reflections on the 2017 Bundestag Elections», en publicación; Dani Rodrik, *Populism and the Economics of Globalization*, documento de trabajo 23559, National Bureau of Economic Research (NBER), julio de 2017, <www.nber.org/papers/w23559>; Noam Gidron y Peter A. Hall, «Populism as a Problem of Social Integration», borrador de documento de trabajo, <https://scholar.harvard.edu/hall/publications/populism-problem-social-integration>; y Chase Foster y Jeffry Frieden, «Crisis of Trust: Socio-Economic Determinants of Europeans' Confidence in Government», en *European Union Politics*, 2017.

23. Hay abundantes precedentes de ello, claro está. En la Europa de entreguerras, por ejemplo, la «pequeña burguesía» era a menudo la clase más hostil a la democracia y tuvo un papel clave en el ascenso del fascismo. Véase, por ejemplo, Richard F. Hamilton, *Who Voted for Hitler?*, Princeton, Princeton University Press, 2014, págs. 9-36. Aunque compárese con las págs. 37-63 de ese mismo libro.

6. La identidad

1. Por aquellas ironías del destino, Pericles terminaría lamentando el cambio de normas que él mismo había puesto en marcha. Tras contraer matrimonio con Aspasia de Mileto, tuvo que impulsar otra modificación legislativa para que su propio hijo pudiera ser considerado un ciudadano ateniense. Sobre el estatus de Aristóteles y Diógenes, véase Ben Akrigg, «Metics in Athens», en Claire Taylor y Kostas Vlassopoulos (comps.), *Communities and Networks in the Ancient Greek World*, Oxford, Oxford University Press, 2015, págs. 155-157; sobre los metecos en general, véase David Whitehead, *The Ideology of the Athenian Metic*, Cambridge, Cambridge Philological Society, 1977. Para un análisis más amplio de las leyes de ciudadanía atenienses, véase Philip Brook Manville, *The Origins of Citizenship in Ancient Athens*, Princeton, Princeton University Press, 2014.

2. El estudio clásico de las leyes y las prácticas romanas de ciudadanía sigue siendo el de Adrian Nicholas Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Nueva York, Oxford University Press, 1980.

3. Peter Garnsey, «Roman Citizenship and Roman Law in the Late Empire», en Simon Swain y Mark J. Edwards (comps.), *The Transformation from Early to Late Empire*, Nueva York, Oxford University Press, 2004.

4. Sobre el Imperio otomano, véanse Halil Inalcik, *The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600*, Nueva York, Praeger, 1973; Stanford J. Shaw, *The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic*, Basingstoke, Macmillan, 1991; y Will Kymlicka, «Two Models of Pluralism and Tolerance», en *Analyse & Kritik*, 14, 1, 1992, págs. 33-56. Sobre el Imperio de los Habsburgo, véase Carlile Aylmer Macartney, *The Habsburg Empire: 1790-1918*, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1968; así como el ya añejo clásico de Robert A. Kann, *The Multinational Empire: Nationalism and National Reform in the Habsburg Monarchy, 1848-1918*, vol. 1: *Empire and Nationalities*, Nueva York, Columbia University Press, 1950.

5. Véase John W. Mason, *The Dissolution of the Austro-Hungarian Empire, 1867-1918*, Nueva York, Longman, 2.ª ed., 1997; y Tibor Iván Berend, *History Derailed: Central and Eastern Europe in the Long Nineteenth Century*, Berkeley, University of California Press, 2003.

6. Comunicación personal.

7. Véanse Roger D. Petersen, *Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred, and Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Eagle Glassheim, *Noble Nationalists: The Transformation of the Bohemian Aristocracy*, Cambridge, Harvard University Press, 2005; T. Mills Kelly, *Without Remorse: Czech National Socialism in Late-Habsburg Austria*, Boulder, East European Monographs, 2006; así como los variados ensayos contenidos en Pieter M. Judson y Marsha L. Rozenblit (comps.), *Constructing Nationalities in East Central Europe*, Nueva York, Berghahn Books, 2004.

8. Para una crítica general de los aspectos excluyentes de los movimientos de autodeterminación, véase Amitai Etzioni, «The Evils of Self-Determination», en *Foreign Policy*, 89, 1992, págs. 21-35; pero compárese con el más equilibrado balance de ventajas y desventajas que para las minorías tienen los diferentes tipos de formación de Estados en Michael Walzer, «States and Minorities», en C. Fried (comp.), *Minorities: Community and Identity*, Berlín, Springer, 1983, págs. 219-227.

9. Sobre la *Kulturkampf*, véanse Michael B. Gross, «Kulturkampf and Unification: German Liberalism and the War against the Jesuits», en *Central European History*, 30, 4, 1997, págs. 545-566; y Ronald J. Ross, «Enforcing the Kulturkampf in the Bismarckian State and the Limits of Coercion in Imperial Germany», en *Journal of Modern History*, 56, 3, 1984, págs. 456-482. Sobre Italia, Suzanne Stewart-Steinberg, *The Pinocchio Effect: On Making Italians, 1860-1920*, Chicago, University of Chicago Press, 2007. Compárese también con el estudio clásico en este género sobre Francia: Eugen Weber, *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914*, Stanford, Stanford University Press, 1976.

10. Véanse Francis Ludwig Carsten, *The Rise of Fascism*, Berkeley, University of California Press, 1982; Sheri Berman, «Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic», en *World Politics*, 49, 3, 1997, págs. 401-429; y el análisis clásico de la cuestión en William L. Shirer, *The Rise and Fall of the Third Reich*: *A History of Nazi Germany*, Nueva York, Random House, 1991 [1960] (trad. cast.: *Auge y caída del Tercer Reich*, Barcelona, Planeta, 2010).

11. Véase Ronald M. Smelser, *The Sudeten Problem*, *1933-1938: Volkstumspolitik and the Formulation of Nazi Foreign Policy*, Middletown, Wesleyan University Press, 1975. Véase un interesante análisis reciente del efecto del irredentismo en el mundo de la posguerra en David S. Siroky y Christopher W. Hale, «Inside Irredentism: A Global Empirical Analysis», en *American Journal of Political Science*, 61, 1, 2017, págs. 117-128.

12. Anthony Browne, «The Last Days of a White World», en *The Guardian*, 3 de septiembre de 2000, <www.theguardian.com/uk/2000/sep/03/race.world>.

13. *Ethnicity and Religion Statistics*, Institute of Race Relations, 2017, <www.irr.org.uk/research/statistics/ethnicity-and-religion>.

14. Wolfgang Seifert, «Geschichte der Zuwanderung nach Deutschland nach 1950», en *Bundeszentrale fur Politische Bildung*, 31 de mayo de 2012, <www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138012/geschichte-der-zuwanderung-nach-deutschland-nach-1950?p=all>.

15. «Area and Population — Foreign Population», Oficina Estadística Federal y de los Länder (Alemania), 26 de agosto de 2016, <www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/en/en_jb01_jahrtab2.asp>;«Germany», Focus Migration, <http://focus-migration.hwwi.de/Germany.1509.0.html?&L=1>; «Die soziale Situation in Deutschland», Agencia Federal de Educación Cívica (Alemania), 11 de enero de 2016, <www.bpb.de/wissen/NY3SWU,0,0,Bev%F6lkerung_mit_Migrationshintergrund_I.html>.

16. *Reconstruction of the Resident Population by Age, Sex and Citizenship in Common*, Instituto Nacional de Estadística (Italia), 2011, <www.istat.it/it/archivio/99464>.

17. *Standard Eurobarometer 85: Public Opinion in the European Union*, Comisión Europea, Dirección General de Comunicación, 2016, pág. 6, <https://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/7

18. «Top Voting Issues in 2016 Election», Pew Research Center, 7 de julio de 2016, <>.

19. «"Wien darf nicht Istanbul werden", schimpft Wiener FPÖ-Chef», en *Der Standard*, 4 de marzo de 2005, <http://derstandard.at/1966831/Wien-darfnicht-Istanbul-werden-schimpft-Wiener-FPOe-Chef>.

20. Alexandra Sims, «Alternative for Germany: The Anti-immigration Party Even Scarier than Donald Trump», en *The Independent*, 14 de marzo de 2016, <www.independent.co.uk/news/world/europe/alternative-for-germany-the-antiimmigration-party-even-scarier-than-donald-trump-a6930536.html>.

21. Michael Strange, «Why the Danish People's Party Will Do Better Sitting on the Sidelines», en *The Guardian*, 19 de junio de 2015, <www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/19/danish-peoples-party-denmarkgovernment>.

22. Varios politólogos han descubierto que una nueva afluencia de inmigrantes a zonas concretas de Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia incrementó el porcentaje de voto de los populistas en dichas regiones. Boris Podobnik, Marko Jusup, Dejan Kovac y H. E. Stanley, «Predicting the Rise of EU Right-Wing Populism in Response to Unbalanced Immigration», en *Complexity*, 2017, 2; Christopher J. Anderson, «Economics, Politics, and Foreigners: Populist Party Support in Denmark and Norway», en *Electoral Studies*, 15, 4, 1996, págs. 497511; Matt Golder, «Explaining Variation in the Electoral Success of Extreme Right Parties in Western Europe», en *Comparative Political Studies*, 36, 4, 2003, págs. 432-466; Daniel Oesch, «Explaining Workers' Support for Right-wing Populist Parties in Western Europe: Evidence from Austria, Belgium, France, Norway, and Switzerland», en *International Political Science Review*, 29, 3, 2008, págs. 349-373; K. Arzheimer y E. Carter, «Political Opportunity Structures and Right-wing Extremist Party Success», en *European Journal of Political Research*, 45, 3, 2006, págs. 419-443.

23. Brian F. Schaffner, Matthew MacWilliams y Tatishe Nteta, *Explaining White Polarization in the 2016 Vote for President: The Sobering Role of Racism and Sexism*, documento de trabajo, 2016, <http://people.umass.edu/schaffne/schaffner_et_al_IDC_conference.pdf>; Daniel Cox, Rachel Lienesch y Robert P. Jones, «Beyond Economics: Fears of Cultural Displacement Pushed the White Working Class to Trump», PRRI, Washington D. C., 5 de septiembre de 2017, <www.prri.org/research/whiteworking-class-attitudes-economy-trade-immigration-election-donald-trump>; Ronald Inglehart y Pippa Norris, «Trump, Brexit, and the Rise of Populism», art.cit.;Eric Kaufmann, «It's NOT the Economy», art. cit.

24. Lynn Vavreck, «The Great Political Divide over American Identity», en *The New York Times*, 2 de agosto de 2017, <www.newyorktimes.com/2017/08/02/upshot/the-great-political-divide-over-american-identity.html>.

25. Sobre la opinión relativamente positiva que los estadounidenses tienen de los inmigrantes, véase Eduardo Porter, «For Immigrants, America Is Still More Welcoming than Europe», en *The New York Times*, 8 de diciembre de 2015, <www.nytimes.com/2015/12/09/business/international/for-immigrants-america-is-still-more-welcoming-than-europe.html>.

26. Véanse Mae M. Ngai, «The Architecture of Race in American Immigration Law: A Reexamination of the Immigration Act of 1924», en *Journal of American History*, 86, 1, 1999, págs. 67-92; y Edward Prince Hutchinson, *Legislative History of American Immigration Policy 1798-1965*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1981.

27. Renee Stepler y Anna Brown, «Statistical Portrait of Hispanics in the United States», Pew Research Center, 19 de abril de 2016, <www.pewhispanic.org/2016/04/19/statistical-portrait-of-hispanics-in-the-united-states-key-charts/#hispanic-pop>.

28. «A Demographic Portrait of Muslim Americans», Pew Research Center, 30 de agosto de 2011, <www.people-press.org/2011/08/30/section-1-a-demographic-portrait-of-muslim-americans/#number-of-muslims-in-the-u-s>; Besheer Mohamed, «A New Estimate of the U.S. Muslim Population», Pew Research Center, 6 de enero de 2016, <www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population>.

29. Véase Philip A. Klinkner y Rogers M. Smith, *The Unsteady March: The Rise and Decline of Racial Equality in America*, Chicago, University of Chicago Press, 1999, pág. 339.

30. Michelle Ye Hee Lee, «Donald Trump's False Comments Connecting Mexican Immigrants and Crime», en *The Washington Post*, 8 de julio de 2015.

31. Un buen resumen de la literatura especializada en esta cuestión lo hace Zack Beauchamp, «White Riot: How Racism and Immigration Gave Us Trump, Brexit, and a Whole New Kind of Politics», en *Vox*, 20 de enero de 2017, <www.vox.com/2016/9/19/12933072/far-right-white-riot-trump-brexit>.

32. Jon Huang, Samuel Jacoby, Michael Strickland y K. K. Rebecca Lai, «Election 2016: Exit Polls», en *The New York Times*, 8 de noviembre de 2016, <www.nytimes.com/interactive/2016/11/08/us/politics/election-exit-polls.html?_r=0>.

33. Catherine Rampell, «Americans — Especially But Not Exclusively Trump Voters — Believe Crazy, Wrong Things», en *The Washington Post*, 28 de diciembre de 2016, <www.washingtonpost.com/news/rampage/wp/2016/12/28/americans-especially-but-not-exclusively-trump-voters-believe-crazy-wrong-things/?utm_term=.f8514ecce52c>.

34. El porcentaje de nacidos en el extranjero procede de las estimaciones quinquenales incluidas en la *American Community Survey [Encuesta estadounidense de localidades]*, de la Oficina Federal del Censo, <www.indexmundi.com/facts/united-states/quick-facts/illinois/foreign-born-population-percent#chart>.

35. «Area and Population — Foreign Population», Oficina Estadística Federal y de los Länder (Alemania), 26 de agosto de 2016, <www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/en/en_jb01_jahrtab2.asp>; «AfD ist in Sachsen stärkste Kraft», en *Frankfurter Rundschau*, 25 de septiembre de 2017, <www.fr.de/politik/bundestagswahl/der-wahlabend-afd-ist-in-sachsen-staerkste-kraft-a-1356919>. Además, AfD ha tenido sus mejores resultados hasta el momento en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, otro *land* donde el porcentaje de residentes nacidos fuera de Alemania no supera el 4%. Véase también Ben Knight, «Euroskeptic AfD Cements Place in German Politics, for Now», en *Deutsche Welle*, 15 de septiembre de 2014, <www.dw.com/en/euroskeptic-afd-cements-place-in-german-politics-for-now/a-17921496>. Compárese también con Emily Hruban, «BIBrief: A Temporary Alternative for Germany? A Look at AfD's Rise», Fundación Bertelsmann, 17 de marzo de 2016, <www.bfna.org/publication/bbrief-a-temporary-alternative-for-germany-a-look-at-afd%E2%80%99s-rise>; y «German State Elections: Success for Right-Wing Afd, Losses for Merkel's CDU», en *Deutsche Welle*, 13 de marzo de 2016, <www.dw.com/en/german-state-elections-success-for-right-wing-afd-losses-for-merkels-cdu/a-19113604>.

36. Ingrid Melander y Michel Rose, «French Far-Right Fails to Win any Regions in Upset for Le Pen», Reuters, 13 de diciembre de 2015.

37. Aunque sea una obviedad, cabe señalar que las áreas de inmigración elevada contienen también, por definición, un número importante de electores de las minorías, que tienden a votar mucho menos a candidatos populistas cuyo atractivo electoral se basa, en buena medida, en usarlos a ellos como cabezas de turco.

38. Ryan D. Enos, «Causal Effect of Intergroup Contact on Exclusionary Attitudes», en *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 111, 10, 2014, págs. 3699-3704, <https://static1.squarespace.com/static/521abb79e4b0ee5879077f61/t/58d6a6d62994ca9ba72a184e/149
Véase un excelente resumen de la teoría del contacto en Thomas F. Pettigrew, «Intergroup Contact Theory», en *Annual Review of Psychology*, 49, 1, 1998, págs. 65-85. Sobre Gordon Allport, véase también Thomas F. Pettigrew y Linda R. Tropp, «Allport's Intergroup Contact Hypothesis: Its History and Influence», en John F. Dovidio, Peter Glick y Laurie A. Rudman (comps.), *On the Nature of Prejudice: Fifty Years after Allport*, Malden, Blackwell, 2005, págs. 262-277.

39. Robert D. Putnam, «E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century: The 2006 Johan Skytte Prize Lecture», en *Scandinavian Political Studies*, 30, 2, 2007, págs. 137-174.

40. Barrett A. Lee, John Iceland y Gregory Sharp, «Racial and Ethnic Diversity Goes Local: Charting Change in American Communities over Three Decades», documento de trabajo, en *Project 2010*, *Russell Sage Foundation Report*, septiembre de 2012, <https://s4.ad.brown.edu/Projects/Diversity/Data/Report/report08292012.pdf>.

41. Janet Adamy y Paul Overberg, «Places Most Unsettled by Rapid Demographic Change Are Drawn to Trump», en *The Wall Street Journal*, 1 de noviembre de 2016, <www.msn.com/en-us/news/politics/places-most-unsettled-by-rapid-demographic-change-are-drawn-to-trump/ar-AAjHg76>.

42. Nate Cohn, «Why Trump Won: Working-Class Whites», en*The New York Times*, 9 de noviembre de 2016, <www.nytimes.com/2016/11/10/upshot/why-trump-won-working-class-whites.html>.

43. Adamy y Overberg, «Places Most Unsettled», art. cit.

44. Además de las pruebas de ello tomadas en sondeos de opinión entre votantes reales (que se exponen aquí), existen también otras señales muy indicativas del importante papel de los temores demográficos extraídas de experimentos con encuesta. Véase, por ejemplo, el fascinante hallazgo según el cual los votantes estadounidenses con un grado elevado de identificación racial eran mucho más propensos a apoyar a Donald Trump si se les inducía a creer que los blancos pasarían a estar en minoría en el futuro: Brenda Major, Alison Blodorn y Gregory Major Blascovich, «The Threat of Increasing Diversity: Why Many White Americans Support Trump in the 2016 Presidential Election», en *Group Processes and Intergroup Relations*, octubre de 2016.

45. Steve King (@SteveKingIA), «Wilders understands that culture and demographics are our destiny. We can't restore our civilization with somebody else's babies», tuit del 12 de marzo de 2017, 2:40 p. m., <https://twitter.com/SteveKingIA/status/840980755236999169>.

46. Steve King es miembro de la Cámara de Representantes federal por el cuarto distrito de Iowa, que se compone de treinta y nueve condados. Según los datos publicados por la *Encuesta estadounidense de localidades*, de la Oficina Federal del Censo de Estados Unidos, en 2009 un 4, 1% de la población de esos condados eran residentes nacidos en el extranjero, un porcentaje que había aumentado ya hasta el 5, 1 en 2015. Entiendo como «nacidos (o nacidas) en el extranjero» a los ciudadanos estadounidenses naturales de Puerto Rico o de otras dependencias insulares de Estados Unidos, a los ciudadanos de Estados Unidos nacidos en el extranjero, pero de padres estadounidenses, a quienes han adquirido la nacionalidad estadounidense por naturalización, y a quienes no son ciudadanos estadounidenses (es decir, a cualquier otra persona no nacida en Estados Unidos).

47. Publius Decius Mus, «The Flight 93 Election», en *Claremont Review of Books Digital*, Claremont Institute, 5 de septiembre de 2016, <www.claremont.org/crb/basicpage/the-flight-93-election>. Véase también Rosie Gray, «The Populist Nationalist on Trump's National Security Council», en *The Atlantic*, 24 de marzo de 2017, <www.theatlantic.com/politics/archive/2017/03/does-trumps-resident-intellectual-speak-for-his-boss/520683>.

48. Bradley Jones y Jocelyn Kiley, «More "Warmth" for Trump among GOP Voters Concerned by Immigrants, Diversity», Pew Research Center, 2 de junio de 2016, <www.pewresearch.org/fact-tank/2016/06/02/more-warmth-for-trump-among-gop-voters-concerned-by-immigrants-diversity>.

49. Thilo Sarrazin, *Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen*, Múnich, Deutsche Verlags-Anstalt, 2010. Véase también Kim Bode, *et al*., «Why Sarrazin's Integration Demagoguery Has Many Followers», parte 4: «The Genetic Argument», en *Der Spiegel*, 6 de septiembre de 2010, <www.spiegel.de/international/germany/the-man-who-divided-germany-why-sarrazin-s-integration-demagoguery-has-many-followers-a-715876-4.html>.

50. Zosia Wasik y Henry Foy, «Immigrants Pay for Poland's Fiery Rhetoric: Politicians Accused as Islamophobia Sparks Rise in Hate Crimes», en *The Financial Times*, 15 de septiembre de 2016, <www.ft.com/content/9c59ba54-6ad5-11e6-a0b1-d87a9fea034f>.

51. *Ibidem*.

52. Yigal Schliefer, «Hungary at the Turning Point», en *Slate*, 3 de octubre de 2014, <www.slate.com/articles/news_and_politics/moment/2014/10/viktor_orban_s_authoritarian_rule_the_hu

53. Turkuler Isiksel, «Square Peg, Round Hole: Why the EU Can't Respond to Identity Politics», en publicación.

54. «Perils of Perception: A 40-Country Study», Ipsos, 2016, <www.ipsos.com/sites/default/files/2016-12/Perils-of-perception-2016.pdf>.

55. Ivan Krastev, «The End of the German Moment?», The German Marshall Fund of the United States, 21 de septiembre de 2016, <www.gmfus.org/blog/2016/09/21/end-german-moment>.

56. Podobnik, *et al.*, «Predicting the Rise», art. cit.

57. «Decennial Censuses and the American Community Survey», US Census Bureau. Citado en «Immigrants in California», Public Policy Institute of California, <www.ppic.org/publication/immigrants-in-california> (consultado el 1 de abril de 2017); Emily Cadei, «The California Roots of Trumpism», en *Newsweek*, 5 de julio de 2016, <www.newsweek.com/2016/07/15/proposition-187-anti-immigration-donald-trump-477543.html>; «Proposition 187: Text of Proposed Law», KPBS, <www.kpbs.org/documents/2014/oct/24/proposition-187-text-proposed-law>; «Proposition 209: Text of Proposed Law», en *Voter Information Guides*, <http://vigarchive.sos.ca.gov/1996/general/pamphlet/209text.htm>; «Proposition 227-Full Text of the Proposed Law», *Voter Information Guides*, <http://vigarchive.sos.ca.gov/1998/primary/propositions/227text.htm>. Una medida relacionada que los californianos también instituyeron por entonces, llevados en buena medida por su miedo a la delincuencia de los inmigrantes, fue la «norma de los tres delitos», por la que los reincidentes se enfrentaban a penas de prisión draconianas, aun cuando los delitos en cuestión fuesen relativamente menores. «California's Three Strikes Setencing Law», California Courts: The Judicial Branch of California, <www.courts.ca.gov/20142.htm>; «A Primer: Three Strikes — The Impact after More Than a Decade», Legislative Analyst's Office, octubre de 2005, <www.lao.ca.gov/2005/3_strikes/3_strikes102005.htm>.

58. Entre esas medidas se incluían propuestas para restringir la capacidad de las fuerzas del orden para recabar información relativa a la situación inmigratoria de los residentes y para financiar la asistencia jurídica a personas afectadas por procesos de deportación. Kate Murphy, «Defiant California Legislature Fast-Tracks "Sanctuary State" Bills», en *Mercury News*, 30 de enero de 2017, <www.mercurynews.com/2017/01/30/a-defiant-california-legislature-fast-tracks-sanctuary-state-bills>. Sobre la derogación de normas y leyes previas, véanse Patrick McGreevy, «Gov. Brown Signs Bill Repealing Unenforceable Parts of Prop. 187», en *Los Angeles Times*, 15 de septiembre de 2014, <www.latimes.com/local/politics/la-me-pol-brown-bills-20140916-story.html>; y Jazmine Ulloa, «California Will Bring Back Bilingual Education as Proposition 58 Cruises to Victory», en *Los Angeles Times*, 8 de noviembre de 2016.

59. Véanse Abraham H. Maslow, «A Theory of Human Motivation», en *Psychological Review*, 50, 4, 1943, págs. 370-396; y Abraham H. Maslow, *The Farther Reaches of Human Nature*, Nueva York, Viking, 1971 (trad. cast.: *La amplitud potencial de la naturaleza humana*, México, Trillas, 1982).

60. Véanse Ronald Inglehart, *Culture Shift in Advanced Industrial Society*, Princeton, Princeton University Press, 1990 (trad. cast.: *El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas*, Madrid, CIS y Siglo XXI, 1991); Paul R. Abramson y Ronald Inglehart, «Generational Replacement and the Future of Postmaterialist Values», en *Journal of Politics*, 49, 1, 1987, págs. 231-241; y Ronald Inglehart, «Public Support for Environmental Protection: Objective Problems and Subjective Values in 43 Societies», en *PS: Political Science and Politics*, 28, 1, 1995, págs. 57-72.

61. Citado en Annie Lowrey, «Is It Better to Be Poor in Bangladesh or the Mississippi Delta?», en *Atlantic*, 8 de marzo de 2017, <www.theatlantic.com/business/archive/2017/03/angus-deaton-qa/518880>.

62. Sobre la cuestión de lo que yo llamo *pos-posmaterialismo*, véase el interesante intercambio reciente de opiniones entre Robert Brym y Ronald Inglehart: Robert Brym, «After Postmaterialism: An Essay on China, Russia and the United States», en *Canadian Journal of Sociology*, 41, 2, 2016, págs. 195-211; y Ronald Inglehart, «After Postmaterialism: An Essay on China, Russia and the United States: A Comment», en *Canadian Journal of Sociology*, 41, 2, 2016, págs. 213-222.

Parte III. Remedios

1. Sobre Park Geun-hye, sus tendencias autoritarias, el escándalo de corrupción de Choi Soon-sil y las manifestaciones que llevaron a su destitución, véanse Dave Hazzan, «Is South Korea Regressing into a Dictatorship?», en *Foreign Policy*, 14 de julio de 2016, <http://foreignpolicy.com/2016/07/14/is-south-korea-regressing-into-a-dictatorship-park-geun-hye;Ock-Hyum-Ju>, «Freedom of Assembly on Trial in South Korea», en *Korean Herald*, 1 de julio de 2016, <www.koreaherald.com/view.php?ud=20160630001122>; Jennifer Williams, «The Bizarre Political Scandal That Just Led to the Impeachment of South Korea's President», en *Vox*, 9 de marzo de 2017, <www.vox.com/world/2016/11/30/13775920/south-korea-president-park-geun-hye-impeached>; Justin McCurry, «Former South Korean President Park Geun-hye on Trial for Corruption», en *The Guardian*, 23 de mayo de 2017. Véase un revelador marco de estudio de los «partidos sucesores autoritarios» en general en James Loxton, «Authoritarian Successor Parties», en *Journal of Democracy*, 26, 3, 2015, págs. 157-170.

2. Sobre Turquía, véanse Soner Cagaptay y Oya Rose Aktas, «How Erdoganism Is Killing Turkish Democracy», en *Foreign Affairs*, 7 de julio de 2017; y Yusuf Sarfati, «How Turkey's Slide to Authoritarianism Defies Modernization Theory», en *Turkish Studies*, 18, 3, 2017, pags. 395-415. Sobre Polonia, véanse Daniel R. Kelemen, «Europe's Other Democratic Deficit: National Authoritarianism in Europe's Democratic Union», en *Government and Opposition*, 52, 2, 2017, págs. 211-238; y Daniel R. Kelemen, «The Assault on Poland's Judiciary», en *Foreign Affairs*, 26 de julio de 2017. Sobre Estados Unidos, véanse Brian Klaas, «The Five Ways President Trump Has Already Damaged Democracy at Home and Abroad», en *The Washington Post*, 28 de abril de 2017; y Yascha Mounk, «Trump Is Destroying Our Democracy», en *The New York Times*, 1 de agosto de 2017.

3. Francesca Polletta, *Freedom Is an Endless Meeting: Democracy in American Social Movements*, Chicago, University of Chicago Press, 2002. Véase también el artículo clásico de Michael Walzer sobre la medida en que la implicación política puede entrar en conflicto con los fines liberadores de la política izquierdista. Michael Walzer, «A Day in the Life of a Socialist Citizen», en *Dissent*, 15, 3, 1968, págs. 243-247.

4. No existen aún suficientes investigaciones sobre la cuestión concreta de la eficacia de unas formas particulares de protesta como respuesta a los gobiernos populistas. Sí pueden verse pruebas recientes de la eficacia política de diferentes formas de protesta en general, por ejemplo, en Emma F. Thomas y Winnifred R. Louis, «When Will Collective Action Be Effective? Violent and Non-violent Protests Differentially Influence Perceptions of Legitimacy and Efficacy among Sympathizers», en *Personality and Social Psychology Bulletin*, 40, 2, 2014, págs. 263-276; Andreas Madestam, Daniel Shoag, Stan Veuger y David Yanagizawa-Drott, «Do Political Protests Matter? Evidence from the Tea Party Movement», en *Quarterly Journal of Economics*, 128, 2013, págs. 1633-1685; Grzegorz Ekiert y Jan Kubik, *Rebellious Civil Society: Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland, 1989-1993*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999; Taras Kuzio, «Civil Society, Youth and Social Mobilization in Democratic Revolutions», en *Communist and Post-Communist Studies*, 39, 2006, págs. 365-386. Por compensar un poco, véase también un argumento en sentido contrario en Peter L. Lorentzen, «Regularizing Rioting: Permitting Public Protest in an Authoritarian Regime», en *Quarterly Journal of Political Science*, 8, 2013, págs. 127-158.

5. Véase Anne Applebaum, «Poles Fought the Nationalist Government with Mass Protests — and Won», en *The Washington Post*, 24 de julio de 2017, <www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/07/24/how-street-demonstrators-scored-a-victory-against-polands-government/?utm_term=.51c4821e1d0c>.

6. Véanse Nick Thorpe, «Hungary CEU: Protesters Rally to Save University», en *BBC News*, 3 de abril de 2017, <www.bbc.co.uk/news/world-europe-39479398>; y «CEU to Remain in Budapest for 2017-2018 Academic Year, Hopes for Long-Term Solution», Central European University, 30 de mayo de 2017, <www.ceu.edu/article/2017-05-30/ceu-remain-budapest-2017-2018-academic-year-hopes-long-term-solution>.

7. La medida exacta en que la oposición pública a Donald Trump ha ayudado a que las instituciones independientes mostraran su fuerza no se sabrá hasta dentro de bastantes años. Pero hay buenos motivos teóricos y prácticos para creer que sí tuvo un papel significativo. Hace tiempo que los politólogos, por ejemplo, han estudiado y concluido que las opiniones hasta de las más altas instancias judiciales estadounidenses están influidas por la opinión pública en ciertos y muy profundos sentidos. Véase, por ejemplo, William Mishler y Reginald S. Sheehan, «The Supreme Court as a Countermajoritarian Institution? The Impact of Public Opinion on Supreme Court Decisions», en *American Political Science Review*, 87, 1, 1993, págs. 87-101. En cualquier caso, hasta entonces, es razonable sospechar que Rod Rosenstein fue influido en parte por la abrumadora reacción de muchos de sus iguales a su aparente complicidad en la destitución de James Comey. Véase Benjamin Wittes, «Et Tu Rod? Why the Deputy Attorney General Must Resign», en *Lawfare*, 12 de mayo de 2017, <www.lawfareblog.com/et-tu-rod-why-deputy-attorney-general-must-resign>.

8. Aunque la democracia rusa siempre ha sido imperfecta (por no decir otra cosa), Freedom House seguía considerándola «parcialmente libre» en 2004, meses después de que Vladimir Putin se presentara por vez primera a la reelección: Freedom House, «Russia», en *Freedom in the World 2004*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/russia>. En 2008, sin embargo, y dado que las nuevas elecciones demostraron ser significativamente menos justas que las anteriores, Freedom House cambió la calificación de Rusia y pasó a considerarla un país «no libre»: Freedom House, «Russia», en *Freedom in the World 2008*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2008/russia>. Véase un ejemplo similar para el caso de Turquía en Steven A. Cook, «How Erdogan Made Turkey Authoritarian Again», en *The Atlantic*, 21 de julio de 2016, <www.theatlantic.com/international/archive/2016/07/how-erdogan-made-turkey-authoritarian-again/492374>; y para el caso de Venezuela, compárese Freedom House, «Venezuela», en *Freedom in the World 2003*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2003/venezuela>, con Freedom House, «Venezuela», en *Freedom in the World 2017*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/venezuela>.

9. Véanse «Election Resources on the Internet: Elections to the Polish Sejm — Results Lookup», <http://electionresources.org/pl/sejm.php?election=2015>, y «Polish Parliamentary Election, 2015», Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_parliamentary_election,_2015>.

10. Sobre la India, véanse Milan Vaishnav, «Modi’s Victory and the BJP’s Future», en *Foreign Affairs*, 15 de marzo de 2017, <http://carnegieendowment.org/2017/03/15/modi-s-victory-and-bjp-s-future-pub-68281>; Anita Katyal, «The Opposition Is Divided on How It Should Unite Against the BJP ahead of the 2019 General Elections», Scroll.in, <https://scroll.in/article/834312/the-opposition-is-divided-on-how-it-should-unite-against-the-bjp-ahead-of-the-2019-general-elections>. Sobre Turquía, véase «Turkish General Election, 2007», Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_general_election,_2007>. Sobre Estados Unidos, véase Christopher J. Devine y Kyle C. Kopko, «5 Things You Need to Know about How Third-Party Candidates Did in 2016», en *The Washington Post*, 15 de noviembre de 2016, <www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/15/5-things-you-need-to-know-about-how-third-party-candidates-did-in-2016/?utm_term=.a37910397372>.

11. Comunicación personal.

12. Andrés Miguel Rondón, «In Venezuela, We Couldn’t Stop Chávez. Don’t Make the Same Mistakes We Did», en *The Washington Post*, 27 de enero de 2017, <www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2017/01/27/in-venezuela-we-couldnt-stop-chavez-dont-make-the-same-mistakes-we-did/?utm_term=.58b6866907f8>.

13. *Ibidem*.

14. Luigi Zingales, «The Right Way to Resist Trump», en *The New York Times*, 18 de noviembre de 2016, <www.nytimes.com/2016/11/18/opinion/the-right-way-to-resist-trump.html?_r=0>.

15. Aaron Blake, «Trump's Full Inauguration Speech Transcript, Annotated», en *The Washington Post*, 20 de enero de 2017, <www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/20/donald-trumps-full-inauguration-speech-transcript-annotated/?utm_term=.7e71667cfff7>.

16. Jenna Johnson, «Donald Trump to African American and Hispanic Voters: “What Do You Have to Lose?”», en *The Washington Post*, 22 de agosto de 2016, <www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/08/22/donald-trump-to-african-american-and-hispanic-voters-what-do-you-have-to-lose/?utm_term=.0faa24c31da9>.

17. Hillary Clinton y Tim Kaine, *Stronger Together: A Blueprint for America's Future*, Nueva York, Simon & Schuster, 2016.

18. Hillary Clinton (@Hillary Clinton), «“America is already great. America is already strong & I promise you, our strength, our greatness, does not depend on Donald Trump”— @POTUS», tuit del 27 de julio de 2016, 8:18 p. m., <https://twitter.com/hillaryclinton/status/758501814945869824?lang=en>Z>.

19. Monica Hersher y Yascha Mounk, «The Centre in the United Kingdom, France and Germany», Tony Blair Institute for Global Change, junio de 2017, <http://institute.global/sites/default/files/field_article_attached_file/IGC_Centre%20Polling_14.07.17.pc

20. El ejemplo más obvio es la victoria de Emmanuel Macron frente a Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas de 2017. Véase Tracy McNicoll, «Macron Beats Le Pen to Win French Presidency, Toughest Tasks to Come», en *France 24*, 8 de mayo de 2017, <www.france24.com/en/20170507-frances-macron-beats-le-pen-win-presidency-toughest-tasks-come>; y Yascha Mounk, «It's Far Too Early to Declare Victory over Populism», en *Slate*, 8 de mayo de 2017, <www.slate.com/articles/news_and_politics/the_good_fight/2017/05/four_reasons_not_to_be_cheered_

21. Incluso los mejores libros sobre política y sobre políticas públicas tienden a cojear del mismo pie: el grueso de sus argumentos consiste en un sutil análisis en profundidad de una serie de muy preocupantes tendencias. De él extraen luego sugerencias harto simplistas y precipitadas acerca de cómo abordarlas. No es casualidad que sea así: siempre es mucho más fácil diagnosticar problemas que solucionarlos. Entender bien un problema no nos indica necesariamente cuál es el modo más sensato de ponerle remedio. E incluso cuando la solución propuesta parece ser la correcta en cuanto a sus virtudes teóricas, resulta muchas veces evidente que jamás llegará a adoptarse. Todos estos problemas son tan propios del tema que aquí me ocupa como de la mayoría de los demás. Por ello quiero proponer al lector un trato bien simple antes de lanzarme a exponer mi propia versión de remedios potenciales para la crisis de la democracia. Dar con soluciones para los profundos problemas que he descrito hasta el momento en este libro es una labor de increíble dificultad. Me he tomado esta tarea muy en serio y he concretado ciertas formas prometedoras de abordar el problema. Pienso sinceramente que plantearnos el desafío al que nos enfrentamos tal como yo lo describo aquí, e incluso adoptar algunas de las políticas concretas que menciono, mejoraría al máximo nuestras probabilidades de rejuvenecer nuestras democracias. No solo lo pienso, sino que lo deseo firmemente. Pero no pretendo que estas sugerencias se tomen como panaceas. Tampoco puedo prometer que adoptarlas sea suficiente en último término para salvar la democracia liberal. Es muy posible que, por sí solas, no basten; pero si nos tomamos en serio la salvación de la democracia liberal, son lo mejor que podemos hacer al respecto.

7. Domesticar el nacionalismo

1. Véanse Yascha Mounk, «The Pursuit of Italy by David Gilmour», Bookforum, 7 de octubre de 2011, <www.bookforum.com/review/8442>; y David Gilmour, *The Pursuit of Italy: A History of a Land, Its Regions, and Their Peoples*, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2011.

2. Yascha Mounk, *Stranger in My Own Country: A Jewish Family in Modern Germany*, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2014.

3. Sobre la necesidad de replantearse la soberanía para afrontar las dificultades de la política globalizada, véase, por ejemplo, el tratamiento que se hace de la «paradoja de la globalización» en Anne-Marie Slaughter, *A New World Order*, Princeton, Princeton University Press, 2004. Véanse también Kanishka Jayasuriya, «Globalization, Law, and the Transformation of Sovereignty: The Emergence of Global Regulatory Governance», en *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 6, 1999, págs. 425-455; y una defensa de la soberanía del Estado nación en Jean L. Cohen, *Globalization and Sovereignty: Rethinking Legality, Legitimacy, and Constitutionalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012. Como ejemplo de la esperanza de que una esfera pública europea siguiera a la creación de un sistema político europeo, véanse Jürgen Habermas, *Zur Verfassung Europas: Ein Essay*, Fráncfort del Meno, Suhrkamp Verlag, 2011 (trad. cast.: *La constitución de Europa*, Madrid, Trotta, 2012); o el ensayo precedente del propio Jürgen Habermas, «Why Europe Needs a Constitution», en Erik Oddvar Eriksen, John Erik Fossum y Agustín José Menéndez (comps.), *Developing a Constitution for Europe*, Nueva York, Routledge, 2004, págs. 17-33.

4. Fraser Cameron, «The European Union as a Model for Regional Integration», Council on Foreign Relations, 24 de septiembre de 2010, <www.cfr.org/report/european-union-model-regional-integration>.

5. Véase Mark Leonard, *Why Europe Will Run the 21st Century*, Nueva York, Public Affairs, 2005 (trad. cast.: *Por qué Europa liderará el siglo XXI*, Madrid, Taurus, 2005). Compárese también con Andrew Moravcsik, *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, Ithaca, Cornell University Press, 1998; y Robert O. Keohane, «Ironies of Sovereignty: The European Union and the United States», en *Journal of Common Market Studies*, 40, 4, 2002, págs. 743-765.

6. Ghia Nodia, «The End of the Postnational Illusion», en *Journal of Democracy*, 28, 2, 2017, págs. 5-19, pág. 9.

7. *Ibidem*.

8. «Referendums Related to the European Union», Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_related_to_the_European_Union> (consultado el 9 de septiembre de 2017).

9. En 2005, los votantes franceses y holandeses rechazaron la propuesta de Constitución europea. Para conservar el grueso de aquella reforma, los jefes de Gobierno europeos introdujeron moderadas modificaciones en el texto constitucional y lo reetiquetaron a toda prisa como Tratado de Lisboa. Ni a los franceses ni a los holandeses se les dio una nueva oportunidad de expresar su opinión sobre él. Pero sí la tuvieron los irlandeses, que no perdieron la ocasión de votar (ellos también) en contra. Solo cuando su gobierno los convocó de nuevo a las urnas para refrendar el texto, y los votantes irlandeses (esta vez sí) cumplieron obedientes con lo que su ejecutivo les pedía y pudo, por fin, entrar en vigor el mencionado Tratado de Lisboa. *Ibidem*.

10. Véase el primer párrafo de «Spain’s Reforms Point the Way for Southern Europe», en *The Economist*, 15 de junio de 2017, <www.economist.com/news/europe/21723446-having-tackled-its-problems-earlier-italy-or-greece-spain-now-seeing-results-spains>. Sobre las tasas de desempleo, véase «Unemployment by Sex and Age — Annual Average», Eurostat, <> (consultado el 9 de septiembre de 2017).

11. Véanse Markus K. Brunnermeier, Harold James y Jean-Pierre Landau, *The Euro and the Battle of Ideas*, Princeton, Princeton University Press, 2016; y Joseph E. Stiglitz, *The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe*, Nueva York, Norton, 2016 (trad. cast.: *El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa*, Madrid, Taurus, 2016). Véase también Thomas Meaney y Yascha Mounk, «What Was Democracy?», en *The Nation*, 13 de mayo de 2014, <www.thenation.com/article/what-was-democracy>.

12. Véase Basharat Peer, *A Question of Order: India, Turkey, and the Return of the Strongmen*, Nueva York, Columbia Global Reports, 2017. Sobre China, véase un fino análisis en Alastair Iain Johnston, «Is Chinese Nationalism Rising? Evidence from Beijing», en *International Security*, 41, 3, 2016, págs. 7-43.

13. Nodia, «The End of the Postnational Illusion», art. cit.

14. Michael Lind, «In Defense of Liberal Nationalism», en *Foreign Affairs*, mayo-junio de 1994, pág. 87.

15. Constitución de los Estados Unidos de América. Véase <www.law.cornell.edu/constitution/preamble> (trad. cast.: «Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos», Wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A1mbulo_de_la_Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unido
consultado el 15 de febrero de 2018).

16. Jan-Werner Müller, «Capitalism in One Family», en *London Review of Books*, 38, 23, 2016, págs. 10-14.

17. Véanse Krishnadev Calamur, «A Short History of “America First”», en *The Atlantic*, 21 de enero de 2017, <www.theatlantic.com/politics/archive/2017/01/trump-america-first/514037>; y Jonah Goldberg, «What Trump Means When He Says, “America First”», en *National Review*, 25 de enero de 2017, <www.nationalreview.com/article/444211/donald-trump-america-first-slogan-stands-nationalist-identity>.

18. El nacionalismo basado en la pertenencia étnica y religiosa, y que tacha de antipatriotas a todos aquellos que se oponen al líder populista de turno, tiene también muchas probabilidades de suscitar tensiones internacionales. El problema en ese caso no estriba tanto en que líderes nacionalistas del estilo de Trump estén decididos a actuar en el interés propio particular de sus respectivas naciones (a fin de cuentas, la mayoría de los dirigentes elegidos democráticamente consideran que se deben a su propio pueblo antes que a nada o a nadie más). Estriba, más bien, en su suposición de que otra nación tiene que salir perdiendo para que la suya salga ganando. Esa es una idea que se resume muy bien en la insistencia de Trump en decir que su conocimiento del arte de la negociación sacará a América adelante. Es también la idea que subyace en su promesa de luchar por los intereses de Pittsburgh y no por los de París (como si el cambio climático no fuera una amenaza para París y para Pittsburgh por igual). Y es también la base de su creencia de que los acuerdos comerciales han «enriquecido a la industria extranjera a expensas de la industria estadounidense». Véase Alan Murray, «Trump’s Zero-Sum Economic Vision», en *Forbes*, 23 de enero de 2017, <>.

19. Véase un influyente estudio sobre la discriminación de los afroamericanos en el mercado laboral en Marianne Bertrand y Sendhil Mullainathan, «Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and Lamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination», en *American Economic Review*, 94, 2004, págs. 991-1013. Sobre el sesgo presente en el sistema de justicia penal, véase Alberto Alesina y Eliana La Ferrara, «A Test of Racial Bias in Capital Sentencing», en *American Economic Review*, 104, 2014, págs. 3397-3433; véase también Lawrence D. Bobo y Victor Thompson, «Unfair by Design: The War on Drugs, Race, and the Legitimacy of the Criminal Justice System», en *Social Research*, 73, 2006, págs. 445-472. Sobre el riesgo de recibir disparos de las fuerzas de orden público, véase Alison V. Hall, Erika V. Hall y Jamie L. Perry, «Black and Blue: Exploring Racial Bias and Law Enforcement in the Killings of Unarmed Black Male Civilians», en *American Psychologist*, 71, 3, 2016, págs. 175-186.

20. *Parents Involved in Community Schools v. Seattle School Dist. n.º 1*, n.os 05-908 y 05-915, 2007, <www.law.cornell.edu/supct/html/05-908.ZS.html>.

21. Según el argumento relacionado (aunque más controvertido) que plantea Eduardo Bonilla en ese mismo sentido, «si la raza desaparece como categoría de división oficial, como ya lo ha hecho en la mayor parte del mundo, esto propiciará la aparición de un orden racial plural donde los grupos existirán en la práctica, pero sin ser reconocidos oficialmente como tales, y donde todo aquel que intente abordar la cuestión de la división racial será probablemente acusado de querer *racializar* a la población». Eduardo Bonilla-Silva, *Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in America*, Lanham, Rowman and Littlefield, 2018 [2003], pág. 189.

22. Adia Harvey Wingfield, «Color-Blindness Is Counterproductive», en *The Atlantic*, 13 de septiembre de 2015, <www.theatlantic.com/politics/archive/2015/09/color-blindness-is-counterproductive/405037>.

23. Una explicación de los males de la apropiación cultural que ha tenido una difusión muy viral es la de Maisha Z. Johnson, «What's Wrong with Cultural Appropriation? These 9 Answers Reveal Its Harm», en *Everyday Feminism*, 14 de junio de 2015, <http://everydayfeminism.com/2015/06/cultural-appropriation-wrong>. Sobre las microagresiones, véanse Miguel Ceja y Tara Yosso, «Critical Race Theory, Racial Microaggressions and Campus Racial Climate: The Experiences of African American College Students», en *Journal of Negro Education*, 69, 2000, págs. 60-73; Daniel Solórzano, «Critical Race Theory, Race, and Gender Microaggressions, and the Experience of Chicana and Chicano Scholars», en *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 11, 1998, págs. 121-136; y Kevin L. Nadal, *That's So Gay! Microaggressions and the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Community*, Washington D. C., Asociación Estadounidense de Psicología, 2013. Por último, sobre la libertad de expresión, véase Ulrich Baer, «What "Snowflakes" Get Right about Free Speech», en *The New York Times*, 24 de abril de 2017, <www.nytimes.com/2017/04/24/opinion/what-liberal-snowflakes-get-right-about-free-speech.html>.

24. Emanuella Grinberg, «Dear White People with Dreadlocks: Some Things to Consider», CNN, 1 de abril de 2016, <http://edition.cnn.com/2016/03/31/living/white-dreadlocks-cultural-appropriation-feat/index.html>; CloverLinh Tran, «CDS Appropriates Asian Dishes, Students Say», en *Oberlin Review*, 6 de noviembre de 2015, <https://oberlinreview.org/9055/news/cds-appropriates-asian-dishes-students-say>.

25. Princess Gabbara, «The History of Dreadlocks», en *Ebony*, 18 de octubre de 2016, <www.ebony.com/style/history-dreadlocks#axzz4qX8wRTJe>.

26. Sobre Bagdad, véase Jim Al-Khalili, «When Baghdad Was Centre of the Scientific World», en *The Guardian*, 25 de septiembre de 2010, <www.theguardian.com/books/2010/sep/26/baghdad-centre-of-scientific-world>; sobre Viena, véase Carl E. Schorske, *Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture*, Nueva York, Knopf, 1980; y sobre Nueva York, véase E. B. White, *Here Is New York*, New York, Harper & Row, 1949.

27. Vendrían a ser como aquellos miembros de una imaginaria «comisión voluntaria» a la que el dramaturgo austriaco Karl Kraus imaginó empeñada en erradicar todo uso de palabras francesas, inglesas o italianas de las calles de Viena en una obra satírica que escribió en los momentos más aciagos de la Primera Guerra Mundial. Karl Kraus, *The Last Days of Mankind: A Tragedy in Five Acts*, Ámsterdam, November Editions, 2016 [1918], acto III, escena VIII (trad. cast.: *Los últimos días de la humanidad*, Barcelona, Tusquets, 1991).

28. En términos filosóficos, incluso ciertas expresiones de odio tienen sin duda un «valor de verdad», lo que significa que expresan una proposición reconocible que no es un absurdo semántico. Pero probablemente carecen de valor en el sentido de que expongan un punto de vista que es importante que otras personas conozcan (y menos aún en el sentido de que aporten un supuesto conocimiento sobre algún aspecto del mundo).

29. Tal y como Kenan Malik plantea este argumento, la pregunta clave es «¿quién se encarga de la vigilancia? Toda sociedad tiene sus *gatekeepers*, sus guardianes de los flujos de información, que se encargan de proteger ciertas instituciones, mantener los privilegios de unos grupos particulares y aislar ciertas ideas de los embates de las críticas. Esos guardianes no protegen a los marginados, sino a los poderosos». Kenan Malik, «Cultural Appropriation and Secular Blasphemy», en *Pandemonium*, 9 de julio de 2017, <https://kenanmalik.wordpress.com/2017/07/09/cultural-appropriation-and-secular-blasphemy>.

30. Para un examen más a fondo de esta línea argumental, véase Thomas Scanlon, «A Theory of Freedom of Expression», en *Philosophy and Public Affairs*, 1, 1972, págs. 204-226.

31. Wingfield, «Color Blindness Is Counter-Productive», art. cit.

32. Alex Rosenberg, «The Making of a Non-patriot», en *The New York Times*, 3 de julio de 2017, <www.nytimes.com/2017/07/03/opinion/the-making-of-a-non-patriot.html>. Este artículo de opinión se publicó en línea la víspera del Día de la Independencia, pero con la evidente pretensión de que se leyera durante dicha festividad.

33. DisastaCaPiTaLisM, «Antifa Chanting “No Trump, No Wall, No USA at All”», YouTube, 5 de septiembre de 2017, <>.

34. Shaun King, «KING: Thomas Jefferson Was a Horrible Man Who Owned 600 Human Beings, Raped Them, and Literally Worked Them to Death», en *The New York Daily News*, 3 de julio de 2017, <www.nydailynews.com/news/national/king-thomas-jefferson-evil-rapist-owned-600-slaves-article-1.3308931>.

35. Véanse Hans Kundnani, *Utopia or Auschwitz: Germany's 1968 Generation and the Holocaust*, Oxford, Oxford University Press, 2009; y Simon Erlanger, «"The Anti-Germans" — The Pro-Israel German Left», en *Jewish Political Studies Review*, 21, 2009, págs. 95-106.

36. Véase Maya Rhodan, «Transcript: Read Full Text of President Barack Obama’s Speech in Selma», en *Time*, 7 de marzo de 2015, <http://time.com/3736357/barack-obama-selma-speech-transcript>.

37. *Ibidem*.

38. Alastair Jamieson y Chloe Hubbard, «Far-Right Marine Le Pen Leads French Polls but Still Seen Losing Runoff», en *NBC News*, 23 de febrero de 2017, <www.nbcnews.com/news/world/far-right-marine-le-pen-leads-french-election-polls-still-n724536>.

39. Emmanuel Macron, «Quand je regarde Marseille je vois... les Algériens, les Marocains, les Tunisiens...», discurso publicado en YouTube, 3 de abril de 2017, <www.youtube.com/watch?v=Yxmbctib964>.

40. Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Londres, Verso, 1983 (trad. cast.: *Comunidades imaginadas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993).

41. Véase un buen resumen de la visión escéptica sobre la inmigración europea en Christopher Caldwell, *Reflections on the Revolution in Europe: Immigration, Islam, and the West*, Nueva York, Anchor, 2009 (trad. cast.: *La revolución europea: cómo el islam ha cambiado el Viejo Continente*, Barcelona, Debate, 2010).

42. Sobre la injusticia estructural, véase Iris Marion Young, «Structural Injustice and the Politics of Difference», en Emily Grabham *et al*.(comps.), *Intersectionality and Beyond: Law, Power and the Politics of Location*, Londres, Routledge, 2008, pág. 273.

43. Hay estudios que sugieren que este sistema representa una doble desventaja para los estudiantes de las minorías. Por un lado, sus profesores son menos proclives a recomendarlos para su ingreso en escuelas más prestigiosas, aunque rindan al mismo nivel. Pero, por otro lado, los estudiantes talentosos de orígenes más desfavorecidos suelen tardar más de cuatro cursos de educación formal en ponerse al día con sus compañeros de clase de familias más cultas. Véase un examen general de la cuestión en Heike Solga y Rosine Dombrowski, *Soziale Ungleichheiten in schulischer und außerschulischer Bildung: Stand der Forschung und Forschungsbedarf*, documento de trabajo, Bildung und Qualifizierung, 171, 2009, <www.econstor.eu/handle/10419/116633>. Pero véase también la perspectiva, más escéptica, planteada en Cornelia Kirsten, *Ethnische Diskriminierung im deutschen Schulsystem? Theoretische Überlegungen und empirische Ergebnisse*, documento para el debate, WZB, SP IV 2006-601, <www.econstor.eu/handle/10419/49765>.

44. Véase Marie Duru-Bellat, «Social Inequality in French Education: Extent and Complexity of the Issues», en *International Studies in Educational Inequality*, *Theory and Policy*, 2007, págs. 337-356; así como Michel Euriat y Claude Thélot, «Le recrutement social de l'élite scolaire en France: évolution des inégalités de 1950 à 1990», en *Revue Française de Sociologie*, 1995, págs. 403-438; y Christian Baudelot y Roger Establet, *L'Élitisme républicain: l'école française à l'épreuve des comparaisons internationales*, París, Seuil, 2009.

45. «K-12 Education: Better Use of Information Could Help Agencies Identify Disparities and Address Racial Discrimination», US Government Accountability Office, abril de 2016, <www.gao.gov/assets/680/676744.pdf>. Esta conclusión fue confirmada por un estudio reciente del Civil Rights Project de la Universidad de California en Los Ángeles, que arrojó datos parecidos, como que «las escuelas hipersegregadas, que son aquellas en las que un 90% o más de su alumnado está formado por miembros de minorías, aumentaron desde 1988 pasando del 5, 7% al 18, 4%». Gary Orfield, Jongyeon Ee, Erica Frankenbergy Genevieve Siegel-Hawley, «Brown at 62: School Segregation by Race, Poverty and State», en *The Civil Rights Project*, UCLA, 16 de mayo de 2016, <https://civilrightsproject.ucla.edu/research/k-12-education/integration-and-diversity/brown-at-62-school-segregation-by-race-poverty-and-state>. Véase también Greg Toppo, «GAO Study: Segregation Worsening in U.S. Schools», en *USA Today*, 17 de mayo de 2016, <www.usatoday.com/story/news/2016/05/17/gao-study-segregation-worsening-us-schools/84508438>.

46. Véanse Qanta Ahmed, «And Now, Female Genital Mutilation Comes to America», en *The Daily Beast*, 18 de abril de 2017, <www.thedailybeast.com/and-now-female-genital-mutilation-comes-to-america>; «Female Genital Mutilation Exposed in Swedish Class», en *The Local*, 20 de junio de 2014, <www.thelocal.se/20140620/swedish-school-class-genitally-mutilated>; y Alexandra Topping, «FGM Specialist Calls for Gynaecological Checks for All Girls in Sweden», en *The Guardian*, 27 de junio de 2014, <www.theguardian.com/society/2014/jun/27/female-genital-mutilation-fgm-specialist-swedengyna-ecological-checks-children>.

47. Véanse Helen Pidd, «West Yorkshire Police and Agencies “Failed to Protect” Groomed Girl», en *The Guardian*, 6 de diciembre de 2016; «Oxford Grooming: “No Hiding” from Authorities’ Failures», en *BBC News*, 2 de marzo de 2015, <www.bbc.co.uk/news/uk-england-oxfordshire-31696276>; y David A. Graham, «How Belgium Tried and Failed to Stop Jihadist Attacks», en *The Atlantic*, 22 de marzo de 2016.

48. «Gewalt-Rechtfertigung mit Koran — Richterin abgezogen», en *Spiegel Online*, 21 de marzo de 2007, <www.spiegel.de/politik/deutschland/justiz-skandal-gewalt-rechtfertigung-mit-koran-richterin-abgezogen-a-472966.html>.

49. Véase Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford, Clarendon Press, 1995, cap. 3 (trad. cast.: *Ciudadanía multicultural:una teoría liberal de los derechos de las minorías*, Barcelona, Paidós, 2002). Compárese con Mounk, *Stranger in My Own Country*, *op. cit*., cap. 10.

50. Sobre este punto, véanse Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Nueva York, Basic Books, 1983, cap. 1 (trad. cast.: *Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993); y David Miller, «The Ethical Significance of Nationality», en *Ethics*, 98, 1988, págs. 647-662.

51. Véanse Jeffrey G. Reitz, «The Distinctiveness of Canadian Immigration Experience», en *Patterns of Prejudice*, 46, 5, 2012, págs. 518-538; y Garnett Picot y Arthur Sweetman, «Making It in Canada: Immigration Outcomes and Policies», en *IRPP Study*, 29, 2012, págs. 1-5.

8. Arreglar la economía

1. Karen Tumulty, «How Donald Trump Came Up with “Make America Great Again”», en *The Washington Post*, 18 de enero de 2017, <www.washingtonpost.com/politics/how-donald-trump-came-up-with-make-america-great-again/2017/01/17/fb6acf5e-dbf7-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html?utm_term=.064c24103851>.

2. Oficialmente, el eslogan fue «Recuperando el control», si bien la mayoría de los políticos que lo invocaban no usaban el gerundio. Véanse «Boris Johnson: UK “Should Take Back Control”», en *BBC News*, <www.bbc.com/news/av/uk-35739955/boris-johnson-uk-should-take-back-control>; y Joseph Todd, «Why Take Back Control Is the Perfect Left-Wing Slogan», en *New Statesman*, 13 de marzo de 2017, <www.newstatesman.com/politics/staggers/2017/03/why-take-back-control-perfect-left-wing-slogan>.

3. Ese es uno de los motivos por los que las minorías se sienten mucho menos tentadas, en la mayoría de los países, por el mensaje de los políticos populistas, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Aunque son personas que también pasan problemas económicos, han visto mejoras reales en su economía en las últimas décadas y se mantienen mucho más esperanzadas ante el futuro. Véanse Mark Hugo López, Rich Morin, y Jens Manuel Krogstad, «Latinos Increasingly Confident in Personal Finances, See Better Economic Times Ahead», Pew Research Center, <www.pewhispanic.org/2016/06/08/latinos-increasingly-confident-in-personal-finances-see-better-economic-times-ahead>; y Jamelle Bouie, «Who Is Most Excited about America's Future? Minorities», en *The Daily Beast*, 3 de febrero de 2014, <www.thedailybeast.com/who-is-most-excited-about-americas-future-minorities>.

4. Sobre el PIB per cápita, véase US Bureau of Economic Analysis, «Real Gross Domestic Product per Capita (A939RX0Q048SBEA)», recuperado de FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, <https://fred.stlouisfed.org/series/A939RX0Q048SBEA>. Sobre el valor neto, véanse Board of Governors of the Federal Reserve System, «Households and Nonprofit Organizations; Net Worth, Level (TNWBSHNO)», recuperado de FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, ajustado por inflación, <https://fred.stlouisfed.org/series/TNWBSHNO>. Por último, sobre los beneficios empresariales per cápita, véase US Bureau of Economic Analysis, «Corporate Profits After Tax (without IVA and CCAdj) [CP]», recuperado de FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, ajustados por inflación, <https://fred.stlouisfed.org/series/CP>.

5. Véase el apéndice en línea («Online Appendix»), tabla B3, en Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, «Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data», en *Quarterly Journal of Economics*, 131, 2, 2016, págs. 519-578. Como consecuencia, el porcentaje de riqueza nacional en poder de ese 90% de familias menos ricas ha caído del 36% al 23%. Muchos creen que esa riqueza fue transferida al 5% de familias más ricas, o incluso al 1%, pero eso no es del todo cierto. Los trece puntos percentuales que disminuyó la proporción de riqueza en manos del 90% (menos rico) de las familias equivale precisamente a esos trece puntos porcentuales que creció la riqueza poseída por las familias del 0, 1% más rico del país. Véase el apéndice en línea («Online Appendix»), tabla B1, *ibidem*.

6. Véanse «Tax Rate Schedules», instrucciones para cumplimentar el formulario 1040 para el ejercicio fiscal de 1987, Internal Revenue Service (agencia tributaria federal estadounidense), US Department of the Treasury, pág. 47, y «Federal Capital Gains Tax Rates, 1988-2011», Tax Foundation, <https://files.taxfoundation.org/legacy/docs/fed_capgains_taxrates-20100830.pdf>.

7. Sobre Reagan, véase Peter Dreier, «Reagan's Real Legacy», en *Nation*, 29 de junio de 2015. Sobre la Ley de la Conciliación de la Responsabilidad Personal con las Oportunidades Laborales, véanse Yascha Mounk, *The Age of Responsibility*, *op. cit*., cap. 2; y Carly Renee Knight, «A Voice without a Vote: The Case of Surrogate Representation and Social Welfare for Legal Noncitizens since 1996», en publicación.

8. Eduardo Porter, «The Republican Party's Strategy to Ignore Poverty», en *The New York Times*, 27 de octubre de 2015. Una de las pocas luces en esta historia de sombras fue la reforma sanitaria aprobada por Barack Obama. Por vez primera en su historia, Estados Unidos se tomó en serio una de las obligaciones morales más fundamentales de toda sociedad rica: proporcionar cobertura médica a (la mayoría de) sus ciudadanos. Pero, aunque la forma que finalmente adopte el sistema sanitario estadounidense seguirá pendiente de definición durante mucho tiempo, algunos de sus elementos claves están siendo suprimidos en estos momentos: si los legisladores convierten en ley los objetivos expuestos por la actual Administración, millones de estadounidenses perderán su seguro médico en los años venideros.

9. Véanse Marina Karanikolos *et al*., «Financial Crisis, Austerity, and Health in Europe», en *Lancet*, 381, 9874, 2013, págs. 1323-1331; Emmanuele Pavolini, Margarita León, Ana M. Guillén y Ugo Ascoli, «From Austerity to Permanent Strain? The EU and Welfare State Reform in Italy and Spain», en *Comparative European Politics*, 13, 2015, págs. 56-76; Mark Blyth, *Austerity: The History of a Dangerous Idea*, Oxford, Oxford University Press, 2013, sobre todo el cap. 3 (trad. cast.: *Austeridad: historia de una idea peligrosa*, Barcelona, Crítica, 2014); y Matt Pickles, «Greek Tragedy for Education Opportunities», en *BBC News*, 30 de septiembre de 2015, <www.bbc.co.uk/news/business-34384671>.

10. Véase Horst Feldmann, «Technological Unemployment in Industrial Countries», en *Journal of Evolutionary Economics*, 23, 2013, págs. 1099-1126. Pero ténganse en cuenta también otras voces, más escépticas, como la de James E. Bessen, «How Computer Automation Affects Occupations: Technology, Jobs, and Skills», en *Law and Economics Research Paper*, 15, 49, 3 de octubre de 2016, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2690435>. Véase una valoración de una lista de potenciales respuestas políticas en Yvonne A. Stevens y Gary E. Marchant, «Policy Solutions to Technological Unemployment», en Kevin LaGrandeur y James J. Hughes (comps.), *Surviving the Machine Age*, Cham, Palgrave MacMillan, 2017.

11. Véanse Justin R. Pierce y Peter K. Schott, «The Surprisingly Swift Decline of US Manufacturing Employment», en *American Economic Review*, 106, 7, 2016, págs. 1632-1662; Thomas Kemeny, David Rigby y Abigail Cooke, «Cheap Imports and the Loss of US Manufacturing Jobs», en *World Economy*, 38, 10, 2015, págs. 1555-1573; y William J. Carrington y Bruce Fallick, «Why Do Earnings Fall with Job Displacement?», Federal Reserve Bank of Cleveland, documento de trabajo 14-05, 19 de junio de 2014, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2456813>.

12. Véanse Lawrence H. Summers, «U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound», en *Business Economics*, 49, 2014, págs. 65-73; y Tyler Cowen, *The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better*, Nueva York, Dutton, 2011. Para un análisis más matizado de la posibilidad de una convergencia entre países como China, por un lado, y los de América del Norte y Europa occidental, por el otro, léase Dani Rodrik, «The Future of Economic Convergence», Jackson Hole Symposium of the Federal Reserve Bank of Kansas City, 2011, <http://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/future-economic-convergence.pdf?m=1435006479>.

13. La esperanza de que las máquinas puedan llegar un día a hacer el trabajo tradicionalmente exigido a los seres humanos hasta el punto de que dejen a estos tiempo libre para dedicarse a fines más elevados es, desde luego, muy antigua. Véanse Karl Marx, «German Ideology», en *Early Political Writings*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pág. 132 (trad. cast.: *La ideología alemana*, Madrid, Akal, 2014); y Herbert Marcuse, *An Essay on Liberation*, Boston, Beacon Press, 1969, sobre todo la pág. 6 (trad. cast.: *Un ensayo sobre la liberación*, México, Joaquín Mortiz, 1969). Para una aproximación más reciente, pero desde una perspectiva un tanto similar, véase Rutger Bregman, *Utopia for Realists*: *The Case for a Universal Basic Income, Open Borders, and a 15-hour Workweek*, Nueva York, Little, Brown and Company, 2017 (trad. cast.: *Utopía para realistas*: *a favor de la renta básica universal, la semana laboral de quince horas y un mundo sin fronteras*, Barcelona, Salamandra, 2017).

14. Según el *Informe sobre la desigualdad global* de 2018, existe mucha variabilidad en el grado en que los diferentes países han permitido que sus ciudadanos fueran más o menos partícipes del crecimiento de la economía local. Esto indica, según los autores de dicho informe, «la importancia de las políticas e instituciones nacionales» de cara a determinar muy variados efectos en terrenos que van desde la riqueza general hasta la desigualdad». Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (comps.), *The World Inequality Report*, Cambridge, Belknap Press of Harvard University, 2018 (trad. cast.: *Informe sobre la desigualdad global 2018*, LAB, 2018, <http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf>).

15. Véase una defensa reciente de los beneficios económicos de una fiscalidad más elevada en Peter Diamond y Emmanuel Saez, «The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendation», en *Journal of Economic Perspectives*, 25, 4, 2011, págs. 165-190. Véase un argumento contraintuitivo acerca de la *popularidad* de esa fiscalidad en Vanessa S. Williamson, *Read My Lips: Why Americans Are Proud to Pay Taxes*, Princeton, Princeton University Press, 2017.

16. Véase Alberto Alesina y Dani Rodrik, «Distributive Politics and Economic Growth», en *Quarterly Journal of Economics*, 109, 1994, págs. 465-490; Mounk, *Age of Responsibility*, *op. cit*.; Blyth, *Austerity*, *op. cit*., sobre todo los caps. 6 y 7. Curiosamente, se percibe un apoyo creciente al Estado del bienestar entre libertarios de diverso color político. Véanse Matt Zwolinski, «Libertarianism and the Welfare State», en Jason Brennan, Bas van der Vossen y David Schmidtz (comps.), *The Routledge Handbook of Libertarianism*, Nueva York, Routledge, 2017; y Matt Zwolinski, «Libertarianism and the Welfare State», Bleeding Heart Libertarians, 7 de marzo de 2016, <http://bleedingheartlibertarians.com/2016/03/libertarianism-and-the-welfare-state>.

17. Véanse Alicia H. Munnell, «Policy Watch: Infrastructure Investment and Economic Growth», en *Journal of Economic Perspectives*, 6, 4, 1992, págs. 189-198; Gilles St. Paul y Thierry Verdier, «Education, Democracy, and Growth», en *Journal of Development Economics*, 42, 1993, págs. 399-407; y P. Aghion, L. Boustan, C. Hoxby y J. Vandenbussche, «The Causal Impact of Education on Economic Growth: Evidence from U.S.», manuscrito sin publicar, marzo de 2009, <https://scholar.harvard.edu/files/aghion/files/causal_impact_of_education.pdf>.

18. Véase un buen repaso general de algunos de los costes económicos de no ofrecer atención sanitaria universal en David Sterret, Ashley Bender y David Palmer, «A Business Case for Universal Healthcare: Improving Economic Growth and Reducing Unemployment by Providing Access for All», en *Health Law and Policy Brief*, 8, 2, 2014, págs. 41-55, <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1132&context=hlp>.

19. Damian Paletta, «With Tax Break, Corporate Rate Is Lowest in Decades», en *The Wall Street Journal*, 3 de febrero de 2012, <www.wsj.com/articles/SB10001424052970204662204577199492233215330>.

20. Tim Fernholz, «Why Buying a Corporate Jet Pays for Itself», Quartz, 8 de abril de 2014, <https://qz.com/196369/why-buying-a-corporate-jet-pays-for-it-self>.

21. «Broken at the Top: How America’s Dysfunctional Tax System Costs Billions in Corporate Tax Dodging», Oxfam America, 14 de abril de 2016, <www.oxfamamerica.org/static/media/files/Broken_at_the_Top_4.14.2016.pdf>. Véanse también Gabriel Zucman, *The Missing Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*, Chicago, University of Chicago Press, 2015 (trad. cast.: *La riqueza oculta de las naciones: investigación sobre los paraísos fiscales*, Barcelona, Pasado y Presente, 2014); y Scott D. Dyreng y Bradley P. Lindsey, «Using Financial Accounting Data to Examine the Effect of Foreign Operations Located in Tax Havens and Other Countries on U.S. Multinational Firms’Tax Rates», en *Journal of Accounting Research*, 47, 2009, págs. 1283-1316.

22. Michael S. Knoll, «The Taxation of Private Equity Carried Interests: Estimating the Revenue Effects of Taxing Profit Interests as Ordinary Income», en *William and Mary Law Review*, 50, 1, 2008, págs. 115-161. Sobre la «regla de Buffett», véanse Warren E. Buffett, «Stop Coddling the Super-Rich», en *The New York Times*, 14 de agosto de 2011, <www.nytimes.com/2011/08/15/opinion/stop-coddling-the-super-rich.html>; y Chris Isadore, «Buffett Says He’s Still Paying Lower Tax Rate than His Secretary», en *CNN Money*, 4 de marzo de 2013, <http://money.cnn.com/2013/03/04/news/economy/buffett-secretary-taxes/index.html>.

23. Para más información sobre los paraísos fiscales, véanse Luke Harding, «What Are the Panama Papers? A Guide to History's Biggest Data Leak», en *The Guardian*, 5 de abril de 2016, <www.theguardian.com/news/2016/apr/03/what-you-need-to-know-about-the-panama-papers>; y Jane G. Gravelle, «Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion», en *National Tax Journal*, 62, 4, 2009, págs. 727-753. Sobre el problema creciente que es la evasión fiscal, véanse Chuck Marr y Cecily Murray, «IRS Funding Cuts Compromise Taxpayer Service and Weaken Enforcement», Center on Budget and Policy Priorities, 4 de abril de 2016, <www.cbpp.org/research/federal-tax/irsfunding-cuts-compromise-taxpayer-service-and-weaken-enforcement>; y Emily Horton, «"Egregious" Employment Tax Evasion Grows as IRS Enforcement Funding Shrinks», Center on Budget Policy and Priorities, 27 de abril de 2017, <>. Véase también Nikolaos Artavanis, Adair Morse y Margarita Tsoutsoura, «Measuring Income Tax Evasion Using Bank Credit: Evidence from Greece», en *Quarterly Journal of Economics*, 131, 2016, págs. 739-798.

24. James A. Caporaso, «Changes in the Westphalian Order: Territory, Public Authority, and Sovereignty», en *International Studies Review*, 2, 2000, págs. 1-28; y Stuart Elden, «Contingent Sovereignty, Territorial Integrity and the Sanctity of Borders», en *SAIS Review of International Affairs*, 26, 2006, págs. 11-24. Véase también Richard Tuck, *The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant*, Oxford, Oxford University Press, 1999.

25. El político británico Vincent Cable escribió a mediados de la década de 1990 un interesante —y todavía muy relevante— artículo en el que repasaba las diversas formas en que la globalización debilita los tradicionales poderes del Estado, al tiempo que abre nuevas vías para la intervención estatal: Vincent Cable, «The Diminished Nation-State: A Study in the Loss of Economic Power», en *Daedalus*, 124, 2, 1995, págs. 23-53.

26. Véase Merriam Webster, «Words Unfit for the Office», <www.merriam-webster.com/words-at-play/us-presidents-say-the-darndest-things/misunderestimate> (consultado el 14 de septiembre de 2017).

27. Internal Revenue Service, «U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad», <www.irs.gov/individuals/internationaltax-payers/u-s-citizens-and-resident-aliens-abroad> (consultado el 14 de septiembre de 2017); y John D. McKinnon, «Tax History: Why U.S. Pursues Citizens Overseas», en *The Wall Street Journal*, 18 de mayo de 2012, <https://blogs.wsj.com/washwire/2012/05/18/tax-history-why-u-s-pursues-citizens-overseas>.

28. Véase también Yascha Mounk, «Steuerpflicht für alle!», en *Die Zeit*, 25 de julio de 2012, <www.zeit.de/wirtschaft/2012-07/steuerpflicht>. Desde luego, los países también deberían mantener (o adoptar) unas sensatas regulaciones normativas de la doble imposición. En muchos casos, tiene sentido que las personas paguen impuestos en el lugar en el que viven más que en aquel otro del que son ciudadanas. Por eso, Estados Unidos permite que los contribuyentes se deduzcan los impuestos que pagan en el extranjero del total de impuestos que les correspondería pagar si vivieran en suelo estadounidense. De lo que se trata, en definitiva, es de que los ciudadanos estadounidenses cumplan con su obligación fiscal en algún país (el propio o aquel otro en el que viven), no de que queden condenados de por vida a llenar las arcas del Tío Sam.

29. Ha habido mucho debate sobre esas propuestas tanto en Toronto como en Vancouver, donde la inversión extranjera ha propiciado recientemente un gran *boom* inmobiliario. Véase Josh Gordon, «The Ethical Case for Taxing Foreign Home Buyers», en *The Globe and Mail*, 12 de abril de 2017, <www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/the-ethical-case-for-taxing-foreign-home-buyers/article34690709>.

30. Véanse «Swiss Finished?», en *The Economist*, 7 de septiembre de 2013, <www.economist.com/news/finance-and-economics/21585009-america-armtwists-bulk-switzerlands-banks-painful-deal-swiss>; Ryan J. Reilly, «Swiss Banks Deal Near in Tax Haven Crackdown, Justice Department Says», en *Huffington Post*, 29 de agosto de 2013, <www.huffingtonpost.com/2013/08/28/swiss-banks-deal_n_3832052.html>; y Polly Curtis, «Treasury Strikes Tax Evasion Deal with Switzerland to Recoup Unpaid Cash», en *The Guardian*, 24 de agosto de 2011, <www.theguardian.com/business/2011/aug/24/switzerland-does-tax-deal-with-treasury>.

31. Véase, por ejemplo, Michael J. Graetz, Jennifer F. Reinganum y Louis L. Wilde, «The Tax Compliance Game: Toward an Interactive Theory of Law Enforcement», en *Journal of Law, Economics, & Organization*, 2, 1, 1986, págs. 1-32.

32. Véanse Eoin Burke-Kennedy, «Ireland Branded One of World’s Worst Tax Havens», en *Irish Times*, 12 de diciembre de 2016, <www.irishtimes.com/business/economy/ireland-branded-one-of-world-s-worst-tax-havens-1.2901822>; y Leslie Wayne, «How Delaware Thrives as a Corporate Tax Haven», en *The New York Times*, 30 de junio de 2012, <www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-haven.html>.

33. Véase un modo en el que esto podría funcionar en Zucman, *The Missing Wealth of Nations*. Para una solución alternativa al mismo problema de fondo, véase Reuven Avi-Yonah, «The Shame of Tax Havens», en *American Prospect*, 1 de diciembre de 2015, <http://prospect.org/article/shame-tax-havens>.

34. Francois de Beaupuy, Caroline Connan y Geraldine Amiel, «France and Germany Plan Tax Crackdown on U.S. Tech Giants», en *Bloomberg*, 7 de agosto de 2017, <www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-07/france-and-germany-plan-crackdown-on-tax-loopholes-used-by-apple>. Véase también Jim Brunsden y Mehreen Khan, «France Drives EU Tax Blitz on Revenues of US Tech Giants», en *Financial Times*, 9 de septiembre de 2017, <www.ft.com/content/371733e8-94ae-11e7-bdfa-eda243196c2c>. Una ventaja de todas estas propuestas es que no requerirían de un especial esfuerzo cooperativo internacional para que empezaran a surtir efecto. Eso es algo que no puede decirse de la mayoría de las ideas que se proponen en este terreno. Conceptos interesantes como el impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, defendido por Thomas Piketty entre otros, podrían tener una incidencia positiva si decenas de países llegasen a acordar su implantación simultánea. Pero como, sencillamente, es improbable que esa cooperación se produzca en un futuro más o menos próximo, el efecto inmediato de la concentración de nuestros esfuerzos en tales políticas sería la no materialización de ningún objetivo concreto.

35. En dólares corrientes, eso significa que el precio medio de un alquiler en Nueva York se ha duplicado aproximadamente y ha pasado de mil quinientos dólares a mediados de los sesenta a unos tres mil en la actualidad, mientras que el precio de compra medio de un metro cuadrado se ha multiplicado por más de cinco, desde unos dos mil dólares hasta los once mil. En Londres, el precio de compra de una vivienda media ha aumentado desde los casi doscientos mil dólares que costaba en 1986 hasta más de seiscientos mil (en dólares corrientes). Véase Jonathan Miller, «Tracking New York Rents and Asking Prices over a Century», en *Curbed*, 2 de junio de 2015, <https://ny.curbed.com/2015/6/2/9954250/tracking-new-york-rents-and-asking-prices-over-a-century>; «The Rise and Rise of London House Prices», en *ITV*, 15 de julio de 2014, <www.itv.com/news/london/2014-07-15/the-rise-and-rise-of-london-house-prices-1986-to-2014>.

36. «English Housing Survey: Headline Report 2013-14», UK Department for Communities and Local Government,
<www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/469213/English_Housing_Surv
14.pdf>.

37. De hecho, incluso los habitantes de localidades rurales que, por el motivo que sea, tienen un atractivo especial se están viendo progresivamente expulsados de sus comunidades de origen. Véase Olivia Rudgard, «One in Ten British Adults Now a Second-Home Owner», en *The Telegraph*, 18 de agosto de 2017, <www.telegraph.co.uk/news/2017/08/18/one-ten-british-adults-now-second-home-owner>.

38. David Adler, «Why Housing Matters», manuscrito sin publicar.

39. En el Reino Unido, donde la crisis de la vivienda es especialmente aguda, se han dado recientemente pasos encaminados a acelerar los procedimientos urbanísticos. Véanse «Fast Track Applications to Speed Up Planning Process and Boost Housebuilding», Gov.uk, 18 de febrero de 2016, <www.gov.uk/government/news/fast-track-applications-to-speed-up-planning-process-andboost-housebuilding>; y Patrick Wintour y Rowena Mason, «Osborne's Proposals to Relax Planning System a "Retreat from Localism"», en *The Guardian*, 10 de julio de 2015, <www.theguardian.com/society/2015/jul/10/osbornes-proposals-relax-planning-system-retreat-localism>.

40. Véase «Whitehall to Overrule Councils That Fail to Deliver Housebuilding Plans», Public Sector Executive, 12 de octubre de 2015, <www.publicsectorexecutive.com/News/whitehall-to-over-rule-councils-that-fail-to-deliver-housebuilding-plans/120953>.

41. Nicola Harley, «Theresa May Unveils Plan to Build New Council Houses», en *The Telegraph*, 13 de mayo de 2017, <www.telegraph.co.uk/news/2017/05/13/theresa-may-unveils-plan-build-new-council-houses>; véase también «Forward, Together: Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future: The Conservative and Unionist Party, Manifesto 2017», Conservatives.com, 2017, págs. 70-72, <www.conservatives.com/manifesto>.

42. Una buena explicación general del impuesto sobre el valor del terreno es la que se da en «Why Land Value Taxes Are So Popular, Yet So Rare», en *The Economist*, 10 de noviembre de 2014, <www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/11/economist-explains-0>. Curiosamente, ese impuesto cuenta con firmes defensores tanto en la izquierda como en la derecha políticas. Véanse Andy Hull, «In Land Revenue: The Case for a Land Value Tax in the UK», Labour List, 8 de mayo de 2013, <https://labourlist.org/2013/05/in-land-revenue-the-case-for-a-land-value-tax-in-the-uk>; y Daran Sarma, «The Case for a Land Value Tax», Institute of Economic Affairs, 15 de febrero de 2016, <https://iea.org.uk/blog/the-case-for-a-land-value-tax-0>.

43. Varios municipios y países, de París a Nueva York, pasando por Italia, han tomado medidas para gravar más las segundas residencias. Véanse Megan McArdle, «Own a Second Home in New York? Prepare for a Higher Tax Bill», en *The Atlantic*, 11 de febrero de 2011, <www.theatlantic.com/business/archive/2011/02/own-a-second-home-in-new-york-prepare-for-a-higher-tax-bill/71144>; Feargus O'Sullivan, «Paris Sets Its Sights on Owners of Second Homes», Citylab, 15 de junio de 2016, <www.citylab.com/equity/2016/06/paris-wants-to-raise-second-homes-taxes-five-times/487124>; Gisella Ruccia, «Imu, Renzi:"Via tassa su prima casa anche per i ricchi perché impossibile riforma del Catasto"», en *Il Fatto Quotidiano*, 15 de septiembre de 2015, <www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/15/imu-renzi-via-tassa-su-prima-casa-anche-per-i-ricchi-perche-impossibile-riforma-del-catasto/414080>. Véase un ejemplo de tasa penalizadora de los inmuebles vacíos en «Council Tax: Changes Affecting Second Homes and Empty Properties», Gov.uk, Ayuntamiento de Poole, <www.poole.gov.uk/benefits-and-council-tax/council-tax/council-tax-changes-affecting-second-homes-and-empty-properties> (consultado el 14 de septiembre de 2017).

44. Las ventajas de la deducción fiscal de los intereses por hipoteca residencial —introducida en su versión actual en 1986— son diez veces superiores para una familia que ingrese más de 250.000 dólares anuales que para otra que ingrese entre 40.000 y 75.000. Véase James Poterba y Todd Sinai, «Tax Expenditures for Owner-Occupied Housing: Deductions for Property Taxes and Mortgage Interest and the Exclusion of Imputed Rental Income», ponencia presentada en el encuentro anual de la American Economic Association, Nueva Orleans (Luisiana), 5 de enero de 2008, <http://real.wharton.upenn.edu/~sinai/papers/Poterba-Sinai-2008-ASSA-final.pdf> (consultado el 14 de septiembre de 2017).

45. Este es un fenómeno especialmente acusado en Estados Unidos y Gran Bretaña. Véanse Karen Rowlingson, «Wealth Inequality: Key Facts», Policy Commission on the Distribution of Wealth, Universidad de Birmingham, diciembre de 2012, pág. 14, <www.birmingham.ac.uk/Documents/research/SocialSciences/Key-Facts-Background-Paper-BPCIV.pdf>; y Michael Neal, «Homeownership Remains a Key Component of Household Wealth», National Association of Home Builders (EE. UU.), 3 de septiembre de 2013, <http://nahbclassic.org/generic.aspx?genericContentID=215073>.

46. La descripción más accesible del papel que la burbuja inmobiliaria tuvo en la formación de la Gran Recesión sigue siendo la de Michael Lewis, *The Big Short: Inside the Doomsday Machine*, Nueva York, W. W. Norton, 2010 (trad. cast.: *La gran apuesta: cómo un puñado de inversores jugaron a perder contra el mundo, y ganaron*, Barcelona, Planeta, 2012). Véase también Atif Mian y Amir Sufi, *House of Debt: How They (and You) Caused the Great Recession, and How We Can Prevent It from Happening Again*, Chicago, University of Chicago Press, 2014 (trad. cast.: *La casa de la deuda: las causas y las soluciones de la Gran Recesión*, Barcelona, RBA, 2015).

47. Esta sugerencia está inspirada en propuestas similares sobre los impuestos sobre el carbono. Véase, por ejemplo, Robert O. Keohane, «The Global Politics of Climate Change: Challenge for Political Science», en *PS: Political Science & Politics*, 48, 1, 2015, págs. 19-26.

48. Ha habido varios motivos para ello, como la Gran Recesión u Occupy Wall Street, entre otros. Pero el libro que ha catalizado la mayor parte de ese debate sin duda ha sido el de Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, *op. cit*.

49. Sobre el papel de los *lobbies* en la política, véanse Jane Mayer, *Dark Money: The Hidden History of the Billionaires behind the Rise of the Radical Right*, Nueva York, Doubleday, 2016; y Lee Drutman, *The Business of America Is Lobbying: How Corporations Became More Politicized and Politicians Became More Corporate*, Nueva York, Oxford University Press, 2015. Un argumento reciente según el cual el problema del acaparamiento de oportunidades se extiende más allá del 1% más rico de la población y abarca también a amplios sectores de la clase media-alta es el de Richard V. Reeves, *Dream Hoarders: How the American Upper Middle Class Is Leaving Everyone Else in the Dust, Why That Is a Problem, and What to Do about It*, Washington D. C., Brookings Institution Press, 2017. Sobre el debilitamiento de los vínculos sociales, véase Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Nueva York, Touchstone, 2001 (trad. cast.: *Solo en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2002).

50. Casa Blanca, *Economic Report of the President*, febrero de 2015, pág. 33, <https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/cea_2015_erp.pdf>.

51. Véanse University World News, «Cuts in Spending for Research Worldwide May Threaten Innovation», en *Chronicle of Higher Education*, 14 de diciembre de 2016, <www.chronicle.com/article/Cuts-in-Spending-for-Research/238693>; and «Universities Report Four Years of Declining Federal Funding», National Science Foundation, 17 de noviembre de 2016, <www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=190299>. Sobre California, véase *State Spending on Corrections and Education*, Universidad de California, <www.universityofcalifornia.edu/infocenter/california-expenditures-corrections-and-public-education> (consultado el 14 de septiembre de 2017). California no es ni mucho menos el único estado de su país al que le sucede eso: otros diez también gastan más en prisiones que en educación. Véase Katie Lobosco, «11 States Spend More on Prisons than on Higher Education», en *CNN Money*, 1 de octubre de 2015, <http://money.cnn.com/2015/10/01/pf/college/higher-education-prison-state-spending/index.html>.

52. Yascha Mounk, «Hallo, hörst du mich?», en *Die Zeit*, 2 de noviembre de 2016, <www.zeit.de/2016/44/universitaeten-deutschland-besuch-studenten-professoren-hoersaal>.

53. La tecnología digital no tiene por qué traducirse automáticamente en una obsolescencia de los docentes humanos; en el futuro más o menos próximo, la presencia de docentes bien preparados continuará siendo igual de importante que lo ha sido hasta ahora. Pero lo que sí exige de ellos es que aprendan nuevas habilidades y se centren en aquellos ámbitos en los que conservan una ventaja real sobre las herramientas digitales. Véase Ashish Arora, Sharon Belenzon y Andrea Patacconi, «Killing the Golden Goose? The Decline of Science in Corporate R&D», documento de trabajo 20902, National Bureau of Economic Research (NBER), enero de 2015, <www.nber.org/papers/w20902>.

54. Mary Webb y Margaret Cox, «A Review of Pedagogy Related to Information and Communications Technology», en *Technology, Pedagogy, and Education*, 13, 2004, págs. 235-286. Sobre la complicada interacción entre la capacidad tecnológica y las convicciones pedagógicas de los docentes, véanse Peggy A. Ertmer, «Teacher Pedagogical Beliefs: The Final Frontier in Our Quest for Technology Integration?», en *Educational Technology Research and Development*, 53, 2005, págs. 25-39; y Peggy A. Ertmer y Anne T. Ottenbreit-Leftwich, «Teacher Technology Change», en *Journal of Research on Technology in Education*, 42, 2010, págs. 255-284.

55. Una vía prometedora sería la de permitir que las personas adultas hicieran cursos o estudiaran asignaturas, y pudieran pedir préstamos de ayuda al estudio, durante un número dado de semestres después de haber terminado su formación, y pudieran pagar esa deuda con un porcentaje de sus posteriores ingresos. Véase el útil «Special Report» de Andrew Palmer, «Lifelong Learning Is Becoming an Economic Imperative», en *The Economist*, 12 de enero de 2017, <www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education>. No se ha llevado a cabo aún suficiente trabajo de análisis sobre la financiación del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Véase un un estudio general un tanto anticuado en Gerald Burke, «Financing Lifelong Learning for All: An International Perspective», documento de trabajo 46, Acer Centre for the Economics of Education and Training, Universidad Monash (Australia), noviembre de 2002, <www.monash.edu.au/education/non-cms/centres/ceet/docs/working-papers/wp46nov02burke.pdf>.

56. El planteamiento clásico de este argumento continúa siendo el análisis de la «desmercantilización» que expusiera Gøsta Esping-Andersen en su *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton, Princeton University Press, 1990 (trad. cast.: *Los tres mundos del Estado del bienestar*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim-Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1993).

57. El problema, claro está, es que el descenso del número de personas afiliadas a los sindicatos ha redundado también en un rápido declive del poder negociador de las organizaciones sindicales. Véase un perceptivo tratamiento de este problema en Anthony B. Atkinson, *Inequality: What Can Be Done?*, Cambridge, Harvard University Press, 2015, págs. 128-132.

58. Véase la excelente serie de ensayos breves sobre la «dualización» recopilados en Patrick Emmenegger *et al*. (comps.), *The Age of Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies*, Oxford, Oxford University Press, 2012, así como el clásico de Gøsta Esping-Andersen, «Welfare States without Work: The Impasse of Labour Shedding and Familialism in Continental European Social Policy», en Gøsta Esping-Andersen (comp.), *Welfare States in Transition*: *National Adaptations in Global Economies*, Londres, Sage, 1996, págs. 66-87.

59. Sobre los desincentivos para las empresas, véase Karsten Grabow, «Lohn und Lohnnebenkosten», en *Die westeuropäische Sozialdemokratie in der Regierung*, Wiesbaden, Deutscher Universitäts-Verlag, 2005, págs. 123-141. Sobre quienes están asentados «dentro» del mercado de trabajo, véanse Assar Lindbeck y Dennis J. Snower, «Insiders versus Outsiders», en *Journal of Economic Perspectives*, 15, 1, 2001, págs. 165-188; Samuel Bentolila, Juan J. Dolado y Juan F. Jimeno, «Reforming an Insider-Outsider Labor Market: The Spanish Experience», en *IZA Journal of European Labor Studies*, 1, 1, 2012, págs. 1-19, pág. 4; así como Silja Häusermann y Hanna Schwander, «Varieties of Dualization? Labor Market Segmentation and Insider-Outsider Divides across Regimes», en Patrick Emmenegger *et al*. (comps.), *The Age of Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies*, Nueva York, Oxford University Press, 2012, págs. 27-51.

60. Para el caso de Estados Unidos, véase Jacob S. Hacker, «Privatizing Risk without Privatizing the Welfare State: The Hidden Politics of Social Policy Retrenchment in the United States», en *American Political Science Review*, 98, 2004, págs. 243-260. Sobre Europa, véase Mounk, *Age of Responsibility*, *op. cit*., cap. 2.

61. Suecia tiene cuatro veces más empresas emergentes *(start-ups)* per cápita que Estados Unidos. Véase Flavio Calvino, Chiara Criscuolo y Carlo Menon, *Cross-country Evidence on Start-Up Dynamics*, documento de trabajo 2015/06 de la OCDE sobre ciencia, tecnología e industria, París, OECD Publishing, 2015. Para un buen estudio periodístico de los motivos del éxito sueco, véase Alana Semuels, «Why Does Sweden Have So Many Start-Ups?», en *The Atlantic*, 28 de septiembre de 2017, <www.theatlantic.com/business/archive/2017/09/sweden-startups/541413>. Para una exposición de datos que parecen indicar que, cuanto mayor es el Estado del bienestar de un país, más tiende a disminuir en general el número de sus empresas emergentes, véase Ruta Aidis, Saul Estrin y Tomasz Marek Mickiewicz, «Size Matters: Entrepeneurial Entry and Government», en *Small Business Economics*, 39, 1, 2012, págs. 119-139.

62. Comunicación personal.

63. Para un interesante estudio de la compleja interacción entre el efecto del crecimiento del peso demográfico de las minorías y las amenazas al estatus social que se perciben, véase Maureen A. Craig y Jennifer A. Richeson, «More Diverse Yet Less Tolerant? How the Increasingly Diverse Racial Landscape Affects White Americans' Racial Attitudes», en *Personality and Social Psychology Bulletin*, 40, 2014, págs. 750-761. Véase también Binyamin Appelbaum, «The Vanishing Male Worker: How America Fell Behind», en *The New York Times*, 12 de diciembre de 2014, <www.nytimes.com/2014/12/12/upshot/unemployment-the-vanishing-male-worker-how-america-fell-behind.html>.

64. Barack Obama hizo una famosa referencia a ese mismo argumento en su campaña electoral para las presidenciales de 2008 cuando dijo: «No es sorpredente, entonces, que se les agrie el carácter y se aferren a las armas, o a la religión, o a la antipatía hacia las personas que no son como ellos, o a los sentimientos de rechazo a los inmigrantes o de rechazo a la libertad de comercio como formas de explicar sus frustraciones». Citado en Mayhill Fowler, «Obama: No Surprise that Hard-Pressed Pennsylvanians Turn Bitter», en *Huffington Post*, 17 de noviembre de 2008, <>.

65. Véase un buen estudio general de la cuestión en Valerio De Stefano, «The Rise of the “Just-in-Time Workforce”: On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the “Gig-Economy”», en *Comparative Labor Law and Policy Journal*, 37, 3, 2016, págs. 471-503. Nótese que incluso ciertas propuestas políticamente firmes de regulación de esta *gig economy* (o economía de los encargos puntuales), como la incluida en un reciente discurso de la senadora Elizabeth Warren que fue descrito de forma bastante generalizada como hostil a Uber y a Lyft, tratan de regular esos nuevos sectores de actividad, y no de combatirlos. Elizabeth Warren, «Strengthening the Basic Bargain for Workers in the Modern Economy», comentarios, New American Annual Conference, 19 de mayo de 2016, <www.warren.senate.gov/files/documents/2016-5-19_Warren_New_America_Remarks.pdf>.

9. Renovar la fe cívica

1. Sobre el caso de Alemania, véase Heidi Tworek, «How Germany Is Tackling Hate Speech», en *Foreign Affairs*, 16 de mayo de 2017, <www.foreignaffairs.com/articles/germany/2017-05-16/how-germany-tackling-hate-speech>; y Bundesrat, *Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz-NetzDG)*, Colonia, Bundesanzeiger Verlag, 2017, <www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0301-0400/315-17.pdf?__blob=publicationFile&v=2>. Sobre Estados Unidos, véanse Zeynep Tufekci, «Zuckerberg's Preposterous Defense of Facebook», en *The New York Times*, 29 de septiembre de 2017, <www.nytimes.com/2017/09/29/opinion/mark-zuckerberg-facebook.html?mcubz=3>;Zeynep Tufekci, «Facebook's Ad Scandal Isn't a "Fail", It's a Feature», en *The New York Times*, 23 de septiembre de 2017, <www.nytimes.com/2017/09/23/opinion/sunday/facebook-ad-scandal.html>; y Zeynep Tufekci, «Mark Zuckerberg Is in Denial», en *The New York Times*, 15 de noviembre de 2016, <www.nytimes.com/2016/11/15/opinion/mark-zuckerberg-is-in-denial.html>.

2. Jefferson Chase, «Facebook Slams Proposed German “Anti-hate Speech” Social Media Law», en *Deutsche Welle*, 29 de mayo de 2017, <www.dw.com/en/facebook-slams-proposed-german-anti-hate-speech-social-media-law/a-39021094>.

3. Véanse Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), «Internet Speech», <www.aclu.org/issues/free-speech/internet-speech> (consultado el 14 de septiembre de 2017); Mike Butcher, «Unless Online Giants Stop the Abuse of Free Speech, Democracy and Innovation Is Threatened», TechCrunch, 20 de marzo de 2017, <https://techcrunch.com/2017/03/20/online-giants-must-bolster-democracy-against-its-abuse-or-watch-innovation-die>; «Declaration on Freedom of Expression», <http://deklaration-fuer-meinungsfreiheit.de/en> (consultado el 14 de septiembre de 2017); y Global Network Initiative, «Proposed German Legislation Threatens Free Expression around the World», <http://globalnetworkinitiative.org/news/proposed-german-legislation-threatens-free-expression-around-world> (consultado el 19 de abril de 2017). Véase una crítica más concreta a cómo Facebook trata actualmente de censurar ciertos contenidos en Julia Angwin y Hannes Grassegger, «Facebook's Secret Censorship Rules Protect White Men from Hate Speech but Not Black Children», en *ProPublica*, 28 de junio de 2017, <www.propublica.org/article/facebook-hate-speech-censorship-internal-documents-algorithms>; y Jeff Rosen, «Who Decides? Civility v. Hate Speech on the Internet», en *Insights on Law and Society*, 13, 2, 2013, <www.americanbar.org/publications/insights_on_law_andsociety/13/winter_2013/who_decides_civility

4. Aunque queda mucho por hacer, las grandes redes sociales han comenzado a asumir más seriamente sus responsabilidades a este respecto. Véase Todd Spangler, «Mark Zuckerberg: Facebook Will Hire 3, 000 Staffers to Review Violent Content, Hate Speech», en *Variety*, 3 de mayo de 2017, <http://variety.com/2017/digital/news/mark-zuckerberg-facebook-violent-hate-speech-hiring-1202407969>. Véase también la siguiente (e interesante) propuesta de una mezcla entre regulación externa y autorregulación: Robinson Meyer, «A Bold New Scheme to Regulate Facebook», en *The Atlantic*, 12 de mayo de 2016, <www.theatlantic.com/technology/archive/2016/05/how-could-the-us-regulate-facebook/482382>. Sobre el modelo de autorregulación de los medios en Estados Unidos, véase Angela J. Campbell, «Self-Regulation and the Media», en *Federal Communications Law Journal*, 51, 3, 1999, págs. 711-772.

5. Victor Luckerson, «Get Ready to See More Live Video on Facebook», en *Time*, 1 de marzo de 2016, <http://time.com/4243416/facebook-live-video>; y Kerry Flynn, «Facebook Is Giving Longer Videos a Bump in Your News Feed», Mashable, 26 de enero de 2017, <http://mashable.com/2017/01/26/facebook-video-watch-time/#XvOsKlECZZqi>.

6. @mjahr, «Never Miss Important Tweets from People You Follow», blog de Twitter, 10 de febrero de 2016, <https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2016/never-miss-important-tweets-from-people-you-follow.html>.

7. El rápido avance de la inteligencia artificial seguramente facilitará la detección automática de ese contenido dañino en un futuro no muy lejano. Mientras tanto, puede que no sea muy realista (ni deseable) pretender que los moderadores lean millones y millones de entradas de Facebook a diario. Pero no tienen por qué: dado que son apenas unos pocos memes virales los que representan un porcentaje enorme del tráfico en línea, los moderadores podrían centrarse en juzgar un número relativamente reducido de publicaciones. En Facebook, por ejemplo, los usuarios todavía podrían seguir creando o reenviando mensajes de odio o noticias inventadas a sus propios amigos o en su muro personal. Pero para ralentizar o frenar la difusión de tales contenidos, Facebook debería dejar de aceptar dinero de publicidad procedente de la propagación de tales publicaciones, como también debería modificar sus algoritmos para impedir que figuren en posiciones destacadas en las fuentes web de otros usuarios. Sobre la capacidad que los grupos difusores de mensajes de odio continúan teniendo para ganar dinero publicitándose en plataformas como YouTube, véanse Patrick Kulp, «Big Brands Are Still Advertising on YouTube Vids by Hate Groups — Here’s the Proof», Mashable, 26 de enero de 2017, <http://mashable.com/2017/03/23/youtube-advertisers-hate-groups/#gqeCW7JsAOqk>;y Charles Riley, «Google under Fire for Posting Government Ads on Hate Videos», en *CNN Money*, 17 de marzo de 2017, <http://money.cnn.com/2017/03/17/technology/google-youtube-ads-hate-speech/index.html>.

8. Gideon Resnick, «How Pro-Trump Twitter Bots Spread Fake News», en *Daily Beast*, 17 de noviembre de 2016, <www.thedailybeast.com/how-pro-trump-twitter-bots-spread-fake-news>. Véanse también la presentación de una sección especial sobre automatización, algoritmos y política de S. Woolley y P. N. Howard, «Political Communication, Computational Propaganda, and Autonomous Agents», en *International Journal of Communication*, 10, 2016, págs. 4882-4890; Philip N. Howard y Bence Kollanyi, «Bots, #StrongerIn, and #Brexit: Computational Propaganda during the UK-EU Referendum», documento de trabajo 2016.1, The Computational Propaganda Project, Oxford Internet Institute, Universidad de Oxford, 20 de junio de 2016, <www.politicalbots.org>, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2798311>; y Bence Kollanyi, Philip N. Howard y Samuel C. Woolley, «Bots and Automation over Twitter during the Second U.S. Presidential Debate», memorando de datos 2016.2, The Computational Propaganda Project, Oxford Internet Institute, Universidad de Oxford, 19 de octubre de 2016, <http://comprop.oii.ox.ac.uk/2016/10/19/bots-and-automation-over-twitter-during-the-second-u-s-presidential-debate>.

9. Comunicación personal.

10. Según un sondeo, por ejemplo, la mitad de los habitantes de la ciudad de Nueva York creían que el gobierno federal estadounidense se había abstenido intencionadamente de detener los ataques del 11-S. Alan Feuer, «500 Conspiracy Buffs Meet to Seek the Truth of 9/11», en *The New York Times*, 5 de junio de 2006, <www.nytimes.com/2006/06/05/us/05conspiracy.html>. Véanse también Peter Knight, «Outrageous Conspiracy Theories: Popular and Official Responses to 9/11 in Germany and the United States», en *New German Critique*, 103, 2008, págs. 165-193; y Jonathan Kay, *Among the Truthers: A Journey through America's Growing Conspiracist Underground*, Nueva York, Harper Collins, 2011. Sobre la creencia de mucha gente de que la llegada del hombre a la Luna fue una ficción, véanse Stephan Lewandowsky, Klaus Oberauer y Gilles E. Gignac, «NASA Faked the Moon Landing — Therefore, (Climate) Science Is a Hoax: An Anatomy of the Motivated Rejection of Science», en *Psychological Science*, 24, 5, 2013, págs. 622-633; y Viren Swami, Jakob Pietschnig, Ulrich S. Tran, I. N. G. O. Nader, Stefan Stieger y Martin Voracek, «Lunar Lies: The Impact of Informational Framing and Individual Differences in Shaping Conspiracist Beliefs about the Moon Landings», en *Applied Cognitive Psychology*, 27, 1, 2013, págs. 71-80. Sobre *Los protocolos de los sabios de Sión»*, véanse Stephen Eric Bronner, *A Rumor about the Jews: Antisemitism, Conspiracy, and the Protocols of Zion*, Nueva York, Oxford University Press, 2003 (trad.cast.: *Un rumor sobre los judíos: antisemitismo, conspiración y Los protocolos de los sabios de Sión*, Pamplona, Laetoli, 2009); y Esther Webman (comp.), *The Global Impact of «The Protocols of the Elders of Zion»: A Century-Old Myth*, Nueva York, Routledge, 2012.

11. Véanse unos análisis muy esclarecedores de las causas de las teorías de la conspiración en Cass R. Sunstein y Adrian Vermeule, «Conspiracy Theories: Causes and Cures», en *Journal of Political Philosophy*, 17, 2, 2009, págs. 202-227; y Jovan Byford, *Conspiracy Theories: A Critical Introduction*, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2011. Sobre la pérdida de la confianza en el gobierno, véanse el cap. 3 del presente libro y «Public Trust in Government:1958-2017», Pew Research Center, 3 de mayo de 2017, <www.people-press.org/2017/05/03/public-trust-in-government-1958-2017>.

12. Véase Adam M. Samaha, «Regulation for the Sake of Appearance», en *Harvard Law Review*, 125, 7, 2012, págs. 1563-1638. La misma idea quedó expresada en la famosa máxima judicial que escribiera lord Hewart, juez mayor de Inglaterra y Gales: «No solo debe hacerse justicia; también debe verse que se hace justicia» (*R. v. Sussex Justices, Ex parte McCarthy* [1924] 1 KB 256, [1923] All ER Rep 233). Véase también el fascinante análisis de Amartya Sen, «What Do We Want from a Theory of Justice?», en *Journal of Philosophy*, 103, 5, 2006, págs. 215-238.

13. Véanse Gregory Krieg, «14 of Donald Trump's Most Outrageous "Birther" Claims — Half from After 2011», CNN, 16 de septiembre de 2016, <http://edition.cnn.com/2016/09/09/politics/donald-trump-birther/index.html>; Jana Heigl, «A Timeline of Donald Trump's False Wiretapping Charge», en *Politifact*, 21 de marzo de 2017, <www.politifact.com/truth-o-meter/article/2017/mar/21/timeline-donald-trumps-false-wiretapping-charge>; y Michael D. Shear y Emmarie Huetteman, «Trump Repeats Lie about Popular Vote in Meeting with Lawmakers», en *The New York Times*, 23 de enero de 2017, <www.nytimes.com/2017/01/23/us/politics/donald-trump-congress-democrats.html>.

14. McKay Coppins, «How the Left Lost Its Mind», en *The Atlantic*, 2 de julio de 2017, <www.theatlantic.com/politics/archive/2017/07/liberal-fever-swamps/530736>; y Joseph Bernstein, «Louise Mensch Has a List of Suspected Russian Agents», BuzzFeed, 21 de abril de 2017, <>.

15. «¿Cómo podemos interpretar esta extraña combinación de hechos? —se preguntaba el renombrado blog *Lawfare* en mayo de 2017—. La respuesta honesta de cualquiera que quiera huir de las especulaciones —argumentaban en un primer momento— es que no lo sabemos.» Pero, tratando luego de establecer el alcance potencial de las explicaciones posibles de los vínculos de Trump con Rusia, los autores de la publicación procedían acto seguido a sugerir toda una serie de supuestos, incluida la posibilidad de que Trump fuera un agente ruso. «Creemos que esto es sumamente improbable —recalcaban—. Sería sencillamente un ejercicio que desafiaría todo límite de nuestra credulidad imaginar que un presidente estuviera al servicio de una nación rival. Dicho esto, no deja de ser una interpretación, cuando menos, coherente con los hechos conocidos. Y que mucha gente está haciendo.» Jane Chong, Quinta Jurecic y Benjamin Wittes, «Seven Theories of the Case: What Do We Really Know about l'Affaire Russe and What It Could All Mean?», en *Lawfare*, 1 de mayo de 2017, <www.lawfareblog.com/seven-theories-case-what-do-we-really-know-about-laffaire-russe-and-what-could-it-all-mean>.

16. «Transcript: Read Michelle Obama’s Full Speech from the 2016 DNC», en *The Washington Post*, 26 de julio de 2016, <www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/07/26/transcript-read-michelle-obamas-full-speech-from-the-2016-dnc/?utm_term=.8f6c82a2525f>.

17. Véase el capítulo 2.

18. Véanse algunas propuestas recientes en Lawrence Lessig, *Republic, Lost: The Corruption of Equality and the Steps to End It*, edición revisada, Nueva York, Twelve (Grand Central Publishing), 2015; Zephyr Teachout, *Corruption in America*: *From Benjamin Franklin's Snuffbox to Citizens United*, Cambridge, Harvard University Press, 2014; Lee Drutman, *The Business of America Is Lobbying*, Oxford, Oxford University Press, 2015; John P. Sarbanes and Raymond O'Mara III, «Power and Opportunity: Campaign Finance Reform for the 21st Century», en *Harvard Journal on Legislation*, 53, 1, 2016, págs. 1-38; y Tabatha Abu El-Haj, «Beyond Campaign Finance Reform», en *Boston College Law Review*, 57, 4, 2016, págs. 1127-1185.

19. Véase Tony Blair Institute for Global Change, «The Centre in the United Kingdom, France and Germany», junio de 2017, <http://institute.global/sites/default/files/inline-files/IGC_Centre%20Polling_14.07.17.pdf>. Véanse algunas propuestas recientes sobre cómo democratizar la Unión Europea en Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste y Antoine Vauchez, *Pour un Traité de démocratisation de l'Europe*, París, Seuil, 2017; Agnes Bénassy-Quéré, Michael Hüther, Philippe Martin y Guntram B. Wolff, «Europe Must Seize This Moment of Opportunity», Bruegel, 12 de agosto de 2017, <http://bruegel.org/2017/08/europe-must-seize-this-moment-of-opportunity>; y Cécile Ducourtieux, «Europe: Macron livre une feuille de route ambitieuse tout en ménageant Berlin», en *Le Monde*, 27 de septiembre de 2017, <www.lemonde.fr/europe/article/2017/09/27/europe-macron-livre-une-feuille-de-route-ambitieuse-mais-menage-berlin_5191974_3214.html>.

20. Sobre las capacidades del Congreso, véanse Lee Drutman, «These Frightening New Survey Results Describe a Congress in Crisis», en *Vox*, 8 de agosto de 2017, <www.vox.com/polyarchy/2017/8/8/16112574/cmf-congress-survey-crisis>; Lee Drutman y Steve Teles, «Why Congress Relies on Lobbyists Instead of Thinking for Itself», en *The Atlantic*, 10 de marzo de 2015, <www.theatlantic.com/politics/archive/2015/03/when-congress-cant-think-for-itself-it-turns-to-lobbyists/387295>; y Kevin R. Kosar *et al*., «Restoring Congress as the First Branch», en *R Street Policy Study*, 50, enero de 2016, <www.rstreet.org/wp-content/uploads/2016/01/RSTREET50.pdf>.

21. Véase Jon S.T. Quah, «Controlling Corruption in City-States: A Comparative Study of Hong Kong and Singapore», en *Crime, Law and Social Change*, 22, 4, 1994, págs. 391-414.

22. George Washington, *Eighth Annual Address to Congress*, 7 de diciembre de 1796, disponible en el American Presidency Project, <www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29438>.

23. James Madison a W.T. Barry, carta, 4 de agosto de 1822, en *Writings of James Madison*, vol. 9, Nueva York, Putnam, 1910, págs. 103-109, cita de la pág. 103; disponible en Philip B. Kurland y Ralph Lerner (comps.), *The Founders' Constitution*, Chicago, University of Chicago Press y el Liberty Fund, 1986, vol. 1, cap. 18, documento 35, <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch18s35.html>.

24. Sobre el famoso vídeo de *Schoolhouse Rock*, véase «How a Bill Becomes a Law», temporada 3, episodio 1, 18 de septiembre de 1975, American Broadcasting Corporation, disponible en <www.youtube.com/watch?v=Otbml6WIQPo>.

25. Véase Allan Bloom, *Closing of the American Mind*, Nueva York, Simon and Schuster, 1987 (trad. cast.: *El cierre de la mente moderna*, Barcelona, Plaza & Janés, 1989).

26. Véanse American Bar Association y Proyecto Youth in Government de la YMCA, «Partners in Civic Engagement», 2010, pág. 2, <www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/YouthInGovtYMCA.authcheckdam.pdf>.

27. James W. Fraser, *Reading, Writing, and Justice: School Reform as If Democracy Matters*, Albany, SUNY Press, 1997, pág. 55.

28. *Bethel School District n.º 403 v. Fraser*, 478 US 675, 1986.

29. Para una crítica (con datos) de lo poco que los estudiantes universitarios aprenden en realidad en la mayoría de los campus estadounidenses, véanse Richard Arum y Josipa Roksa, *Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses*, Chicago, University of Chicago Press, 2011; y Richard Arum y Josipa Roksa, *Aspiring Adults Adrift: Tentative Transitions of College Graduates*, Chicago, University of Chicago Press, 2014.

30. Véase un excelente repaso de las tendencias más preocupantes en Campaign for the Civic Mission of Schools, «Civic Learning Fact Sheet», <www.civicmissionofschools.org/the-campaign/civic-learning-fact-sheet>.

31. Véase Max Fisher, «Americans vs. Basic Historical Knowledge», en *The Atlantic*, 3 de junio de 2010, <www.theatlantic.com/politics/archive/2010/06/americans-vs-basic-historical-knowledge/340761>; y Jonathan R. Cole, «Ignorance Does Not Lead to Election Bliss», en *The Atlantic*, 8 de noviembre de 2016, <www.theatlantic.com/education/archive/2016/11/ignorance-doesnot-lead-to-election-bliss/506894>. Véanse también William A. Galston, «Civic Education and Political Participation», en *PS: Political Science and Politics*, 37, 2, 2004, págs. 263-266; y William A. Galston, «Civic Knowledge, Civic Education, and Civic Engagement: A Summary of Recent Research», en *International Journal of Public Administration*, 30, 6-7, 2007, págs. 623-642.

32. Hasta donde yo sé, poca ha sido la investigación sistémica llevada a cabo sobre esta cuestión en particular. Pero en vista de que los estadounidenses en edad de tener hijos están hoy mucho menos interesados por la política (y tienen menores conocimientos de formación cívica) que sus homólogos de unas décadas atrás, yo diría que es muy probable que estos ejemplos anecdóticos nos estén indicando la existencia de una pauta más general en este caso en particular.

33. Sobre la pedagogía de las facultades de educación y magisterio, véanse David F. Labaree, «Progressivism, Schools and Schools of Education: An American Romance», en *Paedagogica Historica*, 41, 1-2, 2005, págs. 275-288; y David F. Labaree, *The Trouble with Ed Schools*, New Haven, Yale University Press, 2004. Sobre la necesidad de impulsar la formación de más profesorado en el contexto de las universidades con programas de posgrado en pedagogía, véase Arthur Levine, *Educating School Teachers*, informe del Education Schools Project, Washington D. C., 2006, <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504144.pdf>.

34. Véase David Randall (con Ashley Thorne), «Making Citizens: How American Universities Teach Civics», National Association of Scholars, enero de 2017, <www.nas.org/images/documents/NAS_makingCitizens_fullReport.pdf>; así como la respuesta que dio Stanley Fish, «Citizen Formation Is Not Our Job», en *Chronicle of Higher Education*, 17 de enero de 2017, <>.

35. David Brooks, «The Crisis of Western Civ», en *The New York Times*, 21 de abril de 2017, <www.nytimes.com/2017/04/21/opinion/the-crisis-of-western-civ.html?mcubz=0>.

Conclusión. Luchar por nuestras convicciones

1. Sobre Atenas, véanse Sarah B. Pomeroy, *Ancient Greece: A Political, Social, and Cultural History*, Oxford, Oxford University Press, 1999 (trad. cast.: *La Antigua Grecia: historia política, social y cultural*, Barcelona, Crítica, 2001); y Robert Waterfield, *Athens: A History, From Ancient Ideal to Modern City*, Nueva York, Basic Books, 2004. Sobre Roma, véanse Mary Beard, *SPQR: A History of Ancient Rome*, Nueva York, Norton, 2015 (trad. cast.: *SPQR: una historia de la Antigua Roma*, Barcelona, Crítica, 2016; y Marcel Le Glay, Jean-Louis Voisin y Yann Le Bohec, *Histoire romaine*, París, Presses Universitaires de France, 1991. Sobre Venecia, véanse el clásico de Frederic Chapin Lane, *Venice, a Maritime Republic*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1973; y John Julius Norwich, *A History of Venice*, Londres, Penguin, 1982 (trad. cast.: *Historia de Venecia*, Granada, AlMed, 2003).

2. Véanse Adam Easton, «Analysis: Poles Tire of Twins», en *BBC News*, 22 de octubre de 2007, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7057023.stm>; y Choe Sang-Hun, «Park Geun-hye, South Korea's Ousted Leader, Is Arrested and Jailed to Await Trial», en *The New York Times*, 30 de marzo de 2017.

3. Sobre Turquía, véanse Dexter Filkins, «Erdogan’s March to Dictatorship in Turkey», en *The New Yorker*, 31 de marzo de 2016; y Soner Cagaptay, *The New Sultan: Erdogan and the Crisis of Modern Turkey*, Londres, I. B. Tauris, 2017. Sobre Venezuela, véanse Rory Carroll, *Comandante: Hugo Chávez’s Venezuela*, Londres, Penguin Press, 2015 (trad. cast.:*Comandante: la Venezuela de Hugo Chávez*, Madrid, Sexto Piso, 2013); y «Freedom in the World 2017: Venezuela», Freedom House, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/venezuela>.

4. Véanse Kanchan Chandra, «Authoritarian India: The State of the World's Largest Democracy», en *Foreign Affairs*, 16 de junio de 2016, <www.foreignaffairs.com/articles/india/2016-06-16/authoritarian-india>; Anne Applebaum, «It's Now Clear: The Most Dangerous Threats to the West Are Not External», en *The Washington Post*, 16 de julio de 2016, <www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/its-now-clear-the-most-dangerous-threats-to-the-west-are-not-external/2017/07/16/2475e704-68a6-11e7-a1d7-9a32c91c6f40_story.html>; y Richard C. Paddock, «Becoming Duterte: The Making of a Philippine Strongman», en *The New York Times Magazine*, 21 de marzo de 2017, <www.nytimes.com/2017/03/21/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-president-strongman.html>.

5. Michael S. Schmidt, «In a Private Dinner, Trump Demanded Loyalty. Comey Demurred», en *The New York Times*, 11 de mayo de 2017, <www.nytimes.com/2017/05/11/us/politics/trump-comey-firing.html>; Sharon Lafraniere y Adam Goldman, «Guest List at Donald Trump Jr.'s Meeting with Russian Expands Again», en *The New York Times*, 18 de julio de 2017, <www.nytimes.com/2017/07/18/us/politics/trump-meeting-russia.html>; Rosie Gray, «Trump Defends White-Nationalist Protesters: "Some Very Fine People on Both Sides"», en *The Atlantic*, 15 de agosto de 2017, <www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/trump-defends-white-nationalist-protesters-some-very-fine-people-on-both-sides/537012>; y @realdonaldtrump: «So why aren't the Committees and investigators, and of course our beleaguered A. G., looking into Crooked Hillarys crimes & Russia relations?», tuit del 24 de julio de 2017, 9:49 a. m., <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/889467610332528641?lang=en>. Que conste que, si bien Trump se ha negado en reiteradas ocasiones a distanciarse de los supremacistas blancos en términos claros, ha habido otros momentos en los que sí ha renegado de ellos.

6. Véase Tim Marcin, «Donald Trump’s Popularity: His Approval Rating among His Base Voters Is Back Up», en *Newsweek*, 12 de julio de 2017, <>.

7. Véase David Leonhardt, «G. O. P. Support for Trump Is Starting to Crack», en *The New York Times*, 24 de julio de 2017, <www.nytimes.com/2017/07/24/opinion/republican-support-donald-trump.html>.

8. El mejor seguimiento agregado de los sondeos sobre el nivel de aprobación popular de Donald Trump, que incluye una útil comparación con la evolución de presidentes anteriores, es el que lleva a cabo FiveThirtyEight. Véase «How Popular Is Donald Trump?», FiveThirtyEight.com, en <https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings>.

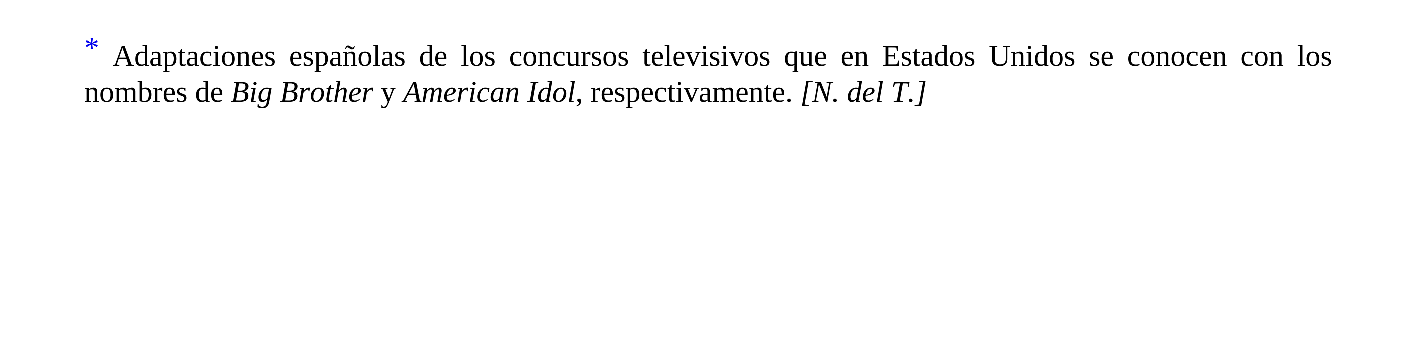
9. Cabe señalar que, en este momento, un segundo mandato de Donald Trump parece un escenario improbable, pero no imposible. Véase una convincente descripción de una situación en la que Trump bien podría volver a ganar en 2020 en Damon Linker, «Trump Is Toxically Unpopular. He Still Might Win in 2020», en *The Week*, 30 de agosto de 2017, <http://theweek.com/articles/721436/trump-toxically-unpopular-still-might-win-2020>.

10. Beard, *SPQR*, *op. cit.*, pág. 232.

11. Para una cautivadora historia popular de la República romana tardía, véase Mike Duncan, *The Storm before the Storm: The Beginning of the End of the Roman Republic*, Nueva York, Public Affairs, 2017.

12. Epicteto, *Disertaciones por Arriano*, libro 1, capítulo 1, Madrid, Gredos, 1993, págs. 61-62.

* Neologismo compuesto en inglés a partir de las palabras *violador (rapist)* y *refugiado*. *[N. del T.]*

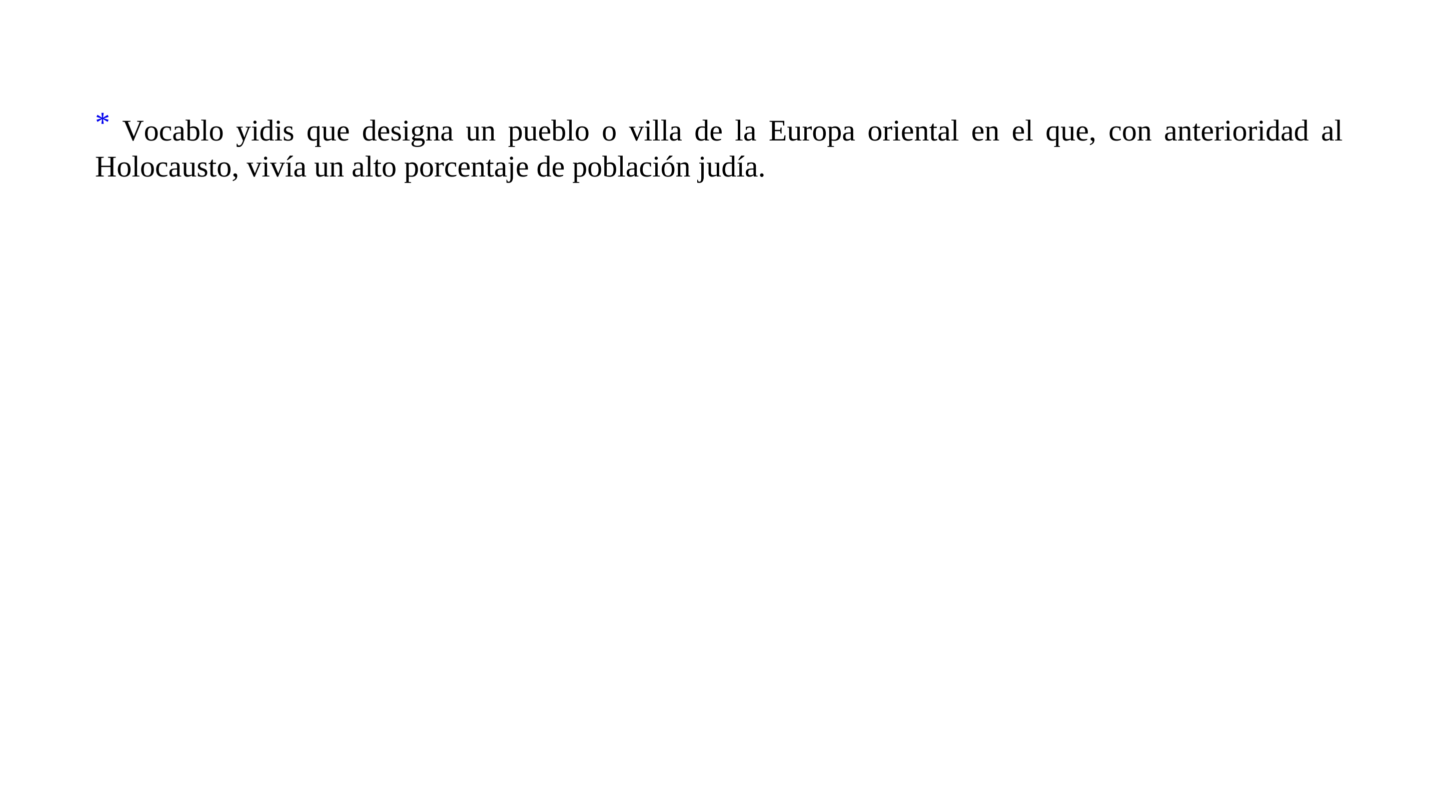


* Adaptaciones españolas de los concursos televisivos que en Estados Unidos se conocen con los nombres de *Big Brother* y *American Idol*, respectivamente. *[N. del T.]*

* Los *dreamers* o «soñadores» son los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad, acompañando a sus familias, y que llevan años viviendo en ese país, donde hasta hace poco se beneficiaban de una legislación que permitía su permanencia, entre otras cosas, para seguir estudios universitarios tras finalizar la educación obligatoria.*[N.del T.]*

* El presente libro se publicó con anterioridad al escándalo sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de Sarkozy de 2007 por parte del gobierno libio de Gadafi, hecho público en marzo de 2018. *[N. del T.]*

* Jill Stein fue candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Verde en las elecciones de 2012 y 2016. Por su parte, Bannon ha sido banquero en Goldman Sachs, publicista y periodista, y fue ideólogo y consejero de Donald Trump hasta agosto de 2017, cuando fue despedido. Ha apoyado públicamente al Frente Nacional de Marine Le Pen *[N. del T.]*



* Vocablo yidis que designa un pueblo o villa de la Europa oriental en el que, con anterioridad al Holocausto, vivía un alto porcentaje de población judía.

* George W. Bush popularizó el vocablo compuesto *misunderestimate*, inexistente en inglés, y que seguramente nació de una confusión entre los verbos *misunderstand* («malinterpretar» o «entender mal») y *underestimate* («subestimar»). Por analogía, el autor ha compuesto el verbo *misoverestimate*, igualmente inexistente en inglés y traducido aquí como «malexagerar». *[N. del T.]*

El pueblo contra la democracia
Yascha Mounk

Título original: *The People vs. Democracy*
Publicado originalmente en inglés por Harvard University Press

Paidós es un sello editorial de Espasa Libros, S. L. U.
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.planetadelibros.com

Primera edición en libro electrónico (epub): septiembre de 2018

ISBN: 978-84-493-3500-6 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L.
www.newcomlab.com